



Universidad Nacional Autónoma de México

Posgrado en Estudios Latinoamericanos

“La redefinición de lo posible”

Militancia política y movilización social en El Salvador

(1970-2004)

Tesis para obtener el grado de Doctora en Estudios Latinoamericanos
que presenta

KRISTINA PIRKER

Asesora: Dra. Raquel Sosa Elízaga

México D.F., 2008



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*DEDICADO A ANITA Y PAUL, PARA QUIENES
EL VALOR DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL
ESTÁ EN SU COMPROMISO COMO PADRES.*

AGRADECIMIENTOS

A la *Universidad Nacional Autónoma de México*, por su amplia generosidad.

A Irene Sánchez Ramos y Mario Vázquez Olivera, por acompañar esta investigación, por compartir mis preocupaciones analíticas sobre Centroamérica y facilitar sus contactos en El Salvador, sin los cuales el trabajo de campo no hubiera sido posible.

A Raquel Sosa Elízaga, por la asesoría metodológica y conceptual en los momentos decisivos de la elaboración de esta tesis.

A Susana García Salord, por enseñarme, a través de la práctica de la investigación, una propuesta metodológica inspiradora y reflexiva.

A Carlos Figueroa Ibarra, por la lectura cuidadosa y los comentarios estimulantes.

A Breny Cuenca y Roberto Turcios, por recibirme siempre en su hermosa casa en San Salvador y por las conversaciones que aportaron datos importantes sobre el conflicto bélico y la historia de la izquierda salvadoreña.

A las siguientes personas en El Salvador, por aportar información valiosa e interpretaciones clave que contribuyeron a desarrollar las ideas centrales de esta tesis:

Gregorio Bello Suazo, Héctor Bernabé Recinos, Ana María Menjívar, Susana Rodríguez, Carlos Henríquez, Marisa Rodríguez, Dominga Rodríguez, Don Miguel Alemán, María Elba González, Zoila Blanca Flor, Cleotilde Tomasa López, Eliseo Ortiz, Marco Antonio Cativo, Osmín Juárez.

A Felipe Varela Ojeda, por la cuidadosa transcripción de las entrevistas biográficas pese a las dificultades que presentaron el acento salvadoreño y las deficiencias en las grabaciones.

A mis colegas de *Fundar Centro de Análisis e Investigación*, por su apoyo durante el trayecto final.

A Omar Núñez, quien fue el primero en leer este trabajo, por la claridad de sus ideas, por su amor y su paciencia.

INDÍCE

GLOSARIO DE SIGLAS	12
INTRODUCCIÓN.....	19
<i>Puntos de partida</i>	21
<i>Puntos de llegada</i>	24
<i>Aclaraciones metodológicas sobre los relatos biográficos</i>	30
<i>El “Corpus” de Análisis</i>	35
<i>Representatividad y fiabilidad de las fuentes orales</i>	38
<i>Del análisis a la narración: Relatos biográficos y escritura sociológica</i>	41

CAPÍTULO I

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN SOCIAL EN CENTROAMÉRICA: HERRAMIENTAS PARA EL

ANÁLISIS.....	45
1.1. Introducción	45
1.2. Algunos principios básicos de la investigación.....	46
1.3. ¿Estructuras o voluntades?	
Los procesos revolucionarios y sus desenlaces en Centroamérica.....	50
<i>Hacia una conceptualización estructural del sujeto de la revolución</i>	50
<i>De actores, voluntades y estrategias</i>	54
<i>Después de la tormenta: Centroamérica en la década de los noventa</i>	61
<i>Un primer balance del panorama actual</i>	72
1.4. Violencia política y las lógicas de la acción colectiva: enfoques explicativos.....	74
<i>Violencia y movimientos sociales</i>	75
<i>Movimientos antisistémicos</i>	78
<i>La racionalidad de los actores: la violencia como una estrategia política</i>	82
<i>Los códigos de la violencia</i>	86
1.5. Las transformaciones del mundo de la militancia: Estrategias de reconversión en un campo político en movimiento	94
<i>La reestructuración del campo político</i>	96
<i>El campo político como mapa de posiciones: Una propuesta analítica</i>	101
<i>Comunidades virtuosas y apuestas políticas: La militancia como práctica social</i>	109
1.6. Conclusiones.....	116

CAPÍTULO II

“¡A MÁS REPRESIÓN - MÁS LUCHA!” EL CICLO DE LA RADICALIZACIÓN	121
2.1. Introducción	121
2.2. La aparición de un nuevo actor: Los Frentes de masas.....	123
<i>Condiciones de posibilidad para el antagonismo político</i>	127
<i>Vasos comunicantes: Frentes de masas y grupos guerrilleros</i>	130
2.3. Movilización social y radicalización política en El Salvador de los setenta	139
<i>La radicalización campesina</i>	140
<i>La radicalización sindical y gremial</i>	150
<i>Al calor de la movilización: El desafío a las estructuras existentes</i>	155

2.4. ¿Agentes externos? Lucha armada y organizaciones populares	161
<i>La lucha armada en el Partido Comunista</i>	163
<i>El ERP y la Resistencia Nacional</i>	167
<i>La “lucha por la hegemonía” en las subculturas de oposición</i>	171
2.5. Ser militante en El Salvador: Mundos sociales y prácticas constitutivas.....	178
<i>Militancia y universidad</i>	180
<i>“En busca de mejores horizontes...”: Militancia y sindicalismo</i>	184
<i>“Nos daba más fuerza, cuando se miraba que habían asesinado a gente injustamente”: La militancia en el campo</i>	192
2.6. Conclusiones	199
CAPÍTULO III	
LOS AÑOS DE LA GUERRA: REORGANIZACIÓN POLÍTICA Y POLARIZACIÓN MILITAR	203
3.1. Introducción	203
3.2. “Tiempo de muerte”: la destrucción de las redes sociales de oposición	205
<i>Patrones de la violencia</i>	212
3.3. La cara “civil” de la contrainsurgencia	216
<i>La Democracia Cristiana y las organizaciones populares</i>	220
<i>El agotamiento del proyecto político demócrata cristiano</i>	224
3.4. Reagrupamientos organizativos y la constitución de la UNTS	227
3.5. El FMLN entre ofertas de negociación y “contraofensiva estratégica”	237
<i>Las estrategias político-militares del FMLN</i>	237
<i>Estrategias organizativas</i>	242
3.6. Agentes ambiguos: Militantes entre el activismo político y la defensa gremial	246
<i>La ofensiva de noviembre de 1989</i>	250
3.7. Efectos prácticos de la guerra civil: Activismo social en la guerra:	252
<i>Marcas de la violencia</i>	252
<i>Ser enlace con el Frente: Prácticas políticas encubiertas</i>	256
<i>La tecnificación del activismo</i>	261
<i>“Por ordenes del partido”: Los mecanismos de la delegación</i>	265
<i>Preparando la ofensiva</i>	269
3.8. Conclusiones	275
INTERLUDIO	
PACIFICACIÓN Y NUEVAS MODALIDADES DE EXCLUSIÓN	279
1. Introducción	279
2. Inicios y consolidación del proyecto neoliberal en El Salvador	280
<i>De oposición a gobierno: La reconversión exitosa de ARENA</i>	282
<i>Ajuste y Acuerdos de paz</i>	287
<i>Otro cierre del campo político: Exclusión y criminalización de la protesta social</i>	294
3. Reestructuración productiva y cambio social en Centroamérica:.....	299
<i>De la estabilización al ajuste estructural</i>	300
<i>Los efectos sociales del ajuste</i>	309
4. Conclusiones.....	313
CAPÍTULO IV	
DE LA DESMOBILIZACIÓN A LA REINSERCIÓN CIVIL: LAS RECONVERSIONES DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO	317
4.1. Introducción	317

4.2. Socialismo y revolución democrática: El FMLN y su “marcha por las instituciones”	319
<i>La revolución democrática en el discurso programático del FMLN</i>	323
<i>La participación electoral como nueva lógica de acción</i>	330
4.3. La marginación de las organizaciones populares	339
<i>De la desmovilización a las estrategias de reconversión organizativa</i>	339
<i>La disputa por el reconocimiento: nuevos y viejos portavoces</i>	352
4.4. “Fuera de lugar”: Las prácticas de militancia en el campo político posbélico	362
<i>El desgaste de la militancia</i>	363
<i>El cierre del campo político</i>	368
<i>Adriana y Manuel: Perspectivas contrastante sobre el cierre del campo político</i>	373
4.5. Oportunidades de inserción y estrategias de reconversión social	377
<i>Estrategias de reconversión I: La tecnificación del activismo</i>	377
<i>La reelaboración de las diferencias legítimas</i>	382
<i>Estrategias de reconversión II: La “sindicalización” de los sindicatos</i>	386
<i>Estrategias de reconversión III: “Irse para la casa”</i>	395
<i>Proyectos inconclusos</i>	399
4.6. Conclusiones	406
REFLEXIONES FINALES	409
BIBLIOGRAFÍA	423
ANEXO	443

CUADROS Y DIAGRAMAS:

INTRODUCCIÓN

Entrevistas biográficas.....	36
------------------------------	----

CAPÍTULO I

Cuadro 1.1 Centroamérica: Población, PIB y distribución del ingreso por países, 2000.....	65
Cuadro 1.2 Trabajadores sindicalizados según actividad económica en Centroamérica, entre 1990 y 2000.....	67
Diagrama 1.1 El campo político como mapa de posiciones.....	102
Diagrama 1.2 El Salvador entre 1975 y 1981: Agentes del campo político.....	106
Diagrama 1.3: El Salvador después de 1992: La reestructuración del campo político.....	108

CAPÍTULO II

Cuadro 2.1 El Salvador: Familias campesinas sin tierra.....	128
Cuadro 2.2 Evolución de los salarios reales (1970 =100).....	129
Diagrama 2.1. Actores del campo político salvadoreño entre 1979/1982.....	132
Diagrama 2.2 La alianza de la izquierda revolucionaria salvadoreña (1980).....	135

CAPÍTULO III

Gráfica 3.1 Pertenencia ideológica de las familias con muertos El Salvador y Nicaragua.....	211
Diagrama 3.1. Actores del campo político salvadoreño 1989.....	229
Diagrama 3.2. El militante como “bisagra” entre mundo laboral y campo político.....	247

INTERLUDIO

Cuadro 1. Ajuste estructural por medidas y país (1983-2007).....	302
Gráfica 2: Centroamérica: número de huelgas legales 1976-2004.....	306
Gráfica 3: Número de trabajadores afectados por huelgas y <i>lock outs</i> 1976-2004.....	306
Gráfica 4: Centroamérica en los noventa: Porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza.....	310
Cuadro 5: Centroamérica: población económicamente activa rural y agropecuaria, 1980, 1990, 2000 (porcentaje de la población económicamente activa total).....	313

CAPÍTULO IV

Cuadro 4.1 Desempeño electoral del FMLN y ARENA (1994-2006).....	333
Cuadro 4.2 Alcaldías gobernadas por ARENA y FMLN por elecciones.....	333
Cuadro 4.3 Organizaciones político-militares del FMLN por grupo y por género (aproximadamente 1992).....	342
Diagrama 4.1 Actores del campo político salvadoreño 2004.....	359
Cuadro 4.4 El año 1989 en las trayectorias de los militantes entrevistados.....	365

ANEXO

I.	Guía de preguntas para las entrevistas con los activistas.....	443
II.	Analizar sistematizando: El texto de las entrevistas.....	446
III.	Esquema analítico para reconstruir el “Ser militante” en los relatos biográficos.....	448
IV.	Radicalización social y entrelazamiento entre actores.....	450
V.	Entrelazamiento y desenlaces de actores sociales y políticos 1981-2004.....	455
VI.	Trayectorias políticas, desenlaces en el periodo posbélico y valoración de los militantes entrevistados.....	460
VII.	Cuadros sobre luchas laborales y evolución de la pobreza en Centroamérica.....	466
	Cuadro 1: Centroamérica: Número de huelgas legales 1978-2004	
	Cuadro 2: Centroamérica: Número de trabajadores afectados 1978-2004	
	Cuadro 3: Personas en situación de pobreza en áreas urbanas y rurales	
	Cuadro 4: Personas en situación de indigencia en áreas urbanas y rurales*	
	Gráficas 1-4: Centroamérica: Número de huelgas por actividad económica, 1970s – 2000	
	<i>Gráfica 1. Guatemala</i>	
	<i>Gráfica 2. Costa Rica</i>	
	<i>Gráfica 3. Nicaragua</i>	
	<i>Gráfica 4. Honduras</i>	
VIII.	El Salvador: Evolución de sindicatos y afiliados.....	472
	Cuadro 5: Sindicatos y afiliados según federación (1971-1976)	
	Cuadro 6: El Salvador: Número de sindicatos y afiliados según federación (1993-2004)	
IX.	“La lucha por la hegemonía” en los periódicos de los Frentes de Masa.....	474
X.	Propaganda electoral en la campaña presidencial 2004.....	476

GLOSARIO DE SIGLAS

ABECAFE	Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café
ACI	Asociación de Compañías Industriales
ACOPAI	Asociación de Cooperativas Agrícolas
ADC	Alianza Democrática Campesina
ADESCOS	Asociación de Desarrollo Comunal de Suchitoto
AES	Asociación de Estudiantes de Secundaria
AGEPYM	Asociación General de Empleados Públicos y Municipales
AGEUS	Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños
AID	Agencia Interamericana de Desarrollo
AIFLD	American Institute for Free Labor Development
ANDA	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ANDES 21 de Junio	Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de Junio
ANEP	Asociación Nacional de la Empresa Privada
ANIS	Asociación Nacional Indígena Salvadoreña
ANSESAL	Agencia Nacional de Seguridad de El Salvador
ANTA	Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas
ANTEL	Administración Nacional de Telecomunicaciones
ANTMSPAS	Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
APSAL	Acción para la Salud en El Salvador
ARENA	Alianza Republicana Nacionalista
ARS	Acción Revolucionaria Salvadoreña
ASDI	Asociación Salvadoreña de Desarrollo Integral
ASTTEL	Asociación de Trabajadores de Telecomunicaciones
ATACES	Asociación de Trabajadores y Campesinos de El Salvador
ATCEL	Asociación de Trabajadores de CEL
BPJ	Bloque Popular Juvenil
BPR	Bloque Popular Revolucionario
BPS	Bloque Popular Social para la Democracia Real
BRES	Brigada Revolucionaria de Estudiantes de El Salvador (UAES)
CCTEM	Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales
CCR	Coordinadora de Comunidades Rurales de Chalatenango
CEL	Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa
CENTRA	Centro de Estudios del Trabajo
CESTA	Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiable
CEPA	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
CGS	Confederación General de Sindicatos
CGT	Central General de Trabajadores
CGTS	Central General de Trabajadores Salvadoreños
CLAT	Central Latinoamericana de Trabajadores,
CLS	Concertación Laboral y Social
CNTR	Concertación Nacional del Trabajo con Refugiados
COACES	Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador
COAP	Comité Obrero de Acción Política
COCA	Confederación Obrera Centroamericana
CONARA	Comisión Nacional de Reconstrucción de Áreas
CONFRAS	Confederación Nacional de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña
COP	Comandos Organizados del Pueblo

CORDES	Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador
COSDO	Consejo Sindical de Obreros
CRIPDES	Comité Cristiano Pro-desplazados de El Salvador
CRM	Coordinadora Revolucionaria de Masas
CST	Coordinadora de Solidaridad con los Trabajadores
CSTS	Coordinadora Sindical de Trabajadores Salvadoreños
CTD	Central de Trabajadores Democráticos
CTS	Central de Trabajadores Salvadoreños
CUSCA	Comité de Unidad Sindical Centroamericano.
CUSS	Confederación Unitaria de Sindicatos Salvadoreños
CUTS	Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños
DRU	Dirección Revolucionaria Unificada
ERP	Ejército Revolucionario del Pueblo
FAL	Fuerzas Armadas de Liberación
FAPU	Frente de Acción Popular Unificada
FARN	Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional
FARO	Frente Agrario de la Región Oriental
FASTRAS	Fundación para la Autogestión de los Trabajadores Salvadoreños
FAU	Frente de Acción Universitaria
FDR	Frente Democrático Revolucionario
FEASIES	Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador
FECCAS	Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños
FECORADO	Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria del Oriente
FECORASAL	Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de El Salvador
FENASTRAS	Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños
FESACORA:	Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria
FESINCONSTANS	Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción, Similares y Transporte
FESTIAVTSCES	Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria de Alimentación, Vestimenta, Textiles y Similares
FESTRAES	Federación Sindical de Trabajadores de El Salvador
FESTRAS	Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños
FESTRASPES	Federación Sindical de Trabajadores del Sector Público de El Salvador
FENACOA	Federación Nacional de Asociaciones Cooperativas
FMLN	Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
FOC	Frente Obrero Campesino
FOCCO	Programa de Fomento y Cooperación Comunal
FORTAS	Programa de Fortalecimiento Social
FPL	Fueras Populares de Liberación – Farabundo Martí
FRTS	Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños
FSR	Federación Sindical Revolucionaria
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
FUAR	Frente Unido de Acción Revolucionaria
FUDI	Frente Unificado Democrático Independiente
FUERSA	Federación Universitaria de Estudiantes Revolucionarios Salvador Allende
FUNSALPRODESE	Fundación Salvadoreña para la Promoción del Desarrollo Social y Económico
FUSADES	Fundación Salvadoreña de Desarrollo Sostenible
FUSS	Federación Unitaria Sindical Salvadoreña
IEJES	Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador
ISTA	Instituto Salvadoreño de Transferencia Agraria
LP-28	Ligas Populares 28 de Febrero

MERS	Movimiento de Estudiantes Revolucionarios de Secundaria
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MLN	Movimiento de Liberación Nacional
MNR	Movimiento Nacional Revolucionario
MOLI	Movimiento de Organizaciones Laborales Independientes
MPR-12	Movimiento Popular de Resistencia-12 de octubre
MPT	Movimiento Patria para Tod@s
MUSYGES	Movimiento Unitario Sindical y Gremial de El Salvador
ORDEN	Organización Democrática Nacionalista
ORIT	Organización Regional Interamericana del Trabajo,
ORT	Organización Revolucionaria de los Trabajadores
PCN	Partido de Conciliación Nacional
PD	Partido Demócrata
PDC	Partido Demócrata Cristiano
REDES	Fundación para la Reconstrucción y el Desarrollo de El Salvador
SETA	Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA
SETIVU	Sindicato de Trabajadores del Instituto de Vivienda Urbana
SGPEES	Sindicato Gremial de Educadores de la Empresa Privada de El Salvador
SIES	Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador
SIMETRISSS	Sindicato de Médicos y Trabajadores del Instituto del Seguro Social Salvadoreño
SITEAIES	Sindicato de Trabajadores por Establecimiento del Aeropuerto Internacional El Salvador
STCAI	Sindicato de Trabajadores de la Central Azucarera de Izalco
STCEL	Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Electricidad del Río Lempa
STISSS	Sindicato de Trabajadores del Instituto del Seguro Social Salvadoreño
STITAS	Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Actividades Similares
STIVU	Sindicato de Trabajadores del Instituto de Vivienda Urbana
TR	Tendencia Revolucionaria
UCS	Unión Campesina Salvadoreña
UDN	Unión Democrática Nacional
UGB	Unión Guerreros Blancos
UNES	Unidad Ecológica Salvadoreña
UNO	Unión Nacional Opositora
UNOC	Unión Nacional de Obreros Católicos (1965) Unión Nacional de Obreros y Campesinos (1987)
UNTS	Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños
UPD	Unión Popular Democrática
UPT	Unión de Pobladores de Tugurios
UR-19	Universitarios Revolucionarios 19 de Julio
UTC	Unión de Trabajadores del Campo

EL SALVADOR



Fuente: Microsoft Enciclopedia Encarta 2004

*Vosotros, los que emergeréis de las aguas
En las que nosotros perecimos,
Pensad,
Al hablar de nuestras debilidades,
También en los tiempos oscuros
De los que os habeis librados.*

*Nosotros andamos, cambiando más seguido de país que de zapatos,
En medio de las guerras de clases, desesperados
Porque sólo había injusticia y no rebelión.*

*No obstante sabemos:
También el odio en contra de la infamia
Desfigura el rostro.
También la ira contra la injusticia
Enronquece la voz. Ay, nosotros
Que queríamos preparar el terreno para la gentileza
No pudimos ser gentiles.*

*Pero vosotros, cuando llegue el momento
En el que el hombre será un aliado del hombre
Pensad en nosotros
Con indulgencia.*

Bert Brecht: A los que nazcan después

INTRODUCCIÓN

“Al respeto por el otro, a la intención de hacerlo existir como actor, como sujeto y no simplemente como objeto, corresponde el cuestionamiento sobre cómo escribir al otro, cómo escribir su palabra y hacerla emerger. Esto, sin renunciar al métier del sociólogo, sino haciendo un poco el duelo del lugar discursivo tradicional que le tocaba.”

Regine Robin¹

Esta tesis se inscribe en el debate sobre el alcance y las limitaciones de las transformaciones políticas ocurridas en Centroamérica después de las guerras civiles y el impacto de estos cambios sobre las prácticas de movilización política y las modalidades de organización popular.² En la década de los setenta, la capacidad de convocatoria y radicalización ideológica de una amplia gama de organizaciones populares y movimientos sociales se expresaba en su acercamiento y entrelazamiento con los grupos guerrilleros, que conformarían en 1981 el FMLN. El papel importante de estas organizaciones como actores políticos se reforzó en la década de la guerra civil, al ser integrantes estratégicos de las alianzas opositoras que promovían una solución política del conflicto bélico. Pero después de la finalización de la guerra en 1992, mientras el FMLN se consolidó como el partido de oposición más relevante, las organizaciones populares perdieron la visibilidad política obtenida en años anteriores, se debilitaron y fragmentaron. A partir de constatar este fenómeno nos interesaba indagar, por una parte, sobre las razones institucionales y sociales que explican esta marginación, y, por otra parte, sobre las estrategias de acción por medio de las cuales estos actores han buscado enfrentar y resolver su exclusión del espacio político. Se escogió el caso de El Salvador por los marcados contrastes que presenta la situación de las organizaciones populares en este país antes y después de la guerra civil.³

La frase “La política es el arte de lo posible” -adscrita al canciller alemán Otto von Bismarck- suele ser utilizada por aquellos que defienden una política pragmática en contra de posturas radicales y

¹ Regine Robin, *Identidad, memoria y relato. La imposible narración de si mismo*, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC/Universidad de Buenos Aires, 1996, p. 87.

² Usamos el término “popular” para denominar la alianza de un conjunto de actores sociales –entre ellos, campesinos, sindicatos, movimientos estudiantiles-, que se enfrentaron a los Estados autoritarios en Centroamérica porque da cuenta de un fenómeno muy característico de esta movilización política: la heterogeneidad en la composición social y en las experiencias vivenciales de los agentes, así como la articulación entre identidades de clase con otras identidades sociales (comunitarias, religiosas, de oficio), que se resolvió a través de la construcción de alianzas multi-sectoriales y la interpelación a una identidad *popular* como denominador común de experiencias de explotación y dominación política.

³ FMLN: Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional; ARENA: Alianza Republicana Nacionalista.

contestatarias. Sin embargo, evidencia una lógica fundamental de la acción política: el éxito y fracaso de los agentes que representan determinados intereses sociales y luchan por la concreción de proyectos colectivos, depende de su habilidad para reconocer -en una coyuntura específica- las posibles direccionalidades que los procesos sociales pueden tomar.⁴ Pero lo que en una sociedad se percibe como opciones *posibles* o incluso *necesarias*, y lo que se concibe como objetivos *descabidos* pero imposibles de alcanzar (la *utopía*), no es inmutable sino consecuencia de construcciones sociales y culturales. Esto quiere decir que las nociones de los actores individuales y sociales sobre lo que pueden lograr con la acción colectiva y lo que está fuera de su alcance, son moldeadas tanto por las correlaciones de fuerzas sociales como por el sentido común de la época. Hasta principios de la década de los ochenta del siglo pasado, la confianza en la supremacía de la política para organizar lo social se expresaba no sólo en la legitimidad que gozaba la intervención estatal en el mercado, sino también el uso generalizado de la noción de revolución como la forma más consciente y total de cambio de relaciones sociales por medio de la acción colectiva y organizada. El avance del pensamiento neoliberal en la década de los ochenta, posibilitado por la crisis estructural del bloque socialista y del Estado de Bienestar en Europa occidental, expresó un cambio cultural que, entre otras cosas, incluyó la generalización del principio según el cual, para asegurar el bienestar social y la libertad ciudadana, hay que limitar las capacidades de intervención del Estado y desideologizar la política, limitándola a la gestión tecnócrata de lo público.⁵

Redefinir lo posible se refiere, por lo tanto, a la reelaboración de agendas programáticas y estrategias políticas que reflejan el nuevo sentido común sobre la naturaleza, los alcances y las limitaciones de la acción política. Si bien estas resignificaciones han afectado a todos los actores políticos esta investigación se enfoca en la izquierda salvadoreña y, más específicamente, en la pregunta por los cambios en las lógicas de acción y movilización política. Nuestro argumento central es que, para entender la crisis de las organizaciones populares de izquierda en la década de los años noventa en El Salvador, hay que analizar cómo se modificaron los vínculos entre fuerzas político-partidistas y movimientos sociales. Esta transformación ha estado intrínsecamente vinculada al proceso de reestructuración del campo político en este país, a partir de la incorporación de la izquierda armada al sistema de partidos, y a la consolidación del nuevo sentido de época sobre la necesaria despolitización de los actores sociales. En este sentido, estudiar el caso salvadoreño permite

⁴ Véase, Hugo Zemelman, *De la historia a la política. La experiencia de América Latina*, México, Siglo XXI, 1989, p.31.

⁵ Véase, Perry Anderson, “Balance del neoliberalismo: lecciones para la izquierda”, Emir Sader y Pablo Gentili (comps.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC/Universidad de Buenos Aires, pp.15-27, 1997.

formular hipótesis empíricamente fundamentadas sobre una crisis que ha afectado no solamente a la izquierda social y política en Centroamérica, sino a la izquierda internacional.

Puntos de partida

La inquietud por estudiar a profundidad las lógicas de acción del movimiento revolucionario salvadoreño antes y durante la guerra civil, y entender los desenlaces contrastantes y desconcertantes de la década de los noventa, surgió a partir de mis primeros acercamientos a Centroamérica a través de conversaciones con activistas salvadoreños y nicaragüenses de los movimientos revolucionarios, primero en Europa y, después, durante mis estancias en Nicaragua a partir de 1988. Viniendo de Austria, un país con un bajo grado de manifestaciones políticas en la década de los ochenta, me impresionó la capacidad de movilización de las organizaciones populares sandinistas en apoyo al Estado revolucionario, pese al bloqueo económico estadounidense y la guerra contrarrevolucionaria, y, después de la pérdida electoral del FSLN en 1990, para defender las principales conquistas de la revolución.

Al observar el debilitamiento de estas organizaciones en la década de los noventa, paralelamente a la consolidación partidista del FSLN⁶ como interlocutor central del gobierno, me surgieron varias interrogantes sobre los factores que provocaron la dispersión organizativa, y que podían aplicarse también para los casos de Guatemala y El Salvador. ¿Fue la coyuntura de los noventa, caracterizado por la crisis de la izquierda, el auge del neoliberalismo y la reestructuración productiva, que explican la dispersión? ¿Fue la emergencia de los nuevos movimientos sociales –de las mujeres, indígenas y jóvenes-, que ponían en entredicho la hegemonía del discurso anti-imperialista y clasista de los movimientos de liberación nacional? ¿O tenían razón los críticos del “autoritarismo de izquierda”, para quienes la sobrepolitización –es decir, la injerencia de intereses partidistas en la sociedad civil- era el principal obstáculo para que las organizaciones populares pudieran enfrentar los nuevos retos? ¿Todo era una repetición de la vieja historia de movimientos sociales heroicos que desafían el status quo pero son derrotados y traicionados por sus dirigentes?

Recapitular como se llevó a cabo la investigación permite dar cuenta cómo cambiaron las interrogantes que la guiaron; en un inicio la pregunta analítica central giraba en torno de las nuevas formas de movilización social e identidades colectivas que, después de las guerras civiles en Centroamérica, estaban emergiendo en respuesta a la implementación de las políticas económicas neoliberales. La interrogante se reformuló para poner énfasis en los cambios que sufrieron las

⁶ FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional

lógicas de acción en el campo político centroamericano con la movilización popular de los años setenta, las guerras civiles y, finalmente, la pacificación en un contexto marcado por la hegemonía del pensamiento neoliberal. Desde un principio pretendíamos estudiar estos procesos desde la perspectiva del movimiento popular organizado, un actor clave en los procesos revolucionarios centroamericanos.

Este punto de partida encierra una serie de decisiones metodológicas. En primer lugar, obliga ampliar la mirada más allá de los enunciados de las “élites revolucionarias” –dirigentes políticos e intelectuales, que no registran la política de los grupos subalternos más que como trasfondo de sus propios actos-⁷ y recuperar otras voces –las de activistas sindicales y campesinos- para que presenten las apuestas y expectativas que para ellos representaba el proyecto revolucionario. Pero estudiar a los actores sociales, en vez de los expresamente político-partidistas, no significa realizar un análisis “despolitizado” o “despartidizado”: los que, en los años setenta y ochenta optaron, desde su organización sindical o campesina, por militar o colaborar con la guerrilla, asumían con esto un proyecto político que se planteaba la transformación revolucionaria de la sociedad. Sus acciones adquirieron sentido para ellos, y para su entorno, a partir de una visión del mundo que reivindicaba lo estatal, lo público y lo político como posibles principios de universalidad. Por lo tanto, una segunda observación metodológica tiene que ver con la reconstrucción del *sentido* de la acción política y social. Si bien hoy en día dichos principios ya no juegan el mismo papel en la justificación de la acción colectiva como antes, hay que tomarlos en cuenta cuando se busca reconstruir el significado de la movilización política en Centroamérica.⁸

En tercer lugar, hay que evitar una perspectiva analítica que busca explicar el pasado a partir de los resultados en el presente, por ejemplo, centrándose exclusivamente en la evolución de aquellos grupos que en los años noventa cristalizarían en los partidos políticos legales. Los movimientos revolucionarios de los años setenta estuvieron conformados por una amplia y diversa gama de actores sociales y políticos, pero no todos acompañaron la transformación de los grupos guerrilleros primero a frentes político-militares y después a partidos legales. Por lo tanto optamos por las

⁷ Véase, Adolfo Gilly, *Historia a contrapelo. Una constelación*, México, Ed. Era, 2006, especialmente pp. 26-30, otros textos en los cuales se inspira nuestro planteamiento metodológico fueron: Ranahit Guha, *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*, Barcelona, Ed. Crítica, 2002; Edward P. Thompson, “Folclor, Antropología e Historia social”, *Historia social y antropología*, México, Instituto de Investigaciones Mora, 1994, pp. 55-82.

⁸ Véase, Pilar Calveiro, “Puentes de la memoria: Terrorismo de estado, sociedad y militancia”, *Lucha armada en la Argentina. Historia, Debates, Documentos*, Buenos Aires, Año 1, No. 1, diciembre-febrero 2004, pp. 71-77.

técnicas analíticas de la genealogía y de la trayectoria; la primera, porque permite cuestionar el mito del origen único de los movimientos al dar cuenta de las diversas raíces de los actores sociales, que en un momento histórico dado confluyeron en los movimientos revolucionarios. La segunda, porque las trayectorias de militantes de las organizaciones populares, obtenidas por medio de las entrevistas biográficas, permiten, desde la perspectiva de estos *actores secundarios*, reconstruir los cambios que experimentaron los mundos sociales de la militancia en sus relaciones internas, sus vínculos con otros ámbitos sociales, como el espacio laboral, la familia, la comunidad campesina o la iglesia- de los años setenta a los noventa. Al optar por un enfoque metodológico que estudia los movimientos sociales a partir de genealogías y relatos de vida, tuvimos que centrar el análisis en las características específicas de un caso pero con la apuesta que los hallazgos de un estudio de esta naturaleza permitirían generalizar algunas conclusiones sobre la transformación de las prácticas y mundos de la militancia de izquierda en las últimas décadas.⁹

Las decisiones metodológicas tuvieron consecuencias importantes para la investigación: por una parte, se amplió el corte temporal estudiado para incluir la época de los setenta –periodo crucial para entender cómo se fue conformando el movimiento revolucionario en Centroamérica-, por otro lado había que profundizar la mirada para poder observar, cómo en la intersección entre espacio social y campo político, agentes sociales heterogéneos participaban de la construcción de la *contrahegemonía* guerrillera. Según nuestro juicio, la profundización de la mirada –relativo al corte temporal y al enfoque- permitió obtener resultados más matizados y adecuados a la complejidad de la realidad sociohistórica estudiada. Pero a cambio había que limitar el análisis a un solo caso: El Salvador. Por su historia particular, este país se me hacía especialmente interesante para estudiar las lógicas de acción social que emergieron gracias al entrelazamiento entre grupos guerrilleros –portadores de visiones contrahegemónicas- y las vertientes movimentistas y anti-gubernamentales de su sindicalismo.¹⁰

⁹ Sobre las posibilidades del método biográfico, véase, Paul Thompson, “Historias de vida y análisis del cambio social” y Daniel Bertaux, “Los relatos de vida en el análisis social”; ambos textos se encuentran en Jorge Aceves Lozano (comp.), *Historia oral*, México, Instituto Mora/UAM, 1993, pp. 117 -148.

¹⁰ Por lo tanto, los relatos de las estancias de investigación se centran en El Salvador. Sin embargo, nuestra apuesta metodológica (la de toda investigación etnosociológica) es que el microcosmo, los mecanismos y las lógicas de acción de la militancia salvadoreña apuntan a actividades sociales y procesos más generales: en este caso, las lógicas de la movilización social y política de los movimientos revolucionarios. Véase, Daniel Bertaux, *Los relatos de vida*, Paris, Ed. Nathan, 1997, p. 57 (traducido por Monica Moons para Metodología de la Investigación II, Universidad Nacional de Salta/Argentina, julio 1999).

Como suele suceder en las investigaciones cualitativas,¹¹ en el transcurso de la investigación fueron modificándose las preguntas de investigación y los enfoques explicativos, conforme los primeros resultados obligaron a reformular nuestras hipótesis originales. Si bien estas decisiones fueron responsabilidad de quien escribe, el debate con otros investigadores, me obligó permanentemente a interrogarme sobre la pertinencia de la investigación, y la validez y el significado de los resultados. El espacio académico de la UNAM permitió –primero durante la Maestría y, después, durante el Doctorado en Estudios Latinoamericanos- la reflexión sistemática en torno a estas preguntas, que se nutría de los debates con maestros y compañeros del posgrado y se concretó en los ejes problemáticos que orientaron el proceso de investigación. En diversos seminarios se dio la oportunidad de presentar avances e iniciar el debate sobre el posible significado de los resultados que se presentarán a continuación.¹²

Puntos de llegada

Señalaba Lenin que una revolución se anuncia cuando los “de abajo” tengan la conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo como vivían antes y exijan cambios, mientras los “de arriba” ya no

¹¹ La reformulación de preguntas e hipótesis en función de los hallazgos forma parte integral de los métodos cualitativos de investigación, a diferencia de la metodología cuantitativa. Anselm Strauss señala al respecto que en cualquier fase de la investigación cualitativa es posible detenerse, si se considera necesario, y volver a coleccionar nuevos datos para llenar huecos en la evidencia empírica (teóricamente esto es cierto, aunque en la práctica de la investigación hay limitaciones importantes, especialmente de tiempo). Lo importante de esta forma de investigación es realizar cada paso (colección de datos, sistematización y análisis, interpretación) de manera reflexiva y sistemática. Para comprobar la objetividad de los resultados, lo que a la metodología cuantitativa es la representatividad, asegurada por medio de la estadística, a la metodología cualitativa es la capacidad de dar cuenta de la especificidad, del carácter relacional y multifacético del fenómeno social estudiado, además de la reflexión continua sobre el quehacer del investigador. En este sentido, la vigilancia epistemológica durante todo el proceso de investigación es un aspecto imprescindible en la aplicación de los métodos cualitativos.

Tanto las reflexiones de varios autores sobre metodología y el quehacer del investigador social, como las sugerencias y comentarios de los miembros del Comité Tutorial - Raquel Sosa Elízaga, Mario Vázquez Olivera e Irene Sánchez Ramos- contribuyeron a la vigilancia epistemológica. Véase, por ejemplo, Anselm L. Strauss, *Grundlagen qualitativer Sozialforschung [Fundamentos de la investigación social cualitativa]*, Munich, Wilhelm-Fink-Verlag, 1994. Irene Vasilachis de Gialdino, *Métodos cualitativos I. Los problemas teórico-epistemológicos*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993; Matthew B. Miles y A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook*, 2. Edition, SAGE Publications, London/Thousand Oaks, 1994; Udo Kelle y Susann Kluge, *Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung [Del caso al tipo. Comparación y contraste de casos en la investigación cualitativa]*, Opladen, Leske+Budrich, 1999. Un libro extraordinario por su capacidad de dar cuenta del proceso de construcción del objeto de estudio es Paul Friedrich, *Los príncipes de Naranja. Un ensayo de método antropológico*, México, Grijalbo, 1991.

¹² Especialmente significativo fueron los seminarios monográficos sobre los procesos revolucionarios en Centroamérica, impartidos por Mario Vázquez Olivera en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos, el Seminario permanente “Mesoamérica contemporánea: política y cultura” coordinado por Irene Sánchez Ramos en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS y los talleres de investigación social en el Posgrado de Ciencias Sociales y Políticas en la UNAM, dirigidos por Susana García Salord.

pueden seguir viviendo y gobernando a la antigua.¹³ Visto en retrospectiva, la sociedad salvadoreña pasó, entre 1979 y 1981, por una situación revolucionaria que cumplía con todos los ingredientes para ser caracterizada como tal: una ruptura de hegemonía y soberanía del Estado, la aparición de contendientes o de coaliciones de contendientes, antagónicos entre sí, con aspiraciones por controlar el Estado; un importante apoyo de un sector de la población a estas aspiraciones; y la incapacidad de los gobernantes para suprimir la coalición alternativa.¹⁴ Pero el resultado revolucionario, es decir, la transferencia efectiva del poder político, no se consumió y la crisis revolucionaria desembocó en una prolongada guerra civil entre el FMLN y el gobierno salvadoreño. La crisis de soberanía estatal se mantuvo porque la guerrilla controló, hasta la desmovilización después de 1992, ciertas áreas geográficas del territorio nacional.

Aunque la transferencia de poder no se dio, la crisis revolucionaria sacudió el modelo de dominación en sus cimientos y obligó a las élites políticas a instrumentar una serie de cambios institucionales para abrir el sistema político a la participación de la izquierda armada, pero sin poner en peligro las relaciones de explotación y dominación. Con la integración del FMLN a las instituciones de la democracia representativa, posibilitada a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, el objetivo de abrir espacios a la representación política de los sectores dominados parecía haberse consumado.

Sin embargo, la implementación del proyecto neoliberal por parte de las élites salvadoreñas, y los cambios sociales y económicos que vivió el país en la última década –destacándose el fenómeno de la migración y la dependencia de la economía salvadoreña de los mercados financieros- redujeron de manera importante el margen de acción para los actores orientados a la transformación social. Adicionalmente, la estrategia del FMLN de acceder al gobierno central por la vía electoral no ha funcionado. Esta situación plantea la paradoja que, si bien los excluidos lucharon para ingresar al campo político -y lo lograron sin duda- se dio una inclusión incompleta por limitarse al espacio formal de la democracia. Lo cual lleva a preguntar por el precio que se pagó para esta inclusión, quiénes lo pagaron y cuáles han sido las estrategias para enfrentarse a esta situación.

¹³ Vladimir Illich Lenin, *La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el comunismo*, México, Ed. Grijalbo, 1974, pp. 111-112.

¹⁴ Una definición de los elementos que caracterizan una crisis revolucionaria y la diferenciación entre crisis y resultado revolucionario fue tomada del estudio comparativo de Charles Tilly, *Las revoluciones europeas 1492-1992*, Barcelona, Ed. Crítica, 1995, pp. 27-35.

Estas constataciones son el punto de partida para elaborar las dos grandes líneas de argumentación del presente trabajo. La primera línea de argumentación gira en torno a la reestructuración del campo político salvadoreño. Este proceso, iniciado con la movilización revolucionaria de la segunda mitad de los setenta que redefinió fronteras y criterios de acceso al campo político, eliminó posiciones y creó otras, produjo nuevas relaciones de fuerza entre los agentes y, por ende, nuevas lógicas de acción. Entre ellas, una de las más relevantes para esta investigación, ha sido la adopción de la lógica electoral por parte del FMLN, a partir de su incorporación en el sistema de la democracia representativa. Las implicaciones de este cambio para el vínculo entre organización política y movilización social se examinarán en los últimos dos capítulos de esta tesis.

La segunda línea de argumentación se enfoca en nuestra unidad de observación que son los militantes civiles de las organizaciones político-militares. Con este término nos referimos a aquellos militantes que no se incorporaron directamente al aparato militar sino que servían como enlaces entre este aparato y el movimiento popular. Con la desmovilización de la guerrilla, estos activistas –agentes estratégicos en la construcción de la contrahegemonía guerrillera en los mundos sociales de la universidad, el sindicato o la comunidad campesina- se encontraban ante la disyuntiva o de buscar un nuevo lugar en el campo político o salirse de él. Las estrategias de búsqueda y adaptación de los activistas políticos –tanto de aquellos que apostaron a la reproducción o la reconversión en el campo político, como de aquellos que se salieron o fueron expulsados del mismo- incidieron, así nuestra hipótesis, en la emergencia de las lógicas sociales que, desde entonces, han dominado tanto la interacción entre fuerzas partidistas como entre ellos y los actores de la sociedad civil salvadoreña de la posguerra. En otras palabras, al mismo tiempo que sus estrategias de reconversión social fueron producidas por la reestructuración del campo político, los activistas –por medio de sus decisiones y actos- moldearon los resultados de dicho proceso.

Hay una serie de conceptos que fundamentan estas líneas de argumentación y que se presentarán en el primer capítulo. En él se muestran, por una parte, los alcances y limitaciones que, según nuestro modo de ver, caracterizan las principales explicaciones sobre el origen y los actores de las crisis revolucionarias en Centroamérica y, por otra parte, las herramientas conceptuales que las teorizaciones sobre los movimientos sociales ofrecen para interpretar la constitución del vínculo entre movimientos sociales y organizaciones político-militares. En este sentido, el capítulo pretende ser más bien un “estado de arte” que refleja las vertientes de un debate aún inacabado, y no un marco teórico fijo que exclusivamente da cuenta de las posturas y teorías que fundamentaron esta investigación. Una especificidad del caso salvadoreño –que lo distingue de la evolución de otras experiencias guerrilleras- fue el hecho que dirigentes y activistas de organizaciones populares

vieron en la vía armada y el planteamiento insurreccional de los grupos guerrilleros una estrategia viable para cambiar la sociedad. Por esta especificidad consideramos importante analizar los enfoques explicativos sobre la acción colectiva en función de la pregunta por su aporte para explicar el uso de la violencia en los movimientos sociales. La revisión conceptual permitió definir la noción de la militancia política como práctica social que orientó el análisis de los relatos biográficos: por una parte, el rol de los militantes revolucionarios como productores de sentido contrahegemónico; por otra parte, la función social de la militancia como institución que, al mediar entre el ámbito político y la sociedad, participa de la configuración simbólica de los intereses colectivos.

El segundo capítulo pretende dar cuenta de las genealogías que explican la articulación entre grupos guerrilleros y un conjunto de organizaciones populares –especialmente federaciones sindicales y organizaciones campesinas-, y ofrece una interpretación de por qué estas organizaciones se convirtieron en voceros legítimos del movimiento anti-gubernamental. Un factor importante para explicar este protagonismo reside en la estrategia de los grupos guerrilleros de insertar militantes y reclutar activistas en dichas organizaciones para promover como formas de protesta la acción directa y extra-institucional y como objetivos estratégicos la insurrección y el cambio revolucionario. El segundo eje temático de este capítulo –a través de las narraciones de los militantes sobre su ingreso a la organización político-militar- se centra en las condiciones sociales y simbólicas de posibilidad que permitieron que activistas sindicales y campesinos percibieran la militancia en una organización revolucionaria como opción para su acción.

Si los años previos a la primera ofensiva del FMLN se caracterizaron por la creciente radicalización del movimiento popular, los años 1981 a 1983 fueron sin duda el momento más duro del contraataque del Estado y los grupos dominantes. Por esto, el tercer capítulo revisa las diversas estrategias –desde el terrorismo de Estado hasta la reforma agraria contrainsurgente, pasando por una incipiente democratización institucional y electoral- por medio de las cuales desde el poder se modificaron las condiciones que habían provocado la profunda crisis política en el país. En segundo lugar, este capítulo busca dar cuenta de uno de los cambios centrales que la guerra provocó en el campo político salvadoreño y que definimos como la *militarización de la política*. Esta lógica compartida por los adversarios se caracterizó por la subordinación de todos los fines y estrategias políticos a las dinámicas y objetivos de la guerra. También afectó a las organizaciones sociales que se reorganizaron, después del desmantelamiento violento del movimiento popular insurreccional, vinculándose al gobierno demócratacristiano de Napoleón Duarte o al FMLN. Al interior de la

alianza opositora, la lógica de la militarización se expresó en una nueva jerarquía que colocó al FMLN como principal vocero de la oposición salvadoreña para negociar, entre las condiciones para la desmovilización de su ejército, las reformas institucionales necesarias para la apertura del sistema político.

Atribuir la marginación política del movimiento popular en la década de los noventa, solamente en la subordinación de los activistas sociales a las jerarquías militares del FMLN no es suficiente. Hubo factores políticos internacionales que coincidieron en el tiempo –la caída de la Unión Soviética, la derrota electoral del FSLN, la consolidación de las propuestas neoliberales en el Consenso de Washington-, junto a la crisis estructural del modelo de acumulación fordista- que “achicaron” el horizonte de lo posible. En el contexto de una serie de cambios que fortalecieron las posiciones del capital, el programa de reformas socio-económicas del FMLN-FDR (elaborado con la participación de dirigentes sindicales y campesinos), orientado a ampliar la intervención estatal y crear espacios institucionales de negociación tripartita (Estado, Empresarios y Trabajo), no pudo concretarse en el nuevo entramado institucional de la posguerra.

Por lo tanto, el Interludio entre el tercer y cuarto capítulo tiene como objetivo presentar las condiciones económicas, sociales y políticas regionales para las políticas de ajuste estructural del gobierno de ARENA, electo en 1989. En esta sección se demostrará que la realización del capítulo de reformas socioeconómicas de los Acuerdos de Paz quedó truncada porque el gobierno de Alfredo Cristiani –apoyado implícitamente por los organismos financieros internacionales- procuró separar el contenido y ritmo de las medidas de ajuste estructural de la negociación de las condiciones para obtener la desmovilización de la guerrilla.

El cuarto capítulo tiene como tema central la reorganización del movimiento insurgente en el contexto de la pacificación y el ajuste estructural, expresada en la diferenciación entre una estructura político-partidista, organizaciones populares y comunitarias y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Para responder a la pregunta, de qué manera la reformulación de apuestas y proyectos incidió en las transformaciones de la sociedad civil, la segunda parte del capítulo ofrece un mapeo de las nuevas y viejas organizaciones populares a partir de sus encuentros y desencuentros con el FMLN. El capítulo finaliza con los relatos militantes, para mostrar cómo ellos experimentaron y valoraron el desenlace del conflicto militar. Lo que resalta en sus relatos es el desencanto doloroso con la militancia a partir de la frustración sobre los pocos resultados de los Acuerdos de Paz y los conflictos al interior del movimiento revolucionario, en los cuales la definición de nuevas estrategias políticas se mezclaba con las disputas por posiciones y recursos.

Desde la perspectiva de los activistas entrevistados, la *redefinición de lo que sería políticamente posible* en el periodo de la posguerra dependió de varios factores: el desgaste individual después de años de militancia, la sensación de una creciente distancia entre el proyecto de cambio social y el sentir del grueso de la población salvadoreña, agobiada por los efectos económicos de la guerra, así como las escisiones en el movimiento revolucionario paralelamente a la consolidación y autoconfianza de la elite política agrupada en ARENA.¹⁵ Estas experiencias de desmovilización de las estructuras político-militares permiten ilustrar un aspecto poco estudiado de la pacificación: el impacto de las transformaciones políticas sobre las lógicas de participación y movilización del activismo social, y la construcción de una nueva relación entre activistas sociales y representantes políticos del partido de izquierda.

El objetivo central de esta investigación fue reconstruir las modalidades de organización, las prácticas sociales y apuestas del movimiento revolucionario salvadoreño desde la perspectiva particular de colaboradores y militantes civiles del FMLN en las organizaciones populares. Una de las especificidades de las organizaciones político-militares fue que, a diferencia del foquismo guevarista, reconocieron la importancia del trabajo político en las organizaciones populares y concebían la participación de las masas por medio de la huelga general, la insurrección y la formación de milicias de autodefensa como componentes centrales de su estrategia de la lucha armada. Por esto nos resultó interesante analizar cómo operaba la lógica político-militar en las organizaciones populares, cómo condicionaba la interacción entre activistas sociales y cuadros guerrilleros y cuáles han sido los efectos prácticos de esta lógica una vez que terminó la guerra.

Estas preguntas, así como nuestro interés inicial por estudiar las transformaciones del trabajo organizado y el sindicalismo en Centroamérica, han contribuido a que los aspectos propiamente militares del movimiento revolucionario salvadoreño están prácticamente ausentes en esta investigación. Quedaron preguntas abiertas, como por ejemplo, sobre el funcionamiento de las milicias de autodefensa durante el periodo de los frentes de masas; las consecuencias prácticas de la transición de una guerrilla fundamentalmente urbana a un ejército campesino en los años ochenta; las formas de organización y estrategias de protesta de los ex combatientes, uno de los movimientos

¹⁵ Sorprendentemente, acontecimientos internacionales que marcaron la crisis de los proyectos socialistas y nacional-desarrollistas no jugaron un papel relevante en las entrevistas (con excepción de un entrevistado), si lo comparamos con la presencia de temáticas y preocupaciones nacionales. Esto no quiere decir que los cambios internacionales no hayan jugado un papel en las modificaciones de la subjetividad militante, sino que, debido al carácter multisectorial del movimiento revolucionario salvadoreño, éstos no tuvieron un efecto homogéneo y generalizable. Lo cual lleva a la pregunta –para una futura investigación– de cómo la crisis del bloque socialista fue interpretada por los activistas de base, de acuerdo a su origen social y étnico y en función del lugar donde ellos militaban.

sociales más características de los primeros años de la posguerra. Aunque consideramos importante el análisis del FMLN como fuerza beligerante, incluir esta dimensión hubiera ampliado todavía más este trabajo. Tomando en consideración que el estudio de los militantes civiles de las organizaciones político-militares es todavía un tema poco explorado, esperamos que no obstante las ausencias, las reflexiones de esta investigación abran la puerta a nuevas líneas de investigación y sean un aporte a la construcción de una historia social de la transición política en El Salvador.

Aclaraciones metodológicas sobre los relatos biográficos

Una fuente central de información para este trabajo fueron las entrevistas biográficas, realizadas entre 2003 y 2004, porque permitieron reconstruir los significados de la militancia civil en una organización político-militar. Por lo tanto consideramos necesario explicitar los procedimientos que nos permitieron obtener estos relatos, es decir, dar cuenta de la fase empírica del proceso de construcción del objeto de estudio -la colección de las historias de vida en campo, la sistematización analítica, su interpretación- y de la búsqueda de una forma adecuada para narrarlo, tomando en cuenta lo señalado por Regine Robin: reconocer al entrevistado(a) no sólo como “informante” sino como actor.

Los procesos de movilización social y radicalización política en América Central inspiraron no sólo a numerosos estudios sociales y políticos sobre la región, también contribuyeron a la proliferación de testimonios. En reportajes periodísticos, entrevistas y autobiografías de guerrilleros, así como en las recopilaciones de denuncias de las violaciones a los derechos humanos, aparecían, ante la opinión pública regional e internacional, tanto los sujetos de la movilización política como las víctimas del terrorismo de Estado. Las Comisiones de la Verdad, instaladas en el contexto de la pacificación en El Salvador y Guatemala para registrar las violaciones a los derechos humanos, reforzaron el papel destacado del testimonio como un discurso que permitía recordar a las víctimas y deslindaba responsabilidades.

Conviene señalar esto porque detectamos en las entrevistas que el testimonio militante era uno de los discursos sociales que influyó en la visión retrospectiva de la vida. El entorno social y cultural ofrece a los individuos una serie de “esquemas narrativos” para que ellos interpreten y representen su vida de acuerdo a ciertas normas y convenciones sociales.¹⁶ Este principio básico, que hace

¹⁶ La construcción de la biografía individual de acuerdo a reglas, moldes y esquemas biográficos se aprende en la socialización (primaria y secundaria) y forma parte de la vida moderna caracterizada por la interiorización de mecanismos de control y disciplina, señalan tanto Rosenthal como Fischer-Rosenthal en sus trabajos sobre el método biográfico en las ciencias sociales. Por su parte, Klaus Georg-Riegel en su estudio

posible una narración inteligible, se reflejó en las entrevistas realizadas para esta investigación. En los relatos biográficos de los activistas políticos registramos, además de los recursos discursivos convencionales para relatar la vida –una estructura cronológica básica que incluye referencias a “acontecimientos inevitables”, como nacimientos, matrimonio, trabajo, etcétera¹⁷, dos esquemas narrativos: el testimonio militante y la denuncia de la víctima de la violencia política. El análisis de las entrevistas desde la perspectiva del relato biográfico, el uso de la noción de trayectoria para analizar la biografía de los militantes y la comparación con fuentes adicionales fueron entonces las herramientas metodológicas centrales para no reproducir los esquemas que los mismos entrevistados propusieron para interpretar su vida.

Para analizar la militancia en El Salvador decidimos centrar el trabajo de campo en la búsqueda de información sobre tres momentos históricos:

- I. 1970-1979/80: El periodo de radicalización política y la masificación de modalidades de organización contestataria en el movimiento popular.
- II. 1980-1990/92: El impacto de la violencia política y de la militarización sobre estas organizaciones.
- III. 1990/92 al presente: La articulación entre viejas y nuevas subjetividades sociales.

El material se recopiló durante dos viajes a la región. En un primer viaje, en julio y agosto de 2002, se realizaron una primera serie de entrevistas con informantes estratégicos: dirigentes sindicales, profesionales de ONG's e investigadores sociales. La estancia de investigación en marzo 2004 en El Salvador tuvo tres objetivos: en primer lugar, realizar las entrevistas narrativas con hombres y mujeres -dirigentes y activistas de organizaciones populares que habían participado en una de las organizaciones político-militares del FMLN antes y durante la guerra civil-; en segundo lugar, entrevistar nuevamente a informantes clave (dirigentes nacionales de organizaciones populares,

sobre las biografías de cuadros marxistas-leninistas destaca que el proceso de conversión política para incorporarse a una comunidad virtuosa revolucionaria incluye también la revisión y reinterpretación de la propia biografía. Véase, Gabriele Rosenthal, *Erlebte und erzählte Lebensgeschichte [Historia de vida vivida y narrada]*, Frankfurt/Main, Campus, 1995, pp. 99ss; Wolfram Fischer-Rosenthal, “Von der ‘biographischen Methode’ zur Biographieforschung: Versuch einer Standortbestimmung” [Del ‘método biográfico’ al enfoque biográfico. Un intento de definir su ubicación], *Werkstattberichte des Forschungsschwerpunkts ‘Arbeit und Bildung’ [Cuadernos de trabajo del programa de investigación ‘Trabajo y Educación’]*, Tomo 13, Bremen, Universität Bremen, 1990, pp. 11-32. Por su parte, Régine Robin señala que en las “esquemas narrativos”, que están presentes en todas las historias de vida, se reproducen las convenciones y estereotipos discursivos por más incoherentes que parezcan porque son estos moldes que dotan de sentido a la visión retrospectiva de la vida. Véase, Régine Robin, “¿Es la historia de vida un espacio al margen del poder?”, en J. Aceves (comp.), *op.cit.*, 1993, pp. 181-191.

¹⁷ Véase, R. Robin, *op.cit.*, 1993, p. 182.

académicos y profesionales de organizaciones no gubernamentales) para recuperar sus conocimientos del proceso social estudiado; y, en tercer lugar, visitar centros de documentación, archivos y bibliotecas para complementar la información obtenida en México con fuentes primarias (periódicos, volantes) y estudios nacionales.¹⁸

Durante la segunda estancia de investigación realicé once entrevistas a profundidad, nueve de ellas con activistas y dirigentes de organizaciones populares, una entrevista con Facundo Guardado, ex secretario general del BPR y disidente del FMLN y una con Eliseo Ortiz, ex militante de Resistencia Nacional, fundador del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES) y del MPT. A estas entrevistas se suma una entrevista a profundidad realizada en la Ciudad de México con una sindicalista y ex militante de Resistencia Nacional.

Entrevistas a profundidad:¹⁹

FENASTRAS: 3

Sindicalismo sector público y UNTS: 1

ANDES 21 de junio: 2

Bases Magisteriales (Escisión de ANDES): 1

CONFRAS (Confederación de Cooperativas Agrícolas): 2

Movimiento de desplazados y repobladores, Frente Guazapa: 1

La selección de los entrevistados se hizo con base en los criterios del “muestreo teórico” (theoretical sampling) de escoger -a partir de las hipótesis y preguntas de investigación- casos contrastantes para obtener un máximo de variación. Este procedimiento permite construir la muestra a lo largo del proceso de investigación y de acuerdo a criterios analíticos, es decir, el mayor conocimiento sobre el objeto de estudio obtenido en el proceso de investigación, permite modificar la muestra, ampliarla conforme emergen los primeros hallazgos y los nuevos ejes problemáticos o cerrarla, si el investigador considera que nuevas entrevistas ya no aportarían nuevas evidencias para enriquecer el

¹⁸ Los archivos y bibliotecas que se visitaron fueron: Biblioteca central de la UCA San Salvador, Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la UCA; Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas “Farabundo Martí”; FLACSO, San Salvador.

¹⁹BPR: Bloque Popular Revolucionario, Frente de Masas de las FPL; MPT: Movimiento Patria para [Tod@s](#) (Coordinadora de grupos e individuos fundada en 2001 para reagrupar a ex cuadros y simpatizantes de Resistencia Nacional); FENASTRAS: Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños; ATRAMEC: Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación y Cultura; ANDES 21 de Junio: Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de Junio; UNTS: Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños; CONFRAS: Confederación de Cooperativas Agrícolas;

análisis.²⁰ Pero esta técnica de “bola de nieve” –un contacto personal inicial lleva a otros contactos- produjo un “sesgo político-organizativo” en la muestra: casi todos los entrevistados provinieron de las filas de la organización armada Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN). Este hecho da cuenta que las redes sociales, constituidas a partir de las cinco organizaciones político-militares siguen reproduciéndose hasta el día de hoy. Los relatos biográficos que forman parte de esta investigación no incluyen, por tanto, la experiencia de militantes del Partido Comunista y las Fuerzas Populares de Liberación-Salvador Martí, las dos organizaciones que hoy en día dominan el aparato del FMLN.

En la realización de las entrevistas seguí, fundamentalmente, las sugerencias metodológicas de Pierre Bourdieu acerca de la *comprensión* como método más adecuado para crear una situación de comunicación que posibilita al entrevistado recordar, y recrear, en la memoria, situaciones del pasado que a veces resultan ser conflictivas y traumáticas: por ejemplo, la muerte de familiares en la guerra, la prisión o la ruptura de la unidad partidista acompañada por disputas y acusaciones mutuas. La comprensión presupone que el entrevistador cuenta con las competencias necesarias y la disposición para ofrecerle al entrevistado una oportunidad de *explicarse*, es decir, que exponga en sus propios términos su punto de vista sobre sus actos, el mundo social y su posición en él.²¹

Una entrevista siempre implica una relación asimétrica entre entrevistado y entrevistador, en la cual el entrevistador por medio de sus preguntas y reacciones impone temas y define las “reglas del juego” que rigen la situación de comunicación. En el peor de los casos, la imposición de temas, la formulación de preguntas inadecuadas o insensibles puede hacer fracasar la entrevista, es decir, generar respuestas que no dicen nada. La creación de una situación de comunicación favorable requiere, por lo tanto, de las habilidades del entrevistador, de no sólo saber escuchar, sino formular preguntas en función del entorno sociohistórico del entrevistado y de las posiciones que ha ocupado en este entorno. Lo que se obtiene a cambio –siempre y cuando “funciona” la relación entre entrevistado y entrevistador- son situaciones de interacción y diálogo muy especiales, de una intensidad, “química” y cercanía poco común en la comunicación cotidiana o en investigaciones sociales convencionales.

²⁰ Este método se fundamenta en la premisa, según la cual, para llegar a conclusiones válidas sobre el objeto de estudio, el procedimiento de selección de la muestra tiene que dar cuenta de la heterogeneidad y de las diferencias que existen en el universo que se pretende estudiar. Véase, A. Strauss, *op.cit.*, 1994, pp. 70-71

²¹ Véase, Pierre Bourdieu, “Verstehen” [*Comprender*], P. Bourdieu, et.al. *Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft* [*La miseria del mundo. Testimonios y diagnósticos del sufrimiento cotidiano por la sociedad*], Konstanz, UVK, 1997, pp. 779-792.

En mi caso, el diálogo con los exmilitantes se hacía posible a partir de ciertos referentes compartidos: mi conocimiento de los procesos políticos y de la historia del movimiento popular en El Salvador, las experiencias adquiridas durante mi trabajo en una organización sandinista en Nicaragua y también la participación activa, durante muchos años, en organizaciones políticas de izquierda en Austria.

En los relatos de los entrevistados el movimiento popular radical, aparecía como un conjunto de agentes individuales y colectivos con apuestas, relaciones y prácticas específicas y no solamente como el trasfondo para el despliegue de los actos de otros sujetos políticos –los partidos políticos, la guerrilla, el gobierno norteamericano, etcétera. No caben dudas que en El Salvador existen memorias locales y comunidades que se resisten a olvidar y las historias de vida que reconstruí en un esfuerzo conjunto con los entrevistados son una muestra de ello. También en conversaciones informales y encuentros casuales me topé con recuerdos individuales y sociales sobre las distintas modalidades de participación posibles en el movimiento popular durante las últimas tres décadas.

Pero también se manifestaban los recuerdos incómodos para la misma izquierda. Por ejemplo, un ex guerrillero relató la persecución de supuestos “traidores” en una zona controlada por la guerrilla, una caza de brujas desencadenada por la paranoia de un comandante guerrillero que se creía rodeado por enemigos infiltrados y “orejas”. Los “ajusticiamientos” de población civil y de combatientes no cesaron hasta que representantes de la Comandancia General del FMLN llegaron a la zona y desconocieron al comandante guerrillero. Si bien este comandante fue enjuiciado y fusilado por la propia guerrilla, según la persona que me contó el caso, el FMLN no ha hecho justicia a las víctimas por medio del deslinde de responsabilidades, la memoria y la reparación de daños.

Todos estos momentos informales y circunstanciales complementan un panorama caracterizado por la dispersión de la memoria histórica del movimiento popular y el menosprecio de las memorias que están al margen del canon oficial del FMLN. La memoria oficializada sobre los acontecimientos de los años setenta, la guerra civil y el desenlace negociado hasta el día de hoy se centra en los actores políticos. En el caso de la derecha, agrupada en torno a ARENA, este olvido no sorprende por el clasismo de los sectores dominantes y porque una revisión de la memoria obligaría a saldar cuentas con los victimarios –los violadores de los derechos humanos- que aún tienen peso y legitimidad en la estructura social y en las filas del partido. Interpretar el silencio de la izquierda política de confrontar la memoria oficial –más allá de un compromiso discursivo- es más difícil.

Posiblemente este olvido se debe a que asignar al movimiento popular organizado un lugar privilegiado en la memoria del partido hubiera obligado a los dirigentes y al aparato del FMLN cuestionar los alcances de una democratización que fue resultado de un acuerdo entre élites y que abrió, antes que nada, espacios institucionales a la “contra-élite” de izquierda. Además, hubiera significado dar cuenta de los propios actos de violación a los derechos humanos (especialmente ajusticiamientos de informantes y opositores internos),²² y del abandono que sufrieron las aspiraciones del movimiento popular cuando terminó la guerra. La falta de una memoria histórica compartida, que reconozca y haga justicia a las memorias de comunidades y grupos específicos, impide construir un horizonte de futuro y acordar colectivamente las acciones necesarias para alcanzarlo, lo cual es en la actualidad una de los grandes deficiencias de la izquierda social y política en El Salvador.²³

El “Corpus” de Análisis

De todas las entrevistas realizadas en el transcurso de la investigación en El Salvador, ocho cumplieron con los criterios para llevar a cabo un análisis sistemático de las trayectorias políticas de los entrevistados, especialmente, una reconstrucción más o menos completa y detallada sobre el proceso de politización individual, relatos sobre actividades realizadas en organizaciones populares y en la organización político-militar antes y durante la guerra, así como en el contexto de la pacificación. Esta información se complementaba con datos relativos a la trayectoria educativa, laboral y familiar y relatos y descripciones sobre el entorno en el cual se practicaba la militancia (universidad, familia, espacio laboral).

²² Como confirma el Informe de la Verdad, las violaciones a los Derechos Humanos, cometidos por la guerrilla, fueron mucho menos que las del ejército y los cuerpos paramilitares. Sin embargo, el FMLN tiene la responsabilidad política y ética de aclarar las acusaciones y hacer justicia a las víctimas.

²³ Sobre esta discusión véase, “Editorial: Deuda con la memoria histórica”, *Estudios Centroamericanos*, Año LVIII, San Salvador, No- 661-662, noviembre-diciembre de 2003, pp. 1121-1137.

Entrevistas biográficas:

Fecha	Nombre*	Organización	Grupo Guerrillero
Diciembre 2003	Maria	ATRAMEC y FENASTRAS	Resistencia Nacional
Marzo 2004	Horacio	STECCEL y FENASTRAS	Resistencia Nacional
Marzo 2004	Celso	ATRAMEC y UNTS	Resistencia Nacional
Marzo 2004	Ana	FENASTRAS	Resistencia Nacional
Marzo 2004	Manuel	CONFRAS	Ejército Revolucionario del Pueblo
Marzo 2004	Marta	CONFRAS	
Marzo 2004	Adriana	Movimiento de desplazados y repobladores	Resistencia Nacional
Marzo 2004	Daniela	ANDES y Bases Magisteriales	Resistencia Nacional

*/ Nombres ficticios

Optar por historias de vida como método de investigación implica muchas horas adicionales de trabajo: Las entrevistas narrativas duraron en promedio entre 90 y 180 minutos²⁴ y cada una implicó, además del tiempo de su realización, varias horas adicionales de trabajo. Antes del encuentro había que adecuar el guión de la entrevista –las preguntas y temas– al perfil del entrevistado y, después, elaborar los protocolos de cada entrevista con los temas mencionados por el entrevistado, mis hipótesis y comentarios. Estos protocolos sirvieron como un primer análisis para evaluar el guión y formular nuevas preguntas.

Posteriormente se llevó a cabo el proceso de sistematización, análisis e interpretación de las entrevistas transcritas, con base en las propuestas analíticas de Daniel Bertaux y Udo Kelle/Susanne Kluge. El primer paso consistía en diferenciar en el relato biográfico el tiempo biográfico-individual, el tiempo de las organizaciones a las cuales el entrevistado hacía referencia (el movimiento sindical, campesino o la organización político-militar) y el tiempo histórico-social. Distinguir las dimensiones temporales permitió, como segundo paso, construir tres niveles de análisis: un primer nivel de prácticas, disposiciones y experiencias individuales, un nivel intermedio de relaciones intersubjetivas “fuertes” y (relativamente) duraderas en el tiempo –instituciones, organizaciones, movimientos sociales– y el tercer nivel de estructuras y campos sociales que condicional las opciones de la acción social.²⁵

²⁴ Las entrevistas con informantes claves fueron más cortas –de 60 a 90 minutos– y con guiones más acotados.

²⁵ Véase, D. Bertaux, *op.cit.*, 1997, pp. 32-47; U. Kelle y S. Kluge, *op.cit.*, 1999, pp. 54-74.

En el tercer paso se buscaba llegar, con base en las trayectorias políticas de los militantes, a hipótesis empíricamente fundadas sobre las estrategias de reproducción y reconversión de los activistas, que apuntan a los mecanismos sociales que generan continuidades y cambios en los mundos sociales del activismo. Se trataba pues de reconstruir las lógicas sociales en las trayectorias para hacer inteligible la articulación entre el itinerario biográfico del individuo, el tiempo histórico-social y las mediaciones organizativas e institucionales (desde la familia, los grupos de pares, la iglesia hasta sindicatos, organizaciones campesinas, cooperativas, etcétera). Para esto había que encontrar un modo de análisis e interpretación que permitiera la articulación entre estructura e historias de vida individuales, pero no a partir de una relación simple de causa-efecto sino introduciendo nociones dinámicas y complejas de causalidad y temporalidad: no se puede presuponer sólo una causa que determina secuencia y futuro, sino una serie de acontecimientos cuyo sentido y eficacia evolucionan a lo largo del proceso.

Prestamos atención a los momentos críticos o decisivos en las biografías –pasajes de una posición a otra, rupturas inesperadas en la trayectoria que exigen estrategias específicas de los agentes– porque partimos del presupuesto que es en esos momentos cuando los agentes se ven obligados a movilizar recursos (sociales, simbólicos y materiales) y energía adicionales para mejorar su posición en el espacio social o evitar un posible descenso. Las trayectorias se dividen entonces entre estos momentos, donde los destinos de los individuos se “bifurcan”, y tramos “tranquilos” que se caracterizan antes que nada por la reproducción de las prácticas.

Pero la comparación de las bifurcaciones no basta para reconstruir las lógicas sociales de las trayectorias individuales. Si bien en todas las biografías hay momentos “tranquilos” y “críticos”, no todos los agentes tienen las mismas posibilidades y recursos para enfrentar los momentos críticos, sea para aprovecharlos o para disminuir su impacto negativo. Por lo tanto, retomé también la idea de una desigualdad “arqueológica” que diferencia los itinerarios biográficos. Hay acontecimientos “fundacionales” –la condición socioeconómica de la familia, el lugar dónde uno nació y estudió, el género– que explican las dinámicas y oportunidades de ascenso o descenso social en un determinado itinerario biográfico. “Desigualdad arqueológica” en el estudio de las trayectorias significa que las ventajas y desventajas, vinculadas a una determinada condición social (clase social, género, etnia), se acumulan a lo largo de la vida y se actualizan en cada momento de bifurcación.²⁶

²⁶Véase, Frédéric de Coninck y Francis Godard, “El enfoque biográfico a prueba de interpretaciones. Formas temporales de causalidad”, Thierry Lulle/Pilar Vargas/Lucero Zamudio (coordinadores), *Los usos de la historia de vida en las ciencias sociales I*, Barcelona, Anthropos, 1998, pp. 251-292.

Representatividad y fiabilidad de las fuentes orales

La interpretación sobre los mecanismos de reproducción del mundo social de la militancia y las estrategias de reproducción social se basa en ocho casos. Esto lleva casi automáticamente a la pregunta clave a la que se enfrenta quien utiliza el relato de vida como método de investigación: ¿Las conclusiones se pueden considerar representativas, dadas los pocos casos en las cuales se apoyan? ¿Cómo se puede asegurar la fiabilidad de las fuentes? Como esto son dudas recurrentes en la investigación cualitativa, vale la pena puntualizar algunos aspectos con respecto a los criterios específicos que confieren validez a estos resultados.

Esta investigación parte de un enfoque etnosociológico, que busca reconstruir mecanismos, relaciones y prácticas sociales, típicos de un determinado mundo social. De acuerdo a Daniel Bertaux, este enfoque significa “estudiar un fragmento particular de la realidad sociohistórica: un objeto social; comprender cómo funciona y cómo se transforma, poniendo el acento sobre las configuraciones de relaciones sociales, los mecanismos, los procesos, las lógicas de acción que los caracterizan.” Sin excluir otras fuentes de información, el relato biográfico es un recurso central de este enfoque porque permite obtener “relatos de prácticas en situación”, por medio de los cuales es posible comprender los respectivos contextos sociales.²⁷

La apuesta que fundamenta el enfoque etnosociológico es la universalidad de las relaciones y procesos sociales correspondientes a una determinada actividad social, por lo cual es posible formular hipótesis sobre esta actividad a partir de la exploración de un microcosmo. El propósito de incluir el análisis de relatos de vida de militantes políticos en esta investigación era explorar, por medio de la comparación y el contraste entre trayectorias políticas individuales y fuentes documentales, las prácticas de participación y militancia política en El Salvador antes, durante y después de la guerra civil para, de esta manera, formular hipótesis sobre las reglas y mecanismos sociales que han caracterizado el mundo social de la militancia revolucionaria en América Central. Los tipos sociales construidos de esta manera, cuentan con una representatividad que no se fundamenta en la frecuencia con la que aparecen en el mundo social –la base de la representatividad medida por la estadística– sino en su capacidad de dar cuenta de las variaciones posibles, de casos extremos y de las relaciones que articulan los casos.²⁸

²⁷ Véase, D. Bertaux, *op.cit.*, 1997, pp. 1-2.

²⁸ Sobre el problema de la representatividad, véase, U. Kelle y S. Kluge, *op.cit.*, 1999, p. 51; P. Thompson, *La voz del pasado. La historia oral*, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1988, p. 142ss.

El otro problema se refiere a la duda sobre la fiabilidad de las fuentes orales. La pregunta por la veracidad apunta tanto al riesgo de la mentira deliberada por parte del entrevistado -y las estrategias para enfrentarlo- como a las tensiones entre memoria, olvido y silencios. El primer punto ha sido tratado de manera exhaustiva por los historiadores con experiencia en historia oral como Paul Thompson o Ronald Fraser, para quienes los recursos que prueban la fiabilidad de una fuente oral son las mismas reglas válidas para examinar cualquier evidencia histórica: buscar la coherencia interna del relato, tratar de hallar la confirmación de los datos en otras fuentes y estar siempre alerta ante posibles desviaciones. Estos autores señalan, además, que es más factible que el sesgo “subjetivo” de la historia oral se manifieste en la reconstrucción de acontecimientos históricos específicos que en la narración de prácticas de la vida cotidiana, “ambientes” ideológicos o percepciones subjetivas.²⁹

Por medio de las entrevistas narrativas buscamos relatos que dieran cuenta de prácticas y percepciones de los militantes en distintos momentos de la historia reciente salvadoreña. Por lo tanto, controlar la fiabilidad de las entrevistas significaba en menor grado verificar los datos sobre acontecimientos concretos -cuyos detalles podíamos consultar en fuentes escritas- sino estar consciente del peligro de caer en una reproducción acrítica de las percepciones subjetivas de los agentes. Esto, a pesar de que compartimos en lo esencial la opinión expresada por Ronald Fraser, en su estudio sobre la Guerra Civil Española que, para complementar la reconstrucción de un proceso histórico, es importante recuperar las percepciones subjetivas de la gente: “Era su verdad, la verdad de la gente lo que [yo] deseaba reflejar. Y lo que la gente pensaba -o pensaba que pensaba- también constituye un hecho histórico.”³⁰ Sin embargo, para explicar un fenómeno social se requiere someter a revisión los recuerdos de la gente, tomando en cuenta que son formulados desde el presente. La verdad subjetiva implica también olvidos, silencios y omisiones.

Los problemas de la memoria, del olvido y del silencio son más complejos de enfrentar desde el punto de vista metodológico y conceptual y nos ubican en la intersección entre disciplinas. El recuerdo, como lo han señalado varios autores, es siempre un proceso activo del agente (individual o colectivo), donde incide tanto el presente como el proyecto futuro. Si bien el peligro de la distorsión del recuerdo por la distancia temporal existe, el olvido es menos probable si se trata de experiencias (agradables y desagradables) muy intensas, o de temas que directamente afectaron,

²⁹ Véase, P. Thompson, *op.cit.*, 1988, p. 117.

³⁰ Ronald Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española*, Barcelona, Ed. Crítica, 2001, p. 21.

importaron e interesaron al interlocutor.³¹ Partimos de la premisa que, al entrevistar a personas que habían sido políticamente activos durante una gran parte del conflicto salvadoreño, y/o después, obtendríamos información valiosa (y excluida de los documentos escritos) para responder a nuestras preguntas de investigación. Esta premisa se cumplió en gran medida, si bien subestimamos el sesgo ideológico que implicaría entrevistar principalmente a militantes de una sola organización (Resistencia Nacional).

Pero el problema de la memoria va más allá de los efectos (naturales) de distorsión del recuerdo por la distancia temporal. Las entrevistas que se realizaron tuvieron como tema un periodo conflictivo y traumático de la historia salvadoreña reciente y todos los entrevistados se sienten “afectados por el pasado”.³² Varios habían pasado un tiempo –desde días hasta años– en la cárcel y todos habían perdido personas cercanas (familiares, amigos, compañeros políticos) como consecuencia de la violencia política. El silencio que resulta de experiencias traumáticas, como por ejemplo tortura, violencia física, campos de concentración o violaciones, etcétera, es muy difícil de enfrentar en una entrevista narrativa porque toca secretos, sensaciones y fantasmas que, por ser dolorosos, resisten a revelarse. Sara Makowski señala al respecto que la imposibilidad de contar el horror, de nombrar lo indecible se incrusta en el orden social y psicológico produciendo disturbios significativos en la transmisión intergeneracional y en la vida cotidiana de las personas. En consecuencia, el silencio se establece como el aliado más certero de la patología y la permanencia del trauma.³³

La imposibilidad de representar el terror se manifestó, en algunas entrevistas, por medio de silencios prolongados que interrumpían el flujo de las palabras; en otras, por medio de generalizaciones abstractas (por ejemplo, “ellos vinieron...”, “ellos mataron...”, etcétera), sin revelar directamente la identidad de los responsables de los actos violentos. En algunas entrevistas la situación y la empatía con la persona entrevistada nos permitió hacer preguntas más específicas para profundizar sobre momentos y experiencias traumáticas, pero por lo general se optó por

³¹ Véase, P. Thompson, *op.cit.*, 1988, pp. 124-135; Acerca del debate sobre la memoria y las entrevistas narrativas en contextos de (pos)guerra civil, véase también, Elisabeth Jean Wood, *Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 33-40.

³² Para Paul Ricoeur la noción “ser-afectado-por-el-pasado” significa tomar conciencia de que los seres humanos no somos agentes de la historia sino “en cuanto que la padecemos”. Esto incluye tanto a las víctimas de la historia, como a los que se consideran agentes activos de la historia, “aunque sólo fuera por los efectos no deseados de sus empresas mejor planeadas.” Véase, Paul Ricoeur, “Hacia una hermenéutica de la conciencia histórica”, Françoise Perus (comp.), *Historia y literatura*, México, Instituto Mora, 1994, pp. 70-122, p. 85.

³³ Véase, Sara Makowski, “Entre la bruma de la memoria. Trauma, sujeto y narración”, *Perfiles Latinoamericanos*, México, No. 21, Diciembre 2002, pp. 143-157, especialmente p. 148.

respetar los límites que el propio entrevistado imponía por medio de sus silencios y respuestas titubeantes. Detectar las tensiones entre memoria y olvido durante la realización de las entrevistas, y en el análisis posterior, nos llevó a reconocer, nuevamente, los límites de la sociología (y de las ciencias sociales en general) para explicar las dimensiones más subjetivas e individuales de la conducta humana.

En este sentido, cabe reiterar que las entrevistas biográficas fueron solamente *una* fuente de información para esta investigación. Para disminuir el riesgo de reproducir, de manera acrítica, las percepciones subjetivas de los entrevistados nos apoyamos, por una parte, en las herramientas conceptuales y, por otra parte, en la comparación y el contraste de los relatos de vida con otras fuentes, tanto orales (entrevistas informativas con académicos e informantes clave) como escritas. Los resultados contribuyeron al análisis de las transformaciones del campo político presentados en los Capítulos II a IV y a los hallazgos sobre las trayectorias posibles, las experiencias, las prácticas y significados particulares de la militancia.

Del análisis a la narración: Relatos biográficos y escritura sociológica

La decisión metodológica de usar el método biográfico como uno de los ejes de la investigación implicó no sólo construir una estrategia analítica en función del material (las historias de vida) y de las preguntas que nos estábamos haciendo; también teníamos que pensar en una forma adecuada de presentación de los resultados que recuperara la dimensión narrativa de los relatos biográficos sin convertirse en un conjunto de anécdotas u otro testimonio político más.

Una de las consecuencias del redescubrimiento de la entrevista narrativa en las ciencias sociales ha sido la reflexión sobre las diversas opciones para presentar los resultados. Resolver esto no es fácil porque la pregunta, qué hacer con las entrevistas en el momento de la escritura, implica dar cuenta de una tensión permanente entre, por un lado, el discurso analítico de las ciencias sociales, que tiende a “aplanar” y “sistematizar” las experiencias, y por otro lado la “voz del otro”; es decir, los discursos que dan cuenta de experiencias singulares, narradas por los habitantes del campo estudiado por los científicos sociales.³⁴

³⁴ Por ejemplo, incluso autores como Hugo Zemelman, quienes pretenden estudiar la realidad social desde los sujetos sociales, se caracterizan por un discurso sumamente abstracto en el cual los sujetos a fin de cuentas “desaparecen”. Sobre el problema de las ciencias sociales para dar cuenta de los sujetos véase, R. Robín, *op.cit.*, 1996, p. 87.

En los últimos años han surgido una serie de propuestas de cómo articular las especificidades de la voz del otro sin que la rigurosidad del análisis científico se pierda. Philippe Lejeune, por ejemplo, hace énfasis en la necesidad de “crear un modo de narración que guarde el sabor y el aspecto que tiene el discurso oral recogido, pero que ofrezca al mismo tiempo la legibilidad y el placer de un relato escrito”.³⁵ Pero si el objetivo es contribuir a la inteligibilidad sociológica e histórica de un fenómeno, “escribir” relatos agradables de leer no nos parece suficiente. Regine Robin, señala en este sentido que el verdadero desafío consiste en hacer emerger al otro sin sacrificar el “sentido de rigurosidad” respecto a la argumentación y la coherencia que caracteriza el discurso propio del campo sociológico.³⁶

Existen dos extremos de la incorporación de las historias de vida al escrito sociológico: como casos individuales o como citas textuales -más o menos largas- que ilustran o confirman los argumentos del investigador. Lo que desaparece en estos textos es la dimensión dialógica de la entrevista: independientemente si el entrevistado conoció al entrevistador anteriormente o no, la entrevista narrativa siempre es el resultado de preguntas y respuestas en una situación de comunicación “cara a cara”. Reconocer esta especificidad de las entrevistas narrativas lleva a una nueva propuesta: en vez de suprimir el carácter dialógico, dar cuenta de la presencia e intervención del entrevistador. Leonor Arfuch sintetiza esta propuesta de la siguiente manera, al enfatizar como postulado que

... (L)o más importante sea la consideración del otro no ya simplemente como un “caso”, por más “arquetípico” que pueda resultar, o como un “informante”, por más que su aporte sea “clave” para la materia que se pretende estudiar, sino como un interlocutor, un personaje, cuya narrativa pueda aportar, en un universo de voces confrontados, a la inteligibilidad de lo social. Un personaje cuya historia, cuya experiencia y cuya memoria interesan por alguna circunstancia, en el marco de un corpus o terreno, más allá de un simple subjetivismo psicologista.³⁷

Con base en esta reflexión decidí incorporar los relatos biográficos de tal forma al texto que permitiera dar cuenta de algunos de los itinerarios biográficos posibles al interior del movimiento revolucionario, así como de los distintos puntos de vista y perspectivas que coexistían, y que siguen coexistiendo en la izquierda salvadoreña hasta el día de hoy. Las voces de los entrevistados se entrecruzan entre sí y contestan al entrevistador al construir en conjunto, aunque con voces

³⁵ Philippe Lejeune, “Memoria, diálogo y escritura”, *Historia y fuente oral*, Barcelona, No. 1, 1989; pp. 33-67, p. 46.

³⁶ R. Robin, *op.cit.*, 1996, p. 87.

³⁷ Leonor Arfuch, *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea*, Buenos Aires, FCE, 2002, p. 201. Véase también P. Bourdieu, et.al., *op.cit.*, 1997.

separadas, una de las narrativas posibles sobre la movilización social, la guerra y la pacificación en El Salvador.³⁸

³⁸ En el Anexo se incluyen las ocho trayectorias y ejemplos para los pasos analíticos. Presentar los relatos por separados tiene la función adicional de permitir al lector comparar y contrastar los itinerarios biográficos.

CAPÍTULO I

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN SOCIAL EN CENTROAMÉRICA:

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS

“Las ciencias sociales viven de los conceptos. Tallarlos es un arte. No necesariamente en el sentido artístico de la palabra, sino en cuanto artesanía, un hacer, como decía Wright Mills. No pueden ser producidos en serie, según la vieja ortodoxia fordista; es necesario tomarlos, uno a uno en su idiosincrasia, en su integridad.”

Renato Ortiz

1.1. Introducción

Señala Renato Ortiz que la continua preocupación de las ciencias sociales por los conceptos se justifica porque a través de ellos se hace visible un determinado recorte de la realidad social y permiten tomar distancia de las nociones del sentido común. Pero para aprovechar la capacidad reflexiva que encierran los conceptos, y las teorías sociales a las cuales ellos apuntan, no se debe concebirlos como un manual que puede aplicarse a cualquier problema de investigación, sino como herramientas intelectuales que permiten construir un problema de investigación.³⁹ Siguiendo estos principios de permanente reflexión sobre los conceptos y su significado, un eje de este trabajo ha sido la recuperación de diversos autores cuyos aportes han dejado sus huellas –algunos más visibles que otros- en el texto final. Este capítulo –escrito al final de la investigación- busca explicitar estas contribuciones, mostrando cómo y en qué forma incidieron en la construcción del objeto de estudio.

En las secciones de este capítulo se exponen los ejes teóricos y metodológicos que orientaron nuestro trabajo. La primera sección está orientada a presentar los presupuestos básicos de la investigación; después dedicamos una sección a la presentación de las vertientes principales del debate sobre las dinámicas y desenlaces de los procesos revolucionarios centroamericanos. Decidimos incluir este “estado del arte” para dar cuenta de que la “página en blanco” no existe, es decir, que la construcción de conocimiento en las ciencias sociales siempre depende de la recuperación de las interrogantes que otros estudiosos dejaron planteadas en sus investigaciones. La siguiente sección presenta los principales debates y conclusiones sobre los procesos revolucionarios y sus desenlaces en Centroamérica que dan cuenta del profundo arraigo de la

³⁹ Véase, Renato Ortiz, *Taquigrafiando lo social*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, pp. 11-23.

violencia política en las sociedades centroamericanas.⁴⁰ Constatar este hecho nos lleva a preguntar por las herramientas conceptuales que puedan servir para explicar la función y el significado de la violencia en los procesos de formación de los actores colectivos. La tercera sección se dedica, por lo tanto, a responder a esta pregunta revisando los principales enfoques sobre la acción colectiva tomando como eje sus conceptualizaciones en torno a la violencia colectiva.

Pero nuestros objetivos de investigación no se limitan a estudiar las razones de ser de los movimientos revolucionarios, sino abordan las transformaciones que sufrieron las prácticas políticas y proyecciones simbólicas de la izquierda después de finalizar las guerras. Para poder responder a esta pregunta complementamos las teorías de la acción colectiva con una serie de hipótesis fundamentadas en el aporte teórico sobre la acción social de Pierre Bourdieu. La última sección de este capítulo especifica con más detalle los aspectos conceptuales y metodológicos bajo los cuales analizamos los relatos de vida de los militantes salvadoreños y que giran en torno a la hipótesis sobre la transformación del campo político salvadoreño a partir de la crisis revolucionaria de fines de los setenta. La transformación del campo político hizo posible la integración de la izquierda armada al sistema político representativo, al mismo tiempo que marginó a otros actores colectivos, como las organizaciones populares y el movimiento sindical anti-gubernamental. Para que pudieran mantenerse como actores en el campo político, ellos se vieron obligados a adaptar y reconvertir sus estrategias políticas, prácticas organizativas y discursos políticos contribuyendo, de esta manera, a la emergencia de nuevas lógicas de acción.

1.2. Algunos principios básicos de la investigación

Conviene especificar qué entendemos por “lógicas sociales de acción”. Un postulado central en las ciencias sociales señala que hay una razón -un sentido- en los actos de los agentes sociales, el cual es posible reconstruir por medio de un análisis científico. Pierre Bourdieu describe la función heurística de esta premisa de la siguiente manera:

Así pues la sociología postula que, en la actuación de los agentes, hay una razón (en el sentido en que se habla de razón de una serie) que se trata de encontrar; y que permite dar razón, transformar una serie de comportamientos aparentemente incoherente, arbitraria, en serie coherente, en algo que quepa comprender a partir de un principio único de un

⁴⁰ Por lo general se ubica el cese de la violencia política en la región en el final de las guerras civiles entre 1990 y 1996. Aunque en 1988 la Contra nicaragüense y el gobierno sandinista firmaron el Acuerdo de Paz de Sapóa no fue hasta la pérdida electoral del FSLN que efectivamente inició el cese al fuego, el 19 de abril de 1990. El cambio de gobierno en Nicaragua aceleró los procesos de negociación y desmilitarización en la región que llevaron a la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador en enero de 1992 y en Guatemala en diciembre de 1996.

conjunto coherente de principios. *En este sentido, la sociología postula que los agentes sociales no llevan a cabo actos gratuitos.*⁴¹

La noción de lógica de acción remite, entonces, al sentido que un acto, o una serie de actos sociales, tienen en un determinado contexto sociohistórico y para un conjunto de agentes. Para el caso del estudio de los movimientos sociales se requiere, por tanto, demostrar que las acciones colectivas de protesta –por más irracionales que parezcan a primer vista– tienen un significado que se revela no exclusivamente en lo que los agentes dicen sobre sus actos, sino en lo que hacen y cómo lo hacen, es decir, en las prácticas y relaciones sociales que ellos construyen. En consecuencia, la búsqueda de recurrencias en actos y situaciones, la puesta en diálogo de la evidencia histórica con los conceptos, que remiten a preguntas de investigación, hipótesis y teorizaciones, permite formular conclusiones –por cierto siempre provisionarias y abiertas a la reformulación– sobre las lógicas sociales, o sea, las reglas, causalidades y estructuras condicionantes del mundo social. Sin embargo, como enfatiza el historiador británico Edward P. Thompson –de cuya obra historiográfica recuperamos este método para reconstruir el sentido de los procesos sociales– no se deben confundir “causalidad” y “condición” con procesos lineales y monocausales o con determinaciones mecánicas⁴² porque los procesos sociales, al ser resultado de la acción social en contextos estructurados, no operan acorde a la racionalidad causal que presupone el análisis científico. En ellos se expresan más bien las racionalidades prácticas de los agentes, desarrolladas en y para un campo o mundo social específico. La construcción reflexiva del objeto de estudio requiere, por lo tanto, no sólo de conceptos empírico e históricamente “fundamentados” sino también de estar consciente de las dificultades que implica estudiar la complejidad de los fenómenos sociales a partir de sus racionalidades propias. Esto significa aceptar que el razonamiento científico –la “lógica lógica” como la denomina Pierre Bourdieu– nunca permite aprehender completamente el sentido práctico que rige las acciones y relaciones sociales en la vida cotidiana.⁴³

Señalamos en el párrafo anterior que el sentido práctico de la acción no puede reconstruirse exclusivamente de las opiniones de los propios agentes. Esto se debe a los “discursos sociales”, es

⁴¹ P. Bourdieu, “¿Es posible un acto desinteresado?”, *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Barcelona, Anagrama, 1997, p. 140 (la cursiva es nuestra).

⁴² Nuestras reflexiones sobre las lógicas sociales de acción se basan principalmente en las propuestas de Pierre Bourdieu y Edward P. Thompson. Véase, P. Bourdieu, *op.cit.*, 1997, y para revisar la noción de “lógica del proceso histórico” de Thompson, véase Edward P. Thompson, *Das Elend der Theorie. Zur Produktion geschichtlicher Erfahrung [La miseria de la teoría. Sobre la producción de la experiencia histórica]*, Frankfurt/Main, Campus, 1980, p. 80-96.

⁴³ La “lógica lógica” corresponde para Bourdieu al razonamiento científico, a diferencia de la lógica práctica que rige las acciones y relaciones sociales en la vida cotidiana. Véase P. Bourdieu, *op.cit.*, 1997, p. 148.

decir, las prenociones subjetivas, estereotipos y prejuicios que los agentes producen y reproducen constantemente sobre diversos fenómenos sociales y su participación en ellos. Pierre Bourdieu señalaba en 1967 al respecto que “tal vez la maldición de las ciencias del hombre sea la de ocuparse de un objeto que habla.”⁴⁴ Y que al hablar, habría que añadir, valora y opina sobre lo que hace. Esto tiene sus ventajas porque es posible, como investigador, salir a la calle y preguntar directamente a la gente qué es lo que hacen y cómo lo hacen, pero también implica la tentación –y por eso Bourdieu habla de una “maldición”- de reproducir los “discursos sociales” sobre el fenómeno estudiado al querer sacar las explicaciones y conclusiones directamente de la boca de los informantes. Se requiere, entonces, una atención especial –la llamada “vigilancia epistemológica”- para reconstruir las lógicas sociales que rigen los actos y que no suelen ser tan transparentes como los discursos de los actores sociales y de sus ideólogos hacen presuponer. Si no, la investigación corre el peligro de reproducir simplemente el sentido común de una época o de un grupo social.

La tentación de mezclar las explicaciones de los informantes con las preferencias teóricas o ideológicas –una sensación muy conocida para antropólogos y sociólogos-⁴⁵ se ha reflejado de distintas maneras en los estudios sobre los actores colectivos. Dependiendo de las preferencias ideológicas del investigador, la historia de un movimiento social puede presentarse como el relato heroico del ascenso y la caída de un sujeto colectivo –representado en una o varias organizaciones-; como una conspiración de pequeños grupos que buscan manipular a determinados sectores sociales; o como un conjunto de pequeños relatos y “voces bajas” de la historia que confluyeron en un movimiento. Probablemente más que en otras problemáticas estudiadas por las ciencias sociales, el análisis de las causas y consecuencias de la movilización social tiende a trascender debates académicos para mezclarse con inquietudes políticas. Caso emblemático de ello son los debates en torno a las clases sociales, cuya reconstrucción histórica permitiría observar la transferencia de posicionamientos ideológicos a los debates sobre la vigencia o no de determinadas categorías.⁴⁶

⁴⁴ P. Bourdieu, et. al. *El oficio del sociólogo*, México, Siglo XXI, 2002, (23ª Edición), p. 57.

⁴⁵ En la antropología el efecto de sumergirse a la subcultura estudiada hasta asumir sus valores y prácticas como propios se conoce como “going native”. Es un efecto no deseado del trabajo de campo porque anula las posibilidades de construir conocimiento a partir de tomar distancia, problematizar y contextualizar las propias observaciones. Bourdieu propone la “vigilancia epistemológica” como estrategia para controlar este efecto. La revisión de la evidencia empírica a partir del contraste y la comparación con los conceptos y otras fuentes forma parte de la vigilancia epistemológica.

⁴⁶ Un agente que incide también en la elaboración de categorías sociales, como la de clase social, es el Estado y especialmente las instituciones encargadas de las políticas sociales. Véase, Mike Savage, *Class Analysis and Social Transformation*, Buckingham/Philadelphia, Open University Press, 2000, pp. 3-22.

Así, la tradición de pensamiento que se inspiró en la obra de Karl Marx y la praxis política de los movimientos socialistas y comunistas, encontró una de sus motivaciones por investigar a las clases sociales en la preocupación política por esclarecer las potencialidades de los trabajadores y trabajadoras de convertirse de una clase en sí -agregados de individuos con condiciones de vida y de trabajo similares- en una clase para sí -un movimiento sociopolítico con la fuerza y la mística para transformar la sociedad. A esta perspectiva “objetivista”, que priorizaba el estudio de las estructuras por encima de las identidades,⁴⁷ se opusieron otras escuelas teóricas que cuestionan las premisas del análisis marxista sobre el potencial transformador de la clase obrera, argumentando la falta de fundamentos empíricos, su carácter ideológico o las transformaciones económicas y sociales de las últimas décadas, subsumidas bajo el término de *globalización*. Para estos enfoques “subjetivistas” el movimiento obrero funciona como un ejemplo negativo cuyos defectos sirven para subrayar el carácter progresista y antiautoritario de los “nuevos” movimientos sociales, como el de las mujeres, indígenas o de derechos humanos.⁴⁸ En América Latina, las tesis sobre los Nuevos Movimientos Sociales encontraron un eco importante entre los estudiosos de las transiciones a la democracia y el papel de la sociedad civil en América Latina. Para estos autores los movimientos sindicales y agrarios, basados en posiciones estructurales y solidaridades de clase, han perdido fuerza política y legitimidad social y actúan más bien como fuerzas conservadoras, corporativas y burocratizadas.

⁴⁷ Un autor clave en esta línea de argumentación es, sin duda, Giovanni Arrighi. Véase, por ejemplo, G. Arrighi, “Siglo XX: Siglo marxista, siglo americano. La formación y la transformación del movimiento obrero mundial”, *New Left Review*, Madrid, No. 0, 2000, pp. 7-46; Véase también Ronaldo Munck, “Trabajadores y globalización. Resultados y Perspectivas”, *Nueva Sociedad*, Caracas, No. 158, noviembre-diciembre de 1998, pp. 64-76. Estos autores argumentan que las transformaciones estructurales del capitalismo globalizado no han abolido el conflicto estructural de clase pero han debilitado los movimientos sindicales nacionales, compuestos mayoritariamente por trabajadores masculinos y cualificados. Procesos como la mercantilización capitalista de todas las relaciones y espacios globales, el sometimiento de crecientes sectores de la población mundial a relaciones asalariadas y la precarización del trabajo formal han producido un cambio en la composición social de la clase obrera –hoy hay más mujeres, jóvenes e inmigrantes que durante el predominio del modelo fondista en el Siglo XX- con consecuencias importantes para la construcción de las identidades colectivas. El sindicalismo debe, por lo tanto, adaptar sus prácticas de lucha y de organización a las nuevas circunstancias y tomar los nuevos sectores laborales como referentes para la elaboración de su discurso programático y representaciones simbólicas.

⁴⁸ Véase, Alain Touraine, *Crítica de la Modernidad*, Buenos Aires, FCE, 1994, pp. 237-238. De acuerdo al sociólogo francés y otros teóricos de la vertiente de los Nuevos Movimientos Sociales, con las transformaciones recientes de la sociedad industrial –la modernización tecnológica y de las comunicaciones y la pérdida de relevancia del Estado-, han emergido nuevos sujetos sociales, que no se agrupan a partir de conflictos generados en el espacio de la producción y el mundo del trabajo sino a partir de conflictos culturales e identitarios que quieren recuperar la autonomía de sus “mundos de la vida” en contra de las prácticas homogeneizadoras y controladoras de las instituciones estatales y privadas. Para la versión latinoamericana véase, Manuel Antonio Garretón, “La transformación de la acción colectiva en América Latina”, *Revista de la CEPAL*, Santiago de Chile, No. 76, abril de 2002, pp. 7-24. Véase también Philip Oxhorn, “The Social Foundations of Latin America’s Recurrent Populism: Problems of Popular Sector Class Formation and Collective Action”, *Journal of Historical Sociology*, New York, Vol. 11, No. 2, junio de 1988, pp. 212-246.

Señalamos estas diferencias como ejemplo de que las posiciones sobre la constitución de los sujetos colectivos dan cuenta de dos escuelas dominantes en las ciencias sociales –el objetivismo (o estructuralismo) y el subjetivismo-. Éstas se han reflejado también en los debates sobre las razones de ser de la crisis política en Centroamérica, sus desenlaces y los cambios y continuidades en las formas de acción colectiva posteriores a las guerras civiles. Como se verá en la siguiente sección, las dos vertientes produjeron aportes valiosos para entender las dinámicas de la movilización política en la región, pero también vacíos explicativos. Esto se debe a que cada una de las posiciones si bien ayuda a encontrar coherencia y “lógica” en una serie de actos, al excluir la otra posición, tiende a reducir la complejidad de lo social a una falsa oposición entre una visión de la acción colectiva como producida por las estructuras y otra que la visualiza como resultado de la construcción intersubjetiva de sentido. Pero en la realidad social las dos posturas corresponden a dos momentos en un mismo proceso de formación de subjetividad y sujetos.⁴⁹ En este sentido, la siguiente sección, dedicada a recuperar los aportes principales de la discusión sobre la movilización social en Centroamérica, busca recuperar las respuestas y visiones que puedan servir como insumos y sugerencias para formular una propuesta conceptual propia que logre incorporar al análisis tanto el momento “objetivo” como “subjetivo” de la acción colectiva.

1.3. ¿Estructuras o voluntades? Los procesos revolucionarios y sus desenlaces en Centroamérica

Rompería los límites de este capítulo introductorio presentar un estado del arte exhaustivo de todos los diagnósticos y preocupaciones que se produjeron a partir de la crisis política de los años setenta en Centroamérica, dada la proliferación de estudios sobre las distintas facetas (políticas, socioeconómicas, culturales) de esta coyuntura. Por tanto el propósito de este apartado es mucho más modesto: busca construir un mapa tentativo que de cuenta de las líneas generales del debate, los principales puntos de convergencia y divergencia, así como argumentos y teorizaciones recientes sobre las causas de los procesos revolucionarios en la región y la coyuntura actual.

Hacia una conceptualización estructural del sujeto de la revolución

Como señalamos en el apartado anterior, el uso de determinados conceptos y teorías en los debates sobre la acción colectiva en Centroamérica da cuenta de que éstos no se movieron en el vacío sino fueron fuertemente influenciadas por las tendencias y “modas” intelectuales de las ciencias sociales.

⁴⁹ Véase, P. Bourdieu, “¿Cómo se hace una clase social? Sobre la existencia teórica y práctica de los grupos”, *Poder, Derecho y Clases Sociales*, Bilbao, Ed. Descleé de Brouwer S.A, 2000, p. 102.

Al mismo tiempo, desde la perspectiva actual también se puede constatar el estímulo de los acontecimientos regionales –la revolución sandinista, las luchas sociales en El Salvador y Guatemala, la regionalización de los conflictos internos y la intervención estadounidense- para que investigadores centroamericanos y no-centroamericanos empezaran a analizar las modificaciones en la estructura económica y los procesos políticos en la región.⁵⁰

Las primeras teorizaciones sobre lo que estaba sucediendo en Centroamérica, hechas al calor de la coyuntura, privilegiaban factores estructurales para explicar el desencadenamiento de la crisis regional. Según estos estudios, el desarrollo desigual y excluyente del capitalismo agroexportador, el autoritarismo de las clases dominantes y la violencia del Estado habían generado las condiciones objetivas y subjetivas para la radicalización política de un segmento considerable de la población en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Lo que en ese momento llamó la atención a investigadores como Carlos Vilas o Edelberto Torres-Rivas fue la movilización anti-gubernamental de sectores populares que anteriormente no se habían expresado políticamente, y que sorprendió tanto por su masividad como por su radicalidad.

En estos análisis, definir la naturaleza de la crisis política centroamericana y del sujeto político contrahegemónico jugaba un papel primordial. Se partía de un concepto de la revolución en los países periféricos como un proceso político y social que, dado el subdesarrollo y la dependencia, tenía que resolver el problema de la democracia, del desarrollo económico, de la igualdad e integración social. La presencia de los intereses estadounidenses en Centroamérica determinaba, a la vez, el carácter antiimperialista de la revolución. Los autores de estos primeros debates utilizaban la noción de pueblo para nombrar los actores sociales de la movilización porque permitía contar con una denominación común para todos los actores agrupados y movilizadas en torno al proyecto revolucionario donde el eje articulador de las luchas no era el conflicto capital-trabajo sino el enfrentamiento con el Estado. También se usaba el concepto de “sujeto popular-revolucionario” para hacer referencia a tres dimensiones: *condiciones heterogéneas de existencia* caracterizadas por

⁵⁰ A modo de ejemplo –porque hay muchos textos- citamos algunos trabajos de esta primera época que buscaron visualizar las dinámicas y posibles desenlaces de la crisis política. Entre los primeros textos se encuentran los artículos publicados en Pablo González Casanova (coord.), *América Latina: Historia de Medio Siglo. Centroamérica, México y el Caribe*, Tomo 2, México, Siglo XXI, 1981; v.v.A.A., *Centroamérica: una historia sin retroque*, México, El Día en libros/Instituto de Investigaciones Económicas, 1987; De mucha relevancia para iniciar la reflexión sobre el tema fueron los trabajos de Edelberto Torres-Rivas: Edelberto Torres-Rivas, *Centroamérica: La Democracia Posible*, San José/Costa Rica, EDUCA, 1987. Una serie de estudios monográficos permitieron conocer con mayor detalle los casos nacionales. Véase, por ejemplo, Carlos Rafael Cabarrús, *Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador*, México, Ediciones de la Casa Chata, 1983; Sara Gordon, *Crisis política y guerra en El Salvador*, México, Siglo XXI, 1989.

relaciones socioeconómicas ambiguas y precarias, *subalternidad política* ante el bloque de poder oligárquico y *compromiso* con el proyecto revolucionario-popular representado por los grupos guerrilleros.⁵¹

El uso académico de este término se facilitaba porque los mismos revolucionarios lo adoptaron como signo distintivo para, por una parte, marcar su diferencia frente al bloque de poder, conformado por las oligarquías clasistas y racistas, las Fuerzas Armadas y los representantes del gobierno estadounidense y para aglutinar discursivamente a un conjunto de actores sociales heterogéneos. Por otra parte expresaba un sentido de época: el “sujeto político de la revolución centroamericana”⁵² se representaba como un sujeto sin claros referentes clasistas o étnicos (con excepción de Guatemala). Estas representaciones, difundidas en canciones, entrevistas, testimonios y biografías no tomaron en cuenta diferencias al interior de los movimientos y entre países.

¿Cómo se visualizó, en estos análisis, la relación entre grupos guerrilleros y organizaciones populares? Según Torres-Rivas, bajo la conducción de las organizaciones guerrilleras se unificaban los actores movilizados independientemente de sus diferencias sociales, políticas e ideológicas, producto de la heterogeneidad social y el atraso del capitalismo centroamericano. Esta dirección fue posible gracias a una serie de factores: En primer lugar, los grupos guerrilleros, al mismo tiempo que lograron “interpelar” ideológicamente a una amplia gama de agentes populares involucrados en distintos conflictos sociopolíticos -luchas agrarias por la repartición de las tierras, luchas por la igualdad social, la democratización política y la soberanía nacional- construyeron una identidad política nueva y singular. En segundo lugar, un factor distintivo de la nueva subjetividad política fue el acercamiento entre activistas guerrilleros y sectores radicalizados de la iglesia católica, lo cual produjo un marco de referencias políticas que combinaba la fe religiosa con principios marxistas. En tercer lugar, en términos organizativos, el “movimiento popular-revolucionario” integraba organizaciones sindicales y campesinas anti-gubernamentales, Comités Eclesiales de Base, organizaciones estudiantiles etcétera-, a Frentes de masas o Bloques que resolvían la dispersión de la acción colectiva por medio del vínculo organizativo con las organizaciones armadas.⁵³

⁵¹ E. Torres-Rivas, *op.cit.*, 1987, pp. 125-126. En este mismo sentido, Carlos Vilas recupera en sus escritos sobre Nicaragua la noción de “sujeto popular” para referirse al conjunto de actores que participaban en la revolución sandinista. Véase, Carlos M. Vilas, “El sujeto de la insurrección popular sandinista”, *Cuadernos políticos*, México, No. 42, enero-marzo de 1985, pp. 32-53.

⁵² E. Torres-Rivas, *op.cit.*, 1987, p. 126.

⁵³ *Ibíd.*, 1987, p. 128.

¿Pero cuáles fueron las condiciones de posibilidad para este acercamiento singular entre organizaciones armadas y el movimiento popular? Las primeras explicaciones privilegiaron los factores estructurales: Para Carlos Vilas el estudio de los procesos revolucionarios pasa por estudiar el modo en que los procesos estructurales –económicos, ideológicos e institucionales- operaban en la vida de la gente y cómo la gente experimentaba, en su cotidianidad, conceptos abstractos como explotación, corrupción o violencia política. Si en Centroamérica durante los años setenta un segmento de la población dejó de buscar soluciones dentro del orden social existente y apostó a la acción colectiva radical, esto se debió a las vivencias cotidianas con la exclusión social, discriminación étnica y arbitrariedad de los representantes del Estado, junto con la poca efectividad de las prácticas políticas legales. La “interpelación por la ideología popular-revolucionaria” (Torres-Rivas) funcionó, de acuerdo a Vilas, porque ofreció a la gente un marco cognitivo y una identidad colectiva –lo popular- para interpretar estas experiencias.⁵⁴

Estas discusiones tuvieron el mérito de llamar la atención sobre la heterogeneidad social del movimiento revolucionario centroamericano. También dan cuenta del esfuerzo por superar tanto las teorizaciones conspirativas, que buscaron las causas de los procesos revolucionarios centroamericanos en la intervención del comunismo internacional, como los enfoques deterministas basados en nociones esquemáticas de clases sociales para explicar la emergencia de nuevos actores colectivos. Pero no lograban superar la dicotomía entre, por un lado, los movimientos sociales, considerados casi resultados “espontáneos” de los cambios estructurales, y una voluntad política, personificada en grupos guerrilleros, que pudieron articular, cohesionar y condensar la movilización social. De acuerdo a esta conceptualización, la voluntad política de los grupos guerrilleros *representaba* los intereses colectivos generales en el ámbito de lo político, al interpelar las luchas sociales y unificarlas por medio de su proyecto ideológico. Pero no problematizaba cómo se construía socialmente esta representación.⁵⁵

⁵⁴ Véase, C. M. Vilas, *op.cit.*, 1985 y *Mercado, Estados y Revoluciones. Centroamérica 1950-1990*, México, UNAM/CII-H, 1994. Aunque Vilas abandonó el concepto de “sujeto popular histórico” en escritos posteriores, sí mantiene la categoría “popular” para caracterizar a los actores y las demandas de las movilizaciones sociales de años recientes. Para Vilas lo popular hace referencia, hoy en día, tanto a las dimensiones económicas de explotación como a las dimensiones políticas y culturales de las luchas por la democratización y la ciudadanía e implica manifestar oposición a las diversas formas de dominación y explotación. Véase, C. M. Vilas, “Participation, Inequality and the Whereabouts of Democracy”, Douglas A. Chalmers, et.al., *The New Politics of Inequality in Latin America. Rethinking Participation and Representation*, New York, Oxford University Press, 1997, pp. 3-42, p. 6.

⁵⁵ Por ejemplo, Vilas señaló en su momento, al analizar la revolución sandinista, que el “pueblo” se convirtió en “sujeto popular histórico” cuando se reconoció y tomó como punto de referencia al FSLN. Véase, C. Vilas, *op.cit.*, 1985.

En los escritos de Torres-Rivas y de Vilas sucede una cosa paradójica: pese a que su *tópico central* es el pueblo como el sujeto de la revolución centroamericana, este sujeto se difumina entre las líneas de sus trabajos hasta desaparecer entre las dinámicas de las estructuras económicas y políticas y la acción conciente de las fuerzas políticas –principalmente la guerrilla, el Estado y las Fuerzas Armadas. Esta visión, aunque ofrece herramientas conceptuales adecuadas para reconstruir las causas estructurales, económicas, políticas e ideológicas de la movilización, poco permite visualizar las relaciones sociales que establecían los diferentes agentes entre sí, ni pensar la dimensión subjetiva y práctica de la movilización social. El problema de la representación de los intereses sociales por actores políticos –es decir, el complejo proceso de delegación de poder de decisión en un individuo o una institución- que forma parte de la mediación entre subjetividades individuales y la acción colectiva desaparece en un planteamiento que enfatiza el movimiento de las estructuras y la iniciativa de las fuerzas políticas.⁵⁶

De actores, voluntades y estrategias

Barrington Moore señaló en su estudio sobre las bases sociales de la rebelión que los cambios estructurales –como por ejemplo un deterioro rápido de las condiciones de vida o una crisis de las instituciones del Estado- pueden producir malestar individual o social pero no generan necesariamente una movilización política de protesta. Para que suceda esto, según el sociólogo norteamericano, la gente necesita percibir que su condición es consecuencia de la injusticia humana, una situación de “agravio moral” que no debe, no puede y no necesita soportar.⁵⁷ En la transformación de la percepción social de lo existente como un hecho inevitable a un sentimiento políticamente efectivo de indignación moral, los “agentes externos” juegan un papel estratégico. Agitadores y activistas, muchas veces provenientes de otros lugares o estratos sociales, difunden entre la población de un determinado lugar nuevos principios éticos y políticos que cuestionan las mitificaciones dominantes sobre el carácter inevitable de la injusticia, organizan actos de protesta y proponen nuevos horizontes históricos para la acción política.⁵⁸

⁵⁶ Sobre todo en los planteamientos de Edelberto Torres-Rivas de principios de los años ochenta se nota la influencia de Althusser: Es la “interpelación” de las luchas sociales por la ideología popular-revolucionaria de los guerrilleros que convierte a actores heterogéneos en el sujeto de la revolución centroamericana. Véase, E. Torres-Rivas, *op.cit.*, 1987.

⁵⁷ Véase Barrington Moore, *Ungerechtigkeit. Die sozialen Ursachen von Unterordnung und Widerstand [Injusticia. Las bases sociales de la obediencia y la resistencia]*, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1987, p. 605.

⁵⁸ Véase, *Ibid.*, pp. 622-623.

Partiendo de este planteamiento, que permite introducir la interrogante por los agentes de la movilización política, la pregunta central de una serie de investigaciones giraba en torno a las estrategias que emplearon los grupos guerrilleros para organizar y movilizar a un segmento de sus respectivas sociedades. Entre los primeros textos que ofrecen algunas pistas sobre este fenómeno se encuentran los ensayos periodísticos sobre El Salvador y Nicaragua que Adolfo Gilly elaboró entre 1979 y 1981. Para Gilly, la radicalización del movimiento de masas en El Salvador tenía que ver con factores estructurales y acontecimientos políticos como la crisis del Mercado Común Centroamericano, la escasez de tierra agudizada con la expulsión de campesinos de origen salvadoreño de Honduras después de la “guerra de fútbol” de 1969 y la deslegitimación de las instituciones estatales a raíz de los recurrentes fraudes electorales. Pero para que estos acontecimientos tuvieran un efecto político sobre la consciencia de los sectores populares organizados era decisiva la capacidad de las organizaciones guerrilleras de ganarse la dirección de las más importantes organizaciones campesinas y sindicales anti-gubernamentales. Después de 1975, estas organizaciones se integraron a los frentes de masas y contribuyeron al estallido de la crisis política de 1979 y 80. Los grupos guerrilleros lograron obtener el liderazgo en estos frentes mediante la participación activa de sus militantes en las organizaciones que desplazaron el reformismo y reclutaron dirigentes sindicales y campesinos a las filas guerrilleras. Por medio de esta “fusión” emergió un nuevo tipo de dirigente y activista social, familiarizado con formas de acción directa como formas de lucha, con una formación política radical, y acostumbrado al trabajo político y gremial en condiciones semi-clandestinas y clandestinas.⁵⁹

Los ensayos de Gilly sobre la revolución nicaragüense permiten apreciar las diferencias con el caso salvadoreño. En Nicaragua, con instituciones estatales precarias y una organización popular incipiente, la movilización social de la insurrección popular de 1979 fue canalizada por medio de la actividad de los cuadros políticos del FSLN y el control de Estado revolucionario a las organizaciones de masa sandinista. Los cuadros del partido, a quienes la Dirección Nacional del FSLN encomendó la tarea de construir una estructura corporativa, se habían destacado generalmente en la lucha contra la dictadura somocista, pero pocos de ellos contaron con experiencias sindicales o gremiales. La hegemonía sandinista sobre la organización popular se obtuvo, entonces, no sólo por medio de la autoridad moral del FSLN, adquirida por su papel destacado en la lucha contra Somoza, sino también porque el Sandinismo se apoyó en el aparato estatal para marginar a otras fuerzas políticas presentes en el movimiento popular. La lucha por la hegemonía se expresó claramente en el sector manufacturero, donde la formación de la CST se llevó

⁵⁹ Véase, Adolfo Gilly, *Guerra y política en El Salvador*, México, Ed. Nueva Imagen, 1981, pp. 49-70;

a cabo a costa de otros grupos sindicales de izquierda no sandinista, cercanos al PSN o Frente Obrero (maoísta).⁶⁰

Las prácticas políticas analizadas por Gilly corresponden, con sus particularidades nacionales, a una estrategia empleada por las organizaciones guerrilleras en Centroamérica y que se diferenciaba sustancialmente del foquismo guevarista: por medio de la participación en las llamadas organizaciones de masas buscaban radicalizar políticamente el descontento social y dirigirlo en contra del orden estatal establecido. Para entender las dinámicas nacionales de los procesos revolucionarios resulta clave, entonces, entender el pensamiento estratégico de estos grupos, es decir, sus objetivos, sus capacidades para leer el momento político y para tomar decisiones.

El planteamiento elaborado por Gilly a principios de los ochenta sobre la iniciativa y voluntad de los actores “subalternos” apunta a una línea de investigación que otros autores retomaron y sistematizaron posteriormente. Por ejemplo, Hugh Byrne compara y contrasta las estrategias políticas y militares de los actores políticos principales del conflicto salvadoreño, es decir, la insurgencia armada, el gobierno salvadoreño y el gobierno estadounidense. En su estudio la expresión abstracta de la “voluntad política” adquiere una concreción histórica porque recupera las lógicas de la acción política en los objetivos, las “grandes estrategias” y los virajes tácticos de los actores políticos en distintos momentos del conflicto. Según el argumento central de Byrne, las partes del conflicto lograron casi siempre neutralizar las acciones de sus adversarios, pero fracasaron en el objetivo principal de aniquilar al enemigo. El empate político y militar producido por estas estrategias “de neutralización” se evidenció en la ofensiva militar del FMLN en noviembre de 1989, cuando las fuerzas armadas no lograron derrotar el ejército insurgente, pero tampoco se dio la insurrección popular que la guerrilla había anunciado como consecuencia de su ofensiva. Esta situación convenció a las partes del conflicto de que había que finalizar la guerra a través de una negociación política.⁶¹

Un punto interesante de este enfoque, centrado en las decisiones estratégicas de los actores es la idea de “efectos no intencionales” de la acción. Por ejemplo, la apertura controlada del sistema político a la participación electoral de la oposición, introducidos en los años ochenta como una

⁶⁰ FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional. CST: Central Sandinista de Trabajadores, PSN: Partido Socialista Nicaragüense. Véase, A. Gilly, *La nueva Nicaragua (antiimperialismo y lucha de clases)*, México, Ed. Nueva Imagen, 1980, especialmente pp. 55-63.

⁶¹ Hugh Byrne, *El Salvador's Civil War. A Study of Revolution*, London/Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1996. Véase también, Irene Sánchez Ramos, *Tiempo político y movimientos armados. El FMLN en El Salvador 1970-1992*, Tesis de Maestría, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.

medida contrainsurgente para deslegitimar a la insurgencia armada, al agotarse tanto la vía revolucionaria como la del exterminio para resolver el conflicto político, se convirtió en la vía de acceso al poder político por excelencia, reconocida en los años noventa tanto por la derecha como la izquierda.⁶²

Byrne muestra con su análisis la relevancia del “factor subjetivo”, que incluye los deseos y las metas de los actores, sus estrategias y capacidades organizativas para implementarlas, tanto en el desencadenamiento de un proceso de movilización política, que desembocó en la guerra civil, como en la finalización del conflicto por medio de las negociaciones. Pero sólo contempla las dimensiones más formales tanto de la acción política -la guerra y las negociaciones políticas- como de los actores políticos -el gobierno salvadoreño y estadounidense, el FMLN y las fuerzas armadas salvadoreñas- que contaban con un discurso político acabado y un cierto grado de institucionalización.

Pero como ya apuntaban los análisis de coyuntura de Gilly, los movimientos revolucionarios representaban también otros agentes, cuyo perfil organizativo, al no participar en el ámbito formal de lo político, era menos definido. ¿A qué apostaron los campesinos, sindicalistas o pobladores de los tugurios que apoyaron los proyectos insurgentes? ¿Qué visualizaron ellos en los proyectos popular-revolucionarios? Los estudios que buscan responder a estas preguntas -por lo general más cercanos a la antropología que a la sociología y las ciencias políticas- revelan la iniciativa propia de estos agentes para acercarse y apoyar a las organizaciones guerrilleras.

Un estudio pionero dentro de esta vertiente es, sin duda, el trabajo del antropólogo Carlos Rafael Cabarrús sobre el proceso de radicalización campesina en la zona central de El Salvador y la construcción de la organización campesina contestataria FECCAS entre 1968 y 1979. Cabarrús, no obstante de mantener una perspectiva marxista-estructuralista, matiza las explicaciones de la movilización campesina como un resultado de la pauperización campesina. Para Cabarrús la disposición campesina para participar en una organización contestataria se gestó a partir del “desbloqueo ideológico”, producido por la labor pastoral de los sacerdotes de la parroquia de Aguilares.⁶³ Basándose en la teología de la liberación, los sacerdotes introdujeron en las comunidades campesinas nuevas interpretaciones religiosas y nuevas prácticas organizativas orientadas a la defensa gremial campesina. Este desbloqueo ideológico creó las condiciones

⁶² Véase también, Ana Sofía Cardenal y Salvador Martí i Puig, “Introducción”, A. Sofía Cardenal y S. Martí i Puig, *América Central, las democracias inciertas*, Madrid, Ed. Tecnos, 1998, pp. 17-31, pp. 23-24.

⁶³ Aguilares es un municipio en el departamento San Salvador, a 37 Km. al norte de la capital.

subjetivas para el crecimiento de la organización campesina contestataria FECCAS y la “conversión política”, de sus activistas campesinos en militantes del BPR. Aunque Cabarrús reconoce el papel estratégico de los “agentes externos” –especialmente de los sacerdotes- en la preparación de la movilización campesina, destaca la capacidad campesina de *apropiarse* de las organizaciones existentes y *crear* nuevas instituciones. Para él, los campesinos optaron por FECCAS y las FPL porque vieron en estas organizaciones una vía para luchar por demandas gremiales y defenderse de los hostigamientos de la organización paramilitar ORDEN.⁶⁴

El estudio de Cabarrús llega a la conclusión que los campesinos salvadoreños, que optaron por la rebelión, lo hicieron con base en una decisión racional. Pero Cabarrús interpreta la racionalidad percibida por él en las entrevistas con los campesinos no en términos individuales sino como los “verdaderos” intereses de clase, cuyo reconocimiento se hizo posible gracias a una reinterpretación radical de la fe católica.⁶⁵ En cambio, la decisión de quienes optaron por participar en ORDEN pudo haber sido racional en términos individuales pero, según Cabarrús, no en términos colectivos. En este punto, la interpretación de Cabarrús da cuenta del ambiente de época en la cual realizó su investigación: al considerar la apatía campesina o el apoyo a ORDEN como expresiones de una falsa consciencia adopta de manera unívoca una posición marxista en la interpretación. Quince años después –a mediados de los años noventa- Hugh Byrne interpreta estos mismos resultados de acuerdo a los postulados de la elección racional. Según él, la decisión campesina de participar en el movimiento revolucionario, en ORDEN, o permanecer neutrales, se basó en cálculos racionales sobre los costos y beneficios de cada opción, así como las posibilidades de éxito. En esta decisión, destaca Byrne, la presencia de sacerdotes y activistas de las organizaciones guerrilleras jugó un papel importante porque estos “emprendedores políticos” estaban dispuestos a “invertir” tiempo y recursos para coordinar a los demás y “producir” bienes colectivos.⁶⁶

Las interpretaciones politológicas del cálculo económico que encontramos en el estudio de Byrne, y que es característico de las investigaciones sobre la acción colectiva en los años noventa, visualizan

⁶⁴ FPL: Fuerzas Populares de Liberación. FECCAS: Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, BPR: Bloque Popular Revolucionario, ORDEN: Organización Democrática Nacionalista. Véase, C. R. Cabarrús, *op.cit.*, 1983. Como señalaremos en el Capítulo II, en la zona donde surgió FECCAS había también otras organizaciones radicales y reformistas que competían por los apoyos sociales de los campesinos.

⁶⁵ Por cuestiones de espacio reducimos el planteamiento de Cabarrús a sus aspectos esenciales. En realidad el autor asume una posición más diferenciada, señalando la articulación entre mediaciones ideológicas, redes sociales de pertenencia e intereses materiales para que un segmento de los campesinos en la zona estudiada optara por participar en ORDEN y otro por participar en FECCAS. Véase, *Ibid.*, p. 254ss.

⁶⁶ Véase, H. Byrne, *op. cit.*, 1996, p. 32.

a un agente que invierte en el “mercado” de las opciones políticas con base en un cálculo de éxito. Pero es sumamente problemático comparar la motivación de apoyar o no apoyar a una organización radical –lo cual implicaba en el contexto de los setenta arriesgar la propia vida y la de los familiares– con una lógica económica de mercado, como si se tratase de la decisión de comprar o no comprar un determinado producto. Partiendo de un cuestionamiento a estos enfoques, basados en la teoría de la elección racional, el estudio de Elisabeth J. Wood enfatiza aspectos de la movilización social que apuntan a racionalidades basadas en convicciones y valores y no en un cálculo económico.⁶⁷ Su estudio resulta novedoso, entre otras cosas, porque la investigación de campo fue realizada a finales de los años ochenta y principios de los años noventa, cuando el cese de la violencia política facilitó el acceso a las zonas de conflicto. El estudio de Wood da cuenta de las nuevas posibilidades que se abrieron a la investigación social en la región, una vez terminadas las guerras, fuese porque se facilitó la realización de investigaciones *in situ*, fuese porque el debilitamiento de viejas lealtades políticas permitió formular nuevas preguntas e indagar sobre problemas omitidos anteriormente por motivos ideológicos o estratégicos.

Elisabeth Wood, con base en sus investigaciones en la región central y oriente de El Salvador, propone un modelo que enfatiza convicciones y valores para explicar la movilización campesina. Ella concluye que los campesinos tomaron la decisión de involucrarse con la guerrilla no sólo con base en un cálculo racional sobre los posibles costos y beneficios de la participación, o por reconocer sus intereses objetivos de clase, sino a partir de los sentimientos de indignación por las injusticias experimentadas y la emergencia de un nuevo sistema de valores que atribuía sentido a la movilización. Los diversos tipos de “agentes externos”, que pasaron por las comunidades campesinas en los años previos a la guerra, ofrecieron diferentes marcos cognitivos para justificar la movilización política pero no determinaron el “último” paso, que era la decisión individual de participar. Si las motivaciones individuales llevaron o no al apoyo a favor de los insurgentes dependía de las condiciones sociales de posibilidad de la movilización. Elisabeth Wood denomina estos procesos “*Path-Dependent Processes*” para señalar como la articulación entre un contexto local específico y los patrones históricos del activismo y de la represión condicionaban las posibilidades de la movilización.⁶⁸

El trabajo de Elisabeth Wood cuestiona algunos de los presupuestos sobre los “agentes políticos externos” que supuestamente manipulan los intereses populares en función de sus propios fines. Su

⁶⁷ Véase, E. J. Wood, *op.cit.*, 2003.

⁶⁸ Véase, *Ibid.*, pp. 232-241.

etnografía de los procesos organizativos locales muestra, más bien, que sólo en la medida en que los mismos campesinos se asumieron como parte del movimiento revolucionario, extendieron la organización revolucionaria en sus cantones y vieron en la participación en una organización revolucionaria un medio para concretar algunas de sus expectativas -especialmente acceso a tierra- la organización guerrillera logró la consolidación de sus bases sociales en el campo. Muchas veces, demuestra Wood, los campesinos aprovecharon la oportunidad de la presencia militar del FMLN, que generalmente implicaba una expulsión temporal de las fuerzas estatales, el abandono de haciendas y de cooperativas estatales por sus antiguos dueños, para realizar, aunque fuera de manera precaria, su aspiración por obtener la tierra.

El estudio de Wood representa además un esfuerzo para entrelazar, tomando como eje analítico la participación campesina, el periodo previo al conflicto armado con la guerra civil y las nuevas condiciones de posibilidad para la acción colectiva durante la implementación de los Acuerdos de Paz después de 1992. Wood observó que en el contexto de la guerra algunos campesinos experimentaron con impulsar cooperativas y establecer nexos con ONGs nacionales e internacionales. Esto les permitió aprender cómo articular intereses locales con estrategias políticas nacionales para consolidar nuevas relaciones de propiedad e iniciar proyectos de desarrollo productivo, un conocimiento práctico muy útil para gestionar, después de 1992, la legalización de sus tierras y echar a andar nuevos proyectos productivos. Con base en estas observaciones Wood concluye que en las zonas controladas por la guerrilla se abrieron canales de participación campesina que produjeron una “sociedad civil rural” y una nueva cultura política que incorporó los valores de la participación social y la justicia.⁶⁹

No existen estudios etnográficos igualmente ricos en evidencia empírica y discusión metodológica sobre el desarrollo de la organización sindical radical, durante y después de las guerras en la región. La razón reside, probablemente, en el hecho que los conflictos bélicos se desarrollaron en las zonas rurales y los ejércitos insurgentes -tanto el FMLN y la URNG en Guatemala como la contrarrevolución nicaragüense- fueron ejércitos campesinos, por lo cual el interés de los investigadores se concentró en las experiencias de la población rural más que urbana. Los estudios sobre el movimiento sindical ofrecen diagnósticos macro-sociológicos y generales sobre la reestructuración productiva y las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera centroamericana, señalando que en los años ochenta, el movimiento sindical en la región tuvo que lidiar, por un lado, con la recesión económica y las primeras políticas de ajuste y, por otro lado, con

⁶⁹ Véase, *Ibid.*, p. 160ss.

la necesidad de redefinir sus relaciones con el Estado y el sistema político en el contexto de la agudización de los conflictos. Según los autores, la persecución sindical en Guatemala, El Salvador y Honduras y el ascenso del solidarismo en Costa Rica debilitaron en términos políticos y organizativos al sindicalismo, colocándolo en una posición defensiva ante la implementación de nuevas actividades productivas (maquila) y la reforma del Estado con la subsiguiente reducción del empleo público.⁷⁰

Después de la tormenta: Centroamérica en la década de los noventa

Con la finalización de las guerras civiles proliferaron los estudios que buscaron responder a las preguntas por los cambios y continuidades en las sociedades centroamericanas después del periodo tumultuoso de los procesos revolucionarios y guerras.⁷¹ Llama la atención que el universo de participantes en este debate se ha diversificado considerablemente: ya no son solamente intelectuales y académicos sino también profesionales de ONGs, consultorías y fundaciones, que analizan y emiten sus juicios de valor sobre las principales características y lógicas de la acción colectiva. Esto explica en parte el peso que en el discurso sobre la acción colectiva se atribuye a las nuevas modalidades organizativas como mecanismos para promover la representación de grupos sociales marginales en sustitución de formas tradicionales de participación y representación de intereses colectivos como sindicatos y organizaciones campesinas.

En los estudios actuales sobre los movimientos sociales y la acción colectiva en Centroamérica se identifican tres procesos cruciales que han enmarcado y condicionado la acción de los actores colectivos después de las guerras civiles: (1) la transición democrática para integrar la izquierda armada al espacio político-institucional y “desmilitarizar” el aparato estatal, asegurando de esta manera la pacificación de la región; (2) las políticas de liberalización económica, ajuste estructural y

⁷⁰ Véase, por ejemplo, Juan Pablo Pérez Sáenz, *De la Finca a la Maquila. Modernización capitalista y trabajo en Centroamérica*, San José/Costa Rica, FLACSO, 1996, pp. 142-159.

⁷¹ El caso de Costa Rica escapa de estas generalizaciones sobre los procesos regionales por contar con un sistema de democracia liberal y sistema de bienestar desde los años cuarenta, y por mantener la estabilidad política interna en la coyuntura de los setenta y ochenta. Las experiencias regionales empiezan a converger en los años noventa alrededor del ajuste estructural y la democratización política. Cabe señalar que la mayor parte de nuevos estudios sobre Centroamérica se publicaron fuera de la región y en inglés. Una buena orientación sobre estos debates ofrecen dos reseñas temáticas publicadas en la revista *Latin American Research Review*. Véase, John A. Booth, “Through Revolution and Beyond: Mobilization, Demobilization, and Adjustment in Central America” y David Carey Jr. “Shades of Peace and Democracy: Social Discontent and Reconciliation in Central America”, ambas reseñas se encuentran en *Latin American Research Review*, Austin, Vol. 40, No. 1, febrero de 2005, pp. 201-206 y 251-267; Una recopilación de estudios sobre las “huellas” de los procesos revolucionarios centroamericanos en sus respectivas sociedades se encuentra en el número monográfico *Reassessing Central America’s Revolutions* en la revista *Latin American Perspectives*, Riverside/CA, Vol. 26, No. 2, marzo de 1999.

apertura de los mercados internos para deregular las economías nacionales y abrirlas a la inversión extranjera. (3) la transformación de la composición social de las sociedades centroamericanas, a raíz de procesos como el crecimiento del sector informal, la migración interna (del campo a las ciudades) e internacional y la crisis de las actividades productivas tradicionales.

En este debate, el proceso político-institucional que más atención ha recibido fue la instalación de regímenes democrático-liberales en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, la incorporación de la izquierda al juego político-institucional y la separación de los militares del gobierno. Los balances, centrados en los aspectos formales de la democracia, como la estabilidad de los ciclos electorales, la limpieza de los procesos electorales y el respeto a los resultados, señalan que no obstante ciertos avances en el ámbito electoral, subsisten las dificultades para instalar un pleno Estado de Derecho que garantice el respeto a los derechos humanos. Para explicar estas dificultades se recurre a diferentes causalidades: la práctica recurrente de los actores políticos de buscar acuerdos de cúpula extraparlamentarios y extrainstitucionales, en vez de respetar la vía parlamentaria, lo cual socava la precaria legitimidad de las instituciones democráticas; la pobreza y desigualdad social, así como el reciclaje de enclaves autoritarios en instituciones estatales y en la sociedad civil, que limitan el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles y sociales a sectores minoritarios.⁷²

En estos discursos el abstencionismo electoral se ha vuelto un indicador clave para evaluar la “cultura política democrática” en la región. Esto es ninguna sorpresa porque desde la perspectiva de los estudiosos de la transición, una baja participación en las contiendas electorales resulta especialmente preocupante porque evidencia el desencanto social con las democracias liberales, por medio de un indicador que representa una de las principales referencias del modelo: las elecciones.⁷³ Como posibles explicaciones para este fenómeno se mencionan los pocos resultados

⁷² Recuperamos las líneas principales del debate sobre los resultados de la transición de los siguientes textos: Günther Maihold y Ricardo Córdova, “Democracia y ciudadanía en Centroamérica”, Klaus Bodemer y Eduardo Gamarra (eds.), *Centroamérica 2020. Un nuevo modelo de desarrollo regional*, Caracas, Nueva Sociedad, 2002, p. 301-329; E. Torres-Rivas, “Los desafíos del desarrollo democrático en Centroamérica”, *Anuario de Estudios Centroamericanos*, Universidad de Costa Rica/San José, Vol. 22, No. 1, 1996, pp. 7-40; el mismo autor, “Los déficit democráticos en la posguerra. Centroamérica hacia el año 2000”, Julio Labastida, Martín del Campo y Antonio Camou (coords.), *Globalización, identidad y democracia*, México, Siglo XXI, 2001, pp. 116-132.

⁷³ Entre 1984 y 2002 la participación de la población en edad de votar en las elecciones legislativas bajó en Costa Rica en un 14.1 por ciento, El Salvador en un 10.4 por ciento, Guatemala en un 18.7 por ciento y Honduras un 9.8 por ciento. En Nicaragua hubo un incremento leve de un 2.1 por ciento y sólo en Panamá la participación electoral creció un considerable 23.1 por ciento en este lapso de tiempo. Estas cifras reflejan la diferencia de la participación electoral de la población en edad de votar entre la última y la primera elección del periodo estudiado (1984 y 2002) en los respectivos países. Fuente: http://www.idea.int/country_view.cfm,

del Estado para promover mecanismos de participación, más allá del acto de votar, combatir la corrupción y resolver los problemas de la creciente desigualdad social. De allí se desprenden preguntas, como, por ejemplo, respecto a las posibilidades para una regresión autoritaria en la región -no por medio de golpes de Estado sino a través del avance electoral de fuerzas políticas que prometen imponer “Ley y Orden”-, así como por los mecanismos, procedimientos y acuerdos necesarios para avanzar hacia la *gobernanza democrática* por medio de una nueva articulación entre instituciones públicas, mercado y grupos organizados de la sociedad civil.⁷⁴

El desencanto social con la democracia se relaciona con los efectos de otro proceso social: la reestructuración productiva por medio de los mecanismos de desregulación económica y su impacto sobre la estructura de clase de las sociedades centroamericanas.⁷⁵ Con la finalización de las guerras civiles, también en Centroamérica se profundizaron las políticas orientadas a la disminución de la participación del Estado en la economía, al fomento de las exportaciones de productos agropecuarios, tradicionales y no tradicionales y al fortalecimiento del sector maquilador para el mercado norteamericano. Carlos Vilas define el modelo de acumulación capitalista, que domina en Centroamérica desde los noventa, como “modelo de la maquila” porque su funcionamiento depende de la superexplotación de la mano de obra y la presión sobre los salarios - concebidos exclusivamente como costos de producción- para mantener las ventajas competitivas en el mercado internacional. Esto explica porque la creación de empleos en el sector maquilador ha sido compatible con la reproducción de la pobreza y la ampliación del sector informal.⁷⁶

citado en PNUD, *Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá 2003*, San José/Costa Rica, PNUD, 2003, p. 257.

⁷⁴ La buena gobernanza es un término que apareció los discursos de los organismos internacionales como Banco Mundial y CEPAL en los años noventa para señalar que un Estado, para alcanzar un crecimiento económico adecuado, precisa contar con una regulación pública transparente y servicios públicos eficientes. Si bien en los últimos años también se han señalado, como aspectos clave de la gobernanza, factores políticos como la orientación de las políticas públicas hacía el interés común y la búsqueda de consensos entre diversos agentes políticos, el concepto se centra en la modernización del Estado, entendida como regulación pública transparente y servicios públicos eficientes. Véase, Christian von Haldenwang, “Gobernanza sistémica y desarrollo en América Latina”, *Revista de la CEPAL*, Santiago/Chile, No. 85, abril 2006, pp. 35-52.

⁷⁵ Véase, por ejemplo, Alejandro Portes y Kelly Hoffman, “Latin American Class Structures: Their Composition and Change during the Neoliberal Era”, *Latin American Research Review*, Austin, Vol. 38, No. 1, febrero 2003, pp. 41-81; Richard Tardanico, “From Crisis to Restructuring: Latin American Transformations and Urban Employment in World Perspective”, R. Tardanico y Rafael Menjívar Larín (ed.), *Global Restructuring, Employment and Social Inequality in Urban Latin America*, Miami, North South Center Press/University of Miami, 1997, pp. 1-45; J. P. Pérez Sáenz, *op.cit.*, 1996, pp. 161-229.

⁷⁶ Véase, C. M. Vilas, “Deterioro laboral y exclusión social: La otro cara del crecimiento”, *Acta Sociológica*, México, Año 13, No. 28-29, enero-agosto 2000, pp. 39-66, especialmente pp. 58-59.

En síntesis, las relaciones de dominación en las sociedades centroamericanas aguantaron el asalto revolucionario sin grandes cambios: Las elites económicas tuvieron pocos problemas para adaptarse a las nuevas condiciones económicas y políticas, aunque algunos grupos, como las fracciones agrarias que no habían diversificado a tiempo sus fuentes de acumulación, perdieron influencia ante los “nuevos ricos”, como por ejemplo oficiales del ejército reconvertidos en empresarios exitosos.⁷⁷ Las redes familiares de las oligarquías –algunas de ellas datan de la época de la independencia y colonia- mostraron ser lo suficientemente elásticas para integrar nuevos miembros y asegurar su permanencia y control en los ámbitos políticos y económicos. En cambio, mientras los altos índices de pobreza se mantuvieron, el sindicalismo del sector público y paraestatal, los campesinos pequeños y medianos y el sector cooperativo –actores que habían jugado un papel importante en la movilización política de los setenta y ochenta- sufrieron las consecuencias del proceso de liberalización y reestructuración económica.⁷⁸

Las cifras macroeconómicas dan cuenta que las políticas de liberalización económica del Consenso de Washington⁷⁹ en sociedades que recientemente habían salido de los conflictos militares implicaron un mayor deterioro en las condiciones de vida de los pobreza y un nuevo impulso hacia la concentración del ingreso. De acuerdo a los datos presentados por el PNUD en su informe 2003

⁷⁷ Guatemala es un caso notable de la reconversión de altos oficiales del ejército en nuevos ricos. En Nicaragua un ejemplo famoso es Humberto Ortega, ex comandante guerrillero y ex comandante en jefe del Ejército Nicaragüense, quien hoy es un influyente empresario.

⁷⁸ Véase, Jeffery M. Paige, *Coffee and Power. Revolution and the Rise of Democracy in Central America*, Cambridge, Mass./London, Harvard University Press, 1998; C. M. Vilas, “Redes de familia, democracia y modernización política en Centroamérica”, *Revista de Historia*, Managua, No. 8, 2do semestre, 1996, pp. 7-27.

⁷⁹ El Consenso de Washington (1990) se refiere a una conjunto de medidas económicas acordadas entre el FMI y los países deudores (de América Latina) para que aplicaran políticas económicas neoliberales. El Consenso de Washington gira en torno de los principios, austeridad fiscal, privatización y liberalización de los mercados y, por lo general, es considerado la formulación más acabada del proyecto económico neoliberal. A raíz de las últimas crisis económicas y políticas (por ejemplo la crisis argentina de 2001), han aumentado las críticas a este proyecto, incluyendo personas que forman parte del establishment político y económico. Véase, por ejemplo, Joseph E. Stiglitz, *El malestar en la globalización*, Madrid, Ed. Taurus, 2002, especialmente pp. 81-119. Una de las críticas más universales al Consenso de Washington (compartida incluso por economistas y empresarios liberales) es que las políticas económicas de liberalización y apertura económica como receta universalmente aplicable no cumplen con los objetivos enunciados (estabilización económica, crecimiento sostenible y disminución de la pobreza) porque no toman en cuenta las condiciones económicas específicas de cada país. Robert Kappel muestra que en los países pobres especializados en la extracción de recursos naturales (a este grupo pertenece la mayor parte de los países latinoamericanos) y las “economías aisladas” (países con bajas tasas de crecimiento y aislamiento geográfico, como Bolivia) difícilmente las políticas económicas neoliberales pueden generar una disminución de la pobreza. Véase Robert Kappel, “Die Grenzen des (Post)Washington-Konsens überwinden: Armutsverringerung und Beschäftigung durch strukturelle Wettbewerbsfähigkeit” (Superar las limitaciones del Consenso de (Pos)Washington: Reducción de la pobreza y fomento de empleo mediante una competitividad estructural), *Austrian Journal of Development Studies*, Viena, Vol. XIX, No. 2, 2003, pp. 42-55.

sobre Centroamérica, la pronunciada desigualdad en la distribución del ingreso dificulta que el crecimiento económico se traduzca en una disminución del número de pobres (Ver Cuadro 1.1).

Cuadro 1.1 Centroamérica: Población, PIB y distribución del ingreso por países, 2000
(Cifras absolutas y relativas)

		<i>Total (millones US\$)</i>	<i>Per cápita (US\$)</i>	<i>40% más pobre</i>	<i>30% Siguiente</i>	<i>20% siguiente</i>	<i>10% más rico</i>
TOTAL	36,097.40	66,525	1,843				
Costa Rica	4,023.50	15,885	3,948	15.3	25.7	29.7	29.4
El Salvador	6,276.00	13,205	2,104	13.8	25	29.1	32.1
Guatemala	11,385.30	19,122	1,680	12.8	20.9	26.1	40.3
Honduras	6,485.50	5,898	909	11.8	22.9	28.9	36.5
Nicaragua	5,071.40	2,396	472	10.4	22.1	27.1	40.5

*/ Ingreso per cápita. Datos corresponden a 1999 excepto para los casos de Guatemala y Nicaragua (1998).

Fuente: PNUD, *Segundo Informe sobre desarrollo humano en Centroamérica y Panamá 2003*, San José/Costa Rica, 2003, p. 69 con base en datos de CELADE 2002 (población), CEPAL 2002 (PIB), 2001 (Ingresos per cápita).

Como puede observarse en el Cuadro 1.1, a fines de los años noventa, en todos los países centroamericanos, el 30 por ciento de la población más rica concentra más que el 50 por ciento de los ingresos. Los casos más extremos de polarización económica son Guatemala y Nicaragua, donde el 10 por ciento de la población más rica controla el 40.3 y 40.5 por ciento de los ingresos, respectivamente. Para Nicaragua estas cifras representan la reversión de los efectos redistributivos de la revolución sandinista y solamente Costa Rica se distingue por una distribución ligeramente más equitativa.⁸⁰

A partir de estos datos, las investigaciones sobre la acción colectiva en la región han reproducido las posiciones que dominan el debate sobre los movimientos sociales desde la década de los noventa: mientras una vertiente destaca la emergencia de nuevos sujetos sociales de la sociedad civil, otra llama la atención sobre las estrategias de reconversión y adaptación de los actores colectivos “clásicos” –principalmente el movimiento campesino y sindical- a los nuevos escenarios políticos.

El punto de partida de ambas vertientes es el dato –irrefutable- del descenso de la capacidad organizativa de las organizaciones basadas en relaciones de pertenencia clasista. En el caso de las

⁸⁰ El coeficiente de Gini, utilizado como indicador de desigualdad (en una escala de 0 a 1, 0 representa una absoluta igualdad, 1 absoluta desigualdad), asume valores desde 0.473 en el caso de Costa Rica, hasta 0.584 y 0.582 para Nicaragua, y Guatemala, respectivamente. El coeficiente de Gini de toda la región asume un valor de 0.564. Véase, PNUD, *op.cit.*, pp. 68-69.

organizaciones campesinas, la liberalización de los mercados de tierras en el contexto de las reformas neoliberales, la falta de créditos y la deuda agraria que afecta a productores y cooperativas llevó al fraccionamiento de muchas cooperativas y a la venta de propiedades, desencadenando un nuevo proceso de concentración de tierras y de proletarización-pauperización campesina. Esta situación ha sido especialmente grave para aquellos trabajadores agrícolas que habían sido beneficiarios de las reformas agrarias. Como observa Eduardo Baumeister acerca del efecto de la liberalización del mercado de tierras sobre estos grupos de asociados:

La liberalización de la venta de tierra creó una situación de “anomia” colectiva, ante la cual se generan los procesos de venta de tierra. Un segmento importante de los beneficiarios de las reformas agrarias vendió toda su tierra y otro segmento vendió una parte. Los que vendieron todo volvieron al trabajo exclusivamente asalariado.⁸¹

En el caso del movimiento sindical, los indicadores de la participación sindical como el número de afiliados o el número de trabajadores involucrados en conflictos laborales, dan cuenta de que la proporción de trabajadores sindicalizados en la fuerza laboral asalariada –históricamente baja- ha tendido a descender en toda la región (Ver Cuadro 1.2).

⁸¹ Eduardo Baumeister, “Las reformas agrarias en Centroamérica: un balance de sus resultados al finalizar los años 90”, ambos textos se encuentran en Harry Clemens y Raul Ruben (eds.), *Nueva ruralidad y política agraria. Una alternativa neoinstitucional para Centroamérica*, Caracas, Ed. Nueva Sociedad, 2001, pp. 67-86.

Cuadro 1.2 Trabajadores sindicalizados según actividad económica en Centroamérica, entre 1990 y 2000:

	Total nacional	Agricultura	Industria	Servicio	Economía no agrícola	Tasa de sindicalización * (por ciento)
El Salvador						
1990	71,000	4,470	52,200	14,500	66,740	n.d.
2000	136,200	820	116,740	18,600	135,370	10.5
Guatemala						
1990	78,602	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
2000	97,031	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4.7
Honduras						
1990	209,300	101,700	25,900	81,600	107,600	30.2
1999	74,600	9,600	15,258	49,700	64,900	7.4
Nicaragua						
1991	10,004	1,547	1,678	6,779	8,457	n.d.
1999	6,606	1,781	715	4,110	4,825	n.d.
Costa Rica						
1993	168,462	48,379	15,373	104,712	120,083	21.4
2000	151,418	32,416	19,601	99,380	119,002	16.4

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Oficina Subregional para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana de la OIT, *Base de Datos Trabajo Decente*, en la página electrónica www.oit.org (consultado el 3 de abril de 2006).

Datos provienen de los Ministerios de Trabajo de los respectivos países. El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica: Número de afiliados vigentes; Guatemala: Número de afiliados acumulados; Nicaragua: Número de inscripciones anuales.

*/ Proporción de trabajadores sindicalizados entre el total nacional de asalariados.

Como puede verse, un sector sindical especialmente afectado por el marcado descenso de sus afiliados fue el de los sindicatos de las empresas agroexportadoras que, en países como Honduras o Costa Rica, hasta los años ochenta había sido un eje de las luchas obreras. Estos decrecimientos no se amortiguaron con incrementos significativos en otras actividades económicas, con la excepción de El Salvador. Allí todas las actividades económicas –con excepción de la agricultura– experimentaron un crecimiento en el número de afiliados sindicales, explicable, posiblemente, con el auge de las empresas maquiladoras en la década de los años noventa y la presión internacional, sobre todo de los sindicatos estadounidenses, de respetar un mínimo de derechos laborales en las maquilas.

Estos datos, que evidencian el impacto de la reestructuración productiva sobre la fuerza laboral organizada, permiten a los estudiosos de las nuevas formas de acción colectiva a afirmar el debilitamiento del movimiento obrero y campesinos y a destacar la emergencia de nuevos sujetos

sociales con necesidades específicas. La base empírica para estas afirmaciones se encuentra en el crecimiento y la diversificación de organizaciones sociales orientadas a representar los intereses de grupos vulnerables como mujeres, niños o indígenas, así como de cooperativas campesinas y laborales que aprovechan vínculos con la cooperación externa para insertarse en redes internacionales de “comercio justo”.

Este discurso se caracteriza por sus intentos de adaptar la noción de “sociedad civil” –entendida como el conjunto de organizaciones y agentes autónomos de la esfera estatal que representan diversas identidades colectivas, incluyendo identidades comunitarias- al contexto centroamericano de los noventa. Estos nuevos sujetos sociales expresarían en la región la diversificación de las formas organizativas y de los discursos sobre la democracia, la justicia y la igualdad, pero con una nueva característica: la especialización temática que acompaña la demarcación de las fronteras entre campos específicos de acción y grupos a atender. Esto tiene consecuencias importantes para la formación de alianzas entre los agentes: a partir de reconocer la autonomía y respetar diferentes identidades sociales estos actores construyen alianzas coyunturales nacionales o regionales – coordinadoras o redes de acción- para realizar campañas de sensibilización de la opinión pública en torno a determinadas agendas de políticas públicas, como la regulación de las condiciones laborales de las trabajadoras de las maquilas, el control de las empresas transnacionales o el fin a proyectos de privatización de servicios básicos y bienes colectivos.

Se ha insistido mucho en las funciones mediadoras de las ONG entre Estado, mercado y sociedad para construir, ante el desprestigio de las instituciones públicas y de los partidos, consensos sociales y canales de expresión para incidir en la esfera de lo político a favor de los grupos más desprotegidos.⁸² Entre los aspectos positivos de esta nueva forma de acción colectiva se han señalado la profesionalización organizativa, el apartidismo y la independencia ante las instituciones estatales, lo cual -de acuerdo a esta vertiente del debate- permitiría establecer vínculos no clientelares con los grupos vulnerables. Adicionalmente, como privilegian estrategias de presión política no confrontativa contribuirían a la distensión del ambiente político polarizado. Pero no todas las opiniones sobre la sociedad civil son tan positivas: como puntos problemáticos se ha señalado la falta de representatividad de las organizaciones civiles, compuestas principalmente por

⁸² Véase, por ejemplo, Petra Bendel, “Importancia y funcionamiento de la sociedad civil en Centroamérica”, *Memoria*, México, No. 128, octubre 1999, disponible en línea: www.memoria.com.mx (consultado noviembre 2002); Nelly Miranda Miranda, et.al. *Mitos y paradojas sobre la sociedad civil*, Managua, Centro de Derechos Constitucionales, 2002; D. Carey Jr., *op.cit.*, 2005, p. 254ss.

profesionales de clase media y académicos, y la gran dispersión organizativa que dificulta presentarse con una sola voz ante instituciones gubernamentales y organismos financieros.⁸³

La evidencia empírica de los estudios de caso matiza aquellas posiciones conceptuales que destacan lo nuevo e inédito de la “sociedad civil organizada” y señala las rupturas organizativas al interior de los movimientos de liberación como factores que impulsaron la emergencia de nuevas organizaciones sociales. Por ejemplo, para el surgimiento de los movimientos de mujeres en la década de los noventa la movilización social de los setenta y ochenta fue crucial porque permitió que mujeres de los sectores populares construyeran, gracias a su activismo, redes sociales, liderazgo y experiencia política. Una vez que la disciplina militar y la mística revolucionaria dejaron de operar como mecanismos de aglutinación al interior de las organizaciones estas activistas y líderes se convirtieron en protagonistas de los cuestionamientos a las prácticas de discriminación interna de los movimientos guerrilleros y encabezaron escisiones organizativas.⁸⁴ Los conflictos que acompañaron la desmovilización y legalización de las organizaciones guerrilleras en partidos políticos evidencian las divergencias entre las distintas fracciones de los movimientos guerrilleros sobre las tareas político-organizativas y el rumbo ideológico en el contexto de pacificación y expresan las contradicciones inherentes a un proyecto revolucionario de liberación nacional que, al subordinar las diferencias étnicas y de género a la lucha de clase y antiimperialista, silenciaba la discriminación al interior de las organizaciones. Pero para que las escisiones cristalizaran en organizaciones civiles fue necesaria la participación de movimientos y redes transnacionales, así como agencias internacionales de cooperación externa, que contribuyeron con recursos materiales, capacitación técnica y asesoría a la diversificación del discurso político y la ampliación del repertorio de la acción colectiva.⁸⁵

⁸³ Véase, Carolina Quinteros, “Acciones y actores no sindicales, para causas sindicales. El caso del monitoreo independiente en Centroamérica”, *Nueva Sociedad*, Caracas, No. 169, septiembre-octubre de 2000, p. 162-176, N. Miranda, et.al, *op.cit.*, 2002, pp. 55-73.

⁸⁴ La participación de las mujeres en los movimientos revolucionarios es uno de los aspectos más estudiados de la discriminación al interior de los movimientos revolucionarios y de sus consecuencias prácticas. Véase, por ejemplo, Mercedes Olivera y Anna Ma. Fernández, “Subordinación de género en las organizaciones populares nicaragüenses”, C. M. Vilas (coord.), *Democracia emergente en Centroamérica*, México, UNAM, 1993, pp. 161-186; Rosario Montoya, “House, Street, Collective: Revolutionary Geographies and Gender Transformation in Nicaragua, 1979-1999”, *Latin American Research Review*, Austin, Vol. 38, No. 2, junio de 2003, pp. 61-93; Ilja A. Luciak, “Gender Equality in the Salvadoran Transition”, *Latin American Perspectives*, Riverside/CA, Issue 105, Vol. 26, No.2, marzo de 1999, pp. 43-67.

⁸⁵ Sobre el movimiento de solidaridad con Nicaragua y el crecimiento de las ONG, véase, “ ‘En el mundo hay dos países mimados por la cooperación y uno es Nicaragua.’ Entrevista con Sally O’Neill”, *envío*, Managua, Año 23, No. 268, julio de 2004, pp. 20-28. Sobre la formación de las redes internacionales en torno a las campañas para mejorar las condiciones laborales en las zonas francas, véase, Jennifer Bickham Mendes y Ronald Köpke, “Gender und Transnationalismus: Zentralamerikanische Frauenorganisationen zwischen

Con base en estas evidencias empíricas es posible formular la hipótesis que la movilización política radical de décadas anteriores dejó huellas importantes en instituciones, formas de organización y prácticas de protesta, no obstante la reconfiguración de los actores colectivos en los noventa. Un ejemplo central es Nicaragua, donde el movimiento popular se vio obligado a redefinir sus lazos con el FSLN después del cambio de gobierno en 1990. En un primer balance de la transición en Nicaragua, Erica Polakoff y Pierre La Ramée señalan cómo la pérdida electoral del FSLN abrió una ventana de oportunidades para que las organizaciones sandinistas buscaran incidir en las políticas públicas. Liberadas de la obligación de defender las acciones gubernamentales y contribuir a la gobernabilidad y la disciplina laboral en un escenario político condicionado por la guerra contrarrevolucionaria y la escasez de bienes de consumo, las organizaciones sindicales sandinistas – las llamadas Fuerzas Fundamentales de la Revolución– formaron en abril de 1990 el FNT para defender como un bloque las conquistas sociales amenazadas por las políticas de ajuste económico del gobierno de Violeta de Chamorro.⁸⁶ En la Costa Atlántica, señala Judy Butler en el mismo libro, la desmovilización de la Contra abrió paso para medir las potencialidades del estatus de autonomía regional, así como para establecer nuevos nexos entre el movimiento indígena y el FSLN.⁸⁷

El caso nicaragüense es emblemático para entender la situación de las organizaciones populares en la época de la posguerra porque muestra la contribución de estos actores para que las organizaciones guerrilleras, ahora convertidos en partidos políticos legales, pudieran consolidar su posición en el sistema político pese a la resistencia de los actores de la ultraderecha. También

transnationaler Konkurrenz und Kooperation in der Bekleidungsindustrie” [*Género y Transnacionalismo: Organizaciones centroamericanas de mujeres entre competencia transnacional y cooperación en la industria textil*], *Peripherie*, Frankfurt/Main, No. 75, 1999, pp. 83-103; C. Quinteros, “Nuevas fronteras para la acción laboral. El caso de los códigos de conducta en Centroamérica y la acción de las organizaciones de mujeres”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LVII, No. 643, mayo de 2002, pp. 387-406; R. Köpke, et.al, *Códigos de Conducta y monitoreo en la industria de confección. Experiencias internacionales y regionales*, El Salvador, Ed. Heinrich Böll, 2000. Sobre el caso guatemalteco, véase, Ralph Armbruster-Sandoval, “Globalization and Cross-Border Labor Organizing. The Guatemalan Maquiladora Industry and the Phillips Van Heusen Workers’ Movement”, *Latin American Perspectives*, *op.cit.*, 1999, pp. 108-128; Sobre el movimiento indígena como movimiento transnacional véase, Virginia Q. Tilley, “New Help or New Hegemony? The Transnational Indigenous Peoples’ Movement and ‘Being Indian’ in El Salvador”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 34, No. 3, agosto de 2002, pp. 525-554.

⁸⁶ Véase, Erica Polakoff y Pierre La Ramée, “Grass-Roots Organizations”, Thomas W. Walker (ed.) *Nicaragua without Illusions. Regime transition and Structural Adjustment in the 1990’s*, Wilmington, SR-Books, 1997, pp. 185-201. El FNT (Frente Nacional de Trabajadores) fue fundado el 28 de abril de 1990 por la ATC (Asociación de Trabajadores del Campo), CST (Central Sandinista de Trabajadores), FETSALUD (Federación de Trabajadores de la Salud), ANDEN (Asociación Nacional de Educadores Nicaragüenses) y UNE (Unión Nacional de Empleados). Véase, Guillermo López López, *Sindicalismo*, Managua, FNT, 2000, p. 21.

⁸⁷ Judy Butler, “The Peoples of the Atlantic Coast”, T. W. Walker (ed.), *op.cit.*, 1997, pp. 219-234.

muestra el costo político de este apoyo: en el caso nicaragüense las expectativas que la fuerza organizativa y política del FNT le permitiera jugar un papel activo en las negociaciones sobre la Reforma de Estado, haciendo posible otro tipo de transición y ajuste económico, no se cumplieron. Si bien el FSLN pudo establecerse como interlocutor principal del gobierno, las organizaciones sociales no lograron capitalizar esta situación sino entraron en procesos de fragmentación y de debilitamiento organizativo.

Los balances que parten de una idea de continuidad en las formas de acción colectiva en Centroamérica tienden a visualizar las nuevas prácticas como estrategias de acción para hacer frente a los cambios en el escenario político, y en menor grado como la expresión de nuevas subjetividades sociales. En este planteamiento la diferencia entre “viejos” y “nuevos” actores colectivos, aunque no desaparece, tiende a perder fuerza. Por ejemplo, en los estudios sobre la situación de los beneficiarios de las reformas agrarias en Centroamérica en los años noventa, la formación de organizaciones locales de desarrollo local se representa como una estrategia para enfrentar el cierre de los circuitos institucionales de comercialización y el difícil acceso a créditos agrarios, a través de la búsqueda de vínculos internacionales que permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica para la producción agraria y redes alternativas de comercialización. En estas “nuevas” organizaciones participan dirigentes y activistas de las “viejas” cooperativas y organizaciones campesinas y las redes asociativas –apoyadas por lo general con fondos de la asistencia internacional- articulan a organizaciones campesinas y cooperativas con ONGs que ofrecen capacitación y asesoría técnica.⁸⁸

También los resultados del estudio de Marc Edelman sobre la constitución de organismos regionales y políticas “transnacionales” por parte de las organizaciones campesinas centroamericanas ofrecen evidencia empírica para la hipótesis sobre el vínculo entre viejas y nuevas formas de organización popular. Los activistas campesinos, según este autor, combinaron diversas lógicas de acción para elaborar un discurso y prácticas regionales. Algunas de esas lógicas expresaron intereses materiales “de clase”, otras, aspiraciones para conservar sus especificidades culturales y

⁸⁸ Por ejemplo, CIPRES en Nicaragua o CREDHO en El Salvador son ONG que colaboran fuertemente con asociaciones campesinas. En Nicaragua un 48 por ciento de los promotores del Programa Campesino a Campesino, impulsado desde fines de los años ochenta por la UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos), habían sido beneficiarios de la reforma agraria sandinista y muchos de ellos desempeñaron cargos de dirección en cooperativas o uniones de cooperativas. El objetivo de este programa ha sido el fomento de la transferencia horizontal de tecnologías sustentables en el campo, primero en Nicaragua y después en Centroamérica. Véase, R. Ruben y Danielle van Strien, “Capital social e ingresos familiares en Nicaragua: las redes de organizaciones rurales y productores agrícolas” y E. Baumeister, *op.cit.*, ambos textos están en H. Clemens y R. Ruben (eds.), *op.cit.*, 2001, pp. 233-256 y pp. 82 y 83, respectivamente.

otras estaban orientadas a aprovechar recursos estratégicos, por ejemplo, redes de información global o el acceso a instituciones internacionales. Más que rupturas con el pasado, concluye Edelman, han surgido combinaciones de prácticas y representaciones simbólicas de los actores para adaptarse a los nuevos y difíciles contextos.⁸⁹

Un primer balance del panorama actual

La revisión del estado del debate sobre los procesos revolucionarios confirma la tesis que la historia se escribe desde el presente.⁹⁰ En los estudios más recientes, la movilización popular de fines de los años setenta aparece como el principio de la democratización política que culminó en la integración de la izquierda armada a las instituciones representativas. La resignificación del proceso revolucionario de los setenta en el “inicio de la transición democrática” ha implicado nuevos ángulos desde donde se enfoca el objeto de estudio que destacan, por ejemplo, la emergencia de prácticas democráticas en las organizaciones populares interpretadas como gérmenes de la sociedad civil de los noventa. Al mismo tiempo tienden a omitir las promesas de justicia social y cambio radical de las relaciones de poder que estaban presentes en el proyecto revolucionario y que explican la atracción que este ejercía sobre un segmento de la población centroamericana. Estas promesas fueron silenciadas por medio del terrorismo de Estado.

La diferenciación entre “nuevos” y “viejos” sujetos para analizar la situación centroamericana forma parte de la resignificación discursiva de los procesos sociales que expresa el discurso hegemónico sobre la acción colectiva de los años noventa tanto en el mundo académico como en los mundos del activismo social. Hace presuponer que el agotamiento de determinadas estructuras organizativas – que son sólo las formas más visibles, pero no las únicas, de los actores colectivos- ha significado la desaparición de prácticas y relaciones sociales. La revisión del debate reciente sobre la acción colectiva en Centroamérica lleva a la conclusión que el uso de términos como “viejo” y “nuevo” parece corresponder, más que a lógicas internas de los actores, a cortes cronológicos fijados por el final de los conflictos armados y la pérdida electoral del FSLN en Nicaragua en 1990. Este discurso no sólo margina a ciertos actores, también opaca los procesos que colocaron a algunos actores de las alianzas revolucionarias del lado de los perdedores y a otros del lado de los ganadores de la pacificación y reorganización institucional de la región.

⁸⁹ Véase, Marc Edelman, “Transnational Peasant Politics in Central America”, *Latin American Research Review*, Austin, Vol. 33, No. 3, 1998, pp. 49-86, p. 74ss.

⁹⁰ Como señala Pilar Calveiro, el relato histórico se caracteriza por la “voluntad de construcción de un relato que plantea una línea y una forma interpretativa en relación con un determinado suceso o una serie de sucesos.” P. Calveiro, *op.cit.*, diciembre 2004-febrero 2005, p. 71.

La revisión de los debates sobre la acción colectiva en la región arroja, como resultado principal, la poca utilidad de la diferenciación entre nuevos y viejos sujetos sociales para estudiar los desenlaces de los movimientos revolucionarios centroamericanos y permite formular una serie de puntos de partida e interrogantes para la investigación. En primer lugar, los actores de la revolución centroamericana representaban en su momento “nuevos sujetos sociales” porque sus características no coincidían con las categorías de clase social o movimiento nacional-popular que hasta este momento se habían usado para analizar la acción colectiva en la región. La movilización popular en Centroamérica se caracterizó por una radicalización política tardía –si la comparamos con las sociedades del Cono Sur, donde en el mismo periodo la instalación de Estados de Seguridad Nacional puso un fin violento a las luchas sociales-, expresada en un creciente apoyo a los grupos armados en la segunda mitad de los setenta. En los movimientos revolucionarios confluían actores sociales diversos y el proyecto político de la liberación nacional combinaba elementos marxistas – como la perspectiva de la revolución socialista y el papel central de la clase obrera- con elementos antiimperialistas y demandas por reformas democráticas. Tomando en cuenta todos estos factores se confirma el carácter relativo de los atributos “nuevo” o “viejo” para caracterizar a estos sujetos sociales. Pero descartar la hipótesis sobre la separación entre viejos y nuevos actores sociales, lleva a la pregunta cómo podríamos aprehender conceptualmente los cambios que efectivamente ocurrieron en las formas de la acción colectiva.

En segundo lugar, la relevancia de las organizaciones populares como voceros de demandas políticas y sociales durante las guerras civiles no significó automáticamente que pudieran trasladar exitosamente este capital político al contexto de la paz. Durante la década de los ochenta, las organizaciones populares elaboraron estrategias de organización y movilización adecuadas para el contexto de violencia política, que les permitieron alcanzar una importante proyección en los escenarios políticos nacionales e internacionales, como defensoras de los derechos humanos, representantes de los refugiados y voceros a favor de una solución negociada y política a los conflictos bélicos. En Nicaragua, el gobierno sandinista se basó en la movilización de sus organizaciones de masas para llevar a cabo tareas de defensa y de la producción y, también, para consolidar la hegemonía del Estado sandinista en la sociedad civil y marginar a la oposición política.

Aunque la pacificación y la democratización de los noventa parecían ofrecer un ambiente más propicio a la acción colectiva, no todos los protagonistas de la movilización social anterior cristalizaron en organizaciones fuertes e independientes. Muchos desaparecieron, otros se reconvirtieron en ONGs, empresas sociales o cooperativas, y algunos se incorporaron a corrientes o

secciones de los nuevos partidos de izquierda. Identificar los diferentes desenlaces posibles de los procesos de organización popular, iniciados dos décadas antes, lleva a la pregunta por las consecuencias prácticas de la transformación socioeconómica y de la reestructuración del campo político sobre las lógicas de la movilización política y social después de las guerras civiles.

En función de estas preguntas construimos un marco analítico propio que nos permite tomar en cuenta las continuidades en las formas de acción, más allá de los cortes cronológicos habituales. En la siguiente sección temática se presentan las herramientas y reflexiones conceptuales que contribuyeron a la elaboración de nuestro enfoque analítico.

1.4. Violencia política y las lógicas de la acción colectiva: enfoques explicativos

Para poder reconstruir las lógicas de un campo político reestructurado por medio de procesos revolucionarios y enfrentamientos armados, conviene detenerse en la pregunta por las herramientas conceptuales y metodológicas que los estudios de la acción colectiva ofrecen para analizar el papel de la violencia colectiva en la constitución de los movimientos sociales. Este tema se impone aún más tomando en consideración el incremento de la violencia “social” en la región centroamericana después de las guerras civiles, evidencia que este problema no se ha resuelto aún.⁹¹

Como señala Barrington Moore, la indignación moral sobre condiciones sociales, que la gente siente que no debe, puede y necesita soportar, es una premisa clave para una movilización políticamente eficiente.⁹² Pero solamente en situaciones excepcionales y de extrema confrontación social, la indignación de los dominados se expresa por medio de la fuerza física, a la cual los grupos dominantes responden, por lo general, con medidas todavía más violentas, como sucedió en Centroamérica.⁹³ Así, el estudio de la acción colectiva en países como El Salvador, Nicaragua y

⁹¹ Analizamos el fenómeno de las pandillas juveniles en Centroamérica –las Maras– en Kristina Pirker, “La rabia de los excluidos: Pandillas juveniles en Centroamérica”, Raquel Sosa Elízaga, *Sujetos, víctimas y territorios de la violencia en América Latina*, México, 2004, pp. 133-157; Un trabajo reciente, que vincula la violencia juvenil con la frustración social producida por la democratización incompleta, es Gonzalo Wieland, *Hacia la construcción de lecciones del posconflicto en América Latina y el Caribe. Una mirada a la violencia juvenil en Centroamérica*, Serie Políticas Sociales No. 115, Santiago de Chile, CEPAL, diciembre del 2005.

⁹² B. Moore, *op.cit.*, 1987, p. 605; Véase también, R. Sosa Elízaga, “Violencia política y terrorismo de Estado”, Ruy Mauro Marini y Mária Millán, *La teoría social latinoamericana. Cuestiones contemporáneas*, Tomo IV, México, Ed. El Caballito, 1996, pp. 141-148.

⁹³ El caso guatemalteco fue, sin duda, el caso más extremo. De acuerdo a los informes sobre las violaciones a los derechos humanos, el conflicto interno entre 1960 y 1996 dejó un saldo de 150 a 160 mil muertos y 40 a 45 mil desaparecidos. Véase, Carlos Figueroa Ibarra, “Cultura del terror y guerra fría en Guatemala”, R. Sosa (coord.), *op.cit.*, 2004, pp. 33-66 y del mismo autor, *Los que siempre estarán en ninguna parte. La*

Guatemala requiere de conceptos que permiten tomar en cuenta el papel que la violencia, ejercida desde arriba y desde abajo, ha jugado en la constitución de prácticas sociales, universos simbólicos y en el moldeamiento de las relaciones sociales entre los actores.

Violencia y movimientos sociales

Desde por lo menos el siglo XIX, las causas y dinámicas de los movimientos sociales han sido temas de debate, en donde se ha valorado el papel de la violencia colectiva de distintas maneras.⁹⁴ A grandes rasgos se pueden diferenciar dos valoraciones: una que interpreta la violencia de los de abajo como una respuesta a la violencia latente de las estructuras sociales injustas y otra que la visualiza como una respuesta reactiva y disfuncional de los perdedores del cambio social. Esta perspectiva relacionada con las teorías estructural-funcionalistas de la modernización, que explican la violencia colectiva como una respuesta disfuncional de las “clases peligrosas” a la frustración de sus expectativas de bienestar, revivió en los años ochenta, al combinarse con las teorizaciones sobre la transición democrática y el descrédito de las revoluciones.

Según estos argumentos, la protesta violenta de los excluidos es fácilmente manipulable por agentes políticos con intereses propios que buscan desestabilizar las frágiles instituciones de la democracia liberal. Dirigiéndose, entonces, en contra del régimen político y sus actores, la violencia de los dominados -considerada amorfa y espontánea- se “politiza”. Uno de los antecedentes más influyentes de esta vertiente fue Ted Robert Gurr quien planteó en los años setenta que grupos revolucionarios sólo podían encontrar apoyo si existía desde antes un descontento social por las condiciones de vida y el régimen político.⁹⁵ En estos planteamientos, la acción colectiva de los subordinados tiene poco margen de autonomía: o aparece como una reacción espontánea a privaciones materiales o es el resultado de la manipulación de activistas o militantes políticos provenientes de otros estratos sociales. Pero por lo general la violencia es considerada una situación anormal originada en los márgenes del sistema social y político.

desaparición forzada en Guatemala, México, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos/Grupo de Apoyo Mutuo, 1999.

⁹⁴ Una revisión de los distintos enfoques explicativos de los movimientos sociales se puede consultar, en Armando Cisneros Sosa, *Critica de los movimientos sociales. Debate sobre la modernidad, la democracia y la igualdad social*, México, Ed. Porrúa/UAM-Azcapotzalco, 2001.

⁹⁵ Véase, Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*. New Jersey, Princeton University Press, 1970. Véase también, Gino Germani, *Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*, Buenos Aires, Paidós, 1979, especialmente pp.169-192.

Esta noción de la violencia como un comportamiento disfuncional de los dominados se encuentra también en los trabajos de Alain Touraine sobre los movimientos sociales. Para el sociólogo francés cada sistema de acción histórica (industrial y posindustrial) genera un conflicto central y un movimiento social que lucha para realizar los valores culturales representados como promesas en este sistema. En el caso de América Latina, la falta de autonomía de los actores sociales frente al Estado y los actores políticos (principalmente los partidos) y su fragmentación dificultan hablar de movimientos sociales para el periodo histórico del Estado desarrollista. Esto significaba, hasta la década de los setenta, que paralelamente a la integración corporativa y subordinada de las organizaciones obreras y campesinas al Estado, los sectores marginados recurrían a formas violentas de protesta, como motines o protestas callejeras, para exigir la satisfacción de sus necesidades. La oposición entre los de “adentro” y los de “afuera” -los integrados y los excluidos- establecía, según Touraine, una línea divisoria vertical que dividía a los sectores populares y confrontaba los que contaban con trabajo formal y sindicalizado a los que no contaban con este beneficio. En este contexto la violencia era una estrategia reactiva en la frontera entre el mundo de los integrados al sistema político y social y los excluidos producida a raíz de la desarticulación de la acción colectiva.⁹⁶

En un trabajo de 2002, Manuel Antonio Garretón busca adaptar los planteamientos de Touraine para analizar las formas de acción colectiva emergidas en los años noventa en la región. Según Garretón, en medio de los cambios culturales, políticos y sociales de los años ochenta -provocados por el desmantelamiento de las instituciones del Estado desarrollista, la consolidación de sistemas democráticos y el aumento del flujo internacional de bienes, personas, capital e información- se gestó una pluralidad de actores colectivos y formas de acción que se agrupan en torno a cuatro principios: democratización política, democratización social, la reformulación del modelo económico neoliberal y la redefinición del proyecto de modernidad a partir de las reivindicaciones por el respeto a las identidades culturales y la subjetividad. En torno a estas nuevas luchas han emergido nuevos actores, como por ejemplo el movimiento indígena, y nuevas formas de acción, como el llamado “tercer sector” de las ONGs. Sobre todo las ONGs promueven nuevas formas de incidencia en las políticas públicas, basadas en la información, las campañas de sensibilización y la negociación. No obstante estos reagrupamientos -señala Garretón- la oposición entre excluidos e incluidos se mantiene, sumándose ahora al ejército de los excluidos algunos agentes sociales que anteriormente formaban parte del segmento de los organizados e integrados, como sindicalistas del

⁹⁶ Véase, Alain Touraine, *op.cit.*, 1994, pp. 237-238 y *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*, Santiago de Chile, PREALC, 1987.

sector manufacturero o campesinos organizados. De esta manera se reciclan las prácticas violentas de presión como las movilizaciones callejeras, los enfrentamientos urbanos y los motines. Las acciones de los excluidos de hoy, por la radicalidad de sus formas de protesta y la urgencia de sus demandas, pueden amenazar la frágil gobernabilidad democrática al fungir como bases electorales de caudillos neopopulistas.⁹⁷ Garretón señala al respecto:

En los vacíos [...] pueden resurgir también nostalgias populistas, clientelistas, corporativistas o partidistas y, en caso de extrema descomposición, caudillismos neopopulistas [...] Estas nostalgias aparecen más bien como formas fragmentarias, muchas veces en forma paralela a elementos anómicos, apáticos o atomizadores, y en algunos casos delictuales, como el narcotráfico y la corrupción.⁹⁸

La imagen de una frontera disputada entre excluidos e incluidos sugiere un mundo dual donde dos grupos se enfrentan: mientras los excluidos buscan atravesar a toda costa la barrera que los separa del mundo integrado, los incluidos defienden con fuego y espada su espacio y privilegios. En esta explicación la violencia aparece como una práctica reactiva de grupos residuales del desarrollismo y de las víctimas de la modernización neoliberal.

Pero los excluidos no se encuentran en un mundo social aparte -como sugieren estos planteamientos- sino forman parte de una relación social con el grupo de los incluidos, condicionada por correlaciones de fuerza y con una conflictividad latente. La violencia no es, por tanto, un momento excepcional, sino una dimensión inherente a todas las relaciones de poder y dominación que bajo ciertas circunstancias se vuelve manifiesta. Esta violencia estructural, ubicada en las relaciones de propiedad y las instituciones del Estado clasista (y representada en el Derecho), forma parte de las experiencias sociales de los dominados, quienes -como decía Walter Benjamín- viven el “estado de sitio” no como una excepción sino como una condición cotidiana de su existencia.⁹⁹

Esta postura fundamenta todos los enfoques de pensamiento que -inspirados en la obra de Marx, Engels, Lenin y el mismo Benjamín- visualizan la violencia colectiva de los subordinados como un recurso extraordinario para incidir en el orden sociopolítico excluyente. La legitimidad que estos enfoques asignan a la violencia contestataria se basa no sólo en las circunstancias que la produce - la pobreza, la desigualdad, en fin, la sociedad de clases- sino en el objetivo final de romper lo

⁹⁷ Véase, M. A. Garretón, *op.cit.*, 2002; P. Oxhorn, *op.cit.*, 1988.

⁹⁸ A, Garretón, *op.cit.*, 2002, pp. 21-23.

⁹⁹ Véase, Walter Benjamin, *Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze [Sobre la crítica de la violencia y otros ensayos]*, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1965, p. 8.

existente: el sistema capitalista y el Estado de clases como obstáculos principales para instalar una sociedad más justa.

Asignar a la violencia colectiva un papel hasta cierto punto “necesario” no fue únicamente un tema de la teoría marxista. El hecho que también autores no marxistas, como, por ejemplo Barrington Moore, señalaron que, bajo ciertas circunstancias, la violencia colectiva contribuye y es necesaria para que emerja un orden sociopolítico más racional y más equitativo que el anterior, da cuenta que estos escritos surgieron en un ambiente de época muy distinto al actual. Entonces se reconocía la violencia política (y revolucionaria) como una estrategia legítima de la lucha política. Para comprender la lógica de la acción guerrillera se requiere, por tanto, comprender el sentido de la violencia y no partir de antemano de una condena unívoca como lo hacen enfoques explicativos más recientes.¹⁰⁰

Movimientos antisistémicos

Aunque en la historia de América Latina la violencia política en sus diversas modalidades –golpes de estado, guerras civiles, levantamientos populares provocados por la discriminación social y étnica- ha sido un fenómeno constante, la exaltación de la violencia revolucionaria en el imaginario de la izquierda marxista latinoamericana inició relativamente tarde, a raíz del éxito político y el impacto simbólico de la revolución cubana y tuvo un auge espectacular con la proliferación de guerrillas urbanas y rurales de los años sesenta y setenta. Un acontecimiento clave para inspirar el imaginario de la izquierda revolucionaria en la década de los ochenta fue el triunfo sandinista de 1979 posibilitado por la combinación de una insurrección popular, la lucha guerrillera y el aislamiento nacional e internacional del dictador Anastasio Somoza Debayle. Durante todo este periodo (1959-1979) la valoración de la violencia operaba como objeto de disputa ideológica y como un principio de diferenciación central entre “reformistas” y “revolucionarios”, es decir, entre quienes apoyaban y quienes no apoyaban la lucha armada como vía para transformar las sociedades latinoamericanas.¹⁰¹ Pero conviene pensar la existencia (a veces muy efímera) de los grupos

¹⁰⁰ Véase, también, Karl Marx y Friedrich Engels, *Manifest der Kommunistischen Partei [Manifiesto del Partido Comunista]*; F. Engels, *Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats [El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado]* ambos textos se encuentran en *Ausgewählte Werke [Obras seleccionadas]*, Moscú, Progress, 1987, pp. 31-57 y 436-562; B. Moore, *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia*, Barcelona, Ediciones Península, 1973.

¹⁰¹ Véase, Hans Werner Tobler, “¿Un siglo de violencia? Apuntes de un historiador”, Klaus Bodemer, et.al., *Violencia y regulación de conflictos en América Latina*, Caracas, Nueva Sociedad, 2001, pp. 15-23; Timothy P. Wickham-Crowley, “Ganadores, perdedores y fracasados: Hacia una sociología comparativa de los movimientos guerrilleros latinoamericanos”, Susan Eckstein (comp.), *Poder y protesta popular. Movimientos sociales latinoamericanos*, México, Siglo XXI, 2001, pp. 144-192; Consideramos como una excepción al

guerrilleros no sólo a partir de la inspiración cubana y las tradiciones políticas nacionales, sino también como parte de un fenómeno histórico más amplio, de aparición de agentes sociales que cuestionaban la hegemonía de los movimientos de masas -principalmente el movimiento obrero y los movimientos nacionalistas- por su incapacidad y falta de voluntad de encabezar transformaciones políticas y sociales radicales.¹⁰²

¿Qué conceptos permiten pensar la articulación entre procesos globales, nacionales y locales que permitieron en la coyuntura, abierta por la revolución cubana, la aparición y el crecimiento de las organizaciones guerrilleras? La noción de movimientos antisistémicos, acuñada por Immanuel Wallerstein para denominar a los agentes que emergen como críticas a lo existente, permite una primera aproximación. Wallerstein define a los movimientos antisistémicos como respuestas organizadas de resistencia que surgen en torno a los principales conflictos y contradicciones del sistema-mundo capitalista y se constituyen en organizaciones sociales y políticas. La observación, a través del tiempo, de las formas de protesta popular permitiría establecer ciclos revolucionarios que se caracterizan por actores y proyectos ideológicos con ciertos rasgos en común. Según este enfoque, los movimientos aparecen en respuesta a los efectos de las reestructuraciones del sistema-mundo sobre el modo de vida de los grupos subordinados.

Los primeros movimientos antisistémicos del moderno sistema-mundo, que competían por las lealtades políticas de los grupos dominados, fueron los movimientos socialistas y nacionalistas. Formados en el marco de dos instituciones fundamentales del capitalismo -el Estado nación y la economía-mundo- cada movimiento expresaba un conflicto sistémico: el conflicto de clase o la discriminación étnico-nacional. Con el ascenso de las luchas anticoloniales en África y Asia, después de la segunda guerra mundial apareció con los Movimientos de Liberación Nacional un tercer tipo que combinaba las demandas y formas de acción de los movimientos previos con las demandas por la soberanía nacional y el enfrentamiento con las potencias imperialistas de África y Asia.¹⁰³

caso del EZLN porque esta guerrilla surgió al final del ciclo de la lucha armada, además de que ha recurrido (con excepción del inicio) más a la presión pacífica para incidir en la política del Estado mexicano que a las armas.

¹⁰² Véase, por ejemplo, Daniel Pereyra, *Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en América Latina*, Buenos Aires, Ed. Canguro, 2000.

¹⁰³ Véase Immanuel Wallerstein, "Crisis: La economía-mundo, los movimientos y las ideologías", *Impensar las ciencias sociales. Límites de los paradigmas decimonónicos*, México, Siglo XXI/UNAM, 1998, pp. 27-43; Véase también, Giovanni Arrighi, Terence K. Hopkins, Immanuel Wallerstein, *Movimientos antisistémicos*, Madrid, AKAL, 1999.

Siguiendo el argumento de Wallerstein, la cuestión de la violencia marca una diferencia al interior de los movimientos porque hace referencia a los medios más adecuados para obtener el objetivo estratégico principal, que es la toma del poder político para realizar el respectivo proyecto: una sociedad socialista, un estado-nación propio o la liberación nacional de las potencias coloniales. Mientras los “reformistas” de los movimientos planteaban aprovechar marcos legales existentes -por ejemplo las elecciones- para alcanzar el poder, los “revolucionarios” buscaban la destrucción de las autoridades existentes para construir un nuevo orden sociopolítico. Para Wallerstein las dos alas de los movimientos han producido resultados similares:

Los revolucionarios no fueron en la práctica muy revolucionarios, y los reformistas no siempre fueron reformistas. (...) Los revolucionarios tuvieron que efectuar muchas concesiones para sobrevivir. Los reformistas aprendieron que las sendas hipotéticamente legales hacia el cambio se hallaban con frecuencia firmemente bloqueadas en la práctica y que se requería la fuerza, o al menos la amenaza de la misma, para superar esas barreras. Los denominados movimientos revolucionarios habitualmente llegaron al poder como consecuencia de la destrucción de las autoridades existentes provocada por la guerra antes que gracias a su propia capacidad insurreccional. (...) Una vez instalados en el poder, los movimientos intentaron permanecer en él, con independencia de cómo lo hubieran obtenido; con frecuencia esto requirió sacrificar la militancia así como la solidaridad con las fuerzas amigas presentes en otros países.¹⁰⁴

Finalmente, concluye Wallerstein, todos estos movimientos se institucionalizaron en aparatos burocráticos, como partidos, sindicatos o gremios profesionales, para ocupar espacios y cuotas de poder en el sistema político-institucional del estado-nación.¹⁰⁵

Desde la perspectiva de la teoría del sistema-mundo, los años sesenta y setenta fueron (hasta ahora) el último periodo en el cual los cambios en las pautas de acción colectiva y en la subjetividad social permiten hablar de una oleada de nuevos movimientos antisistémicos, que pese a sus diferencias tenían ciertas características en común. En primer lugar, los protagonistas -el movimiento estudiantil europeo, el movimiento de mujeres, los activistas de la revolución cultural china, etcétera- representaban a segmentos sociales que en el contexto de los cambios sociales y culturales de la posguerra -como el auge económico, la creciente importancia del sector servicios, la ampliación de las universidades, etcétera- habían alcanzado una mayor presencia en la sociedad. En segundo lugar, los acontecimientos que ampliaron el universo simbólico de protesta, porque estimularon ideas e imaginarios políticos, tuvieron lugar en la periferia, como la guerra en Vietnam

¹⁰⁴I. Wallerstein, “Nuevas revueltas contra el sistema”, en la página electrónica *Contrainformación en red. Territorio virtual para los movimientos sociales y la acción política en Internet*, disponible en línea www.nodo50.org/reformaenserio/articulos/marzo04/wallerstein.pdf (consultado en enero 2005).

¹⁰⁵ Véase, *Ibíd.* Véase también, G. Arrighi, et al., *op.cit.*, 1999, p. 30; Samir Amin, et al., *Transforming the Revolution. Social Movements and the World-System*, New York, Monthly Review Press, 1990, pp. 181-182.

o la Revolución Cubana. Por último, las prácticas políticas y discursivas tuvieron como uno de sus ejes fundamentales la crítica en contra de las burocracias de los viejos movimientos antisistémicos. Los nuevos actores promovían organizaciones no mediadas por las organizaciones burocráticas y formas de acción directa que buscaron –aunque fuese de manera simbólica– desafiar el orden existente. En el contexto de la revolución conservadora de los años ochenta y las transformaciones estructurales –la mundialización del capital y el agotamiento de los proyectos políticos centrados en el Estado nación– la mayor parte de las organizaciones anti-burocráticas de las décadas anteriores desaparecieron o se institucionalizaron como, por ejemplo, los partidos verdes en Europa. No obstante, constituyen los antecedentes más inmediatos de muchas de las organizaciones que, como las organizaciones de derechos humanos, los movimientos de autogestión, o las redes asociativas de organizaciones antiglobalizadoras enriquecen en la actualidad los repertorios de protesta antisistémica.¹⁰⁶

Siguiendo Wallerstein, et.al., podemos considerar a las organizaciones guerrilleras como parte de esta última ola de movimientos antisistémicos. Sus referentes críticos fueron –dependiendo de las tradiciones políticas de los respectivos países– los partidos comunistas o los movimientos nacional-populares. En el caso de los partidos comunistas, la crítica radical se dirigía en contra de la estrategia de la “acumulación de fuerzas” de optar por la lucha legal y las alianzas político-electorales (por ejemplo, en Chile y Uruguay); en países como Argentina o México, donde los movimientos nacional-populares habían logrado aglutinar a los sectores populares en apoyo al Estado, la misma incapacidad de los actores nacional-populares de responder en un determinado momento a las expectativas sociales de democratización política e integración social proveía a los actores guerrilleros con argumentos para justificar su actuar. En algunos casos, como en Nicaragua y El Salvador, los grupos guerrilleros podían surgir incluso en las subculturas políticas de la oposición política burguesa.¹⁰⁷

Muchas organizaciones guerrilleras en América Latina fueron eliminadas sin haberse vinculado orgánicamente con los sectores populares organizados en cuyo nombre decían luchar. Pero había excepciones, como los Montoneros en Argentina, para los cuales el vínculo con el peronismo fue la

¹⁰⁶ Giovanni Arrighi, et.al, *op.cit.*, 1999, pp. 32-38. I. Wallerstein, *op.cit.*, 2003.

¹⁰⁷ En El Salvador, en el ERP (y en la escisión del ERP, las FARN) participaron exmilitantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y en el caso de Nicaragua, una parte importante de la dirección del FSLN eran hijos de la oligarquía conservadora como señala Vilas en el artículo, “Clase, linaje y política. Notas sobre la burguesía nicaragüense”, *Burguesías en América Latina*, Serie Panorama de nuestra América, No. 10, México, CCYDEL/UNAM, 1993, pp. 137-157.

puerta de entrada para acceder a organizaciones populares y sindicales.¹⁰⁸ También en Centroamérica, como se explicó en la sección anterior, las organizaciones guerrilleras pudieron convertirse en ejes de movimientos revolucionarios amplios que aglutinaron a sectores organizados obreros y campesinos. ¿Cómo explicaría la teoría sistema-mundo por qué y cómo se dio el acercamiento de agentes pertenecientes a los “viejos movimientos antisistémicos” –por ejemplo, sindicalistas- a la vía armada? El punto de partida sería el análisis de las instituciones del sistema-mundo que moldean y condicionan la acción antisistémica. Pero este enfoque asigna un papel secundario a la dimensión subjetiva y las particularidades de los agentes sociales, al señalar que todos los movimientos atraviesan prácticamente los mismos ciclos, y subestima el papel de las prácticas simbólicas e ideológicas en la constitución de los mundos sociales. Por ejemplo, en los mundos sociales del activismo de izquierda la disputa político-ideológica entre reformistas y revolucionarios actuó como un principio de oposición y diferenciación importante que contribuyó a la constitución de identidades y lealtades políticas, incidió en las prácticas políticas y en las condiciones de posibilidad para la formación de determinados movimientos al obstaculizar ciertas alianzas y posibilitar otras.

El enfoque de Wallerstein et.al, permite analizar como, a largo plazo, las instituciones del sistema-mundo han condicionado la acción colectiva al producir nuevos segmentos sociales, correlaciones de fuerzas, tensiones y conflictos. También permite ver el “Estado-centrismo” que tenían en común todos los movimientos antisistémicos del siglo XX, independientemente de sus discursos político-ideológicos. Pero si queremos tomar en cuenta el papel de la voluntad, así como las especificidades de un particular movimiento antisistémico el enfoque del sistema mundo no provee de las herramientas conceptuales adecuadas para explicar la participación de los propios agentes en la formación de sus movimientos.

La racionalidad de los actores: la violencia como una estrategia política

Las teorizaciones del sociólogo norteamericano Charles Tilly sobre la acción colectiva, que hacen hincapié en la capacidad de los actores populares de pensar estratégicamente, son útiles para incorporar la pregunta por la racionalidad de los actores en el análisis. A partir de estudiar los ciclos revolucionarios en la Europa del siglo XVIII y XIX, Tilly formuló una “regla general” de la acción colectiva para explicar cómo las secuencias de interacción, lucha y protesta de los grupos dominados desencadenan dinámicas que reestructuran el campo político: Las protestas populares y

¹⁰⁸ Véase, P. Calveiro, “Antiguos y nuevos sentidos de la política y la violencia”, *Lucha Armada en la Argentina. Historia, Debate, Documentos*, Buenos Aires, Año 1, No. 4, septiembre-noviembre 2005 (a), pp. 4-19, p. 14.

obreras de inicios del siglo XIX, señala el sociólogo norteamericano, no eran estallidos espontáneos y desorganizados sino fueron posibles sólo en la medida que los grupos dominados contaban, en sus comunidades, con redes de solidaridad y núcleos organizativos que –como, por ejemplo, sindicatos clandestinos- generalmente operaban de manera secreta. Cuando la coyuntura política lo permitió – como en Gran Bretaña en los años treinta del siglo XIX, Francia y Alemania en 1848- estos núcleos de asociación popular salieron a la luz pública, se expandieron y crecieron numéricamente. La conquista de las libertades políticas, sobre todo la libertad de asociación, dio un gran impulso al crecimiento de las asociaciones obreras, lo cual a la vez confirió más fuerza a los trabajadores para exigir la ampliación de sus derechos políticos y el sufragio universal. La consolidación de estos derechos y su reconocimiento por todos los actores políticos, incluyendo representantes empresariales y el Estado, fue posible porque su ejercicio se incorporó en las prácticas políticas de los grupos dominados para formular nuevas demandas.¹⁰⁹

Charles Tilly define a los movimientos sociales como “complejas formas de acción” que consisten de estrategias *racionales* de acción -presión y desafío- frente al poder y que surgieron paralelamente al estado moderno y las instituciones representativas. Para Tilly -y en este aspecto su planteamiento se asemeja a las teorizaciones del enfoque del sistema-mundo- los movimientos sociales son actores políticos modernos formados en el contexto de la industrialización, urbanización y la centralización del poder político, paralelamente y en confrontación con el surgimiento de las instituciones políticas modernas del Estado-nación. Pero el “enfoque de las oportunidades políticas”, así el nombre de la propuesta de Tilly, se diferencia de la teoría del sistema mundo, al asignar más importancia a las instituciones representativas, las campañas electorales y los partidos políticos, que en su conjunto constituyen las “estructuras de las oportunidades políticas” en función de las cuales actúan los movimientos sociales, que a los procesos de desenvolvimiento del capitalismo. Lo que especialmente nos llama la atención de su planteamiento es la función que el sociólogo norteamericano asigna a la *solidaridad* como un recurso de poder a disposición de los sectores dominados para promover sus exigencias y obtener concesiones de los dominantes. Dependiendo del contexto histórico específico, la solidaridad adquiere formas más o menos estructuradas como, por ejemplo, redes comunitarias de reciprocidad, asociaciones de apoyo mutuo o sindicatos. En cambio, la legalización de una estructura organizativa no es imprescindible para que exista organización -como lo demuestra el proceso de organización obrera-, si bien confiere legitimidad adicional a partir de la institucionalización de las relaciones internas y el

¹⁰⁹ Véase, Charles Tilly, et.al., *El siglo rebelde*. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997, p. 323; véase, también C. Tilly, *Popular Contention in Great Britain 1758-1834*, Cambridge/Mass., Harvard University Press, 1995, especialmente pp. 1-54.

reconocimiento público por el Estado. Pero la legalización implica también el peligro de la burocratización.¹¹⁰

Para Tilly, son cambios en las estructuras de las oportunidades políticas, como coyunturas de apertura política, el debilitamiento del Estado después de una derrota militar importante, conflictos entre elites- que posibilitan que los movimientos sociales desafíen el poder. El rechazo o la aceptación de estas demandas por las elites pueden desencadenar diversos procesos y desenlaces: desde un fortalecimiento del movimiento, expresado en la consolidación de sus organizaciones y la diversificación de sus demandas, que puede llevar a la institucionalización dentro del sistema político existente -como fue el caso de los partidos socialdemócratas europeos o populistas en América Latina- o a la ruptura con las instituciones existentes, como sucedió en la revolución rusa de 1917 o la revolución cubana de 1959. Por otra parte, la reacción violenta de los grupos dominantes y del Estado puede provocar asimismo un reflujo de los movimientos sociales progresistas y fortalecer actores contrarrevolucionarios y movimientos sociales de derecha, como los fascismos en la Europa de los años treinta o los Estados de Seguridad Nacional en América Latina en los años setenta del siglo XX. Los tres desenlaces -incorporación reformista, ruptura revolucionaria o choque contrarrevolucionario- producen un reordenamiento del campo político que asigna a los diversos agentes nuevas posiciones -sea en su centro o en los márgenes- y reestructura las oportunidades políticas.

En el enfoque de la estructura de las oportunidades políticas, el uso de la fuerza es considerado una estrategia racional a la cual recurren los movimientos cuando, en un contexto de exclusión política o cerrazón institucional, las prácticas no violentas de protesta no son efectivas para obtener respuestas favorables a las peticiones, o como una reacción a las acciones de represión llevadas a cabo por agentes vinculados al poder. Por lo general la frontera al interior de los movimientos sociales entre grupos violentos y no violentos es difusa y cambia con el tiempo: “la mayor parte de la violencia colectiva surge de corrientes mucho más amplias de acciones colectivas esencialmente no violentas”.¹¹¹ Mientras más fuerte y organizado sea un grupo, señala Tilly, menos necesidad tiene de recurrir a métodos violentos para promover sus intereses. En cambio, para un grupo carente de poder, cuya existencia a veces está ilegalizada, puede hacer sentido realizar actos violentos, incluso si se espera una respuesta represiva, porque amplía su voz, es decir, contribuye a dar a conocer al

¹¹⁰ Véase, C. Tilly, “Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas”, *Sociológica*, México, No. 28, Año 10, mayo-agosto de 1995, pp. 13-35.

¹¹¹ C. Tilly, et.al., *op.cit.*, 1997, p. 325.

grupo y sus demandas. Si no actuar en absoluto significaría de antemano la derrota, el uso de métodos violentos se torna una estrategia racional, siempre y cuando incrementa la posibilidad, aunque sea mínima, de alcanzar los objetivos del grupo. ¹¹²

En el caso centroamericano el modelo de Tilly permite formular una respuesta tentativa a la pregunta por qué las organizaciones guerrilleras en Guatemala, Nicaragua y El Salvador lograron ampliar su influencia en los años setenta. La opción de la vía armada pudo ampliar sus bases sociales en la medida que la movilización social se topó con canales de expresión cerrados, los fraudes recurrentes generalizaron el desprestigio de los procesos electorales como vía de cambio político y la ola de violencia de Estado en contra de todas las formas de disidencia, incluso la más moderada, contribuyó a la sensación que los que optaron por la acción armada no tenían mucho que perder. Para este proceso de radicalización, el triunfo de la revolución nicaragüense fue un factor coyuntural insoslayable porque parecía confirmar que combinar la vía armada con la movilización de masas era una estrategia efectiva para acceder al poder político e iniciar una transformación profunda de la sociedad. ¹¹³

Asimismo permite ver la contribución que hicieron los movimientos revolucionarios para cambiar la “estructura de las oportunidades políticas”: el orden político posbélico en los tres países – caracterizado por el fin de la exclusión política de la izquierda y la existencia de una sociedad civil con diversas y heterogéneas organizaciones que busca incidir en el espacio político-institucional– no se logró por la buena voluntad de los grupos dominantes sino por medio de la presión y el desafío armado de los movimientos revolucionarios.

El planteamiento de Tilly da también claves para entender la desmovilización política de los noventa. La represión –o sea la violencia del Estado– es un instrumento de disciplinamiento social efectivo que “enseña” a los agentes a tomar distancia de formas activas de participación política:

...a pesar de la existencia de una optimista mitología progresista que afirma lo contrario, la represión violenta funciona. Funciona a corto plazo. Funciona incluso mejor a largo plazo: por lo que hemos podido ver, no es cierto que una población oprimida por una tiranía consistente se irrite a la larga lo suficiente para intentar sacudirse el yugo. De hecho, las poblaciones reprimidas se desmovilizan, utilizan los canales autorizados de acción

¹¹² Véase, *Ibíd.*, pp. 323-331.

¹¹³ Véase, por ejemplo, C. M. Vilas, *op.cit.*, 1994, especialmente pp. 93-151; Alain Rouquié, *Guerras y Paz en América Central*, México, FCE, 1994, especialmente pp. 46-83. Agradezco las sugerencias de Carlos Figueroa Ibarra de tomar en cuenta el papel que jugó en este periodo la revolución nicaragüense para ampliar el repertorio simbólico de la lucha popular y concretar el proyecto de los revolucionarios centroamericanos en el Estado sandinista.

colectiva y buscan formas no colectivas de realizar sus fines. La represión funciona en el sentido de que la imposición de castigos violentos (daño y aprehensión de personas y bienes) a las acciones colectivas disminuye su intensidad y frecuencia. En general, pues, el uso de métodos violentos es mucho más eficaz para los gobiernos que para sus contrincantes.¹¹⁴

Las transiciones a la democracia en América Latina confirman la hipótesis que la violencia estatal incrementa su eficacia para hacer desistir a la gente de participar en la movilización política si paralelamente se abren canales de participación controlada, por ejemplo, elecciones no fraudulentas. En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, la transición a la democracia inició después de que el terrorismo de Estado, y en el caso nicaragüense la agresión contrarrevolucionaria, disciplinaron políticamente a las sociedades.

Si esta primera lectura destaca los efectos prácticos de la violencia y la represión sobre la acción política, la otra lectura remite a las metas de los movimientos. Siguiendo a Tilly, podríamos interpretar el cumplimiento de algunos de los objetivos de los movimientos revolucionarios – principalmente la apertura del espacio político-institucional a la participación de la izquierda – como una razón para que la mística y los lazos solidarios, en los cuales se había apoyado esta forma de la acción colectiva, perdieran significado. En su lugar aparecían nuevas prácticas políticas, modalidades de organización y nuevos discursos. Sin embargo, no se debería olvidar que las metas de los movimientos revolucionarios abarcaban mucho más que la lucha por la democracia representativa y la desmilitarización del Estado. Por lo tanto, una tercera lectura interpretaría la desmovilización política como una reacción ante la transformación de las estructuras de oportunidades políticas. Después de la violencia de la guerra y ante la creciente dificultad para incidir en un campo político cada vez más cerrado y autorreferente optar por estrategias individuales, en vez de colectivas, se vuelve un acto racional.

Los códigos de la violencia

El enfoque de las “estructuras de las oportunidades políticas” representa un avance comparado con aquellas teorizaciones que destacan la espontaneidad y reactividad de la violencia colectiva porque concibe las prácticas violentas como parte de estrategias racionales de agentes que, dentro de un movimiento social más amplio, persiguen fines como obtener visibilidad política como grupo, amplificar su voz u obtener concesiones de los poderosos. La debilidad del enfoque reside en que sólo permite visualizar aquellas dimensiones de la acción social que remiten al cálculo consciente de intereses, objetivos y posibles logros. Pero la fascinación de la lucha armada que en el transcurso

¹¹⁴ C. Tilly, *op.cit.*, 1997, p. 329.

de los sesenta y setenta trascendió a los círculos reducidos de universitarios radicalizados y militantes de izquierda y alcanzó a segmentos importantes del movimiento popular organizado, convirtiendo de esta manera a los grupos guerrilleros en El Salvador, Nicaragua y Guatemala en ejes articuladores de movimientos revolucionarios amplios, no se explica sólo tomando en cuenta el cálculo conciente de actores que, primero, promovieron sus intereses colectivos por medio de estrategias legales de lucha y de presión política y, al darse cuenta de que estos medios no funcionaban, cambiaron la pancarta y el pliego petitorio por el cóctel molotov y las armas de fuego. Habría que replantearse la pregunta por los motivos e incluir también el conjunto de disposiciones que llevaron a personas de diferentes orígenes sociales y convicciones ideológicas a asumir la opción político-militar como principal (y a veces única) estrategia política viable y deseable.

La pregunta por las disposiciones histórica y culturalmente construidas, que hicieron factibles los movimientos guerrilleros, conduce la mirada hacia el campo problemático de las condiciones *simbólicas* de posibilidad de la acción colectiva. Como señala Bronislaw Baczko, tanto las acciones que buscan conservar el poder como aquellas que lo desafían, pretenden multiplicar y reforzar su fuerza a partir de la producción y apropiación de imágenes y representaciones simbólicas que legitiman su acción y deslegitiman al otro. Los “imaginarios sociales” abarcan toda la producción de las representaciones globales de la sociedad, del orden y las instituciones sociales, de los actores y sus relaciones en un momento histórico y lugar dado. Por tanto no incluye sólo a los proyectos políticos –el aspecto más “racional” y acotado del imaginario- sino también los sueños, esperanzas, temores y símbolos que dan cuenta de la memoria y del horizonte de expectativas de una colectividad:

Todo campo de experiencias sociales está rodeado de un horizonte de expectativas y recuerdos, de temores y esperanzas. El dispositivo imaginario asegura a un grupo social un esquema colectivo de interpretación de las experiencias individuales tan complejas como variadas, la codificación de expectativas y esperanzas, así como la fusión en el crisol de una memoria colectiva, de los recuerdos y de las representaciones del pasado cercano y lejano. La potencia unificadora de los imaginarios sociales está asegurada por la fusión entre verdad y normatividad, informaciones y valores, que se opera por y en el simbolismo.¹¹⁵

Desde los años treinta el “dispositivo imaginario” de la izquierda marxista, representada principalmente por los Partidos Comunistas, excluía la vía insurreccional como medio para tomar el poder, debido a la hegemonía de la teoría estalinista de la revolución por etapas, según la cual en América Latina había que completar primero la etapa nacional-democrática de la revolución

¹¹⁵ Véase, Bronislaw Baczko, *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas*. Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 2005, pp. 29-30.

burguesa. Fue después de la revolución cubana y la declaración del carácter socialista de la misma por Fidel Castro en 1961, que en los ámbitos comunistas se empezó a cuestionar en la teoría y la práctica la estrategia política de acumular fuerzas por medio de la organización sindical, la lucha política legal y las alianzas con la llamada “burguesía democrática”. La lucha de liberación nacional en Vietnam fue otro acontecimiento que, con la participación de intelectuales, escritores y artistas, “movilizó” las condiciones simbólicas de posibilidad para la inserción de la lucha armada al repertorio de protesta del movimiento popular organizado.¹¹⁶ Específicamente en Centroamérica el “re-descubrimiento” de la vía insurreccional en los años sesenta por una parte de la izquierda marxista se encontró con la tradición liberal de la lucha anti-dictatorial, en donde la vía armada figuraba como una estrategia legítima para remover a los gobernantes déspotas e instaurar un estado de derecho y democrático. El triunfo de la revolución sandinista actualizó este imaginario, convirtiendo –para una generación de militantes de izquierda- la revolución popular y anti-imperialista en una posibilidad alcanzable.¹¹⁷

Una manera para aproximarnos a los imaginarios –un concepto útil pero también inasible por su polisemia- de los movimientos sociales es mediante la reconstrucción de las experiencias sociales, concepto acuñado por el historiador británico Edward P. Thompson. El aporte de Thompson al

¹¹⁶ Véase, por ejemplo, la obra de Roque Dalton, especialmente, *Las historias prohibidas del pulgarcito*, México, Siglo XXI, 1974; y *Un libro rojo para Lenin. Poema-collage (Habana, 1970-1973)*, San Salvador, UCA Editores, 2001. Para un análisis del impacto de la revolución cubana sobre los intelectuales radicales véase, Claudia Gilman, *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

¹¹⁷ Hay que recordar que en los Partidos Comunistas latinoamericanos en los años veinte se planteaba la vía insurreccional-revolucionaria como estrategia de la toma de poder, la cual tuvo dos manifestaciones prácticas: en 1932 la insurrección en El Salvador y en 1935 –si bien con tintes más golpistas que insurreccionales- el levantamiento militar, encabezado por Luis Carlos Prestes, en Brasil, en cuya preparación participó la KOMINTERN. Sin embargo, la tradición insurreccional desapareció bajo el dominio del planteamiento estalinista de la revolución por etapas hasta que fue recuperada por disidentes comunistas, como Roque Dalton, quienes al defender la vía armada usaron las experiencias históricas como argumentos a su favor. Por otra parte, si bien la revolución cubana marca el inicio de un nuevo periodo en relación con la “popularidad” de la vía armada, hay que señalar que en Centroamérica antes de 1959 la estrategia insurreccional formaba parte del repertorio liberal para remover a gobiernos dictatoriales. Esto lo demuestran los “brotos insurreccionales” que se manifestaron entre 1940 y 1948 en varios países centroamericanos y caribeños y que fueron encabezados generalmente por políticos e intelectuales liberales. Sobre las discusiones en torno a la vía insurreccional en la izquierda marxista en América Latina véase, por ejemplo, Michael Löwy, “Points of Reference for a History of Marxism in Latin America”, Introducción a M. Löwy (ed.), *Marxism in Latin America from 1909 to the Present*, New Jersey/London, Humanities Press, 1992, pp. XIII-LXV. Sobre el papel de la vía armada en el imaginario liberal y las convergencias y divergencias entre planteamientos liberales y marxistas con respecto a este tema en Centroamérica, véase Ignacio Sosa, “Presentación” y Enrique Camacho Navarro, “La legión del Caribe. La insurrección democrática en Centroamérica y el Caribe”, ambos artículos se encuentran en I. Sosa (coord.), *Insurrección y Democracia en el Circuncaribe*, México, UNAM/CCYDEL, 1998, pp. 7-46 y pp. 47-74, respectivamente. Agradezco a Mario Vázquez haberme llamado la atención sobre la tradición insurreccional en el Liberalismo Centroamericano.

estudio de los movimientos sociales reside en la ruptura con las concepciones mecanicistas del estructuralismo marxista que visualizaba a las clases sociales como productos de las transformaciones de la estructura económica. En cambio, para Thompson las clases sociales –como colectivos con identidad social y estrategias políticas de acción- se constituyen en la medida que hombres y mujeres experimentan relaciones de dominación y explotación, identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y, por medio de esta lucha, van descubriendo a sus aliados y adversarios.¹¹⁸

La noción de “experiencia social” es probablemente el concepto más innovador en la obra de Thompson –pero también el más ambiguo según sus críticos- porque se ofrece como un concepto que media entre estructuras y conciencia.¹¹⁹ Este concepto remite al supuesto que la gente no actúa solamente como reacción a determinadas transformaciones económicas sino a partir de ciertas *disposiciones* que son construidas históricamente y se expresan en un conjunto de instituciones, tradiciones y valores. Desde la primera publicación de su obra principal, *La formación de la clase obrera inglesa* surgió un debate intenso sobre los alcances y limitaciones de la propuesta metodológica y conceptual de Thompson para estudiar a los movimientos sociales del siglo XIX y XX.¹²⁰ Aquí nos interesa destacar las posibilidades que ofrece su propuesta sobre la violencia popular –desarrollada con base en el análisis de las modalidades que adquirió la protesta en el contexto del surgimiento del modo de producción capitalista- para analizar el significado de la violencia en la conflictividad

¹¹⁸ Edward P. Thompson presentó su propuesta metodológica y conceptual para estudiar a las clases sociales en diversos textos e investigaciones. Véase, por ejemplo, E. P. Thompson, “La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿Lucha de clases sin clases?”, E.P. Thompson, *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*, Barcelona, Ed. Crítica, 1979, pp. 13-61; *Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse [La formación de la clase obrera inglesa]*, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1987.

¹¹⁹ William H. Sewell, Jr., “How Classes are Made: Critical Reflections on E.P. Thompson’s Theory of Working-class Formation”, Harvey J. Kaye y Keith McClelland (eds.), *E.P. Thompson. Critical Perspectives*, Philadelphia, Temple University Press, 1990, pp. 50-77, p. 53.

¹²⁰ No cabe duda que las investigaciones del historiador marxista sobre la formación histórica de la clase obrera en Inglaterra fueron un aporte sustancial para cuestionar los postulados estructural-funcionalistas y estalinistas en la historiografía y las ciencias sociales, contribuyendo a la constitución de nuevas corrientes como la “historia desde abajo” o los estudios subalternos. Véase, por ejemplo, el homenaje crítico de la obra de Thompson en el libro editado por Harvey J. Kaye y Keith McClelland. Autores como Charles Tilly o Richard Biernacki pretenden abarcar con sus propias investigaciones vacíos o problemas que Thompson, según ellos, pasó por alto al analizar principalmente la resistencia de los sectores subalternos a la modernización capitalista y no tomar en cuenta las nuevas formas de protesta que surgieron en el periodo de la revolución industrial y que fueron decisivos para la constitución del movimiento obrero. Véase, Richard Biernacki, “Work and Culture in the Reception of Class Ideologies”, John R. Hall, *Reworking Class*, London, Cornell University Press, 1997; pp. 169-192; C. Tilly, *op.cit.*, 1995; Para una defensa general de la propuesta de Thompson, véase, Ellen Meiksins Wood, *Democracia contra Capitalismo*, México, Siglo XXI, 2000, especialmente el capítulo 3 (pp. 90-126), dedicado especialmente a la conceptualización de clase social de Thompson.

sociopolítica en Centroamérica. En sus estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Thompson prestó una especial atención a la cultura como “campo de batalla” de las luchas entre sectores subalternos y dominantes.¹²¹ El historiador marxista considera las prácticas de la violencia popular no como respuestas irracionales de las clases subalternas al deterioro de sus condiciones de vida –por cierto, una postura generalizada entre muchos historiadores en los años cincuenta y sesenta que Thompson combatió con vehemencia.¹²² sino como una modalidad de la protesta popular dentro de un contexto cultural particular en el cual tanto los dominados como los dominantes entendieran los significados y los “mensajes” ocultos de los actos violentos.

Para Thompson –acercándose en esto a la posición de Tilly– la violencia popular del siglo XVIII se manifestaba con mayor vehemencia cuando la desfavorable correlación de fuerzas cerraba todas las vías a la protesta pacífica de los grupos dominados y era castigada severamente con ejecuciones o el destierro. En estas circunstancias, la protesta pública tendía a volverse acción directa, como por ejemplo en los motines de subsistencia donde los participantes protegidos por el anonimato de la masa imponían por un momento sus reglas del juego y nociones sobre el deber ser de las responsabilidades de los ricos frente a los pobres. También podía asumir modalidades secretas y conspirativas, como incendios de graneros, destrucción de maquinaria o amenazas y chantajes anónimos en contra de los ricos. El “contraterror de los pobres”, como Thompson denominaba estas prácticas de intimidación, tenía varias funciones: operaba como un mecanismo de resistencia para hacer valer “usos y costumbres” de una economía moral violentada por el ascenso de la economía política del libre mercado; también podía anticipar momentos de desafío abierto y de rebelión. Daba cuenta, pues, de un “discurso oculto” que coexistía con la sumisión y la deferencia, y por medio del cual los dominados denunciaban los maltratos y abusos de los poderosos.¹²³

La propuesta metodológica de Thompson invita a buscar no una sola lógica en las prácticas sociales –violentas y no violentas– de los movimientos sociales, sino reconocer la combinación de múltiples racionalidades, condicionadas por pertenencias regionales, de clase, étnicas y de género y que

¹²¹ Véase, especialmente, E. P. Thompson, *op.cit.*, 1994 y *Costumbres en Común*, Barcelona, Ed. Crítica, 1995.

¹²² Véase, E. P. Thompson, “La economía “moral” de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII”, *op.cit.*, 1979, pp. 62-134.

¹²³ Véase, *Ibid.*; Otros estudios sobre los “discursos ocultos” de los subordinados, véase Robert Darnton, “La rebelión de los obreros: la gran matanza de gatos en la calle Saint-Séverin”, *La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa*, México, FCE, 2000, pp. 81-108; James C. Scott, *Los dominados y el arte de la resistencia*, México, ERA, 2000, R. Guha, *op.cit.*, 2002.

expresan diferentes sistemas de representación y universos simbólicos.¹²⁴ Todas estas dimensiones rebasan la lógica del cálculo económico que los enfoques de la elección racional y del individualismo metodológico sostienen como la única racionalidad efectiva de la acción social. Al recuperar la noción de “códigos de la violencia” hacemos referencia a los sistemas de representación y significación que, desde el sentido común actual pueden parecer ilógicos y contraproducentes, pero que para los agentes de ese entonces hacían sentido y orientaban su accionar.¹²⁵

La línea argumentativa de Thompson lleva a reconstruir el sentido de la violencia política en Centroamérica a partir de su función en los proyectos ideológicos de los grupos guerrilleros, las instituciones estatales y de las clases dominantes. Esto implica construir herramientas conceptuales e hipótesis que ayudan a entender la dimensión ideológica del “código de la violencia” y los procesos por medio de los cuales éste se conectó con el movimiento popular organizado. En este sentido conviene retomar lo que Barrington Moore señaló sobre el impulso hacia la negación del Otro como fundamento de la violencia colectiva moderna. Para este autor, la violencia se vuelve parte de la acción colectiva en dos ocasiones: cuando las rutinas y coacciones de la vida cotidiana tienden a romperse -como durante procesos revolucionarios o desmoronamientos de Estados-, o en determinados momentos históricos cuando los actores de un conflicto buscan exterminar a sus adversarios políticos, ideológicos o religiosos. Este impulso hacia el exterminio del Otro trasciende las razones instrumentales y calculadoras de la acción y manifiesta estructuras culturales profundas del mundo occidental que Moore remonta hasta los orígenes del monoteísmo. Los afanes de las religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islam) por establecer límites claros entre lo “puro” y lo “impuro”, definir a las herejías y expulsar a los herejes de la comunidad no desaparecieron con la secularización de las sociedades occidentales en el siglo XVIII; al contrario, las prácticas y creencias fueron transferidas al campo político manifestándose, por una parte, en el exclusivismo ético que ha caracterizado a las ideologías políticas modernas y, por otra parte, en las

¹²⁴ Ni hablar de los impulsos de la subconciencia una dimensión de la racionalidad que habría que tomar en cuenta. Pero como socióloga me faltan las herramientas y técnicas para incorporar esta dimensión al análisis.

¹²⁵ Sobre las críticas al enfoque de la elección racional, véase P. Bourdieu, “¿Existe un acto desinteresado?,” *op.cit.*, 1997, pp. 139-158; Homero R. Saltalamacchia, *La historia de vida: Reflexiones a partir de una experiencia de investigación*, Caguas, Ed. CIJUP, 1992, especialmente pp. 58-77. El prólogo de Edelberto Torres-Rivas sobre la razón de ser y las dinámicas de la violencia en Guatemala, presentado en el informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Guatemala, me ayudaron a formular esta idea. Véase, E. Torres-Rivas, “La metáfora de una sociedad que se castiga a sí misma. Acerca del conflicto armado y sus consecuencias”, Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), *Guatemala: Causas y Orígenes del Enfrentamiento Armado Interno*, Ciudad de Guatemala, F&G Editores, 2000, pp. XV-XXXII.

prácticas y discursos que han justificado, en nombre de la pureza moral, la deshumanización y persecución de seres humanos considerados peligrosos y enemigos de la sociedad.¹²⁶

Aplicando estas ideas al caso centroamericano, podemos señalar que la dominación simbólica de las elites económicas y políticas, expresada en su clasismo y racismo -y que a partir de los años treinta y cuarenta del siglo pasado se articuló con un marcado y agresivo anticomunismo- reforzó la violencia estructural expresada en la discriminación social y la exclusión política de los sectores populares. En el anticomunismo se expresaban también los temores de las clases dominantes de no poder contener la insubordinación popular, y que eran, en la memoria de las elites, las huellas de los levantamientos populares reprimidos con violencia, como la insurrección campesina en El Salvador y el movimiento de Augusto César Sandino en Nicaragua.¹²⁷ Las prácticas violentas de unos actores confieren sentido y justificación a los actos violentos de los otros. En un campo político condicionado por el miedo y a la violencia, los activistas de las organizaciones guerrilleras -así una de nuestras hipótesis centrales- apostaban a la violencia para construir su hegemonía en el movimiento popular por medio de desafiar el poder de los dominantes y generar una dinámica colectiva “contestataria”.¹²⁸ Fue una apuesta arriesgada que funcionó en la medida que sólo un grupo pequeño de empresarios y militares accedía al campo político, mientras los espacios de la vida cotidiana de los sectores populares -la comunidad campesina, la colonia y el lugar de trabajo- se caracterizaban por la discriminación social y étnica y la exclusión política. Apostar a la confrontación formaba, además, parte del sentido común de la época, acostumbrada a pensar el mundo, la política y el cambio social desde la organización bipolar de la guerra fría -es decir, la separación nítida entre enemigo y amigo, izquierda y derecha-, y con la mirada puesta en el aparato estatal, lo cual se expresaba en términos como revolución, ruptura y toma de poder.

¿Y qué ha cambiado desde entonces? Como señala Pilar Calveiro, la reorganización hegemónica mundial, que inició en los años setenta pero adquirió más velocidad tras el fin de la guerra fría- ha implicado una reconfiguración del sentido común con rasgos particulares, entre ellos, la sustitución

¹²⁶ B. Moore, *Pureza moral y persecución en la historia*, Barcelona, Paidós, 2001, pp. 91-147.

¹²⁷ E. Torres-Rivas, *op.cit.*, 2000, p. XVII; G. Paige, *op.cit.*, 1998.

¹²⁸ Piénsese, por ejemplo, en El Salvador en el secuestro de Ernesto Regalado Dueñas el 19 de febrero de 1971 por “el Grupo”, como se conocía en este entonces al núcleo inicial del ERP. Este operativo se puede interpretar desde distintas perspectivas: No cabe duda que se trató de un operativo para obtener fondos, pero también era un desafío al poder de la oligarquía al secuestrar a un integrante de una de las familias más representativas. La persecución desatada en contra de los núcleos iniciales de la guerrilla salvadoreña demuestran que la oligarquía entendió el mensaje. Véase, “Origen e historia del Ejército Revolucionario del Pueblo”, *Librería histórica El Togoroz*, disponible en línea eltogoroz.net/erp.htm (consultado en octubre 2006).

del mundo bipolar, como eje organizador de las diferencias ideológicas, por un mundo unipolar con fronteras desdibujadas y movedizas donde la sociedad civil y el mundo privado tienen más importancia que la sociedad política y lo público. En el campo político, la revalorización de lo privado implica, por una parte, la cancelación de lo público como espacio donde se constituyen y comunican los sujetos colectivos y, por otra parte, la especialización del quehacer político como una actividad de la cual se encargan aquellos que tienen la capacitación y el saber técnico para tomar decisiones muy complejas. Lo cual significa la marginación y exclusión de todos aquellos que “no saben” de la toma de decisiones políticas sobre lo común y lo público.¹²⁹

Esta visión del mundo tiende a volverse tan autoritaria y excluyente como la anterior porque los que se colocan fuera del consenso rápidamente son estigmatizados como anacrónicos, delincuentes o terroristas. Esto, junto a la omisión del componente violento de la política, al convertirla en una actividad basada en el saber técnico y especializado, ha producido una naturalización de la violencia estatal y una estigmatización de la protesta social como acto criminal, cuando recurre a métodos de acción directa, como la toma de edificios, bloqueos de carreteras y plantones.¹³⁰

¹²⁹ P. Calveiro, *op.cit.*, 2004/2005, pp. 75-76 y *op.cit.*, 2005 (a), pp. 17-19.

¹³⁰ La naturalización de la violencia estatal manifestado en la exigencia ciudadana de aplicar “mano dura” en el combate a la delincuencia se manifiesta, por ejemplo, en el apoyo electoral que reciben aquellos candidatos que prometen una política de seguridad pública más represiva. Véase, J. M. Cruz, *op.cit.*, 2003, pp. 19-59.

1.5. Las transformaciones del mundo de la militancia: Estrategias de reconversión en un campo político en movimiento

Cada perspectiva teórica se parece a una ventana que permite visualizar un recorte del mundo social. En este sentido, como lo plantea Homero Saltalamaccia, cada enfoque teórico posee “algo del secreto de lo real” y al abrir el campo problemático de la investigación ayuda a recuperar una parte de estas ópticas.¹³¹ Los tres enfoques sobre las articulaciones entre violencia y movilización social, que se presentaron en el apartado anterior, ofrecen un conjunto de premisas y claves para pensar las lógicas sociales de la acción colectiva en El Salvador, y reconstruir los procesos por medio de los cuales la violencia colectiva fue estigmatizada como estrategia de presión política en la década de los noventa.¹³²

Si partimos del supuesto que la finalización de las guerras civiles fue una consecuencia del agotamiento de la estrategia militar, compartida por (casi) todos los actores políticos, surgen tres interrogantes: en primer lugar, cómo los movimientos revolucionarios llevaron a cabo el replanteamiento de sus estrategias y proyectos políticos, en segundo lugar, qué recursos tuvieron a su disposición para lograr lo anterior y, en tercer lugar, cómo podríamos interpretar el proceso de institucionalización de los movimientos revolucionarios en un conjunto de organizaciones partidistas y sociales en el contexto de la pacificación.

Desde distintos ángulos, cada uno de los tres enfoques, presentados en el apartado anterior, ofrece claves para interpretar el cierre del campo político en la década de los noventa y que fue un proceso crucial para los cambios en las lógicas sociales de la acción colectiva. Repasando las conclusiones de la teoría del sistema-mundo, es posible pensar estos cambios desde las transformaciones estructurales producidas por la mundialización del capital, que cambiaron las correlaciones de

¹³¹ Véase, H. R. Saltalamaccia, *op.cit.*, 1992, p. 51.

¹³² Un caso ejemplar de la marginación política de los actores que buscaron mantener las prácticas armadas de presión fue la suerte de los “recompas” (desmovilizados del Ejército Popular Sandinista) en Nicaragua. En Julio de 1993 varios cientos de recompas armados, agrupados en el Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos (FROC) tomaron por dos días la capital provincial Estelí para exigir del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro tierras y créditos para los desmovilizados. El Ejército recuperó la ciudad y los “alzados” se retiraron sin haber logrado concesiones importantes del gobierno o –como habían esperado- el respaldo del FSLN y de las bases sandinistas. La acción benefició, a fin de cuentas, al ejército en su transición hacia una institución profesional y apartidista. Los encabezados de los artículos periodísticos en Nicaragua ilustran la derrota de la opción militar. Véase, “Fieros combates en el centro de Estelí.” *Barricada*, 22 de julio de 1993, Portada; “EPS recupera Estelí en cruentos combates”, *Barricada*, 23 de julio 1993 Portada; “Desalzados FROC piden amnistía y trabajo.” *Barricada*, 26 de julio 1993, Portada; “Afirma el New York Times: ‘Intriga y traición en Estelí’”, *La Prensa*, 27 de Julio de 1993; “FROC anuncia desmovilización. Exigen que amnistía cubra a todos incluyendo a Pedrito El Hondureño.”, *Barricada*, 30 de Julio de 1993, Portada.

fuerza entre los grupos y clases sociales y evidenciaron la caducidad de proyectos políticos que tuvieran puestos su mirada en la toma del poder estatal. La teoría del sistema-mundo ofrece también una teorización convincente para analizar la burocratización de los movimientos antisistémicos como parte de sus ciclos de auge, estabilización y degeneración organizativa.

El enfoque de las “estructuras de la oportunidad política” de Charles Tilly permite considerar la desmovilización social de los años noventa como un “efecto no deseado” de la movilización política anterior, la cual con la apertura de los sistemas políticos cerrados había resuelto uno de sus objetivos más importantes. Se puede interpretar la creciente institucionalización de las prácticas de participación y de organización política de la izquierda por medio de la constitución de aparatos partidistas, tanto como una consecuencia del abandono de métodos de acción directa, como una estrategia racional de la burocracia partidista para enfrentar la desmovilización social.

El último enfoque presentado trasciende las explicaciones que ubican las lógicas de la acción colectiva sólo en la reacción social a transformaciones estructurales o en el cálculo racional de los agentes involucrados. En cambio, ofrece claves para leer los cambios en la acción colectiva dentro de las profundas modificaciones que ocurrieron en la visión del mundo de la izquierda centroamericana, al coincidir la derrota electoral de la revolución sandinista con el fin de la guerra fría. Hay que tomar en cuenta la crisis de los referentes de sentido en el campo político, compartidos por la izquierda y la derecha –es decir, la organización bipolar de la guerra fría y la reivindicación de lo público y lo estatal como espacios centrales del poder- para comprender qué pasó en los noventa en el ámbito de los proyectos e imaginarios sociales.¹³³

La integración de estas claves y sugerencias conceptuales en el proceso de construcción del objeto de estudio, llevó a formular dos supuestos o líneas de argumentación. La primera línea de argumentación gira en torno a la reestructuración del campo político. Este proceso, que inició con los cambios económicos, sociales y políticos de la década de los setenta, al eliminar algunas posiciones y crear otras, produjo nuevas relaciones entre los agentes y, por ende, nuevas lógicas de acción. La segunda línea de argumentación enfoca nuestra unidad de observación, los activistas de las organizaciones político-militares del movimiento revolucionario salvadoreño. Con este término nos referimos no sólo a los militantes incorporados directamente al aparato militar sino también a los que servían como enlaces entre el aparato político-militar y el movimiento popular. Con la

¹³³ Pilar Calveiro, *Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70*, Buenos Aires, Ed. Norma, 2005 (b), pp. 14-15.

desmovilización de la guerrilla, estos activistas –agentes estratégicos en la construcción de la contrahegemonía guerrillera en los mundos sociales de la universidad, el sindicato o la comunidad campesina- se encontraban ante la disyuntiva de buscar un nuevo lugar en el campo político o salirse de él. Las diversas estrategias de búsqueda y adaptación de los activistas políticos incidieron, así nuestra hipótesis, en la emergencia de las lógicas sociales que, desde entonces, dominan el campo político de las sociedades centroamericanas.

En otras palabras, al mismo tiempo que sus estrategias de reconversión social fueron producidas por la reestructuración del campo político centroamericano, ellos –por medio de sus decisiones y actos- moldearon los resultados de dicho proceso. Hay una serie de conceptos que fundamentan estas líneas de argumentación y que se presentarán a continuación.

La reestructuración del campo político

La crisis política centroamericana y su desenlace –una transición política y reforma institucional como consecuencia de guerras civiles- dan cuenta de un proceso de reestructuración del campo político con resultados contradictorios. La ampliación de las estrechas fronteras del campo a raíz de la apertura de espacios de participación institucional para la izquierda se articuló con un proceso de especialización de la política, impulsado por agentes tan diversos como ONGs, organismos internacionales y partidos políticos. Este proceso de especialización introduce un nuevo elemento de discriminación: al exigir conocimientos y competencias específicas como condición *sine qua non* para hacerse escuchar en el espacio público, margina a los que no cuentan con estas habilidades.

Para aprehender el significado de este proceso para los repertorios de protesta y las modalidades de organización popular recuperamos la noción de campo político, propuesto por Pierre Bourdieu a partir de sus trabajos sobre el espacio social y los sistemas de dominación simbólica en las sociedades modernas. Acorde a Bourdieu, una particularidad del mundo moderno es la progresiva diferenciación del universo social en campos relativamente autónomos en torno a actividades específicas. El campo político es un espacio relacional, donde cada posición adquiere su significado en relación con otras posiciones y cada una cuenta con propiedades y bienes que son objetos de lucha entre los agentes. Aunque las reflexiones de Pierre Bourdieu se centraron sobre todo en los aspectos institucionales del campo político –debido a que sus referentes empíricos principales fueron los sistemas políticos de las sociedades europeas y de Estados Unidos- su propuesta de

conceptualización provee de herramientas para pensar la conflictividad sociopolítica en sistemas políticos menos estables.¹³⁴

A diferencia de otras teorizaciones sobre la política, fundamentadas en la separación entre Estado y sociedad, la noción de campo político se plantea la articulación entre lo social y lo político problematizando los mecanismos de representación y las condiciones de acceso al espacio político. Estos mecanismos se han constituido históricamente a partir de un proceso de diferenciación entre el microcosmos de la política y otros mundos sociales, acompañado por la formalización del acceso al campo político, la exclusión de un segmento considerable de la sociedad y la constitución de lógicas de acción independientes y propias de la política. Bourdieu señala la importancia de:

Recordar que las ideologías están siempre doblemente determinadas –que deben sus características más específicas no solamente a los intereses de las clases o de las fracciones de clase que expresan (función de sociodicea), sino también a los intereses específicos de los que las producen y a la lógica específica del campo de producción [...] es darse el medio de escapar a la reducción brutal de los productos ideológicos a los intereses de las clases que ellos sirven [...] sin sucumbir a la ilusión idealista que consiste en tratar a las producciones ideológicas como totalidades autosuficientes y auto-engendradas susceptibles de un análisis puro y puramente interno (semiología).¹³⁵

Es decir, la capa de especialistas y productores de sentido en el campo político comparte –más allá de sus discursos ideológicos- lógicas e intereses que confieren un significado específico a sus actos, y que los excluidos del campo no siempre logran entender.¹³⁶

La diferencia entre esta capa de profesionales y los “profanos” (la mayoría de la sociedad), constituye una relación fundamental de poder en las sociedades modernas, pero también uno de sus puntos de tensión y de conflicto permanente. Al establecer una separación entre los que “saben” y los que “no saben” -es decir no cuentan con las habilidades y los conocimientos que los profesionales establecen como necesarios para participar en la política- se erige una barrera que impide que una amplia gama de actores sociales incida en los asuntos públicos. Sin embargo, en las democracias representativas los agentes profesionales del campo político no pueden cerrarse completamente (aunque quisieran hacerlo) porque su legitimidad –es decir, su reconocimiento

¹³⁴ Una introducción muy completa a la obra y el pensamiento de Pierre Bourdieu se encuentra en Patrice Bonnewitz, *La sociología de Pierre Bourdieu*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 2003.

¹³⁵ P. Bourdieu, “Sobre el poder simbólico”, *Intelectuales, política y poder*, Eudeba, Buenos Aires, 1999, pp. 65-73, p. 70.

¹³⁶ Por esto Bourdieu enfatiza la importancia de las ciencias sociales para revelar estas lógicas de acción.

social- depende de la capacidad de mantener, al menos hasta cierto punto, fronteras permeables.¹³⁷ Los límites del campo político son, por lo tanto, dinámicos y siempre existe la posibilidad que, bajo determinadas circunstancias, la tensión entre las tendencias de cierre y apertura se convierte en abierta contradicción. La necesidad de mantener la legitimidad del campo político –que implica la integración de nuevos actores sociales con sus demandas- choca contra los impulsos “desde adentro” de mantener la estabilidad sistémica con todos los medios posibles, incluyendo la violencia y el terror.¹³⁸

Entre los efectos prácticos de este proceso de exclusión se encuentra el desligamiento, cada vez mayor, entre los agentes que se disputan las posiciones en el campo político y los grupos sociales que ellos dicen representar. Para Bourdieu, esta situación, manifestada en las tendencias hacia la profesionalización de la política, la atrofia de las grandes organizaciones de masas (partidos y sindicatos) y la expansión de los consensos ideológicos, ha profundizado el problema del cierre del juego político y su funcionamiento sin referencia a la clientela, es decir, a los representados.¹³⁹

¿Pero qué “está en juego” en el juego político? El objeto de disputa más visible es el acceso a y la acumulación de “capital político”, es decir, a los bienes y propiedades que constituyen los instrumentos de la representación política y transforman a determinados agentes (individuos u organizaciones) en los voceros efectivos de un determinado grupo social. Por medio de un complejo proceso de concentración de poder social y “poder de denominación”, ciertos agentes logran añadir al capital social controlado por ellos un componente simbólico clave: el prestigio de ser reconocidos como “delegados” legítimos del mismo. La diferenciación de poder que posibilita la acumulación del capital político se refuerza con el control sobre capital económico y cultural, recursos importantes que inciden de manera importante en las correlaciones de fuerza. En cambio, aquellos que cuentan con poco capital económico y social tienen pocas posibilidades de obtener capital político y en

¹³⁷ Por ejemplo, como señalaremos en el Capítulo II, entre los factores coyunturales que desencadenaron la crisis política en El Salvador se encuentran los fraudes electorales de 1972 y 1977, que evidenciaron de manera extrema el cierre del campo político y contribuyeron al crecimiento de las organizaciones de masas revolucionarias.

¹³⁸ Sobre las tensiones entre la legitimidad –fundamentada en el reconocimiento de la soberanía ciudadana- y las necesidades sistémicas de mantener la estabilidad, véase, Gabriel Salazar y Julio Pinto, *Historia contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía*, Santiago, Ed. LOM, 1999, pp. 13-19.

¹³⁹ Véase, P. Bourdieu, *op.cit.*, 1997, p. 143; Gil Eyal, “La construcción y la destrucción del campo político checoslovaco”, Loïc Wacquant (coord.), *El misterio del ministerio. Pierre Bourdieu y la política democrática*, Barcelona, Ed. Gedisa, 2005, pp. 179-208, pp. 180-181.

tiempos ordinarios su acceso al campo político sólo es posible por medio de depositar su voz y su poder de acción en un vocero, que puede ser un individuo o una organización.¹⁴⁰

Aunque se convierta en un fin en sí mismo, la concentración del capital político sigue siendo el medio central para incidir y -si es posible- controlar la facultad central que se decide en el campo político, y que tiene repercusiones importantes sobre la sociedad en su conjunto: son los principios de visión y división del mundo social que constituyen a los grupos (o clases) sociales.

Según Bourdieu es necesario diferenciar conceptualmente entre las “clases teóricas” –agentes que ocupan posiciones vecinas en el espacio social y comparten ciertas características- y las “clases prácticas” como resultados de procesos de movilización política. Las “clases sobre el papel” –agrupamientos estadísticos según edad, sexo, etnia, condiciones socioeconómicas, etcétera- no garantizan la acción colectiva, si bien la vecindad en el espacio social y las trayectorias pueden fomentar disposiciones y prácticas compartidas. Para que estos aspectos contribuyan a la acción colectiva, al convertir las relaciones de pertenencia teórica en una pertenencia efectiva, se requiere de agentes (individuos y organizaciones) que pongan sus competencias específicas al servicio de un grupo social, hablen en nombre del grupo, enuncien y denuncien los agravios. Al convertirse en los voceros reconocidos del grupo, por medio de un complejo proceso de construcción de instituciones de representación y símbolos, tienen la capacidad de producir y reproducir sentimientos de lealtad y pertenencia.

La existencia de estos grupos se disputa y decide primordialmente en el campo político, a través de las luchas por el poder simbólico para “imponer las divisiones legítimas dentro de un espacio social” y hacer existir a los grupos sociales como grupos visibles y verosímiles.¹⁴¹ Bourdieu aplica la noción de violencia simbólica para designar las prácticas sociales y discursivas que naturalizan el orden social porque legitiman una sola visión y división del mundo social que se reafirma gracias a que todos los agentes la asumen como reglas del juego para que puedan participar en el campo.¹⁴² El

¹⁴⁰ Bourdieu distingue cuatro formas de capital: El capital económico -factores de producción y bienes económicos, como ingreso, patrimonio, etcétera-, el capital cultural –el conjunto de calificaciones intelectuales producidas por el sistema escolar o transmitidas por la familia-, el capital social –el conjunto de relaciones sociales de las que dispone un individuo o grupo y que permiten algún tipo de solidaridad entre los integrantes- y el capital simbólico –que es la autoridad conferida a un agente por el reconocimiento de las otras tres formas de capital que posee-. Véase, P. Bourdieu, “Las Formas del Capital: capital económico, capital cultural y capital social.”, *op.cit.*, 2000, especialmente pp. 148-156; P. Bonnewitz, *op.cit.*, 2003, p. 47.

¹⁴¹ G. Eyal, *op.cit.*, 2005, p. 181.

¹⁴² Véase, Pierre Bourdieu, “Sobre el poder simbólico”, *op.cit.*, 1999.

poder simbólico –o hegemonía- se consolida también gracias al “monopolio de la violencia simbólica” que detenta el Estado moderno, a través de sus facultades de establecer marcos legales y construir instituciones reguladoras de los más diversos campos sociales.

¿De acuerdo a esta perspectiva, cómo explicar, entonces, el surgimiento de los movimientos sociales? El cuestionamiento de los principios de división y legitimación del orden social es una apuesta de lucha política, originada en los márgenes del campo político, que puede convertirse en un desafío al poder establecido si logra producir sistemas simbólicos alternativos (“contrahegemonías”) y logra construir grupos movilizadores y movilizables a través de la manipulación simbólica de la pertenencia grupal. En esta apuesta de lucha nacen los liderazgos carismáticos, descritos por James Scott, que tienen la capacidad (y el valor) de enunciar, en el momento preciso, públicamente el “discurso oculto” de los grupos subalternos para desafiar las relaciones de poder. En Bourdieu no existe la noción de “discurso oculto” como tal porque para él la dominación, al estar inscrita en el habitus tanto de los subalternos como de los dominantes, es un efecto de la dominación simbólica y, por tanto, inconsciente. Sin embargo, los dominados “conocen” –aunque no necesariamente la pueden verbalizar- su condición de subordinación, por lo cual la revelación por otros agentes (periodistas, activistas políticos, sociólogos...) puede tener efectos prácticos terapéuticos, al explicitar los fundamentos estructurales y sociales de las desgracias individuales, y políticos cuando contribuye a la constitución de movimientos sociales.¹⁴³

Es justo en esta frontera porosa entre lo social y lo político –a partir de los conflictos sobre los principios de visión y división del mundo y la redefinición de los criterios de acceso al campo- en donde se gestan los movimientos sociales.¹⁴⁴ Con la articulación de los movimientos sociales con las ideologías políticas modernas (liberalismo, socialismo, fascismo) en el siglo XIX, y con más fuerza en el contexto de la guerra fría, la “manipulación político-simbólica de las diferencias” se organizó en torno a la oposición entre derecha e izquierda. Dentro y fuera del mundo europeo, el espacio político se organizaba en torno a estos dos polos que representaban, además, un conjunto

¹⁴³ Véase, J. Scott, *op.cit.*, 2000, pp. 239-267. El capítulo “Comprender” del libro *La miseria del mundo*, que trata los aspectos metodológicos y las implicaciones prácticas del método empleado por el equipo de investigación que coordinó Bourdieu, también hace referencia a los posibles efectos prácticos de las entrevistas. Véase, P. Bourdieu, “Verstehen” [*Comprender*], P. Bourdieu, et.al., *op.cit.*, 1997, pp. 779-826; véase del mismo autor también “¿Cómo se hace una clase social? Sobre la existencia teórica y práctica de los grupos”, *op.cit.*, 2000, especialmente p. 122.

¹⁴⁴ La lucha por el sufragio universal es uno de los ejemplos más claros y mejor documentados del conflicto por la redefinición de los criterios de acceso al campo político dentro del proceso histórico de constitución del mismo.

de valores que conferían sentido a los actos políticos. Pilar Calveiro sintetiza estos principios de la siguiente manera:

La organización bipolar de la Guerra fría se basaba en una constelación de espacios y valores que reivindicaban lo estatal, lo público y lo político como posibles principios de universalidad. Admitía la lucha, la confrontación y la revolución como formas, si no únicas, válidas y valiosas de la política. Se definían y guardaban las fronteras –nacionales, ideológicas, de género-. Existía una extraordinaria tendencia a realizar clasificaciones y, sobre todo, formas de organización binarias –explotados y explotadores, justo e injusto, correcto e incorrecto-. Las personas reivindicaban la disciplina, la razón, el esfuerzo- que las instituciones grababan en ellas- como parte de sus logros [...] [Estos rasgos], tendencialmente organizaban la visión del mundo.¹⁴⁵

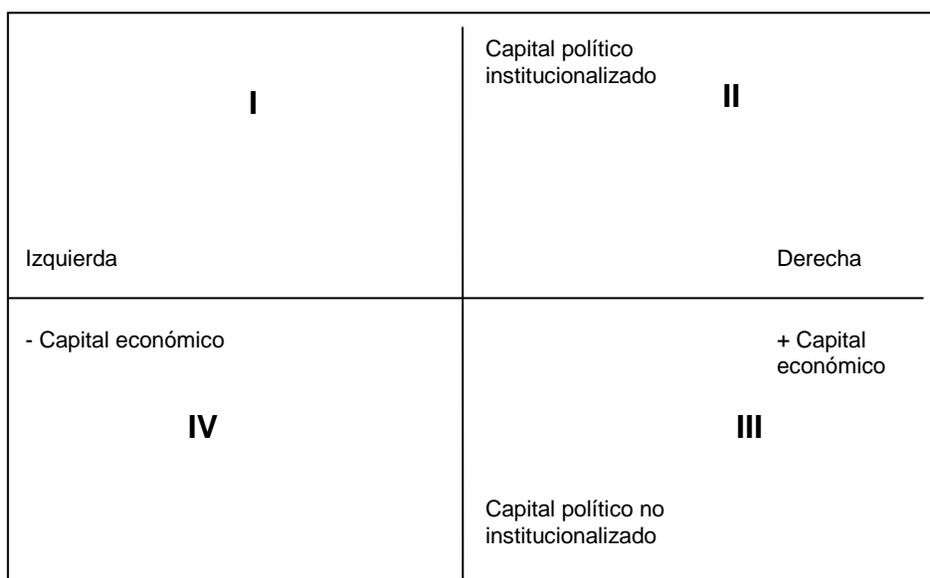
Históricamente, la diferenciación política entre izquierda y derecha se ha articulado con otros sistemas de oposición del espacio social. Sin constituir una homología completa se ha relacionado con la diferencia entre propietarios y no-propietarios –o sea el acceso al capital económico- pero, dependiendo del contexto nacional e histórico, también con otros sistemas de diferencia, como por ejemplo la oposición entre provincias y centro, conflictos entre generaciones, regiones o grupos étnicos. Aunque hoy en día las fronteras político-ideológicas se han desdibujado y se exaltan la transgresión y las diversidades, los dos polos siguen vigentes tanto en la percepción como en la organización de las diferencias en el campo político. Lo que ha cambiado son agentes, posiciones, prácticas y discursos programáticos.

El campo político como mapa de posiciones: Una propuesta analítica

Para poder representar el modelo heurístico del campo político como gráfica, establecimos como eje vertical el principio de oposición izquierda/derecha para dar cuenta de la producción de sentido (o ideología) que es crucial en el juego político (Véase Diagrama 1.1).

¹⁴⁵ P. Calveiro, *op.cit.*, 2005 (b), pp. 14-15.

Diagrama 1.1 El campo político como mapa de posiciones



Elaboración propia

Como principio organizador de la diferencia definimos el control sobre capital político. En la parte de arriba, separado por el eje horizontal, se localiza el capital político de mayor grado de institucionalización, objetivado en las posiciones dentro de organizaciones con reconocimiento legal y/o por medio de elecciones periódicas. Su poder reside en la estabilidad y la duración de las relaciones sociales que articula y en el reconocimiento que recibe por los otros. Los agentes que cuentan con más capital político institucionalizado cuentan generalmente también con más capacidad para imponer las reglas, las cuales son asumidas por la mayoría de los agentes que quieren participar en el juego político. Como un segundo principio de diferenciación se incluye el capital económico para dar cuenta de la articulación histórica entre ideologías e intereses constituidos en el espacio social.

Debajo del eje horizontal se localiza el capital político menos institucionalizado o formalizado. Los que no poseen capital político institucionalizado –por lo general, agentes que recientemente ingresaron al campo (nuevas generaciones de militantes, grupos oprimidos o marginales, etcétera)-, pero quieren que sus actos tengan algún efecto en las relaciones sociales que constituyen el campo político tienen dos opciones: buscar la institucionalización a través de los mecanismos y reglas preestablecidos (por ejemplo, buscar alguna candidatura de un partido político) o recurrir a formas de acción no convencionales. Dependiendo de las condiciones sociales y simbólicas de posibilidad, estas acciones adquieren fuerza y tienen efectividad en el campo, al establecer nuevas agendas, grupos y actores políticos. Para diferenciar las prácticas que los actores tienen a su disposición, en

función de sus posiciones en el campo, conviene apoyarse en las conceptualizaciones elaboradas por Michel de Certeau a partir de estudiar las prácticas de la vida cotidiana. De Certeau denomina “estrategias” a todas aquellas prácticas sociales que, desde una posición de poder, se fundamentan en la capacidad de controlar sus acciones a largo plazo, y las opone a las “tácticas” que son los recursos básicos de las prácticas de la vida cotidiana, a partir de saber aprovechar el tiempo y el momento.¹⁴⁶

Aplicando estas nociones para comparar las prácticas posibles desde posiciones con mucho o con poco capital político institucionalizado permite señalar cómo las posiciones en el campo político ofrecen a los actores un repertorio diferenciado de prácticas: El reconocimiento del capital político institucionalizado, que se origina en la estabilidad y continuidad institucional que aseguran los aparatos burocráticos y públicos, permite a los actores poner sus esperanzas en la planificación de sus actos y la administración del tiempo. En cambio, la fuerza del capital político no institucionalizado nace con el aprovechamiento del instante, el uso oportuno de los tiempos y la experimentación con acciones que desafían –al menos parcialmente– las reglas del juego político. Los agentes que cuentan sólo con capital político no institucionalizado tienen que apostar a sus habilidades de utilizar el tiempo y las ocasiones, en otras palabras, la acción directa y la “guerra de guerrillas”. Si en los espacios del capital político institucionalizado dominan, por lo general, los liderazgos burocráticos, donde prevalece el capital político no institucionalizado nacen los liderazgos carismáticos y los movimientos sociales.

También vale la pena mencionar la relación entre las posiciones que ocupan los agentes en el espacio social y sus posiciones en el campo político. El Diagrama 1.1 podría crear la impresión que existe una homología de intereses entre el espacio social y el campo político, es decir, entre, por un lado, la derecha y los poseedores de capital económico y, por otro lado, la izquierda y los “desposeídos”. Si bien este esquema da cuenta de la relación entre la derecha y los intereses económicos poderosos en América Central, los posicionamientos políticos en la izquierda tienden a ser más complejos. Como la educación y la disponibilidad de tiempos son aspectos clave para acceder al campo político, también en la izquierda los procesos “naturalizados” de selección contribuyen a la sobrerrepresentación de activistas con más capital cultural y económico¹⁴⁷ -como,

¹⁴⁶ Michel de Certeau, *La invención de lo cotidiano. Artes de hacer*, Tomo 1, México, Universidad Iberoamericana, 1996, p. 45.

¹⁴⁷ El capital económico de dirigentes de izquierda proviene generalmente del patrimonio familiar. Un ejemplo de esto fue el dirigente comunista salvadoreño Schafik Handal (1930-2006) que provenía de una familia de inmigrantes palestinos que se dedicaban al comercio y la industria salinera. Véase, “Fallece de paro

por ejemplo, profesionales o estudiantes de familias acomodadas- en las dirigencias de movimientos y partidos, comparado con la presencia más mediada e indirecta de los sectores dominados económicamente, a través de la pertenencia a organizaciones representativas como lo son los sindicatos. Sin embargo, cuando se difuminan las fronteras del campo político –en los momentos de crisis o de emergencia de movimientos sociales- se producen condiciones de posibilidad para nuevos liderazgos, basados en el manejo de tácticas políticas no convencionales. En este contexto pueden surgir líderes populares, cuyo poder se basa en su capacidad de convocatoria –capital social- y en su carisma –capital simbólico-, basado en el reconocimiento social de su liderazgo.

Estas conceptualizaciones permiten puntualizar lo que entendemos por reestructuración del campo político: Por una parte, la redefinición de las fronteras y de los criterios de acceso al campo político y, por otra parte, la emergencia y desaparición/desplazamiento de posiciones que reflejan nuevas correlaciones de fuerzas. Ambos procesos apuntan también a un rediseño de las demarcaciones internas del campo político entre los espacios donde se practica la política institucionalizada y no institucionalizada.

Los diagramas que se presentarán a continuación, elaborados a partir del análisis del caso salvadoreño, dan cuenta de las transformaciones centrales ocurridas en el campo político centroamericano en los últimos treinta años e ilustran algunas trayectorias posibles en el campo político, donde cada posición significa –de acuerdo a nuestros supuestos- horizontes diferentes de apuestas y expectativas, así como un repertorio diferenciado de prácticas sociales y discursivas. Ubicamos el corte temporal –como el momento cuando el campo político entró en “movimiento”- en la segunda mitad de los años setenta. En estos años, la crisis de legitimidad producida por el progresivo cierre de opciones de participación política produjo ¿paradójicamente? una difuminación de las fronteras del campo político que se manifestaba en dos fenómenos.¹⁴⁸ Primero, la politización de organizaciones amplias, como la Iglesia Católica, la Universidad o el movimiento sindical, que fue el resultado de un complejo proceso de *toma de posición* en el cual estos “foráneos” fueron reconocidos por los demás como actores competentes en el espacio político. Segundo, la creciente simpatía social con los grupos guerrilleros –quienes desafiaban con sus acciones abiertamente el sistema político-institucional existente-, que puede interpretarse como una crisis

cardiaco el legendario ex jefe guerrillero salvadoreño Schafik Handal”, *La Jornada*, México, 25 de enero de 2006, p. 33.

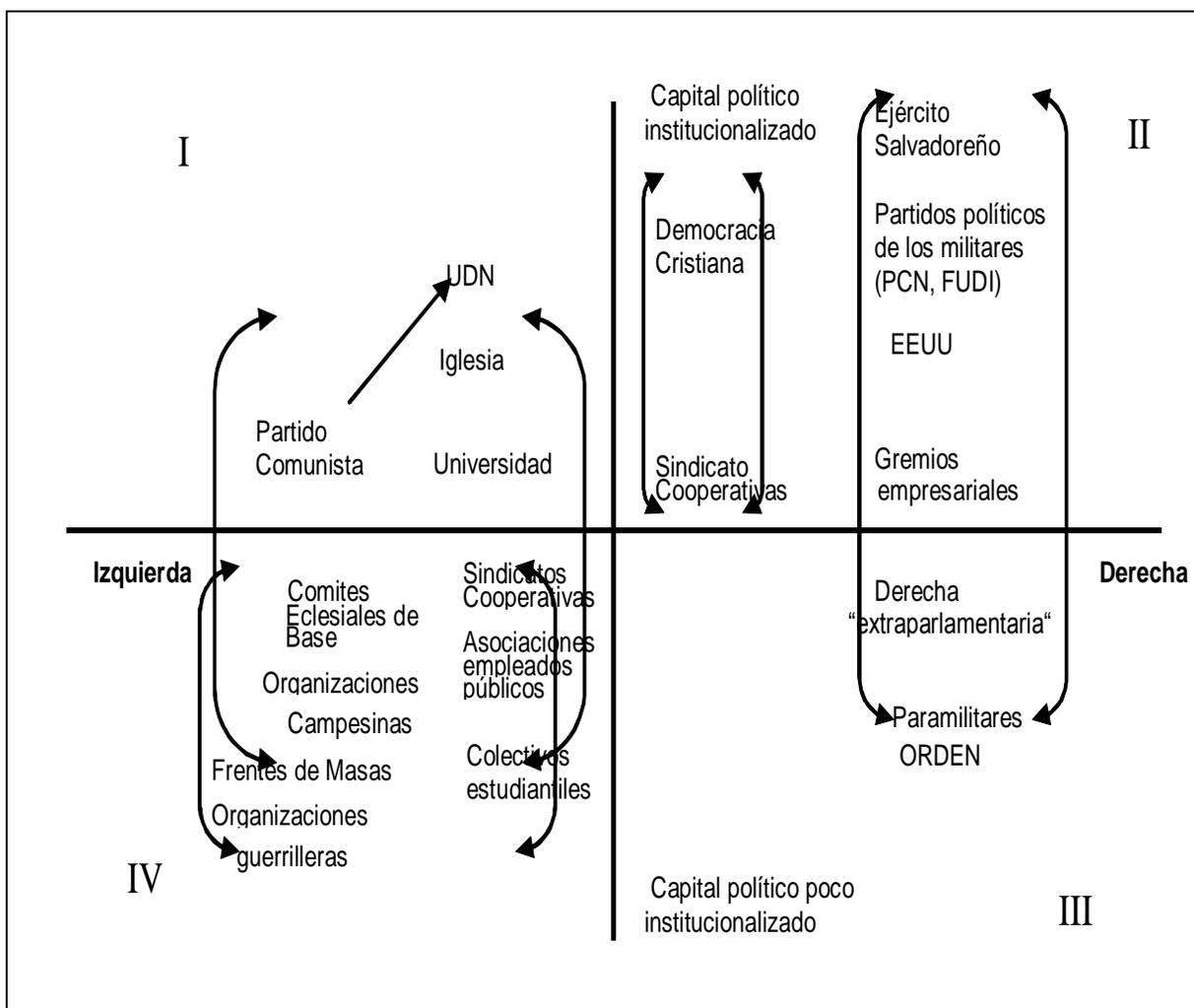
¹⁴⁸ Por lo tanto no se debe confundir el concepto de campo político con la noción de sistema político.

de los principios de visión y división del mundo social que justificaban ideológicamente la exclusión política.

Estos procesos se manifiestan en el Diagrama 1.2 de la siguiente manera. En primer lugar, el Cuadrante I –el campo político donde se ubicaría la izquierda reconocida institucionalmente– apareció, en la segunda mitad de los setenta, relativamente vacío, comparado con la “sobrepoblación” del Cuadrante IV que corresponde al espacio político no institucional de la izquierda. En esta parte del espacio político, la acción directa –violenta y no violenta– funcionó como una estrategia política efectiva de un creciente número de agentes de la izquierda para imponer una determinada visión del mundo y para acumular capital político. Pero no hay que imaginarse este eje como una barrera fija: entre los agentes de “arriba” y “abajo” había vínculos más y menos estrechos que incluían alianzas, rivalidades y conflictos. Algunos agentes pasaban en este periodo incluso de un lado a otro o se mantenían en ambos lados, como lo pretendió hacer el Partido Comunista Salvadoreño que mantuvo su instrumento de participación electoral, UDN, y fundó en 1980 su organización político-militar FAL. En las luchas por obtener la hegemonía política en las organizaciones populares, la izquierda política más institucional (como el Partido Comunista) coincidía en espacios y tiempos con la izquierda radical.¹⁴⁹

¹⁴⁹ FAL: Fuerzas Armadas de Liberación; UDN: Unión Democrática Nacional.

Diagrama 1.2 El Salvador entre 1975 y 1981: Agentes del campo político



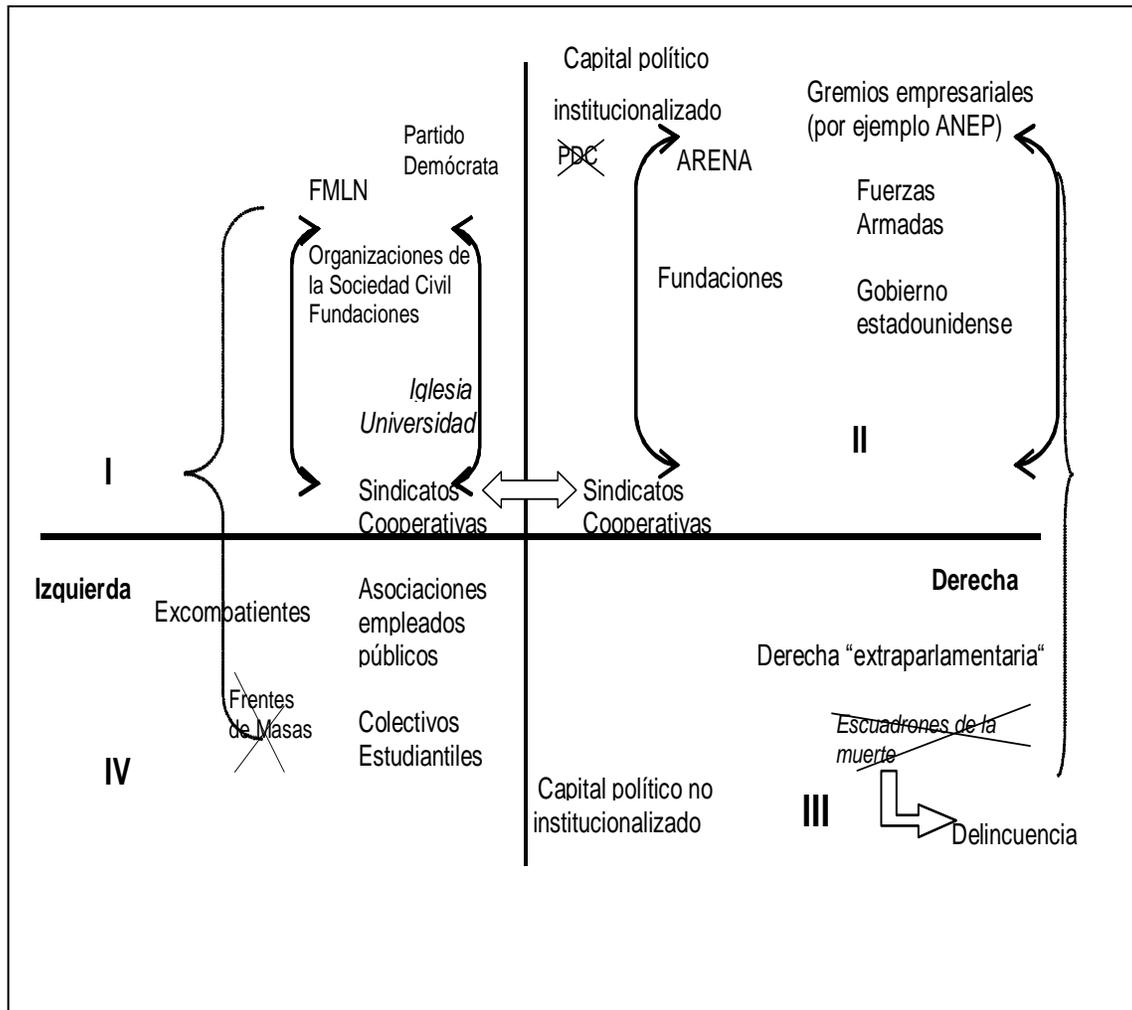
Fuente: Elaboración propia. Los paréntesis hacen referencias a alianzas entre los actores que se encuentran en su interior. Las flechas se refieren a relaciones entre los actores.

El desplazamiento entre espacios más y menos formalizados de la política fue posible gracias al papel que, en ese entonces, jugaba la oposición ideológica como polo organizador de oposición e identificación de los grupos y también porque el sentido común de la época consideraba la capacidad de realizar actos de fuerza como un recurso estratégico y legítimo en las pugnas políticas. En el Cuadrante II y III –campo político formal y no formal de la derecha– se repiten los mismos fenómenos con ciertas diferencias. A diferencia de la izquierda, en el Cuadrante II hay más actores que abarcan una amplia gama de posiciones ideológicas de derecha y centro-derecha. La mayor parte de ellos –como en el caso de las Fuerzas Armadas o los grupos empresariales– mantenían relaciones formales e informales con los grupos del Cuadrante III, por ejemplo, mediante el apoyo y la formación de grupos paramilitares en las áreas rurales y los escuadrones de la muerte. Actores que no contaban con “contactos” orgánicos con agentes del espacio no institucional de la política –y

por tanto tenían un acceso limitado a la gama de prácticas y formas de acción disponibles allí- tenían que incorporar a sus estrategias políticas la búsqueda de otros aliados. Esto sucedió con la Democracia Cristiana, que estableció a principios de los años ochenta una alianza estratégica con el gobierno estadounidense.

El Diagrama 1.3 da cuenta de las constelaciones entre los actores en el campo político después de la finalización de la guerra civil. Hay varias cuestiones que llaman la atención: En primer lugar, si el Diagrama 1.2 evidenciaba la “sobrepoblación” del Cuadrante IV -efecto práctico de la movilización social y la emergencia de nuevos actores-, en el periodo de la posguerra este cuadrante aparece más vacío. En segundo lugar, se pueden observar una serie de desplazamientos: Hay actores que pudieron revalorizar su capital político al ingresar a las instancias representativas del sistema político, otros que se desplazaron hacia la derecha o hacia la izquierda, lo cual significó rompimientos y nuevas alianzas. Por otra parte, hay agentes “de viejo cuño” que prácticamente desaparecieron del campo político -entendiendo por desaparición que sus actos políticos no tienen efectos en el campo- mientras otros están pugnando por ocupar posiciones de reciente creación. Ejemplos concretos para estos desplazamientos son, por ejemplo, la virtual pulverización de la Democracia Cristiana Salvadoreña, posterior a su derrota electoral en las elecciones presidenciales de 1989; la conversión del movimiento guerrillero antisistémico y de la derecha anti-institucional en fuerzas electorales y “ciudadanos legítimos” del campo político formal (FMLN y ARENA); por otra parte, la constitución de nuevas modalidades de organización -por ejemplo redes asociativas entre diferentes organizaciones- que expresan alianzas puntuales entre organizaciones sociales y gremiales con identidades político-ideológicas diferenciadas. Como un fenómeno central de los noventa cabe señalar la aparición de las ONGs y las fundaciones cuya proliferación responde a las crecientes demandas por asesoría y *lobbying* (cabildeo) generadas por las reconfiguraciones del campo político.

Diagrama 1.3: El Salvador después de 1992: La reestructuración del campo político



Elaboración propia.

En tercer lugar, el cuadro ilustra el distanciamiento ocurrido entre izquierda política, exguerrillera, y la izquierda social, es decir, las organizaciones populares de base. Aunque siguen existiendo lazos constituidos por la pertenencia política y afinidades ideológicas, la distancia en el campo político dificulta la construcción de intereses y demandas comunes. Esta situación podría aparecer como un efecto natural de la autonomización del campo político, si no se limitara principalmente a la izquierda. En cambio, con ARENA, los grupos empresariales fortalecieron sus vínculos con la

derecha política, teniendo a sus representantes directos en las instancias gubernamentales más relevantes.¹⁵⁰

La comparación entre el campo político al inicio del periodo de movilización social y en el periodo posbélico da cuenta, entonces, de dos cierres del campo político que tuvieron efectos distintos sobre la acción colectiva. Mientras en los años setenta se produjo una radicalización y generalización de la movilización social, en el contexto de la transición democrática, en vez de generar nuevas modalidades de participación, se generalizó la desmovilización. Una respuesta a esta interrogante reside en las estrategias políticas y económicas (neoliberales y neoconservadoras) que en América Central iniciaron en la segunda mitad de los años ochenta pero que se generalizaron en los años noventa. La apuesta hecha desde el poder de convertir el mercado en el mecanismo primordial de control y de disciplinamiento social cristalizó en políticas para desmontar las funciones redistributivas del Estado, dismantelar los servicios públicos y limitar la democracia en términos institucionales y conceptuales a los procedimientos electorales. Pero también cada modalidad de cierre ofrece formas específicas de inserción e incidencia para agentes sociales interesados en ingresar al campo político. Para entender el significado que adquirieron las nuevas dinámicas en un campo político moldeado por otras lógicas de acción es necesario preguntarse, entonces, por estos intersticios y por las estrategias de participación, movilización e incidencia que posibilitan.¹⁵¹

Comunidades virtuosas y apuestas políticas: La militancia como práctica social

Lo expuesto hasta este momento permite avanzar en la precisión de la problemática a estudiar: El objetivo central de la investigación es la reconstrucción de las prácticas sociales, modalidades de organización, las apuestas y los proyectos políticos de los movimientos revolucionarios centroamericanos, tomando como referente empírico al movimiento revolucionario salvadoreño. Para lograr esto se elaboraron herramientas conceptuales para visualizar a los movimientos sociales como formas de acción, que surgen a partir de conflictos estructurales, articulan y agrupan diversos agentes colectivos e individuales en torno a horizontes de lo posible y una memoria histórica

¹⁵⁰ Véase, Joan Font Fábregas, “Las derechas centroamericanas: Del anticomunismo al neoliberalismo.”, A. S. Cardenal y S. Martí i Puig (coord.), *op.cit.*, 1998, pp. 109-150.

¹⁵¹ Norbert Lechner caracterizaba la intencionalidad del proyecto neoliberal de la siguiente manera: “... hay que destruir el “estatismo” para que las masas no puedan escapar a la disciplina del mercado. Hay que “descentralizar” el poder político a fin de que el poder individual –la propiedad privada- no sea neutralizada por la organización de los desposeídos.” Norbert Lechner: “El proyecto neoconservador y la democracia”, Daniel Camacho, et.al.: *Autoritarismo y alternativas populares en América Latina*, San José, FLACSO/EUNED, 1982, pp. 25-70, p. 59.

compartida. Pero para disminuir el peligro de caer en generalidades y abstracciones, se requiere de herramientas conceptuales adicionales que ayudan a dirigir la mirada hacia las mediaciones y relaciones entre los agentes involucrados.

En función de este segundo aspecto decidimos que la unidad de observación fueran los militantes que insertaron los proyectos políticos de las organizaciones guerrilleras a diversos mundos sociales –el sindicato, la universidad, la colonia, el campo de refugiados o la comunidad campesina- y contribuyeron, por medio de estas interacciones, a la construcción de contrahegemonías. Estudiar estos agentes sociales implica, por lo tanto, definir la noción de militancia en la que se apoya la investigación.

Dependiendo del momento, del lugar y de las instituciones en donde se ejerce la militancia, ha habido distintas modalidades de practicarla.¹⁵² Aquí nos interesa estudiar una modalidad particular de la militancia que combinaba la participación gremial o social en organizaciones legales o semilegales (sindicatos, grupos eclesiales de base, etcétera) con la participación política clandestina en una organización revolucionaria, inspirada en el modelo bolchevique del partido como un aparato centralizado con revolucionarios profesionales, disciplinados y comprometidos. Para Lenin, la organización clandestina de revolucionarios profesionales no sólo era el instrumento imprescindible para preparar y realizar la toma de poder, sino también una anticipación del futuro socialista porque, escribía él, en la condición compartida de militancia y de compromiso con la revolución desaparecerían las diferencias sociales y culturales de sus integrantes.¹⁵³ Aunque hoy la crítica a estas formas organizativas y discursos programáticos está de moda, destacando sus tendencias elitistas, centralistas y autoritarias, hay que tomar en cuenta que, para los que decidieron en los sesenta y setenta del siglo pasado participar de esta manera en la política, la sensación (y el orgullo) de integrar una vanguardia política formaba parte de sus motivaciones y

¹⁵² Sobre las distintas formas de participación y su incidencia en la constitución de la identidad política de la izquierda, en el caso chileno, véase, Katherine Hite, “The Formation and Transformation of Political Identity: Leaders of the Chilean Left, 1968-1990”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 28, No. 2, 1996, pp. 299-328.

¹⁵³ Señalaba Lenin que “...la organización de un partido socialdemócrata revolucionario ha de ser inevitablemente de *un género distinto* que la organización de los obreros para la lucha económica. La organización de los obreros debe ser, primer, profesional; segundo lo más amplia posible; tercero, lo menos clandestina posible [...]. Por el contrario, la organización de los revolucionarios debe agrupar, ante todo y sobre todo, a personas cuya profesión sea la actividad revolucionaria [...]. Ante este rasgo común de los miembros de semejante organización *debe desaparecer en absoluto toda diferencia entre obreros e intelectuales*, sin hablar ya de la diferencia entre las diversas profesiones de unos y otros. Esta organización debe ser necesariamente no muy amplia y lo más clandestina posible.” (cursiva en el original) Vladimir Illich Ulianov Lenin, *¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento*, Moscú, Ed. Progreso, 1981, pp. 123-124.

convicciones. Esta mística no es comprensible si se toma en cuenta sólo una racionalidad económica y la perspectiva de hoy.¹⁵⁴

¿Qué herramientas conceptuales ayudarían, entonces, para aprehender la lógica de la práctica militante en estos años? Hay dos conceptualizaciones principales con respecto a la figura y la identidad del militante: Una primera visión, inspirada en las teorías de los Nuevos Movimientos Sociales, destaca el papel de las convicciones y orientaciones culturales en la constitución del militante. Por ejemplo, Francois Dubet señala que la identidad militante se define a partir de su compromiso con una “causa” o un proyecto histórico-cultural en conflicto con lo existente y la búsqueda “del sentido olvidado, ausente o nuevo de la vida colectiva.”¹⁵⁵ Una perspectiva contraria, que parte del enfoque de la teoría de juegos y la elección racional, visualiza al militante más bien como un agente comprometido con el cálculo racional, un “emprendedor político”, que elabora sus estrategias en función de ciertos fines y busca aprovechar las oportunidades políticas cuando se presentan.¹⁵⁶

Ninguna de las dos posiciones da cuenta de la multiplicidad de racionalidades y causalidades que llevan a algunos seres humanos a tomar –literalmente- partido. Habría que buscar, entonces, una conceptualización que reconoce, por una parte, que el militante –como cualquier otro agente insertado en un campo social- persigue con sus actos la realización de ciertos fines. Pero no es posible entender estos fines a partir de una definición de interés, circunscrito al cálculo racional económico, sino hay que considerar la función social de imaginarios, proyectos y convicciones en la constitución de la militancia política.

Para sintetizar las posiciones anteriores, nos basamos en la propuesta de Bourdieu sobre la lógica de las prácticas, al definir la militancia como una práctica social. Como se señaló en la sección anterior, para Bourdieu en cada campo social se definen los recursos y bienes (materiales e inmateriales) que “están en juego”. Los agentes, insertados en las relaciones de fuerza y conflictos de este campo, contribuyen, por medio de sus prácticas, disputas y apuestas a la valorización de estos bienes y, por

¹⁵⁴ Véase, P. Calveiro, *op.cit.*, 2005 (b), p. 15.

¹⁵⁵ Francois Dubet, “De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto”, *Estudios Sociológicos*, México, Vol. VII, No. 21, septiembre-diciembre 1989, pp. 519-545, p. 532.

¹⁵⁶ Véase, por ejemplo, Hugh Byrne, *op.cit.*, 1996, especialmente pp. 1-15.

ende, a la formulación de las lógicas de acción del campo que la racionalidad científica, orientada a explicar relaciones de causa-efecto, no puede aprehender completamente.¹⁵⁷

La reconstrucción de las apuestas de la militancia da cuenta de dos dimensiones del problema a estudiar: por una parte, los militantes como productores de sentido, es decir, comunidades cerradas, orientadas a producir y difundir contrahegemonías; por otra parte, la función social de la militancia como institución que al mediar entre el ámbito político y la sociedad participa de la configuración social de los intereses colectivos. En el campo político se disputan los principios de visión y división del mundo y, en consecuencia, la existencia práctica de los grupos sociales. En este sentido podemos definir a los militantes de las organizaciones guerrilleras salvadoreñas como productores de sentido contrahegemónico, es decir, agentes que apostaron al cuestionamiento violento de los principios de visión y división del mundo para convertirse de esta manera en representantes de los sectores dominados. Dentro de estas prácticas se produjeron intereses propios que, desde la distancia temporal resultan incomprensibles, como, por ejemplo, poner en entredicho -muchas veces violentamente- la competencia de los agentes políticos moderados de fungir también como representantes de los sectores dominados.¹⁵⁸

Para explicar esta producción de sentimientos fuertes de pertenencia y de lealtad política, característica de la militancia en organizaciones revolucionarias, nos basamos en la noción de *conversión* para designar el proceso por medio del cual se asumen nuevas racionalidades y valores.¹⁵⁹ Resulta útil retomar también la noción de “comunidad virtuosa” (*Virtuosengemeinschaft*) empleada por Klaus-Georg Riegel para analizar las prácticas y mecanismos institucionales establecidos en los Partidos Comunistas para mantener la cohesión y la disciplina interna. Para Riegel, el modelo bolchevique estaba orientado a la selección y formación de un cuerpo disciplinado de cuadros revolucionarios, capaces de subordinar sus aspiraciones y vida personal a las reglas y requerimientos de la organización, incluyendo la interiorización de códigos morales y “verdades dogmáticas”. El proceso de socialización política secundaria o “proceso de conversión”, para que los seleccionados se integraran a la comunidad virtuosa de cuadros revolucionarios, tenía que enfrentar tres problemas estructurales: en primer lugar, asegurar la fidelidad de los militantes a las convicciones, en segundo lugar, establecer principios precisos de división relativo a rivales políticos

¹⁵⁷ P. Bourdieu, *op.cit.*, 1997, p. 148ss.

¹⁵⁸ Véase, P. Bourdieu, *op.cit.*, 1999, p. 70; del mismo autor *op.cit.*, 2000, p. 155.

¹⁵⁹ Este proceso aplica para el ingreso a cualquier campo específico, entre ellos el campo político. Véase P. Bourdieu, *Entrevistas, textos y conferencias*, La Paz, Ed. Plural, 2002, p. 10.

y, en tercer lugar, estabilizar la identidad normativa de la propia comunidad. Para Riegel, las sesiones de crítica y autocritica al interior de los grupos revolucionarios, los tribunales revolucionarios y las purgas –como casos extremos de rituales de purificación- operaban como mecanismos de disciplinamiento al interior de las organizaciones marxistas-leninistas para asegurar su cohesión y enfrentar las amenazas de fragmentación y desagregación organizativa.¹⁶⁰

Sin embargo hay que tomar en cuenta que, si bien este modelo organizativo ejerció una fuerte atracción, los que fundaron las organizaciones se apoyaron también en tradiciones nacionales de organización y lucha popular. Esto implica que la implementación del modelo dio lugar a diversas combinaciones de prácticas organizativas y discursivas, algunas más cercanas al original (de los bolcheviques) que otras. En el caso centroamericano (como en otros países latinoamericanos) las prácticas de la militancia revolucionaria de los años setenta surgieron a partir de una combinación y transferencia de prácticas y convicciones provenientes de distintos espacios –por ejemplo la iglesia, el sindicato o el oficio-, con los principios de organización marxista-leninista.¹⁶¹

Constatar esta combinación entre diferentes prácticas y modos de organización apunta hacia otra dimensión de la militancia, como una actividad que nace en las intersecciones entre lo político y social y que ha acompañado la evolución del campo político moderno. Desde fines del siglo XVIII, la militancia en organizaciones partidistas o gremiales, que se desarrolló en articulación con las organizaciones de masas y las luchas por las libertades políticas, como el sufragio universal y los derechos de libre expresión y asociación, funcionó como uno de los vehículos más importantes de la participación individual en la política. No obstante las diferencias entre distintas formas de participación política y social, la militancia –tanto en sus modalidades radicales (el militante marxista-leninista) como moderadas (la participación sindical o en un partido socialdemócrata)-, operó como una actividad bisagra entre el campo político y el espacio social con funciones sociales importantes, entre ellos la constitución de prácticas que consolidaron lealtades ideológicas y el fortalecimiento de subculturas político-partidistas.

¹⁶⁰Véase, Klaus-Georg Riegel, “Kaderbiographien in marxistisch-leninistischen Virtuosenvereinigungen” [Biografías de cuadros en comunidades virtuosas marxistas-leninistas], *Leviathan. Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft* [*Leviatán. Revista Berlinesa de Ciencias Sociales*], Berlín, No. 22, 1994, pp. 17-46, especialmente pp. 21-25.

¹⁶¹ Véanse, por ejemplo, los ensayos sobre casos nacionales en Eric Hobsbawm, *Revolucionarios*, Barcelona, Ed. Crítica, 2000; sobre la transferencia de prácticas religiosas al campo político, véase, Michael Löwy, *Guerra de dioses. Religión y política en América Latina*, México, Siglo XXI, 1999, especialmente pp. 107-157.

Estas dos dimensiones de la militancia también dan cuenta de los bienes (materiales e inmateriales) que están en juego. Por una parte, en el impulso de las comunidades virtuosas de “buscar lo absoluto” reside uno de los recursos simbólicos centrales para asegurar la cohesión del grupo hacia lo interno, para estigmatizar a los desertores, y hacia lo externo, para disputarle a los grupos dominantes el poder simbólico de imponer una determinada visión del mundo. Por otra parte, los bienes que se producen en la interacción de los militantes con distintos mundos sociales son redes y vínculos sociales; modalidades del capital social, que en el campo político se transforman en instrumentos de representación y, por ende, en capital político.

Con la des-masificación de los partidos políticos, que acompañó la transformación de los partidos de masas (socialdemócratas, comunistas o nacional-populares) en administradores del poder político, inició un prolongado deceso del concepto mismo de la militancia entendida como participación y lealtad a una organización política. Desde fines del siglo pasado, este proceso se ha articulado con el cambio cultural profundo que pone en entredicho prácticamente todas las nociones existentes sobre la actividad política, el poder y la resistencia y que –paradójicamente– hace de la “apoliticidad” una estrategia viable en el campo político.¹⁶² En el caso centroamericano, estas manifestaciones del cierre del campo político sobre sí mismo han coincidido con los procesos de pacificación y de transición a sistemas democráticos liberales de los años noventa.

Con “conversión” política hacemos referencia al proceso por medio del cual los activistas revolucionarios adquirieron habilidades, saberes y un discurso adecuado a un contexto caracterizado por la violencia, la guerra y la polarización política. Las transformaciones políticas y culturales de los años noventa –promoviendo la sociedad civil en oposición al Estado y la sociedad política, el desdibujamiento de las fronteras nacionales e ideológicas y la concertación– pusieron en entredicho las certezas ideológicas que fundamentaron esta modalidad del activismo militante. La reestructuración del campo político, que cambió posiciones de la periferia al centro y viceversa, creó nuevas posiciones e hizo desaparecer otras, obligó a los militantes, al cuestionarse lealtades políticas y convicciones ideológicas, optar por la salida del campo político o por la realización de esfuerzos adicionales para adaptar sus prácticas a las posiciones emergentes.

¹⁶² Véase, Kenneth Roberts, “El sistema de partidos y la transformación de la representación política en la era neoliberal latinoamericana”, Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina (comp.), *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*, Rosario, Homo Sapiens Ed., 2002, pp. 55-76. Véase también M. de Certeau, “Credibilidades políticas”, *op.cit.*, 1996, pp. 193-196, p. 194 y P. Calveiro, *op.cit.*, 2005 (b), p. 14-15.

Para captar los efectos prácticos de estas modificaciones recurrimos a dos conceptos. En primer lugar, la noción de “no-lugar”, elaborada por Marc Augé para dar cuenta de la desaparición de certezas (ideológicas, sociales, culturales, etcétera) que caracteriza muchas de las nuevas posiciones. Para Augé el “lugar antropológico” –productor de historia, identidad y relaciones sociales relativamente duraderas– constituye uno de los referentes centrales de la modernidad. Pero las transformaciones del mundo moderno en el contexto de la “sobremodernidad” –el aceleramiento del tiempo y el exceso de “ego” (es decir la proliferación de nuevas identidades y alteridades sociales)– producen “no-lugares”, en detrimento de los lugares antropológicos. Augé define los “no-lugares” como puntos de tránsito y de ocupaciones provisionales donde los agentes se encuentran en permanente movimiento.¹⁶³ Ocupar –aunque sea sólo temporalmente– un “no-lugar” obliga a los agentes afectados a emplear esfuerzos sin cesar para no ser expulsados o marginados. Analizamos estas prácticas bajo la óptica de estrategias de reproducción y reconversión que devinieron en nuevas formas de acción política y organización social. Definimos las estrategias de reconversión social, siguiendo a Bourdieu, como el “...conjunto de prácticas fenomenalmente diferentes, por medio de las cuales los individuos y las familias, tienden de manera consciente o inconsciente a conservar o a aumentar su patrimonio, y correlativamente, a mantener o mejorar su posición en la estructura de las relaciones de clase...”.¹⁶⁴

Las estrategias de reproducción o reconversión son, entonces, líneas de acción construidas por los agentes que habitan un campo social particular en función de los siguientes aspectos: Por una parte, las oportunidades objetivas de reproducción del grupo (sus condiciones de posibilidad) y, por otra parte, el encuentro entre el *habitus* –el sistema de disposiciones interiorizadas en la mente y el cuerpo y adquirido por el individuo en el transcurso del proceso de socialización–¹⁶⁵ y una coyuntura particular del campo. Las estrategias no son arbitrarias sino parte de un sistema que opera en función de principios generadores de diferenciación social, por lo tanto operan dentro de relaciones de poder y dominación.

Para estudiar las reconversiones posibles en el movimiento revolucionario nos interesan sobre todo aquellas estrategias que habían incluido la “partidización” de prácticas sindicales y gremiales como

¹⁶³ “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no-lugar.” Marc Augé: *Los no lugares. Espacios del anonimato*. Una antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa Editorial, 2004, p. 81

¹⁶⁴ P. Bourdieu, *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, México, Taurus, 2002, p. 122.

¹⁶⁵ Véase, P. Bonnewitz, *op.cit.*, p. 64.

una estrategia legítima –es decir reconocida- y efectiva de los agentes en el campo político. Partidización no se refiere sólo a la intervención de las organizaciones político-militares, sino también a las prácticas corporativas del Estado y a la presencia de los partidos políticos en los diversos espacios de la sociedad civil. Cuando por medio de los acuerdos de paz, y el fin de la guerra fría a nivel internacional, se declaró el fin del enfrentamiento político y militar bipolar, aquellas estrategias de acción colectiva basadas en el uso de la fuerza, fueron estigmatizadas como “fuera de lugar”, “anacrónicas”, e incluso “contraproducentes”. Constatar este hecho nos lleva a la interrogante principal de nuestra investigación: ¿Qué pasó con los agentes políticos con habilidades y conocimientos formados en el contexto de la confrontación? ¿Qué posibilidades tenían para mantenerse en el campo político vía la adaptación o la reconversión? ¿De qué forma participaron, con sus apuestas y actos moldeados por las opciones que presentaba la coyuntura de los noventa en la reestructuración del campo político?

Para recuperar el significado de los actos militantes, se requiere entender cuáles eran los recursos y apuestas que estaban en juego en ese entonces y cómo se fueron modificando en el contexto de la reestructuración del campo político. En función de esta interrogante se analizaron ocho historias de vida de exmilitantes de la guerrilla salvadoreña, algunos de los cuales se han retirado de la vida política activa mientras otros siguen siendo simpatizantes o activistas del FMLN.

1.6. Conclusiones

¿Qué pasó con aquellos activistas, acostumbrados a la militancia política clandestina, cuando el contexto institucional en el cual habían adquirido sus competencias políticas y organizativas, cambió por medio de un acuerdo político, como sucedió en El Salvador con los Acuerdos de Paz? ¿Qué recursos tenían a su disposición para hacer frente a la nueva coyuntura política y de qué forma participaron de las reestructuraciones políticas? Con la búsqueda de respuestas tentativas a estas preguntas, la investigación pretende contribuir a una comprensión más amplia de los cambios y continuidades en las formas de la acción colectiva en la Centroamérica del posconflicto.

Como primer paso presentamos, en este capítulo, el proceso de reflexión teórica y elaboración de las herramientas conceptuales que permitieron estudiar la militancia en el movimiento revolucionario salvadoreño, desde su auge en los años setenta del siglo veinte hasta su institucionalización como partido político a partir de 1992, considerando el caso salvadoreño como un caso particular de las posibles trayectorias de los movimientos revolucionarios del siglo veinte.

Para elaborar las herramientas analíticas nos apoyamos, por una parte, en los aportes de otros estudiosos de la región y, por otra parte, en las propuestas conceptuales y metodológicas de diferentes corrientes teóricas del estudio de la acción colectiva. En la revisión de la producción de conocimiento sobre las sociedades centroamericanas se evidencia la considerable influencia de los debates internacionales sobre los movimientos sociales en la discusión de los fenómenos regionales, relativo a la definición de las temáticas, los conceptos y los agentes estudiados. Mientras a principios de los años ochenta predominaban enfoques estructuralistas –marxistas o funcionalistas– poniendo énfasis en el contexto socioeconómico y político para explicar la crisis y pensar los posibles desenlaces políticos, en los años noventa emergieron perspectivas que analizaron las tomas racionales de decisión de los actores o buscaron reconstruir el sentido que los mismos actores atribuían a sus actos y su participación en él. La emergencia de nuevos actores, después del fin de la guerra –como las organizaciones de mujeres e indígenas–, fue analizada bajo la perspectiva analítica de la teoría de los nuevos movimientos sociales para enfatizar el debilitamiento de viejas lealtades de clase y la constitución de nuevas identidades colectivas.

Sin embargo, la evidencia empírica de algunos estudios de caso –como, por ejemplo, sobre las redes regionales de organizaciones campesinas o de defensa de las trabajadoras en las maquilas–, matiza estas afirmaciones, al señalar que los “nuevos” sujetos sociales generalmente no son tan nuevos, sino herederos de la efervescencia social de los años setenta y producto de conflictivos procesos de diferenciación político-ideológica de antiguos aliados. En este sentido, se puede observar la transferencia de redes sociales y prácticas de movilización, moldeadas en el contexto de la guerra, como parte de las estrategias de adaptación de los agentes sociales al contexto político del posconflicto.

Pero también hay nuevos aspectos en las modalidades de organización, las estrategias de acción y las visiones hegemónicas sobre la participación política y social. Una diferencia importante se encuentra en la estigmatización de las formas de acción directa que implican el uso de fuerza física dentro de los repertorios de protesta popular, a la par de la naturalización de la violencia estatal. También se condena la “politización” de organizaciones sociales de base, definiendo aquella como injerencia de los partidos en la vida interna de las mismas. La difusión de estos puntos de vista en la academia pero también en los mundos sociales del activismo social y gremial evidencia una reconfiguración del sentido común que enfatiza en la necesaria separación entre, por un lado, actores de la sociedad civil, y, por otro lado, el Estado y los actores políticos.

Constatar estos fenómenos nos llevó a la interrogante de cómo podríamos abordar

conceptualmente la articulación entre cambios y continuidades en las organizaciones populares, respecto a sus repertorios de protesta, sus modalidades de organización y sus visiones en torno a la movilización y la participación política. La revisión de algunos de los principales aportes a las teorías de la acción colectiva –especialmente los trabajos de autores como Charles Tilly, Immanuel Wallerstein y Edward P. Thompson- sirvió para formular una definición tentativa de los movimientos sociales que ayudaría a reconstruir la formación y transformación del movimiento revolucionario salvadoreño a partir de una genealogía de sus debates, grupos, colectivos y organizaciones. Definimos a los movimientos sociales como formas de acción social que surgen a partir de determinados conflictos estructurales del sistema mundo, en la frontera entre lo social y el ámbito propiamente político, y que vinculan a un conjunto de agentes -organizaciones, instituciones e individuos, que comparten códigos y una visión del mundo- entre sí. Es una perspectiva amplia que permite visualizar a agentes con distintos niveles de organicidad, apuestas políticas y esperanzas colectivas como partes de un mismo movimiento. Por otra parte, esta perspectiva, que integra los aportes de los diferentes enfoques, permite también concebir las múltiples funciones sociales y culturales de las prácticas violentas en los repertorios de protesta popular: como respuesta reactiva de los agentes, estrategia para presionar sobre las instituciones del Estado y movilizar imaginarios sociales en función de los respectivos proyectos políticos y también como una dinámica inherente a las lógicas del espacio social y del campo político que requiere un análisis históricamente situado.

Ambos caminos –tanto la revisión de los debates y estudios realizados como la revisión conceptual- llevaron a la elaboración de un marco analítico para abordar los procesos de movilización y desmovilización social en Centroamérica según dos ejes de argumentación. El primer eje está orientado a reconstruir la reestructuración del campo político salvadoreño que se hizo necesaria a partir de la crisis revolucionaria de fines de los setenta. El segundo eje enfoca los efectos prácticos de la reestructuración política sobre los mundos sociales de la militancia política, tomando como unidad de observación la figura del militante quien, con sus actividades, entrelazaba la organización clandestina con los diferentes lugares donde los grupos guerrilleros buscaban imponer su hegemonía.

La noción de “doxa”, acuñada por Pierre Bourdieu para dar cuenta de los mecanismos y códigos sociales de la dominación social, interiorizados y reproducidos por los agentes de manera inconsciente en sus prácticas cotidianas, promete ser de gran utilidad para entender la crisis de prácticas de organización y movilización a partir de los cambios en la atmósfera social y política. Las estrategias revolucionarias de los setenta, al mismo tiempo que buscaban imponer la

“heterodoxia” revolucionaria y se atrevieron a retar a instituciones estatales autoritarias y represivas operaban con la “doxa” vigente del campo político, es decir, con unas reglas del juego político en las cuales la politización de los conflictos sociales, la polarización y la negación del adversario ocuparon lugares estratégicos. Por lo tanto, se requiere analizar no sólo las razones económicas y político-institucionales que llevaron a la desaparición de los mundos de la militancia sino también las transformaciones que ocurrieron en las (sub)culturas políticas que cambiaron el *sentido* de la acción colectiva y política y que apuntan hacia la reconfiguración del sentido común en torno a la participación social y política.

En la introducción de este capítulo se planteó la interrogante de cómo construir una “metodología” que permitiría articular conceptualmente los factores objetivos –es decir los condicionantes estructurales- y los factores subjetivos –la construcción de sentido- de la acción social. En función de este reto optamos por el enfoque biográfico como método central de la investigación porque los relatos de vida como “relatos de prácticas” permiten reconstruir en la experiencia vivencial del individuo la interacción entre estructuras y subjetividad. Pero no sólo esto: los relatos de vida permiten incluir la visión de los actores “de abajo” sobre los acontecimientos políticos y sociales en los cuales participaron, así como las estrategias que emplearon para hacer frente a dichos acontecimientos. Contar bajo qué condiciones estas estrategias se fueron desarrollando en El Salvador y cómo participaron en la construcción del contexto político de la posguerra es el objetivo de los siguientes capítulos.

CAPÍTULO II

“¡A MÁS REPRESIÓN - MÁS LUCHA!” EL CICLO DE LA RADICALIZACIÓN

“Tener una guerrilla da prestigio, permite hablar en voz alta e imponerse en la escena del poder.”

Regis Debray

“[L]as masas son como las niñas quinceañeras que hay que enamorarlas todos los días; si las dejas solas, por muy corto tiempo, se las lleva cualquier ‘tunante de barrio’.”

Carlos Eduardo Rico¹⁶⁶

2.1. Introducción

El impacto de la guerra civil salvadoreña, que entre 1981 y 1992 cobró aproximadamente 75,000 víctimas, tiende a hacer olvidar que los años previos no sólo fueron la antesala del conflicto sino también un periodo de gran efervescencia social y de expansión de canales de participación popular. No fueron sólo las acciones de los grupos guerrilleros –los secuestros, asaltos bancarios y ajusticiamientos de representantes del “viejo orden”- que agudizaron la crisis política a finales de los años setenta, sino también la beligerancia y el protagonismo político del movimiento popular que ocupó por la vía del hecho –huelgas, tomas de fábricas, manifestaciones- un lugar protagónico en el campo político. En este contexto de efervescencia social, cinco alianzas de organizaciones sindicales y campesinas –los Frentes de masas - actuaron como voceros legítimos del movimiento popular, representantes de un proyecto político revolucionario que promovían como objetivos estratégicos de la movilización, la insurrección. Fue la irrupción masiva de estos actores en el escenario político de 1979/1980 que obligó a las elites a iniciar un proceso de reestructuración de las instituciones políticas, el cual inició con el golpe reformista de la Juventud Militar en octubre de 1979 y terminó con la integración de la izquierda armada al sistema institucional a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y la participación del FMLN en las elecciones de 1994.

¹⁶⁶ Regis Debray, “¿Revolución en la revolución?”, *Lucha armada en la Argentina. Historia, Debates, Documentos*, Buenos Aires, Año 1, No.1, diciembre 2004-febrero 2005 [1967], pp. 122-144, p. 140; Eduardo Rico Mira, *En silencio tenía que ser. Testimonio del conflicto armado en El Salvador (1967-2000)*, San Salvador, UFG-Editores, 2004, p. 403. Agradezco a Mario Vázquez haberme llamado la atención sobre esta cita que expresa la orientación de los militantes revolucionarios hacia las organizaciones populares.

El objetivo de este capítulo es indagar sobre los procesos por medio de los cuales este conjunto de organizaciones populares, federaciones sindicales y organizaciones campesinas se convirtieron en vehículos para la insurrección. Un factor importante para explicar esta dinámica reside en la estrategia de los grupos guerrilleros de insertar militantes y reclutar activistas en dichas organizaciones para promover como formas de protesta la acción directa y extra-institucional y como objetivos estratégicos la revolución. Limitarse, sin embargo, en la definición de las organizaciones populares a “fachadas” de la guerrilla reduce la complejidad de relaciones y afinidades ideológicas que se construyeron entre estos actores a partir de 1970. Por esto, en este capítulo buscamos responder a la pregunta cómo, entre los activistas del movimiento sindical y campesino anti-gubernamental, se fueron construyendo las disposiciones sociales para participar en una opción insurreccional representada por los frentes de masas .

La primera parte del capítulo busca reconstruir, de manera minuciosa, los procesos por medio de los cuales entre 1970 y 1975 organizaciones de orientación gremial (campesinas y sindicales) se fueron vinculando a los grupos guerrilleros. La siguiente frase de Antonio Gramsci expresa muy bien por qué buscamos reconstruir la interacción entre diversos actores que llevaron a la formación del movimiento revolucionario salvadoreño, en vez de centrarnos exclusivamente en la constitución del FMLN. Gramsci distingue entre dos maneras para estudiar a los movimientos sociales, la primera –la más convencional– centrándose en actores políticos, mientras la otra busca recuperar los “movimientos moleculares” que permiten la emergencia de una voluntad colectiva:

Se podría estudiar en concreto la formación de un movimiento histórico-colectivo analizándolo en sus fases moleculares, lo que habitualmente no se hace porque tornaría pesado el análisis. Se toman en cambio, los corrientes de opinión ya constituidas en torno a un grupo o una personalidad dominante. Es el problema que modernamente se expresa en términos de partido y de coaliciones de partidos afines: cómo se inicia la constitución de un partido, de qué modo se desarrolla su fuerza organizada y su influencia social etc. Se trata de un proceso molecular, minucioso, de análisis extremo, capilar, cuya documentación está constituida por una cantidad interminable de libros y folletos, de artículos de revistas y de periódicos, de conversaciones y debates orales que se repiten infinidad de veces y que en su conjunto gigantesco representan ese lento trabajo del cual nace una voluntad colectiva con cierto grado de homogeneidad, con el grado necesario y suficiente para determinar una acción coordinada y simultánea en el tiempo y en el espacio geográfico en el que se verifica el hecho histórico.¹⁶⁷

Concentrar la mirada en los entrelazamientos entre actores permitirá ver que los grupos guerrilleros empezaron a aplicar su “línea de masas”, para vincularse con el movimiento popular en un contexto político donde ya había experiencias de organización, que se enfrentaban a una serie de

¹⁶⁷ Antonio Gramsci, “El número y la calidad en los regímenes representativos.”, Cit. en, H. Saltamacchia, *op.cit.*, 1992, pp. 62-63.

obstáculos –desde trabas legales hasta la intimidación por fuerzas paramilitares- para impulsar políticamente sus demandas. Retomando nuestra definición sobre los movimientos sociales como complejas formas de acción social, que integran a distintos grupos, en el caso salvadoreño es posible diferenciar –pese a la multiplicidad de organizaciones (expresión de la atomización de los grupos dominados)- dos grandes subculturas de oposición a los gobiernos militares, la democristiana y la comunista. Los activistas guerrilleros formaban parte de estas redes sociales y, cómo se señalará en las siguientes páginas, fueron las instituciones compartidas y afinidades sociales y simbólicas (su *habitus* político) que facilitaron la interacción entre activistas gremiales y militantes políticos para radicalizar, primero, el repertorio de protesta popular –con la acción directa y la acción armada- y, segundo, los objetivos estratégicos de la movilización política, llevándolos más allá de reformas económicas y democráticas.

La última parte del capítulo está dedicado a los relatos de activistas sobre su ingreso a la organización político-militar para dar cuenta de los campos constitutivos de la militancia, es decir de los mundos sociales con prácticas y relaciones específicas que hicieron posible el paso individual a la militancia política. De esta manera ilustran las condiciones sociales y simbólicas de posibilidad que hicieron posible que activistas sindicales y campesinos percibieran la militancia en una organización revolucionaria como opción viable para su acción.

2.2. La aparición de un nuevo actor: Los Frentes de masas

El periodo que inició en enero de 1980 (mes de la *Marcha de la Unidad* de los frentes de masas) y finalizó en enero de 1981 (la primera ofensiva del FMLN) es clave por varias razones: en primer lugar, en los acontecimientos de este año se expresaron nítidamente las lógicas de acción que dominaban el campo político salvadoreño y que contribuyeron tanto al incremento de la movilización popular contestataria como a las respuestas violentas del aparato estatal, orientadas a desactivar la protesta social, acelerando la escalada de violencia que desembocaría en la guerra civil. En segundo lugar, en este año –para responder al desafío visible y contundente que representaban los frentes de masas al *estatus quo*- los grupos dominantes retomaron, poco a poco, la iniciativa para recuperar la hegemonía política y reconstruir mediante nuevas alianzas las instituciones políticas cuestionadas.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Un análisis pormenorizado de los sucesos del año 1980, hasta la ofensiva del FMLN de enero de 1981 se encuentra en Rafael Menjívar Ochoa, *Tiempos de Locura. El Salvador 1979-1981*, San Salvador, FLACSO, 2006. Las estrategias de reorganización política de los grupos dominantes se analizarán con más detalle en el Capítulo 3.

La sensación de estar ante una situación inaudita de desafío al poder, imposible de controlar con los viejos mecanismos y prácticas de clientelismo y represión, se basaba en una secuencia de actos y acontecimientos protagonizados por los frentes de masas y las organizaciones guerrilleras:

El 11 de enero de 1980, en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de El Salvador, las organizaciones populares identificadas con la izquierda revolucionaria anunciaron la fundación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas como una instancia para coordinar y, de esta manera, incrementar el impacto de sus acciones.¹⁶⁹ En este “acto político-cultural”, donde se cantaron tanto el Himno Nacional como cantos revolucionarios, en un auditorio adornado con la bandera de El Salvador y banderas rojinegras -un homenaje a la Revolución sandinista-, los representantes de varios frentes de masas anunciaron:

Estando las condiciones objetivas del desarrollo de nuestra sociedad maduras para el triunfo de la revolución, la unidad del movimiento popular resulta ser un imperativo, una condición básica para marchar en la ruta definitiva hasta la victoria del pueblo. Comprendiendo esta necesidad, este reto a los revolucionarios, las organizaciones BPR, LP-28, FAPU y la UDN hemos iniciado un proceso de unidad y coordinación de nuestras luchas; y queremos en perspectiva llegar a crear formas orgánicas que acrecienten la efectividad de los golpes que habremos de seguir dando a la oligarquía salvadoreña y al imperialismo y que faciliten y hagan más efectivas las conquistas del pueblo.¹⁷⁰

En el mismo documento, la CRM llamó a formar comités populares en los barrios, los centros de trabajo, la Universidad, los cantones y comunidades e invitó a los partidos y organizaciones democráticas sumarse al movimiento en contra de la junta cívico-militar de gobierno. También anunció la presentación de un programa de gobierno democrático y revolucionario. En la Marcha de la Unidad del 22 de enero de 1980, convocada por la CRM para dar una primera muestra de su fuerza, participaron alrededor de 200,000 personas.

Esta asamblea pública formó parte de toda una cadena de acciones realizadas por diversos actores para probar constantemente las correlaciones sociales de fuerza. Desde 1979, acontecimientos nacionales, entre ellos la liberación de los dirigentes del BPR, que habían sido secuestrados por los cuerpos de seguridad, gracias a masivas jornadas de protesta y la toma de la Catedral en mayo de 1979, e internacionales, especialmente, la insurrección popular sandinista en julio de 1979,

¹⁶⁹ Retomamos la descripción del acto de fundación de la CRM de FAPU, *Segundo manifiesto histórico*, San Salvador, 22 de enero de 1980.

¹⁷⁰ BPR, UDN, FAPU, LP-28: “En marcha hacia la unidad por la liberación definitiva. Manifiesto al Pueblo Salvadoreño, a los pueblos centroamericanos y del mundo”, *Combate Popular*, Periódico del BPR, San Salvador, No. 19, 2da quincena de enero de 1980, pp. 2-4. El subrayado es del texto original.

incrementaron la confianza del movimiento popular en su propia fuerza. Las marchas convocadas por los frentes de masas en San Salvador aparecieron, a los ojos de los observadores, cada vez más combativas y mejor organizadas: no sólo asistieron contingentes de organizaciones sindicales y campesinas de diferentes zonas del país, también se notaba cada vez más la presencia de las milicias de autodefensa que se enfrentaban a los cuerpos armados, tanto uniformados como civiles, para cubrir la retirada del resto de los participantes.

El hecho que la radicalización política de *todos* los actores –de derecha y de izquierda- haya sido acompañada por una escalada de la violencia política se debe a una lógica de la acción social en la que cada demostración de fuerza del movimiento popular fue respondida por un incremento de la violencia gubernamental y paramilitar y viceversa. Así, dos meses después de la Marcha de la Unidad, escuadrones de la muerte asesinaron al arzobispo Oscar Arnulfo Romero y en su funeral, el 30 de marzo de 1980, el ataque de francotiradores y provocadores armados dejó decenas de muertos y heridos. Posteriormente, las huelgas generales de junio y agosto de 1980 -convocadas en un ambiente de creciente terror contrainsurgente y un ascenso de las acciones armadas de las organizaciones político-militares- mostraron la fuerza que el movimiento popular de izquierda estaba adquiriendo a partir del mando coordinado de la CRM y las negociaciones entre los grupos guerrilleros para unir sus fuerzas en la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU).

Con la publicación de su plataforma de gobierno en marzo de 1980, la CRM presentó un proyecto de país que se puede considerar una respuesta “de igual a igual” a la plataforma de gobierno de la junta cívico-militar. Convocó a la formación de un gobierno de amplia base popular que debería cumplir con una serie de demandas y necesidades políticas, entre ellas, la elaboración de una nueva Constitución política que explícitamente respetara los derechos humanos, la fundación de un nuevo ejército y la desaparición de las fuerzas represivas; en términos económicos, una reforma agraria, la nacionalización de la banca, del comercio exterior y de la industria estratégica así como la expropiación de las empresas monopolistas; y finalmente una política social orientada a resolver los grandes rezagos en términos de salud, educación, empleo y vivienda.¹⁷¹

En la huelga general de los días 24 y 25 de junio se suspendieron entre el 80 y 90 por ciento de las actividades económicas, de comercio, transporte y de la administración pública. La segunda huelga general, que duró del 13 al 15 de agosto de 1980 y abarcó un 70 por ciento de las actividades

¹⁷¹ Véase, “Plataforma programática del gobierno democrático revolucionario”, *Combate Popular*, Periódico del BPR, San Salvador, No. 23, 2da quincena de marzo de 1980.

productivas, fue interpretada por simpatizantes y adversarios como una demostración “límite” del poder de las organizaciones populares. En consecuencia, los escuadrones de la muerte reaccionaron dedicándose en las siguientes semanas sistemáticamente al secuestro y asesinato de sindicalistas.¹⁷²

Pocos días después, el 21 de agosto, el sindicato de electricistas STECEL realizó un paro de 24 horas para demandar la reinstalación de trabajadores despedidos por su participación en la huelga general y la derogación del Decreto 296 que excluía a los empleados públicos del derecho a la sindicalización y la huelga. Este “apagón” –como los sindicalistas llamaban la paralización de la energía eléctrica en todo el país- fue una medida extrema del sindicato para exigir el cese a las matanzas de activistas sindicales y políticos por los escuadrones de la muerte. STECEL amenazaba con sabotear todo el sistema de abastecimiento de energía –incluyendo “hacer estallar las plantas con explosivos”- si la junta cívico-militar encabezada por el dirigente democristiano Napoleón Duarte no se comprometía a detener el accionar paramilitar.¹⁷³ El apagón y la paralización de los servicios de agua y de alcantarillado provocaron, según estimaciones oficiales, pérdidas de aproximadamente 40 millones de dólares y evidenciaron el desafío que representaba el sindicalismo militante para el Estado salvadoreño.¹⁷⁴ En respuesta, la junta de gobierno disolvió en octubre de 1980 el sindicato STECEL y “militarizó” las empresas estratégicas, lo cual significaba que el Ministerio de Defensa y Seguridad controlaba la administración, los trabajadores y empleados fueron incorporados a las Fuerzas Armadas, por lo cual la regulación de las relaciones laborales se hizo con base en los códigos militares.¹⁷⁵

Para desgastar a las organizaciones populares los cuerpos armados uniformados y civiles combinaron la represión de manifestaciones y mítines en las ciudades con cercos militares en el campo y el secuestro y asesinato de activistas y dirigentes opositores y representantes de la iglesia.

¹⁷² Rafael Menjívar Ochoa, con base en datos de la revista ECA, señala que en la huelga de junio de 1980 pararon aproximadamente 100,000 obreros industriales, 25,000 empleados públicos, 30,000 maestros, 100,000 jornaleros agrícolas, más los trabajadores de gasolineras, hospitales, transportes y comercio. Véase, R. Menjívar Ochoa, *op.cit.*, 2006, pp. 176-186.

¹⁷³ Entrevista con Héctor Bernabé Recinos, citado en *Ibíd.*, pp. 177-178.

¹⁷⁴ Véase, *Inforpress Centroamérica*, No. 407, 28 de agosto de 1980, p. 17. Para la evolución de la crisis política salvadoreña en los meses cruciales de 1980, véase A. Gilly, *op.cit.*, 1981 y R. Menjívar O., *op.cit.*, 2006.

¹⁷⁵ Las empresas afectadas por la militarización fueron Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Véase, *Inforpress Centroamérica*, No. 407, 28 de agosto de 1980, p. 17. El sistema de control militarizado de las empresas estatales y la administración pública se mantuvo hasta finales de la guerra, aunque hacía fines de la guerra fue más moderado, por ejemplo, se aceptaba la existencia de asociaciones sindicales.

Así, en noviembre de 1980 los dirigentes del FDR –representantes de los frentes de masas y de la oposición política moderada- fueron secuestrados por uniformados y, posteriormente, asesinados. Entre las víctimas se encontraba también el presidente del FDR, Enrique Álvarez Córdova, miembro de la oligarquía y ex ministro de agricultura en la primera junta militar. Este hecho puso de manifiesto que, quien se aliaba con las fuerzas de la izquierda, estaba corriendo peligro, y ni siquiera un nombre ilustre o una posición política reformista lo podía poner a salvo de la acción de los escuadrones de la muerte. La reacción violenta de las fuerzas fácticas a la organización de la oposición, al destruir redes sociales de oposición y producir un profundo miedo social, hizo que la movilización política contestataria, sobre todo en las zonas urbanas, entrara en reflujó. Para la ofensiva militar del FMLN en enero de 1981 esto significó que las acciones militares no desencadenaron la insurrección revolucionaria que los grupos guerrilleros habían planeado, deseado y anunciado desde hace una década.

Condiciones de posibilidad para el antagonismo político

¿Qué condiciones sociales y simbólicas hicieron posible esta situación de extrema confrontación y antagonismo político? La mayor parte de las investigaciones sobre el estallido de la guerra civil en 1981 tienden a hacer hincapié en la combinación explosiva de una modernización económica excluyente y estructuras políticas autoritarias que estallaron en la coyuntura política iniciada en 1969/1970.¹⁷⁶

Las décadas de 1950 y 1960 fueron años de crecimiento y prosperidad para la economía salvadoreña. Aprovechando la coyuntura que se abrió con la constitución del Mercado Común Centroamericano en 1961 y los apoyos en asesoría técnica e inversiones de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), realizados en el marco de la Alianza por el Progreso (que data también de 1961), los sectores dominantes, vinculados en su origen al cultivo de café, lograron ampliar el aparato industrial, diversificar sus actividades económicas y modernizar la agricultura sin afectar las estructuras de propiedad y la distribución de ingreso. De esta manera, a finales de los setenta el uno por ciento de la población (116 propietarios) absorbía el 35 por ciento del ingreso nacional con ganancias declaradas de aproximadamente 20 millones de colones al año, que era 6700 veces el ingreso de un trabajador.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Siendo un tema estudiado exhaustivamente (véase Capítulo 1.3) se presentarán sólo las conclusiones más relevantes con respecto a nuestra interrogante sobre la emergencia de los nuevos actores sociales.

¹⁷⁷ Véase, M. Dolores Albiac, “Los ricos más ricos de El Salvador”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año XLV, No. 612, octubre de 1999, pp. 841-864, p. 845.

Los “años dorados” del modelo agroexportador –las dos décadas previas al estallido revolucionario- exacerbaron las desigualdades sociales en la sociedad salvadoreña. Dada la densidad poblacional de El Salvador y la concentración de la tierra, la introducción de nuevos cultivos para la exportación – como el algodón y la caña de azúcar- y de técnicas de producción agropecuaria, que requerían menos mano de obra, desplazaron a la fuerza de trabajo. La situación de pauperización rural – reflejada en el número de familias campesinas sin tierra- se agudizó con la expulsión de miles de salvadoreños de Honduras después de la guerra de 1969.

Cuadro 2.1 El Salvador: Familias campesinas sin tierra

	1961	1971	1975
Porcentaje	11,8 %	29,1%	40,9%
Números absolutos	30,000	112,000	167,000

Fuente: Luis Sebastián, “Consideraciones político-económicas sobre la oligarquía en El Salvador”, CINAS, *Cuaderno de trabajo*, No. 6, 1986, p. 30, cit. en A. Rouquié, *op. cit.*, 1994, p. 105.

En este contexto la “república militar con una fachada representativa”¹⁷⁸ –caracterización del régimen militar salvadoreño acuñada por Alain Rouquié- optó por una combinación de reformas limitadas, estrategias de control, que incluían la cooptación de los opositores, y golpes de estado “preventivos” para imponer medidas represivas –toque de queda, destierro de opositores, persecución política- para desactivar el descontento social. La combinación de medidas reformistas, clientelares y represivas se refleja en la fundación paralela de la institución gubernamental FOCCO para financiar obras de uso colectivo en las zonas rurales, de la organización campesina UCS, que recibía recursos de AIFLD para fundar cooperativas campesinas y de ORDEN, la organización paramilitar conformada por minifundistas, jornaleros agrícolas y pequeños comerciantes.¹⁷⁹ Todas estas organizaciones surgieron en 1968. Pero ante la falta de respuestas para resolver el problema central –la escasez de tierra cultivable y la falta de voluntad gubernamental para redistribuirla- las medidas de cooptación (llevadas a cabo mediante FOCCO y la UCS) sólo agudizaron la conflictividad sociopolítica en el campo. En este contexto sociopolítico, la red organizativa de ORDEN se convirtió en un actor y catalizador central en las comunidades campesinas para agudizar, con sus actividades de espionaje, denuncia y abusos los conflictos violentos entre los habitantes de las comunidades.

¹⁷⁸ A. Rouquié, *op. cit.*, 1994, p. 62.

¹⁷⁹ ORDEN: Organización Democrática Nacionalista, FOCCO: Programa de Fomento y Cooperación Comunal, UCS: Unión Comunal Salvadoreña, AIFLD: Instituto Americano para el Sindicalismo Libre. Véase, S. Gordon, *op. cit.*, 1989, especialmente pp. 141-144 y 170-173.

La modernización económica también contribuyó a la emergencia y consolidación de nuevos sectores sociales, como el proletariado industrial –poco numeroso pero ubicado estratégicamente en sectores productivos importantes- y las capas medias que reclamaban una apertura de los canales de participación y de representación política. Los años setenta significaron, entonces, un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores urbanos expresado en un alza de los precios de la canasta básica no recompensada por aumentos salariales. De esta situación da cuenta el Cuadro 2.2, en donde puede observarse que en 1974 los salarios urbanos solamente alcanzaron un 94 por ciento del valor de 1970, mientras los salarios rurales aumentaron un por ciento, comparado con 1970. La presión estructural sobre los salarios, debido a la abundancia de mano de obra en las ciudades, la represión y las trabas legales y empresariales a la libertad sindical sirvieron como mecanismos de contención a las exigencias obreras respecto a aumentos salariales y la negociación de contratos colectivos.¹⁸⁰

Cuadro 2.2 Evolución de los salarios reales (1970 =100)

Año	Salarios Urbanos	Salarios rurales
1974	94	101
1977	92	88
1979	88	103

Fuente: Victor Bulmer-Thomas, *The Political Economy of Central America since 1920*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 219, cit. en *Ibid.*, p. 108.

Dos acontecimientos políticos evidenciaron que la alianza conformada por el ejército y la oligarquía no estaba dispuesta a abrir voluntariamente el sistema político a las fuerzas moderadas de oposición. Tanto el fraude electoral de 1972, que impidió la victoria electoral de la propuesta reformista representada por los candidatos de la UNO –el demócratacristiano Napoleón Duarte y el socialdemócrata Miguel Ungo- como el de 1977, que incrementó la persecución de los simpatizantes y dirigentes de la oposición, contribuyeron a la deslegitimación social de la vía electoral como una estrategia efectiva para remover a los militares del gobierno. El golpe de estado del 15 de octubre de 1979 realizado por la Juventud Militar (un grupo de militares reformistas) para remover al general Romero e instalar un gobierno cívico-militar reformista no pudo contrarrestar el antagonismo

¹⁸⁰ En octubre de 1973, el FMI reportó un alza de precios al consumidor de 8,9 por ciento, la más elevada desde 1963. En noviembre del mismo año esta tasa descendió a un 5,6 por ciento. En 1974 una de las banderas del FAPU fue la protesta en contra de los aumentos de los costos de vida que perjudicaron a las clases populares. Véase, *Inforpress Centroamérica*, No. 104, 14 de agosto de 1974, p. 12.

político, que se había agudizado en los años previos, e impedir que la radicalización desembocara en la guerra civil.

Uno de los factores que contribuye a las rebeliones, señalaba Barrington Moore, es un deterioro de las condiciones de vida lo suficientemente acelerado para que los sectores afectados no puedan acostumbrarse a esta transformación de su modo de vida. En coincidencia con este argumento, las bases sociales del movimiento revolucionario salvadoreño fueron los sectores sociales más afectados o creados por la modernización económica excluyente: campesinos amenazados por la pauperización, jornaleros agrícolas desplazados y trabajadores urbanos informales, acompañados por un segmento importante del proletariado industrial formal y por estudiantes y profesionales de clase media.¹⁸¹ Pero Moore señaló también que las rupturas de rutinas cotidianas –provocadas por el deterioro de las condiciones de vida– así como pueden generar movimientos revolucionarios pueden llevar a la constitución de movimientos reaccionarios o a la apatía social. La combinación de autoritarismo político y pauperización social –por más explosiva que aparezca– puede explicar las condiciones en las cuales se gesta el descontento pero no explica por qué en determinadas situaciones este descontento desemboca en radicalización política y movilización social y en otras no. En otras palabras, se requiere de “algo más” para que el descontento social se canalice en apoyos sociales a movimientos revolucionarios.¹⁸²

En el caso de El Salvador el “algo más” fue producto del encuentro y entrelazamiento de diferentes grupos sociales en torno a tres actores que imprimieron su “sello” –es decir su discurso y prácticas organizativas– a la movilización social: el movimiento campesino radicalizado, sindicatos industriales anti-gubernamentales y los grupos guerrilleros. Los actores colectivos que en la segunda mitad de los años setenta expresaron organizativamente este entrelazamiento fueron los frentes de masas.

Vasos comunicantes: Frentes de masas y grupos guerrilleros

Entre 1977 y 1979 los frentes de masas, con su combinación de reivindicaciones económicas y políticas, con métodos de lucha extra-parlamentaria y un planteamiento insurreccional que postulaba la ruptura total con el sistema existente, experimentaron un acelerado crecimiento de sus activistas y simpatizantes. Un factor importante que favorecía su creciente influencia social fue el cierre de los canales legales de expresión política, por lo cual organizaciones no-partidistas, como

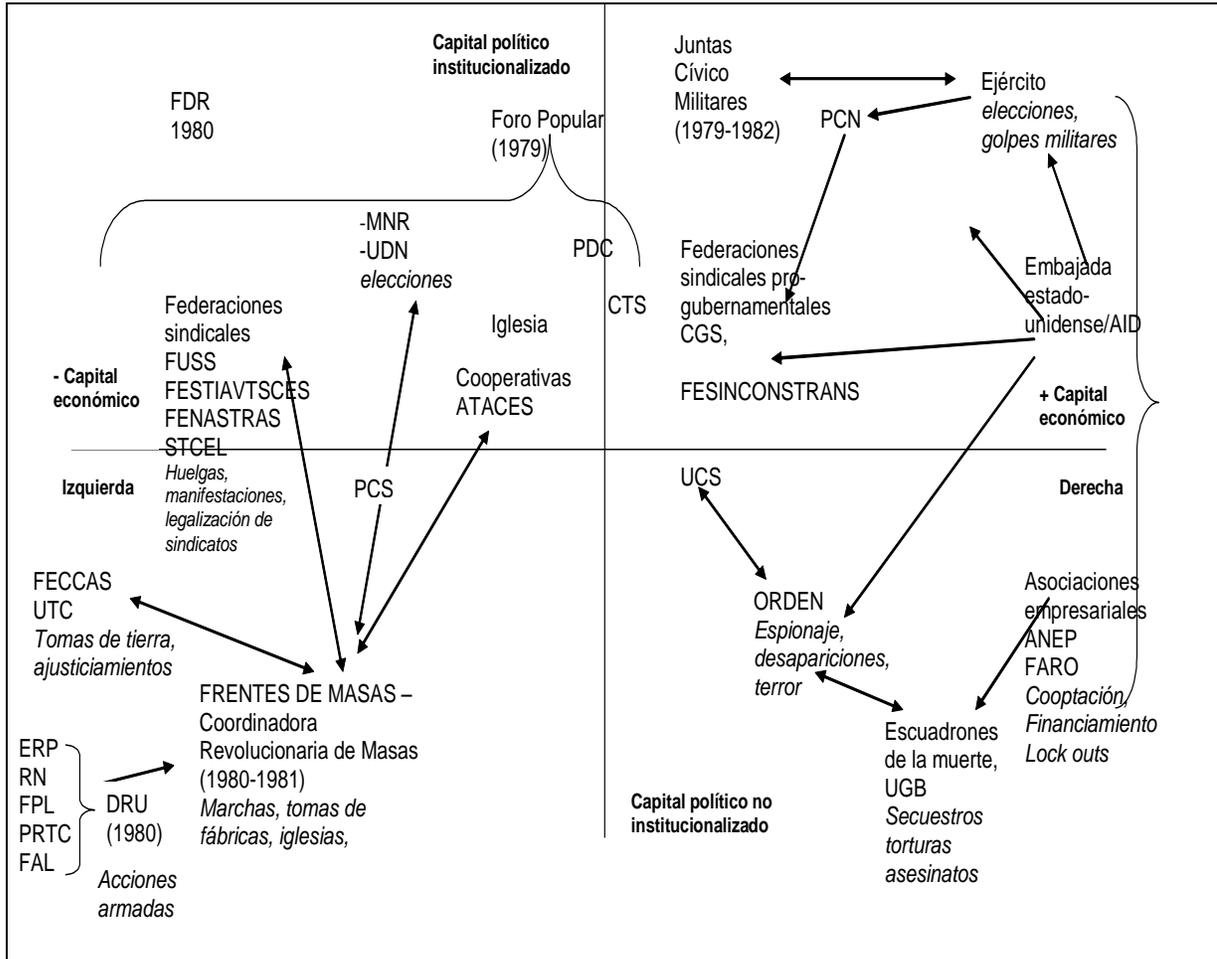
¹⁸¹ J. M. Paige, *op.cit.*, 1997, p. 30.

¹⁸² Véase, B. Moore, *op.cit.*, 1982, pp. 617-623.

federaciones sindicales, asociaciones campesinas, la universidad e incluso la iglesia católica asumieron un papel de voceros políticos para expresar las demandas de sus bases y de los demás sectores excluidos políticamente. Estas “asociaciones-partido”, como los denominó Sara Gordon, se presentaron -y fueron reconocidas por el resto de los actores políticos- como canales para la lucha gremial y política y como espacios legítimos para elaborar y debatir posicionamientos políticos-ideológicos.

Gracias a estas funciones en un contexto político excluyente, los frentes de masas lograron transformarse en vasos comunicantes entre la guerrilla y las organizaciones populares y en “motores” de la insurrección que, al entrelazar organizaciones de representación gremial entre sí y con la guerrilla, modificaron sus modalidades de organización y prácticas políticas. El Diagrama 2.1 busca ilustrar la ampliación de los repertorios de protesta como efecto práctico de estas interacciones y entrelazamientos.

Diagrama 2.1. Actores del campo político salvadoreño entre 1979/1982



Elaboración propia. Las flechas representan relaciones entre actores, las flechas unidireccionales indican jerarquías. Los corchetes representan alianzas entre actores.

El diagrama es apenas un bosquejo de las complejas relaciones entre los actores centrales que ocupaban posiciones en el espacio político a fines de los años setenta. Como se señaló en el primer capítulo, la línea horizontal da cuenta del acceso al capital político (institucionalizado y no institucionalizado) mientras la línea vertical representa la oposición político-ideológica entre derecha e izquierda. Como puede observarse en el cuadro, en este periodo en cada uno de los cuadrantes había una gran variedad de agentes vinculados a través de relaciones y alianzas, lo cual es un indicador para la efervescencia social de este momento histórico. Prácticamente todos los agentes con posiciones que contaban con un alto componente de capital político institucionalizado –partidos políticos legales, las Fuerzas Armadas, la embajada estadounidense, algunos sindicatos con registro legal- mantenían al mismo tiempo vínculos con actores del espacio “informal” de la política.

Las redes sociales surgidas de esta manera posibilitaron una interacción entre diversos actores así como una diversificación de estrategias políticas y repertorios de protesta. Por ejemplo, el empresariado –representado en el diagrama por los grupos de interés ANEP y FARO¹⁸³– gracias a sus vínculos con las Fuerzas Armadas, la embajada norteamericana y los escuadrones de la muerte, podía aprovechar diversos medios para imponer sus intereses en el campo político, desde el cabildeo con la respectiva fracción generacional (“tanda”) del ejército que controlaba el gobierno hasta el asesinato de opositores. Por su parte, el lado opositor también construía de manera conspirativa y clandestina sus propias redes. Así, en el Foro Popular, instalado en septiembre de 1979, se agrupaban los partidos legales y semilegales de la oposición (como la UDN, el MNR y PDC) con sindicatos de izquierda y centro, e incluso un frente de masas, las Ligas Populares-28 de febrero ligadas al ERP.

El mapa político evidencia también la polarización política como una dinámica importante en el campo político salvadoreño. Las redes sociales que articulaban a los diversos agentes no cruzaban la frontera político-ideológica, con excepción de la experiencia única del Foro Popular que integraba, además de las fuerzas de izquierda, al centro político (representado por el PDC y la federación democristiana CTS). Pero la polarización política hacía inviable este tipo de alianzas, lo cual se evidenció con la ruptura del Foro en enero de 1980, cuando el PDC tomó la decisión de participar en la segunda junta cívico-militar, mientras la izquierda inició su proceso de reagrupamiento que llevaría a la constitución del FMLN.

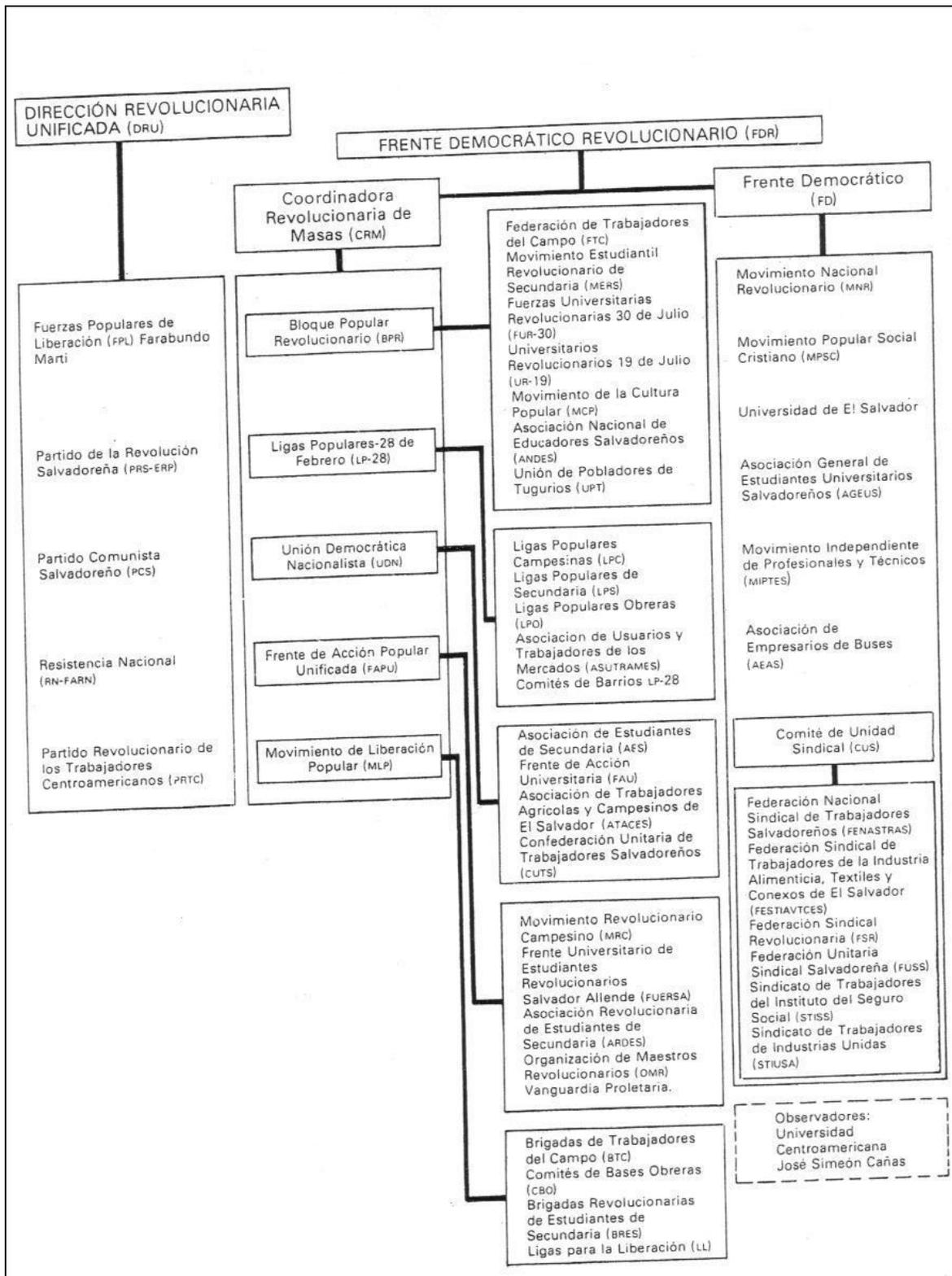
El diagrama permite ver una de las razones por las cuales la Coordinadora Revolucionaria de Masas resultó ser un actor político central de la crisis de 1979 y 1980, pese a que no se movía en el espacio institucionalizado de la política. La CRM agrupó por medio de los frentes de masas diferentes organizaciones de base –como federaciones sindicales y asociaciones campesinas– que representaban distintas experiencias organizativas, afinidades ideológicas y vínculos con los grupos guerrilleros. El acercamiento de sus direcciones mediante la participación en la CRM formó parte de una estrategia más amplia de reagrupamiento de las fuerzas opositoras que culminó en la fundación del FDR, el 18 de abril de 1980, seguido por la unificación de las organizaciones guerrilleras, primero en la DRU y, en octubre del mismo año, en el FMLN.

¹⁸³ ANEP: Asociación Nacional de la Empresa Privada; FARO: Frente Agrario de la Región Oriental; UGB: Unión Guerreros Blancos.

El Diagrama 2.2 ilustra el significado de la noción “vasos comunicantes” al referirse a los frentes de masas: cada uno estaba vinculado con una de las cinco organizaciones armadas y, a la vez, constituía organizaciones políticas sectoriales que aglutinaban a las organizaciones de base que existían en los diferentes espacios sociales, como la fábrica, la colonia popular, la comunidad campesina, los colegios y la universidad.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Véase, A. Rouquié, *op.cit.*, 1994, pp. 147-149; S. Gordon, *op.cit.*, pp. 294-305, A. Gilly, *op.cit.*, 1981, pp. 50-51.

Diagrama 2.2 La alianza de la izquierda revolucionaria salvadoreña (1980)



Fuente: C.R. Cabarrús, *op.cit.*, p. 320.

El diagrama no permite ver las diferencias en cuanto al tamaño real de los cinco frentes de masas de la CRM porque cada frente fue el resultado de una experiencia organizativa particular que nació de las estrategias de las organizaciones armadas para acercarse a las organizaciones populares entre 1970 y 1975. Mientras los frentes de masas del PRTC y ERP –el MLP y las Ligas Populares-28 de Febrero, respectivamente,- eran pequeños en número y surgieron como una iniciativa directa de militantes guerrilleros para seguir el ejemplo exitoso del FAPU y BPR, los otros tres frentes estaban integrados por sindicatos y asociaciones campesinas. Las diferencias de origen se manifestaron en diferencias en la capacidad de convocatoria y su composición social. Hay que tomar las cifras difundidas por los frentes de masas con muchas reservas porque no es posible contar con un registro de los activistas, sin embargo, las fuentes coinciden que el BPR era la organización más relevante en términos numéricos, seguido por el FAPU.¹⁸⁵ Pero en los momentos más importantes de la movilización política la capacidad de convocatoria de cada uno de los frentes de masas fue mucho más grande que estas cifras permiten apreciar. Indicadores para esta fuerza son la asistencia a la Marcha de la Unidad en enero de 1980, a la cual asistieron más de 200,000 personas -y muchos contingentes del interior del país no pudieron llegar a la capital debido a los retenes militares-, y la adhesión a las huelgas generales en junio y agosto del mismo año.

El frente de masas más antiguo y más parecido en sus dinámicas a un partido de masas convencional era la Unión Democrática Nacionalista del Partido Comunista, fundada en 1962. Desde 1969 funcionaba como un vehículo legal del PC para armar alianzas electorales -como la de 1972- y participar en los espacios político-institucionales. La UDN controlaba dos de las federaciones sindicales no oficialistas –la FUSS y la FESTIAVSTCES- y la asociación campesina ATACES, una organización sin registro legal y con presencia en los departamentos Cabañas y Usulután, además tenía cierta presencia en FENASTRAS. También la integraban las organizaciones estudiantiles AES y FAU.¹⁸⁶

¹⁸⁵ De acuerdo a Segundo Montes en 1980 el BPR contaba con 60,000 activistas, FAPU: 40,000; UDN: 25,000; LP-28: 15,000; MLP: 1,500. Fuente: Segundo Montes, *El Salvador: las fuerzas sociales en la presente coyuntura (enero 1980-diciembre 1983)*. San Salvador, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, 1984, p. 186, cit. en Luis Armando González, “Iglesia, organizaciones populares y violencia sociopolítica”, Rodolfo Cardenal y L.A. González (comp.), *El Salvador: la transición y sus problemas*, San Salvador, UCA Editores, 2002, pp. 231-258, pp. 251-252.

¹⁸⁶ FUSS: Federación Unitaria Sindical Salvadoreña, FESTIAVSTCES: Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria de Alimentación, Vestimenta, Textiles y Similares, ATACES: Asociación de Trabajadores Agrícolas y Campesinos de El Salvador, FENASTRAS: Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños. AES: Asociación de Estudiantes de Secundaria, FAU: Frente de Acción Universitaria.

Si bien la UDN tenía una trayectoria más larga, y por lo tanto más experiencia política que otras organizaciones de izquierda, los que mejor lograron capitalizar el proceso de radicalización política de los setenta fueron el BPR y el FAPU, vinculados respectivamente a las organizaciones guerrilleras FPL y FARN.

El FAPU se constituyó por primera vez en abril de 1974 en el departamento Cuscatlán, a partir de una estrategia de campesinos organizados y sacerdotes para ampliar alianzas y buscar apoyo para la lucha de la población desplazada de sus comunidades, a raíz de las inundaciones provocadas por la construcción de la represa hidroeléctrica Cerrón Grande. De acuerdo a José Inocencio Alas -el sacerdote que contribuyó de manera importante a la organización campesina en Suchitoto-, en la fundación del FAPU participaron organizaciones locales campesinas (entre ellas FECCAS), la federación sindical comunista FUSS, ANDES 21 de Junio y organizaciones estudiantiles.¹⁸⁷ Pero esta alianza no prosperó debido a los conflictos entre activistas, que expresaban la lucha entre las organizaciones político-militares por imponer su hegemonía en el movimiento popular. Con las expulsiones y salidas de activistas, que representaban a diferentes fracciones políticas de la oposición -los activistas del PC (los sindicalistas de la FUSS), los estudiantes de la UCA, los militantes de FECCAS y de ANDES, la parroquia de Suchitoto- el FAPU se quedó bajo el control de militantes de Resistencia Nacional.¹⁸⁸ El “segundo FAPU”, como se denominó el frente controlado por este grupo guerrillero dejó de ser una organización heterogénea y regional y se convirtió en una estructura con proyección nacional y compuesta por cinco organizaciones sectoriales: Vanguardia Proletaria (VP), el Movimiento Revolucionario Campesino, la organización estudiantil FUERSA, la asociación de estudiantes de secundaria (ARDES) y la Organización Magisterial Revolucionaria (OMR).

En el “Manifiesto histórico” -que presenta los principios político-ideológicos y las estrategias del FAPU- la organización criticaba los posicionamientos políticos de la UDN, porque apostaba a la participación en las elecciones presidenciales de 1977, y se definía a sí mismo como un “*frente político-no electorero*” que descartaba la vía electoral como estrategia para desplazar a los militares del

¹⁸⁷ Véase, José Inocencio Alas, *Iglesia, tierra y lucha campesina, Suchitoto, El Salvador 1968-1977*, San Salvador, Asociación de Frailes Franciscanos, OFM de CA, 2003, sobre el origen del FAPU véase especialmente pp. 217-224.

¹⁸⁸ Véase, *Ibíd.* Entre los activistas que salieron del FAPU estuvieron militantes de las FPL, que formarían el BPR, y algunos que en 1975 fundarían el PRTC. Véase, Nidia Díaz, *La construcción del FMLN y el aporte de las cinco organizaciones históricas que lo constituyeron*, Ponencia para conmemorar el 25 aniversario del FMLN, “Origen y desarrollo del Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP”, *El Torogoz. La revista farabundista*, disponible en línea, eltorogoz.net/prtc.htm (consultado en noviembre 2006).

gobierno. La alternativa, según el Manifiesto, se encontraba en la ruptura con las viejas concepciones sobre la organización y las estrategias políticas, mediante la construcción de nuevos liderazgos en las organizaciones populares, el desplazamiento de las dirigencias burocráticas, el desarrollo de nuevas formas de lucha, centradas en la acción directa y extraparlamentaria, y de nuevas modalidades de organización orientadas a la unidad de acción y el involucramiento directo de las bases en la construcción de los frentes unitarios. Al aglutinar las fuerzas populares en la lucha (y no burocráticamente) se construiría la alianza obrero-campesina necesaria para derrotar el régimen militar, instalar una democracia popular y transformar las estructuras excluyentes de la sociedad salvadoreña ¹⁸⁹

Entre 1977 y 1979, el FAPU pudo consolidar su influencia en los colectivos estudiantiles de la Universidad Nacional y grupos campesinos en las cercanías del Volcán Guazapa a 40 Km. de San Salvador. Pero la fuerza del FAPU en 1979 y 1980 se basó principalmente en sindicatos urbanos agrupados en FENASTRAS, que aglutinaba a sindicatos de sectores estratégicos de la economía salvadoreña y, aunque en menor medida, en la FUSS.¹⁹⁰

Una de las razones por la cual FECCAS, ANDES y los estudiantes de la UCA se retiraron del FAPU en 1975 fue la decisión de las FPL de formar otro frente de masas. El Bloque –como se le decía-, que “nació” en el sótano de la Catedral el 5 de agosto de 1975, se convirtió en la organización de masas más influyente del periodo porque aglutinó a los gremios anti-gubernamentales más grandes de la época: la organización del magisterio ANDES 21 de junio y las organizaciones campesinas FECCAS y UTC. En la fundación participaron, además, organizaciones de las colonias populares agrupadas en la UPT y dos asociaciones estudiantiles: UR-19 y MERS.¹⁹¹ El BPR, igual como el FAPU, declaró que las vías institucionales para lograr cambios sustanciales en el sistema político y la sociedad se habían agotado, por lo cual la derrota del estado militar era sólo un paso en la lucha por construir el socialismo en El Salvador. Por lo tanto el Bloque se opuso a cualquier alianza con la burguesía

¹⁸⁹ FAPU, *Manifiesto histórico*, San Salvador, mimeo, marzo de 1976.

¹⁹⁰ Véase, FAPU, Balance del proceso revolucionario en El Salvador, *Boletín Internacional*, El Salvador, Junio de 1978, p. 7; “La alternativa revolucionaria”, *Revista Polémica. Problemas de la Revolución Salvadoreña*, San Salvador, Época I, No. 2, mayo-junio de 1977, pp. 35-45. C. R. Cabarrús, *op.cit.*, 1983, p. 159.

¹⁹¹ UTC: Unión de Trabajadores del Campo, FTC: Federación de Trabajadores del Campo, ANDES 21 de Junio: Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de junio, UPT: Unión de Pobladores de Tugurios, UR-19: Universitarios Revolucionarios 19 de Julio, MERS: Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria. Véase, BPR, “30 de julio de 1981. Manifiesto del Bloque Popular Revolucionario al pueblo salvadoreño y demás pueblos del mundo en su sexto aniversario”, *El Nuevo Diario*, Managua, 30 de julio de 1981, p. 4; A. Rouquié, *op.cit.* 1994, p. 146.

“nacional” y planteó la necesidad de realizar las luchas por las reivindicaciones socioeconómicas inmediatas con métodos de acción directa y de formar núcleos organizativos de poder popular –los comités populares- en todos los espacios sociales.¹⁹²

Posiblemente fue el éxito que tuvieron las FPL y Resistencia Nacional con sus frentes de masas, que llevó a los cuadros del ERP a impulsar la construcción de las LP-28 en 1977. Esta organización, si bien nunca alcanzó la influencia social del BPR o la inserción en sectores económicos estratégicos como el FAPU, pudo consolidar la posición del ERP en las zonas geográficas donde operaban sus núcleos guerrilleros, especialmente en Morazán, Usulután, San Vicente, La Unión, Santa Ana, y en algunos cantones de Chalatenango. En el área metropolitana, los grupos de las LP-28 formaban las milicias urbanas y los grupos de autodefensa que en 1980 acompañaban y defendían las marchas convocadas por la Coordinadora.¹⁹³

El último frente de masas en conformarse fue el Movimiento de Liberación Popular –MLP- en 1979, vinculado a la organización guerrillera PRTC. En esta organización fueron agrupados los colectivos y grupos sectoriales –incluyendo algunos grupos campesinos- que los militantes del PRTC habían organizado desde 1975 en la Liga para la Liberación. Fuera de la capital, su influencia se limitaba a algunas zonas en el norte de San Vicente, Suchitoto y algunos cantones de Chalatenango.¹⁹⁴

2.3. Movilización social y radicalización política en El Salvador de los setenta

¿Cómo explicar el proceso por medio del cual las opciones radicales en El Salvador –a diferencia de otros países- se convirtieron en canales legítimos de lucha y de expresión política para un segmento considerable de la población? Para entender las lógicas de acción, que hicieron posible esta interacción, en esta sección se reconstruye el encuentro de segmentos organizados de los grupos dominados con los activistas guerrilleros, así como las condiciones sociales, políticas y simbólicas que posibilitaron este acercamiento.

¹⁹² *Combate Popular*, Periódico del BPR, San Salvador, No. 15, noviembre de 1979, pp. 9-10.

¹⁹³ Véase, “Origen y desarrollo del Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP”, *op.cit.*, (consultado en noviembre 2006).

¹⁹⁴ Véase, N. Díaz, *op.cit.*, 2005.

La radicalización campesina

A mediados de los setenta, el campo salvadoreño se caracterizaba por una estructura social altamente polarizada. El proletariado agrícola representaba el 40 por ciento de la población rural, los campesinos arrendatarios con menos de dos hectáreas de tierra constituían el 50 por ciento y los pequeños campesinos que poseían entre dos y diez hectáreas representaban el 8 por ciento de la población rural. Sólo un 2 por ciento de la población rural eran grandes latifundistas -en su mayoría ganaderos y dueños de grandes extensiones de tierra sembradas con café, algodón o caña de azúcar- vinculados por lazos familiares con la burguesía agroindustrial.¹⁹⁵ En el occidente del país (el centro de las actividades agroexportadoras), la Masacre de 1932 -cuando el ejército y la Guardia Civil respondió a la insurrección campesina e indígena con el asesinato, en pocos días, de aproximadamente 15,000 a 30,000 personas- acabó con los incipientes procesos de asociación campesina en estos lugares, al crear un miedo social a la movilización política que se mantuvo durante las décadas siguientes. Pero también en el resto del país, la estructura social polarizada y excluyente pudo sostenerse gracias a la prohibición de todo tipo de organización reivindicativa campesina y una combinación de prácticas de represión selectiva y relaciones clientelares, construidas en torno al “centro local de poder”, por lo general, los propietarios locales de los latifundios vinculados a los poderes políticos locales, los jueces y la Guardia Nacional (entrenados por el Estado pero financiados por los latifundistas). Los grupos paramilitares (civiles armados al servicio de los latifundistas) formaban parte de estas relaciones clientelares: colaborar con ellos ofrecía una serie de beneficios, que iban desde acceso a empleos y créditos agrarios hasta la impunidad cuando cometían abusos y actos violentos. Todos estos factores -incluyendo la paranoia de los grupos dominantes, que vieron en cualquier intento organizativo independiente una potencial amenaza- imprimieron a las relaciones sociales en el campo un alto grado de violencia.¹⁹⁶

Los factores estructurales generales permiten una primera aproximación para entender la situación política y las formas de vida en el campo. Sin embargo, no son suficientes para reconstruir el

¹⁹⁵ Véase, Wim Pelupessy, *Políticas Agrarias en El Salvador (1960-1990)*, EDUCA, marzo, 1998, p. 63, cit. en Antonio Álvarez y Joaquín Mauricio Chávez, *Tierra, conflicto y paz*, San Salvador, Colección Estudios de Paz/CEPAZ, 2001, p. 31.

¹⁹⁶ La organización anticomunista paramilitar ORDEN es el ejemplo más conocido de redes de colaboradores civiles con la violencia del estado, por haber sido una estructura nacional y fundada desde el ejército. Sin embargo, las prácticas de colaboración civil en la represión del Estado salvadoreño vienen desde antes, como lo señala Patricia Alvarenga en su estudio *Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880-1932*, San José, Educa, 1996, pp. 323-347, J. Paige, *op. cit.*, 1997, pp. 99-126. Sobre la consolidación del régimen político, después de 1932, y los mecanismos clientelares que estaban en la base del gobierno del General Martínez Hernández véase también E. Ching, et.al, *Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador*, San Salvador, UCA-Editores, 2007.

proceso de radicalización campesina que se dio a partir de un entrelazamiento entre actores políticos y movimientos de protesta nacionales e historias locales de resistencia. Para ubicar las zonas de resistencia campesina previas a la guerra, se puede tomar en cuenta los frentes de guerra y zonas de control territorial del FMLN en los años ochenta, zonas donde se había hecho un trabajo político en los años previos a la guerra. Estas áreas se encontraban principalmente en el norte y el oriente del país -es decir, Chalatenango, Morazán, San Vicente, Usulután, Cabañas y San Miguel-, y alrededor del volcán Guazapa, 40 Km. al norte de San Salvador.¹⁹⁷

El proceso de radicalización campesina ha sido recuperado por medio de historias de vida, etnografías locales y testimonios, los cuales indican que, si bien la intervención de “agentes externos” -sacerdotes, activistas políticos, estudiantes- fue un factor importante para la movilización campesina, ésta se dio no sólo por iniciativa de los agentes, sino también por el interés de los mismos campesinos. Esto fue posible porque, no obstante las prohibiciones estatales a la asociación campesina y la intimidación, existían espacios de sociabilidad campesina relativamente autónomos y protegidos de la intervención estatal, como por ejemplo, cajas de apoyo mutuo o las cofradías fomentadas, muchas veces, por las parroquias.¹⁹⁸ Por otro lado, los testimonios indican también que las pocas cooperativas existentes -por ejemplo de ayuda mutua- fomentaban también la creación de espacios de reunión de la comunidad campesina. La modernización del agro en los años cincuenta y sesenta que debilitó mecanismos tradicionales de control y compromiso, como el colonato, creó condiciones de posibilidad para que estos espacios de sociabilidad se abrieran y transformaran en plataformas para organizar luchas reivindicativas.

A grandes rasgos es posible ubicar tres momentos en el proceso de organización y radicalización campesina: El primer momento se caracterizó por el surgimiento de organizaciones locales en la segunda mitad de los años sesenta, las cuales fueron concebidas como espacios para promover

¹⁹⁷ Sobre las zonas de control del FMLN, véase, James Dunkerley, “El Salvador desde 1930”, Leslie Bethell (ed.), *Historia de América Latina, América Central desde 1930*, Tomo 14, Barcelona, Cambridge University Press/Crítica, 2001, pp. 87-113, p. 110; Mario Lungo Uclés, *El Salvador en los años 80: Contrainsurgencia y Revolución*, La Habana, Casa de las Americas, 1991, p. 17ss; H. Byrne, *op.cit.*, 1996, pp. 80-85.

¹⁹⁸ Investigaciones basadas en archivos salvadoreños desclasificados hace poco tiempo, arrojan nuevos resultados sobre la conservación y reproducción de espacios de sociabilidad en el campo, incluso en las regiones más afectadas por la Masacre de 1932. Por ejemplo Erik Ching y Virginia Tilley plantean que, de acuerdo a estos documentos, la desaparición de la cultura indígena después de La Matanza de 1932 no fue tan absoluta como el “mito de El Salvador mestizo” maneja. Los indígenas, aunque abandonaron la lengua y sus trajes, lograron mantener instituciones centrales de su cultura como las cofradías y la estructura de las comunidades, recurriendo incluso a los militares para protegerse de las hostilidades de los ladinos. Véase, Erik Ching y Virginia Tilley, “Indians, the Military and the Rebellion of 1932 in El Salvador”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 30, No. 1, febrero de 1998, pp. 121-156.

estrategias mutualistas con el fin de mejorar las condiciones de vida de los afiliados, y educar a los campesinos, principalmente a los líderes comunitarios. En esta primera fase, la intervención de militantes locales de los partidos de oposición (especialmente democristianos o comunistas), y de los sacerdotes de las parroquias, fue crucial. El segundo momento, en la primera mitad de los años setenta, inició con la ruptura de estas formas incipientes de participación social y se manifestó en el surgimiento de organizaciones con demandas y estrategias más radicales o cambios de liderazgos en las ya existentes. El tercer momento –los años inmediatamente antes del estallido de la guerra civil– se caracterizaron por el incremento y la radicalización de las protestas en el campo que incluía enfrentamientos armados entre integrantes de las organizaciones radicales, de la organización paramilitar ORDEN y la Guardia Nacional.

En el marco de esta periodización hubo distintas trayectorias posibles para la radicalización campesina, dependiendo de las experiencias locales de organización. Por ejemplo, entre 1965 y 1968, la fundación de cajas de ahorro o de organizaciones mutualistas en las comunidades campesinas pudo coincidir con los esfuerzos de activistas opositores empeñados a ampliar y consolidar sus bases rurales, dando lugar a las primeras asociaciones campesinas de carácter reivindicativo e independiente del gobierno. Por ejemplo, en 1965 se fundaron, por iniciativa de la organización gremial democristiana UNOC, las Ligas campesinas para facilitar la capacitación sindical de sus representantes en los cantones. Éstas se agruparon en 1969 en FECCAS, una asociación de carácter federativo. En 1968 surgió, vinculada al Partido Comunista, la asociación de cooperativas campesinas ATACES. También el Estado salvadoreño se empeñó en la creación de organizaciones comunitarias y campesinas para contar con mecanismos para cooptar líderes locales a las estructuras del partido gubernamental PCN, canalizar recursos e intervenir en la conflictividad rural. En 1968, con apoyo financiero de la AIFLD, se fundó la UCS que, de acuerdo con los informes gubernamentales, contaba con unos 60,000 afiliados y estaba vinculada con la organización paramilitar ORDEN creada por el General Medrano en el mismo año.¹⁹⁹

Ninguna de estas organizaciones contaba con registro (tampoco la progubernamental UCS que el gobierno no quería legalizar para no crear precedentes de organización campesina legal).²⁰⁰ Fue en 1976, en el marco del proyecto de transformación agraria impulsado por el gobierno del Coronel Molina, que se establecieron por primera vez condiciones institucionales mínimas para reconocer la organización campesina, al instalarse el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y

¹⁹⁹ UNOC: Unión Nacional de Obreros Católicos, PCN: Partido de la Conciliación Nacional.

²⁰⁰ Véase, S. Gordon, *op. cit.*, 1989, p. 93.

un marco legal para las cooperativas campesinas. Lo importante de estos primeros esfuerzos organizativos reside en el hecho que, para una generación de activistas campesinos, sirvieron como un primer espacio para adquirir competencias organizativas, crear nuevos liderazgos y formular reivindicaciones en torno al problema de la tierra, desde demandas por una reforma agraria hasta propuestas para instalar cooperativas agrícolas. Por otra parte, las nuevas organizaciones, al no contar con estructuras muy consolidadas, ofrecían condiciones institucionales idóneas para que grupos más organizados –por lo general partidistas– pudieran intervenir políticamente en ellas.²⁰¹

Tarde o temprano la organización campesina independiente tendió a enfrentarse a las relaciones clientelares, que se habían creado en las comunidades en torno a los poderes fácticos (terratenedores, jueces, ORDEN y la Guardia Nacional). Esta confrontación contribuyó a la radicalización política de asociaciones que originalmente habían surgido como formas de autoayuda. Esta es la conclusión a la cual permiten llegar testimonios como el de Juan Inocencio Alas, sacerdote de la parroquia de Suchitoto e impulsor de la organización campesina desde 1968. Según él, la organización campesina se amplió a partir de la defensa de casos particulares de familias campesinas amenazadas de perder la tierra que los terratenientes locales les habían rentado. En este proceso de organización el apoyo de los sacerdotes de la parroquia fue crucial, porque ellos permitieron que la iglesia se convirtiera en una “extensión” del espacio público en donde se permitía la reunión y la denuncia de los abusos cometidos en contra de los campesinos. Lo que en esta zona “politicizó” los conflictos locales fue, en un primer momento, la intervención de la policía y del ejército en contra de la incipiente organización campesina y a favor de los terratenientes locales y, en un segundo momento, la construcción de la represa de Cerrón Grande. Las inundaciones, provocadas por la represa, agudizaron la escasez de tierras cultivables en el departamento Cuscatlán y el conflicto social contribuyó a que el Estado, y ya no un individuo o una familia, apareciera ante los ojos de los campesinos como un adversario central, representado por la empresa paraestatal de electricidad CEL y los funcionarios responsables para reubicar las familias y negociar las indemnizaciones. En el contexto de este conflicto nació en 1974 “el primer FAPU”, donde convergían diferentes organizaciones.²⁰²

Otro camino posible era la transformación y radicalización de organizaciones existentes, lo cual se evidenciaba en cambios de los liderazgos y formas organizativas. Así sucedió con el FAPU, que en

²⁰¹ Véase, R. Cardenal y L.A. González (comp.), *op.cit.*, 2002, pp. 234-235.

²⁰² Véase, J. I. Alas, *op.cit.*, 2003; C. E. Rico, *op.cit.*, 2004, p. 255. Otro caso de organización independiente en este periodo fue la fundación de la UTC por campesinos de los departamentos de Chalatenango y San Vicente.

un primer momento (1974) operaba como un frente amplio convocado por la iglesia para apoyar a los campesinos de Cerrón Grande.²⁰³ En el caso de FECCAS, que tenía su centro de gravedad organizativa en la zona central de El Salvador (departamentos San Salvador y Cuscatlán), una crisis interna y la disolución de la UNOC hacia fines de los años sesenta abrió una fase de indefinición en la cual la federación –su nombre, sus banderas y las Ligas campesinas que constituían sus bases- se convirtió en objeto de disputa entre distintos grupos políticos. En esta disputa intervino el Partido Comunista, mediante su asociación ATACES, activistas de las FPL y activistas del FAPU (principalmente estudiantes de la asociación universitaria FUERSA). Estos conflictos se resolvieron en 1974 a favor de las FPL, lo cual se expresó en la emergencia de un nuevo grupo de representantes campesinos, cuyo liderazgo se había constituido en el contexto de los Comités Eclesiales de Base de la parroquia de Aguijares, y la intervención conspirativa de la guerrilla de las FPL. Las estructuras federativas, que habían facilitado la “infiltración” de activistas guerrilleros y la coexistencia de diferentes posturas políticas vía la organización cantonal, fueron sustituidas por estructuras que operaban con base en el centralismo democrático, más aptos para realizar acciones en condiciones semi-clandestinas y asegurar “la participación constante, responsable y consciente de todas las bases y miembros de la organización.”²⁰⁴

El ciclo de gestación de nuevas formas organizativas en el campo se cerró con la fundación de los frentes políticos de masas. Suchitoto fue el núcleo de la formación del FAPU en 1974, en agosto de 1975 FECCAS y la UTC –unificados en la Federación de Trabajadores del Campo FTC- participaron en la fundación del BPR en la Catedral de San Salvador. La consolidación organizativa de estas organizaciones populares y su alineamiento político-ideológico iban a la par y antecedieron el crecimiento numérico de las organizaciones.

¿Qué agentes y espacios permitieron la radicalización del campesinado? Los estudios de experiencias organizativas locales dan cuenta del papel central que jugaron sacerdotes y laicos de la iglesia católica en la construcción del movimiento campesino. En el caso de FECCAS, los activistas que en 1974 asumieron la dirigencia –como, por ejemplo, su secretario general Apolinario Serrano- iniciaron su trayectoria en el activismo campesino como “delegados de la palabra” y “preparadores” de la parroquia de Aguilares, en la red organizativa que había iniciado un equipo misionero de la parroquia en sintonía con las nuevas prácticas pastorales. Los sacerdotes, inspirados en la doctrina

²⁰³ Véase, J. I. Alas, *op.cit.*, 2003, pp. 217-224.

²⁰⁴ FECCAS, *Carta de Principios*, San Salvador, mimeo, 8 de octubre de 1975; Sobre la historia de FECCAS, véase, C.R. Cabarrús, *op.cit.*, 1983; M. Löwy, *op.cit.*, 1999, pp. 120-137.

socialcristiana y en la teología de la liberación, promovieron -por medio de una lectura y discusión histórica de la Biblia- una interpretación de la misma orientada a identificar y denunciar “el pecado social”, es decir, la desigualdad y la explotación. Pero la novedad residía no sólo en el impulso “espiritual”, o desbloqueo ideológico, sino en la emergencia de nuevas prácticas organizativas. Los casos de Aguilares y de Suchitoto, muestran como la selección y educación de *delegados de la palabra y preparadores* creaba una red que vinculaba las comunidades entre sí y con la parroquia. Adicionalmente, la realización de talleres educativos sobre derechos gremiales, historia y política dirigidos a los delegados resultó en la constitución de una nueva generación de líderes comunitarios que combinaban espiritualidad y voluntad de sacrificio con la disposición de participar en un proyecto colectivo para transformar las condiciones de desigualdad social a partir de lo local pero con una perspectiva nacional.

La iglesia contribuía también a la construcción de una mística de liderazgo -no muy alejada de las concepciones marxistas-leninistas- que combinaba el imperativo del servicio a la colectividad con una idea de vanguardia. José Inocencio Alas, el sacerdote de Suchitoto, relata cómo intentaba transmitir estos valores en las asambleas donde se elegía a los delegados de la palabra:

Pasaba a explicar las cualidades o características de un líder, entre ellos los más importantes, el servicio a la comunidad, la aceptación del líder por la comunidad, el ser cabeza y no cola dentro de la comunidad. Un líder hace progresar a la comunidad en ideas, en valores y en acciones. Después les explicaba mi interés en darles mejor preparación a los líderes acerca de su fe. Como la comunidad, mejor que nadie, conoce a sus líderes, éstos deberían ser elegidos por la misma mediante la presentación de candidatos y la elección formal.²⁰⁵

Además de apoyar la formación de líderes, la iglesia propiciaba espacios para la reunión campesina donde los delegados de la palabra discutían tanto las tareas pastorales como reivindicaciones de la organización campesina. En las parroquias con sacerdotes comprometidos con las luchas reivindicativas, la misa dominical podía convertirse en un espacio abierto a las denuncias de maltratos y abusos de los campesinos. Así nació a nivel local una práctica que, a partir de 1976, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero transformara en la llamada “eucaristía única”. Para responder al estado de sitio, que prohibía reuniones públicas al aire libre sin permiso del gobierno, el arzobispo aprovechaba la homilía celebrada en la Catedral para difundir las denuncias de las violaciones a los derechos humanos que le habían sido comunicadas durante la semana.

²⁰⁵ J. I. Alas, *op.cit.*, 2003, p. 82.

El liderazgo local de sacerdotes, influenciados por la Doctrina Social de la iglesia y el Concilio Vaticano II²⁰⁶ (como Rutilio Grande en Aguilares o José Inocencio Alas en Suchitoto), se dio a partir de su acercamiento a las familias campesinas. Hay datos ilustrativos al respecto: Cabarrús señala, por ejemplo, que la construcción de la red de *delegados de la palabra* en Aguilares entre 1972 y 1973 inició con la convivencia de los sacerdotes jesuitas con las familias campesinas en los cantones. Los sacerdotes aprovecharon estos momentos de convivencia no solamente para exponer y revisar el evangelio sino también para recopilar datos económicos y sociales sobre las condiciones de vida y los principales problemas de las comunidades.²⁰⁷ Esto es relevante porque apunta a una concepción que fundamentaba la labor de los sacerdotes y que formaba parte del sentido común de esta época: Sacerdotes jesuitas, técnicos gubernamentales y los activistas políticos – democristianos, comunistas y revolucionarios- compartían la creencia que se podía aprehender la realidad a partir del conocimiento científico, apoyado en técnicas de estadística y la investigación social- y transformarla vía la planificación racional, el control sobre el Estado y la aplicación de estrategias de desarrollo. Es decir, el mensaje de los militantes guerrilleros, que era posible transformar la realidad social por medio de la acción consciente del ser humano, tuvo impacto porque se difundió en una sociedad que compartía la idea fuerza sobre la capacidad creadora de la voluntad humana, expresada en la política y el Estado.

La participación clave de la iglesia católica en la movilización política, contribuyó a que en los estudios de caso se destacara la centralidad de la labor eclesial en el “desbloqueo ideológico” de los campesinos. Pero al centrar la atención en la relación iglesia-campesinos, se simplifica el proceso de organización y se pierde de vista la iniciativa propia que tuvieron los campesinos para formar grupos armados y buscar el contacto con las organizaciones radicales, que, en algunos casos, pudieron entrar incluso en conflicto con los sacerdotes.²⁰⁸

²⁰⁶ Un artículo de Jorge Cáceres Prendes de 1982 da cuenta como los cambios al interior de la iglesia institucional salvadoreña en los sesenta abrieron una ventana de oportunidad para que sacerdotes y laicos participaran en la organización popular, especialmente campesina. También señala como la agudización del conflicto político en El Salvador afectó a la iglesia –al convertirse en un blanco de la represión- y la impulsó a tomar partido, lo cual profundizó también la confrontación al interior de la institución entre el ala que promovía la “pastoral de acompañamiento” (representado por Monseñor Oscar Arnulfo Romero) y el ala conservador que defendía la neutralidad de la iglesia. Véase, Jorge Cáceres Prendes, “Radicalización política y pastoral popular en El Salvador: 1969-1979”, *Estudios Sociales Centroamericanos*, San José/Costa Rica, Año XI, No. 33, septiembre-diciembre de 1982.

²⁰⁷ Véase Cabarrús, *op. cit.*, 1983, p. 146ss.

²⁰⁸ En este sentido, C. R. Cabarrús es muy cuidadoso al señalar factores adicionales –como el papel de los colaboradores externos- para reconstruir el proceso de radicalización política del campesinado en la zona central de El Salvador. Véase, *Ibid.*, pp. 144-163; En cambio, Alain Rouquié da un papel dominante al factor religioso para explicar “los móviles intelectuales y las referencias espirituales” de la movilización de los

En estos casos las redes familiares campesinas –a veces bajo la cobertura de los comités eclesiales– pudieron convertirse en vehículos para expandir grupos guerrilleros. Ya se señaló que la organización independiente de los campesinos –aunque fuera al amparo de la iglesia o para crear cajas mutualistas– tendió a entrar en contradicción con las estructuras de poder clientelar en el ámbito local, lo cual generó reacciones violentas. Por tanto, una motivación central para pasar de la acción reivindicativa a la lucha guerrillera –entendida ésta última como una forma de autodefensa– fue el hostigamiento de grupos paramilitares, como ORDEN, en contra de activistas campesinos. En Suchitoto, señaló Raúl Hercúles (Fidel Recinos),²⁰⁹ la actividad guerrillera fue iniciada por un grupo de campesinos jóvenes. Por iniciativa propia formaron, a principios de los años setenta, un grupo de autodefensa, el Frente Obrero Campesino, explícitamente para enfrentarse a ORDEN. Para organizarse –lo cual incluía establecer contactos con otros grupos en el resto del país– aprovecharon los espacios que los hermanos Alas habían creado para la organización campesina en la parroquia de Suchitoto. Las indagaciones de los sacerdotes que se percataban de las “actividades encubiertas” obligaron a los campesinos guerrilleros retirarse parcialmente de este espacio, como relata Raúl Hercúles:

A estas alturas comenzaban los problemas con la Iglesia Católica, contaban con un amplio movimiento, percibían que en medio de esa gente se movía algo fuera de su control, una organización oculta y presionaban por saber; nosotros los evadíamos, lo cual nos llevó a serias discusiones, en especial con Chenchó Alas, se sentía molesto, estaba convencido que le tomamos el pelo que lo utilizábamos, no le decíamos nada por razones de seguridad y eso para él era desconfianza, dejamos el problema en manos del sector más abierto que nos apoyaba y no participábamos directamente.²¹⁰

El Frente Obrero Campesino operó independientemente e intentó convertirse en una organización guerrillera nacional, hasta 1978 cuando finalmente se unió a Resistencia Nacional. Estos relatos apuntan a una dinámica importante en el campo político salvadoreño para entender la movilización anti-gubernamental: los conflictos en torno a la construcción y conservación de la hegemonía en espacios definidos, como un punto de partida para obtener la hegemonía al interior del movimiento opositor nacional. Las rivalidades entre los distintos actores, que intervenían en las comunidades campesinas para organizar y educar, pero también para obtener entre la población la máxima

sectores populares en apoyo a los proyectos revolucionarios. Véase, A. Rouquié, *op. cit.*, 1994, p. 109; En el mismo sentido Michael Löwy en su estudio sobre la teología de la liberación señala que las bases de la insurgencia armada en El Salvador salieron, en el campo, de FECCAS y, en las ciudades de las CEB omitiendo el papel que jugaron militantes políticos y sindicalistas en la formación del movimiento revolucionario salvadoreño. Véase, M. Löwy, *op.cit.*, 1999, p. 134.

²⁰⁹ Durante la guerra fue comandante local de Resistencia Nacional en el Frente Guazapa.

²¹⁰ Citado en E. Rico, *op. cit.*, 2004, pp. 262-263.

adhesión posible a su proyecto de cambio, produjeron conflictos en torno a la construcción y conservación de la hegemonía en el espacio local. En estas disputas, como indican los testimonios, los activistas campesinos podían escoger entre aliados y opciones de organizaciones porque tanto la iglesia como los grupos guerrilleros competían entre sí por el apoyo de la población rural. El acercamiento de campesinos jóvenes a los grupos armados, documentado para el caso de Suchitoto, se repitió en otras zonas. Tanto en Morazán como en Usulután hubo una interacción entre campesinos politizados y actores de otros lugares para consolidar formas de organización local que, a partir de 1981, que confluían en organizaciones nacionales y, a partir de 1981, se “reconvertirían” en partes de las estructuras político-militares del FMLN.²¹¹

En la construcción de la organización campesina intervinieron también actores sindicales, especialmente los maestros organizados en el sindicato de ANDES 21 de junio, así como estudiantes universitarios y de secundaria. A veces con el pretexto de la alfabetización, ellos pasaron largos ratos en las comunidades para ayudar en la construcción de las nuevas organizaciones. Por ejemplo, en el caso de FECCAS los maestros y estudiantes participaron en los talleres realizados por la parroquia de Aguilares y contribuyeron de esta manera a la revitalización de la estructura organizativa de FECCAS, después del retiro de la UNOC.

En general, parece que los maestros deben haber jugado un papel estratégico para vincular núcleos organizativos locales, gracias a la distribución geográfica de los centros educativos y las posibilidades de los maestros de relacionarse con diferentes sectores sociales y poblaciones debido a su trabajo. Los sindicalistas de ANDES 21 de Junio jugaron un papel importante en la radicalización de FECCAS y participaron en la formación de prácticamente todas las organizaciones fundadoras del BPR: Ellos colaboraron en la fundación de la UTC (1975), a partir de las ligas campesinas en San Vicente y Chalatenango, ayudaron a formar la asociación de alumnos de secundaria MERS y la organización de pobladores de tugurios UPT.²¹²

Después del fallido intento de reforma agraria en 1976, debido a la resistencia de la oligarquía y la generalización de la violencia en contra de activistas campesinos y sindicales, las demandas de las organizaciones campesinas adquirieron otro “tono”. A las demandas por una reforma agraria y de

²¹¹ Véase, Carlos Benjamín Lara, “Identidad indígena y conflicto social en Cacaopera”, *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, San Salvador, No. 82, julio-agosto de 2001, pp. 501-518; E. Wood, *op.cit.*, 2003.

²¹² Véase, S. Gordon, *op. cit.*, 1989, p. 181.

leyes para regular los mecanismos de arrendamiento de las tierras y la tabla de precios,²¹³ se añadieron las denuncias sobre los cercos militares en las zonas rurales, las detenciones arbitrarias y los secuestros de activistas. Estas denuncias estaban vinculadas con demandas políticas por la disolución de los cuerpos represivos, la desarticulación de los escuadrones de muerte y la renuncia del gobierno militar.

En menos de 10 años –de 1968 a 1977- el movimiento campesino logró ocupar un “lugar propio”, como actor nacional, en el campo político, ganando visibilidad con novedosas formas de protesta y un discurso que trascendía demandas particulares, gremiales. Portar mantas en las movilizaciones en San Salvador, con los nombres de comunidades, cantones y departamentos, se convirtió en una forma sencilla pero efectiva para crear una imagen del campesinado como un actor político nacional. A través de pancartas y carteles en las marchas campesinas se expresaba la solidaridad con las luchas de otros sectores (sindicatos urbanos, pobladores de los tugurios), lo cual reforzó la “visibilización” práctica y simbólica del movimiento popular revolucionario en las calles de San Salvador.²¹⁴

Los siguientes ejemplos evidencian el protagonismo novedoso de las organizaciones campesinas en el espacio público y la articulación con los frentes de masas: En abril de 1978 los activistas del BPR ocuparon embajadas –entre ellas la de Panamá y Costa Rica- para protestar en contra del cerco militar que sufrían comunidades en los Departamentos de San Salvador y Cuscatlán, presionar a favor de una amnistía para los detenidos y exigir la derogación de la Ley de Orden Público. En mayo de 1979 se repitió la ocupación de las embajadas para obligar al gobierno a liberar los dirigentes detenidos del BPR –entre ellos el secretario general Facundo Guardado- cuya liberación se logró gracias a la movilización política. También el FAPU ocupó iglesias y, en enero de 1979, varias instituciones públicas, entre ellas las oficinas de la OEA, la embajada de México y la Cruz Roja, para obtener la liberación de presos políticos y desaparecidos y demandar la derogación de la Ley de defensa y garantía del orden público. Un caso de enfrentamiento armado entre campesinos de FECCAS/UTC y ORDEN se dio en marzo de 1978 en San Pedro Penilapán, cerca de San Salvador. Los enfrentamientos entre FECCAS y la UTC, por un lado, y ORDEN, por otro lado, provocaron varios muertos y la intervención del ejército que instaló un cerco militar en los Departamentos de

²¹³ En marzo de 1978, FECCAS y UTC, entre otras reivindicaciones socioeconómicas, presentaron un proyecto de ley de arrendamiento, véase, *Inforpress Centroamérica*, No. 285, 30 de marzo de 1978.

²¹⁴ Si bien estas estrategias se evidenciaron a mediados de los setenta en el espacio público, se habían prefigurado en los años previos, paralelamente a la emergencia y consolidación de las organizaciones independientes. Esto lo permite ver el testimonio de José Ignacio Alas sobre las primeras manifestaciones de protesta campesina en Suchitoto. Véase, J. I. Alas, *op.cit.*, 2003, p. 63.

Cuscatlán y Cabañas. La protesta en contra del cerco militar fue una de las razones para las protestas y la toma de la catedral en abril de 1978.²¹⁵

Todas estas prácticas y estrategias de movilización política -marchas autorizadas y (mucho más frecuente) no autorizadas a los centros departamentales y la capital; tomas de tierras baldías (más una estrategia de cohesión del grupo y de protesta colectiva que una estrategia eficaz para obtener tierras, dado el desalojo “garantizado” por las fuerzas de seguridad); enfrentamientos violentos con las fuerzas paramilitares de ORDEN; la toma de edificios públicos y ministerios, iglesias y embajadas- sirvieron para que las organizaciones campesinas contestatarias demostraran en este periodo su fuerza de organización y su capacidad de convocatoria social para desafiar el poder estatal.²¹⁶

La radicalización sindical y gremial

A diferencia del caso del campesinado, donde no existían cauces legales para reglamentar la organización hasta 1977, el Estado salvadoreño creó, en el contexto de la modernización económica de los años cincuenta, una serie de mecanismos institucionales y legales para posibilitar un corporativismo sindical limitado, que permitiera una organización controlada y subordinada de los trabajadores urbanos. Las políticas orientadas a formalizar derechos laborales mínimos se inscribían en las estrategias de modernización y de industrialización que los gobiernos regionales realizaron en las décadas de 1950 y 1960. En este marco, las organizaciones sindicales salvadoreñas establecieron lazos con organizaciones sindicales internacionales identificadas con diferentes tendencias políticas, como la ORIT (socialdemócrata), la AIFLD (financiada por el gobierno norteamericano), la CLAT (socialcristiana) y la CUSCA (comunista).²¹⁷ Estas organizaciones internacionales incidieron por diferentes medios en el desarrollo del movimiento sindical salvadoreño, por ejemplo por medio de la canalización de recursos financieros -como lo hizo principalmente la AIFLD-, o la participación en la elaboración de plataformas programáticas y la

²¹⁵ Desde entonces ocupar la Catedral Metropolitana de San Salvador como acto de protesta y denuncia se ha incorporado al repertorio de protesta de los grupos que buscan difundir sus demandas sociales y políticas.

²¹⁶ Datos retomados de “Manifiesto del Bloque Popular Revolucionario. 30 de Julio de 1981”, *op. cit.*, 1981; “Resumen 1979”, *Combate Popular*, Periódico del BPR, San Salvador, No. 17, 1ra Quincena de enero de 1980. *Inforpress Centroamérica*, 30 de marzo de 1978, No. 285, pp. 1A-3A; 6 de abril de 1978, No. 286, p. 2A; 20 de abril de 1978, No. 288, p. 2A; 18 de enero de 1979, No. 326, p.6.

²¹⁷ ORIT: Organización Regional Interamericana del Trabajo, CLAT, Central Latinoamericana de Trabajadores, CUSCA Comité de Unidad Sindical Centroamericano. Retomamos el mapa de las relaciones internacionales del movimiento sindical salvadoreño desde los años setenta de CINAS, *El movimiento sindical salvadoreño 1979-1984*, Cuaderno de trabajo No. 5, México, junio de 1985, pp. 32-34 (Archivo personal de Mario Vázquez). Sobre derechos laborales y movimiento sindical en los cincuenta y sesenta, véase J. P. Pérez Sáinz, *op.cit.*, 1996, pp. 88-104.

invitación a talleres internacionales de formación sindical, como lo hicieron las internacionales sindicales comunista y socialdemócrata.

Esta situación tiene varias implicaciones para el análisis del proceso de radicalización sindical en los setenta. En primer lugar, implica usar con cuidado términos como sindicalismo “independiente” o “político” en relación con el movimiento sindical salvadoreño y cuestionar las valoraciones inherentes a estas calificaciones. Según la legislación laboral salvadoreña, el término “independiente” señala solamente que un sindicato no pertenece formalmente a ninguna federación o confederación, lo cual no necesariamente significa independencia de las fuerzas políticas o “apoliticismo”.²¹⁸

En segundo lugar, el marco legal existente en el ámbito laboral formal –aunque precario y estrecho– fue un referente importante para todas las tendencias sindicales, incluso para las más radicales del movimiento sindical. La Constitución de 1950 al reconocer los derechos laborales mínimos –entre ellos el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y el seguro social– implicaba, al menos en términos formales, el reconocimiento estatal de los sindicatos urbanos, a diferencia de las organizaciones campesinas. El Código de Trabajo de 1963 daba suficiente margen a la discrecionalidad gubernamental para, por un lado, fortalecer desde el poder a las organizaciones sindicales oficiales y, por otro lado, obstaculizar el fortalecimiento de los sindicatos no-oficialistas. Pese al reconocimiento constitucional del derecho a la huelga, el mismo Código de Trabajo imponía varios obstáculos legales para volver imposibles, en la práctica, la realización de una huelga legal. Por ejemplo, para realizar una huelga legal había que dejar pasar 30 días entre el emplazamiento y el estallido de la huelga, plazo suficiente para que la patronal pudiera despedir y amenazar a los sindicalistas para impedir la huelga. Por otra parte, la aplicación del Código de Trabajo, que obligaba al movimiento sindical a reestructurarse en federaciones y confederaciones, obstaculizaba la unificación del sindicalismo no gubernamental. La primera confederación legalizada, la Confederación General de Sindicatos (CGS) fundada en 1958 con cuatro federaciones y 13,000 afiliados, fue oficialista. Los intentos de los sindicatos no oficialistas de superar su dispersión mediante la fundación de una central nunca se concretaron, en primer lugar, por los obstáculos legales impuestos por el Código del Trabajo, en segundo lugar –según los críticos de la política del

²¹⁸ Por ejemplo, FESINCONSTRANS se declaró independiente en 1968 al salir de la CGS sin que esto llevó a la “independencia” de los recursos de la embajada norteamericana y de AIFLD. Y el sindicato del Seguro Social (STISSS) fundado en 1967 como sindicato independiente desde finales de los setenta se fue identificando con la izquierda.

Partido Comunista- por las prácticas burocráticas y las divergencias ideológicas al interior de las dos federaciones de izquierda FUSS y FESTIAVTSCES en los sesenta y setenta. ²¹⁹

El movimiento sindical fue un espacio disputado entre, por una parte, el Estado salvadoreño y, por otra parte, las distintas tendencias político-ideológicas que intervenían en él. Esto se debe a que se movía -mucho más que las organizaciones campesinas- al mismo tiempo “dentro” y “fuera” de las instituciones públicas existentes, por lo cual definir el vínculo con las diferentes fuerzas políticas, condicionó también sus prácticas. En esta disputa, para las tendencias comunistas de la FUSS (fundada en 1965) la superación de las trabas legales impuestas al sindicalismo anti-gubernamental por el gobierno se convirtió en un objetivo primordial de la actividad gremial. Posiblemente fue en este espacio sindical que, por primera vez, se confrontaron las posiciones contrarias en las instancias directivas del Partido Comunista sobre la estrategia más adecuada para desplazar a los militares del gobierno. La primera tendencia -“reformista”- planteó la necesidad de aprovechar el marco legal existente para formar sindicatos, fortalecer las estructuras legales de la FUSS, apoyar sólo aquellas reivindicaciones obreras que tuvieran una posibilidad real de ser realizadas y no provocar el gobierno innecesariamente mediante la realización de huelgas solidarias. Esta tendencia participó a partir de 1969 en la consolidación de la UDN como instrumento político para participar en la lucha parlamentaria y electoral.

La otra tendencia, organizada en el COAP²²⁰, cuestionaba esta posición y propugnaba por la defensa del derecho de huelga mediante el uso de la huelga “de hecho”, las huelgas solidarias y la autodefensa obrera.²²¹ Las prácticas para realizar las huelgas que impulsó esta tendencia, adelantaron algunas de las “innovaciones” de la práctica sindical de la década siguiente. Salvador Cayetano Carpio, dirigente sindical y secretario general del Partido Comunista entre 1964 y 1970, hasta su ruptura con el partido para formar las FPL, describió la práctica de la huelga de hecho de la siguiente manera:

²¹⁹ Véase, Equipo de Investigación y Apoyo Popular “Anastasio Aquino” (EIAP), “El Salvador: Historia del Movimiento Obrero de 1920 a 1977”, *Temas*, México, No. 1, 1984, pp. 15-24; Rafael Menjívar, *Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño*, San José, EDUCA, 1982, pp. 127 – 141(Archivo personal de Mario Vázquez).

²²⁰ COAP: Comité Obrero de Acción Política.

²²¹ No mencionamos aquí la relación del sindicalismo oficial -en el cual estaba organizado la mayoría de la fuerza laboral sindicalizada- con el marco legal, porque dado su relación con el poder, muchas veces no tenían que cumplir con las exigencias legales. Un ejemplo fue la fundación de la CGT (Central General de Trabajadores) a principios de los años ochenta. Aunque no cumplió con el requisito legal de contar con tres federaciones para formar una central, el Ministerio de Trabajo otorgó el registro porque iba de acuerdo a la lógica del proyecto político contrainsurgente impulsado por el gobierno del PDC y la administración de Ronald Reagan para ampliar las bases sociales del gobierno salvadoreño. Véase, CINAS, *op. cit.*, 1985 p. 65.

En primer lugar, lo primero fue no respetar el Código del Trabajo, en segundo lugar, defender con piquetes armados con palos la entrada a los rompehuelgas; en tercer lugar, el choque con la Guardia cuando ésta quería meterlos allí a la fuerza: la violencia revolucionaria expresada a través de la huelga la convertía en huelga política; en cuarto lugar, agitar a las otras fábricas para que dieran solidaridad a esta huelga y, en quinto lugar, ir uniendo a la clase obrera sobre la base de la lucha por sus intereses y la solidaridad con la lucha de otros sectores obreros.²²²

Encontramos poca información sobre el COAP pero suponemos que en este comité, que operó entre 1966/67 y 1970, participaron algunos de los primeros militantes y futuros colaboradores de las FPL.²²³ Este grupo participó desde una posición estratégica en las dos huelgas centrales para consolidar la visibilidad del movimiento sindical anti-gubernamental. En 1967 Cayetano Carpio participó, como uno de los representantes de la FUSS, en el Comando General de Huelga que organizaba la huelga general progresiva, realizada en conjunto por la FUSS y la CGS, en solidaridad con la lucha laboral de los trabajadores de la empresa “Acero S.A” para obtener mejores condiciones de trabajo y un aumento del salario. En los tres días que duró (del 26 al 28 de abril de 1967) pararon aproximadamente 35,000 trabajadores. La segunda huelga estratégica, en la cual participó el COAP, fue el paro laboral del sindicato de maestros ANDES 21 de junio en 1968, que también fue acompañado por actos de solidaridad y el involucramiento de otros sectores sociales. Después de 58 días fue disuelto y reprimido violentamente, lo cual provocó un distanciamiento de muchos maestros del régimen militar. Por su alcance y las concesiones obtenidas por el régimen militar, las dos huelgas se convirtieron en referentes importantes para futuras acciones del movimiento popular.²²⁴

Con las huelgas de 1967 y 1968 inició una fase de reagrupamiento de las organizaciones sindicales, que se manifestó en las disputas entre distintas tendencias políticas por el control sobre las federaciones y la emergencia de nuevos sindicatos en las empresas públicas de sectores estratégicos. Conflictos internos y escisiones debilitaron a las dos federaciones sindicales más relevantes –la FUSS y la pro-gubernamental CGS- dando lugar a la constitución de nuevos agrupamientos sindicales. En 1968 la federación de construcción FESINCONSTRANS abandonó la CGS para convertirse en una federación independiente, que no formaba parte de una confederación. La FUSS, que había logrado crecer con la huelga general de 1968 de 14 sindicatos en 1965 a 40 sufrió también

²²² Marta Harnecker, *Pueblos en armas*, México, Universidad Autónoma de Guerrero, 1983 p. 143.

²²³ Cayetano Carpio, en una entrevista con Marta Harnecker señaló que los primeros militantes y colaboradores de las FPL salieron de contactos sindicales, lo cual nos hace suponer que el contacto se hizo en el COAP. Véase, *Ibíd.*, p. 148.

²²⁴ Véase, Salvador Cayetano Carpio, *La huelga general obrera de abril 1967*, San José/Costa Rica, Imprenta Elena, 1968; S. Gordon, *op. cit.*, 1989, p. 113–114.

una escisión de 16 sindicatos, los cuales en 1969 formaron FESTIAVTSCES. La salida de Cayetano Carpio del PC en 1970 significó la dispersión del COAP –algunos miembros del COAP formaron junto con Carpio el núcleo inicial de las FPL- y la consolidación, en la FUSS y la FESTIAVTSCES, de posiciones reformistas que impulsaron la lucha legal y el fortalecimiento de la institucionalidad sindical.

Entre 1970 y 1975, mientras en las áreas rurales se fortaleció la movilización campesina, en el ámbito sindical hubo un reflujo en la participación. Bajó el número de huelgas y se fortalecieron los mecanismos de control y de represión selectiva a dirigentes sindicales después del fraude electoral de 1972. En este contexto se gestó en 1973 la fundación de FENASTRAS, a partir de la escisión de diversos sindicatos de la CGS y el acercamiento de nuevos sindicatos de las empresas públicas estratégicas como la Compañía de Electricidad del Río Lempa (CEL) o de la empresa de agua y alcantarillado ANDA. La identificación de FENASTRAS como una federación sindical “izquierdista” corresponde al papel que jugó durante la crisis política de finales de los setenta y la guerra civil, más no a sus inicios cuando aglutinaba sindicatos de empresa y de ramas industriales de orientación política diversa -tendencias pro-gubernamentales, comunistas y también tendencias radicales. La ambigüedad política de la federación en el momento de su fundación fue una condición de posibilidad para que se dieran las luchas entre las diversas tendencias políticas sobre la naturaleza y el rumbo político que debería tomar la federación.²²⁵

Fue hacia 1976 que esta disputa se decidió a favor de las tendencias más radicales, cuando Héctor Bernabé Recinos, dirigente sindical de STECEL y del FAPU, ocupó la secretaría nacional de FENASTRAS. El FAPU, gracias a su control sobre FENASTRAS, que se expresaba en la ocupación del cargo de secretario general por uno de sus cuadros político-sindicales más importantes, pudo incrementar su capital político y simbólico. Pero esto no significaba que el frente de masas tuviera el control absoluto sobre la federación. Dada la estructura organizativa de la federación, compuesta por sindicatos de empresa con estructura propia, otras tendencias políticas podían “infiltrarse” en la federación y cuestionar la hegemonía de FAPU. Por esto, en cada conflicto laboral donde participaba FENASTRAS se daban fuertes debates entre las tendencias ideológicas sobre la estrategia “correcta” que la federación debería emplear, que se expresaban verbalmente en las asambleas sindicales y se divulgaban en los periódicos de los frentes de masas.

²²⁵ FENASTRAS fue fundada por 16 sindicatos que habían formado parte de la CGS y por STECEL (Sindicatos de Trabajadores de CEL), SIES (Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador), SETIVU (Sindicato de Trabajadores del Instituto de Vivienda Urbana) y STITAS (Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Actividades Similares). Véase, EIAP, *op. cit.*, 1984, pp. 50-51.

Al calor de la movilización: El desafío a las estructuras existentes

En 1977 inició un nuevo ciclo de luchas obreras que se refleja en un considerable aumento de las huelgas y del número de trabajadores involucrados. Si bien la mayor parte eran paros “ilegales”, es decir no reconocidos por el Ministerio de Trabajo, el descontento laboral de este periodo se refleja incluso en las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Mientras en 1976 fueron registradas sólo dos huelgas en el sector de la construcción, que afectaron a 25,000 trabajadores, en 1977 se desarrollaron 19, que involucraron a 32,879 trabajadores, principalmente en la industria manufacturera. El máximo número de huelgas legales se registró en 1979 con un número de 103, de las cuales 86 se desarrollaron en el sector manufacturero y participaron 29,432 trabajadores.²²⁶ La movilización social dio un nuevo impulso a los esfuerzos por unificar el movimiento sindical anti-gubernamental y en 1977 las tres federaciones controladas por la izquierda (FUSS, FESTIAVTSCES y FENASTRAS) acordaron fundar una confederación, la Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (CUTS).

Si comparamos las trayectorias sindicales, en primer lugar, se evidencia que la radicalización de estos años no fue un proceso homogéneo y no afectó a todas las organizaciones sindicales. La disputa por el control político de los sindicatos de base se dio principalmente en el sector manufacturero –en los sindicatos afiliados a FUSS, FENASTRAS y FESTIAVTSCES– y en las empresas estatales. Pero los sectores radicales no podían romper el peso numérico de los sindicatos pro-gubernamentales o incidir de manera importante en el sector de la construcción, hegemonizado por la progubernamental FESINCONSTRANS. Como el BPR controlaba a ANDES 21 de junio era difícil que otras tendencias políticas tuvieran incidencia relevante en el Magisterio. Entre 1978 y 1979, cuando la ola de radicalización alcanzó también a los empleados públicos, los militantes revolucionarios participaron activamente en la fundación de asociaciones sindicales en los ministerios, para ampliar la influencia social de sus organizaciones y la presión política sobre el Estado, vinculando demandas gremiales por salarios, mejores condiciones de trabajo y el reconocimiento formal de sus sindicatos con formas de acción directa, como tomas de ministerios o paros “espontáneos”.

En segundo lugar, los militantes de las organizaciones revolucionarias buscaron “infiltrar” sindicatos de base para impulsar, desde allí, nuevas prácticas de movilización que cuestionaban los

²²⁶ Fuente, OIT, *LABORSTA*, disponible en <http://laborsta.ilo.org> (consultado el 10 de noviembre de 2004), véase también el Anexo.

esfuerzos institucionales de unificación sindical, como la formación de la CUTS. Las prácticas “antisistémicas” se dirigían, entonces, no solamente en contra del aparato estatal sino también en contra del reformismo sindical. Los militantes intentaron, por medio de estas prácticas, rebasar (y provocar) permanentemente los límites de las instituciones reguladoras de la conflictividad laboral y las prácticas sindicales convencionales representadas por las federaciones. Por esto el blanco de sus acciones no eran sólo las federaciones pro-gubernamentales como la CGS y la FESINCONSTANS, consideradas en el ambiente militante como sindicatos blancos y “gángsteres” vinculados a la Guardia Nacional y la policía, sino también las federaciones comunistas, (des)calificadas de “revisionistas” y “burócratas”. Los “cascarones federales”, denunciaban las publicaciones del FAPU y BPR, en vez de impulsar la lucha desanimaban a los obreros porque buscaban mantener las formas de protesta y las demandas en el estrecho marco de las instituciones y la búsqueda de la unidad a negociaciones y acuerdos entre cúpulas sindicales. La crítica más fuerte se dirigía especialmente en contra de la FUSS, la FESTIAVTSCES, y el “revisionismo” en FENASTRAS. Así, por ejemplo, el FAPU advertía que el distanciamiento entre bases y dirección era una de las consecuencias negativas del reformismo:

Esta hegemonía revisionista en las federaciones, corre paralela con el hundimiento de las directivas federales en el *economicismo* y el *electorerismo*; el resultado es que las directivas se convierten en fantasmales cascarones, que poco o nada tienen que decir a sus bases.²²⁷

“Economismo” y “electorerismo” fueron dos críticas constantes de los militantes radicales tanto en contra del sindicalismo como de los partidos reformistas. Por tanto, un objetivo importante de las nuevas formas organizativas “extralegales” y prácticas de lucha fue, precisamente, desafiar las prácticas tradicionales de la oposición salvadoreña. De esta manera se diseminó la práctica de la huelga “extralegal”, iniciada sin esperar fallos o plazos establecidos por el Ministerio de Trabajo, y sin tomar en cuenta a las federaciones, aunque los sindicatos involucrados en el conflicto laboral estuvieran afiliados a una de ellas. Así sucedió, por ejemplo, con la huelga de los trabajadores portuarios del Puerto de Acajutla (entre diciembre de 1976 y enero de 1977), afiliados a la CGS, donde la movilización obrera se realizó sin tomar en cuenta las estructuras de la federación progubernamental. El conflicto laboral desembocó en la intervención del ejército y la militarización de la empresa. Procesos similares ocurrieron durante la huelga en la Empresa Diana (Sector Alimentos) en octubre de 1977 y en la central azucarera de Izalco en enero de 1978 que siguen un determinado patrón: participaron militantes sindicales del FAPU -por lo cual están documentados y analizados con detalle en los periódicos de esta organización-, sus causas fueron demandas

²²⁷ “Las luchas obreras en El Salvador (1974-1977)”, *Revista Polémica. Problemas de la Revolución Salvadoreña*, San Salvador, Época I, No. 2, mayo-junio de 1977, p. 26. Las cursivas son mías.

“económicas” por aumentos de salarios y prestaciones y hubo actos de intimidación y enfrentamientos violentos entre piquetes, cuerpos armados y los “esquiroles”.²²⁸ A la presencia de cuerpos armados en las afueras de las fábricas en huelga se sumaron detenciones, secuestros y asesinatos de activistas que fueron denunciados en los periódicos de los frentes de masas y en los periódicos de la oposición.

Las estrategias de las fuerzas gubernamentales y del empresariado para desarticular las huelgas - infiltrar las asambleas sindicales con provocadores de ORDEN, la intervención violenta de la Guardia Nacional o de la policía en locales sindicales o el secuestro de activistas y dirigentes sindicales- daban argumentos adicionales a aquellos que cuestionaron la efectividad de las estrategias reformistas para resolver los conflictos laborales. Además, contribuyeron a la radicalización de la protesta porque sirvieron como un impulso para denunciar la complicidad entre empresarios y fuerzas gubernamentales y sacar los conflictos al espacio público, fuera del centro de trabajo.²²⁹

Estos conflictos laborales, que sin excepción se originaban en reivindicaciones laborales, fueron oportunidades para que los activistas políticos lanzaran las nuevas estrategias de organización y probaran las correlaciones de fuerza entre los actores políticos. Así, el cuestionamiento de las federaciones como instituciones legítimas de representación obrera fue acompañado por la creación de nuevas formas de organización, orientadas a involucrar directamente a las bases sindicales en las luchas obreras y la movilización de solidaridades: En agosto de 1977 el papel clave de STECEL en la radicalización del movimiento sindical se confirmó, cuando los activistas sindicales del FAPU aprovecharon la oportunidad de una huelga de este sindicato para fundar el *Comité Intersindical*, como una plataforma para realizar acciones de solidaridad, canalizar apoyos a las empresas en paro y crear una estructura alternativa de representación legitimada a través de la participación directa de activistas. Algunos, pero no todos los sindicatos que participaron en el Comité Intersindical, formaron parte de FENASTRAS.

²²⁸ Véase, *Ibid.*, pp. 30-32, “El asalto a la central azucarera de Izalco”, *Revista Polémica. Problemas de la Revolución*, San Salvador, Época I, No. 4, 1978, pp. 3-10.

²²⁹ De acuerdo a las denuncias del FAPU, entre noviembre de 1977 y mediados de 1978, bajo la “Ley de Defensa del Orden Público” fueron acusados “9 compañeros por pertenecer al FAPU y al BPR, 90 campesinos han sido acusados de pertenecer al BPR; 28 sindicalistas por pertenecer al Sindicato STECAI, incluyendo los 11 miembros de la Junta Directiva, por participar en la huelga [de enero de 1978], 9 miembros del Sindicato del Pan, 2 directivos del sindicato de Tubos; 30 campesinos del BPR y aproximadamente en 5 meses han sido encarcelados 200 personas acusadas de delitos políticos por pertenecer a Organizaciones Populares.” Véase, FAPU, *Boletín Internacional*, *op.cit.*, 1978, p. 6.

En este mismo periodo y con la misma lógica se fundó, por iniciativa de activistas del BPR, el Consejo Sindical de Obreros (COSDO) que también se planteó la unificación de las bases de diferentes sindicatos al margen de las federaciones existentes. COSDO se convertiría en 1979 en el Comité Coordinador de Sindicatos José Guillermo Rivas, afiliado al BPR. En 1980 se pierde su pista pero al parecer este comité se disolvió en la Federación Sindical Revolucionaria, legalizada a principios de 1980, posiblemente como una concesión del gobierno a la Coordinadora Revolucionario de Masas.²³⁰

A partir de las plataformas sindicales para potenciar y aglutinar las luchas obreras aisladas, los militantes radicales se planteaban el objetivo político de introducir en estas luchas una orientación revolucionaria. Los diversos comités contribuyeron, entonces, a coordinar las formas de protesta obrera, introducir nuevas estrategias de lucha y entrelazar las diversas organizaciones sindicales con los frentes de masas. Las acciones de protesta sirvieron, al mismo tiempo, como plataformas para denunciar agresiones y presentar reivindicaciones de luchas específicas. Al sumarse luchas locales y comités de fábricas en las movilizaciones de los frentes de masas en San Salvador creció la proyección del movimiento sindical como un actor político relevante y de alcance nacional.

Pero la constitución de nuevas modalidades de organización por el sindicalismo radical –y su crítica a las “cascarones federales”- no significó que éste abandonara por completo las prácticas sindicales tradicionales. Aunque las viejas estrategias de representación sindical y de sus objetivos –mejorar las condiciones de vida de la fuerza de trabajo dentro del capitalismo- fueron cuestionadas, en la práctica política las organizaciones revolucionarias también hicieron todo lo posible por ocupar dirigencias sindicales y consolidar su influencia en las federaciones. Así, el FAPU apostó entre 1975 y 1979 a la consolidación de su influencia en FENASTRAS hasta lograr que la federación más importante, junto con FESINCONSTRANS, se identificara con este frente de masas y la organización guerrillera Resistencia Nacional. Asimismo el BPR –fuerte crítico de todas las prácticas sindicales reformistas- aglutinó entre abril y junio de 1978, mediante el Comité Coordinador de Sindicatos José Guillermo Rivas, a sus militantes sindicalistas para formar su propia federación, la Federación Sindical Revolucionaria (FSR). Estas prácticas también dan cuenta

²³⁰ Véase, EIAP, *op. cit.*, 1984, pp. 58-64; “Las luchas de los obreros de STECEL”, *Polémica. Problemas de la Revolución Salvadoreña*, San Salvador, Época I, No. 2, octubre de 1977, pp. 5 – 35.

que la regulación laboral existente –pese a sus deficiencias– seguía formando parte de las condiciones de posibilidad de la acción colectiva sindical.²³¹

Entonces, más que abandonar formas existentes de organización, los activistas radicales pretendieron modificarlas en función de su objetivo estratégico de reorientar las disposiciones de participación sindical de los trabajadores hacia la lucha revolucionaria y la toma del poder. Un documento del FAPU sobre el sindicalismo salvadoreño describe esta intención de manera clara: “se trata de convertir la disciplina sindical en disciplina revolucionaria en la lucha por el Socialismo”.²³² En este sentido, la *politización* del sindicalismo tenía diferentes significados: en primer lugar, romper con las prácticas sindicales cotidianas la lógica gremial y corporativa, fundamentada en la delegación de la participación en representantes electos, e involucrar los sindicalistas de base y trabajadores en las acciones solidarias con las luchas en otras fábricas; en segundo lugar, convocar a movilizaciones del conjunto de las organizaciones obreras y campesinas para demostrar en el espacio público –la calle– la unidad obrera y campesina; y en tercer lugar, orientar la disposición “trade-unionista” de los trabajadores de luchar por reivindicaciones sociales y políticas inmediatas hacia la lucha por objetivos revolucionarios, como una condición previa para reclutarlos a formas más radicales de organización, como la participación guerrillera.

Estas visiones políticas de la conflictividad laboral contribuían, sin duda, a la polarización de la sociedad salvadoreña en los setenta. No hay que olvidar que la creciente movilización social, si bien se reflejó también en un incremento del número de trabajadores sindicalizados en general –que aumentó entre 1971 y 1976 en un 38 por ciento– no logró modificar la baja tasa de sindicalización. Debido a la prohibición de la organización campesina, la tasa de sindicalización oscilaba entre el 5.62 por ciento de la PEA en 1977 y 4.86 por ciento en 1980, lo cual fueron tasas muy bajas si lo comparamos con otros países de América Latina, como por ejemplo Perú, Panamá o Venezuela que en este periodo contaban con tasas de sindicalización del 33.5, 16.5 y 15.6 por ciento respectivamente.²³³

²³¹ Véase, “Comité Coordinador de Sindicatos José Guillermo Rivas”, *Combate Popular*, Periódico del BPR, San Salvador, mayo de 1979, pp. 5-7.

²³² “Balance de la Coyuntura”, *Polémica. Problemas de la Revolución Salvadoreña* No. 3, San Salvador, Octubre de 1977, p. 44.

²³³ Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, El Salvador, cit. en, Tracy Fitzsimmons y Mark Anner, “Civil Society in a Postwar Period”, *Latin American Research Review*, Cambridge, Vol. 34, No. 3, 1999, pp. 103-128, p. 112.

Una de las razones por esta cifra tan baja de participación sindical es el hecho que una gran parte de la movilización obrera contestataria se movía fuera de los canales legales, por lo cual no fue tomada en cuenta por las estadísticas oficiales. Pero no cabe duda que, incluso en los momentos más álgidos de la lucha social, frente al total de trabajadores no sindicalizados y trabajadores organizados en los sindicatos pro-gubernamentales, el sector radicalizado del movimiento obrero fuera una minoría. Por ejemplo, en 1976, las federaciones de izquierda FENASTRAS, FUSS y FESTIAVTSCES en conjunto tenían registrados 26,036 trabajadores, afiliados frente a 38,950 trabajadores afiliados al resto de las federaciones y sindicatos. La federación que más creció en términos numéricos entre 1971 y 1976 fue FESICONSTRANS (349 por ciento), federación de derecha, mientras las federaciones de izquierda FUSS y FESTIAVTSCES experimentaron una disminución de su número de afiliados en un 20 y un 9.7 por ciento respectivamente. El crecimiento del sindicalismo de izquierda en este periodo se debió, por tanto, casi exclusivamente al crecimiento de FENASTRAS que se caracterizaba por ser mucho más contestataria en su programa y radical en sus formas de acción que las dos federaciones comunistas.²³⁴

Esta minoría podía destacar como actor político gracias a sus formas de protesta y la capacidad de movilizar a sus bases. Tomando en cuenta esta perspectiva, las acciones “de hecho”, como las ocupaciones de centros de trabajo o iglesias, enfrentaron no sólo el poder de la patronal y de los cuerpos armados sino se impusieron “por vía del hecho” a otros trabajadores y empleados. Por ejemplo, en septiembre de 1979 varias empresas anunciaron su cierre como respuesta a las ocupaciones de las plantas por los sindicalistas, provocando con esto el desempleo de miles de trabajadores. La situación de *lock-out* produjo enfrentamientos entre los trabajadores afectados por los cierres de las fábricas y los sindicalistas del BPR o FAPU, que tenían ocupadas las plantas.

El autoritarismo del aparato sindical tradicional, expresado en la concentración del poder de representación y decisión en pocas personas y cuestionado por los activistas revolucionarios, se reprodujo hasta cierto punto en la práctica del nuevo sindicalismo anti-gubernamental de imponer las decisiones a través de la movilización masiva de sus simpatizantes. La confrontación entre la alianza Estado-fuerzas armadas-grupos dominantes versus el movimiento sindical radicalizado, que se manifestaba cada vez más en el espacio público, visibilizaba también las diferencias políticas entre los trabajadores. La izquierda y la derecha, al optar por la lógica de polarización impulsaron la politización e ideologización del espacio social, al exacerbar las diferencias entre los grupos sociales

²³⁴ Las cifras absolutas y relativas del crecimiento sindical en la primera mitad de los setenta pueden consultarse en el Anexo.

interesados en incidir en el campo político. De esta manera la espiral de la radicalización política se aceleró y profundizó, creándose las condiciones de posibilidad para el estallido de la guerra civil.²³⁵

2.4. ¿Agentes externos? Lucha armada y organizaciones populares

Si bien los procesos de organización independiente de campesinos y trabajadores empezaron antes de la vinculación con los grupos guerrilleros, como demuestra la sección anterior, su radicalización en términos políticos estuvo íntimamente vinculada a la participación de los militantes de las diversas organizaciones político-militares en sindicatos y asociaciones campesinas.²³⁶ En este proceso había una competencia entre los círculos revolucionarios con otros agentes de la oposición política –como la iglesia, el Partido Comunista o el PDC– por las lealtades y preferencias políticas de los grupos subordinados. Para poder reconstruir de mejor forma las mediaciones, por medio de las cuales las diversas lógicas de acción y representación política se articularon, decidimos separar analíticamente los procesos de movilización campesina y obrera del proceso de consolidación de las organizaciones guerrilleras, aunque en la realidad estaban entrelazados y formaban una sola trama. Las organizaciones independientes pudieron consolidarse porque los militantes de los grupos guerrilleros invirtieron tiempo y esfuerzos, y actuaron como procesos de organización y movilización previa tanto en el campo como en las ciudades.

¿Cómo se dio entonces el acercamiento entre grupos guerrilleros y organizaciones populares en El Salvador? Una primera explicación destaca las mismas condiciones geográficas del país –la densidad poblacional, el tamaño reducido del territorio sin áreas inaccesibles desde los centros urbanos para construir la retaguardia– que obligaron a los fundadores de los grupos armados a replantearse las estrategias guerrilleras y superar la idea del foco guerrillero para formular una estrategia que integraba la lucha armada con diversas formas de lucha popular, como huelgas, movilizaciones, marchas, tomas de tierras y ocupaciones de fábricas. Alain Rouquié señala, por ejemplo: “Evidentemente en El Salvador, sin montañas inaccesibles ni bosques impenetrables, la estrategia “foquista” venida de Cuba es inaplicable. La ebullición social, las prácticas de autodefensa, el carácter insurreccional de las organizaciones sindicales y campesinas estimulan la

²³⁵ Véase, *Inforpress Centroamérica*, No. 359, 13 de septiembre de 1979, p. VI y VII. Sólo entre líneas hemos encontrado referencias a los enfrentamientos entre trabajadores, provocados por los cierres de fábricas a raíz de las huelgas, pero en informes de las organizaciones guerrilleras es posible encontrar ciertos indicios, por ejemplo al mencionar las confrontaciones entre activistas y “esquiroleros” empleados por la patronal para sustituir a los trabajadores en huelga –posiblemente simplemente trabajadores que no tenían simpatía por la causa revolucionaria.

²³⁶ Véase, Mario Vázquez, “Del desafío revolucionario a la reforma política. El Salvador, 1970-1992”, I. Sosa (coord.), *op.cit.*, 1997, pp. 195-227.

creatividad revolucionaria.”²³⁷ Esta cita hace suponer que los grupos guerrilleros fueron actores aislados del movimiento popular que en un momento dado “decidieron” abandonar la estrategia guevarista del foco guerrillero para insertarse en diversas organizaciones de base.

Pero la revisión de la constitución de la guerrilla salvadoreña, de pequeños grupos de jóvenes inspirados en el ejemplo de la revolución cubana a las organizaciones político-militares que tuvieron la capacidad de realizar la ofensiva de 1981, da cuenta que desde sus inicios estaban insertados en redes sociales, que se habían formado alrededor de la oposición al régimen militar. Estas redes estaban construidas en torno a dos polos –el comunista y el socialcristiano-, de los cuales cada uno contaba con tradiciones, prácticas políticas y simbólicas propias y –como señalamos en los apartados anteriores- incorporaba a organizaciones populares.

En la elaboración de las nuevas estrategias político-militares hubo varios insumos: Por un lado, en las subculturas políticas de la oposición, si bien el ejemplo cubano seguía siendo una inspiración para la lucha armada, también se analizaban las razones por las cuales los “focos guerrilleros”, surgidos en los sesenta en diversos países latinoamericanos (por ejemplo, Bolivia, Argentina, Guatemala), habían sido desmantelados por la represión sin tener un mayor impacto en la población local. Este debate se insertó en un ambiente continental caracterizado por la emergencia de nuevos grupos guerrilleros –como los Tupamaros en Uruguay, Montoneros en Argentina o el MIR chileno- que desde mediados de los años sesenta reivindicaron la necesidad de trabajar entre las masas populares, organizar políticamente a los sectores populares marginales, por ejemplo en los tugurios urbanos, y dedicarse, además de la preparación militar, a la propaganda política, editando periódicos y distribuyendo volantes que retomaban las necesidades populares.²³⁸

En este contexto, la estrategia del movimiento de liberación nacional de Vietnam que involucraba a la población civil en la guerra a través de un esquema de apoyo político-militar, sirvió como inspiración para elaborar una estrategia que permitiera incorporar la lucha armada en el repertorio de protesta popular en El Salvador. Por otro lado, la “lucha ideológica” entre grupos radicales y partidos moderados de la oposición sobre la estrategia más adecuada para desplazar a los militares del gobierno, permitió no sólo “aterrizar” las estrategias político-militares al contexto salvadoreño, sino también, construir y afianzar diferentes identidades políticas. De estos procesos de diferenciación nacieron en 1970 al interior de la oposición comunista las FPL, la organización

²³⁷ A. Rouquié, *op. cit.*, 1994, p. 145.

²³⁸ MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria; Véase, D. Pereyra, *op.cit.*, 2000, p. 38-39.

encabezada hasta su muerte en 1983 por Salvador Cayetano Carpio (Comandante Marcial), y a partir de escisiones del PDC y de la Juventud Comunista, entre 1971 y 1972, el ERP.

La lucha armada en el Partido Comunista

Las prácticas políticas de la oposición comunista fueron objeto de crítica de los grupos guerrilleros a lo largo de los años setenta. Sin embargo, algunos de los primeros antecedentes de la lucha armada fueron realizados por militantes comunistas. En 1959 se formaron los “grupos de acción” para derrocar al gobierno de Lemus y en 1961 –en el contexto de la efervescencia social a raíz de la revolución cubana- se formó el FUAR como “brazo armado” del PC. Esta organización, que postulaba la “Revolución democrática, antiimperialista y antifeudal” fue disuelta en 1963 sin haber realizado una acción militar. La razón por su disolución, señaló Salvador Cayetano Carpio posteriormente, fueron las “desviaciones militaristas”, que se manifestaban en un menosprecio por la lucha social y el trabajo político en los sindicatos.²³⁹ Lo interesante de la corta historia del FUAR es el lugar que ocupa en la historia de las organizaciones guerrilleras salvadoreñas. Por una parte, su programa –reforma agraria, reformas socioeconómicas (de vivienda, salud, educación, salarial) y la defensa de la soberanía nacional- adelantaba ya los ejes programáticos de plataformas políticas de los fines de los setenta, como la del Foro Popular o de la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Por otra parte, según señalaba Domingo Santacruz (uno de los dirigentes históricos del PCS), varios de los integrantes del FUAR, después de su disolución por el Comité Central, se retiraron molestos del partido y participaron, varios años después, en la fundación de las otras organizaciones guerrilleras.²⁴⁰

El Partido Comunista justificaba su decisión de privilegiar las formas legales de lucha política – participar en elecciones y alianzas electorales pluriclasistas y formar organizaciones de masas- con la estrategia de la acumulación de fuerzas, según la cual las diversas acciones para ampliar la influencia y la organización comunista servirían, en el momento decisivo de crisis del régimen político, para llamar a la insurrección popular, el único momento apropiado para usar las armas. En concordancia con la teoría de la revolución por etapas, el PC planteaba que habría que apoyar a las “fuerzas progresistas” de la burguesía para que realizaran la revolución burguesa y, posteriormente,

²³⁹ FUAR: Frente Unido de Acción Revolucionaria. Véase, M. Harnecker, *op. cit.*, 1983, pp. 140-141; FPL, *La práctica revolucionaria es la mejor confrontación de líneas estratégicas y tácticas*, El Salvador, mimeo, marzo de 1978, pp. 3-5 (Archivo personal de Mario Vázquez).

²⁴⁰ Véase, “Proyecto de plataforma programática del Frente Unido de Acción Revolucionaria FUAR”, Mayo de 1962, Víctor Valle, *Siembra de Vientos. El Salvador 1960-1969*, San Salvador, CINAS, 1993, pp. 191-224; R. Menjívar, *op.cit.*, 2006, p. 28.

se podría empezar a reagrupar las fuerzas y luchar por la revolución socialista. Esta postura tuvo dos efectos prácticos: en primer lugar, el PCS contribuyó con su actividad a la ampliación de organizaciones populares legales e independientes del gobierno, lo cual era una premisa importante para el crecimiento de los grupos más radicales porque pudieron intervenir con éxito en este ambiente organizativo.

Pero, en segundo lugar, como lo reconocería unos años más tarde el secretario general del PCS, Schafik Handal, en una entrevista con Marta Harnecker, al privilegiar la lucha electoral y las alianzas políticas con fuerzas moderadas y del centro, el Partido Comunista se tardó en reconocer el “espíritu de época”:

En nuestras campañas electorales dijimos que no se debía esperar de las urnas el poder, que éstas eran un punto de paso en el camino y que el poder habría que conquistarlo con otra forma de lucha. Esto contribuyó a preparar las condiciones políticas para el viraje extenso, multitudinario, de las masas hacia el apoyo de la lucha armada y la incorporación de un creciente número de sus componentes como militantes y combatientes de las organizaciones armadas. Pero llegado ese momento –en febrero de 1977-y a pesar de que la Comisión Política del CC acordó realizar el viraje de nuestro Partido hacia la lucha armada (...) demoramos dos años en consumarlo.²⁴¹

En consecuencia, el desencanto social con la falta de espacios de participación a partir de 1972 fue capitalizada por los círculos radicales, lo cual afectó las bases sociales del PC.

Para que pasara todo esto, la participación de dos personas en la lucha ideológica –ambos provenientes del Partido Comunista, pero que se separaron de él- resultó ser central. Uno era el poeta Roque Dalton quien participó con sus trabajos en las polémicas sobre las estrategias y tácticas del movimiento revolucionario. Libros como *Las historias prohibidas del Pulgarcito* y *Miguel Mármol* no consistían sólo en una relectura de momentos clave de la historia salvadoreña –como la conquista, el levantamiento indígena encabezado por Anastasio Aquino en 1832/33 y la Matanza de 1932- desde la perspectiva de las clases dominadas; al mismo tiempo eran argumentos para insistir en la importancia de prepararse para la guerra porque –señalaba Dalton- toda la historia mostraba que la transformación social en El Salvador no iba a ser posible sin recurrir a la violencia revolucionaria. Dice Miguel Mármol, sobreviviente de la insurrección y Matanza de 1932, en su balance sobre estos sucesos (y con él lo dice Roque Dalton):

Todavía me duele pensar que los comunistas éramos tan idiotas que ni siquiera garantizamos que cada cuadro tuviera en las manos por lo menos una pistola desde el

²⁴¹ M. Harnecker, *op. cit.*, 1983, p.129.

momento en que se decidió ir a la insurrección. No sé en qué carajo estábamos pensando.²⁴²

En los años de agitación constante, los libros de Roque Dalton –especialmente *Las historias prohibidas*, *Miguel Mármol* y su monografía sobre El Salvador- se convirtieron en libros de cabecera de los estudiantes universitarios, así como de activistas y dirigentes del movimiento popular. Ofrecieron insumos para interpretar la movilización social de los setenta como parte del ciclo de lucha popular que sólo iba a terminar con el triunfo de la revolución, un triunfo que sólo era posible por medio de la ruptura violenta con el orden actual.²⁴³

El otro personaje clave en esta lucha ideológica era Salvador Cayetano Carpio, dirigente sindical y secretario general del Partido Comunista hasta 1970, cuando abandonó el partido para formar la organización guerrillera FPL-Farabundo Martí. Sus críticas fundamentales a la política del PC se centraban en que, al menospreciar la lucha armada como “aventurismo de izquierda” negaban la “violencia revolucionaria de las masas”, lo cual significaba excluir de la práctica política todas las formas de lucha que involucraban directamente a las masas, autolimitar la acción a los estrechos cauces de la participación legal, a las alianzas políticas con sectores de la burguesía y las conspiraciones con grupos de militares “progresistas”.²⁴⁴

En 1970, para demostrar su oposición al apoyo del Comité Central del Partido Comunista a los militares salvadoreños en la guerra contra Honduras, Cayetano Carpio abandonó el Partido Comunista con un grupo de simpatizantes para formar las FPL. En los estudios sobre la guerrilla salvadoreña se ha prestado mucha atención al dato que Carpio, en el momento de su renuncia al PCS era el secretario general del partido. Pero es importante rescatar también que él había sido dirigente sindical, que participó en la huelga general de 1967, y entre los militantes que acompañaron su salida del Partido Comunista se encontraron cuadros que ocuparon posiciones estratégicas en el movimiento sindical. En el núcleo inicial de las FPL participaban el Secretario General y el Secretario Juvenil de la FUSS, José Dimas Alas y Ernesto Morales, quienes al igual que Carpio renunciaron a sus cargos político-sindicales en el PC.²⁴⁵ Posiblemente el debilitamiento del

²⁴² R. Dalton, *op.cit.*, 2000, p. 257

²⁴³ Véase, M. Vázquez, “País mío no existes”. Apuntes sobre Roque Dalton y la historiografía contemporánea de El Salvador. *Humanidades*, El Salvador, No. 2, enero-marzo de 2003, pp. 88-103.

²⁴⁴ Véase, FPL, *op.cit.*, 1978, pp. 28-33.

²⁴⁵ Véase, *Ibíd.* p. 12.

sindicalismo comunista después de 1969 encuentra una de sus razones en el hecho que algunos de los cuadros sindicales más experimentados y comprometidos abandonaran la labor sindical.

El núcleo inicial de las FPL se centró primero en la construcción de su aparato militar. Para no involucrarse en debates ideológicos con el Partido Comunista o sus organizaciones sindicales, optó por reclutar sus activistas fuera del ámbito de influencia del PC. Esta decisión estratégica inicial explica probablemente por qué las FPL no incidieron directamente en el movimiento sindical hasta varios años después de su fundación, y en mucho menor grado que el Partido Comunista o Resistencia Nacional, no obstante el origen sindical de su núcleo inicial. La conexión con el movimiento popular se realizó mediante la conformación de redes de colaboradores, de las cuales surgieron los grupos de apoyo, no sólo para dar apoyo logístico a la lucha armada sino para realizar un trabajo político en el movimiento popular. De esta manera se logró formar una base de reclutamiento entre sectores estudiantiles, campesinos y el gremio del magisterio. Como señalamos anteriormente, el apoyo del grupo sindical de Carpio (COAP) en la huelga de ANDES de 1968 debe haber sido crucial para los contactos iniciales y el posterior vínculo entre ANDES y las FPL. Activistas del movimiento estudiantil y del magisterio formaron también el grueso de los cuadros políticos y dirigentes históricos de las FPL. Por ejemplo, Mélida Anaya Montes (Comandante Ana María), secretaria general de ANDES ocupó, hasta su asesinato en 1983, la segunda posición en las estructuras de mando de las FPL, después de Carpio. También Salvador Sánchez Céren (Comandante Leonel González) salió del gremio de maestros. Él fue el primer secretario general de las FPL después de la muerte de Carpio, miembro de la Comandancia General del FMLN en los ochenta y Coordinador General del FMLN del 2001 al 2004.²⁴⁶

Las redes de colaboradores y los grupos de apoyo deberían servir, de acuerdo al planteamiento de las FPL, para involucrar a crecientes sectores de la población a las movilizaciones contestatarias, su concientización política y, posteriormente, involucrarlos en la lucha armada. El proceso de progresiva participación de los sectores populares en la lucha tendría su meta final en la revolución socialista. El derrocamiento de la dictadura militar y la democratización política eran, por tanto, sólo un paso:

La línea programática de las FPL enfatiza sobre todo la promoción e incorporación de las más amplias masas al proceso revolucionario, *a través de las luchas reivindicativas como vías de elevación de su conciencia de clase y acrecentamiento de su disposición y combatividad revolucionarias.* (...) La organización política y combativa de las masas es un requisito fundamental del Movimiento Popular Revolucionario dentro del proceso de Guerra Prolongada del Pueblo.

²⁴⁶ Véase, *Ibíd.* p. 12; M. Harnecker, *op. cit.*, 1983, pp. 148-150.

Partiendo de lo simple a lo complejo, de las luchas reivindicativas en el marco general de la lucha revolucionaria fundamental, las masas van adquiriendo una conciencia revolucionaria de clase que se traduce en una disposición mayor, en un odio consciente de clase y en el encauzamiento orgánico de la violencia revolucionaria del pueblo.²⁴⁷

El PC, si bien en 1977 tomó la decisión de participar en la lucha armada, tardó todavía dos años más para poner esta decisión en práctica: Fue en 1979, bajo la presión de la creciente movilización popular, el crecimiento de las organizaciones populares pro-guerrilleras y el triunfo de los sandinistas en Nicaragua, que los comunistas crearon un brazo militar para cumplir con una condición que las organizaciones político-militares habían impuesto para que el partido pudiera participar en el proceso de unificación que desembocaría en la fundación del FMLN. La decisión de crear una estructura militar se tomó en el VII Congreso de abril de 1979 y las FAL aparecieron públicamente el 24 de marzo de 1980, fecha del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero.²⁴⁸

El ERP y la Resistencia Nacional

También en las subculturas de la oposición democristiana, el descontento con los pocos resultados de la participación política en los espacios permitidos por los militares provocó desprendimientos de individuos y grupos que decidieron formar grupos guerrilleros. De esto da cuenta la emergencia – a veces efímera-, de grupos provenientes del movimiento estudiantil y de la Juventud Democristiana para formar grupos armados. De estos núcleos iniciales surgieron entre 1970 y 1975 tres organizaciones guerrilleras: el ERP, la Resistencia Nacional y el PRTC.

Entre 1968 y 1970 surgieron los primeros grupos –con nombres sonoros -Acción Revolucionaria Salvadoreña o Comandos Organizadores del Pueblo- o enigmáticos como “el Grupo” (así fueron llamados por la prensa)- que no lograron consolidarse. Las pocas acciones que ellos realizaron fueron asaltos bancarios y sabotajes con explosivos a instalaciones gubernamentales. La acción con más repercusiones públicas fue el secuestro y ajusticiamiento de Ernesto Regalado Dueñas en 1971, realizado por “el Grupo”. Entre 1971 y 1972, a partir de contactos entre estos grupos con un segmento de la Juventud Comunista se formó el ERP.²⁴⁹

²⁴⁷ FPL, *op.cit.*, 1978, p. 18. Las cursivas son mías.

²⁴⁸ Sobre la participación del PCS en la formación del FMLN, véase, la ponencia de Domingo Santacruz, en el Panel “25 Aniversario del FMLN: La construcción del partido FMLN y el aporte de las cinco organizaciones históricas que lo constituyeron”, 30 de julio de 2005, *El Torogoz. La revista farabundista*, disponible en línea, eltorogoz.net/pcs.htm (consultado en noviembre 2006).

²⁴⁹ Véase, “Origen y desarrollo del Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP”, *op.cit.*, 2006.

Las posiciones políticas y estratégicas del ERP privilegiaban la preparación del aparato militar, por encima del trabajo político entre las organizaciones de masas, justificando esta estrategia militarista con su crítica a los partidos tradicionales y un planteamiento “insurreccionalista”: La revolución se realizaría mediante una combinación de ataques guerrilleros, insurrecciones espontáneas de las masas populares y levantamientos en algunos cuarteles militares. La hegemonía de las clases populares en el proceso revolucionario se aseguraría por medio de la vanguardia militar, por lo cual sería fundamental privilegiar, en la etapa pre-insurreccional,

... el armamento del pueblo, la preparación de los jefes capaces de conducir a las masas insurrectas, es decir, la columna vertebral de la insurrección y el ejército revolucionario, el cual garantizará la conservación del poder en manos de los trabajadores y, sobre todo, la organización del poder popular. La organización de las masas en organismos políticos armados, en órganos de poder, desde donde se organizará la legislación, la defensa, la producción, etcétera y que será garantía de los triunfos alcanzados por las masas populares.²⁵⁰

Como apoyo a las actividades militares se buscaba construir una red de colaboradores civiles en los áreas rurales y urbanos, por lo cual militantes del ERP intervenían, en la primera mitad de la década de los setenta, en la construcción de Ligas Campesinas en varias zonas del país y construían el Frente Luis Moreno para aglutinar (y reclutar) a grupos de jóvenes y estudiantes de secundaria.²⁵¹

Los conflictos entre las distintas fracciones del ERP -que dan cuenta de la poca organicidad de este grupo guerrillero y que culminaron en el asesinato del poeta Roque Dalton y otro militante de la organización en 1975- tuvieron como tema central del debate el papel de la lucha de masas en la estrategia revolucionaria. Mientras la dirección militar, dirigida por Joaquín Villalobos y Alejandro Rivas Mina, sostenía el enfoque militarista al priorizar la construcción de la estructura militar y menospreciar los vínculos con las organizaciones populares, una fracción de la dirección desarrollaba la posición de la “Resistencia Nacional”. Según esta posición, El Salvador se encontraba en la fase de “escalada fascista de la dictadura militar” por lo cual la primera fase de la revolución tenía que ser “democrática-popular”, para iniciar posteriormente la lucha por el socialismo. Resistencia Nacional enfatizaba (aunque pareciera contradictorio):

Descartamos todo tipo de alianzas con los grupos burgueses, dado que no estamos luchando por una democracia burguesa, sino que en la presente etapa luchamos por una

²⁵⁰ ERP, *El impulso del plan de desarrollo de la oligarquía financiera; y la profundización de la crisis económica*, El Salvador, mimeo, 1977, p. 23.

²⁵¹ Véase, “Origen y desarrollo del Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP”, *op.cit.* 2006.

democracia burguesa, primera etapa de la construcción del socialismo y germen de la dictadura del proletariado.²⁵²

En función de estos objetivos estratégicos se planteaba, en 1976, la formación de un Frente Amplio para incorporar “las masas” a la vía armada, acercar la organización político-militar a las luchas sociales y reivindicaciones de masas y construir paralelamente al aparato militar el partido marxista-leninista, como vanguardia de la revolución anti-imperialista y socialista.²⁵³

La estrategia de vincular la lucha de masas con la lucha armada se fundamentaba en la experiencia de algunos militantes que habían participado en el movimiento de protesta campesina de Cerrón Grande. La práctica de intervenir en las organizaciones gremiales, independientemente del signo político de la dirigencia, fue justificada con la necesidad de construir el partido de vanguardia con el apoyo de los trabajadores, considerados –de acuerdo a la teoría marxista- las fuerzas sociales hegemónicas para alcanzar la revolución socialista. Por esto, Resistencia Nacional planteaba claramente su estrategia de intervenir en las organizaciones sindicales más importantes para que, en torno a estas luchas, se aglutinaran otros grupos dominados:

...el partido debe influenciar las ramas industriales más importantes, como los eslabones industriales estratégicos, así como las ramas de la agricultura y de sectores medios de tal forma *que estos eslabones atraigan a otros sectores que se compacten y acepten las orientaciones revolucionarias.*²⁵⁴

Para que esta participación en las organizaciones obreras y campesinas generara la radicalización deseada, los militantes tenían la obligación de participar activamente en los gremios, estimular debates ideológicos y promover nuevas formas de acción y decisión desde las bases. De esta manera sería posible transformar las prácticas de lucha y los objetivos estratégicos del movimiento obrero y campesino sin, obligatoriamente, pasar por la etapa de la “marcha por las instituciones” para llegar a la dirigencia y dominar el aparato. La siguiente cita describe qué significaba la “lucha por la hegemonía” desde la perspectiva de Resistencia Nacional:

El principio de relación entre partido y gremio se puede resumir en que el partido no necesita de un control absoluto de la organización gremial en el sentido de control orgánico, sino que la influencia y dirección se hace sobre las bases de un trabajo de propaganda, agitación y organización por medio de un programa mínimo y plan de lucha. De tal forma que la línea no se impone al gremio, sino que el partido promueve la

²⁵² Resistencia Nacional, *Por la causa proletaria*, Partido Socialista Costarricense, s/l, s/d, p. 34 (Archivo personal de Mario Vázquez).

²⁵³ *Loc.cit.*

²⁵⁴ *Ibíd.*, p. 97. La cursiva es mía.

democracia proletaria en el seno de los gremios para que sean las mismas masas las que vayan asimilando esta línea en base a la práctica misma.²⁵⁵

En el fondo, el planteamiento de Resistencia Nacional era un planteamiento “movimentista”, muy parecido a las críticas y propuestas de organizaciones como el MIR chileno, que si hicieron algunos años antes. Paradójicamente, pese al énfasis teórico en la necesidad de formar un “partido de vanguardia marxista-leninista”, los planteamientos estratégicos expresaron un rechazo a la institucionalidad, especialmente la sindical o partidista. Si bien el núcleo inicial de Resistencia Nacional fue principalmente estudiantil, su estrategia de buscar activamente la participación en sindicatos de base contribuyó a la construcción de un entorno favorable para reclutar activistas en el sector obrero de la industria estratégica y manufacturera y en el sector campesino, aunque allí nunca se logró poner en peligro la hegemonía del BPR y de las FPL.

El PRTC fue el último grupo guerrillero que se consolidó a partir de los conflictos y escisiones en el ERP. Entre 1972 y 1974 algunos núcleos del ERP se salieron para constituir la ORT. Esta organización se dividió a partir de la discusión interna sobre la necesidad de construir una estructura político-militar centroamericana. Mientras los que se oponían a la visión centroamericanista se incorporaron posteriormente a Resistencia Nacional, el resto fundó en 1975 el PRTC. A diferencia de las otras organizaciones político-militares salvadoreñas, el PRTC se concebía y operaba hasta 1979 como sección nacional de una estructura político-militar regional encabezada por un Comisario militar regional y una Comisión política regional. En este año, en el Congreso de Tegucigalpa, ante el ascenso del proceso revolucionario en Nicaragua y El Salvador, se decidió la “independencia táctica” de las secciones nacionales, lo cual significaba en la práctica política abolir la supeditación de las secciones a la dirigencia regional. El PRTC y su frente de masas MPL eran el grupo más pequeño de las organizaciones político-militares.²⁵⁶

Bajo el impacto de la revolución nicaragüense y el ascenso de la movilización social, que parecía hacer posible repetir la experiencia nicaragüense, las organizaciones político-militares y el PCS acordaron formar un frente común, el FMLN. La primera acción militar concertada fue la ofensiva de 1981 que no logró desencadenar la insurrección popular, pero sí permitió que la guerrilla ocupara militarmente algunas zonas del país y obtuviera el reconocimiento internacional como fuerza beligerante. No obstante la constitución del FMLN con una Comandancia General compuesta por las cinco organizaciones político-militares, cada organización conservó hasta la disolución formal

²⁵⁵ *Loc.cit.*

²⁵⁶ Véase, N. Díaz, *op.cit.*, 2005.

de las estructuras autónomas en 1995, su aparato militar autónomo, los vínculos político-diplomáticos a nivel internacional y sus lazos con gremios, sindicatos y organizaciones sociales.

La “lucha por la hegemonía” en las subculturas de oposición

Después de presentar por separado los hilos que en conjunto conforman la trama de la movilización social y de la radicalización política previa a la guerra civil, conviene detenerse y reflexionar sobre las relaciones entre los distintos agentes, que en estos años compitieron entre sí por representar a los sectores populares movilizados. Una buena imagen del vínculo dinámico entre los distintos actores que conformaron el movimiento revolucionario salvadoreño, ofrece la conceptualización del movimiento social como una relación dinámica entre “núcleos duros” de militantes -quienes ejercen la función de liderazgo, dan coherencia a las propuestas programáticas e interaccionan con el entorno organizacional- y redes asociativas de simpatizantes y colaboradores que movilizan el entorno social, retoman las propuestas de los militantes y proveen de nuevos militantes a los “núcleos duros” (las células o colectivos). Para que se desencadene la acción colectiva es necesario que los “núcleos militantes” establezcan vínculos con el entorno social que apoya sus exigencias.²⁵⁷

En los años setenta, los militantes de las organizaciones político-militares fungieron como núcleos movilizados que articularon distintos espacios sociales. Vincular redes sociales de oposición que antes no habían estado entrelazados, como sindicatos urbanos y organizaciones campesinas, tenía como fin -así lo confirman los debates internos de los grupos guerrilleros sobre el “trabajo de masas”- convertirlas en redes sociales de apoyo para la insurrección armada.

Cuando Adolfo Gilly escribió que el movimiento revolucionario salvadoreño había roto con el reformismo y con el foquismo recuperando, al mismo tiempo, “a algunos de los elementos humanos más valiosos provenientes de dichas tendencias”,²⁵⁸ apuntó no sólo a individuos concretos, sino también a prácticas políticas. La politización de organizaciones gremiales y sindicales -como ANDES, FECCAS, STECEL o FENASTRAS- fue, por ejemplo, un efecto de la transferencia de prácticas de un espacio (la organización guerrillera clandestina) a otro a partir de la participación activa de los militantes guerrilleros. Al conceptualizar las organizaciones populares no sólo como actores colectivos “definidos” sino también como redes sociales y espacios de sociabilidad y participación, es posible ver que las organizaciones político-militares lograron crecer

²⁵⁷ Pedro Ibarra, et. al., “Los nuevos movimientos sociales. El estado de la cuestión”, P. Ibarra, et.al., *Creadores de democracia radical. Movimientos sociales y redes de políticas públicas*, Barcelona, Ed. Icaria, 2002, pp. 23-80, pp. 40-41.

²⁵⁸ A. Gilly, *op. cit.*, 1981, p. 17.

numéricamente y aumentar su influencia social sólo en la medida que supieron aprovechar redes y espacios construidos previamente por otros agentes como la iglesia, el PDC y el PCS. El desbloqueo ideológico, que produjo la labor religiosa y organizativa de curas y catequistas, fue un paso previo para superar la apatía política y el fatalismo de los campesinos; en el ámbito urbano-sindical la misma función fue cumplida por las prácticas sindicales independientes del gobierno que se ejercieron en las organizaciones sindicales comunistas. Experiencias organizativas “reformistas” fueron, por tanto, clave para que la participación en los frentes de masas -y, eventualmente, en una organización político-militar- se convirtiera en una opción de acción considerada posible y accesible. Ejemplo ilustrativo de esta situación es el hecho que los grupos revolucionarios nunca pudieron incursionar en las bases sociales de las organizaciones populares -campesinas o sindicales- progubernamentales, rompiendo, por ejemplo, el monopolio del sindicato de FESINCONSTRANS en el sector de la construcción o debilitar la organización campesina de derecha, la UCS.²⁵⁹

En el mismo periodo había también en otros países un ambiente de movilización social que propiciaba el cuestionamiento de prácticas políticas y formas de representación tradicionales - como el control corporativo sobre el movimiento popular-, lo cual facilitaba el encuentro de militantes de la izquierda radical y activistas sindicales y campesinos en espacios compartidos. Sin embargo, este acercamiento no logró cristalizarse en organizaciones políticas con capacidad de aglutinar diferentes grupos y sectores sociales.²⁶⁰ En El Salvador, la extrema exclusión política ejercida en contra de las clases dominadas después de 1932 no permitió que emergiera una ideología nacional-popular, como en México o Argentina, que aglutinara en torno al Estado a los sectores populares organizados y dificultara la difusión de proyectos políticos radicales. Había, en otras

²⁵⁹ Por ejemplo, FESINCONSTRANS, fundada en 1968 con apoyo de la embajada norteamericana, contaba en 1971 con 13 sindicatos y 4,602 afiliados, en 1976 con 15 sindicatos y 20,681 afiliados. En 1984 tenía 25,810 afiliados, una tercera parte de los afiliados registrados por el Ministerio de Trabajo (ver Anexo).

²⁶⁰ Ejemplos son el Cordobazo en Argentina (1969) y el “otoño caliente” de Italia (1968/1969), para mencionar sólo dos casos de movilización social que propiciaban el encuentro entre militantes de la izquierda radical y activistas de organizaciones obreras. En ambos casos las luchas obreras fueron antecedidas por movimientos estudiantiles y la proliferación de grupos marxistas-leninistas con aspiraciones de convertirse en la vanguardia revolucionaria. La movilización obrera, asistida y reforzada por militantes de izquierda, opuso al modelo de control corporativo dominante un modelo sindical clasista, combativo y participativo. En Argentina el golpe de estado de 1976 acabó con este tipo de militancia obrera, pero en Italia surgieron de este movimiento una diversidad de organizaciones entre ellos los “Centri Sociale” y sindicatos de base. Pero no se logró formalizar la unidad de acción de distintos sectores sociales en un actor político ni poner seriamente en peligro la hegemonía, entre los obreros, de los partidos de masas tradicionales, como el Partido Comunista Italiano y, en el caso argentino, el Peronismo. Véase, para Argentina: Daniel James, *Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1978*, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1990, pp. 287-311.

palabras, un vacío de sentido que el mensaje político radical de las organizaciones guerrilleras salvadoreñas pudo llenar.

La radicalización de los repertorios de protesta popular perjudicó, en primer lugar, a los reformistas quienes perdieron representatividad y peso político. Un factor que explica la relativa facilidad que tuvieron los militantes guerrilleros para “tomar” organizaciones fue la “juventud” de las organizaciones afectadas. Las organizaciones más “viejas” –ANDES Y FECCAS- se formaron en 1965, FENASTRAS se fundó en 1973 y los sindicatos del sector público nacieron en el contexto de la movilización política de 1978 y 1979. Posiblemente, la conversión al radicalismo se facilitó precisamente porque la institucionalización de jerarquías, liderazgos y mecanismos de control interno en estas organizaciones populares no había avanzado lo suficiente para resistir la actividad de los militantes guerrilleros.²⁶¹ Las federaciones comunistas, FUSS y FESTIAVTSCES, aunque también fueron fundadas entre 1965 y 1969 se basaron en la continuidad organizativa del trabajo sindical comunista, realizado desde la segunda mitad de los años cuarenta lo cual permitió una mayor estabilidad institucional. Por otra parte, en la coyuntura de movilización social y enfrentamiento político de los años setenta, los mecanismos de cooptación que ofreció el Estado para controlar a los nuevos sindicatos de las empresas estatales estratégicas, como por ejemplo STECEL, resultaron ser demasiado precarios para consolidarse en lazos permanentes. Por ejemplo, STECEL fue legalizado en 1972, después de que los sindicalistas se comprometieron a apoyar en las elecciones de 1972 la candidatura del General Medrano e ingresar a la pro-gubernamental CGS. Sin embargo, un año después, STECEL participó en la fundación de FENASTRAS y en su posterior separación de la CGS.²⁶²

Las prácticas de la “lucha por la hegemonía” –la estrategia de cuestionar en asambleas y desde las bases de las organizaciones los liderazgos moderados para cambiarlos por más radicales- funcionó sobre todo en contextos organizacionales débiles, donde no había que enfrentar estructuras corporativas arraigadas ni compromisos políticos institucionalizados.²⁶³ Pero la lucha por la hegemonía tensaba no sólo las relaciones entre los militantes radicales y los políticos reformistas,

²⁶¹ También se puede suponer que la juventud de los militantes y dirigentes guerrilleros y de los activistas sindicales –todos pertenecían a una misma generación- debe haber facilitado el entrelazamiento entre las dos modalidades de organización. Un factor que podría explicar la estabilidad de FESINCONSTRANS fueron los lazos con el Estado y con la patronal que permitió operar un sistema de “closed shop”: la contratación de fuerza de trabajo para obras de construcción se hacía mediante la federación.

²⁶² Entrevista con Horacio, San Salvador, 8 y 11 de marzo del 2004.

²⁶³ A nuestro juicio esto es una diferencia fundamental con movimientos sociales en países con mayor desarrollo institucional y organizacional y estructuras corporativas consolidadas, como el caso mexicano.

también condicionaba los vínculos entre los grupos que conformaban la izquierda revolucionaria. En los periódicos de los frentes de masas se dirimió esta “lucha ideológica” a partir de debates sobre cómo caracterizar la coyuntura, qué sectores eran potenciales aliados, qué estrategias políticas había que aplicar y para dónde había que llevar el proceso revolucionario. Desde la perspectiva de hoy, estos debates –por ejemplo si había que impulsar la revolución popular para construir un sistema socialista en el país, como lo planteaban las FPL y el Bloque, o una revolución *democrática* popular, como primer paso para iniciar la lucha por el socialismo, como lo planteaba Resistencia Nacional y el FAPU- parecen una pelea ociosa y sectaria para imponer determinados términos. Pero para los militantes de esta época, que –no hay que olvidar- se concebían como marxistas-leninistas, estos términos reflejaban las ideas que configuraban su identidad política, al expresar el sentido de su acción, delimitar fronteras entre el “nosotros” y los “otros” (los sectores reformistas y los otros grupos radicales), mantener la pureza ideológica, al permitir la identificación de los “herejes”, es decir, de aquellos compañeros que internamente se atrevían a cuestionar determinados dogmas.²⁶⁴

Era un debate interminable de ataques, réplicas y contrarréplicas que se expresaba por escrito pero también en prácticas políticas cotidianas, empleadas para ampliar la influencia de la organización en distintos espacios. Por ejemplo, un militante del FAPU relató, en un testimonio publicado en la revista *Polémica* (revista teórica de Resistencia Nacional), la intervención de activistas de diversas tendencias políticas en la formación del sindicato en la Central Azucarera Izalco de la siguiente manera:

Algo que vale la pena notar es la lucha entre las tendencias por influir en la conducción de la lucha del sindicato, los compañeros se reunían en casas particulares; por temor a que un buen día los cuerpos represivos les quisieran aplicar la famosa Ley de Orden Público, optaron por solicitar el local del Sindicato de la Industria Eléctrica en Sonsonate. Como has de saber allí domina el revisionismo [el PC] y aquella generosa oferta de prestar el local escondía en realidad la intención de los revisionistas de conducir a aquel naciente sindicato. [...] Otra amenaza que tuvieron que superar los compañeros fue la divisionista y aventurera del BPR haciendo uso de maniobras policíacas, acusaron a uno de nuestros compañeros de pertenecer a una organización política que quería “infiltrarse” en el sindicato. Nuestro

²⁶⁴ Señalaba Beatriz Sarlo sobre el ambiente de época de los sesenta y setenta: “Las ideas eran defendidas como núcleo constitutivo de la identidad política, sobre todo en las fracciones marxistas del movimiento radicalizado. La afirmación de la primacía intelectual no debería tomarse como descripción de lo que efectivamente sucedía con los sujetos, sino como indicación de qué debía suceder. Pero esta indicación en sí misma era un elemento activo de la realidad e incidía en la configuración de las identidades políticas: la utopía de una teoría revolucionaria que informara y guiara la experiencia presionaba sobre la práctica cotidiana de los movimientos. Esto no convirtió a todos los militantes en eruditos, pero señaló un ideal.” Beatriz Sarlo, *Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, p. 88. En el caso salvadoreño, no hay que olvidar que los cinco grupos guerrilleros que conformaron el FMLN en 1980 “nacieron” a partir de escisiones de los dos grandes partidos de oposición.

compañero, que hasta entonces no había tenido ninguna necesidad de declarar su militancia, no negó ser miembro del FAPU. Para que mirés el oportunismo. El que había acusado, entonces, pidió a la asamblea obrera que se “definiera” por una tendencia afirmando que el BPR era una tendencia “combativa” y “revolucionaria”. [...] ²⁶⁵

Como ilustra este relato, a través de la lucha ideológica se expresaban los conflictos entre quienes se disputaban la representación de los sectores populares, los revolucionarios marxistas-leninistas, sacerdotes, comunistas y también democristianos. Estos enfrentamientos podían incluso adquirir un carácter violento entre los representantes de las diversas organizaciones. Por ejemplo, en marzo de 1978 el BPR acusó al FAPU en su periódico *Combate Popular* de difamación porque había denunciado públicamente que, en la disputa por un local sindical, algunos miembros del BPR habían amenazado a un militante del FAPU con pistola en la mano. Si bien el Bloque negó la acusación, señalando que el FAPU estaba recurriendo los mismos métodos de la calumnia como el Estado en contra de la fuerza revolucionaria, el suceso da cuenta de la potencialidad violenta que podía adquirir la “lucha por la hegemonía”. ²⁶⁶

Pero estas disputas podían desarrollarse porque los protagonistas –y su público de simpatizantes y colaboradores- partieron de un conjunto de concepciones compartidas sobre la realidad social y política del país. En el plano de los objetivos políticos más concretos se trataba de la convicción que El Salvador requería un cambio social y político radical que pasaba por el control sobre el aparato estatal. Lo que se estaba discutiendo era el cómo –por vía electoral o por las armas-, el ritmo de los cambios, los objetivos estratégicos y el proyecto a futuro: una democracia con mecanismos de redistribución o socialismo. También se compartía la concepción –sentido común de esta época- que existían las posibilidades de realizar cambios sustanciales mediante el conocimiento científico de la realidad, y la planificación de estrategias políticas y de desarrollo a partir de este conocimiento.

Con el propósito de dar significado al descontento social y encausarlo hacia la insurrección, las publicaciones de los frentes de masas –periódicos, revistas teóricas, volantes- vinculaban denuncias de agravios particulares, ocurridos en una fábrica, un cantón campesino o una colonia, con

²⁶⁵ “El asalto a la central azucarera de Izalco”, *Polémica. Problemas de la Revolución Salvadoreña*, No. 4, marzo de 1978, p. 3 – 10, p. 5. La lucha ideológica se expresaba también en las prácticas simbólicas para afirmar la identidad colectiva. Por ejemplo, una canción del BPR –recuperada y grabada por el antropólogo salvadoreño Carlos Benjamín Lara en Chalatenango- tenía como tema la lucha ideológica y se burlaba de los “revisionistas” del FAPU (Archivo personal de Mario Vázquez).

²⁶⁶ Véase, “Lucha ideológica. Se abre camino el paso combativo de las masas”, *Combate Popular. Periódico del BPR*, El Salvador, No. 4, marzo de 1978, p. 5. Véase también el Anexo.

diagnósticos radicales.²⁶⁷ Los términos usados para interpretar estas experiencias sociales – fascismo, lucha de clases, imperialismo, dependencia- ofrecieron un marco cognitivo para identificar causas y causantes de los agravios y formular estrategias para modificar estas situaciones. También las fuerzas políticas moderadas hicieron esto –es decir, proponer un diagnóstico y formular estrategias-, pero en un contexto político caracterizado por la creciente violencia estatal en contra de cualquier forma de lucha reivindicativa u oposición al régimen militar,²⁶⁸ para un creciente segmento de activistas de las organizaciones populares dejaron de ser opciones viables.

El éxito de la lucha por la hegemonía tenía que ver por una parte con las prácticas agresivas de los militantes para cuestionar las dirigencias reformistas; pero también hay que reconocer que ellos mismos, aunque las cuestionaron y combatieron, participaron en las subculturas políticas de la oposición. Atraer las bases sociales de las organizaciones reformistas –democrístianas y comunistas- funcionaba porque los revolucionarios compartieron con los reformistas las nociones y concepciones sobre el ‘qué hacer’ para cambiar la sociedad salvadoreña (aunque no se compartiera el “cómo”, “cuándo” y “con quién”). Todas las plataformas políticas y de gobierno –desde el *Proyecto de plataforma programática del FUAR* de mayo de 1962 hasta el programa de gobierno del Foro Popular o la Coordinadora Revolucionaria de Masas señalaban como medidas necesarias las siguientes puntos: disolución de los cuerpos represivos y el castigo a los violadores de los derechos humanos, una reforma agraria, la nacionalización de empresas estratégicas, del comercio exterior y del sector bancario y reformas sociales para mejorar el nivel de vida y el poder adquisitivo de la población.

Politización de las organizaciones populares significó, en síntesis, que en lo organizativo se construyeron nuevas modalidades de participación y representación –los frentes de masas - que permitieron involucrar directamente a las bases de las organizaciones en los conflictos sociales y entrelazar las luchas de diferentes sectores para orientarlas hacia la insurrección. En lo discursivo se trataba de interpretar agravios particulares a partir del marco cognitivo de las organizaciones político-militares, para dar significado al descontento social y mostrar que la solución deseada y posible se encontraba en la ruptura revolucionaria con el régimen político imperante. La

²⁶⁷ Por ejemplo, en el artículo de la revista *Polémica* sobre la huelga en Izalco el autor analizaba la represión de la huelga como ejemplo de la guerra de contra-insurgencia en contra de las organizaciones populares, usando términos como “escalada al fascismo” para referirse a la coyuntura política del país. Véase, “El asalto a la central azucarera de Izalco”, *op.cit.*, 1978, p. 4.

²⁶⁸ Por ejemplo, la Ley de Defensa y Garantías del Orden Público (Decreto 407 del 25 de noviembre de 1977) prohibió prácticamente toda expresión de oposición política, entendida como reuniones que tuvieran como objetivo cambiar el gobierno, huelgas en el servicio público y las empresas paraestatales.

reproducción de esta convicción mediante redes sociales y conexiones, que formaban parte de una contracultura de oposición, explican el fervor revolucionario de esta época. En el ámbito de las prácticas, la politización se expresó en la llamada “lucha por la hegemonía” de la propia organización, la cual condicionaba las relaciones entre los actores independientes del aparato estatal. Desde “fuera” del movimiento, y desde la perspectiva de hoy, estos principios de acción fomentaron el sectarismo y divisionismo del movimiento popular y la izquierda salvadoreña. En ese entonces, y desde “adentro”, los principios ideológicos, defendidos en contra de los otros agentes en la lucha ideológica, afirmaban la identidad política y cohesionaban el grupo –la comunidad virtuosa de militantes revolucionarios- en un contexto amenazante y desgastante por la creciente violencia política.

El crecimiento de los grupos guerrilleros entre 1977 y 1980 fue el resultado de una promesa de integración social, política y cultural visualizada en un proyecto político contrahegemónico, así como de las habilidades prácticas de los militantes para sostener y moverse ‘como peces en el agua’ en las redes sociales de oposición. Pero sería equivocado pensar que la guerrilla fue la única beneficiada de la articulación con las organizaciones populares. Los cuadros políticos contribuyeron con sus actividades a la consolidación de las organizaciones populares, al dar estructura organizativa, direccionalidad y un proyecto estratégico al descontento social y las reivindicaciones particulares. En términos de recursos, los “fondos estratégicos” de las guerrillas –provenientes de asaltos bancarios y secuestros- sirvieron no sólo para comprar armamento, sino también para apoyar actividades de protesta, financiar huelgas y garantizar el funcionamiento cotidiano de las organizaciones populares, por ejemplo, pagando la renta de un local sindical.²⁶⁹

El efecto práctico del vínculo entre organizaciones guerrilleras y populares, con importantes consecuencias para la futura evolución del movimiento popular, fue la conversión de las afinidades político-ideológicas de la izquierda radical en principios de diferenciación que condicionaron la acción colectiva y las alianzas políticas en el campo político salvadoreño. Esto quiere decir que las alianzas que los actores sociales formaron desde su sector, así como las propuestas y estrategias de acción, se hicieron siempre desde la perspectiva y postura de la organización política. Así, cada uno de los frentes de masas agrupó a su interior a organizaciones heterogéneas en cuanto al sector

²⁶⁹ Por ejemplo, el surgimiento del BPR se hizo posible gracias al apoyo económico de las FPL, como relata Horacio: “En la división ésa que hubo [en el FAPU], del Bloque que uno de las FPL llegó y les dijo ‘¡bueno! ... aquí está, aquí hay dinero’ porque la gente requiere... dinero para activar, para estar presente, es decir... y el FAPU no; era, era ¡¡pobre!! hacían actividades de rifa (*risas*) y todas esas cosas, fiestas... entonces ahí se divide y el Bloque nace precisamente con lo que se quede, y las FPL tenían dinero y dicen ‘Bueno...’”. Véase también, M. Vázquez, *op.cit.*, p. 206.

social, pero homogéneas en cuanto a la ideología. Solamente cuando, después de la revolución sandinista, la toma de poder parecía “a la vuelta de la esquina”, estas organizaciones convergieron en la Coordinadora Revolucionaria de Masas, sin por esto olvidar los viejos conflictos ideológicos. En lo militar, la alianza se formalizó primero en la DRU y, posteriormente, en la Comandancia General del FMLN.

El peso de la ideología como principio de diferenciación en el campo político salvadoreño significó que los intentos por formar alianzas entre organizaciones populares con identidades políticas heterogéneas -como el Foro Popular compuesto por partidos políticos de oposición (el PDC y el MNR), frentes de masas (como la UDN y las LP-28), federaciones sindicales y asociaciones campesinas democristianas y de izquierda (por ejemplo FENASTRAS, ATACES, CTS)- fracasaron, evidenciando la fragilidad de pactos sectoriales y, en cambio, la fuerza de las lealtades políticas.

2.5. Ser militante en El Salvador: Mundos sociales y prácticas constitutivas

Mi familia no es una familia de políticos, curiosamente, todos los hermanos participamos de una u otra forma en la política, y todos salimos, algunos autoexiliados pero todo tiene que ver con la política. Mi papá era una persona muy conservadora y hasta era miembro del partido oficial, de los militares, porque como él fue mucho tiempo trabajador público -yo no sé si era obligatorio porque a mi papá no le gustaba hablar de eso- no sé si era obligatorio que pertenecieran al partido para poder conservar su trabajo pero me da la impresión de que era muy conveniente, a veces pienso que un poco como el PRI ¿no? algo así... Si los obligaban a ir a votar y a ir a votar por el partido oficial, ignoro si mi papá en la secretividad [sic.] del voto él se salía o asumía lo que le mandaban ¿no? como trabajador. Mi mamá era una persona mucho más, yo diría mucho más inteligente, ella daba como más cabida a cosas nuevas, mi papá era muy aferrado a sus tradiciones, cerrado a asumir cosas nuevas, tenía sus opiniones de las cosas y eran inamovibles, me acuerdo que muchas veces nos peleábamos porque él decía que los militares habían nacido para mandar y que nosotros estábamos locos si queríamos quitarles el poder, y entonces que lo único que íbamos [a] sacar era que nos mataran, entonces nos empezábamos a pelear porque le decía yo, qué por gente como él, el país estaba como estaba. Porque los militares fueron adquiriendo más y más y más poder, haciendo más y más y más corrupción, haciendo más abusos y la gente nunca protestaba. Yo hace poco estaba pensando que desde chica, eh yo me acuerdo de las pintas de las paredes, por ejemplo, “Yanquis fuera, Fulano de tal -que era el embajador de turno- fuera, no a la visita del presidente de Estados Unidos a El Salvador, OEA corrupta” etcétera, todo un montón de cosas políticas y siempre pues la pinta en la pared te lleva a preguntar, como niño ¿no?: “¿Quién es ese y qué...? ¿Quiénes son los yanquis y quiénes son los gringos? ¿Y por qué se les dice que se vayan y por qué, no sé qué? ¿no? Y de alguna forma yo creo que desde niños participamos bastante... porque los periódicos tenían mordaza, entonces más bien la pinta en la pared y el volante callejero y algún periódico que se llamó "El Independiente" que le pusieron bombas como cinco veces, yo creo que terminó siendo un mimeógrafo, por último, era por lo que nos llegaba a nosotros la otra cara de la moneda. ¿no? Entonces yo pienso que en mi vida estuvo muy presente desde chica saber de golpes, de intentos de golpe de Estado, de que aprisionaron al presidente, que lo tienen en un cuartel que están negociando los militares pero fracciones de ellos mismos y que luego

acordaban -nadie sabía que habían acordado ni por qué se lo habían llevado preso- luego el presidente seguía en funciones, etcétera... Entonces empezó también en ese momento mucho de la teología de la liberación y de las Comunidades Eclesiales de Base, sí eran muy católicos mis dos papás y mi mamá, más que ritualista católica de ir a misa, bautizar y celebrar la navidad y eso era más de leer la Biblia y hacer como hermenéuticas de Biblia ¿no? entonces nosotros participábamos en un curso, de hermenéutica bíblica con respecto al momento que se vivía, con, creo que eran curas salesianos, no, no, no agustinos, creo que jesuitas -o sea de uno u otra-, entonces veíamos también a teólogos latinoamericanos y veíamos desde el punto de vista religioso como todo esto era una política de muerte como era una cuestión contra los pobres contra el pueblo de dios etcétera, etcétera y desde ese punto de vista yo estaba totalmente convencida de la falta de justicia. Y eso era lo que más me moviera, más que -cómo te dijera- más, porque yo no me considero una persona con dotes de liderazgo porque hay gente que lo mueve el hecho de estar en una palestra política con un micrófono en la mano y toda la gente allí... no, a mí esto no me movía ¿no? Sino que era más que todo no permitir que las cosas siguieran de la forma en que estaban... y en ese sentido mi mamá, pues como era muy fiel a mi papá y yo creo que fue una pareja que... pues no sé si [*se ríe*] porque eran católicos hasta que la muerte los separó ¿no? [*seria*] pero mi mamá mediaba mucho entre el enojo de mi papá y nuestros furiosos revolucionarios y juveniles ¿no? Entonces siempre oíamos, me acuerdo, a la hora de la comida siempre estábamos oyendo un noticiario que además era de denuncia y siempre estábamos comentando: “Ah mira se llevaron a este periodista que era tan bueno que no sé que, ah mira otra bomba en el periódico tal, ah mira este ametrallaron a fulano a sutano a mengano” Así ¿no? (Maria).

Decidimos introducir la sección con esta cita larga porque en ella se describen algunos de los elementos que constituyeron las “condiciones de posibilidad” de la radicalización: por una parte, los mecanismos clientelares de coacción y represión abierta del régimen militar, contra los cuales se dirigía la rebelión, y por otra parte, el “entorno social progresista” de fines de los años setenta, la subcultura de oposición popular, donde convergían periodistas, académicos, curas progresistas y activistas de las organizaciones populares en la constitución de un sentido común favorable a un cambio radical. También permite ver el papel que jugaba el entorno familiar -en este relato representado por las discusiones políticas en la mesa y la participación en un Comité Eclesial de Base- para sensibilizar a los individuos a que determinadas experiencias funcionasen como “detonadores” para ingresar a la militancia activa. En el caso de Maria fue la experiencia con la represión -enterarse de amigos y conocidos asesinados- que sirvieron como impulso para *buscar* activamente en la universidad el vínculo con una organización político-militar.

La cita ilustra también el ambiente de época que posibilitó que determinados lugares -la fábrica, la iglesia, la colonia popular, la comunidad campesina o la universidad- se convirtieran en espacios donde los militantes de las organizaciones político-militares -siempre en búsqueda de ampliar la influencia de su organización- intentaron reclutar a los activistas que se destacaron por ser los más participativos y arriesgados en las movilizaciones. La descripción de algunos de estos espacios en

los relatos de los militantes – la universidad, el sindicato y la comunidad campesina- permite dar cuenta de cómo se dio el encuentro entre apuestas individuales y el proyecto político revolucionario, así como las razones que llevaron a los individuos a optar por la militancia.

Militancia y universidad

Cómo se señaló en las secciones anteriores, la universidad fue un espacio importante para el surgimiento y la radicalización del movimiento revolucionario salvadoreño. Esto se refleja también en las entrevistas, donde los militantes urbanos mencionan recurrentemente el espacio universitario –específicamente la Universidad de El Salvador (UES) y la Universidad Centroamericana (UCA) de los Jesuitas- como un punto de partida para la politización individual y como un lugar de reunión para una generación de militantes urbanos, más allá del movimiento estudiantil. La universidad aparece de distintas formas en las narraciones: como un lugar donde se formaron las disposiciones ideológicas para aceptar la lucha armada como camino viable para transformar la realidad social y donde era posible, a través de los colectivos estudiantiles, familiarizarse con prácticas de protesta y las formas de organización del activismo de izquierda:

Quando yo me inicié aprendíamos en los movimientos estudiantiles revolucionarios... en esos movimientos nosotros nos reunimos dentro de la facultad para poder planear cómo era que nosotros íbamos a incorporarnos a las diferentes luchas que en esos momentos estaban surgiendo, como que ya estaba pero que nosotros como éramos nuevos, o éramos jóvenes teníamos que incorporarnos de alguna manera [...]

¿Entonces, a ti te hablaron o tú te fuiste incorporando al movimiento por tu propia inquietud?

Primero fue mi inquietud... yo buscaba a los líderes estudiantiles para poder hablar acerca del momento, digamos de lo que estaba sucediendo en el país, porque todos los catedráticos a uno le hablan de alguna manera, de concientizarlo ¿verdad? entonces yo buscaba a los dirigentes y dirigentas estudiantiles... Fíjate que, para poder saber que cómo podíamos incorporarnos a los diferentes movimientos ¿verdad? y así fue como me fueron induciendo, entonces a mí me decían “mirá, tu facultad corresponde a la dirigente o dirigente de la facultad es tal, fulano”, entonces, me ponían en contacto con esa persona y así era como íbamos avanzando en la organización, entonces yo formé parte de la carrera, fui representante de la carrera... y poco a poco pues íbamos adentrándonos más al proceso más delicado, era donde ya había toda una escuela de formación en donde a uno se le iba dando tareas... y vamos cumpliendo tareas, y dependiendo cómo las íbamos cumpliendo así se nos iban dando tareas más delicadas -¿cómo cuáles?- nosotros teníamos la tarea de ir a organizar otro grupo de estudiantes... eran las menos delicadas, las más delicadas podían ser que, nos dejaban tarea de hacer algunas investigaciones de inteligencia en los cuales vos llevabas una gran responsabilidad porque de nosotros dependía hasta la vida de los demás compañeros [...] llevándoles municiones o llevándoles alimentación, dinero, hacíamos algunas actividades para poder recaudar fondos y llevarlos, entre otras ¿verdad? pero también hubo actividades militares... (Daniela, sindicalista del magisterio)

La universidad era también un espacio relativamente seguro de reunión de las organizaciones

clandestinas para incorporar a nuevos miembros y planear la intervención en organizaciones populares. Sin embargo, esto cambió con el ascenso del terrorismo del Estado, como lo ejemplifica el relato de Maria:

¿Me hablaste muy general sobre tu ingreso a la organización, te acuerdas de la situación cómo fue que te invitaron a participar?

Mirá, yo le pregunté a un amigo que yo admiraba mucho que era mi profesor en la universidad que según su análisis –porque era mucho mayor que yo- qué organización le parecía más inteligente, entonces él me decía que la Resistencia Nacional; sin embargo, él no tenía –o por lo menos nunca me lo dijo que tuviera nexos, luego yo anduve con un amigo de él y él si tenía nexos con gente de la Resistencia Nacional, entonces a él le dije: “Yo quiero militar, entonces no sé si me presentás a alguien”. Entonces me dijo: "bueno, creo que tenemos una reunión un día de estos y te voy a llevar y te voy a presentar." Entonces, él me llevó a esa reunión que era superclandestina porque... yo ya luego me enteré que mucha de la gente que estaba allí era de la alta dirigencia de la Resistencia, y entonces allí fue donde una de las cuatas me dijo: "ah pues, este" –como ella también estaba en mi facultad- me dijo: "nos vamos a estar viendo allí, nos vamos a... nos vamos a estar reuniendo y yo te voy a invitar a alguna reuniones que tenemos con algunos alumnos de la universidad y vamos a iniciar un trabajo con maestros" que fue lo que te dije al principio, pero ella, apenas habíamos iniciado, quizás habíamos tenido cuatro meses de estar en contacto y en reuniones y eso cuando a ella la ... la llevan [voz baja] los escuadrones de muerte y la matan, entonces pues, toda la gente que estaba alrededor de ella, porque ella era de las que dirigían ese núcleo de la universidad pues, quedaron... todo el mundo asustados, unos se fueron, otros no volvieron, otros qué sé yo, y todo eso se deshizo, se desestructuró todo...

Una gran parte de los fundadores de los grupos guerrilleros habían estudiado en la UES, o habían impartido clases. Pese a las frecuentes interrupciones del ciclo escolar por las ocupaciones militares, desde 1970, la universidad nacional no perdió su relevancia como espacio primordial para iniciar la participación política, y –desde la perspectiva de los grupos guerrilleros- detectar activistas participativos y arriesgados que valía la pena reclutar a las filas guerrilleras. Esto era posible porque, pese a los intentos gubernamentales por reglamentar la participación política en la universidad para bajar el nivel de activismo estudiantil, las autoridades universitarias no reprimieron a los grupos estudiantiles. Esto se debe, posiblemente, a que en los distintos sectores de la universidad –desde las autoridades universitarias, hasta los trabajadores administrativos y docentes y, por supuesto, los estudiantes- había lazos con el movimiento guerrillero.²⁷⁰ Como mencionan María y Daniela, había profesores que introducían los debates políticos en sus cursos y parece que muchas veces estos docentes fueron los primeros interlocutores para estudiantes con

²⁷⁰ Por ejemplo, los rectores de la UES Fabio Castillo –enviado al exilio por el gobierno de Molina- y Rafael Menjívar Larín fueron simpatizantes de los grupos guerrilleros. De acuerdo al análisis nada benévolo de Yvon Grenier, el marco institucional de la UES, dominado por grupos políticos y corporativos en permanente disputa, permitió que la universidad se convirtió en un caldo de cultivo para la izquierda radical. La mayoría de los principales comandantes del FMLN iniciaron su carrera política como activistas en la UES. Véase, Y. Grenier, *op.cit.*, 1999, pp. 97-128.

“inquietudes políticas”.

La UES fue uno de los espacios primordiales donde se expresaba la cultura contrahegemónica de la izquierda, en la cual participaban tanto estudiantes como docentes. Así como las federaciones sindicales, también las asociaciones estudiantiles –especialmente AGEUS- fueron objetos de disputa entre los frentes de masas.²⁷¹ Por esto, cuando había elecciones estudiantiles, en los debates sobre política universitaria, ideología y coyuntura política se confrontaban las tendencias. Las instituciones de participación estudiantil –por ejemplo, el representante de carrera o de salón- permitían a los estudiantes adquirir habilidades de organizador(a) y vocero(a) de un grupo, que servían para desempeñarse como activista en otros ámbitos de trabajo político. Durante el auge de la movilización popular después de 1975, allí se realizaron las asambleas de los frentes de masas y la “lucha por la hegemonía” entre los grupos radicales a través de charlas abiertas, enfrentamientos verbales, carteles o volantes. También tuvieron lugar algunas de las reuniones de formación política donde se encontraban sindicalistas, estudiantes, académicos y profesionales.

La universidad, de acuerdo a los relatos de los militantes, adquirió relevancia como un cruce que permitía transferir –a través de la organización política- experiencias organizativas y conocimientos prácticos del activismo estudiantil a otros espacios como la colonia popular, la comunidad campesina o el ámbito laboral. Sobre todo el sindicalismo de la administración pública, que emergió como actor político a partir de 1978 y 1979, parece haber sido influenciado por el activismo estudiantil, por medio de empleados de los ministerios que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo. Ellos introdujeron los discursos ideológicos de la izquierda radical a un ambiente caracterizado por un activismo gremial incipiente que acostumbraba centrarse en demandas particulares de los empleados. El siguiente relato proviene de la entrevista con Celso, un empleado público que estudiaba en la Universidad Nacional. Según este sindicalista, su interés por la organización gremial “nació” a partir de sus contactos con colectivos estudiantiles primero en el colegio y, después, en la universidad:

Cuéntame un poco más cómo fueron esos primeros años de activismo sindical...

Nos reuníamos en las oficinas del Ministerio para poder discutir algún problemita de algún trabajador y entonces íbamos un grupo junto a solucionar el problema. Yo trabajaba entonces en la Biblioteca Nacional, es como una dependencia del Ministerio de Educación, yo solucionaba aquí problemas laborales, de los trabajadores, más que todo de descuentos, de problemitas, sanciones [...] pero llegó un momento, ya la lucha popular iba creciendo y en 1979... el sindicato viene de dos lugares, hasta podríamos decir tres... en ese entonces se

²⁷¹ AGEUS (Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños) ha sido una de las asociaciones estudiantiles más reconocidas que, supuestamente, fue fundada por Farabundo Martí.

llamaba Dirección de Servicios Técnicos Pedagógicos... ahí había un grupo de compañeros ¿verdad? que eran los que se responsabilizaban de hacer los programas de estudios... y ese equipo de compañeros estaban haciendo su propio movimiento, pero también había otro grupo de compañeros en los talleres en donde reparaban los vehículos del Ministerio, ahí nace también otro grupo... y nosotros estamos en la Biblioteca Nacional. Después nos juntamos todos y a tirar panfletos, que venían más que todo de los compañeros que estaban en los talleres, [ellos] estaban cerca de ANDES 21 de Julio... y los de ANDES tiran panfletos, entonces nosotros empezamos a reagruparnos, pero también había otro grupo que su relación la tenía con el Departamento de la Universidad, que eran todos los técnicos pedagógicos... entonces nosotros nos reunimos y decidimos formar el sindicato... [*Celso explica que su activismo se desarrolló más en el ámbito sindical que en el colegio...*] Cuando viene el gremio, ya había gente comprometida con la Resistencia Nacional y con las Fuerzas Populares de Liberación... entonces él que a mí se acercaba es de las FPL pero quizás era muy temeroso que nunca me decía nada ¿verdad? no me decía “mira, involúcrate”, mientras que los otros, sí, también se acercaban, entonces, como teníamos la ventaja que nos mirábamos en la universidad y nos veníamos platicando de los movimientos políticos... ahí el problema es que el compañero de las FPL [*en el lugar del trabajo*] cuando me dice, ya me llama para lucha armada ¿verdad? y entonces eso me afligió porque no había ninguna formación política, no había tenido experiencia gremial, ni las huelgas, ni nada de eso, entonces, yo me fui de espaldas... Mientras los otros compañeros [*de Resistencia Nacional*] me daban más formación política, me llevaron a charlas en la UCA y en la universidad... Los compañeros de la Resistencia tenían un poco más de conocimiento del marxismo, por lo menos los que estaban en el Ministerio de Educación, trabajaban como técnicos, en servicios técnicos pedagógicos, o sea eran los que hacían los programas de estudios... -y los de las FPL trabajaban en los talleres, eran como mecánicos, como motoristas- entonces como que ellos [*Resistencia Nacional*] tenían más relación con la teoría ¿verdad? te explicaban más, yo los sentía más serios como que sabían lo que querían... entonces me fui desligando poco a poco de los compañeros de las FPL...

El relato de Celso ejemplifica que los reagrupamientos de organizaciones sindicales en esta coyuntura fueron efectos prácticos de la lucha por la hegemonía entre grupos político-militares. Las redes radicales complementaron, reforzaron e incluso crearon estructuras gremiales. Pero de esta manera también fueron importadas las diferencias y rivalidades ideológicas que incidieron en los procesos de fundación de varios gremios, como en el de los empleados del Ministerio de Educación. En este caso, el grupo sindical de 1979 no se consolidó por las diferencias ideológicas entre los activistas de Resistencia Nacional y de las FPL sobre los procedimientos para formar una asociación única. Fue más bien, la represión estatal después de la ofensiva de 1981, que desarticuló las redes de oposición y dejó solamente algunos sobrevivientes de Resistencia Nacional para reagrupar el gremio de empleados del Ministerio de Educación.

Además de ser un punto de partida para la militancia, la universidad se convirtió también en un espacio de reunión y un refugio de los militantes radicales en el periodo de represión. Después de la ofensiva de 1981 y el despliegue del movimiento popular en las ciudades, las instalaciones de la UCA

-y después de 1984 nuevamente la Universidad Nacional- se volvieron en un refugio para esperar el cese de violencia y reagruparse como organización. “Camuflados” como grupos de estudiantes preparándose para sus exámenes, los activistas se reunían regularmente para evaluar la coyuntura política, mantener un nivel de organización mínima y esperar la reanudación del contacto con la dirección de la estructura político-militar que a partir de 1981 se encontraba en “el monte”.

“En busca de mejores horizontes...”: Militancia y sindicalismo

Mientras la universidad aparece en los relatos como un espacio de reunión política y de refugio, los relatos de los y las sindicalistas urbanas sobre su activismo, revela la estrecha vinculación entre la frustración de la aspiración por un ascenso social individual o familiar, por medio de la educación y el acceso a un empleo mejor pagado, y la movilización política. El caso de Ana es emblemático en este sentido: para ella, la emigración a la capital en 1970, a los 16 años, significó buscar “mejores horizontes”, es decir, un desplazamiento social concretado en el “sueño” de ingresar a la Universidad. Las palabras que ella usa para referirse a este proyecto –“mejores horizontes”, “sueño”- apuntan a que esta opción era percibida dentro del margen de lo socialmente posible, era algo imaginable y “soñable”. Posiblemente esto se debe a un contexto social en el cual la expansión de la Universidad de El Salvador en los años sesenta y la presión del movimiento estudiantil por el principio de las “puertas abiertas” –es decir el levantamiento de las restricciones al ingreso- colocó, para algunos segmentos urbanizados de las clases populares, la meta de la educación superior dentro de las opciones socialmente posible.²⁷²

Pero en términos de realización individual de esta apuesta educativa, como mujer de origen campesino y recientemente inmigrada a la capital, había que superar muchas barreras e invertir demasiado tiempo y energía para concretar este sueño. Ana explica retrospectivamente la serie de obstáculos en el camino a la universidad de la siguiente manera: en su cantón de origen ella sólo había podido terminar la primaria lo cual no le permitió encontrar otro tipo de trabajo en la ciudad que el de empleada doméstica. Aunque este empleo le dio la posibilidad de cursar la secundaria y un bachillerato técnico, -recibiéndose de “auxiliar de secretaria”- nunca pudo ejercer esta profesión de “cuello blanco” porque, señala ella, no había empleo para una persona que todavía tenía rasgos campesinos”.

La constitución de una familia y el nacimiento de la primera hija en 1975 la obligaron a buscar un

²⁷² Véase, Yvon Grenier, *The Emergence of Insurgency in El Salvador. Ideology y Political Will*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1999, especialmente pp. 105-128.

trabajo mejor remunerado que el de empleada doméstica. Sandra tenía que sostener la familia con su ingreso porque su pareja –un estudiante universitario- no trabajaba. Ingresar al trabajo formal como obrera textil, en una empresa con unas 50 trabajadoras, significó el final de la trayectoria educativa formal, pero también marcó el inicio de su participación sindical, la cual sirvió –insiste Ana- como un mecanismo para educarse en temas relacionados con derechos laborales, derechos humanos y la problemática de la mujer trabajadora.

¿Qué significaba el ingreso a una fábrica, como obrera no cualificada, en El Salvador a mediados de los años setenta? Obviamente, esperarse un ingreso fijo y algunas de las prestaciones, que establecía el Código Laboral.²⁷³ Pero al mismo tiempo significaba experimentar en carne propia los “abusos” de gerentes y supervisores. Ana menciona algunos: descuentos arbitrarios del salario, despidos injustificados, la obligación de trabajar horas extras sin pago adicional y las maniobras de un “sindicato patronal” que mediatizaba el descontento de las obreras. El relato que se presenta a continuación da cuenta de las razones por las cuales las activistas de FENASTRAS encontraron un sueldo fértil en el sector textil para formar sus núcleos sindicales y permite destacar algunas de las prácticas del sindicalismo contestatario para ampliar su influencia: tomar la iniciativa para entrar en una empresa determinada, organizar núcleos sindicales y movilizar las estructuras de la federación para respaldar a una lucha sindical local. El relato introduce también una de las prácticas de protesta generalizada de los años setenta –la toma de fábrica como un acto para presionar y para *hacer visible el grupo* de los trabajadores sindicalizados:

... En 1976, más o menos, empezó un movimiento sindical en esa empresa porque en primer lugar no nos pagaban horas extras, si llegabas tarde te cortaban el séptimo día, teníamos que quedarnos trabajando después de la jornada laboral, aquí son ocho horas, teníamos que quedarnos trabajando después de ese tiempo; si cumplía años el jefe, el gerente de la empresa, había que colaborar entre comillas, porque era obligatorio para comprarle un regalo al jefe, yo recuerdo que el primer año que entré, en el 75, el gerente cumplió años, yo entré ganando 28 colones en la semana y [era] mi primera semana de pago, y me descontaron, me parece que como 5 colones; sentí la carga pues, cinco colones de tu salario semanal de 28, sólo me dieron 23 colones, eso no se me olvida, y luego a raíz de todas esas cosas se empezó a gestar el primer movimiento para formar el sindicato en la empresa, y se formó. En ese tiempo aquí prevalecían mucho los sindicatos de corte patronal, igual pues no, no velaban por los derechos laborales de los trabajadores sino que medio atizaban la lucha de los sindicatos... Tras eso y al haber comprendido esa situación en el 76, se formó otro movimiento ¿verdad?, para conformar otro sindicato... estas compañeras que empezaron a formar ese movimiento estaban siendo dirigidas por gente de FENASTRAS... En, en ese mismo año, en el 76, se conformó la Junta Directiva con alrededor de unas 20 compañeras, ya estaba inscrita yo, ya habían platicado conmigo -y temerosa porque la

²⁷³ En 1963 entró en vigencia la Ley de Trabajo que garantizaba, al menos formalmente, el derecho a un contrato colectivo y la libertad sindical. Sin embargo, como ya se señaló, había una serie de trabas para realizar huelgas.

situación no era tan bonita-, pues se conformó la Junta Directiva... Pero como también el Estado estaba en complicidad con las patronales y los sindicatos de corte patronal, cuando llega la documentación al Ministerio, inmediatamente el Ministerio llama a la patronal... y empezaron a despedir gente, despidieron sólo a la Junta Directiva, porque eran las que aparecían en el estado que había sido presentado ante el Ministerio, nos quedamos las demás trabajadoras de la empresa, bajo la presión de la investigación y toda la cosa; pero luego en FENASTRAS empiezan a buscar formas cómo hacer prevalecer el derecho a la sindicalización y en ese momento, en ese entonces... *la única forma era la presión...* y planificaron una toma de la empresa y se dio... no podemos decir que fue violenta pero fue una toma ¿verdad?, de las instalaciones, que duró, me parece duró 24 horas, día y noche, hasta que se negoció que la empresa aceptara la conformación del nuevo sindicato. A partir de ahí salimos, venimos luchando como, como afiliadas, te estoy hablando de septiembre del 76, de esa primera huelga... todas se habían afiliado. En el segundo año ingresé ya a la Junta Directiva del sindicato de empresa y así estuve colaborando. Luego, FENASTRAS nos daba capacitaciones sindicales sobre derechos laborales...²⁷⁴

Conviene reiterar que en 1976 FENASTRAS ya estaba identificada como una federación sindical de izquierda e integrante del frente de masas FAPU. Es decir, las personas que se involucraban con esta federación sabían que se trataba de una organización anti-gubernamental y politizada. Según Ana, aunque después del paro exitoso todas las trabajadoras se afiliaron al sindicato, no todas las trabajadoras colaboraban activamente con la Junta Directiva Sindical o FENASTRAS, ni se convirtieron en militantes políticas. En el caso de Ana, el ingreso a la militancia en Resistencia Nacional fue preparado por pasos previos: ingresar a la Junta Directiva del sindicato de empresa en 1977, asistir a las capacitaciones para líderes sindicales de FENASTRAS y participar en su Comité Femenino. En 1979, por medio de la invitación a círculos de formación política, ella fue reclutada a las estructuras civiles de la organización político-militar.

Identificamos en el relato de Ana varios factores sociales que deben haber influido en la decisión individual: Un primer factor fue el contexto, marcado por la movilización social y la polarización política, donde la ola de violencia cerraba paulatinamente todas las opciones no violentas de expresión política. Esto se puede ver, por ejemplo, en la suerte que corrieron los sectores progresistas de la iglesia católica, quienes abrieron espacios para que las organizaciones populares pudieran denunciar las violaciones a los derechos de organización y expresión, los secuestros y asesinatos de sus miembros:

Monseñor Romero, aquí hizo labor de concientización, de abrirle los ojos a la gente, no llamando a ser parte de ninguna de las organizaciones del FMLN, sino dejando claro, clarificándole a la gente el significado del respeto de los derechos humanos [...] miles y miles de gente escuchando su mensaje que por momentos se volvía un mensaje de denuncia... la gente acudía a él a poner quejas y hubo un momento en la homilía en que la Catedral se convirtió en un, decimos aquí, lugar de denuncia, Monseñor hablaba por los que no podían

²⁷⁴ Las cursivas son más.

hablar [...] Por ejemplo, los sindicatos teníamos la posibilidad de llegar con una carta a Monseñor y pedirle que nos denunciara tal y cual violación que se estaba dando en una empresa y él lo hacía... al final lo hacía después de la homilía y lo hacía en una conferencia que acostumbraba dar siempre al final de la misa... Pero bueno, muerto Monseñor se termina esa práctica y de alguna forma, la comunidad católica nos sentimos desprotegidos...

La politización de espacios como la iglesia, la universidad o los colegios de bachillerato exponían a una gran cantidad de personas a los mensajes políticos y de denuncia de la oposición, así como a los efectos de la represión. La reacción violenta de la élite en contra de los que ellos concibieron como “curas rojos” –representada de manera emblemática en el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero por un escuadrón de la muerte en marzo de 1980- fue interpretada por los activistas como una muestra más de la inviabilidad de la oposición no violenta al régimen militar. El impacto del asesinato de Monseñor Romero como una de las experiencias cruciales de muchos activistas para radicalizar la propia participación se repite en varias de las entrevistas y se confirma también en otros estudios.²⁷⁵ ¿Podríamos interpretar el ingreso a la militancia en una organización político-militar como una búsqueda de opciones de participación y organización en una situación de extrema violencia y polarización política? Ana interpreta retrospectivamente su decisión en este sentido –la represión sólo dejaba la alternativa de involucrarse más, “tomar partido”; o salir del país-, es decir, si uno quería sobrevivir, siendo activista, había que asumir una lógica de acción basada en la dinámica de la polarización. Paradójicamente, participar bajo estas circunstancias en una organización sindical de alcance nacional como FENASTRAS podía significar un poco de protección. FENASTRAS tenía abogados, movilizaba sus bases a manifestaciones y mítines y realizaba paros de solidaridad, si activistas o dirigentes habían sido detenidos o secuestrados.

Sin embargo, consideramos que la participación en FENASTRAS correspondía no sólo a fines instrumentales, también significaba acceder a nuevos marcos explicativos sobre la situación del país. La narración de Ana indica que los talleres y comisiones sindicales de FENASTRAS fueron un mecanismo para acercar a activistas sindicales “inquietos” a la militancia política, seguidos, en algún momento, por la invitación a los “círculos de formación política”. En estos círculos los activistas sindicales se reunieron con un “responsable político”, generalmente un cuadro semi-clandestino de las estructuras político-militares, para realizar análisis de la coyuntura, elaborar demandas sectoriales para integrar plataformas más amplias de reivindicaciones políticas y sociales, y definir los aspectos logísticos de acciones de protesta o sabotaje acordadas en otros niveles de mando de la organización político-militar.

²⁷⁵ Véase, por ejemplo, E. Wood, *op.cit.*, 2003, p. 105; C.R. Cabarrús, *op.cit.*, 1983, pp. 316-317.

Después de terminar la formación escolar formal, los talleres sindicales sobre “derechos laborales, derechos sociales y temas de género” (Ana), prestaban la oportunidad de adquirir conocimientos relevantes para desempeñarse como representante de obreras. Por otra parte, los colectivos de estudio político proporcionaron a la militante claves de lectura e informaciones para entender la situación del país y visualizar las posibles vías para un cambio. De acuerdo a Ana, en los colectivos:

Fui aprendiendo otras cosas ¿verdad? A hacer análisis, a verme con ojos más de análisis, la situación no sólo para lamentarme ¿verdad? Como antes, que no leía que no conocía... los orígenes de muchas cosas, de la crisis económica por ejemplo... entonces así empecé a frecuentar otros grupos de estudio, ahí fue como me fui convenciendo cada día más de que si no había participación en el ámbito político de todos y todas las salvadoreñas, no íbamos a cambiar nunca el sistema estructural que en ese entonces se vivía.

El tema de los colectivos políticos como espacios privilegiados para obtener información política, y acceder a marcos cognitivos para interpretar la coyuntura del país, aparece en varias entrevistas y da una pista adicional para interpretar la atracción de las organizaciones político-militares entre los activistas que se acercaban a la política por medio de la participación en las organizaciones populares. Las organizaciones guerrilleras, por medio de lecturas, sesiones de formación político y las discusiones con el responsable político, comunicaban su visión del mundo, del conflicto que El Salvador estaba viviendo y sus propuestas sobre los cambios necesarios. Las explicaciones que daban sentido a lo que estaba pasando alrededor de uno, que identificaban causas y enemigos y prometían un cambio, también servían como una estrategia de objetivación para que el individuo aguantara la extrema conflictividad sociopolítica que tuvo lugar a partir de 1979.

Pero esta significación de la acción política no se dio de manera espontánea, sino a partir de marcos cognitivos propiciados por una contracultura urbana y rural de oposición, que se había conformada en los años anteriores y de la cual participaban militantes de los grupos guerrilleros, sectores del clero, estudiantes radicalizados y sindicalistas. Fue practicada y difundida por medio de manifestaciones, asambleas, ocupaciones de fábricas y otros actos de protesta y se expresó en las pintas en la pared, los carteles y volantes. En el marco de esta contracultura se explica por qué las prácticas de protesta de los frentes de masas, pese a su radicalidad, pudieron ejercer esta fuerte atracción sobre activistas de diferentes orígenes sociales, que desde la distancia temporal parece incomprensible.

No todos los activistas sindicales entrevistados pudieron aportar elementos sobre el funcionamiento interno de los frentes de masas. Esto indica no sólo la compartimentación de la información como una estrategia organizativa en respuesta a la represión sino también la centralización del mando. Sólo los máximos dirigentes de los frentes de masas, quienes a la vez

integraban los comités centrales de las organizaciones guerrilleras, participaban directamente en las discusiones sobre las estrategias políticas y el papel de las acciones de protesta con la acción militar. Este es el caso de Horacio, quien participó en la fundación del FAPU. Él y otros compañeros sindicales se acercaron a los grupos guerrilleros, ya siendo dirigentes sindicales reconocidos. Horacio es el ejemplo del trabajador cualificado que recibió su formación en las empresas paraestatales fundadas en los años cincuenta y sesenta para impulsar la modernización económica del país. Ingresó aproximadamente a los 14 años como “peón”, es decir trabajador auxiliar, a la empresa de recursos geotérmicos en el departamento Achupán. En la empresa se formó como “técnico”, paralelamente cursó el bachillerato nocturno y, en 1968, pidió su traslado a San Salvador para poder trabajar y estudiar una carrera académica. Pero esto ya no fue posible: en 1970 el gobierno militar cerró la Universidad y Héctor ya había formado una familia. Por otra parte había otras opciones de profesionalización, que la misma empresa ofreció con apoyo de agencias internacionales de desarrollo, y que permitieron ocupar una mejor posición ocupacional. Horacio se formó como químico y se integró al grupo que estaba buscando formar un sindicato.

Trasladarse a la capital en estos años significó entrar en contacto con la movilización política y la efervescencia sindical: 1967 fue el año de la huelga general de la federación comunista FUSS y de la fundación del sindicato de trabajadores del seguro social STISSS, en 1968 ANDES realizó su primera gran huelga para mejorar las condiciones laborales del magisterio. En este contexto de movilización sindical se insertaron también los esfuerzos de los trabajadores de la empresa CEL por formar su sindicato. Pero no pudieron obtener la personería jurídica hasta la coyuntura electoral de 1972: a través del padre de un trabajador contactaron al poderoso General Medrano para pedir su intervención en el proceso de legalización del sindicato. El general les concedió este apoyo a cambio del compromiso de los sindicalistas de apoyar su candidatura en las elecciones presidenciales y votar por su partido, el FUDI.²⁷⁶

Describimos en este capítulo con mucho detalle los reagrupamientos al interior del movimiento sindical, que convirtieron al sindicato STCEL en un actor estratégico dentro del sindicalismo anti-gubernamental y miembro clave del FAPU. Los relatos de Horacio sobre esta primera fase de movilización sindical dan cuenta de las iniciativas de los sindicalistas para conectarse con diversos

²⁷⁶ Frente Unificado Democrático Independiente: Este partido resultó de una escisión del partido militar PCN y en 1971 fue dirigido por el Coronel José Alberto Medrano, fundador también de la organización paramilitar ORDEN. Para las elecciones de 1972, el FUDI postuló a Medrano como candidato a la presidencia y a Raúl Salaverría, miembro de una familia de grandes propietarios agrícolas, como candidato a la vicepresidencia. Véase, S. Gordon, *op.cit.*, 1989, pp. 128-129.

agentes políticos –generales, dirigentes del partido comunista, militantes de las organizaciones político-militares-, con el propósito de consolidar la organización sindical y resolver, por medio de contactos y aliados políticos, el problema de la falta de reconocimiento institucional del gremio ante la gerencia de la paraestatal. La fundación del sindicato de la empresa CEL da cuenta que el acercamiento a las organizaciones guerrilleras formaba parte de una estrategia gremial para obtener el reconocimiento institucional de la organización sindical. En función de este propósito los sindicalistas combinaron acciones legales –el procedimiento formal ante el Ministerio de Trabajo para obtener la personalidad jurídica- con el cabildeo clientelar –solicitando la intervención del General Medrano para que se legalice el sindicato a cambio del voto corporativo a favor del FUDI- y con acciones extra-parlamentarias, como paros, mítines y marchas. En esta dimensión de las prácticas orientadas a la acción directa estaba el punto de encuentro con los militantes de las organizaciones político-militares.

El siguiente relato revela que así como los grupos guerrilleros buscaban insertarse al movimiento sindical, los dirigentes sindicales tenían sus propias razones –entre ellos liberarse del corporativismo gubernamental- por construir este vínculo, por lo cual ellos escogieron entre distintas opciones políticas. Acontecimientos como las huelgas de 1967 y 1968 y el fraude electoral de 1972 contribuyeron a la radicalización política y la ampliación de las redes sociales de oposición. Por esto a mediados de los años setenta, tanto el dirigente comunista Schafik Handal, representando la opción reformista, como las organizaciones guerrilleras ERP o FPL eran puntos de referencia en el entorno de activistas sindicales, más allá de sus colaboradores directos y simpatizantes.

¿Cómo fue que te involucraste con el partido y el FAPU?

Mira... el FAPU... fue 70, 75 más o menos... -74 quizá por ahí- fue una cuestión que ya estábamos en el movimiento sindical en el 72... En las elecciones que creo que ganó la UNO ¿verdad? Pues nosotros nacemos y tenemos inquietudes, incluso le pedimos una entrevista a Schafik [Handal] que andaba clandestino y nos fuimos a dar una vuelta, de cómo [él] miraba la cosa, como qué podíamos hacer... y había inquietudes ¿verdad? porque él era como la figura visible ¿verdad? en ese tiempo... y ya nos involucramos en ciertas actividades que fueron así como de sabotaje a la energía pero que no dio resultado. Pues, en la búsqueda de esas cosas que uno veía de la situación de injusticia, como que... el sistema bonancible para otros y para la pobreza igual ¿verdad? En esa búsqueda política no había más que el Partido Comunista, su organización sindical era fuerte y de hecho la FUSS en el 68, 69 por ahí fue que organizó el paro nacional donde yo digo que es la mayor acción que ha habido político-sindical y que se logró desarrollar, yo digo es la máxima expresión solidaria de un partido sindical de trabajadores que confluyeron todas las fuerzas. Eso marca, digamos una fase de la historia de El Salvador... el haber andado con todas esas marchas, congresos... nos garrotearon una vez en el palacio... la huelga de los maestros... Por ahí andaban las cosas si mal no recuerdo... Después hablando con algunos amigos del ERP... pero sus

planteamientos me parecían muy militares ¿verdad? No tenía problemas porque venía de un ambiente de manejar armas pero como planteamiento político no me convenció... Y luego nos juntamos con algunos amigos del FAPU, estudiantes universitarios y ahí empezamos. Empezó la militancia y la definición misma de cómo estructurar las células y cómo estudiar, cómo prepararte, porque nosotros no creas que mirábamos sólo política... nosotros íbamos a cursos y a charlas unas veces específicas, otras de oyentes, a conocer todo sobre derecho en la Universidad. Estábamos profesores y todos allí y asistíamos a las aulas y al auditorio, de cómo combinar la lucha política, legal ¿verdad? la parlamentaria con la extra-parlamentaria... Sí, siempre cómo van muy de la mano... de llevar adelante la fuerza de tu gremio y la razón.

¿Entonces ustedes eran unos líderes muy bien preparados?

Mira, había mucho análisis, el secreto es realmente de liderazgo, es que nosotros estuvimos integrados a estructuras profesionales tanto economistas, abogados y todos éramos parte de una estructura, en donde tu pensamiento siempre se iba enriqueciendo con el conocimiento político o el conocimiento del derecho, de las leyes y estrategias militares... Entonces [risas] que era una formación mucho más integral... es posible que la tuvieran otras estructuras de otras organizaciones pero, en el caso nuestro fue esa clase digamos de formación... Y nada, casi nada al azar ¿verdad? sino un análisis más, más profundo que era mucho la dialéctica ¿verdad? y al final que esa generación de cuadros fue la que nació y preparó digamos que se preparó para enfrentar la década de la lucha militar ¿verdad?

Esta cita ilustra, por una parte, como la acción directa se fue integrando al repertorio de la protesta sindical para dar más énfasis a la presión sindical por el reconocimiento de los derechos de organización y, por otra parte, como una capa de líderes sindicales participó desde 1970/75 en los preparativos para insertar la vía armada y la finalidad insurreccional en el repertorio de protesta Muestra –confirmando el relato de Ana– que la estrategia de los grupos guerrilleros de crear grupos de estudio para obtener la hegemonía de su organización en el movimiento popular produjo espacios que “neutralizaron” –temporalmente al menos– la distancia social entre agentes de diversos orígenes sociales. Al reunir estudiantes universitarios, profesionales, académicos y dirigentes del movimiento popular, los militantes políticos crearon un mecanismo exitoso para integrar sus planteamientos sobre la revolución a través de la lucha militar en el discurso político de un sector mucho más amplio de la población organizada.

¿Qué significaba, entonces, para los sindicalistas vincularse con las organizaciones político-militares? Los relatos presentados en esta sección sobre la integración a las estructuras político-militares dan algunas pistas para responder a esta pregunta. Por una parte, después del fraude electoral de 1972, la relación con las organizaciones guerrilleras permitió a los sindicalistas diversificar su repertorio de protesta y dar más peso a los métodos de acción directa –por ejemplo, paros, sabotajes o tomas– en las luchas laborales (como ilustra el relato de Ana). Esto sirvió para no depender tanto de las vías institucionales de negociación gremial –lo cual implicaba aceptar las

reglas del juego corporativo- y para enfrentarse a la creciente violencia estatal. Por otra parte, los militantes guerrilleros, envueltos en la disputa por imponer, a través del argumento ideológico o la fuerza, la hegemonía de su organización buscaban aglutinar el mayor número posible de organizaciones populares a sus respectivos frentes de masas reclutando tanto a los máximos dirigentes de estas organizaciones, como a activistas que se destacaron por el grado de compromiso y por “aventarse” en las movilizaciones y enfrentamientos con los cuerpos uniformados. Pero estos dos factores explican principalmente la dimensión racional de la acción. Para entender la atracción de las organizaciones revolucionarias sobre los activistas sindicales, también hay que tomar en cuenta la convicción sobre la posibilidad e inmediatez de la toma de poder, que se profundizó a lo largo de 1979 con las concesiones que el gobierno militar hacía a los frentes de masas y la victoria de la revolución sandinista en julio de este año. Ejemplos de este ambiente de época eran los actos de solidaridad con fábricas tomadas por los trabajadores y amenazados por la represión, y los paros del sindicato de electricistas de 1979 y 1980 (los “apagones”):

Nosotros como sindicato hacemos un apagón en el 79, el primer apagón que fue cuando tenían agobiados a los trabajadores y miembros del Bloque Popular en Bebidas y Gaseosas ¿verdad?, ahí estaba, el acto de Constanca de la Tropical, de la Coca y fue la negociación donde a ellos les habían puesto tanque ¿no? La represión²⁷⁷ ... [...] Para poder tener oportunidad de negociar algo, y ahí negociamos que les dieran la personalidad jurídica, o que les aprobaran la federación a ellos, que se llamaba Federación Sindical Revolucionaria... No se la aprobaron indiscutiblemente... se llamaba revolucionario... Sin embargo hubo concesiones, se las dieron y luego se armó lo que nosotros teníamos que negociar y termina... pues de esa fase que fue a fin de año por ahí un poco, fue noviembre, y el siguiente apagón que fue en el 80, en agosto... en el 80 y ese sí fue de 24 horas en todo el país, eso fue lo que marcó ya después definitivamente que la lucha política no era sostenible, o sea para mí es el quiebre... el quiebre de que ya no era posible pelar sólo políticamente... (Horacio)

Estos factores crearon una dinámica propia que permitió la convergencia de organizaciones sindicales, populares e estudiantiles, vinculadas a las diferentes organizaciones político-militares: primero, por medio de acciones de solidaridad y después convocando a la Coordinadora Revolucionaria de Masas que unía, por primera vez, a las direcciones de los cinco frentes de masas.

“Nos daba más fuerza, cuando se miraba que habían asesinado a gente injustamente”:

La militancia en el campo

A diferencia de los relatos sobre la militancia urbana en los años setenta, donde la incorporación a una organización político-militar es narrada en términos de decisiones individuales, de las cuales la

²⁷⁷ En marzo de 1979, el ejército montó un cerco militar alrededor de las instalaciones de la Cervecería La Constanca y la embotelladora La Tropical, tomadas por los trabajadores en huelga. Después de varios días, los militares tuvieron que dejar salir a los trabajadores. Véase, *Combate Popular*, Periódico del Bloque Popular Revolucionario, No. 17, 1era Quincena de Enero de 1980.

familia (con pocas excepciones que involucraban a la pareja) no estaba enterada, el involucramiento a la militancia en las zonas rurales parece haber sido un proceso mediado por redes familiares en las comunidades y las parroquias. Esta situación se refleja en el estudio de Cabarrús sobre el surgimiento de FECCAS en Aguilares, en el cual señala las redes de parentesco y la articulación de enemistades familiares con las diferencias políticas de FECCAS y la organización paramilitar ORDEN, como factores que permitieron que la polarización política en el campo llevara, en ciertas zonas, a hegemonías territoriales de las organizaciones.²⁷⁸

Los actos de protesta campesina se centraron en menor grado en tomas de tierra -muy arriesgado debido a la presencia de la Guardia Nacional y los grupos paramilitares- sino en marchas a centros municipales o la capital, así como tomas de iglesias y otros edificios públicos. Por este medio, lograban hacer visible el sujeto colectivo, sacar el conflicto político de los caseríos y comunidades e identificar potenciales activistas. Esta lógica aparece en el relato de Adriana. Ella fue la esposa de un líder del Movimiento Revolucionario Campesino (MRC) en Suchitoto que destacó por su participación en los diversos actos de protesta, por lo cual fue reclutada, en 1977, a las estructuras de Resistencia Nacional.

Adriana describe dos estructuras organizativas: la del MRC, una organización campesina contestataria, y la estructura militar de Resistencia Nacional. Ella no recuerda el momento preciso que marca el inicio de su activismo social y político, sino solamente un proceso de involucramiento progresivo con el movimiento que pasaba por varios niveles, desde la participación en marchas y tomas de iglesias, a la invitación a reuniones clandestinas y la realización de tareas de mensajera para comunicar distintos núcleos clandestinos o reclutar nuevos miembros a la organización. Estas tareas servían al mismo tiempo como “pruebas” para adentrarse cada vez más al círculo cerrado y clandestino de la organización político-militar, comprobando el compromiso político ante los responsables políticos, que eran militantes con más responsabilidad política y entrenamiento militar quienes encomendaban las tareas y “probaban” a los colaboradores y simpatizantes. Las estructuras clandestinas aparecen en el relato de Adriana en dos formas: “ellos” -un plural indefinido sin nombres- y el responsable político -igual sin nombre- que transmite las tareas:

²⁷⁸ Desgraciadamente Cabarrús, al partir de un marco explicativo marxista muy tradicional, no prestó mucha atención a la articulación entre los conflictos entre redes familiares y los conflictos políticos para entender las dinámicas de la acción colectiva en el campo salvadoreño. Según su planteamiento, los conflictos entre redes de parentesco en las áreas rurales tienden a encubrir la verdadera fuente de poder y de conflicto en el campo – la tierra- y adscriben al conflicto de clases una lógica de discriminación basada en el parentesco y no en la lucha por el control sobre la tierra. Véase, C. R. Cabarrús, *op.cit.*, 1983, pp. 367-372.

¿Te acuerdas del momento en que te incorporaste o cómo la organización te ganó?

Bueno, yo recuerdo de que yo había tenido quizás este, alguna participación así en la comunidad, de participar en algunas actividades y quizás eso era lo que motivó a quienes me empezaron a decir, me empezaron a invitar; la realidad es de que muchos, yo creo, que nos empezamos a meter a la organización pero, quizás, no estábamos como bien claro, quizás, decíamos esto va a ser, *yo hago esto y luego ya*, pero la verdad es que cuando uno se empezó a meter en la organización, cada vez no podía salirse uno, tenía, podía, meter más y más, pues involucrarse más en las cosas porque uno se concientizaba y sentía que era necesario hacerlo, o porque uno se empezaba a dar cuenta de cosas que después, si se salía, pues podían creer que uno iba a divulgar lo que uno sabía, entonces, ya metido, cada vez se metía más...

Y ahí en la comunidad ¿participaban todos o la mayoría o...?

Bueno, mi comunidad, fue una comunidad en la cual participó, participaba todo el mundo, quizás habían como tres familias que no participaban, no porque no estuvieran de acuerdo con el movimiento sino por, considero yo, que más eran por temores a, a ser, que pudieran ser asesinados porque ya habíamos visto que mucha gente había sido asesinada de mi comunidad entonces, y eso era lo que a la gente quizá tenía, tenía el temor...

¿Me puedes contar más de las actividades, de las tareas que tuviste que realizar? Porque me hablaste de la participación, de movilización para marchas y de las actividades clandestinas... ¿no sé si me puedes hablar más sobre tus actividades clandestinas?

Mira, estas actividades tal vez se refieren más a que, por ejemplo, contactar a personas en un lugar, donde yo tenía que llevar algunas veces, quizás, eran de mensajes, otras veces eran actividades de, por ejemplo de llevar o traer mensajes, de recoger dinero, de aspectos logísticos... ¿verdad? O a veces eran actividades de reclutar gente... ¿verdad? Reclutar gente para traerla hacia el Frente [...] yo tenía a alguien, a quien yo conocía, con quien yo tenía que hacer esos contactos, entregar los mensajes, y nadie más tenía que saber ¿verdad?, con quien yo contactaba, y otras veces era organizar, apoyar la organización en las manifestaciones [...] otras veces era de irnos a tomarnos las iglesias ¿verdad? De meternos y tomar la iglesia y si había que hasta agarrar al padre, pues había que agarrarlo para que permitiera... porque a veces los padres se ponían en una actitud que no querían permitir, pues, de que se pudiera tomar la iglesia, entonces había que sacarlo a la fuerza, pues, para que él no estuviera adentro ¿verdad? Y hay cosas que había que hacerlas un poco, pero era un momento, pues, que mostró que había suficiente justificaciones para hacer las cosas...²⁷⁹

Lo que Adriana describe como su “concientización”, era el proceso de conversión de una activista social “inquietada” a una militante que comprobaba por medio de una serie de pruebas su compromiso con la comunidad virtuosa de la organización revolucionaria. Al describir su involucramiento paso a paso por medio de tareas y pruebas -de un “yo hago esto y luego ya” a otro- se entiende porque los activistas no preveían en un inicio todas las consecuencias que podría significar su participación y, también, como podía desencadenarse el proceso de radicalización y movilización política.

²⁷⁹ Las cursivas son más.

Cumpliendo con las tareas asignadas, Adriana aprendió las habilidades prácticas necesarias para manejarse en la clandestinidad, adquirió conocimientos básicos sobre la estructura de la organización, y también asumió los marcos interpretativos que ofrecía la organización para entender el enfrentamiento y la violencia.

Concientización significaba también reconocer y aceptar los costos políticos y personales que implicaría una eventual decisión de salirse de la organización, Durante la guerra, la sospecha de la guerrilla de ser un desertor o un informante de las Fuerzas Armadas podía implicar interrogatorios, la expulsión del área de operaciones guerrilleras pero también, en el peor de los casos, un juicio militar y el “ajusticiamiento” del supuesto (o real) informante. Al parecer, el proceso de aprendizaje y de pruebas se aplicaba más a los activistas de base, pero no necesariamente a los dirigentes de organizaciones populares reclutados para formar parte de la organización guerrillera. De acuerdo a Facundo Guardado (dirigente del FMLN hasta 2002), él fue reclutado por las FPL en 1979, siendo secretario general del Bloque Popular Revolucionario y dirigente de la UTC en Chalatenango. Rápidamente recibió responsabilidades internas en las FPL, sin tener que pasar por todo el proceso de formación política y discusión de la guerrilla.²⁸⁰

El relato de Adriana explica por qué la indignación por la violencia pudo convertirse en una de las razones principales para radicalizar la participación en vez de retirarse. En la entrevista ella establece la diferencia entre “los que no eran nada” porque no se metían en “nada” –es decir, la población no organizada- y los organizados. La violencia ejercida por los cuerpos uniformados y los paramilitares era indiscriminada, afectaba tanto a activistas como a personas que “no eran nada”. La apuesta de los activistas políticos de incrementar la movilización, involucrar a más gente en respuesta a la represión estatal, afirmando de esta manera la hegemonía sobre territorios y

²⁸⁰ Entrevista con Facundo Guardado, San Salvador, 23 de marzo de 2004. Si bien es posible que sus respuestas hayan sido influenciadas por su condición de disidente y crítico a la dirigencia actual del FMLN (dominada por exdirigentes de las FPL y del PC), por lo cual quiso enfatizar su distancia de los liderazgos guerrilleros, hay otros datos que hacen pensar que en el caso de líderes sociales, que habían comprobado su liderazgo y confiabilidad en el trabajo en las organizaciones de masas, el reclutamiento al núcleo guerrillero no pasó por el complejo proceso de pruebas, como en el caso de activistas comunes. Por ejemplo, Salvador Samayoa (Ministro de Educación de la primera junta cívico-militar de octubre 1979), anunció en una conferencia de prensa en enero de 1980 su paso a la clandestinidad y su incorporación a las FPL. En una entrevista con Marta Harnecker, realizada durante la guerra, Facundo Guardado también señaló que el Bloque formó a sus propios cuadros de dirección y activistas: “Las FPL orientaban la política de formación, sin embargo, esos cuadros no pasaban por una escuela del partido ni nada por el estilo. Es más, se trataba de una formación basada ante todo en la práctica y era sobre la base de lo que la gente tenía que hacer que se daba la orientación. [...] La gente se iba comprometiendo en la vida, en la conducción de huelgas, paros, tomas, y después buscábamos alimentar su formación político-ideológica para desarrollar su capacidad de conducir y de entender la dirección de un proceso.” M. Harnecker, *Con la mirada en alto. Historia de las FPL-Farabundo Martí a través de sus dirigentes*, San Salvador, UCA-Editores, 1993 [1989], p. 197.

organizaciones, contribuyó en el campo a la dinámica de polarización política entre comunidades y familias, de la cual la única forma de sustraerse era la huida al extranjero o a las ciudades. Parece que las redes de parentesco jugaron un papel importante en la mediación entre organización política y decisión individual de involucrarse con la guerrilla. Pero el relato de Adriana permite entrever una razón más a favor de la participación: la necesidad individual de vivir esta coyuntura violenta no como una víctima más –como “gente que al final quizás no se metía en nada, no era nada”- sino como sujeto con voluntad y capacidad de decisión. Sin duda, esta motivación subjetiva fue posible gracias a las estrategias de movilización y organización de los grupos guerrilleros y el involucramiento, paso a paso, a partir de la participación en luchas reivindicativas, la familiarización con la organización clandestina y el entorno familiar, en el caso de Adriana expresado en la militancia política de su pareja. Pero todos estos factores sociales y coyunturales no pueden borrar completamente la dimensión individual y subjetiva de la decisión.

La dimensión subjetiva de la decisión a volverse militante aparece también en el relato de Miguel, dirigente nacional del sector cooperativo. Nacido en 1943 en Usulután, él trabajaba en los talleres de una de las haciendas algodoneras de la familia Dueñas, como mecánico de las avionetas, que se usaban en los cultivos de algodón para diseminar las pesticidas. Como muchos otros futuros activistas políticos adquirió las primeras experiencias organizativas en su comunidad. En su caso, formó una cooperativa de ayuda mutua que apoyaba a los asociados en ciertos gastos de emergencia como médicos o funerales. Manuel insiste durante la entrevista que esta cooperativa no fue el resultado de actos de agentes externos sino una iniciativa comunitaria. Pero hay que tomar en cuenta la época –principios de los años setenta- cuando en distintas regiones del país se estaban conformando Ligas campesinas, con asesoría de la iglesia católica, de fuerzas políticas opositoras, como el PDC o el Partido Comunista, y a veces incluso con la ayuda de militantes de los grupos guerrilleros. En la zona donde vivía Miguel, la iglesia católica tuvo menos influencia en la organización campesina que en otras zonas, si bien sus centros de formación campesina en Jiquilisco jugaron un papel importante para educar a líderes comunitarios. Pero los activistas de las organizaciones radicales –especialmente del ERP que desde mediados de los años setenta estaba organizando células guerrilleras en Usulután- parecen haber jugado un papel relevante en la politización de organizaciones locales, al contactar a líderes locales para incorporarlos a las redes de apoyo para la guerrilla.²⁸¹

²⁸¹ Sobre el proceso de organización y movilización política en la zona de Jiquilisco y Santiago de María (Usulután), véase, E. J. Wood, *op.cit.*, 2003, pp. 99-111.

Así que, si bien el relato de Manuel no atribuye mucha importancia a estos “extraños” puede haber habido influencias de distintos lados. Por ejemplo, socios de la cooperativa de ayuda mutua asistieron a los talleres de catequistas que la iglesia católica ofrecía en la capital local, Usulután. Posiblemente, de esta manera, la cooperativa entró en la mira tanto de los militantes del ERP, que la concibieron como un espacio más para ampliar sus redes de apoyo, como de los jefes locales del ejército y de la Guardia Nacional que la identificaron como un potencial foco de organización “comunista” y “subversiva”.

¿Cuando hicieron la cooperativa, ahí por el 72’, recibieron respaldo de alguien?

No, no recibimos ayuda absolutamente, fue iniciativa de nosotros y nació de esta manera: había una señora en el cantón y en aquellos tiempos sólo éramos setenta familias en ese cantón... había una señora que se llamaba Tina Hernández, una señora que le gustaba mucho los animales del monte, los hijos eran cazadores [de] cuzuco, garrobo, de todo tipo y de eso era su alimentación, esta señora muere y era muy querida de todos nosotros porque ella dejaba de hacer el oficio en su casa y se iba a hacer el oficio al campo de fútbol para ir a animar, a empujar a los jugadores y ella –gente [que] no podía nada de leer y escribir- decía “adelante y puta, entrénle y puta” ¿verdad? -esto si quieres lo sacas, si no, no lo sacas pero ésta era la forma de cómo ella animaba ¿verdad? a los jugadores a salir adelante- entonces muere la señora y desgraciadamente no había como comprar la caja... Un grupo de cipotes, porque en aquel tiempo cuando ella muere yo estaba cipote, decidimos hacer la cooperativa de ayuda mutua y empezamos a recoger dinero, logramos que alguien nos regalara unas tablas y un carpintero por ahí hizo la cajita y se enterró ¿verdad?, entonces creo que fue un buen nacimiento y lástima que fue por la muerte de una persona, pero fue un nacimiento de una organización que dio frutos ¿verdad? No tuvimos el apoyo digamos del gobierno, no tuvimos apoyo de ninguna ONG porque en aquel tiempo las desconocíamos ¿verdad? si lo único que recibimos fue siempre acusaciones, una cooperativa de subversivos, una cooperativa de guerrilleros, una cooperativa, bueno... siempre la desestabilización que viene por parte de la derecha y era cierto ya se empezaban a oír rumores de la subversión en el país pero nosotros no entendíamos que nos acusaban de subversivos, de guerrilleros era porque ya estábamos viendo a través de una organización cómo resolver por lo menos el problema de la salud para que alguien fuera al hospital y que pagara su pasaje... así que en esa primera cooperativa lo que surgió fue nada más voluntad, deseo de quererse unir para recoger fondos y poder ayudar a quien realmente, en el momento oportuno, lo necesitaba...

Este relato da cuenta cómo los hostigamientos de las Fuerzas Armadas en contra de organizaciones independientes contribuyeron a legitimar la acción armada impulsada por las organizaciones radicales. Esto, más los contactos por medio de los catequistas locales deben haber contribuido al reclutamiento de Manuel a las estructuras civiles del ERP. Su historia muestra que en las estructuras de representación del sector reformado, que surgió con la Reforma Agraria de 1980, había simpatizantes y cuadros de la guerrilla.

Las propiedades expropiadas en el contexto de la Reforma Agraria, con base en el Decreto 154 de 1980, y transformadas en cooperativas habían sido haciendas con monocultivos para la exportación

(café, algodón o caña) que empleaban trabajadores asalariados permanentes o estacionales. Su situación laboral no cambió sustancialmente con la Reforma Agraria, porque ellos se convirtieron en socios de las cooperativas operadas bajo un fuerte control estatal. No todos los nuevos socios eran trabajadores agrícolas, entre ellos había también administradores, técnicos y mecánicos, ocupaciones necesarias para la operación de estas empresas agropecuarias.²⁸²

La trayectoria de Manuel es ilustrativa para estos pasajes y reconversiones: En 1981 pasó de trabajador asalariado en una hacienda algodonera y activista local a presidente de una cooperativa del sector reformado. Cuatro años después de asumir la presidencia de su cooperativa –y siendo militante clandestino de la guerrilla- fue elegido presidente de la federación regional FECORADO. En este cargo participó en la fundación de la UNTS en 1986. El nombramiento como presidente de la cooperativa, implicó también un pasaje en su trayectoria laboral porque la progresiva desaparición de los cultivos de algodón por el deterioro de los precios internacionales hizo obsoleto una serie de oficios en la región –como el de mecánico de avionetas- y obligaba a la reconversión profesional. Siendo dirigente regional de cooperativas y presidente de FASTRAS pudo buscar los apoyos para impulsar la reconversión de las cooperativas y, en particular, de los cultivos de su cooperativa.²⁸³

El relato de Manuel permite ver algunas de las razones por las cuales algunos cooperativistas, no obstante de ser beneficiarios de la Reforma Agraria, decidieron apoyar al FMLN. Según él, la deuda adquirida por los cooperativistas con el Estado por la transferencia de la tierra, representó una restricción importante para incrementar la productividad o diversificar los cultivos, al obligar a las cooperativas a entregar tanto las cosechas como las ganancias a instituciones estatales.²⁸⁴ Por otra parte, el incremento de la violencia política en Usulután afectaba a las cooperativas: muchos socios optaron por abandonar las tierras entregadas en 1981 para huir de la represión a los centros urbanos o a la capital. Por otra parte, los contactos y entrelazamientos iniciales entre grupos guerrilleros, organizaciones populares radicales y núcleos de organización comunitaria, constituidos antes de la

²⁸² El Decreto 154 proclamaba la expropiación de un 20 por ciento de todas las propiedades que excedían de las 500 hectáreas. Véase, Capítulo III.

²⁸³ FECORADO: Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria del Oriente; FASTRAS: Fundación para la Autogestión de los Trabajadores Salvadoreños, que operó desde la segunda mitad de los años ochenta hasta la coyuntura de la implementación de los acuerdos de paz para canalizar fondos de la cooperación externa hacia las repoblaciones de las bases de apoyo del ERP, principalmente en Usulután y Morazán. Véase, Michael W. Foley, “Laying the Groundwork: The Struggle for Civil Society in El Salvador”, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Miami, Vol. 38, No. 1, Spring 1996, pp. 67-104.

²⁸⁴ Véase también, E. Baumeister, *op.cit.*, 2001, p. 72.

guerra civil, también facilitaron el acercamiento de representantes de las cooperativas del sector reformado a la guerrilla.

2.6. Conclusiones

La reconstrucción de la interacción entre organizaciones guerrilleras y organizaciones populares tenía la finalidad de entender por qué los activistas del movimiento popular “aceptaron” la vía armada. En nuestro intento encontramos que esta práctica “cabía” en el universo de prácticas políticas posibles e “imaginables” y que sólo en parte derivaba de la atracción ejercida por la revolución cubana. También hubo un proceso de “aprendizaje social” de prácticas violentas por el uso de la fuerza estatal y del clientelismo político para resolver conflictos sociales. La investigación de Alvarenga demuestra que desde principios del siglo veinte la combinación de mecanismos clientelares y la violencia directa, para asegurar el control social, se constituyó en parte central de las estructuras de dominación en el campo. En la segunda mitad del siglo, estas redes clientelares adquirieron expresiones más organizadas y de alcance nacional -por ejemplo en la UCS, las federaciones sindicales pro-gubernamentales y, el caso más prominente, ORDEN-, que aseguraron la colaboración de civiles en el espionaje y en la represión de la oposición local, a cambio de privilegios materiales y simbólicos que daba el vínculo con el poder. Los rasgos sumamente represivos que adquirió el clientelismo en El Salvador significaba, para quienes buscaron organizarse de manera independiente en oposición al régimen, recurrir también a la violencia y la confrontación.²⁸⁵ Los relatos de los entrevistados también dan cuenta que haberse acostumbrado a la violencia -por ejemplo a raíz de las acciones de ORDEN en la comunidad de origen (Adriana), los abusos de los administradores de la empresa (Ana) o las experiencias con la represión de marchas estudiantiles (Celso)-, antes de estar en contacto con la guerrilla, fue un factor importante para la susceptibilidad al mensaje guerrillero.

Al exaltar la violencia revolucionaria y la acción directa como vías para obtener un camino, los grupos guerrilleros contribuyeron a dar un nuevo sentido a las prácticas violentas. Un papel importante en esta reconfiguración del sentido jugó la “lucha por la hegemonía”, como un conjunto de prácticas políticas para marcar las diferencias entre grupos políticos y partidos reformistas y comprobar el carácter de vanguardia política e ideológica. Lo que en el plano discursivo se

²⁸⁵ P. Alvarenga, *op.cit.*, 1996; También Robert Holden señala la necesidad de estudiar la construcción histórica del entramado de relaciones clientelares y poder político en las sociedades centroamericanas para entender la violencia de Estado en estos países. Véase, Robert H. Holden, “Constructing the Limits of State Violence in Central America: Towards a New Research Agenda”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 28, 1996, pp. 435-459.

expresaba en las discusiones sobre el carácter del régimen militar y la estrategia revolucionaria correcta, en el plano de la práctica política cotidiana llevaba a una competencia aguda por aglutinar el máximo de organizaciones populares. La estrategia guerrillera consistió en insertar militantes de la propia organización en posiciones estratégicas dentro de las estructuras sindicales y gremiales, desde representantes sindicales de centros de trabajo, pasando por las juntas directivas sindicales hasta ocupar posiciones de comités ejecutivos y secretarías generales de las grandes federaciones y uniones campesinas, desplazando a los representantes de otras corrientes políticas. Pero no se trataba sólo de contar con los máximos dirigentes de las organizaciones sociales, la lucha por la hegemonía implicaba que los militantes construyeran liderazgos en el nivel de representación y participación que les tocara.

En el universo del movimiento revolucionario salvadoreño mostrar representatividad -vía un mayor número de organizaciones afiliadas y una mayor capacidad de movilización que otros frentes de masas- daba legitimidad y reconocimiento en las disputas ideológicas. Cuando, hacia finales de los setenta, el Bloque Popular Revolucionario señalaba aglutinar a unos 60,000 campesinos,²⁸⁶ y el FAPU difundía que incidía en las federaciones sindicales más importantes del periodo²⁸⁷, el trasfondo de la “batalla de números” era la disputa quién, por ser el vocero legítimo de las clases populares, debería estar a la cabeza del movimiento revolucionario.

El rol de “representante de intereses sociales populares” se ejemplifica en la introducción del BPR a la plataforma programática de la CRM:

Esta plataforma expresa *los intereses de todos los sectores populares y democráticos de nuestro pueblo* intereses que han sido sintetizados por la labor colectiva de las organizaciones revolucionarias de masas, que desde el 14 de enero han emprendido el proceso de unificación en pos de alcanzar el verdadero bienestar y progreso de nuestro pueblo.²⁸⁸

En un contexto social marcado por la violencia, vincularse con la guerrilla –“contar con una guerrilla permite hablar en voz alta”, como decía Régis Debray- permitió que organizaciones populares anti-gubernamentales se transformaran en actores legítimos en el campo político salvadoreño, es decir, voceros reconocidos por los demás para hablar en nombre de una colectividad mucho más amplia que los agremiados: el pueblo.

²⁸⁶ A. Rouquié, *op.cit.*, 1994, p. 146.

²⁸⁷ FAPU, *Balance del Proceso Revolucionario*, *op.cit.*, 1978, p. 7.

²⁸⁸“La unidad del movimiento revolucionario, una tarea histórica”, *Combate Popular. Periódico del BPR*, San Salvador, No. 23, 2da quincena de marzo 1980, p. 2 (Las cursivas son mías).

Los relatos de vida de los militantes reflejan que la radicalización se dio dentro de una contracultura política, opuesta a la dictadura militar, y que existía desde antes. Esta contracultura consistía de distintas dimensiones: redes sociales de complicidad y de simpatía con las organizaciones armadas -por ejemplo en las universidades o la iglesia-; prácticas sociales, como diversas formas de protesta y acción directa -realizar pintas en la pared, marchas, tomas de edificios públicos, paros, huelgas ilegales y entrenamiento militar clandestino- con la finalidad de ejercer presión, dar visibilidad pública al movimiento revolucionario como nuevo sujeto político y crear la disposición entre los activistas a tomar las armas-; modalidades de organización, como los frentes de masas, y un discurso insurreccional que enfatizaba la necesidad de que “había que darles un golpe a los militares”, como lo formulaba una entrevistada. Este discurso adquiriría fuerza gracias a un espíritu de época en el cual la revolución, entendido como un cambio a partir de la toma de poder político, no era sólo un horizonte deseable, que orientaba la acción política, sino parecía una posibilidad inmediata. Cómo se fue rompiendo este sentido común, es el tema del siguiente capítulo.

CAPÍTULO III
LOS AÑOS DE LA GUERRA: REORGANIZACIÓN POLÍTICA
Y POLARIZACIÓN MILITAR

“Es una guerra de todo el pueblo”
*Consigna del FMLN (1985)*²⁸⁹

3.1. Introducción

Patricia Alvarenga señala en *Cultura y ética de la violencia en El Salvador* que en 1932 finalizó un periodo corto pero muy rico en la creación de asociaciones populares en la ciudad y el campo. Estos emergentes espacios de participación política, en donde fueron elaborados y difundidos contradiscursos ideológicos que se caracterizaron por su variedad y pluralismo, fueron abolidos violentamente por la represión del levantamiento campesino e indígena.²⁹⁰ Algo similar sucedió entre 1981 y 1983 –el “tiempo de la muerte” como lo caracterizó un entrevistado– cuando, después de la primera ofensiva del FMLN, el terrorismo de Estado arrojó a un movimiento popular contestatario a la clandestinidad. La organización popular que surgió después de estos años, y que se manifestó en las calles a partir de 1985, tenía otro carácter y discurso que el movimiento popular de los años setenta. Un rasgo principal de la nueva coyuntura fue la desaparición de la diversidad ideológica, al reagruparse los adversarios en dos grandes bloques: las organizaciones que apoyaban al FMLN, agrupadas a partir de 1986 en la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS), y las que apoyaban al gobierno del PDC y fundaron en 1987 la Unión Nacional de Obreros y Campesinos (UNOC). De esta manera, así el argumento central de este capítulo, la polarización política de la guerra se reprodujo en la sociedad civil.

Este argumento sirve como eje para nuestra reflexión sobre las dos maneras en las que el enfrentamiento armado de los ochenta moldeó las condiciones de posibilidad para la acción colectiva: en primer lugar, la guerra fue el contexto en el cual se desarrolló la actividad de las organizaciones populares y movimientos sociales, que marcó sus agendas políticas y determinó muchas de sus demandas. Así, por ejemplo, la demanda por una solución negociada del conflicto

²⁸⁹ Comandancia General del FMLN, “Nuestro pueblo avanza, el enemigo retrocede. Balance de fin de año de la Comandancia General del FMLN”, *Es una guerra de todo el pueblo*, Ediciones Sistema Radio Venceremos, s/l, enero de 1986 (Archivo personal de Mario Vázquez).

²⁹⁰ Véase, P. Alvarenga, *op. cit.*, 1996, p. 346.

formaba parte integral de prácticamente todos los catálogos de reivindicaciones sociales. Pero hay que tomar en consideración que la situación de la guerra afectó al modo de vida de toda la sociedad salvadoreña, por lo cual tanto los sectores organizados como el pueblo no organizado tuvieron que diversificar sus estrategias de supervivencia. A diferencia del pueblo no organizado –y ésta es la segunda manera de cómo la guerra afectó a la acción colectiva-, los sectores organizados que formaron parte de una de las dos alianzas enfrentadas se convirtieron en *actores de la guerra*. Esto significaba que todos sus actos de movilización, resistencia, protesta y negociación formaban parte de una estrategia más amplia que tenía como finalidad la derrota del adversario. Esta particularidad –que denominamos la *militarización de la política*- incidió profundamente en las prácticas políticas, modalidades de organización y jerarquías internas de las organizaciones populares, tanto de la izquierda como de la Democracia Cristiana.

Otro factor que incidió en el campo de posibilidades de los actores políticos fueron las reformas políticas y sociales, que iniciaron con el golpe de estado de octubre de 1979. Estas medidas fueron instrumentadas primero por las juntas cívico-militares (1979-1982) y después por los gobiernos de Álvaro Magaña (1982-1984) y Napoleón Duarte (1984-1989) para contrarrestar la influencia social de la guerrilla y proyectar a nivel internacional la imagen de “normalización democrática” del país. Por una parte, abrieron espacios de participación política y social que no obstante sus limitaciones cambiaron las lógicas de alianza y conflicto en el campo político. Por otra parte, el proyecto reformista del gobierno democristiano impulsó a los grupos dominantes a iniciar un proceso de reagrupamiento político y adaptación programática, cuyo resultado más visible ha sido el ascenso de ARENA. Fundado por el mayor de la Guardia Nacional Roberto d’Aubuisson en septiembre de 1981, como una fuerza anticomunista militante, a lo largo de los años ochenta el partido se convirtió de un grupo marginal en las negociaciones políticas de 1979 y 1980²⁹¹ en el “catalizador” organizativo de la derecha salvadoreña, que ocupa el gobierno desde 1989.

En otras palabras, teniendo como “trasfondo” la guerra civil, se dio la reorganización del campo político salvadoreño y la reconversión de la extrema derecha militante a un partido electoral, lo cual

²⁹¹ Señala Rafael Menjívar, resumiendo las acciones de d’Aubuisson en 1979 y 1980: “Visto en perspectiva, resulta claro que D’Aubuisson no tenía, en los días del golpe, posibilidades de insertarse en el proceso político en marcha; en un mundo rígidamente estratificado como el militar, gente de rango más elevado que él había tenido que pactar con oficiales superiores para legitimar el golpe. Además, si se sigue la versión de Gutiérrez (uno de los oficiales que dirigía la Juventud Militar) no era una persona con especiales simpatías en la institución armada, y había roto reglas básicas de disciplina. Estar en el lugar adecuado en el momento preciso, y relacionarse con las personas necesarias, cambió la historia del país porque, pese a su rango, llegó a ser el concentrador de voluntades políticas, el dirigente de un movimiento que lograría concretar un proyecto de nación, que ha prevalecido desde mediados de la guerra.” Véase, R. Menjívar, *op.cit.*, 2006, p. 116.

serían dos condiciones previas para las negociaciones de paz entre FMLN y el gobierno salvadoreño entre 1990 y 1992. Si el segundo capítulo estaba dedicado a reconstruir la formación del movimiento revolucionario a partir de la convergencia de diversos actores sociales, en las siguientes páginas se revisan tres procesos relevantes para comprender las prácticas de la militancia y del activismo social en la década de los ochenta y noventa: primero, la reorganización del campo político desde el poder para recomponer las condiciones sociales y políticas que habían provocado la profunda crisis política en el país. Segundo, la polarización política entre izquierda y derecha que en la década de los ochenta se expresó en la bipolaridad FMLN-PDC y, después de 1989, en la bipolaridad FMLN-ARENA. En tercer lugar, las estrategias de las organizaciones político-militares para fortalecer nuevamente su aparato clandestino en los centros urbanos y reforzar sus vínculos con las organizaciones populares después de 1985. La reconstrucción de dichos procesos permite reflexionar, con base en las entrevistas, sobre sus efectos prácticos en los mundos sociales de la militancia clandestina.

3.2. “Tiempo de muerte”: la destrucción de las redes sociales de oposición

En el capítulo 2.1 se explicaron los acontecimientos de 1980 y 1981 desde la perspectiva de los frentes de masas, destacando principalmente la creciente movilización y efervescencia social. Pero el periodo entre el golpe de estado de octubre 1979 y la ofensiva del FMLN en enero 1981 también fue una fase crucial para la reorganización del poder, como se demostrará en esta sección. Visto en perspectiva, no cabe duda que el golpe de la Juventud Militar para “deponer el gobierno del general Carlos Humberto Romero e integrar próximamente una Junta Revolucionaria de Gobierno [...] [que] asumirá el poder del Estado con el fin de crear las condiciones para que en nuestro país podamos todos los salvadoreños tener paz y vivir acorde con la dignidad del ser humano”²⁹² significó la finalización de un ciclo político. Desde la dictadura de Hernández Martínez (1932-1944) los recurrentes golpes militares habían expresado tensiones entre distintos grupos de poder ante incipientes movilizaciones políticas y muestras de descontento popular. Ejemplos de golpes de estado “preventivos”, para salvar la institucionalidad estatal, fueron los de 1948, para finalizar el dominio del grupo de poder de Hernández Martínez, o de 1960 en contra del coronel José María Lemus.

En cambio, las tres juntas cívico-militares que gobernaron entre octubre de 1979 y la Asamblea Constituyente de 1982 expresaron una lógica distinta, al buscar cambiar la institucionalidad estatal

²⁹² “Proclama de la Fuerza Armada de El Salvador, 15 de octubre de 1979”, R. Menjívar, *op.cit.*, 2006, Apéndice 2, pp. 218-219.

como única vía posible para detener el proceso revolucionario. Para estabilizar la situación política combinaron reformas sociales y lucha militar contrainsurgente. Si bien cada una de las tres juntas tenía una composición y un carácter distinto, el anticomunismo y el miedo a que la experiencia de la revolución nicaragüense se podría repetir en El Salvador conferían cohesión y estabilidad a la alianza heterogénea conformada por oficiales moderados, el ala más duro del ejército y la vertiente de derecha del PDC (la vertiente mayoritaria). A partir de enero de 1980, el dirigente democristiano Napoleón Duarte asumió la dirección de la junta-cívico-militar para impulsar el proyecto reformista contrainsurgente.²⁹³

¿Cómo fue posible que coexistieran en los años ochenta una estrategia de reformas sociales y políticas junto al terrorismo de Estado? Según Rafael Menjívar Ochoa, un factor central fue la “doble institucionalidad” que emergió en los meses de 1980 en las Fuerzas Armadas y que permitió que hubiera militares que se mantuvieron al margen de la represión masiva, mientras otros “actuaron por la libre” -aunque siempre vinculados al aparato de poder- sin que se fracturara el ejército. Si bien conforme se agudizaba la radicalización política los criterios de ambos grupos de militares empezaron a converger, la “doble institucionalidad” se mantuvo: durante los años ochenta, el apoyo de las Fuerzas Armadas fue crucial para la estabilidad del gobierno democristiano electo en 1984. Al mismo tiempo, la guerra permitió a las Fuerzas Armadas mantener su autonomía ante el gobierno y sacar las decisiones militares estratégicas fuera del alcance de los civiles en el gobierno: pudieron hacer la “guerra sucia” en contra de las bases civiles del FMLN, controlaron los programas de contrainsurgencia civil de la CONARA y el presupuesto de defensa, sin tener que rendir cuentas ante el Poder Ejecutivo o la Asamblea Legislativa. Por último, la incorporación de militares a los gabinetes de Magaña y Duarte permitió que la institución armada seguía incidiendo decisivamente en los procesos de toma de decisión de la política en general. Una cierta limitación al poder de las Fuerzas Armadas fue el control que ejercía el gobierno estadounidense a partir de la amenaza de recortar o congelar los flujos de apoyo económico y militar si no se reducían las violaciones a los Derechos Humanos.²⁹⁴

²⁹³ Sobre los conflictos entre las distintas tendencias al interior de las fuerzas armadas, como la Juventud Militar, los militares “tradicionales” y los militares “institucionales”, véase, R. Menjívar, *op.cit.*, p. 192.

²⁹⁴ CONARA: Comisión Nacional de Reconstrucción de Áreas. Otro aspecto que demuestra el poder autónomo del ejército salvadoreño frente a los gobiernos civiles fue la continuidad de la práctica de mobramiento de altos oficiales como directores de las empresas e instituciones paraestatales más importantes. Ejemplos son las empresas CEL, ANTEL, CEPA (Comisión Ejecutiva Portuario Autónoma), así como el Instituto del Seguro Social Salvadoreño (ISSS). Si bien durante el gobierno de Napoleón Duarte instituciones menos estratégicas, como el ISSS, fueron dirigidas por civiles, esta tendencia se revirtió con el gobierno de Alfredo Cristiani. Sobre la profundización de la “colonización” del Estado por el ejército en el periodo de la

Un actor paradigmático de esta doble institucionalidad, quien supo actuar como una “bisagra” entre oficiales del ejército de la “línea dura” y empresarios de derecha, fue el oficial Roberto d’Aubuisson, mayor de la Guardia Nacional hasta que se dio de baja después del golpe de 1979. A partir de acceder (en el contexto del golpe), a los expedientes de la Agencia de seguridad estatal ANSESAL que incluían todos los datos de espionaje interno, él denunció no sólo públicamente a un gran número de opositores moderados y radicales, que posteriormente fueron víctimas de los escuadrones de muerte, sino también recuperó los nombres de los integrantes de ORDEN, que había sido disuelta por la junta de gobierno. A partir de las estructuras rurales y urbanas de ORDEN se reorganizaron los escuadrones de la muerte pero también la base popular del Frente Amplio Nacional, primer intento para agrupar políticamente a la ultraderecha y el antecedente inmediato del partido ARENA.²⁹⁵

Como se señaló en el capítulo 2, ORDEN fue fundada en 1968 por el general José Alberto Medrano durante el gobierno del Coronel Arturo Armando Molina, como una agrupación esencialmente campesina del PCN, cuyo secretario general era a la vez el secretario general de ORDEN. En 1979, el desprestigio de dicha organización fue tal que su disolución se convirtió en una demanda compartida por sectores políticos y sociales salvadoreños y extranjeros. Incluso su fundador Medrano se distanció públicamente de la organización, al señalar que ORDEN –según él, originalmente concebido como “un instrumento de ideología mediante el cual se pretendía conscientizar a las grandes masas campesinas sobre sus derechos y obligaciones”- se había convertido en una “cueva de criminales”.²⁹⁶ Las bases de ORDEN –rechazadas por el nuevo gobierno y blancos principales de los *ajusticiamientos* realizados por militantes guerrilleros- encontraron en la estructura política de d’Aubuisson un medio de sobrevivencia, cuyo discurso anticomunista y nacionalista les ofrecía un marco cognitivo familiar para conservar su pertenencia ideológica. Por otra parte, d’Aubuisson ofreció una estructura política centralizada a las diversas expresiones de la derecha (popular y oligárquica) que podían converger en torno al objetivo común de “combatir a la subversión” comunista con todos los medios posibles.

guerra, véase, Philip J. Williams y Knut Walter, *Militarization and Demilitarization in El Salvador’s Transition to Democracy*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1997, especialmente pp. 114-150.

²⁹⁵ Véase, R. Menjívar, *op.cit.*, pp. 114ss. y 188. Véase también v.v. A.A., *Los escuadrones de la muerte en El Salvador*, El Salvador, Ed. Jaraguá, 2004 [2da. Edición].

²⁹⁶ Citado en *Inforpress*, No. 368, 15 de noviembre de 1979, pp. 8-9.

Diferentes actores –las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, escuadrones de la muerte- coincidieron entre 1980 y 1981 en torno a este objetivo, atacando no sólo a potenciales militantes de los grupos guerrilleros sino a dirigentes y activistas de las organizaciones populares para, de esta manera, inspirar miedo y destruir los lazos que vinculaban a los diversos integrantes de la oposición radical. Siguiendo la Doctrina de la Seguridad Nacional y bajo el solo mando del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad –Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de Hacienda-, fungieron como instrumentos de control político y de contrainsurgencia en las ciudades y el campo.

La represión en las ciudades eliminó temporalmente los espacios más importantes de sociabilidad contrahegemónica y de la representación simbólica del movimiento popular revolucionario: con las masacres que ocurrieron durante marchas y mítines, como en el funeral del arzobispo Monseñor Arnulfo Romero en abril de 1980, se cerró la calle a las manifestaciones masivas; en julio de 1980 la universidad fue ocupada por las fuerzas armadas (con un saldo de más de 40 muertos), por lo cual dejó de funcionar como un lugar de reunión de los militantes políticos; y en las empresas estatales y los ministerios ya no era posible realizar paros y tomas de instalaciones por la imposición del reglamento militar y autoridades militares. A diferencia de las dictaduras en Argentina o Chile, donde el terrorismo de Estado operó menos “público” y de manera más selectiva, en El Salvador los secuestros y asesinatos se desplegaron en el espacio público. Parecía que la escenificación de la muerte y del terror era la respuesta de los grupos dominantes para castigar el desafío político de un movimiento popular que por medio de marchas, ocupaciones de edificios públicos y de empresas había llevado la conflictividad sociopolítica del espacio laboral y las comunidades campesinas al espacio público. Después de la huelga de junio de 1980 y hasta la “normalización” de 1983 era común encontrar los cadáveres de activistas sociales mutilados y con señas de tortura en los basureros de las ciudades, las faldas del volcán de San Salvador o en las cercanías de los centros de trabajo.²⁹⁷

Las estimaciones sobre las muertes ocurridas durante la guerra civil oscilan –dependiendo de la fuente- entre 80,000 y 94,000 personas, de ellas unas 50,000 a 60,000 fueron civiles, mientras el número de refugiados en el exterior alcanzó aproximadamente 1,500,000 personas y 500,000 desplazados en el interior del país. El número de víctimas se incrementó en dos momentos: el

²⁹⁷ Los efectos de la violencia estatal en El Salvador confirman las reflexiones de Tilly y Thompson sobre la aplicación de la represión como un instrumento de disciplinamiento social que “enseña” a los agentes a tomar distancia de formas activas de participación política. Este instrumento se vuelve terriblemente eficaz en su función de inspirar terror cuando logra violentar ciertos códigos sobre lo sagrado – como, por ejemplo, el respeto a los funerales, los espacios sagrados de la iglesia etcétera. Véase, Capítulo 1.

primero entre 1980 y 1983 con aproximadamente 38,000 muertos, el segundo en 1989 (año de la segunda ofensiva militar del FMLN) con 2,000 a 6,000 muertos.²⁹⁸ ¿Quiénes fueron las víctimas de la violencia política de los años ochenta? Evidentemente, como lo constató la Comisión de la Verdad, toda la sociedad salvadoreña se vio afectada de una u otra forma por la violencia política y las actividades bélicas, simpatizaran o no con uno de los dos bandos. Pero no todos fueron afectados de la misma manera. De acuerdo al estudio de Seligson y McElhinny sobre el perfil de las víctimas, en El Salvador el grupo de civiles más propenso a sufrir una muerte violenta durante la guerra eran activistas y simpatizantes de la izquierda.²⁹⁹

Las poblaciones más afectadas por la violencia política se encontraban en Cuscatlán, donde -según la encuesta de Seligson y McElhinny- un 72,5 por ciento de las familias encuestadas habían perdido algún familiar durante la guerra, seguido por Chalatenango (54,5 por ciento) y San Vicente (47,9 por ciento), Cabañas (45,7 por ciento) y Morazán (44,4 por ciento). Mientras estos departamentos fueron zonas de combate durante los años ochenta -por lo cual el grado de victimización de la población no es sorprendente- el caso de Cuscatlán en el centro de El Salvador llama la atención. Este departamento, junto a Chalatenango y San Vicente, había sido uno de los centros de movilización y organización campesina durante los setenta, lo cual permitió que el FMLN construyera un frente militar estratégico en esta zona. El frente Guazapa, en las faldas del volcán con el mismo nombre y a 30 Km. de la capital, se convirtió durante toda la guerra en uno de los blancos centrales de los ataques de las Fuerzas Armadas. En cambio, los departamentos del occidente -Santa Ana, Ahuachapán o Sonsonate- fueron los departamentos menos afectados por el conflicto.

Con respecto al perfil socioeconómico el estudio destaca dos indicadores: Primero, el menor nivel educativo, en promedio, de las familias con víctimas de la guerra (un promedio de 5,4 años de escolaridad) comparado con familias que no perdieron parientes durante el conflicto (6,2 años de

²⁹⁸ Estas cifras muestran una relación de un salvadoreño muerto por cada 56 durante la guerra. Véase el artículo de Seligson y McElhinny que ofrece una discusión y comparación de diferentes fuentes sobre el total de muertos y heridos en las guerras civiles de El Salvador y Nicaragua. Véase Mitchell A. Seligson y Vincent McElhinny, "Low Intensity Warfare, High Intensity Death: The Demographic Impact of the Wars in El Salvador and Nicaragua", Anne R. Pebley y Luis Rosero-Bixby (ed.), *Demographic Diversity and Change in the Central American Isthmus*, Washington, Rand, 1997, pp. 59-95, p. 66. Las cifras de los refugiados internos y en el exterior provienen de "Refugiados, desplazados y repatriados: los nuevos agentes de la guerra", *Inforpress Centroamericana*, No. 968, Informe especial, 30 de enero de 1992, pp. 17-22, p. 18.

²⁹⁹ La información sobre el perfil socioeconómico y político de las víctimas de la guerra se basa en datos "indirectos", obtenidos a través de la aplicación de un cuestionario a los familiares sobrevivientes. Los datos de El Salvador se basan en una encuesta sobre actitudes y valores políticos realizada en febrero de 1995 con una muestra de 1,609 entrevistas. Véase, M. A. Seligson y V. McElhinny, *op.cit.*, 1997.

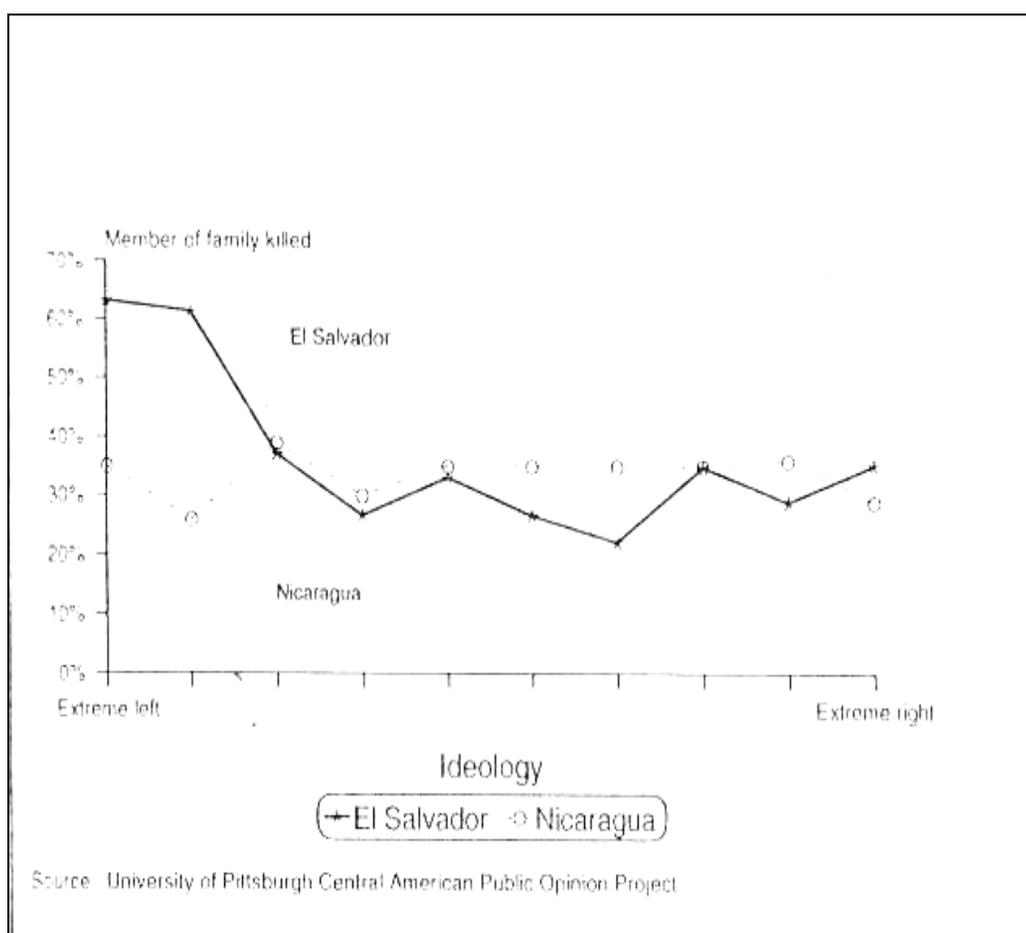
escolaridad). Segundo, la ocupación: Los grupos ocupacionales más afectados por tener familiares muertos fueron –además de los soldados con un 75 por ciento– los campesinos arrendatarios (59,3 por ciento) y los profesionales (44,4 por ciento). Después seguía el grupo de campesinos propietarios (38 por ciento), trabajadores agrícolas (36,6 por ciento) y trabajadores industriales (33,6 por ciento).³⁰⁰ Estos datos dan una primera aproximación al perfil de las víctimas de la violencia: El hecho que los campesinos arrendatarios fueran el segundo grupo más afectado, después de los soldados, demuestra que el lugar principal del enfrentamiento armado fue el campo y que el FMLN fue, a partir de 1981, principalmente un ejército campesino.³⁰¹ ¿Pero por qué los profesionales representan el tercer grupo más afectado? Los autores del estudio interpretan este dato como otro indicador más de la polarización del conflicto salvadoreño que afectó a los grupos con mayores ingresos –los profesionales– y los con menores ingresos, los campesinos sin tierra. Pero este dato también puede apuntar a un sector social que nutrió las estructuras de mando y el segmento de los cuadros políticos del FMLN: las familias de clase media con hijos universitarios. Esta conclusión coincidiría con otro dato arrojado por el estudio y que se señala en el Diagrama 3.1: La guerra, concluyen Seligson y McElhinny, fue principalmente una guerra en contra de la izquierda, siendo los activistas y simpatizantes de izquierda el grupo más propenso a sufrir una muerte violenta.³⁰²

³⁰⁰ *Ibíd.*, p. 90 y p. 92.

³⁰¹ Este dato puede indicar dos cuestiones más: por una parte, como ya menciona el estudio de Cabarrús, los campesinos más inclinados a organizarse políticamente –en FECCAS u ORDEN– eran los campesinos “semiproletarios”, entre los cuales se encuentran los “inquilinos” que rentaban tierra. Véase, Cabarrús, *op.cit.*, 1983, p. 183. Por otra parte, es posible que la implementación de la reforma agraria, que debería beneficiar a campesinos que rentaban parcelas y jornaleros agrícolas, contribuyó al saldo de muertos a raíz de las confiscaciones, los reclamos de tierra y las reacciones violentas de algunos terratenientes a la expropiación. Esta consecuencia negativa de la reforma agraria es señalada por David Browning en un temprano balance sobre la reforma agraria en El Salvador. Véase, David Browning, “Agrarian Reform in El Salvador”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 15, noviembre de 1983, pp. 399-426, especialmente p. 413.

³⁰² M.A. Seligson y V. McElhinny, *op.cit.*, 1997, p. 82.

Gráfica 3.1 Pertenencia ideológica de las familias con muertos El Salvador y Nicaragua



Fuente: M.A. Seligson y V. McElhinny, *op.cit.*, 1997, p. 95.

Como puede observarse en el diagrama, más del 60 por ciento de familias simpatizantes con la extrema izquierda perdieron a algún pariente en la guerra, a diferencia de familias con afinidades ideológicas de centro o derecha donde la proporción es mucho menor (aunque hay un pequeño incremento en el grupo de la extrema derecha).³⁰³ La comparación de este resultado con el caso nicaragüense –donde los datos no evidencian una relación entre muerte y afinidad ideológica– confirma de manera aún más clara que la guerra civil salvadoreña fue una confrontación político-ideológica, la cual implicó un costo muy alto sobre todo para los militantes de izquierda.

³⁰³ Para llegar a este resultado se pidió a los entrevistados que se colocaran en un continuo de izquierda-derecha que consistía de 10 puntos. Véase, *Ibid.*, p. 81.

Patrones de la violencia

Además de los principales actores y víctimas ¿qué patrones de violencia se perfilaron a lo largo de los años ochenta? De acuerdo a la Comisión de la Verdad los escenarios de mayor violencia a partir de 1980 fueron las zonas rurales y el número más alto de víctimas se alcanzó en los primeros cuatro años de la guerra: el 70 por ciento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos, recogidas por la Comisión, hacen referencia a acontecimientos ocurridos entre 1980 y 1984.³⁰⁴ Desde la perspectiva de la Doctrina de Seguridad Nacional, defendida por el ejército, toda forma de expresión de oposición política era considerada (potencialmente) subversiva y, por tanto, había que tratarla igual como al enemigo armado. Sobre todo en los primeros años, las prácticas más comunes de la contrainsurgencia eran, entonces, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y el asesinato político de opositores. La población civil que seguía viviendo en las zonas de operación guerrillera era considerada por los cuerpos armados como bases de apoyo y colaboradores del FMLN y, por lo tanto, blanco de guerra. Las masacres a la población civil y los bombardeos masivos fueron, por lo tanto, estrategias frecuentemente usadas para “limpiar” terrenos y horrorizar a la población civil para que abandonara “voluntariamente” las zonas disputadas.

La Comisión identificó también los patrones de violencia del FMLN. A partir de aproximadamente 800 denuncias en contra del FMLN se mostró que la guerrilla realizó –aunque en mucho menor grado que las fuerzas gubernamentales- actos violentos que afectaron a la población civil, especialmente a personas que fueron considerados traidores o espías, así como a adversarios políticos. Las dos principales denuncias en contra del FMLN fueron los “ajusticiamientos” de presuntos espías y de alcaldes que se negaron a abandonar sus cargos en zonas controladas por la guerrilla y los reclutamientos forzados en los primeros años de la guerra. En los casos de asesinatos de adversarios políticos o supuestos informantes del gobierno, generalmente, la dirección de una de las organizaciones del FMLN tomaba la decisión y encomendaba la tarea a un comando especial. Sobre todo cuando se trataba de una persona conocida –un oficial del ejército, un informante

³⁰⁴ La Comisión de la Verdad basó su informe en más de 22,000 denuncias sobre actos violentos ocurridos entre 1980 y 1991, el 85 por ciento de las denuncias registradas se dirigió en contra de agentes estatales, grupos militares y escuadrones de la muerte y el 5 por ciento en contra del FMLN. En el restante 10 por ciento no fue posible determinar a los responsables. Véase, Commission on the Truth in El Salvador, *From Madness to Hope. The 12-Year War in El Salvador*, 1 de abril de 1993, disponible en línea http://www.usip.org/library/tc/doc/reports/el_salvador/tc_es_03151993_toc.html (consultado en enero de 2007). Véase, también: Alfredo W. Forti, “Las experiencias de El Salvador y Honduras en la búsqueda de la verdad”, Juan E. Méndez, et.al. (ed.), *Verdad y justicia. Homenaje a Emilio F. Mignone*, San José/Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2001, pp. 207-221.

conocido, etcétera- la organización publicaba un comunicado para exponer las razones por las cuales se había hecho el “ajusticiamiento”, una vez realizada la acción.³⁰⁵

Después de 1982, si bien la persecución de la oposición en las ciudades se volvió más selectiva, seguía siendo una amenaza constante. Uno de los blancos de la violencia militar y paramilitar eran los opositores políticos y organizaciones sospechosas de fungir como fachadas o aliados de la guerrilla. Casos paradigmáticos de este patrón –por la violencia expresada y las repercusiones nacionales e internacionales- fueron el asesinato de los dirigentes del FDR en noviembre de 1980, los ataques con explosivos en contra de las oficinas de la organización de familiares de presos políticos COMADRES y del local de FENASTRAS en octubre de 1989, donde murieron varios dirigentes sindicales (entre ellos la secretaria general de FENASTRAS, Febe Velásquez), los asesinatos de los jesuitas y sus dos empleadas en la UCA en noviembre de 1989, así como el secuestro y asesinato del dirigente del MNR, Héctor Oquelí en Guatemala en el mismo año. La finalidad de estas prácticas de represión parece haber sido la desactivación de activistas y dirigentes sociales que parecían “articular” distintos espacios del activismo (como la universidad, los sindicatos, la iglesia, etcétera) con las organizaciones guerrilleras, así como de personas consideradas cuadros políticos del FMLN.³⁰⁶

Para ilustrar cómo fueron eliminados sindicalistas considerados “enlaces” entre guerrilla y movimiento sindical, sirve el caso del secuestro del secretario general del Sindicato del Instituto de Vivienda Urbana en agosto de 1983, ocurrido durante el primer paro laboral de empleados públicos desde la declaración del Estado de Sitio en agosto de 1980. En este contexto el escuadrón de la muerte “Ejército Secreto Anticomunista” advirtió públicamente a todos los sindicalistas, concretamente a los del Instituto de Vivienda Urbana, “a no prestarse a la reactivación de masas de la izquierda [sic.]”, amenazando con asesinar a todos aquellos que participaran en huelgas y paros. Poco tiempo después de la amenaza el secretario general de este sindicato fue secuestrado y asesinado.³⁰⁷ Otro ejemplo es el asesinato de la sindicalista Filomena de Majano en enero de 1984, que participó en la reorganización del sindicato de empleados del Ministerio de Educación. Al ser

³⁰⁵ Commission on the Truth in El Salvador, *op.cit.*, 1993.

³⁰⁶ Véase, Daniel Siegel y Joy Hackel, “El Salvador: La nueva visita de la contrainsurgencia”, Michael T. Klare y Peter Kornbluh (coord.), *Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80. El arte de la guerra de baja intensidad*, México, Grijalbo, 1990, pp. 147-178. Anner y Fitzsimmons en su artículo sobre el sindicalismo en El Salvador señalan que en los primeros tres años de la guerra fueron asesinados más de 5000 sindicalistas. M. Anner y T. Fitzsimmons: *op. cit.*, 1999, p. 106; Véase, A. Rouquié, *op. cit.*, 1994, pp. 148-149.

³⁰⁷ Véase, CINAS, *op. cit.*, 1985, p. 54.

activista estudiantil de la Universidad Nacional, recientemente reabierto, y sindicalista se volvió sospechosa de ser un cuadro político del FMLN, encargado de reorganizar el movimiento popular.³⁰⁸ Como puede observarse en estos ejemplos, el terrorismo del Estado y la escenificación pública del terror tenían como objetivo destruir las articulaciones entre los distintos campos constitutivos del activismo y la organización política, desarticular la representación de los actores sociales en el espacio público y hacer del miedo un mecanismo de control y disciplinamiento social.

Junto a las prácticas propias de la “guerra sucia”, el gobierno estableció una serie de mecanismos jurídicos para desarticular todo intento de movilización política de oposición. Dentro del marco legal del Estado de Sitio y el Estado de Emergencia Nacional -decretados en agosto 1980 y marzo 1981 respectivamente- se llevó a cabo la militarización de las empresas estratégicas de los servicios públicos, lo cual significaba la supresión del derecho a huelga y asociación, se autorizó la censura de la prensa y se prohibió de facto la movilización política antigubernamental. Por ejemplo, la *Ley Especial de Procedimiento* permitía mantener a los detenidos por delitos “en contra de la paz e independencia del Estado” hasta 180 días en incomunicación, lo cual facilitaba la tortura y el maltrato. Por otra parte, jóvenes entre 10 y 18 años estaban obligados a llevar permanentemente una tarjeta de identificación para no ser detenidos por supuestas actividades “subversivas”.

La puesta bajo mando militar de las empresas públicas estratégicas (que se mantuvo hasta finales de la guerra) y el Decreto 296, que prohibía la organización de los empleados públicos y obligaba a los jefes de área a denunciar cualquier iniciativa gremial, tenía entre sus propósitos asegurar el control gubernamental sobre las instituciones estatales y desorganizar al incipiente sindicalismo público, que había iniciado su movilización entre 1979 y 1980, y que el gobierno percibía como vinculado al FMLN.

Aunque en el contexto de los preparativos a las elecciones a la Asamblea Constituyente en 1983 las medidas más crudas de suspensión a los derechos políticos y civiles fueron levantadas y la Constitución de 1983 reconoció formalmente la libertad de asociación, en la práctica las limitaciones a la organización sindical se mantuvieron. En las denuncias de los sindicalistas en los años ochenta es posible reconocer un padrón en el cual la violencia selectiva en contra de dirigentes

³⁰⁸ Carlos Henríquez, compañero sindical de Filomena señala: “...cuando cayó la compañera Filomena de Majano, el problema es que la compañera estaba al frente de la Asociación de Estudiantes de Derecho Roque Dalton, quizás al enemigo al verla ahí y con nosotros entonces dijo –ah, este es un cuadro político.” Nelson López, “Un líder en Educación, antes, durante y después de la guerra civil. Entrevista con Carlos Henríquez”, *Periódico Colatino*, San Salvador, jueves 16 de noviembre de 2000, p. 7.

sindicales –por medio de asesinatos, desaparición forzada o detención arbitraria- operó como un mecanismo de disciplinamiento de toda la fuerza laboral para prevenir paros, frenar la negociación de convenios colectivos e impedir protestas por despidos injustificados. A partir de 1982 la intervención directa de cuerpos de seguridad en conflictos laborales tendió a limitarse al sector público, considerado estratégico desde el punto de vista militar. Sin embargo, con el ascenso al gobierno de ARENA y la ofensiva del FMLN en 1989, la participación de la Guardia Nacional en la disolución violenta de ocupaciones de fábrica y paros laborales volvió a ser una práctica recurrente.

Otra práctica recurrente de la represión fue la detención arbitraria de activistas de organizaciones populares, de derechos humanos y religiosas, acusados de participar en “actos subversivos” y ser militantes encubiertos de la guerrilla. Hasta la finalización de la guerra había un número de presos políticos reconocidos que oscilaba entre 1,600 y 400 presos políticos (en 1987 y septiembre de 1990, respectivamente) en diversas cárceles del país³⁰⁹ y la demanda por su liberación formaba parte de campañas internacionales de grupos de derechos humanos y de simpatizantes con el FMLN para sensibilizar la opinión pública fuera de El Salvador sobre las violaciones a los derechos humanos, aislar diplomáticamente al gobierno salvadoreño y bloquear el flujo de ayuda estadounidense a El Salvador. Sobre todo a partir del asesinato de las monjas estadounidense en diciembre de 1980 el tema de los derechos humanos en El Salvador no dejó de ser un tema central en la opinión pública estadounidense y europea, y el Congreso estadounidense condicionaba la ayuda militar a que el gobierno salvadoreño demostrara su voluntad para detener las violaciones a los derechos humanos. Si bien esto no detuvo el flujo de recursos financieros al gobierno salvadoreño implicó que la situación en las cárceles se convirtiera en un tema en la agenda política internacional, lo cual daba, paradójicamente, cierta protección a los presos reconocidos por los cuerpos policiales y formalmente acusados de “actos subversivos” o de pertenecer a una agrupación guerrillera. Pero como el marco legal, que regulaba la suspensión de garantías durante la vigencia del estado de sitio, autorizaba la detención de una persona durante 15 días sin ser consignada a tribunales se facilitaba la tortura y los malos tratos durante este lapso de tiempo. Esta situación irregular asignaba un papel cada vez más importante a las organizaciones de familiares de desaparecidos y presos

³⁰⁹ Los organismos de derechos humanos manejaban distintas cifras sobre el número de presos políticos que oscilaban entre 900 (en 1986), 1,600 (en 1987), 1,000 en enero de 1990 (como consecuencia de la ofensiva militar del FMLN en noviembre de 1989) y 400 en septiembre de 1990. Véase, “Derechos humanos: Más capturados”, *Inforpress Centroamericana*, No. 697, 10 de julio de 1986, pp. 3-4; “Amnistía: Proyecto con muchas gavetas”, *Inforpress Centroamericana*, No. 739, 21 de mayo de 1987, p.3; “Caso jesuitas se abre bajo intensa presión”, *Inforpress Centroamericana*, No. 870, 18 de enero de 1990, pp. 15-16; “Presos políticos frente al acuerdo San José.”, *Inforpress Centroamericana*, No. 903, 13 de septiembre de 1990, pp. 6-8.

políticos para denunciar detenciones, buscar a personas secuestradas e iniciar campañas nacionales e internacionales para ejercer presión sobre el gobierno.³¹⁰

Por último, el reflujó del activismo sindical a raíz de la persecución política, fue acompañado por la contención de las demandas por aumentos salariales. El Decreto 544 (*Ley Temporal de Estabilización Económica*) de diciembre de 1980, que congeló los salarios, fue aprobado por la segunda Junta cívico-militar –ya mucho más de derecha que la primera Junta- bajo la justificación de la contención de la espiral inflacionaria. Este decreto eliminó el derecho de los trabajadores al contrato colectivo y justificó la represión de protestas reivindicativas porque pondrían en peligro la seguridad nacional. Este marco jurídico, que prohibía de facto el activismo sindical, así como el descenso de las actividades económicas por la guerra, los sabotajes y el quiebre de muchas empresas deterioraron aún más las condiciones de vida de los sectores populares en la ciudad y en el campo. Por ejemplo, entre 1980 y 1990 los salarios reales disminuyeron un 64 por ciento, y el salario mínimo real de los trabajadores agropecuarios alcanzó en 1989 sólo el 36,6 por ciento del nivel alcanzado en 1978.³¹¹

En síntesis, el gobierno contaba con tres tipos de mecanismos para el disciplinamiento social y político: la represión y el terrorismo de Estado como formas más violenta de control; un marco normativo para suprimir la vigencia de los derechos civiles y una serie de instrumentos legales –especialmente la supresión de los contratos colectivos- para congelar los salarios. Fue en este contexto que, a partir de 1983, empezó el paulatino proceso de reorganización y reagrupamiento de las organizaciones sindicales y campesinas.

3.3. La cara “civil” de la contrainsurgencia

En los análisis de la evolución de la guerra civil salvadoreña se ha prestado mucha atención a los aspectos militares y diplomáticos del conflicto. Indudablemente los recursos destinados por el gobierno estadounidense a la modernización del ejército salvadoreño, al ataque de las bases de

³¹⁰ La incomunicación de los presos durante 15 días fue regulada en el marco del Decreto 50. Véase, Delegation of Labor-, Legislative-, Religious Leaders, *El Salvador: Labor Rights Denied*, New York, Labor Campaign El Salvador, 1988, pp. 7-16.

³¹¹ Los datos sobre la evolución de los salarios son tomados de Alexander Segovia, *Transformación estructural y reforma económica en El Salvador. El funcionamiento económico de los noventa y sus efectos sobre el crecimiento, la pobreza y la distribución del ingreso*, Guatemala, F&G Editores, 2002, p. 18 y 161; Sobre las razones de la movilización social en los ochenta véase, Manuel Rojas Bolaños: “Luchas sociales urbanas en Centroamérica en los años 80”, Marta Elena Arzú y Rolando Castillo (eds.): *Centroamérica. Balance de la década de los 80. Una perspectiva regional*, Madrid, CEDEAL, 1993; CINAS, *op. cit.*, 1985, pp. 12-153.

apoyo del FMLN y al convencimiento de la opinión pública internacional, particularmente estadounidense, de las virtudes democráticas del régimen salvadoreño fueron aspectos clave para determinar el desenlace del conflicto.³¹² Pero paralelamente a la confrontación armada y la respuesta represiva, el ala reformista del gobierno –el PDC y la fracción moderada de las Fuerzas Armadas– diseñó una estrategia para construir y consolidar lealtades políticas dentro del movimiento popular y contrarrestar la influencia social de la izquierda. Esta estrategia incidió en la reestructuración del campo político, al crear organizaciones populares de campesinos beneficiarios de la reforma agraria y de los empleados públicos, que contaban con el reconocimiento gubernamental.

El “reformismo contrainsurgente”, que puede ser definido como un intento desde el aparato gubernamental para resolver la pérdida de hegemonía del bloque dominante, pasó por distintas etapas. En la primera, que inició con el golpe de estado de octubre de 1979 y abarcó las primeras dos juntas cívico-militares, se pusieron en práctica las reformas sociales y económicas más importantes, como los Decretos que dieron inicio a la reforma agraria. La nacionalización del comercio exterior de los principales bienes agroexportadores (café, azúcar y algodón) era una medida tanto económica como política que buscaba acceder a divisas y debilitar a las fracciones agroexportadoras de la oligarquía. Después de la ofensiva del FMLN en 1981 inició una segunda etapa, donde las acciones de la Junta de Gobierno, ahora encabezada por Napoleón Duarte, tenían la finalidad de crear un nuevo marco político-institucional para legitimar la participación de distintas opciones partidistas en el sistema político pero sin incorporar a la izquierda.

En el plano de las reformas socioeconómicas, la Reforma Agraria debería ofrecer un marco institucional adecuado para la organización sectorial campesina y para debilitar el poder social y económico de la oligarquía terrateniente. De acuerdo al Decreto 153 (*Ley Básica de la Reforma Agraria*) de marzo de 1980, las expropiaciones deberían afectar a todas las propiedades que excedieran las 100 has, cuando fueran tierras de mejor calidad, y 150 has en tierras con menor calidad.³¹³ Bajo

³¹² La estrategia de la guerra de baja intensidad en El Salvador contempló las siguientes medidas: modernización del mando y del equipamiento de las Fuerzas Armadas, programas civiles de reconstrucción, operativos psicológicos, defensa civil, programas asistencialistas y de transformación estructural, ayuda económica y apoyo al empresariado salvadoreño. Véase, D. Siegel y J. Hackel, *op. cit.*, 1990; Lilia Bermúdez, *Guerra de Baja Intensidad. Reagan contra Centroamérica*, México, Siglo XXI, 1989, especialmente pp. 142-160.

³¹³ Los datos sobre la reforma agraria se basan principalmente en los siguientes textos: Cristóbal Kay, “Estructura agraria, conflicto y violencia en la sociedad rural de América Latina”, *Revista Mexicana de Sociología*, México, Vol. 63, No. 4, octubre-diciembre 2001, pp. 159-195; Margarita Flores, “El Salvador: trayectoria de la reforma agraria, 1980-1998”, *Revista Mexicana de Sociología*, México, Vol. 60, No. 4,

supervisión y con el financiamiento de AID se inició el proceso de transferencia agraria principalmente en zonas que, como Usulután, eran consideradas estratégicas por su importancia económica y por la presencia guerrillera. Para instrumentar la reforma, que contempló tres momentos, se recurrió al ya existente ISTA y al ejército. La Fase I (Decreto 154 del 6 de marzo de 1980) afectaba a las fincas mayores de 500 has y tenía como finalidad crear cooperativas. De manera inmediata fueron expropiadas 326 propiedades –muchas de las cuales con las mejores tierras y con cultivos dedicados a la exportación- cuyos dueños fueron indemnizados con bonos estatales. La población objetivo eran los mismos trabajadores de las fincas que tuvieron que formar asociaciones campesinas como requisito para acceder a la tierra. Estas cooperativas, administradas por ingenieros agrícolas y funcionarios del ISTA, operaban como grandes empresas agropecuarias dedicadas a cultivos para la exportación, por lo cual el modo de vida de los trabajadores agrícolas no cambió sustancialmente, comparado con el período anterior. Si bien ahora eran “socios” de la cooperativa, seguían trabajando con una lógica de trabajadores asalariados, sólo que ahora bajo la dirección financiera, administrativa y técnica del Estado. La falta de acceso individual a la tierra, junto a la exposición a la violencia de la guerra civil, contribuyó a que el compromiso de muchos socios con las cooperativas no era muy profundo, lo cual explica que muchas cooperativas fueron rápidamente abandonadas.³¹⁴

La Fase II era considerada como aquella parte de la reforma que tendría el mayor impacto sobre la distribución de la tierra porque afectaría a propiedades entre 245 y 500 ha, que era la mayoría de las fincas cafetaleras. Sin embargo, nunca fue implementada y con la aprobación de la Constitución en 1983 fue suprimida de manera definitiva, al fijarse como límite máximo de la propiedad 245 has.³¹⁵ La Fase III (Decreto 207 del 28 de abril de 1980), tenía como propósito crear un sector de pequeños

octubre-diciembre 1998, pp. 125-151; Michael W. Foley et.al., *Tierra, Paz y Participación. El desarrollo de una política agraria de posguerra en El Salvador y el papel del Banco Mundial*, Washington, Washington Office on Latin America, Julio de 1997; D. Browning, *op.cit.*, 1983;

³¹⁴ La Fase I afectó aproximadamente a un 18 por ciento de la tierra cultivable (es decir, unas 206,000 has) pero en 1982 de las 326 propiedades expropiadas 28 propiedades habían sido abandonadas y 21 estaban en peligro de ser abandonadas porque el conflicto militar las afectaba directamente. Según Browning, un sondeo realizado entre beneficiarios de la Fase I a principios de la reforma agraria evidenciaba que, si bien todos consideraban que su situación personal había mejorado gracias a la reforma, sólo la mitad estaba a favor de mantener las cooperativas de producción, mientras el resto señalaba su preferencia por el cultivo individual y que se transformaran las cooperativas de producción en unas de servicios. Véase, D. Browning, *op.cit.*, 1983, pp. 413 – 418.

³¹⁵ La suspensión de la Fase II se debió en parte a la resistencia de los sectores terratenientes y en parte a la velocidad con la cual el gobierno pretendía llevar a cabo la reforma agraria –finalmente se trataba de ganar una guerra- lo cual rebasaba las capacidades administrativas y los recursos humanos del ISTA como institución responsable.

propietarios. Por medio de este decreto 72,000 has –un 5 por ciento de las tierras cultivables- fueron distribuidas.³¹⁶

Por medio de la reforma agraria el estado distribuyó 296,257 has de tierras cultivables y benefició a unas 85,000 familias. Una tercera parte de los beneficiarios se organizó en las cooperativas de la Fase I, mientras el resto obtuvo títulos individuales. Los antiguos dueños recibieron una indemnización del estado, financiadas principalmente con fondos de AID, una deuda que tuvieron que asumir los beneficiarios, comprometiéndose a pagar en 30 años y con tasas de interés del 6 por ciento.³¹⁷ La reforma agraria se detuvo en 1983, cuando ARENA aprovechó su control mayoritario en la Asamblea Legislativa para poner fin a la Fase I y III de la reforma.³¹⁸

El impacto de la reforma agraria en la distribución de la tierra y las condiciones de vida de la población rural ha sido objeto de controversia.³¹⁹ No cabe duda que la reforma agraria contribuyó a cambiar la distribución de la tierra, lo cual benefició aproximadamente a una quinta parte de las familias que vivían en el campo. Las familias que resultaron más beneficiadas fueron las que recibieron tierra con la Fase I de la reforma, porque se trataba de las tierras más fértiles y en las mejores regiones productivas del país, mientras los arrendatarios, beneficiados por la Fase III,

³¹⁶ Para esto se establecía la posibilidad del traspaso de tierras agrícolas a los cultivadores directos para crear minifundios con una superficie de 7 has. Pero el traspaso dependía de la solicitud del beneficiario que tenía que hacer el trámite ante la institución estatal FINATA (Financiera Nacional de Tierras Agrícolas, institución estatal que existió de 1980 a 1994). Esta institución asumió la deuda con el viejo propietario, quien recibiría 50 por ciento del precio de la propiedad en efectivo y el resto en bonos, de acuerdo con el valor fiscal declarado de la propiedad. El beneficiario tenía que comprometerse a pagar la deuda de la compra de la tierra en un lapso de 30 años. Véase, M. Flores, *op.cit.*, 1998, pp. 134-137.

³¹⁷ Véase D. Siegel y J. Hackel, *op.cit.*, 1990, pp. 155-165; A. Álvarez y J. Chávez, *op.cit.*, 2001, pp. 35-36; Michael W. Foley et.al., *Tierra, Paz y Participación. El desarrollo de una política agraria de posguerra en El Salvador y el papel del Banco Mundial*, Washington Office on Latin America, Informe, Julio de 1997, p. 2, M. Lungo, *op.cit.*, 1991, p. 90ss.

³¹⁸ Véase, D. Siegel y H. Hackel, *op. cit.*, 1990, p. 164.

³¹⁹ Entre 1995 y 1996, la revista *Latin American Research Review* publicó un debate interesante entre Seligson, Diskin y Paige acerca de las transformaciones en la estructura agraria en El Salvador, entre la década de los años setenta y noventa, y sus posibles consecuencias políticas. Seligson argumenta que había una tendencia a la baja en la demanda por tierra debido a los cambios demográficos en el agro (principalmente por la migración), por lo cual la desigual distribución de la tierra ya no funcionaría como posible detonador de una movilización social como en los setenta. En cambio, Diskin y Paige señalan que, pese a la distribución de tierra en el contexto de la reforma agraria y los Acuerdos de Paz, el problema de la concentración de la tierra, y por tanto el potencial por el descontento social, subsiste. Véase, Mitchell A. Seligson, “Thirty years of Transformation in the Agrarian Structure of El Salvador, 1961-1991”, *Latin American Research Review*, Albuquerque, Vol. 30, No. 3, 1995, pp. 43-74; Martin Diskin, “Distilled Conclusions: The Disappearance of the Agrarian Question in El Salvador”; J. M. Paige, “Land Reform and Agrarian Revolution in El Salvador: Comment on Seligson and Diskin”, M. A. Seligson, “Agrarian Inequality and the Theory of Peasant Rebellion”, los tres textos se encuentran en *Latin American Research Review*, Albuquerque, Vol. 31, No. 2, 1996, pp. 111-157.

obtuvieron en general lotes pequeños, de un promedio de 1,6 has, y de baja calidad productiva.³²⁰ Aunque la reforma afectó finalmente sólo dos terceras partes de la superficie prevista en 1980, esto equivalía a un 20 por ciento de las tierras agropecuarias del país. No obstante, esta transformación agraria no contribuyó a disminuir la pobreza en el campo: de acuerdo al Banco Mundial, citado por Diskin, a principios de los años noventa el 55,7 por ciento de la población rural vivía por debajo de la línea de pobreza y el 81 por ciento no podía cubrir las necesidades básicas.³²¹

Mientras en el caso de los pequeños propietarios, la explicación por el fracaso para mejorar el ingreso familiar reside en el tamaño del lote que no era suficiente para permitir la autosuficiencia, las razones por el fracaso de las cooperativas fueron más complejas: por una parte, al encontrarse entre dos fuegos, muchos de los trabajadores en las zonas más conflictivas decidieron abandonar las cooperativas. Por otra parte, las cooperativas no tenían los títulos de propiedad mientras no habían saldado sus deudas, por lo cual no podían acceder a créditos para modernizar los cultivos. Esta situación se convirtió en un obstáculo importante para la viabilidad económica de las cooperativas. Atrapadas entre diferentes instituciones estatales –bancos, institutos estatales de comercialización de los productos agropecuarios o el ISTA- las cooperativas no tuvieron mucho margen de maniobra para invertir en la diversificación productiva. Esto, junto a factores como el deterioro de los precios internacionales de los principales productos agropecuarios de El Salvador, la corrupción de los funcionarios gubernamentales en las instituciones de comercialización como INCAFE, y la transferencia de las ganancias a los gastos de la guerra, impidió que las cooperativas se convirtieran en efectivos mecanismos de modernización productiva y de desarrollo rural.³²²

La Democracia Cristiana y las organizaciones populares

Aunque los resultados socioeconómicos de las reformas, especialmente de la reforma agraria, son controversiales, su impacto político fue indiscutible. Al impulsar la unificación y consolidación de las bases sociales democristianas en torno al sector reformado contribuyeron de manera decisiva a la reorganización del campo político y al fortalecimiento de las organizaciones populares pro-gubernamentales.

La apuesta del gobierno estadounidense y de una fracción del ejército salvadoreño a una alianza con

³²⁰ Véase, M. Flores, *op.cit.*, 1998, pp. 139-140.

³²¹ En este estudio, por línea de pobreza se definió el ingreso que permite a un individuo comprar dos canastas básicas mínimas. Véase, M. Diskin, *op.cit.*, 1996, p. 117.

³²² Véase, M. Lungo, *op. cit.* 1991, p. 90.

el PDC, para estabilizar políticamente al país y aislar al FMLN, confirió en un inicio a Napoleón Duarte -presidente electo en 1984- una gran autonomía para impulsar un proyecto político y económico que buscaba consolidar un Estado intervencionista y un sistema corporativo que permitiría una participación controlada de las organizaciones populares en las instituciones públicas. De esta manera en El Salvador, a principios de los ochenta, sucedió un fenómeno paradójico: mientras en el resto de América Latina las reformas neoliberales empezaron a operar, el gobierno salvadoreño buscó establecer un Estado intervencionista para fomentar el mercado interno y promover la instauración de un fuerte sector autogestionario y cooperativista.³²³

El proyecto original del PDC consistía de una propuesta de integración social distinta a la izquierda revolucionaria y reformista. Siguiendo las propuestas del comunitarismo y de la doctrina socialcristiana que dominaban en la Democracia Cristiana latinoamericana de los sesenta y setenta como contrapropuesta al Marxismo, apostó a la organización de los sectores marginales en asociaciones comunales, gremios o cooperativas y a la colaboración entre instituciones estatales y estas asociaciones como mecanismos de integración social para alejar la influencia “marxista” de los sectores populares y garantizar, de esta manera, la estabilidad social y política.³²⁴ Por esto, la Fase I de la Reforma Agraria llevaba el sello del PDC al exigir como requisito para el acceso a la tierra la formación de asociaciones campesinas. Las federaciones regionales, que se establecieron para representar a las cooperativas del sector reformado, declararon en la coyuntura electoral de 1982 y 1984 su apoyo a los candidatos democristianos a cambio del compromiso público de impulsar políticas agrarias para mejorar la productividad de las cooperativas, condonar la deuda agraria, y proveer de créditos y asesoría.³²⁵

³²³ Véase, A. Segovia, *op.cit.*, 2002, pp. 14-29.

³²⁴ Sobre la teoría de la marginalidad, una de las bases de las políticas sociales promovidas por la Democracia Cristiana latinoamericana en la década de los sesenta y setenta véase, Mario Garcés, *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*, Santiago, LOM-Ediciones, 2002, pp. 240-258. Los círculos intelectuales católicos de Sudamérica, especialmente de Chile, jugaron, a través de sus publicaciones y contactos personales, un papel importante en la difusión del debate socialcristiano en El Salvador de los sesenta y setenta, contribuyendo de esta manera a la emergencia de distintas posturas políticas –radicales y moderadas– en los sectores cercanos al PDC. Estos insumos incidieron también en la elaboración del programa reformista que Napoleón Duarte intentó implementar. Sobre los vínculos con los partidos sociacristianos sudamericanos, véase, J. Cáceres Prendes, *op.cit.*, 1982, pp. 95-96.

³²⁵ Aunque el PDC también contaba con el apoyo de algunos sindicatos industriales, éstos no tenían la misma relevancia organizativa como las federaciones del sector reformado. Solamente una central democristiana -la CTS (Central de Trabajadores Salvadoreños)- parece haber sido más relevante porque en 1986 declaraba contar con unos 45,000 afiliados, mayoritariamente trabajadores del sector estatal, especialmente en los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas. Sin embargo, la falta de registros de afiliados en este caso (como en el caso de todos los sindicatos del sector público en la década de los ochenta) impide confirmar este número.

Las declaraciones públicas de apoyo en las campañas para las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1982 y las elecciones presidenciales de 1984 consolidaron los lazos entre PDC y una amplia gama de organizaciones populares reformistas a partir de la promesa que el respaldo electoral al PDC posibilitaría la realización de las reformas pendientes. En esta coyuntura se fortaleció la UPD como representante de la alianza heterogénea de organizaciones gremiales y sindicales que se había formado en 1980 para representar la opción del centro político frente al movimiento popular de izquierda.³²⁶ Así, antes de las elecciones de 1983 la UPD firmó el llamado Pacto social con Duarte que incluía el compromiso de profundizar la reforma agraria, resolver el problema del endeudamiento del sector reformado y ampliar los espacios institucionales de concertación entre organizaciones populares y gobierno, a cambio del voto de los agremiados de la UPD.

Pero el gobierno de Duarte, que tomó posición en 1984, se caracterizó más bien por el paulatino abandono del proyecto estatizante y comunitarista y por la implementación de medidas estabilizadoras para introducir una “economía social del mercado”.³²⁷ El “paquetazo” -como popularmente fueron llamadas las medidas de estabilización económica implementadas en 1986 para controlar la inflación- generó tensiones sociales y un nuevo ciclo de protesta en contra del gobierno que produjeron fracturas entre las bases organizadas del PDC y un fraccionamiento de la UPD: mientras organizaciones como ANIS y CTS se incorporaron a la alianza anti-gubernamental de la UNTS, la UCS y la CGT mantuvieron su posición progubernamental y formaron la UNOC.

En síntesis, aunque el Pacto social de 1983 no sobrevivió el “paquetazo” económico de 1986 sentó las bases para una nueva relación entre Estado y organizaciones populares que era inaudita para El Salvador. El Pacto, concebido como una estrategia política para reconstruir un nuevo orden social y político fundamentado en ideas comunitaristas, puede considerarse un primer reconocimiento público, por parte del Estado, de las demandas de las organizaciones populares por una reforma social y política. Se trataba, pues, de un intento por construir, desde el gobierno, una nueva hegemonía a partir de un consenso amplio que no cuestionaba los valores fundamentales de la Democracia Cristiana, como la propiedad privada y la familia. En función de estos propósitos, el

³²⁶ En 1980 la UPD (Unión Popular Democrática) estaba conformada por las centrales sindicales socialcristianas CTS y CTD (Central de Trabajadores Democráticos), la organización campesina UCS y la asociación indígena ANIS (Asociación Nacional Indígena Salvadoreña). “Más que una demostración de fuerza.” *Inforpress Centroamérica*, No. 688, 8 de mayo de 1986, pp. 9-11.

³²⁷ Véase, A. Segovia, *op. cit.*, 2002, p. 19.

gobierno abrió espacios de concertación para involucrar a los dirigentes gremiales y sindicales en la toma de decisiones socioeconómicas relacionadas con cuestiones salariales y las condiciones de trabajo. Duarte nombró a dirigentes de la UPD a cargos públicos relacionados con la reforma agraria, promovió el agrupamiento de las cooperativas en federaciones supervisadas por el Ministerio de Agricultura y abrió espacios de concertación entre autoridades y representantes de trabajadores para resolver huelgas y paros.

Pero en medio de la guerra -lo cual significaba la concentración de los recursos públicos en los rubros de defensa y seguridad pública- y una aguda crisis económica, aliviada solamente por la ayuda económica de Estados Unidos, la incidencia de estos espacios de concertación en las políticas económicas o sociales fue poca.³²⁸ En cambio jugaron un papel importante para la reorganización del movimiento popular: por una parte fungieron como espacios para visibilizar al movimiento popular pro-gubernamental por medio del reconocimiento público por el gobierno (lo cual contrastaba con el ninguneo gubernamental de décadas anteriores) y, por otra parte, contribuyeron a la rearticulación del movimiento gremial de la izquierda, como se verá más adelante.

Para enfrentar la pérdida de legitimidad a partir de 1986 el gobierno de Duarte se apoyó en los mismos mecanismos clientelares que antes habían usado los gobiernos militares. Por ejemplo, las organizaciones gremiales CGT y UCS, que desde muchos años atrás habían servido como mecanismos de cooptación para contrarrestar la influencia de las organizaciones de oposición, ejercieron la misma función bajo el gobierno democristiano,³²⁹ convirtiéndose de esta manera en piezas claves de apoyo para el régimen. Esto les permitió también consolidar sus vínculos con

³²⁸ La ayuda militar y económica estadounidense a El Salvador en los años ochenta alcanzó cantidades impresionantes. Mientras en 1980 el gobierno estadounidense transfirió 64,5 millones de dólares al gobierno salvadoreño (incluyendo 6 millones de dólares de ayuda militar), en 1982 fueron 302 millones de dólares de los cuales 80 millones eran ayuda militar. Entre 1985 y 1989 la administración de Ronald Reagan otorgó 1,848 mil millones de ayuda económica que se usó principalmente en tres rubros: transformación agraria, la creación de una base para la reorientación del modelo económico hacia las exportaciones no tradicionales y reforma política. Véase, H. Byrne, *op.cit.*, 1996, p. 102 y p. 142 y A. Segovia, *op.cit.*, 2002, pp. 99-104; Sobre el proceso de militarización y la ayuda militar estadounidense en el contexto regional, véase, Raúl Benítez Manaut, “La guerra en Centroamérica: Dinámica del proceso de militarización y tendencias”, *Síntesis. Revista Documental de Ciencias Sociales Iberoamericanas*, Madrid, No. 7, enero-abril 1989, pp. 130-157.

³²⁹ Por ejemplo, la UNTS señaló frecuentemente al Ministro de Agricultura y Ministro de Cultura del gobierno democristiano como responsables de los intentos para dividir y cooptar el movimiento sindical. Véase, por ejemplo, “La corrupción: un nuevo frente contra Duarte”, *Inforpress Centroamericana* No. 683, 3 de abril de 1986, p. 7.

organismos estadounidenses como AIFLD o el sindicato estadounidense AFL-CIO y acceder a importantes recursos económicos.³³⁰

El agotamiento del proyecto político demócrata cristiano

La lógica militar dominaba también en el diseño de las reformas políticas para instalar un sistema electoral más competitivo, que permitiera organizar la alternancia en el gobierno por medio de elecciones no fraudulentas. Para debilitar la justificación de la lucha armada, se trataba de otorgar legitimidad a las instituciones representativas, conservando a la vez la exclusión política de la izquierda. En este sentido, los tres procesos electorales, llevados a cabo en 1982, 1984 y 1985 para elegir una Asamblea Constituyente, presidente, diputados y presidentes municipales fueron clave porque pusieron en práctica nuevas reglas del juego para la apertura controlada del sistema político que se legitimaba fundamentalmente a partir de la realización de elecciones no fraudulentas.³³¹

Varios mecanismos permitieron que una sensación de normalización política se difundiera en la sociedad salvadoreña y se proyectara hacia el exterior, pese a la continuidad de la guerra. En primer lugar, el fortalecimiento de un conjunto de instituciones y actores vinculados al procedimiento electoral –el Consejo Central de Elecciones como órgano especializado para realizar las elecciones, la presencia de periodistas y observadores internacionales para avalar los resultados-, además de recursos y tecnología especializada para la jornada electoral (papelería especial, tinta indeleble para el pulgar derecho, redes de computación para el conteo de votos)- hicieron más efectivos el principio de la secretividad del voto y más difícil la alteración de los resultados en el escrutinio final, asegurando, por lo tanto, la confianza en el proceso mismo y en los resultados. En segundo lugar, la participación de candidatos civiles (y no militares), provenientes de partidos políticos ideológicamente diferentes (aunque todos de derecha), permitió instalar dos de las prácticas constitutivas de la democracia liberal: la competencia entre distintas fuerzas políticas y la alternancia.³³² Estas medidas, orientadas a hacer más confiables las instituciones representativas – al menos para aquella parte de la población que no simpatizaba con la guerrilla-, permitieron que en

³³⁰ La CGT decía que contaba con 40,000 afiliados, mientras la UCS declaraba contar con 180,000 afiliados, principalmente los socios de unas 115 cooperativas del sector reformado. Como en el resto de los casos, estas cifras no son verificables pero permiten entender que la mención de los números era una estrategia para mostrar la propia relevancia como vocero de un sector en el espacio político. Véase, “Más que una demostración de fuerza”, *op.cit.*, 8 de mayo de 1986.

³³¹ Para analizar el papel de las elecciones en el restablecimiento del orden sociopolítico en los países centroamericanos, véase, E. Torres-Rivas, *El tamaño de nuestra democracia*, San Salvador, Istmo Editores, 1992; Magdalena Cervantes Alcayde, *Elecciones en El Salvador ¿Tránsito a la Democracia?*, Tesis de Licenciatura, México, FCPyS/UNAM, 1999, especialmente Capítulos 3 y 4.

³³² Véase, *Ibid.*, especialmente pp. 109-127.

el campo político salvadoreño se restableciera una racionalidad política autónoma con lógicas electorales que funcionaran separadas de la dinámica de las luchas sociales.

La reorganización del campo político condicionó y moldeó las prácticas de los actores, incluyendo la oposición pero con resultados variados. En el caso de la derecha oligárquica, ella se apropió de las nuevas prácticas de participación electoral y representación política, al reagruparse en torno al partido ARENA. Después de décadas en las cuales los sectores empresariales habían dejado el gobierno en manos del ejército, la instauración de un sistema electoral más competitivo hizo que empezaran a utilizar las estrategias político-electorales -campanas mediáticas, búsqueda de mayorías, etcétera- para extender su influencia entre amplios sectores y los espacios institucionales, como la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa, donde tenían mayoría, para bloquear las iniciativas gubernamentales.³³³

El destino del PDC fue paradójico y, hasta cierto punto, trágico: cuando en 1984 pudo ocupar la posición política adecuada para impulsar sus propuestas reformistas diseñadas desde los años cincuenta, este momento coincidió, en el resto de América Latina, con el cuestionamiento neoliberal de las ideas desarrollistas e intervencionistas. Aunque más afines en contenido y estrategias a la época de la Alianza por el Progreso, las reformas democristianas tuvieron que comprobar su viabilidad política y económica en un contexto caracterizado por la guerra civil y el ascenso internacional del proyecto neoconservador y neoliberal, lo cual posiblemente explica el poco éxito que tuvieron. Otro factor fueron los cambios en las políticas del gobierno estadounidense: La incorporación del PDC a la junta cívico-militar de 1979 se realizó bajo la administración Carter, lo cual dio un mayor margen de maniobra al proyecto reformista salvadoreño. En 1981, bajo el gobierno de Ronald Reagan, se dio la adhesión ideológica del gobierno estadounidense al proyecto neoliberal. Para El Salvador esto significó que el apoyo económico estadounidense se desplazó del fomento a las reformas estructurales redistributivas (especialmente la reforma agraria) a subvencionar la iniciativa privada. A partir de 1983, los programas de la agencia estadounidense AID fueron orientándose cada vez más hacia la modernización y el fomento del sector privado, canalizando recursos a la inversión privada en actividades productivas no-tradicionales -maquilas o bienes agroexportadores no tradicionales- y la exportación hacia el mercado estadounidense. Esta estrategia coincidía con los esfuerzos de una parte del sector empresarial por reorientar sus inversiones de las actividades agrarias y agroindustriales al sector servicios, comercio y financiero

³³³ Véase, M. Lungo, *op. cit.*, 1991, p. 136; M. Vázquez, *op. cit.*, 1997, p. 223.

para escapar, de esta manera, del estancamiento productivo que sufría el sector agrario a raíz de la guerra y el deterioro de los precios de ciertos bienes agropecuarios en el mercado internacional.

Podríamos concluir, entonces, que las políticas democristianas para transformar el modelo económico hacia uno más intervencionista fueron una motivación importante para que estos grupos empresariales diseñaran una contrapropuesta política, económica e ideológica, que promovía la libertad de mercado y estaba afín con la propuesta neoliberal que para entonces ya se estaba imponiendo en el resto de América Latina. En esta reorientación productiva la fundación FUSADES, instaurada en 1983 por profesionales y empresarios salvadoreños cercanos a ARENA con el objetivo de servir como tanque de pensamiento que elaborara estudios y propuestas para impulsar la liberalización de la economía, empezaba a jugar un papel cada vez más importante.³³⁴

La precaria situación de la economía salvadoreña fue un obstáculo crucial para la puesta en práctica del proyecto democristiano. Debido a la falta de recursos gubernamentales, la intervención estatal en la economía fue, incluso durante su auge en los ochenta, siempre por debajo del nivel de intervención estatal de otros países latinoamericanos durante el periodo desarrollista. Los ingresos públicos, que se obtuvieron del monopolio estatal sobre la comercialización exterior del café y azúcar y la ayuda económica estadounidense, sirvieron principalmente para cubrir los costos de la contrainsurgencia y financiar los desequilibrios macroeconómicos para evitar la hiperinflación, y no para ejecutar proyectos de inversión del sector público o incentivar una reorientación productiva.³³⁵ Por otra parte, las políticas económicas fueron saboteadas por otros actores políticos: ARENA, por ejemplo, aprovechó su mayoría legislativa para bloquear la Reforma Agraria, mientras los escuadrones de la muerte exterminaron no sólo supuestos colaboradores del FMLN sino también cooperativistas del sector reformado y técnicos del ISTA. La guerrilla, por su parte, para incrementar la presión militar sobre el gobierno de Duarte y evidenciar la falta de consenso político interno, dirigió sus actos de sabotaje en contra de la infraestructura del país y también en contra del sector reformado.

En síntesis, la propuesta política democristiana, centrada en una combinación de medidas militares de contrainsurgencia y reformas sociopolíticas, se volvió inviable por el cambio ideológico internacional que promovió la liberalización económica y el desmantelamiento del Estado

³³⁴ FUSADES: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo. Véase, D. Siegel y H. Hackel, *op. cit.*, 1990, pp. 164-165. J. Paige, *op. cit.*, 1997, pp. 194-198.

³³⁵ Sobre el carácter de los ingresos públicos y el impacto de las medidas económicas, véase M. Lungo, *op. cit.* 1991, p. 109; A. Segovia, *op. cit.*, 2002, pp. 93-128.

intervencionista. No obstante, los “efectos no intencionados” de la política democristiana merecen ser tomados en cuenta: en primer lugar, jugó un papel importante (posiblemente más importante que la amenaza militar del FMLN) en el proceso de unificación política de la derecha porque el rechazo del sector empresarial y de la oligarquía al proyecto de transformación estructural contribuyó a su reorganización en torno al proyecto neoliberal. En segundo lugar, se creó con el sector reformado un nuevo actor colectivo -los cooperativistas-, los cuales ampliaron con sus demandas la agenda política del movimiento popular salvadoreño. En tercer lugar, la apertura controlada del juego político-electoral a nuevos actores preparó las condiciones políticas para la integración política del FMLN a partir de los acuerdos de paz de 1992. Pero para que sucediera esto, tenía que darse el cambio de gobierno con la victoria electoral de ARENA en 1989.

3.4. Reagrupamientos organizativos y la constitución de la UNTS

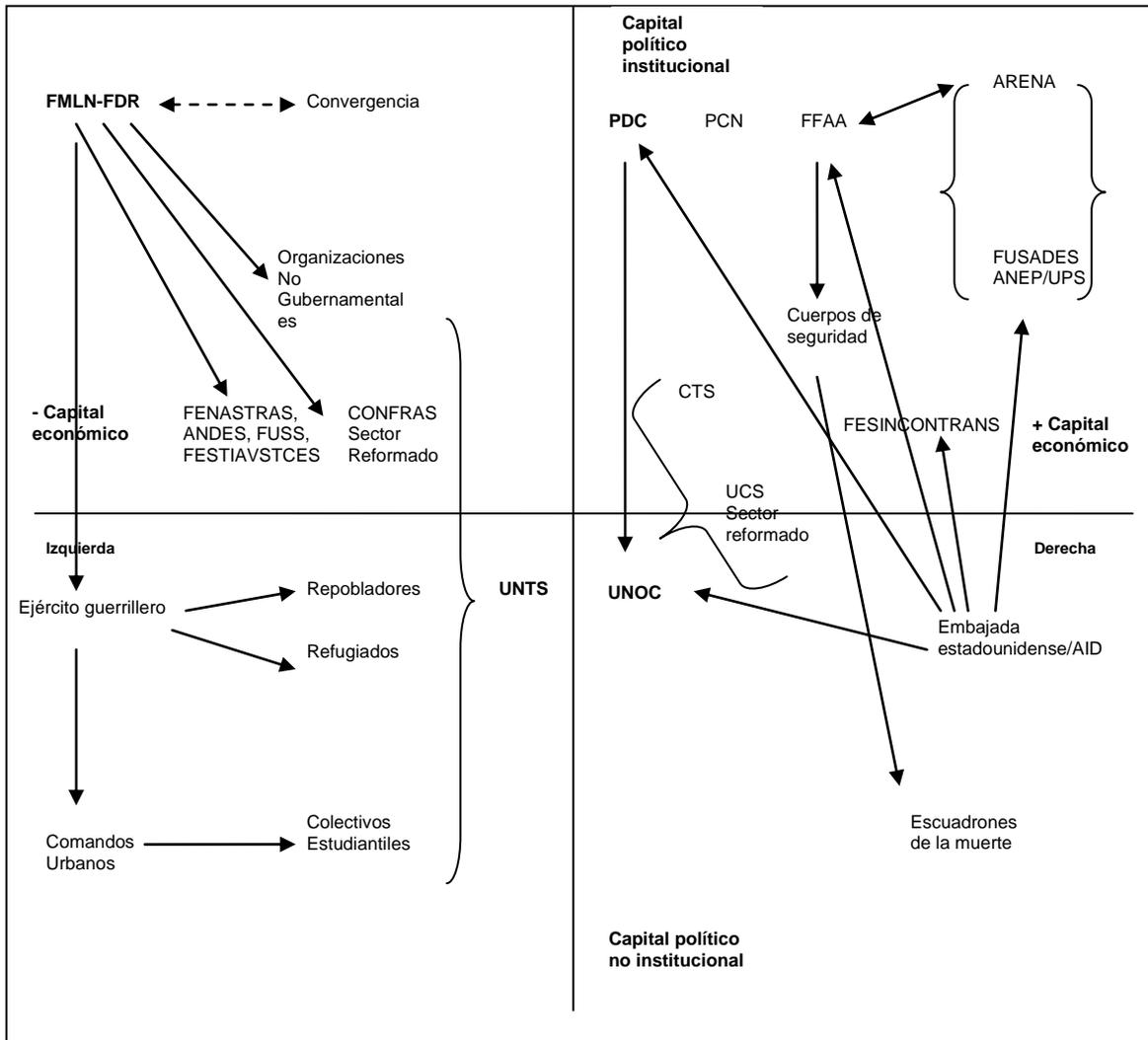
Cuando se fundó la UNTS, a mediados de los años ochenta, como una alianza de organizaciones populares anti-gubernamentales, las condiciones de posibilidad para la participación de los militantes guerrilleros en las diversas formas de la acción colectiva habían cambiado. Esto se debió a los siguientes factores: por una parte, la ola de violencia de principios de los ochenta destruyó en las ciudades y en las zonas controladas por el ejército los espacios de sociabilidad, donde había sido posible el activismo social de los cuadros guerrilleros. En las zonas rurales con fuerte presencia guerrillera las redes de oposición cambiaron de naturaleza al convertirse en bases de apoyo logístico para el FMLN, mientras los núcleos guerrilleros urbanos, que lograron sobrevivir la represión, actuaron en la absoluta clandestinidad y sin vincularse con la población. Esto significó que desapareció la práctica común de los militantes guerrilleros de los últimos años de los setenta, de ponerse al frente de las luchas sociales y organizaciones populares para convertir cada acción en un pequeño “asalto” al poder, debido al reflujo de la movilización social y la desintegración de los núcleos políticos en diversos espacios sociales.³³⁶ Por otra parte, antes de la guerra la oposición al gobierno se había organizado alrededor de varios “polos ideológicos” con identidades propias, que abarcaban desde el centro político (el PDC) hasta la extrema izquierda (BPR y FAPU). La polarización política llevó a la constitución de dos grandes bloques de acción política -el gobierno versus el FMLN-, los cuales se mantuvieron unidos hasta el fin de guerra, no obstante las diferencias internas. Por último, el estancamiento económico de los años ochenta afectó profundamente las condiciones de vida de los sectores populares -potenciales bases de la guerrilla- al deteriorar los salarios y elevar los precios. Como consecuencia de la persecución política y el

³³⁶ Véase, José Angel Moroni y David E. Spencer, *Strategy and Tactics of the Salvadoran FMLN Guerrillas. Last Battle of the Cold War, Blueprint for Future Conflicts*, London, Praeger, 1995, p. 116.

deterioro de las condiciones de vida emergió la necesidad social por organizaciones que defendieran el bienestar de sus agremiados sin recurrir a un discurso ideológico demasiado radical.

A raíz de estos cambios, la apertura de ciertos espacios –por cierto, limitados y supervisados-, en el contexto de la convocatoria a la Asamblea Constituyente en 1983, permitió el surgimiento de las primeras “organizaciones paraguas”, que buscaron agrupar a gremios, asociaciones campesinas y otras organizaciones populares sin distinción política para promover acciones solidarias entre sectores e impulsar demandas por reformas socioeconómicas y el cese de la guerra. Sin embargo, la apuesta a la “apoliticidad” no funcionó y para 1986 tanto la UNTS como la UNOC, las organizaciones “paraguas” más importantes, estaban claramente identificadas con uno de los dos bloques políticos en pugna. ¿A qué se debía? El diagrama 3.1 da una primera pista:

Diagrama 3.1. Actores del campo político salvadoreño 1989



Elaboración propia. Las flechas representan relaciones entre actores, las flechas unidireccionales indican jerarquías. Los corchetes representan alianzas entre actores.

El diagrama representa la lógica de acción dominante en la década de los ochenta y que denominamos la “politización polarizante” que profundizó la organización bipolar del campo político, condicionando no solamente el comportamiento del FMLN y del gobierno, sino también de las organizaciones populares aliadas a uno de los adversarios. La UNTS estaba conformada por organizaciones de distinto tipo (sindicatos, federaciones de cooperativas, colectivos estudiantiles y organizaciones de repobladores y refugiados), que compartían la oposición al gobierno y estaban vinculadas a través de sus dirigentes con las organizaciones político-militares del FMLN. Por esto los principios de clasificación para aglutinar sectores y oponerse a otros actores fueron políticos, más que sectoriales, lo cual se reflejaba en sus plataformas de demandas económicas y políticas. El

capital político de la UNTS se basaba en su capacidad de movilizar los agremiados de estos diversos sectores pero también en su vínculo clandestino con el FMLN.

La UNOC, en cambio, representaba mucho menos organizaciones que la UNTS. Sin embargo, agrupaba a organizaciones cuya relevancia residía en su reconocimiento institucional y legal, como por ejemplo las federaciones campesinas que representaban a las cooperativas del sector reformado. No se debe olvidar que el gobierno de Napoleón Duarte fue el primer gobierno en abrir espacios formales e informales a la consulta y participación de organizaciones gremiales en la definición de determinadas políticas sectoriales, lo cual daba a los representantes de estas organizaciones un hasta estos momentos desconocido estatus de legitimidad y reconocimiento público. Con el apoyo del gobierno democristiano y el financiamiento que canalizaba el gobierno estadounidense vía la AID, la UNOC disponía de suficientes recursos para contraponerse a la UNTS como una opción popular del centro y un actor estratégico en el campo político salvadoreño.

El diagrama permite también apreciar los cambios de posición de la derecha “antisistémica” alrededor de ARENA y las organizaciones empresariales ANEP y UPS.³³⁷ Estos actores supieron apropiarse de las estrategias electorales de la democracia representativa sin por esto abandonar sus lazos (muchas veces a través de redes familiares) con las Fuerzas Armadas y con los escuadrones de la muerte.³³⁸ Asimismo, muestra gráficamente el relativo aislamiento del gobierno democristiano. Sólo podía contar con el apoyo de la UNOC, el apoyo económico y militar del gobierno estadounidense y las Fuerzas Armadas. Pero estas últimas, gracias al financiamiento externo, se habían convertido en una fuerza autónoma que estaba combatiendo su propia batalla en contra de la llamada subversión, además de adquirir cada vez más poder económico y financiero.

¿Cómo se llegó a estas constelaciones y cuál fue el proceso de constitución de las organizaciones “paraguas”? ¿Hasta qué punto pueden ser explicadas a partir de las prácticas del activismo político y social en la década de la guerra civil? En el contexto de las elecciones a la Asamblea Constituyente, la persecución gubernamental de la “subversión” coexistía con una cierta tolerancia a la actividad sindical, siempre y cuando los actores respetaran márgenes discursivos y de acción,

³³⁷ UPS: Unidad Productiva Salvadoreña; Agrupación de las principales asociaciones empresariales que nació en marzo de 1986 a partir del Foro de la Unidad Empresarial para la Defensa de la Libertad Económica y la Reactivación Nacional.

³³⁸ Según nuestro conocimiento, la reconstrucción de los vínculos profesionales y familiares entre las grandes familias empresariales, los oficiales del ejército y los escuadrones de muerte ha sido hasta ahora una tarea realizada principalmente por el periodismo de investigación. Algunos artículos y documentos pueden encontrarse en v.v.A.A. *op.cit.*, 2004.

limitándose a la formulación de demandas sectoriales muy específicas y sin evidenciar sus vínculos orgánicos con fuerzas partidistas. Para adaptarse a las nuevas condiciones, a diferencia de la década anterior, los actores de la protesta popular no explicitaban su identificación ideológica sino se representaron –y buscaron ser reconocidos– como defensores de intereses sectoriales que luchaban por mejores salarios, la libertad de la organización sindical y un control de los precios de consumo básico. En este contexto las organizaciones populares de izquierda tuvieron que negar –por cuestión de sobrevivencia– cualquier conexión orgánica con el FMLN. Sin embargo, el frente guerrillero reconocía al mismo tiempo la militancia de activistas suyos en estas organizaciones, justificando esta práctica con el rol que asumía el FMLN como vocero de la oposición al régimen que “defendía los intereses del pueblo”.³³⁹

Las organizaciones populares cercanas al gobierno usaban estrategias similares. Aunque sus vínculos gubernamentales se habían formalizado con el Pacto Social entre Napoleón Duarte y la UPD, así como la integración de algunos de sus dirigentes al gobierno democristiano, ellos no se presentaban como políticos sino como líderes sectoriales, que se habían relacionado con el gobierno sólo para servir mejor a sus bases.

El cambio en las estrategias discursivas que permitía omitir el interés partidista y hablar en nombre del sector representado cumplía con distintos propósitos: en primer lugar, fue una apuesta de los dirigentes cuyo peso político ante el gobierno dependía de su capacidad de movilizar las bases. Pero para reactivar a las bases de las organizaciones, distanciadas de la política por el temor a la violencia y las preocupaciones de la sobrevivencia cotidiana, había que tomar distancia de “la política” y estar en la capacidad de ofrecer beneficios inmediatos de la participación. Fueron estas estrategias “gremialistas” en el movimiento popular salvadoreño que dieron origen a las organizaciones “paraguas”, que agrupaban a actores sociales heterogéneos en cuanto a sus objetivos, la consolidación organizativa y el número de sus agremiados. El mecanismo para asegurar la acción unificada, pese a la diversidad, era bastante convencional: formar una dirección única en donde participaban los líderes de todas las organizaciones representadas.

Después de desaparecer los frentes de masas, la UPD fue la primera organización “paraguas” para proveer al PDC de una base popular organizada. En el caso de las organizaciones anti-gubernamentales, ellas realizaron entre 1983 y 1984 una serie de iniciativas –en promedio una por

³³⁹ Véase, M. Harnecker e Iosu Perales, *Guerra en El Salvador. Entrevistas con Comandantes del FMLN*, San Sebastián, Tercera Prensa, 1990, pp. 61-62.

año- para crear un movimiento laboral unificado a partir de la defensa de los intereses gremiales y pluralista en términos políticos. En un primer momento, las alianzas formadas por los propios actores gremiales para coordinar sus actividades en la nueva coyuntura política desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Funcionaron sólo durante un tiempo -a veces sólo unos meses para coordinar unas pocas acciones (paros, marchas, etcétera)- hasta que la persecución o las disputas entre distintas fuerzas políticas por controlar y capitalizar este espacio fragmentaron las alianzas y produjeron nuevos reagrupamientos, espacios y alianzas. La primera iniciativa registrada fue el MUSYGES, fundado en 1983, para potenciar las actividades de protesta por medio de actos solidarios entre federaciones industriales y asociaciones de empleados públicos. Fue el primer intento por reagrupar las fuerzas de izquierda después de los años de terrorismo de estado y estaba conformado por las grandes federaciones sindicales ligadas a las organizaciones de la izquierda armada,³⁴⁰ las principales asociaciones sindicales del sector público, entre ellas ANDES y los sindicatos no federados pero cercanos a la alianza revolucionaria como el sindicato del Seguro Social STISSS. La alianza adquirió un carácter más plural en términos políticos cuando, durante varios meses, participaron algunos sindicatos pro-gubernamentales, entre ellos el gremio de empleados municipales AGEPYM que los sindicalistas de izquierda consideraron un gremio apolítico y cercano a la derecha. La desintegración del MUSYGES se debió a la represión -varios dirigentes sindicales que participaron en la creación de este espacio (entre ellos el secretario general del sindicato del Instituto de Vivienda, que organizó la primera huelga de este periodo) fueron secuestrados y asesinados- y a las divisiones políticas de las FPL, después del asesinato de Mélida Anaya Montes y el suicidio de Cayetano Carpio en Managua en 1983, que llevaron a la desintegración de la federación FSR. Poco después de la desintegración del MUSYGES, en 1984 la mayor parte de los integrantes del MUSYGES convocaron a la conformación de la Coordinadora de Solidaridad con los Trabajadores, CST.³⁴¹

³⁴⁰ FENASTRAS estaba vinculada a Resistencia Nacional, la FSR a las FPL, FUSS y FESTIAVSCES al Partido Comunista. AGEPYM: Asociación General de Empleados Públicos y Municipales; MUSYGES: Movimiento Unitario Sindical y Gremial de El Salvador.

³⁴¹ En abril de 1983 Mélida Anaya Montes (Comandante Ana Maria) fue asesinada en Managua por militantes de las FPL y pocos días después Cayetano Carpio se suicidó bajo circunstancias poco claras. Aunque no hay pruebas y el proceso judicial se archivó con la muerte de Carpio, la dirección política de las FPL declaró que Carpio había ordenado el asesinato de Anaya Montes para remover a la principal representante de la fracción negociadora en la organización. Hay que señalar que fueron las tendencias pragmáticas del FMLN que resultaron beneficiadas de esta situación porque con el misterioso suicidio de Carpio desapareció el representante más emblemático de las posiciones radicales en el FMLN, lo cual fortaleció las posiciones que promovieron la moderación de los objetivos estratégicos para construir una amplia alianza política y buscar una solución negociada del conflicto. Tomando en cuenta que el trabajo sindical de las FPL antes de la guerra fue desarrollado por gente cercana a Cayetano Carpio y la coincidencia temporal entre la desaparición de la FSR y la crisis interna de las FPL hace suponer que existe una relación entre ambos procesos aunque no hemos encontrado pruebas de esto. Sobre las dudas en torno al suicidio de

La iniciativa más relevante en estos intentos de reorganización de la acción colectiva, por ser un antecedente directo de la UNTS, fue el Comité Celebración Iero de Mayo, convocado a principios de 1985. En 1984, la izquierda sindical se atrevió por primera vez desde 1980 a celebrar públicamente el Iero de Mayo, pero este acto se realizó a puerta cerrada y en un local sindical de una federación cercana al gobierno para no provocar la represión. El Comité Celebración Iero de Mayo se empezó a reunir a principios de 1985 para preparar el Iero de Mayo de 1985 y, si bien era una iniciativa de la izquierda, convocó también a sindicatos cercanos al PDC como una estrategia para reivindicar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, cuya defensa debería trascender los límites de los intereses e identidades partidistas. El Iero de Mayo de 1985 es importante desde nuestra perspectiva porque, si bien fue una manifestación pequeña comparada con las movilizaciones masivas de 1980, el sindicalismo urbano logró *re-tomar* el espacio público para la movilización popular y recuperar visibilidad política en una fecha central para el movimiento obrero internacional.

Una condición que facilitó el establecimiento de estas alianzas, dominadas por los gremios del sector público y las cooperativas del sector reformado, fue la creación por altos funcionarios democristianos de instancias de concertación. Concebidos originalmente como mecanismos para dirimir conflictos laborales en la administración pública, antes de que obtuvieran visibilidad en el espacio público, con la recuperación del sindicalismo anti-gubernamental se convirtieron en espacios en disputa. Este proceso puede ejemplificarse con el surgimiento del CCTEM y su transición de una instancia gubernamental en un espacio vital para la reorganización del sindicalismo público vinculado al FMLN. En 1984, los ministros democristianos convocaron a la formación de este Consejo para reunir representantes sindicales y gubernamentales para desactivar el ciclo de huelgas en el sector público, ofreciendo a los sindicalistas un espacio de negociación y reconocimiento estatal. Varias de las asociaciones sindicales convocadas (entre ellas ANDES y ATRAMEC) aprovecharon la oportunidad para invitar a otras organizaciones laborales del sector público a participar en el consejo -también estaban vinculadas al FMLN- hasta que las organizaciones más vinculadas al PDC abandonaron el Consejo Coordinador y el sindicalismo de izquierda lo dominó hasta fines de la guerra. No obstante esta correlación de fuerza, el CCTEM conservó su legitimación como un espacio de convergencia de diferentes fuerzas sociales porque

Cayetano Carpio, véase, José Antonio Carbonell, “El suicidio de Marcial ¿Un asunto concluido?”, Salvador Cayetano Carpio, *Nuestras montañas son las masas. Documentos y escritos de la revolución salvadoreña*, Viena, Ed. “Der Keil”, 1999, pp. 26-75 (Archivo personal de Mario Vázquez). La posición oficial de la dirigencia de las FPL se encuentra en M. Harnecker, *op.cit.*, 1993, pp. 327-364.

seguían participando asociaciones gremiales no identificadas con el PDC o con la izquierda y –tal vez más importante- porque los funcionarios del gobierno demócratacristiano reconocían en el Consejo Coordinador una contraparte estratégica para resolver conflictos laborales en el sector público.³⁴²

Si bien en este periodo se formaron otras alianzas más, muchos de los comités y coordinadoras desaparecieron sin dejar otra huella que sus siglas y es difícil reconstruir las organizaciones que las integraban. La aparición, desaparición y reconfiguración de las alianzas, siembre bajo otro nombre, nos habla de una lógica de acción surgida a partir de la necesidad de evitar la persecución cambiando nombres y siglas, pero también de una falta de organicidad de las alianzas que, al parecer, correspondían más a las exigencias de la coyuntura política y la guerra que a los propósitos proclamados de construir la unidad del movimiento popular.

La relevancia del CCTEM y del Comité Celebración Iero de Mayo reside en que fueron los antecedentes inmediatos para la reorganización del movimiento popular anti-gubernamental y de izquierda, en estos espacios se preparó la fundación de la UNTS para unificar y capitalizar el descontento social por el deterioro de las condiciones de vida –resultado de la crisis económica y la guerra- que estaba mermando el apoyo social al gobierno de Napoleón Duarte. De acuerdo a las estadísticas oficiales, el número de las huelgas legales se incrementó de 36 en 1984 a 54 en 1985 y según notas periodísticas el número de huelgas ilegales fue mucho más grande: 100 huelgas entre mediados de 1984 y mediados de 1985, y aproximadamente 200 huelgas en 1986. En cuanto a la asistencia a las marchas de la oposición, éstas crecieron de 5,000-10,000 participantes en 1985 a 40,000-60,000 en 1986. El impacto de estas primeras movilizaciones se debe a la participación de organizaciones de la UPD en las protestas, después de que sus dirigentes tomaran distancia del gobierno democristiano.³⁴³

La UNTS logró captar no sólo a los sindicatos industriales y asociaciones de empleados públicos, sino también a otros actores de mundo laboral, como un segmento de las cooperativas de la reforma agraria, representado por la confederación COACES, la organización indígena ANIS y las coordinadoras regionales de las organizaciones de repobladores y refugiados. Esto fue posible a raíz

³⁴² ATRAMEC: Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación y Cultura; CCTEM Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales. Véase, N. López, *op. cit.*, 20 de noviembre de 2000, p. 6; CINAS, *op. cit.*, 1985, p. 16 y 28.

³⁴³ Las cifras oficiales del número de huelgas provienen de OIT, *LABORSTA*, disponible en línea: <http://laborsta.ilo.org> (consultada el 20 de noviembre de 2004). Las cifras provenientes de las notas periodísticas provienen de H. Byrne, *op.cit.*, 1996, p. 144.

del descontento provocado entre estas organizaciones por los pocos resultados tangibles de las reformas gubernamentales y el vacío que dejó la ruptura de la UPD que permitió reagrupamientos y refundaciones de organizaciones que se incorporaron a la UNTS. Por ejemplo, la confederación de cooperativas del sector reformado COACES, aliada inicial del PDC, se separó del gobierno de Duarte en 1984 y fundó cuatro nuevas federaciones regionales que, en 1986, rompieron también públicamente con el PDC para integrarse a la UNTS. En 1988 formaron CONFRAS como un representante nacional de las cooperativas anti-gubernamentales del sector reformado. Aunque varios de los dirigentes regionales de CONFRAS –especialmente los de Usulután- fueron miembros clandestinos del ERP, la organización logró mantener un alto grado de autonomía política ante el FMLN para mantener aglutinadas a las cooperativas que no querían ligarse a la insurgencia.³⁴⁴

La UNTS prometía que en su interior se respetarían las diferentes identidades políticas y podrían participar los diferentes sectores organizados del mundo del trabajo –el sector público, la empresa privada, el sector reformado o el sector informal-, con diversas modalidades de organización (asociaciones, sindicatos, cooperativas, etcétera), así como grupos sociales emergentes, como el sector informal, los desplazados y los repobladores. Esta multiplicidad de actores se reflejaba en la plataforma programática: había reivindicaciones sindicales y laborales de anular las medidas de estabilización económica que afectaban las condiciones de vida de los sectores populares; demandas de los cooperativistas por ampliar la Reforma agraria, introducir un programa de créditos y asegurar la infraestructura en el campo; las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos por las violaciones a los derechos humanos y la persecución política. Pero la demanda central de la plataforma de la UNTS era el establecimiento de un diálogo nacional entre los diversos actores políticos y sociales para iniciar negociaciones y preparar una solución política al conflicto militar.³⁴⁵

Sin embargo, la UNTS como alianza entre organizaciones populares de izquierda y democristianas se quebró después de un año porque motivaciones y propósitos de los actores involucrados estaban demasiado encontrados. Los dirigentes sindicales vinculados al FMLN buscaron utilizar la alianza como una plataforma para incrementar el impacto social de sus denuncias en contra del gobierno y difundir en el ámbito nacional e internacional las posiciones del FMLN-FDR. Desde la perspectiva de los activistas y militantes del FMLN, que participaban en la UNTS, la protesta violenta y

³⁴⁴ COACES: Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador; CONFRAS: Confederación Nacional de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña.

³⁴⁵ La plataforma gremial y política de la UNTS en 1986 se tomó del artículo: “Cualquier cosa menos la DC”, *Inforpress Centroamérica*, No. 682, 20 de marzo de 1986, pp. 11.

contestataria que incluía la confrontación con los cuerpos de seguridad, el uso de bombas molotov, el sabotaje o la ocupación de los centros de trabajo, era una respuesta legítima a la violencia estatal. En cambio, el objetivo de los dirigentes de la UPD no era desestabilizar el gobierno de Duarte sino agrandar con la movilización la propia representatividad y, en consecuencia, su capital político para obtener mejores condiciones en las negociaciones con el gobierno.

Por tanto, en 1987 la UPD y la CTS, acusando a la UNTS de ser sólo un vehículo para difundir el programa del FMLN, se unieron a la UNOC, a la cual poco tiempo después se sumó también el gremio de empleados municipales AGEPYM. La constitución de la UNOC como base popular organizada del PDC y alternativa a la UNTS –identificada cada vez más con el FMLN– expuso de nuevo que las fronteras en el movimiento popular pasaban por las afinidades político-ideológicas.

Determinar hoy en día la influencia real de estas dos alianzas en la población resulta difícil, debido a la falta de registros de afiliados y la poca confiabilidad de los números publicados por las organizaciones. Tanto la UNTS como la UNOC difundieron los números de sus afiliados para confirmar su fuerza organizativa y su representatividad frente al adversario. Así cuando la UNOC declaraba tener 200,000 afiliados, la UNTS respondió que tenía 250,000. De pronto, la UNOC anunció que tenía 300,000. La manipulación de las cifras se facilitó por las dificultades institucionales para registrar sindicatos y asociaciones y porque los flujos externos de financiamiento hicieron innecesarios mantener una disciplina organizativa para recolectar las cuotas de los propios afiliados. De esta manera se dio un creciente desligamiento entre los números publicados y la realidad organizativa. Al final de la guerra ya nadie sabía a ciencia cierta cuántos afiliados había y en qué organizaciones estaban.³⁴⁶

Sin embargo, en el campo político tanto la UNTS como la UNOC fueron actores relevantes y reconocidos. En la guerra civil los adversarios tenían que comprobar su legitimidad, demostrando que contaban con respaldo popular y representaban intereses sociales. Este capital simbólico, que el FMLN y el gobierno democristiano necesitaban para mantener la guerra, fue suministrado gracias al apoyo de la UNTS y de la UNOC. De esta manera, las dos alianzas de organizaciones populares representaban dos proyectos de nación opuestos, lo cual impidió hasta la victoria electoral de

³⁴⁶Véase, Mark Anner, “¿Hacia la sindicalización de los sindicatos?”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LI, No. 573-574, julio-agosto de 1996, pp. 599-614, p. 600.

ARENA en las elecciones de 1989 –una elección que “reacomodó” las piezas del juego político- la formación de nuevas alianzas populares.³⁴⁷

3.5. El FMLN entre ofertas de negociación y “contraofensiva estratégica”

Antes de describir las lógicas de la participación de los militantes de las organizaciones político-militares en la representación gremial, se requiere explicitar la función que el FMLN asignó a las organizaciones sociales en distintos momentos del enfrentamiento y de acuerdo con su estrategia político-militar. Esto demostrará que el resurgimiento del movimiento popular opositor a partir de 1983/1984 no fue completamente “espontáneo”, sino en gran parte resultado de los esfuerzos de militantes civiles del FMLN, quienes –por instrucción del mando militar- empezaron a entrelazar diversas iniciativas de resistencia local y sectorial buscando elaborar plataformas de demandas sociales y políticas que se vinculaban con la agenda política de la guerrilla. Como este trabajo no se centra en la evolución de la guerra civil, los cambios en las estrategias político-militares del FMLN se analizarán primordialmente para responder a la pregunta por el papel asignado a la movilización política de las organizaciones populares.

Las estrategias político-militares del FMLN

En los balances retrospectivos de la ofensiva de 1980, realizados por Comandantes del FMLN, el momento más apropiado para la toma de poder hubiera sido el periodo entre marzo y mayo de 1980, cuando el ambiente insurreccional entre la población estaba en su punto más alto y más aguda la división en el bloque de poder y el ejército. Pero la ofensiva, pensada como una serie de ataques militares coordinados para provocar insurrecciones de la población local y levantamientos en los cuarteles no pudo llevarse a cabo hasta enero de 1981 por la falta de unidad entre las organizaciones político-militares y la falta de armamento. Esto permitió, así la lectura de la Comandancia del FMLN, que la alianza del PDC y las Fuerzas Armadas retomara la iniciativa para desarticular el movimiento revolucionario a través de la combinación de medidas reformistas y acciones contrainsurgentes.³⁴⁸

³⁴⁷ Esto no quiere decir que no hubo encuentros entre dirigentes de los dos agrupamientos. Por ejemplo, a mediados de 1988 un dirigente de la UNOC comentó ante un grupo de observadores estadounidenses que la dirigencia de la UNOC se estaba reuniendo con el comité ejecutivo de la UNTS para discutir la unificación de las acciones para enfrentar los hostigamientos en contra de sus miembros. Sin embargo, estas reuniones no produjeron acercamientos sustanciales hasta después del ascenso de ARENA al gobierno en 1989. Véase, *Delegation of Labor-, Legislative-, Religious Leaders, op.cit.*, 1988, p. 15.

³⁴⁸ Véase la entrevista con Joaquín Villalobos en M. Harnecker, *op.cit.*, 1983, p. 157.

En 1980 el terrorismo de Estado en contra de las organizaciones populares desarticuló la movilización política y provocó el retiro acelerado de activistas y dirigentes sociales a la clandestinidad. Si bien la incorporación de activistas y dirigentes sociales a las milicias de autodefensa y a las incipientes estructuras guerrilleras en las zonas rurales formó parte de la estrategia para construir aceleradamente una estructura militar apropiada para la ofensiva, también fue una estrategia de sobrevivencia para aquellos militantes que no pudieron (o no quisieron) abandonar el país. Pero el descabezamiento de las organizaciones por la represión y el desplazamiento forzado de sus dirigentes obstaculizó el proceso de unificación para convertir la Coordinadora Revolucionaria de Masas de un espacio de coordinación, conformado por representantes de las diferentes organizaciones, a un verdadero actor político unificado y organizado. La falta de suficientes cuadros experimentados en los frentes de masas en el momento de la ofensiva de enero de 1981 fue una de las razones por las cuales -según el análisis retrospectivo que realizó Rafael Menjívar Larín para la dirigencia de las FPL- fracasó la misma, al impedir la realización concertada de la huelga general que debía abrir paso a la insurrección popular.³⁴⁹

Las estrategias político-militares del FMLN pasaron, entre 1981 y la ofensiva de 1989, por tres momentos importantes que implicaron redefinir los objetivos estratégicos y adaptarse a los cambios en la coyuntura política interna y externa: En un primer momento -entre enero de 1981 y marzo de 1982- el FMLN se centró en la construcción de su retaguardia en el campo y la defensa de estas zonas ante el avance de las Fuerzas Armadas y su política de “tierra arrasada”. Esto incluía la construcción acelerada de redes de apoyo logístico que incorporaban a la población civil rural. A partir de diciembre de 1981 y hasta marzo de 1982 se realizaron también algunos ataques armados en los centros urbanos en contra de blancos estratégicos, como cuarteles, para mostrar la propia fuerza y poner en entredicho la imagen de la “normalización” del país que la Junta cívico-militar quería proyectar antes de las elecciones de marzo de 1982.³⁵⁰ Todo parece indicar que en esta coyuntura, caracterizada por la paralización de las organizaciones populares, la presencia del FMLN en las zonas urbanas se limitó a una red sumamente clandestina de guerrilla urbana, que no pretendía vinculación social sino solamente realizaba acciones estrictamente militares, como sabotajes o ataques con explosivos etcétera.

³⁴⁹ Rafael Menjívar Larín, “Reflexiones sobre la insurrección urbana (Enero de 1983)”, R. Menjivar, *op.cit.*, 2006, Apéndice 3, p. 236.

³⁵⁰ Véase, Joaquín Villalobos en M. Harnecker, *op.cit.*, 1983, pp. 174-175,

Un segundo momento inició en 1983 y se caracterizó en el plano militar por la adopción explícita de una estrategia de guerra de guerrillas para desgastar al enemigo por medio de sabotajes y ataques “sorpresa”. Para estas fechas la estructura militar ya se había consolidado y el número de combatientes se estabilizó en torno a 7,000 combatientes, de los cuales aproximadamente 3000 hombres eran de las FPL, 1,500 a 2000 del ERP, 1,000 de Resistencia Nacional y el resto se dividía entre los combatientes del PC y del PRTC.³⁵¹ En el contexto de las elecciones presidenciales de 1984 y la victoria electoral de Napoleón Duarte, lo cual daba cuenta de la consolidación del nuevo régimen, la Comandancia General del FMLN se planteaba como autocrítica que en estos primeros años del enfrentamiento ellos habían subestimado la dimensión política de la guerra y descuidado el trabajo con las organizaciones sindicales y populares. Por lo tanto, anunció, buscaría reanudar los vínculos con el movimiento popular y revitalizar los frentes de acción. Este viraje estratégico se reflejaba en la consigna “Una guerra de todo el pueblo”: para desgastar políticamente al gobierno democristiano había que involucrar de nuevo a los sectores organizados de la población y articular el avance militar del ejército guerrillero con las luchas reivindicativas y las campañas internacionales de denuncia de las violaciones a los derechos humanos.³⁵²

El tercer momento inició en 1987 cuando el FMLN empezó con los preparativos logísticos y militares para una segunda “contraofensiva estratégica”, por medio de la cual se planteaba desencadenar una insurrección popular. Con base en las readecuaciones de la estrategia previa – fundamentalmente la rearticulación de los vínculos con las organizaciones populares-, la guerrilla buscó obtener una mayor presencia en las ciudades y preparar, de esta manera, las condiciones subjetivas: por una parte, por medio de actividades de sabotajes y actos de propaganda, realizados por los comandos de guerrilla urbana, y, por otra parte, orientando a sus militantes en las organizaciones sindicales y populares a impulsar actitudes de confrontación en las marchas de oposición.³⁵³

Las estrategias político-militares no se desarrollaron de manera aislada sino en función de objetivos políticos que también fueron modificados para adaptarlos mejor a la nueva coyuntura, caracterizada por la apertura de un ciclo de elecciones periódicas y una cierta normalización institucional en el espacio político. El FMLN buscó colocar sus propuestas programáticas en el debate público de tal forma que quedara clara su voluntad de finalizar el enfrentamiento bélico por

³⁵¹ Véase, R. Menjívar, *op.cit.*, 2006, p. 37.

³⁵² Véase, Comandancia General del FMLN, *op.cit.*, enero de 1986, p. 8; Sobre este periodo, véase también H. Byrne, *op.cit.*, 1996, pp. 98-145.

³⁵³ Véase, J.A. Moroni y D. E. Spencer, *op.cit.*, pp. 32-33.

medio de negociaciones con el gobierno. En este esfuerzo los pronunciamientos empezaron a dar cuenta de un viraje importante que se estaba dando en la dirigencia político-militar en cuanto al objetivo estratégico de la lucha: la toma de poder por la vía armada para iniciar la transformación social empezó poco a poco a desdibujarse y ser sustituido por la meta de la negociación política para que la izquierda y sus aliados obtuvieran condiciones justas y equitativas para participar en los procesos electorales. Estos cambios pueden verse en los diferentes posicionamientos programáticos del FMLN publicados entre 1984 y 1989.³⁵⁴

Otro cambio importante en el discurso político tenía que ver con la noción de la revolución como momento crucial e imprescindible en la transformación social. Esta modificación se evidencia si comparamos los posicionamientos de la alianza revolucionaria de 1980, expresada en la plataforma programática para un Gobierno Democrático Revolucionario de la CRM, con los pronunciamientos del FMLN a partir de 1984: mientras en 1980 se señalaba la necesidad de la revolución, las siguientes propuestas se centraban en la demanda de la inclusión política del FMLN en un gobierno provisional que debería profundizar las reformas sociales y económicas de 1980, derogar la Constitución liberal de 1983 y dismantelar las instancias de represión como condiciones para asegurar una paz duradera.

La moderación discursiva refleja la nueva lectura del momento político por parte de la dirección del FMLN, según la cual, por los cambios ocurridos en las condiciones políticas y subjetivas para la movilización social, era necesario incluir la opción de la negociación política como una posible salida al conflicto militar. Fue después de 1985 que esta disposición de negociar las condiciones políticas e institucionales para la desmovilización guerrillera se perfiló como mensaje central en los comunicados de la Comandancia General. Así, en la *Oferta política a los distintos sectores sociales*, publicada en 1986 el FMLN primero denunció la inoperatividad del gobierno de Napoleón Duarte para lograr el cese de la violencia política e impedir el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares. Después expresó su compromiso para participar en un diálogo nacional con *todas* las fuerzas y sectores interesados en encontrar una solución “política, patriótica y democrática”, a cambio de la reorganización de un gobierno que llamaría a elecciones en las cuales el FMLN participaría como fuerza política.

³⁵⁴ Véase, “Propuesta de integración y plataforma del gobierno provisional de amplia participación. 31 de enero de 1984”, FMLN, *Planteamientos programáticos.1980-1994*, San Salvador, Secretaría Nacional de Educación del FMLN, mimeo, s/f, p. 15; “Posición del FMLN frente al futuro gobierno de ARENA y propuesta para alcanzar una democracia real, una nueva sociedad y la paz. 6 de abril de 1989”, Ricardo Córdova Macías y Raúl Benítez Manaus (comps.), *La Paz en Centroamérica: Expediente de Documentos Fundamentales, 1979-1989*, México, CCyDEL/UNAM, 1989, pp. 165-169.

Otro punto importante tiene que ver con una nueva valoración de las elecciones como vía de acceso al poder político: Desde 1983, y aún más a partir de 1986, el FMLN anunció públicamente que bajo ciertas circunstancias podría aceptar el proceso electoral como un procedimiento legítimo para la alternancia pacífica en el poder. El punto 2.5 y 2.6 de la *Oferta política* señala en este sentido que un gobierno de transición –en el cual participaría el FMLN-FDR como garante para que se respeten los acuerdos del diálogo para la solución a la crisis nacional- debería convocar a elecciones:

El gobierno tendría carácter transitorio y cumpliría las tareas básicas definidas en la formulación de la solución política; entre ellas, organizar elecciones generales limpias y libres para que sea el pueblo quien decida la ruta a seguir y quienes deberán ejercer el poder.

Nosotros aspiramos a ejercer el poder, esta es una aspiración legítima por la cual luchamos. En condiciones de una solución política justa –y cumplidas las condiciones para elecciones limpias y libres- participaríamos en ellas. Esta sería la forma de restablecer una vía que fue corrompida por la dictadura, obligando a una guerra revolucionaria justa y legítima...

Pero mientras en los “mensajes públicos” el FMLN buscó demostrar apertura e incluyó el tópico de las elecciones, hacia lo interior de la organización la Comandancia Central anunció las medidas para preparar otra “contraofensiva estratégica”, en la cual la “ofensiva militar, la huelga general y la insurrección popular armada” deberían confluir para desencadenar un estallido revolucionario. Así, en 1987 la Comandancia General señalaba las siguientes prioridades para las actividades militares y políticas de los militantes:

...También debemos incidir en profundizar las contradicciones en el campo enemigo, derrotar el proyecto contrainsurgente demócrata-cristiano y hacer que el pueblo asuma y luche por el proyecto revolucionario...

Alcanzar mayor desarrollo en la organización y elevación de la conciencia combativa de las masas, que permita el desencadenamiento pleno de la violencia revolucionaria de las masas, que lleva a la insurrección; crecer y desarrollar nuestras fuerzas militares...; *crear el andamiaje clandestino y el ejército político en el seno de las masas para posibilitar la insurrección; desarrollar el plan militar nacional del FMLN... para llevar al ejército a una nueva crisis militar...*; fortalecer todas las categorías de nuestras fuerzas militares permanentes para que esto nos permita la creación de múltiples direcciones de ataque.³⁵⁵

En síntesis, el viraje estratégico del FMLN, iniciado en 1983/1984, contemplaba dos niveles de acción. Hacia el exterior el FMLN buscaba tomar la iniciativa en la formulación y difusión de propuestas de negociación, que incluían pasos para instalar procedimientos electorales confiables que permitirían la participación del FMLN y de sus aliados en las contiendas. Paralelamente, el

³⁵⁵ Esta cita se retoma del estudio sobre las estrategias políticas y militares del FMLN en Irene Sánchez Ramos, *Tiempo político y movimientos armados. El FMLN en El Salvador (1970-1992)*, Tesis de Maestría, UNAM, 1997, especialmente pp. 127-138. (Las cursivas son nuestras.)

FMLN diseñó estrategias internas de organización y movilización para involucrar a la población, con la finalidad de preparar una segunda ofensiva que debería combinar una mejor preparación militar que en 1981 con el desencadenamiento de una insurrección popular. Siguiendo este doble plan de acción, la dirigencia del FMLN llamó a sus militantes y cuadros políticos a reactivar las redes de oposición y movilizar a sus colaboradores civiles.

La ofensiva de 1989, que no pudo desencadenar una insurrección popular, evidenció el cansancio de las bases civiles y militares de la guerrilla pese a la impresionante capacidad militar y logística del aparato. Esta situación obligó a la insurgencia a dar otro viraje estratégico y apostar definitivamente a la negociación como camino para desmovilizar e insertarse a las instituciones políticas existentes. Poder realizar este último viraje hacia la negociación evidencia una vez más las habilidades del FMLN de leer los tiempos políticos y adecuar sus estrategias y tácticas en función de la coyuntura política. Con respecto a las organizaciones populares agrupadas en la UNTS, el proceso de negociación entre 1990 y 1992 les permitió reforzar su participación en los espacios construidos desde la sociedad civil, como el Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz. No obstante, como se señalará en el capítulo 4, las negociaciones de paz que desembocaron en la firma de los acuerdos en enero de 1992 en México fueron una negociación entre políticos, donde los actores de la sociedad civil jugaron un papel secundario. Los procesos que permitieron esta delegación, haciendo del FMLN el principal vocero de la oposición al gobierno salvadoreño, se describirán en las siguientes páginas.

Estrategias organizativas

¿Cómo se plasmaron los cambiantes objetivos político-militares en las estrategias de la dirección guerrillera para volver a tener una mayor influencia social y determinar las dinámicas de la movilización política? Una línea de acción importante fue la (re)construcción de un aparato partidista clandestino que, por medio de las células de militantes y cuadros políticos insertadas en diversos espacios sociales y sectoriales, debería impulsar y definir los objetivos de la acción colectiva y reconstruir las organizaciones populares diezmadas por la represión.

Si bien la Comandancia General del FMLN tomaba las decisiones estratégicas en conjunto, cada una de las organizaciones político-militares estaba a cargo de la reorganización de sus estructuras políticas en las ciudades, empezando por su cuenta a retomar el nexo con la sociedad a través de sus simpatizantes y colaboradores civiles. En el caso de las FPL sabemos que la dirigencia consideró las debilidades del aparato partidista como factores que contribuyeron al fracaso de la misma. Tanto

los escritos de Cayetano Carpio elaborados poco antes de su muerte, como el balance de Rafael Menjívar Larín sobre la insurrección urbana de 1980/81 apuntan a que los dirigentes de las FPL identificaron como prioridad la construcción decidida del partido y la “leninización” de las estructuras políticas como una condición existencial para articular la acción de sus militantes en los diferentes espacios sociales con las estrategias militares, y para que la dirigencia militar conociera mejor el estado de ánimo de la gente. Reconocieron los peligros del “militarismo”, es decir, que la excesiva priorización de la lógica militar sobre lo político podría impedir a la organización reconocer las correlaciones de fuerza, leer la coyuntura política y vincularse con la población.³⁵⁶ Pero parece que estas autocríticas, que evidencian una visión más compleja de los altos dirigentes de las FPL sobre las razones de la ofensiva de 1981 al señalar las debilidades organizativas internas, no fueron difundidas entre las bases hasta después de la guerra. En cambio, lo que caracterizaba las estrategias para reforzar la estructura política y los vínculos con las organizaciones populares a lo largo de la guerra fue su desarrollo en función de los objetivos y la dinámica de la confrontación bélica.

En el caso de las zonas rurales, debido a que el campo era el espacio físico del enfrentamiento armado, estas dinámicas fueron más evidentes. Las FPL -y posiblemente también algunas de las otras organizaciones político-militares-, intentaron impulsar en las áreas bajo su influencia (zonas de movilización política de FECCAS y la UTC) la creación de nuevas estructuras político-administrativas, denominadas Poder Popular.³⁵⁷ Pero con los bombardeos y las violentas incursiones del ejército, que provocaron un éxodo masivo de la población civil a las ciudades y el extranjero, estas estructuras de “doble poder” no pudieron consolidarse en efectivas instancias de toma de decisiones y autogobierno sino devinieron en redes de milicias campesinas y de apoyo logístico para garantizar la producción de alimentos y el abastecimiento del ejército guerrillero.³⁵⁸

Después de 1983 empezó un regreso paulatino -frecuentemente interrumpido por las ofensivas militares del FMLN y del ejército- de los desplazados a algunas zonas rurales. En este contexto

³⁵⁶ Sobre las fallas en la construcción del partido y los peligros de la militarización véase, S. Cayetano Carpio, *op.cit.*, 1999, pp. 106-113.

³⁵⁷ En algunas zonas las estructuras locales de poder nacieron en el contexto de las insurrecciones campesinas de 1979 y 1980 y funcionaron para aniquilar las estructuras locales de ORDEN mientras el ejército y los cuerpos de seguridad estaban desmantelando la movilización popular en las ciudades. Un ejemplo para estas estructuras de doble poder rural se encuentra en el testimonio del Comandante Raúl Hércules del Frente Guazapa. Según su relato, los campesinos aprovecharon la huelga general y el apagón de agosto 1980 para planear un asalto al “cuartel” de ORDEN y matar a su dirigente Fabián Ventura. Véase, C. E. Rico, *op.cit.*, 2003, p. 269ss.

³⁵⁸ Véase, M. Lungo, *op.cit.*, 1991, pp. 40-45.

emergieron cooperativas y asociaciones comunales, formadas por los *repobladores*, para representar sus intereses ante los actores del conflicto y las organizaciones nacionales e internacionales de ayuda con el objetivo de obtener ayuda para la subsistencia o ejercer presión política para lograr la desmilitarización de su territorio. A veces los comandantes de las organizaciones político-militares que operaban en estas zonas promovieron activamente el lanzamiento de estas organizaciones para formar “poderes de doble cara”, que tuvieran un perfil legal para negociar con los representantes gubernamentales y a la vez organizaran la participación social de colaboradores y simpatizantes con la guerrilla. En otros casos, los militantes simplemente intentaron incidir en estas organizaciones por medio del reclutamiento de los dirigentes y activistas más destacados. La finalidad de esta estrategia era contar con organizaciones cuyo perfil legal les permitía utilizar los canales institucionales para sus reclamos hacía el Estado, paralelamente a que sus activistas desarrollaran actividades semi-clandestinas de apoyo logístico para la insurgencia.³⁵⁹

En el caso de las ciudades, el FMLN diseñó a partir de 1984 tres estrategias de intervención para recuperar los vínculos con el movimiento popular urbano. La primera estaba orientada a construir un “ejército político de la revolución”, conformada por cuadros políticos y militantes insertados en las organizaciones populares legales con la tarea concreta de radicalizar las formas de lucha del movimiento popular, aumentar la presión política sobre el gobierno y atraer a los activistas más arriesgados y activos hacia las filas guerrilleras. La segunda y la tercera estrategia buscaban construir un “frente popular” y un “frente patriótico-democrático”, dos círculos para agrupar a organizaciones sindicales anti-gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la iglesia católica y las fuerzas políticas del centro y centro-izquierda en torno a las propuestas políticas del FMLN. En estos dos frentes participarían los aliados estratégicos de la guerrilla que deberían contribuir, por una parte, a ampliar la influencia del FMLN en la sociedad civil salvadoreña y el campo diplomático-internacional y, por otra parte, al aislamiento del gobierno de Napoleón Duarte.³⁶⁰

Si bien una línea de la Comandancia General del FMLN, no todas las organizaciones tenían las mismas posibilidades de construir su propio “ejército político de la revolución”. En 1981, solamente la Comandancia de Resistencia Nacional había dado una orden explícita a sus cuadros políticos de no abandonar las ciudades pese a la represión, mientras el resto de las organizaciones -

³⁵⁹ Véase, M. Harnecker e I. Perales, *op.cit.*, 1990, pp. 75-78. El estudio de Elizabeth Wood analiza el proceso de acercamiento entre ERP y organizaciones campesinas para el caso de Usulután, véase E. J. Wood, *op.cit.*, 2003, p. 161-166. Véase también la trayectoria política de Manuel en este trabajo

³⁶⁰ Véase H. Byrne, *op.cit.*, pp. 132 –136.

especialmente el ERP- retiraron a sus militantes para incorporarlos rápidamente a las estructuras militares rurales. Por lo tanto, Resistencia Nacional tuvo la capacidad en 1983 y 1984 de llamar a sus cuadros urbanos dispersos a que convocaran a asambleas y reconstituyeran los comités sindicales. También las otras organizaciones político-militares buscaron reanudar los contactos en los espacios laborales y sociales donde, antes de la guerra civil, habían realizado su trabajo político. De esta manera se respetaron los viejos vínculos, lealtades políticas y ámbitos de influencia de cada organización: mientras Resistencia Nacional “controlaba” FENASTRAS, el sindicato del Seguro Social STISSS y muchos de los sindicatos locales del sector público, las FPL mantuvieron su influencia en ANDES y el Partido Comunista en las federaciones industriales FESTIAVTSCES y FUSS.

Las FPL y Resistencia Nacional dominaron el movimiento sindical antigubernamental de los años ochenta, al controlar las principales asociaciones sindicales del sector público y las instancias de coordinación abiertas por el gobierno democristiano en los ministerios. Por esto también fueron estas dos organizaciones que definieron el surgimiento del Comité lero de Mayo y, posteriormente, de la UNTS. Pero con los inicios de los preparativos para la ofensiva militar, a partir de 1986, la Comandancia General del FMLN decidió que la UNTS debería ser la instancia para coordinar la participación de las organizaciones populares en los preparativos de la ofensiva, por lo cual cada organización político-militar nombró cuadros políticos –todos ellos sindicalistas reconocidos y experimentados- para integrar esta dirigencia.³⁶¹

De esta manera el mando coordinado de la Comandancia General del FMLN se reprodujo en las instancias de coordinación del movimiento popular anti-gubernamental durante el gobierno democristiano. Cada organización tenía una representación equitativa, independientemente de su incidencia política real en las organizaciones sectoriales y sociales, igual como en las estructuras de mando del FMLN donde la participación de las cinco organizaciones estaba desvinculada del peso militar real al otorgar a cada organización el mismo número de representantes.

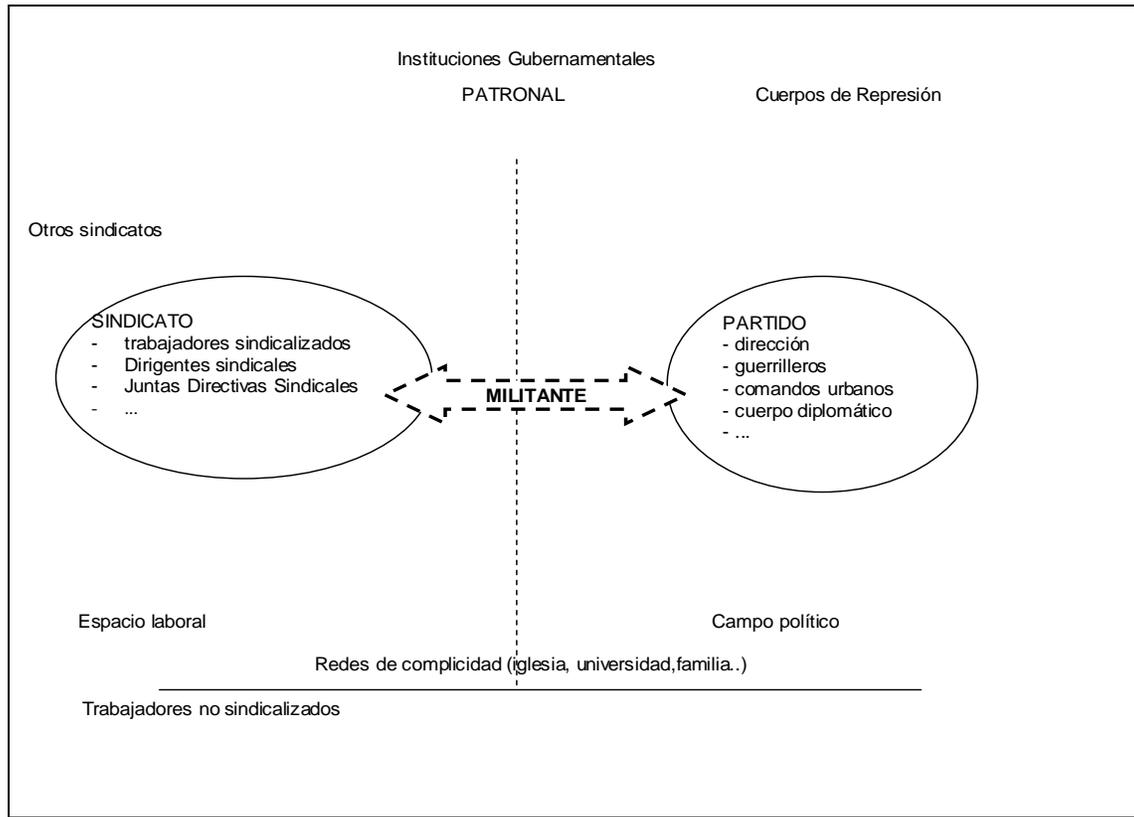
³⁶¹ En 1988 la directiva de la UNTS estaba conformada por Febe Velásquez (FENASTRAS, murió en el ataque en contra del local de FENASTRAS en octubre de 1989), Guillermo Rojas (sindicato del seguro social STISSS), Humberto Centeno (Sindicato de Teléfonos ASSTEL), Julio Portillo (ANDES) y Miguel Alemán (CONFRAS).

3.6. Agentes ambiguos: Militantes entre el activismo político y la defensa gremial

Antes de iniciar con los relatos de las prácticas militantes en los años ochenta conviene reflexionar sobre los efectos prácticos de los cambios descritos sobre el activismo social. Consideramos que hubo tres factores políticos que condicionaron las prácticas de participación, movilización y representación en las organizaciones populares: primero, la apertura controlada del espacio político a partir del proceso electoral de 1984 y el reconocimiento, por parte del gobierno democristiano, de un activismo gremial “apolítico”; segundo, la estrategia del FMLN de mostrar por una parte públicamente una disposición a dialogar y, por otra parte, preparar una segunda contraofensiva estratégica. Los militantes civiles de las organizaciones guerrilleras que estaban en la movilización política, al seguir estas líneas de acción, tuvieron que asumir un doble papel: por una parte, promover reivindicaciones económicas y políticas, además de presionar públicamente a favor de una solución negociada del conflicto y, por otra parte, radicalizar las prácticas de protesta para provocar respuestas violentas de las fuerzas de seguridad y acostumar a los activistas a la confrontación. En tercer lugar, el flujo de recursos externos hizo crecer rápidamente los ingresos de las organizaciones populares más conocidas a nivel internacional, lo cual permitió aumentar el número de activistas que podían dedicarse de tiempo completo al trabajo de organización, atender a los comités sindicales y colectivos políticos, participar en la realización de campañas nacionales e internacionales y en la elaboración de proyectos para presentarlos ante las organizaciones de cooperación internacional y acceder a recursos adicionales.

El Diagrama 3.2 representa de manera esquemática como visualizamos, con base en los relatos militantes, la función “bisagra” que cumplieron los militantes civiles de las organizaciones político-militares en los mundos sociales donde ellos desarrollaron su activismo. En sus prácticas tuvieron que articular los objetivos de la estrategia político-militar con las lógicas de acción propias de la representación gremial que combinan presión y negociación con las autoridades para obtener beneficios colectivos para sus agremiados. Esto pudo llevar a un conflicto de roles a raíz de las expectativas encontradas de las bases gremiales –no todos ellos activistas o militantes políticos– y la dirección clandestina de la organización político-militar representada, generalmente, por el responsable o cuadro político de la célula. Por estos conflictos de roles y la amenaza de ser detenidos, los militantes civiles tuvieron que recurrir a la simulación y ambigüedad en cuanto a su identidad política como estrategias de sobrevivencia en un ambiente hostil.

Diagrama 3.2. El militante como “bisagra” entre mundo laboral y campo político



Elaboración propia.

Introducir en la representación gremial prácticas de simulación y ambigüedad quiere decir que los activistas tuvieron que negar su identidad política y vinculación con el FMLN, y presentarse exclusivamente como sindicalistas, cooperativistas o líderes comunales reconocidos por sus bases. Pero al mismo tiempo tenían que implementar la línea partidista de crear en diversos ámbitos sociales células clandestinas y compartimentadas para construir una estructura de apoyo político, logístico y militar para la ofensiva guerrillera.

Para que los militantes pudieran procesar estas expectativas encontradas que, en ciertos momentos, podrían producir contradicciones, su incorporación al aparato clandestino fue crucial. ¿Cómo operaba este aparato en la ciudad que, a lo largo de la década de los ochenta, fue el centro de poder de las fuerzas gubernamentales? Como señalamos en la sección anterior, después de 1981, las organizaciones político-militares buscaron construir un aparato partidista clandestino y compartimentado que debería funcionar de acuerdo con el concepto leninista de partido. Los documentos y testimonios de las FPL y Resistencia Nacional indican que se buscó reanudar y poner en práctica los planteamientos que, desde los setenta, señalaron la necesidad de construir un

partido vanguardia centralista, concebido como una maquinaria perfectamente engranada para llevar a cabo acciones locales en función de la estrategia política general nacional y superar el problema de la improvisación y el “espontaneísmo”.

Un documento interno de las FPL planteó en 1982, a partir de la conclusión que el fracaso de la insurrección popular de 1981 se debía primordialmente a las debilidades de la organización partidista, que había que fomentar activamente la construcción de células partidistas, conformadas por los “trabajadores más avanzados”, como la única vía para asegurar que el partido tuviera “raigambre” en las masas y podría conducir las luchas sociales. La siguiente cita permite apreciar esta visión “organicista” de un modelo de partido en el cual cada militante tenía su lugar, desde el cual tenía que contribuir no sólo al funcionamiento del partido sino a la revolución como meta final:

...las células son las que están viviendo adentro de los trabajadores, porque la célula en último término tiene que estar compuesto por los trabajadores más avanzados; la célula sufre la explotación, platica con los trabajadores más avanzados, más atrasados, trabaja con ellos, come con ellos, comenta con ellos, con todos los demás trabajadores, es la que está fundida tanto en fábricas, en fincas, en institutos, en escuelas, en empresas, etc.etc. con la propia masa.³⁶²

A la vez, la construcción de la organización tenía que estar acompañada por la formación de cuadros revolucionarios, los cuales con una actitud ejemplar deberían impulsar las luchas sociales. El militante era representado como un ser abnegado, preparado y dispuesto al sacrificio:

Y en segundo lugar, la otra vía correcta es el trabajo abnegado de los cuadros, de cada uno de los miembros del partido adentro de las masas, que se conviertan en ejemplo por su abnegación, por su espíritu de sacrificio, por la calidad de la línea, porque todos acudan a ellos a preguntar, porque son los que tienen la respuesta clara de los problemas, a las inquietudes, a las necesidades de esa masa.³⁶³

Educarse como cuadro significaba entonces familiarizarse con los principios ideológicos y adquirir habilidades de organización, además de adoptar calidades como fe y mística revolucionaria y abnegación, todas ellas parte de una *actitud revolucionaria* para conquistar y mantener una posición dirigente en el movimiento popular para introducir el mensaje revolucionario. Denominamos esta actitud *habitus militante*, constituido por competencias y valores específicos como liderazgo, disciplina, espíritu de sacrificio, responsabilidad y la disposición de asumir el Centralismo Democrático como mecanismos de la toma de decisiones: participar en los debates políticos y,

³⁶² C. Carpio, *op.cit.*, 1999, pp. 135-136.

³⁶³ *Ibíd.* p. 136; Sobre la función de los militantes en una organización revolucionaria, véase también Resistencia Nacional, *op.cit.*, s./f. p. 84.

después, apropiarse y subordinarse *libremente* a la línea política del partido expresada en las decisiones de los órganos superiores de mando.

El proceso de prueba, por el cual el activista tenía que pasar para ser aceptado como miembro pleno de la organización era sólo un primer paso de la conversión, luego seguía la incorporación de prácticas y disposiciones militantes por medio del ejercicio cotidiano del activismo: la participación en las movilizaciones de protesta, la asistencia a una célula del partido, la evaluación por los compañeros y los dirigentes políticos y la aceptación de las sanciones impuestas para castigar fallas e irresponsabilidades. Estos mecanismos de transferencia de competencias y valores operaban al mismo tiempo como mecanismos de disciplinamiento del individuo, lo cual era una condición imprescindible para formar parte de la “comunidad virtuosa” de la vanguardia.³⁶⁴

La disciplina incorporada de los militantes civiles fue una condición importante para que el FMLN pudiera reconstruir las bases de apoyo logístico en los centros urbanos. Pero la subordinación de todas las prácticas y objetivos de organización política y gremial a la preparación de la ofensiva militar profundizó el proceso de *militarización de la política* que se expresaba de diferentes maneras: por ejemplo, al organizarse las protestas gremiales en función del objetivo de desgastar el gobierno y preparar las condiciones subjetivas para la ofensiva militar, los tiempos políticos definidos por la Comandancia General del FMLN condicionaban los tiempos de la movilización social.

Por otra parte, la compartimentación de la organización por área de trabajo y sector laboral –un mecanismo de seguridad para disminuir el peligro de la desarticulación organizativa por la persecución política–, impedía que entre los activistas de las diversas organizaciones populares se crearan lazos no mediados por la pertenencia a una organización político-militar. Las asambleas públicas amplias del periodo de la posguerra, donde las diferentes fracciones ideológicas habían difundido sus posturas políticas contribuyendo de esta manera a un espacio público de sociabilidad contrahegemónica, ya no existían y su lugar había sido ocupado por las reuniones sectoriales de los militantes y las células clandestinas. Cada sector –universitarios, empleados públicos, trabajadores del sector público– contaban con sus células políticas, lo cual facilitaba la sobrevivencia de las

³⁶⁴ La formación de cuadros políticos en la década de los ochenta recuperó los planteamientos sobre la importancia del partido de la década anterior como puede comprobarse en la siguiente cita del documento *Vanguardia y Proceso de Resistencia Nacional* (1976) sobre las maneras para asegurar la unidad de acción del partido: “Una vez que se ha dado lucha ideológica, se toman las decisiones y la minoría debe someterse a la mayoría, los organismos inferiores a los superiores. Esto se logra ejercitando la *disciplina libremente aceptada por cada militante al momento de su ingreso a la organización y que se cumple todos los días de su militancia.*” Resistencia Nacional, *op.cit.*, s./f. p. 86 [Las cursivas son mías].

estructuras clandestinas porque sólo la dirección conocía toda la extensión de la organización, los contactos y puntos de encuentro, pero a la vez impidió que entre los militantes se consolidara una identidad política más allá de su gremio y la propia organización político-militar. Esta situación repercutió en la formación del “movimiento laboral unitario de izquierda” porque –como muestra el caso de la UNTS- la cohesión se construía en el ámbito de la dirigencia sindical conformada por cuadros políticos que impulsaron las alianzas de acuerdo a las líneas de su respectiva organización político-militar.

La militarización de la política se expresó también en la difusión de prácticas de protesta que buscaron deliberadamente provocar al adversario y radicalizar al movimiento. Esta situación generaba efectos contraproducentes: mientras en la organización político-militar un comportamiento combatiivo y arriesgado podía implicar un ascenso en las estructuras de mando, y una consolidación de la posición como dirigente por la combinación del mando militar y civil, la actitud beligerante podía provocar un distanciamiento de las bases no militantes que no estaban dispuestas a la confrontación a toda costa. Por ejemplo, cuando a partir de 1987 las acciones de protesta de la UNTS se volvieron cada vez más radicales, el número de asistentes a las marchas empezó a disminuir hasta que sólo participaron los que tenían mayor disposición a llevar a cabo acciones contundentes y combatiivas.³⁶⁵

La ofensiva de noviembre de 1989

En la preparación de la ofensiva de 1989, la actividad de los militantes civiles estaba orientada a reforzar las redes de logística y de abastecimiento para la estructura armada.³⁶⁶ Los ataques armados en la capital y en varias cabeceras departamentales empezaron el 11 de noviembre de 1989. No hay lugar para discutir aquí si el objetivo principal de la ofensiva fue mostrar la fuerza operativa y logística del FMLN para acelerar la búsqueda de una solución negociada del conflicto militar – como lo ha planteado el FMLN desde entonces públicamente- o hasta qué punto todavía se planteaba como objetivo desencadenar una insurrección popular por medio de ataques militares. Pero no cabe duda que los resultados de la ofensiva evidenciaran el empate militar entre el ejército y

³⁶⁵ Esta conclusión se evidencia con la comparación del número de asistentes a la marcha del primero de mayo: mientras en la marcha de 1986, convocada por todas las organizaciones populares de la UNTS incluyendo a las organizaciones democristianas, participaron unas 50,000 personas, unos años después la participación bajó a 16,800 y se mantuvo alrededor de esta cifra hasta 1991. En 1991 los organizadores decidieron centrar las demandas en la solución negociada del conflicto militar y participaron 80,000 personas. Véase, M. Anner y T. Fitzsimmons, *op. cit.*, 1999, p. 112.

³⁶⁶ Sobre las tácticas de guerrilla urbana, véase J. A. Moroni B. y D. E. Spencer, *op.cit.*, 1995, pp. 115-138.

la insurgencia y fueron un factor decisivo para iniciar las negociaciones de paz que finalizaron en enero de 1992.

En el corto plazo, la ofensiva recrudesció una vez más la represión estatal y los blancos fueron representantes de organizaciones sociales y populares que las fuerzas estatales vinculaban con la actividad guerrillera. Víctimas emblemáticas de este momento fueron los seis sacerdotes jesuitas de la UCA y sus dos empleadas, asesinados por miembros del Batallón Atlacatl. Si bien no hubo un descabezamiento tan generalizado del movimiento popular como en 1981, en el contexto de la suspensión de las garantías individuales, a raíz del estado de sitio, las organizaciones populares sufrieron la destrucción de sus locales y las agresiones a sus dirigentes. En el caso de la UNTS, la participación militar de dirigentes sindicales y activistas en la ofensiva desgastó políticamente a la UNTS porque sus vínculos orgánicos con el FMLN quedaron evidenciados.

En síntesis, si bien la estrategia organizativa que aplicó el FMLN en los años ochenta en San Salvador resultó muy efectiva para ampliar, en el centro del poder gubernamental, las estructuras clandestinas y disponer de una red de cuadros políticos y militantes disciplinados que la represión gubernamental no pudo desarticular y que resultó importante para asegurar la presencia de la izquierda armada como un actor político relevante. No obstante, esta estructura no fue suficiente para construir los apoyos sociales necesarios y desencadenar la insurrección popular planeada. En este sentido, la ofensiva de 1989 evidenció tanto los aciertos como los desaciertos de la estrategia político-militar del FMLN. Las fuerzas gubernamentales y sus aliados norteamericanos fueron sorprendidos por la fuerza militar y la capacidad logística del FMLN y se mostraron incapaces de derrotar militarmente a la guerrilla. Pero a la vez las redes de la guerrilla fracasaron porque no pudieron provocar muestras masivas de solidaridad y de apoyo por parte de la población civil.³⁶⁷ Los relatos militantes permiten aproximarse a las razones sociales y subjetivas para estos desfases y desaciertos.

³⁶⁷ Véase, “El fin de la guerra, cercano: Zamora”, *La Jornada*, México, 13 de febrero de 1990, p. 1 y 29. Sobre los detalles de la ofensiva, véase, por ejemplo *La Jornada*, México, sobre todo entre el 13 de noviembre y 23 de noviembre de 1989. Sobre la reelaboración de las estrategias políticas de todos los actores involucrados en el conflicto después de la ofensiva véase H. Byrne, *op. cit.*, 1996 pp. 170 ss.; véase también A. Rouquie, *op. cit.*, 1994, pp. 252-256.

3.7. Efectos prácticos de la guerra civil: Activismo social en la guerra:

Como se señaló anteriormente, el ascenso del gobierno democristiano en 1984 obligó a la dirigencia del FMLN a modificar su estrategia político-militar y fortalecer la dimensión política de su lucha. En este contexto los militantes de la Zona Metropolitana de San Salvador recibieron la orientación de revitalizar las organizaciones gremiales e impulsar nuevamente la movilización social.³⁶⁸ Bajo la consigna de la “guerra de todo el pueblo” los cuadros políticos, que clandestinamente impulsaban las posiciones del FMLN en las organizaciones populares o participaban en las redes de solidaridad con El Salvador en el extranjero, deberían contribuir con sus acciones a la deslegitimación del gobierno de Napoleón Duarte y a la movilización de la opinión pública nacional e internacional a favor de una solución política del conflicto.³⁶⁹

Pero antes de señalar las especificidades de las prácticas de la militancia en estos años conviene describir el impacto de la violencia política en las condiciones de posibilidad para la movilización social y el activismo político. La persecución política gubernamental y paramilitar acentuó la clandestinidad de las tareas y la compartimentación de las estructuras organizativas de la izquierda revolucionaria. Constatar estas circunstancias nos llevó a la pregunta por el significado de la militancia política en este periodo, caracterizado por una guerra prolongada, la consolidación del FMLN como ejército guerrillero y el reflujo de la movilización social.

Marcas de la violencia

...recuerdo que fue como en el año 80, cuando por primera vez mortearon [sic] hacia la comunidad donde yo vivía. En esa casa que [se] estaba reconstruyendo de La Bermuda había un trabajador que era de la Cruz Verde, y como estaba muy cerca la hacienda a nuestra comunidad, el hombre pensó de que ahí podían haber víctimas porque estaban cayendo morteros y porque era la primera vez que los escuchaban, y la gente tenía tanto miedo, tanto pánico que empezó a huir de cualquier forma y al final podía morirse más rápido en la huida pues, y estaba todo militarizado allá por todas partes. Este hombre llega y saca a la gente de ahí, y sacamos a la gente en ese momento y la llevamos ahí. Luego, como la persecución aquí en Suchitoto fue en todos los cantones, caseríos, que perseguían a la gente y encontraban a la gente porque aquí habían escuadrones de la muerte, entonces la persona que encontraban seguro no iba a vivir, entonces la gente después de esa vez que salió de ahí, de mi comunidad se quedó en ese lugar, la mayoría de gente y otros regresábamos a la comunidad, pero la gente como que tenía el temor que por las noches podían llegar a asesinarlos, y en la noche íbamos a dormir de regreso a ese lugar, y así pasamos un periodo, yendo y viniendo, y posteriormente otra gente fue llegando de los alrededores a ese lugar, y se quedó, se quedó ahí su rato, y se hizo como alrededor de unas mil personas. Yo en esa

³⁶⁸ Véase, H. Byrne, *op.cit.*, 1996, pp. 97-100.

³⁶⁹ Véase, Comandancia General del FMLN, *op.cit.*, 1986, pp. 5-13.

época que llegué ahí, estaba para, para dar a luz de mi quinto hijo y entonces estaba ahí por eso, porque yo no podía estar en otro lugar, mi hijo iba a nacer...

Esos meses que pasamos ahí fueron realmente terribles porque ahí llegaba en el día el ejército, y amenazaba y golpeaba a la gente y en la noche era, era la guerrilla quienes estaban ahí, y a veces yo tengo este, recuerdos tan dolorosos de ese lugar porque recuerdo que ahí el ejército se llevó a tanta gente que la desapareció y que nunca supimos de ella, tanta gente conocida, como familiares, que se los llevaban y nunca, siquiera sus cuerpos encontramos, los desaparecieron; pero también la guerrilla pasaba y sacó gente de ahí, y la sacó porque decía que ahí había gente que era contraria al movimiento y también los asesinó, entonces esas cosas como que a uno le dan a ver qué es lo que hacía, qué luchábamos porque uno no hiciera esto, por esas injusticias que hacía uno, pero también el otro las estaba haciendo, entonces era que te ponía ... [en medio] en medio... (Adriana)

Cuando la ofensiva [de 1989]... me recuerdo muy poco porque, para decirle que casi ya me estaba muriendo... no tenía alientos de nada, pues, ni me levantaba, pero oía, pero sólo se sentía la angustia ¿verdad? de sentir porque ya vivíamos con mi mamá y ahí era una base militar, entonces estábamos en un medio que de un momento a otro iba a ser cruzado el pueblo porque fue terrible vivir aquí en una zona que ahí estaba filtrado ambos [grupos] entonces ¿para dónde? (Marta, CONFRAS)

Si queremos interpretar más adecuadamente los cambios en las prácticas de la militancia hay que tomar en cuenta el significado de la violencia en la sociedad salvadoreña, un fenómeno del cual las estadísticas –unos 75 mil muertos entre 1980 y 1992- dan sólo una aproximación cuantitativa. Las entrevistas permiten aprehender la marca de la violencia en las biografías individuales que se manifiesta en la pérdida de seres cercanos, ruptura de relaciones humanas y de las rutinas cotidianas. Para todos los entrevistados el periodo de 1980 a 1984 significó un momento crítico en su trayectoria vital que obligaba a invertir energía, recursos y esfuerzos adicionales para salir adelante o, simplemente, para sobrevivir. Todos tuvieron pérdidas: familiares, parejas o amigos asesinados y desaparecidos, la destrucción de pertenencias personales, la obligación de desplazarse, buscar refugio en otro lugar, dejar el trabajo o el país.

Entre los factores que explican la atracción de los grupos político-militares, se encuentra la oferta de marcos-cognitivos que explicaban la ola de violencia en el país. Estos marcos cognitivos permitían –así nuestra conclusión con base en las entrevistas- identificar responsables para lo que estaba sucediendo, proponían una solución al conflicto y ofrecían al individuo un lugar desde donde no sólo interpretar el conflicto sino también participar en una posible solución. Las perspectivas de participación se modificaron –a fines de los años setenta era Nicaragua, la insurrección popular y la revolución, mientras en los años ochenta era la negociación para obtener la paz-, pero eran propuestas de solución al fin y al cabo. En cambio, el resto de la sociedad salvadoreña –entre ellos la abrumante mayoría de los sectores populares- no tuvieron acceso a estos marcos cognitivos. Para

ellos el periodo de la guerra entre 1980 y 1992 fue principalmente una serie de acontecimientos violentos, sin sentido y que rompían las rutinas de la vida cotidiana.

La diferencia entre los mundos sociales de la militancia y el resto de la sociedad –una brecha que se amplió hacia los fines de los ochenta- se puede observar en el itinerario biográfico de Marta, que es diferente al resto de los entrevistados porque su “carrera” como líder social de una cooperativa empezó después de la guerra civil. Antes de la guerra ella contribuía al ingreso familiar trabajando como empleada en una panadería. En 1981 tenía 21 años, una hija chiquita y ya había sido asesinado su primer esposo. El segundo esposo, con el cual tuvo otro hijo, también murió asesinado en estos años, junto a un hermano y una hermana de Marta, y bajo circunstancias poco claras. Estos datos ya dan cuenta que la zona donde ella vivió durante la guerra –San Marcos Lempa, Departamento de Usulután- era una zona con mucha violencia política que dejó marcada su vida: “ellos” –nunca queda claro si fueron militares, escuadrones de la muerte o la guerrilla- le quemaron la casa y todas sus pertenencias y al vivir cerca de un cuartel militar, le tocó vivir de cerca los enfrentamientos entre guerrilla y ejército. Además, la suegra la responsabilizó de la muerte de su segundo esposo y le quitó el hijo.

Los años de sufrimiento son opacos en la memoria de Marta, lo que recuerda y cuenta son fragmentos de sensaciones: miedo al subirse a un autobús porque no se sabe que puede pasar en los retenes militares o guerrilleros, miedo al bajar al río para lavar la ropa porque en el agua podrían encontrarse cuerpos humanos flotando, desfigurados y despedazados, miedo durante los combates nocturnos. Esta situación afectó su salud: a mi pregunta, qué más me podría contar sobre los últimos años de la guerra –y la ofensiva de 1989- sólo recordaba estar acostada en el piso de la casa de su mamá, sin muebles, demasiado enferma y sin deseos de vivir, escuchando el ruido de los combates y, por radio, los detalles del avance de la ofensiva guerrillera.

Durante la entrevista, Marta no podía construir un relato coherente de los años de la guerra, aunque si de su vida previa cuando vivía con su mamá y ocho hermanos, consiguió su primer empleo en una panadería, se “acompañó” y nació la primera hija, y de su vida después de la guerra caracterizado por el activismo social, como líder de mujeres cooperativistas que reinicia una relación de pareja: vuelve a “acompañarse”. Estas diferencias en la capacidad de narrar las etapas vitales dan cuenta que, desde la perspectiva de los sectores populares no movilizados, la guerra civil era experimentada como una ruptura de las rutinas cotidianas y un “achicamiento” del margen de acción. Para ellos, las consecuencias del enfrentamiento armado –la muerte de gente cercana, los sabotajes a la infraestructura, los retenes militares, los desplazamientos- eran percibidas como

catástrofes “externas”, es decir, completamente fuera del control de individuo, que destruían las redes familiares y las pocas pertenencias materiales (una choza, algunos muebles, herramientas domésticas...), es decir, los pocos bienes y recursos que tenían. En cambio, los que colaboraban con las organizaciones político-militares podían vivir este periodo sintiéndose como sujetos con márgenes de acción y no sólo como víctimas de la violencia.

Este hallazgo a partir de la comparación de los relatos biográficos de los entrevistados confirma las conclusiones de estudiosos de la memoria que señalan la capacidad de planear las acciones (*Handlungsplanung*) y contar con un horizonte de futuro (*Zukunftshorizont*) como condiciones sociales y psíquicas de posibilidad para que un individuo pueda reconstruir narrativamente su vida. Si un tramo en la trayectoria vital se caracteriza por una crisis extrema que produjo traumas se dificulta – e incluso se puede hacer imposible– relatar esta parte de la vida. Las dificultades de narrar la vida en una zona de guerra nos recuerda a la imposibilidad de contar otras experiencias traumáticas como, por ejemplo, en el caso de los prisioneros de un campo de concentración. Según Rosenthal, los relatos biográficos de sobrevivientes de los campos se caracterizan por las extremas dificultades de las personas por recordar su vida en el campo. Al estar completamente determinado por una fuerza exterior –el campo como institución total– el prisionero desaparece como actor. En la narración de la biografía esta experiencia límite se expresa en la imposibilidad de narrarla.³⁷⁰

En cambio, de acuerdo con los relatos de los militantes, participar en una organización político-militar confería identidad como sujeto y actor y, paradójicamente, una sensación de seguridad. La aceptación de las líneas políticas del partido, el respeto a las jerarquías y las tareas asignadas por el responsable político, eran estrategias mediante las cuales el militante podía construirse un lugar que otorgaba un sentimiento de pertenencia a una comunidad, redes de sociabilidad y un sentido para interpretar los propios actos en relación con los acontecimientos políticos. Daba, en otras palabras, una estabilidad mínima en un contexto sumamente precario.³⁷¹

Esto permite entrever la cita de la entrevista con María, a la cual se pidió, al terminar la entrevista, hacer un balance de sus años de militancia:

Ésta es una pregunta algo especulativa, pero ¿cómo hubiera sido tu vida sin la militancia, qué piensas?

³⁷⁰ Véase, G. Rosenthal, *op. cit.*, 1995, pp. 120-130.

³⁷¹ La organización cumplió la función que Marc Augé asigna a los lugares “antropológicos” como lugares en donde se constituye simbólicamente la identidad y se definen las relaciones. Véase, M. Augé, *op.cit.*, 2004, p. 57.

Mira, yo pienso... con la guerra y sin militancia... creo que estaría enferma porque no sabría ni por qué y con la guerra y con la militancia si, lo que pienso lo que enseña una guerra aunque sea muy doloroso y duro... es un aprendizaje de vida muy importante [...] yo tuve más capacidad de analizar y de hacer lecturas de la realidad en medio de la guerra, que no me tocó sufrirla pasivamente como le tocó a mucha gente que nada más eran víctimas de las circunstancias... [...] creo que tengo más conocimiento de lo que es el ser humano, de todo lo feo, sucio y que puede ser... todo lo que hay detrás de las cosas que aparentemente son bien bonitas...

Ser enlace con el Frente: Prácticas políticas encubiertas

Definimos a los militantes políticos como agentes estratégicos que introducen discursos y proyectos políticos a distintos mundos sociales, vinculando de esta manera dichos espacios con lo que sucedía en el campo político. Pero el “tiempo de la violencia” transformó estos mundos sociales, lo cual cambió profundamente las condiciones de posibilidad para la movilización social y el activismo político. Hasta 1980, el ambiente de movilización social permitía prácticas políticas ofensivas de promoción de la propia organización, que caracterizamos como “lucha por la hegemonía” porque los militantes guerrilleros buscaron ganar espacios a otros actores sociales, especialmente las fuerzas reformistas o la iglesia, que también se consideraban voceros legítimos del movimiento popular organizado. En cambio, después de 1982 y 1983, la actividad militante merece más bien el atributo de “práctica encubierta”: Aprovechando la “doble institucionalidad” del gobierno democristiano –es decir, la apertura de espacios para el activismo gremial “apolítico” paralelamente a la persecución de los simpatizantes y militantes del FMLN por “subversión”-, los cuadros clandestinos del FMLN se reinsertaron en las organizaciones populares con el fin de dar visibilidad al movimiento popular de oposición, ejercer presión política en contra del gobierno y difundir por medio de estas organizaciones las posiciones insurgentes.

Sobre todo los relatos de Celso permiten visualizar la estrategia militante de usar los espacios abiertos por el gobierno para reactivar las asociaciones sindicales del sector público. Su relato sobre la etapa posterior a la primera gran ofensiva del FMLN inicia en 1982. Después de haberse escondido algunos meses para evitar la persecución, en este año reinició el contacto con otros activistas que empezaron a reunirse en pequeños grupos de dos o tres personas en la UCA, actuando como si fueran grupos de estudiantes. Llama la atención de su relato que en su lugar de trabajo una funcionaria le advirtió que las fuerzas de seguridad lo estaban buscando por “subversivo” y que mejor no regresaría a trabajar por un par de semanas, Esta anécdota da cuenta que bajo ciertas circunstancias el vínculo (real o aparente) con una organización guerrillera era un instrumento para la intimidación y por tanto un recurso de poder de los sindicalistas, sobre todo en

las actividades cotidianas y las relaciones “cara a cara” con medianos y altos funcionarios gubernamentales en los centros de trabajo que no querían exponerse a sabotajes, paros u otras acciones realizadas por los comandos urbanos:

...nos escondimos tres meses porque ahí me mandó llamar la directora de la Biblioteca Nacional y me dijo “Mire, fíjese que el ministro me acaba de mandar a llamar, donde dicen que a usted lo han visto combatiendo en las calles, con pistola en mano, yo quemé mis manos por usted [...] yo le dije que no, que usted era un sindicalista, pero que no era guerrillero, entonces él me creyó”, dice “Pero yo vi una fotografía suya ahí con una pistola” —era un montaje porque yo en verdad nunca, yo no había usado las armas ¿verdad?— “Era un montaje” le dije yo, “Entonces yo quemé mis manos por usted, *entonces el ministro dice que se cuide porque tres meses lo van a andar persiguiendo*³⁷²” ¿verdad?, entonces esos tres meses —te estoy hablando de enero, febrero, marzo, abril quizá, no me recuerdo cuánto tiempo— ni nos veíamos los compañeros, entonces, y esa fue la gran ventaja de la Resistencia Nacional, porque todos los compañeros huyeron, del país, todiditos [*sic.*] se fueron, hubo dirigentes de las FPL y todo y no se volvieron a ver en El Salvador pues, [...] y habían [*sic.*] dos compas de la RN que se habían quedado fuera, que estaban sin trabajo, entonces nosotros hacíamos como colectas y ese poquito dinero se los pasábamos mensualmente. [...] esos compañeros nos estuvieron viendo, se comentaban clandestinamente con los compañeros allá en Guazapa, en el cerro de Guazapa, y ellos nos daban línea ¿verdad?, y es así como es por agosto quizás o julio, no te puedo decir exactamente qué fecha, empezamos a vernos...

Fue en 1983 que por orden de un cuadro que representaba la dirección de Resistencia Nacional ubicada en el frente militar de Guazapa —Celso señala que “bajó del Cerro Guazapa”— que los activistas convocaron a una asamblea sindical en 1983 para refundar el sindicato. Pero asistieron pocos empleados —“si nos llegaron 15 compañeros fueron bastantes”—, debido al miedo, a diferencia de 1980 cuando era muy fácil, según Celso, de invitar a los compañeros de trabajo a participar en asambleas y marchas.

Esta historia es significativa porque da cuenta de un nuevo periodo para el activismo sindical en el sector público, y demuestra como iniciaron las nuevas formas de participación sindical y del activismo clandestino. Al mismo tiempo que seguía la persecución de los llamados “subversivos” y el control militarizado de los ministerios y empresas públicas, el gobierno democristiano creó los espacios para la concertación de condiciones de trabajo y salarios entre sindicalistas y funcionarios públicos, como el CCTEM. Al principio, la estrategia de los cuadros sindicales, que militaban en una de las organizaciones guerrilleras, en los espacios donde convergían autoridades, sindicalistas democristianos y sindicalistas de izquierda, era cambiar las mayorías al interior de estos espacios por medio de la invitación de organizaciones sindicales que también pertenecían al FMLN. De esta manera, comisiones como el CCTEM se convirtieron en puntos estratégicos para reorganizar el

³⁷² Las cursivas son nuestras.

movimiento sindical del FMLN que desembocaría en la fundación de la UNTS.

Al comparar los relatos sobre el periodo de la guerra, nos llamó la atención que las narraciones de los entrevistados empiezan a parecerse en las descripciones del activismo político, independientemente del punto de partida de la trayectoria militante de cada uno. Esto sugiere que las estructuras organizativas clandestinas que articulaban el movimiento popular con el FMLN siguieron un mismo modelo independientemente si se trataba de sindicatos, organizaciones de refugiados o desplazados u organizaciones no gubernamentales. El modelo se caracterizaba por mantener dos estructuras paralelas que se articulaban a partir de la acción militante que se realizaba en los distintos ámbitos sociales. Los relatos describen la interacción de la estructura legal -por ejemplo una federación sindical- cuya dirigencia estaba compuesta por cuadros políticos del FMLN con la estructura política clandestina -los colectivos políticos-, donde participaban los cuadros sindicales y los cuadros político-militares. En estos colectivos se discutían los planteamientos políticos y aspectos logísticos de las acciones que había que realizar para apoyar la actividad político-militar y, a la vez, se integraban las demandas sectoriales, de los centros de trabajo con presencia de militantes del FMLN, en plataformas más amplias de reivindicaciones políticas y socioeconómicas. Las plataformas deberían impulsar a los trabajadores y empleados de base a participar en las marchas y mítines convocados por las “organizaciones paraguas” y, de esta manera, dar visibilidad a un movimiento popular de oposición que a diferencia de los años setenta se presentaba como un sujeto colectivo plural y multisectorial.

La visión de la organización como una estructura centralizada y dinámica, capaz de articular distintos espacios por medio de la acción militante, se expresa en la terminología usada por los entrevistados para describir sus propias actividades políticas: La palabra “Frente” no se refería sólo a la organización -el FMLN- sino a todos los espacios donde había que expandir la influencia política guerrillera, como el “frente sindical”, el “frente campesino”, el “frente estudiantil”, el “frente diplomático”. Un determinado espacio social -un colegio, una fábrica o una colonia- se convertía en “frente” a partir de la presencia y la actividad de un militante político.

El relato de Ana ilustra la función de los militantes como “bisagras” entre campo político y mundos sociales. Ella cuenta que su participación en las estructuras sindicales legales de FENASTRAS y en la estructura clandestina del partido implicaba impulsar las estrategias políticas del partido -transmitidas en las reuniones clandestinas del colectivo político- al interior del sindicato textil. El partido, explica, intentaba determinar por medio de sus militantes las formas de protesta sindical,

promoviendo la acción directa como manifestaciones, plantones y paros, así como los tiempos y los lugares, donde deberían ocurrir, pero no incidía en la formulación de las demandas centradas en reivindicaciones sociales y económicas por aumentos salariales, bajas a los precios de alimentos y servicios básicos. El vínculo con el programa del FMLN se establecía por medio de las plataformas programáticas que integraban las reivindicaciones socioeconómicas con las demandas políticas por una negociación entre gobierno salvadoreño y FMLN para terminar la guerra, la liberación de los presos políticos, la disolución de los escuadrones de la muerte y la no intervención del gobierno estadounidense.

Otros relatos reflejan cómo operaban las prácticas encubiertas de movilización, así como las tensiones que se podían producir entre las exigencias planteadas en los círculos políticos, respecto al cumplimiento de los objetivos político militares del FMLN, y las negociaciones que se requerían en el espacio laboral para movilizar a los trabajadores:

Para esta época [1984], el contexto era de muchas huelgas, muchas marchas, protestas, plataformas reivindicativas de los trabajadores, pedir digamos sus uniformes, sus aumentos de salarios, prestaciones, aguinaldo completo, etcétera, dependiendo del área donde trabajaran y entonces nosotros acompañamos este proceso pero también tratamos de trascender esta parte puramente reivindicativa a una cuestión más política ¿no? Con otro trasfondo político, que dejáramos de ser tan inmediatistas en nuestras reivindicaciones y que pasara ser una cosa más crítica de un sistema general, yo me acuerdo que yo participé mucho en eso, yo incluso llegué a ser la representante sindical del centro donde yo trabajaba y, bueno, constituíamos así núcleos de células de estudio político ¿no? para ir viendo lo que pasaba al interior de los centros de trabajo, pero también para analizar el contexto de otros trabajadores más allá del área educativa y cultural. Entonces me acuerdo que una de las cosas más difíciles para mí en este momento era de cómo concientizar a los trabajadores de que la lucha de nosotros, de nuestras reivindicaciones tenía que ver también con la lucha de las reivindicaciones de los de la luz eléctrica, de los del agua, de los de la basura de la alcaldía, etcétera, porque ellos siempre decían “bueno, pero nosotros que tenemos que ver con que ellos no tengan uniforme, nosotros lo que queremos es un aguinaldo y ya”, entonces me acuerdo que todo esto fue muy difícil porque todo el mundo tenía mucho miedo... (María)

El siguiente diálogo ejemplifica también uno de los argumentos centrales y recurrentes de los militantes para legitimar sus métodos contestatarios de acción. Para ellos el contexto político, marcado por la confrontación, y la violación a los derechos políticos y sociales, justificaba recurrir a métodos de acción directa y al vínculo clandestino con la guerrilla. Ana lo plantea de la siguiente manera:

¿Y cómo hicieron para que participara la otra gente, digamos los trabajadores que no militaban en el partido?

No, la militancia en el partido era consciente y era voluntaria, los trabajadores así, que no eran militantes ellos no participaban en las actividades ya partidarias...

Pero en otras actividades sindicales, por ejemplo, en las marchas, en todo eso, ¿cómo hacían para que la gente participara?

Mira, por ejemplo, las plataformas de exigencias, en las marchas eran reivindicaciones meramente laborales, ahí no se planteaban reivindicaciones de tipo político, ¿me entendés?

Y dentro de la organización ¿cómo se tomaban las decisiones?

Mira, la estructura donde yo estaba había un responsable ¿verdad?, que era el que llevaba las líneas que había que ejecutar ¿verdad?, ahí las únicas decisiones que tomábamos era quizá ya de tipo logístico, cómo lo vamos a hacer... pero es casi, era una orden, este ... [una línea] ... una línea... Había líneas generales ¿verdad? Que venían del partido pero que siempre estaban íntimamente relacionadas con el quehacer sindical o con el quehacer de los organismos de derechos humanos, con el quehacer de las cooperativas de los repobladores [...] Nosotros, por ejemplo, en el sindicato nunca hacíamos acciones que no llevaran un grado de interés para el sector laboral... *la ganancia política que nosotros dábamos con nuestro aporte político era en el momento y en el lugar que lo hacíamos pero que sí siempre tuvo una fuerte dosis de beneficio para los trabajadores*³⁷³...

Pero se decía que había bastante subordinación a las organizaciones político-militares, y la posición más extrema de esa postura era la del gobierno que decía que la UNTS era fachada de la guerrilla ¿no?

Siempre dijeron que los sindicatos y todas las organizaciones que aquí estaban, éramos fachada de la guerrilla... no, no éramos fachada... porque la violación a los derechos humanos existía, la violación a los derechos sindicales y laborales existía, entonces era válido que existiéramos en esas organizaciones... si en algunos de los casos no hubiera habido ninguna violación a todos esos derechos que son constitucionales, posiblemente los que estábamos en esa estructura legal aquí nos hubiéramos ido a la montaña ¿verdad? O quizá mucha gente no se hubiera organizado en sindicatos, no se hubiera organizado en un comité de presos y desaparecidos políticos.

No obstante, la apuesta a la intimidación y la violencia encubierta seguía siendo un juego peligroso en el espacio laboral. Así como ayudaba de repente a obtener ciertas concesiones podía provocar la captura de activistas por “actividades subversivas” o el aislamiento, porque los trabajadores tendían a distanciarse de los sindicalistas demasiado beligerantes. Mantener el equilibrio entre la línea política del FMLN de desestabilizar el gobierno y las disposiciones de los obreros a movilizarse era un arte y alterarlo permanentemente en función de implementar la línea político-militar desgastaba el liderazgo sindical. Al menos esto se puede concluir a partir de las respuestas de Maria a la pregunta por las estrategias para reconstruir colectivos sindicales y grupos políticos decapitados por la represión:

Primero, era ser real representante de los trabajadores y no ser un cucurucho o un sombrero vacío ¿no? Entonces, en la medida en que ellos te reconocían como alguien que estaba llevando sus demandas auténticas hacia arriba en esa medida también los trabajadores te

³⁷³ Las cursivas son nuestras.

protegían porque la gente estaba consciente que eso era poner en peligro la vida, entonces de alguna forma ellos te brindaban cobertura... por ejemplo, si alguien veía que estaba paseándose por allí alguna patrulla o que habían llegado a preguntar por alguien de nosotros inmediatamente cualquier trabajador iba y te decía “Hemos visto esto y no sé qué...” entonces uno tomaba sus medidas ¿no? [Ella cuenta el caso de un médico, que también era de Resistencia Nacional y que fue sacado por los trabajadores en una camilla del hospital para que no lo detuviera la policía] En la medida en que no existía un nexo sino que los trabajadores te veían como alguien que en nombre de ellos andaba nada más haciendo grilla y desorden en esta medida te desconocían y decían que los estabas poniendo en peligro a ellos.

La tecnificación del activismo

Algunos de los espacios, en donde se ejercía la militancia en este periodo, fueron productos inmediatos de la guerra como los campamentos guerrilleros, pero también los campos de refugiados, las cooperativas de repobladores, las organizaciones de derechos humanos y de atención a los presos políticos. Muchos de estos espacios, que contaron con el apoyo de la Iglesia Católica, la Cruz Roja y de ONG's nacionales e internacionales, permitieron la constitución de liderazgos femeninos porque fueron mujeres –por lo general familiares de activistas y dirigentes- que encabezaron las organizaciones de la población civil afectada por la guerra o de presos políticos y derechos humanos.³⁷⁴

La trayectoria de Adriana, después de su salida de Suchitoto a raíz del estallido de la guerra en la zona, ilustra este proceso de reconversión de una activista de base del Movimiento Revolucionario Campesino a representante del movimiento de refugiados y repobladores. En su relato sobre los distintos refugios –La Bermuda, Zaragoza, La Betania- aparecen agentes clave que contribuyeron a la emergencia del movimiento de refugiados como un actor colectivo: la Cruz Verde –versión nacional de la Cruz Roja Internacional- la iglesia, los representantes de ONG internacionales y, por supuesto, la guerrilla. También permite ver las consecuencias de la estrategia del ejército de “limpiar” las zonas de confrontación de población civil:

¿Me puedes contar un poco más sobre la vida y la organización de los refugiados?

...para mí el primer refugio en El Salvador estuvo aquí en Suchitoto, en un lugar conocido como La Bermuda, ahí en una hacienda muy grande de origen muy antiguo [...]

por ahí en junio del año 80, el ejército llega con un montón de camiones y empezó a sacar a

³⁷⁴ La formación de liderazgos femeninos a partir de la posición parientes de presos, desaparecidos o asesinados por motivos políticos es un fenómeno observado en el movimiento de derechos humanos y las luchas en contra de la impunidad, como por ejemplo en el caso de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. La politización de las mujeres se dio a partir de la búsqueda de sus hijos e hijas detenidos-desaparecidos. Véase, por ejemplo, Marisa Navarro, “Lo personal es político: Las madres de Plaza de Mayo”, S. Eckstein (coord.), *op.cit.*, 2001, pp. 274-291.

la gente y empezó a decirnos y amenazarnos que si, que tomáramos una decisión, si nos íbamos de ahí o nos mataban, era una decisión entre vivir, entre irte con ellos o morirte, entonces, empezaron a sacar a la gente, yo recuerdo que llegaban como con 12 camiones y empezaron a sacar, a llenar los camiones de gente y empezaron a traerla aquí, al centro penal que había aquí en Suchitoto, que estaba nuevo, nunca fue... no lo habían usado todavía, no habían traído presos, la única gente que lo, que lo estrenó fue la gente que estaba en La Bermuda... entre esos echaron a mis hermanos que estaban pequeños, a los viejitos, a cualquier gente, ellos los tiraban, no les importaba si los niños iban por un lado, si los padres quedaban por otro y la trajeron aquí, al penal, yo no llegué al penal, sólo llegaron mis hermanos y mi papá, mi mamá quedó allá y quedé yo y otra gente, porque era tanta gente la que había que se les pasó el día y no alcanzaron a sacarla, entonces cuando llegó la tarde dijeron "bueno, nos vamos y mañana venimos a terminar de llevar a la gente", [...] luego nosotros en la noche cuando ellos se retiraron, nosotras empezamos a enviar mensajes hacia los lugares donde sabíamos que estaban los campamentos ya, de la guerrilla, entonces empezamos a enviar mensajes para que ellos llegaran y algunos de que pudiéramos irnos ¿verdad?, a los campamentos, al monte, entonces yo recuerdo que esa fue, inclusive fue la última vez que pude ver a mi compañero y yo no me fui con él en esa época, en ese entonces porque él no quiso que yo me fuera porque tenía a mi hijo...

Yo salí después de ahí en la noche, yo salí sola porque tratamos de que todos los niños que habían quedado en ese lugar, se los llevaran a San Salvador, a las bases de la Cruz Verde, porque queríamos proteger a los niños y a los ancianos que quedaron ahí, que el ejército no alcanzó a llevárselos antes que las demás personas, yo me quedé ahí y después yo pude salir, pero ya sola y mis hijos estaban, yo no sabía donde estaban, después empecé a andarlos buscando en las bases de la Cruz Verde, por ahí, hasta que al final los encontré, y luego, luego después de que estábamos ya en la base, en esa base de la Cruz Verde, que estaban en diferentes lugares de San Salvador, en Soyapango, en Cuscatancingo, en diferentes puntos de San Salvador, después de eso, fuimos y cómo encontraron un lugar en Santa Tecla, yo no sé, fue la Cruz Verde que encontró un lugar y empezamos a ir a hacer un refugio que todavía vive gente ahí, que es conocido como Santa Tecla, el refugio de Santa Tecla, ese refugio lo fuimos a hacer la gente que salimos de aquí de Suchitoto y luego empezamos a luchar porque sacar a toda la gente que estaba en este penal.

Yo después tuve que salir, al poco tiempo tuve que irme de ahí y fui a hacer otro refugio, yo me llevé a otra gente de ahí, a otro lugar. En ese momento había un extranjero que nos apoyó para podernos ir a ese lugar y nos fuimos al refugio que más tarde se conoció como Betania en Zaragoza, apoyada por una organización que se llama Médicos del Mundo. Se compró una propiedad en ese lugar de Zaragoza y se hizo el refugio conocido como Betania. Yo salí en el 82 de ahí de Santa Tecla con esta gente a hacer este, otro refugio, y ahí estuvimos un largo tiempo, digo largo porque estuvimos hasta el 85 en este lugar de Zaragoza, en este refugio. Yo quizás pienso que soy alguien de que cuando hay algo que no me gusta tal cosa, yo prefiero, o sea, hacer, irme a hacer, pero no, no quiero que me impongan lo que a mí no me gusta, y entonces me fui a otro lado, nos fuimos con otra gente y fuimos a fundar una cooperativa. Estando en Betania, en Zaragoza, yo empecé a ser parte de un comité de refugiados y bueno, yo conocía todos los refugios, las condiciones, cómo vivía la gente en cada refugio de los que entonces ya habían aquí en El Salvador, que era San José de la Montaña, el Domo María, el San Roque, el Santa Ana, todos los refugios internos que había en El Salvador y yo era parte de ese comité de refugiados [...] Estar en estos lugares tan, no era tan bien que yo estaba desvinculada del movimiento, porque yo siempre tenía un enlace con el Frente, siempre lo tenía... el enlace que tenía con el Frente y más estaba en esos lugares, como una estrategia para hacer otros trabajos.

Como permite apreciar el relato, los primeros refugios aparecieron sin planeación previa en las zonas de mayor violencia política. Los que participaban en la organización de los primeros refugios eran aquellos que ya desde antes contaban con experiencias organizativas, como voluntarios de la Cruz Roja o Verde, militantes políticos o catequistas de la iglesia. La prolongación de la guerra, los desplazamientos de la población civil por las fuerzas armadas y los comandantes locales del FMLN para crear “zonas de combate” institucionalizó a los refugios. En este proceso intervinieron muchos agentes: la Cruz Roja Internacional y sus dependencias nacionales, la iglesia católica, congregaciones evangélicas, organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, las organizaciones del FMLN que buscaron ejercer cierto control dentro de los refugios para usarlos como territorios de retaguardia discreta para los guerrilleros y sus familias.³⁷⁵

En los campos de refugiados –esto lo permite observar el relato de Adriana– integrantes de los propios refugios empezaron a organizarse para asegurar la vigilancia, formar comisiones de limpieza y colaborar con los representantes de las organizaciones no gubernamentales y la iglesia en la distribución de los víveres. Muchos activistas que participaron en estas tareas deben haber sido militantes y cuadros encubiertos del FMLN que, como Adriana, habían participado en la organización de la movilización política campesina de fines de los 70. A partir de estas tareas y estructuras se gestó la “tecnificación” del activismo social. Activistas –muchas veces mujeres de origen popular– empezaron a especializarse en ciertas funciones y temas. En esta situación el apoyo de las ONG por medio de talleres para aprender un oficio (panadería, costura, etcétera), para alfabetizar o sensibilizar sobre la situación de las mujeres podía resultar estratégico para iniciar una trayectoria como activista especializada en algún tema. Pero no todos (o todas) pudieron aprovechar esta situación porque la organización jerárquica en los refugios, con activistas y promotores que gestionaban la satisfacción de las necesidades básicas, como comida, protección, salud, etcétera, hizo que la gente perdiera la capacidad de hacerse cargo de sí misma y de sus familias.³⁷⁶

El relato de Adriana permite ver que la presencia de las organizaciones guerrilleras en los refugios se

³⁷⁵ Véase, M. W. Foley, *op.cit.*, 1996, pp. 67-104.

³⁷⁶ Sobre la vida en los refugios véase algunos de los testimonios recogidos en Ana Kelly Rivera et.al. (comp.), *¿Valió la pena?! Testimonios de salvadoreñas que vivieron la guerra*, San Salvador, Ed. Sombrero Azul, 1995, especialmente pp. 7-20, el testimonio de Ángela Rivera sobre el refugio La Betania de Zaragoza. Sobre la organización en los refugios en el extranjero (por ejemplo, Honduras), véase, Mesa Permanente de Mujeres Rurales, “La experiencia de la comunidad Segundo Montes, El Salvador”, Rodrigo Soto Arias, *Del hecho al derecho: mujeres rurales centroamericanas en lucha por la propiedad de la tierra*, San José/Costa Rica, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2002, pp. 107-141, especialmente pp. 120-122.

aseguraba a través de los representantes de los refugiados, provenientes de las zonas con presencia guerrillera, quienes tendían a ser colaboradores clandestinos del FMLN. La estructura al interior de los refugios, que Adriana describe como “enlace”, operaba como una “estrategia para realizar trabajos para el Frente”, pero a la vez servía para representar los intereses de los refugiados y la demanda del derecho al regreso a las zonas de origen. Entre las tareas clandestinas estaba el control de las dinámicas internas del refugio, saber cuántos y quiénes vivían allí, quiénes llegaban y salían, identificar posibles “orejas” y asegurar que combatientes guerrilleros que llegaban a los refugios para “realizar una tarea” o recuperarse de alguna enfermedad, no se quedaran –lo cual era considerado una desertión por parte de la guerrilla- sino regresaran al frente de batalla:

Lo que uno se encargaba era, por ejemplo, no permitir que llegara gente joven a los refugios, principalmente si iban del Frente y sí había gente joven, sí pasaba gente joven por ahí, pero pasaba de los frentes a descansar o porque estaba enfermo o porque tenía algún problema y pasaba ahí para hacer algún trabajo, pero después pasaba que muchas veces la gente se acomodaba estando ahí y quería quedarse... entonces el trabajo que había que hacer es que esa gente retornara ¿verdad? Sino que era para que estuvieran las familias, los niños ahí pero no para los excombatientes [sic], entonces alguien que hacía un trabajo para que no se viera que los excombatientes [sic], empezaran a irse a los refugios porque ahí estaban sus mujeres o sus hijos...

La cita apunta a un problema central y poco explorado: ¿qué hacían los combatientes y militantes del FMLN con sus familias? Esta pregunta es válida porque, cómo se sabe, las estrategias de intimidación y hostigamiento de los escuadrones de la muerte afectaban también a las familias de los militantes. Apunta a una de las tensiones inherentes a la militancia revolucionaria que presupone una dedicación absoluta al partido lo cual puede generar conflictos con la familia y con proyectos vitales distintos a la militancia.

La sistematización de las experiencias vivenciales sobre la militancia en los años ochenta permite aprehender que una de las finalidades de la actividad militante era el ejercicio del control sobre un determinado espacio social, considerado importante desde el punto de vista militar, y desde el enfoque militar de la guerra de guerrillas cualquier espacio podía convertirse en estratégico. En función de este fin, los militantes tenían que ejercer funciones encubiertas de logística e inteligencia para obtener información vital desde la perspectiva militar. Por otra parte, impulsar demandas dentro del movimiento popular también jugaba un rol importante dentro de la estrategia militar. Los lazos encubiertos ayudaron a reagrupar a un movimiento social disperso por la violencia, primero en Coordinadoras y después en la UNTS, pero también llevaron a que la dirección partidista clandestina y centralizada empezara a tomar las decisiones relevantes, en nombre del movimiento popular, sobre cómo y cuándo movilizarse. Las implicaciones de este proceso para la relación entre organización guerrillera y militantes de las organizaciones populares se describen a

continuación.

“Por ordenes del partido”: Los mecanismos de la delegación

...formamos la UNTS, pero ahí prácticamente ya eran líneas como partido, yo de ahí ya obedecía ya líneas de partido, ya no eran líneas gremiales ¿me entendés? Si el partido me decía “haz esto”, yo tenía que hacer eso, en el sindicato o en todas las instancias porque yo ya era un dirigente nacional... ya no estaba sólo en el gremio, ya había pasado a ser dirigente del Comité lero de Mayo por ordenes del partido... ya había pasado a ser, a tomarme el Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales por orden del partido... (Celso)

¿Cuándo tú te vas a Europa? Me llevan... [risas] Bueno, cuando te llevan a Europa también es para ir a realizar trabajo de solidaridad ¿no?

Mira, fue para nosotros un poco sorpresa, pero nosotros al final no queríamos ir a ningún lado... quedarnos acá pero las decisiones no las toman los militantes, las toma la dirección y creo que fue un acuerdo político en el tiempo de Duarte... y que nos ofrecen asilo Canadá y luego Holanda porque el trabajo a nivel sindical, político en Europa fue muy fuerte [...] en ese tiempo se habían hasta asesinado, no se puede decir de otra forma, al grupo de periodistas de Koos Koster³⁷⁷... los holandeses y se habían deteriorado mucho las relaciones con los Países Bajos... Duarte en ese tiempo dijo: ‘No. Hay que volver a tener temas de acercamiento con Holanda...’ (Horacio)

Los años ochenta fueron la década en la cual el FMLN –más específicamente la Comandancia General- se convirtió en el portavoz autorizado de la oposición social y política ante el gobierno salvadoreño y la comunidad internacional. Factores que explican este proceso de delegación son el contexto del enfrentamiento armado, así como la creatividad del FMLN de convertir el espacio internacional en un “frente de batalla”, donde periódicamente se realizaban “ofensivas diplomáticas” para obtener apoyo de gobiernos en América Latina y Europa a favor de una solución política del conflicto.³⁷⁸ A la vez había mecanismos internos que facilitaron el proceso para que en el transcurso de la década el aparato político-militar terminara por representar al movimiento popular, es decir, actuar y hablar en nombre de él. El proceso de delegación por medio del cual el aparato militar del FMLN se erigió en representante único del movimiento popular organizado recuerda al proceso de institución señalado por Bourdieu como el “misterio del ministerio” y uno de los procesos fundamentales en el campo político. Gracias a este proceso una organización o una

³⁷⁷ En 1982 el periodista Koos Koster y tres periodistas holandeses fueron asesinados por un batallón del ejército salvadoreño, cuando iban acompañados por varios miembros del FMLN para realizar un reportaje sobre la situación política y militar de El Salvador.

³⁷⁸ De acuerdo con las notas periodísticas, entre 1988 y 1992 la Comandancia General del FMLN abandonó casi por completo el frente de batalla para visitar diversos países latinoamericanos y europeos en búsqueda de apoyo internacional al proceso de negociación y compromisos de cooperación para la reconstrucción y el desarrollo de las zonas de guerra. Véase, “Democratización: utopía o realidad. Informe especial de El Salvador”, *Inforpress Centroamericana*, No. 902, 6 de septiembre de 1990, pp. 19-23.

persona –un político, un partido, un sindicato- se transforman en sustituto del grupo, pueden identificarse con este grupo y hablar y actuar en su nombre.³⁷⁹

Hay una serie de referencias en las entrevistas que permiten aproximarse a este proceso de delegación desde la perspectiva de los militantes. Entre las razones principales a tomar en cuenta se encuentran las condiciones en las cuales los activistas sobrevivientes del ciclo de la violencia de 1980/1981 se volvieron a reagrupar. En los primeros tres años de la guerra, en la capital (y en general los centros urbanos) sólo algunos núcleos de militantes, desvinculados entre sí de acuerdo a los testimonios, seguían reuniéndose en absoluta clandestinidad y compartimentación, sin realizar actividades públicas. Cuando Celso regresó a su puesto de trabajo en el Ministerio de Educación la organización sindical previa había dejado de existir. Algunos de los activistas se habían unido a la guerrilla (se habían ido “al monte”, como se decía), otros habían salido del país y muchos más habían cambiado de trabajo y de ciudad para despistar al enemigo. Y varios habían sido capturados y asesinados. En el “tiempo de muerte” se rompieron las amplias redes sociales de oposición que durante el ascenso de la movilización social en los años setenta habían articulado grupos guerrilleros con el movimiento popular organizado.

En 1982, Celso empezó a reunirse con otros compañeros del sector educación para relanzar –muertos de miedo, como recuerda- el sindicato, y en 1983 por orden de un cuadro dirigente que “bajó del Volcán Guazapa” convocaron a la primera asamblea sindical. Pero asistieron muy poco empleados: “si nos llegaron 15 compañeros fueron bastantes”, lo cual indica el grado de desmovilización ocurrida por la violencia. A partir de este momento Celso participó en la rearticulación de los núcleos clandestinos que incluyó, a partir de 1986, la formación y entrenamiento de los comandos urbanos de la guerrilla.

Los relatos sobre este periodo hablan de círculos políticos muy cerrados, clandestinos y compartimentados que se conformaban por grupos más homogéneos, en cuanto a su origen social, que los colectivos y asambleas donde antes de la guerra se había construido la disposición a militar. La compartimentación fue una condición de posibilidad central para la delegación de la representación política en las instancias de mando del FMLN: implicaba que los integrantes de la organización político-militar no se deberían conocer entre sí –todos usaban “nombres de guerra”-, y tanto los contactos como el flujo de información se hacía solamente a través de los cuadros

³⁷⁹ Véase, P. Bourdieu, “Espacio social y génesis de las ‘clases’”, *Sociología y Cultura*, México, CONACULTA/Grijalbo, 1990, pp., 281-309, especialmente pp. 306-309.

dirigentes –los responsables políticos-, lo cual significaba un acceso desigual y centralizado a la información sobre la organización: cada militante debería saber y preguntaba sólo lo que le correspondía de acuerdo a su posición al interior de la organización. De acuerdo al grado de compromiso y de voluntad cada uno realizaba diferentes actividades: algunos activistas participaron más activamente en la movilización de las bases de las organizaciones populares a marchas, mítines y paros; otros en el apoyo logístico a las acciones armadas o, directamente, en los comandos urbanos. Algunos participaron también en tareas que implicaban un mayor conocimiento de la organización y competencias específicas, por ejemplo, atender las redes de solidaridad en México, Estados Unidos o Europa que enviaban recursos para los presos políticos, para apoyar la actividad cotidiana de las organizaciones populares y proveer a las estructuras clandestinas del FMLN de ciertos bienes. Maria, después de incorporarse a Resistencia Nacional participó como representante sindical de un colegio y, después, en FENASTRAS como responsable de relaciones y proyectos internacionales. Ella relata su proceso de “tecnificación” en FENASTRAS de la siguiente manera:

...de pronto me dijeron que necesitaban de mis servicios pero para conseguir lana, dinero y ya no era para nuestra lucha reivindicativa estatal, sino que era para ya otro nivel, fue allí donde yo empecé a tener nexos con la federación sindical,

¿Con FENASTRAS?

...con la FENASTRAS, sin ser parte de FENASTRAS porque yo verdaderamente no tenía nada que hacer allí, yo no era trabajadora, obrera ni nada de eso, pero la infraestructura de la FENASTRAS era la que me prestaban, la computadora, la impresora, entonces yo empecé a llegar allí y a trabajar sobre todo en la consecución de fondos, que yo no te sabría decir para donde iban, yo me imagino tal vez que iban al apoyo de la gente que andaba sólo en lucha política, y que ya no tenían trabajo o que los habían echado por eso, etcétera... y a lo mejor, no sé, tampoco estoy segura, para los comandos urbanos. Entonces por mucho tiempo yo estuve en ambas, en ambos frentes, tanto en la lucha de mis compañeros de trabajadores gubernamentales y me empecé a involucrar además con la capacitación de obreros, sobre todo de obreras [*silencio*]

La profesionalización del activismo político no era nada nuevo en el movimiento revolucionario salvadoreño –de hecho, desde la década de los setenta, los grupos guerrilleros usaban los recursos provenientes de secuestros y asaltos bancarios para mantener y ampliar una estructura conformada por revolucionarios profesionales que vivían en la clandestinidad. La novedad en la década de los ochenta fue el componente de la “tecnificación” de activistas sociales y sindicales –militantes o colaboradores civiles- quienes, en organizaciones sindicales como FENASTRAS o ANDES, se dedicaron de tiempo completo a ciertas tareas específicas, como la recaudación de fondos, el trabajo de comunicación nacional e internacional o la capacitación.

Cuando los militantes describen las actividades de la organización en este periodo llama la atención como cambió la concepción de la organización política. Ya no era considerada primordialmente una herramienta para introducir y difundir un proyecto político en un espacio social, sino un instrumento para controlar espacios, crear canales de comunicación y acceder a información estratégica para la conducción de la guerra. La lógica de la “lucha por la hegemonía” no desapareció por completo –cada organización inculcaba a sus militantes que ella y por tanto ellos eran la “vanguardia” política-, pero estaba subordinada al pragmatismo militar expresado en la Comandancia General del FMLN que reconocía la necesidad de coordinar las acciones políticas y militares entre las cinco organizaciones.

Suponemos que un factor que explica el alto grado de aceptación de esta estructura vertical y centralizada reside en que la organización funcionaba como una red que daba protección a sus integrantes y como un instrumento de poder para ejercer control en un entorno hostil. El ejemplo más claro para estas funciones se encuentra en los relatos sobre las experiencias en la prisión. Desde antes de 1980 los presos políticos de los distintos grupos guerrilleros habían formado redes sociales que ofrecían protección y cohesión en las cárceles. En otoño de 1980 estas iniciativas se unificaron en el COPPES, el Comité de Presos Políticos de El Salvador, reflejando también el proceso de negociación y unificación del FMLN.

Horacio fue capturado y llevado a la cárcel, después del “apagón” del 21 de agosto de 1980, dónde pasó los siguientes cuatro años:

En septiembre [de 1980] nosotros estábamos en la Guardia Nacional, cuando tuvimos comunicación del penal de Santa Fe y nos escribimos... -no, creo que las primeras comunicaciones fueron por un intermediario, verbal- de que un día equis se iba a constituir el Comité de Presos Políticos de El Salvador. Entonces nosotros nos reunimos allá donde estábamos –presos o secuestrados- y el COPPES nace y nace con una huelga de hambre y “¿la hacemos pública o no la hacemos pública?” -nosotros en la Guardia- “Pues, no sé de que sirve, si no va a haber medios, no van a ver quién diga nada, pero...” ese día rechazamos la comida, no comimos, excepto unos compañeros que consideramos de que tenían problemas gástricos... y en octubre del 80 fuimos trasladados a Santa Tecla y al final se constituye, se hace público un pronunciamiento, donde desde varias prisiones estábamos constituyendo... y el trabajo ya estaba hecho en un inicio, en Santa Tecla... y habían compañeros ahí, integrados a la dirección, nosotros nos sumamos y el hecho de llevar una formación, de un liderazgo, digamos muy dinámico hizo que desarrolláramos y consolidáramos más el trabajo de los presos políticos en el penal. Nos integramos todos a las diferentes comisiones, definimos, reglamentamos cosas, diferentes condiciones de salud y educación... nos íbamos a hacer cargo de la comida, la alimentación, de todos nosotros... comisiones... llegamos a negociar con el director del penal que en vez de que nos dieran la alimentación, pues que nos dieran el dinero y nosotros lo íbamos a administrar. Nos daban el dinero, lo

administrábamos, más nosotros siempre comíamos mejor... incluso le dábamos comida a los vigilantes, *pues claro, con un propósito, indiscutiblemente, casi de tener el control total del penal.* 380

Uno de los propósitos para obtener el control sobre la cárcel fue preparar una fuga. Aunque esta fuga nunca se llevó a cabo –según Horacio, porque los conflictos del FMLN “fuera de la cárcel”, lo impidieron- el COPPES se consolidó como vocero colectivo de los presos políticos que tenía comunicación permanente con la Cruz Roja y organizaciones de derechos humanos al interior y fuera de El Salvador. En esta función el COPPES convocó y coordinó acciones entre las cárceles, como por ejemplo huelgas de hambre para llamar la atención sobre la situación de los presos políticos y apoyar al FMLN.

El COPPES jugaba un papel importante en el interior de la cárcel porque tenía que “velar por la salud mental de los presos”, como Horacio describe la función primaria del comité. Cada preso político, al llegar a la cárcel, fue recibido por representantes del comité que le entregaron bienes necesarios para la vida en la cárcel –como jabón, velas, artículos higiénicos etcétera- y le ayudó a integrarse a las actividades políticas. El COPPES representaba el grupo de presos políticos ante las autoridades carcelarias, organizaba discusiones y talleres de formación política, realizaba rutinas de entrenamiento militar, disfrazadas de rutinas deportivas, y administraba los bienes y el dinero que familiares y organizaciones humanitarias enviaron. Una parte de estos recursos fueron usados para sobornar a carceleros y presos comunes, ampliando de esta manera el margen de maniobra de los presos políticos. Lo que se negociaba eran privilegios como el derecho a visitas o más comunicación interna o medidas de seguridad, por ejemplo, la posibilidad de esconderse en las celdas de los presos comunes cuando corría el rumor que cuerpos uniformados o escuadrones de la muerte estaban por entrar a la cárcel para secuestrar a “los políticos”. Integrarse al grupo de “los políticos” era, por lo tanto, un recurso de sobrevivencia en el entorno hostil de la cárcel. 381

Preparando la ofensiva

En los años ochenta, la militancia salvadoreña consideraba todo su entorno -no sólo la cárcel o el frente de batalla, sino también el centro de trabajo o la calle- un entorno hostil. Esto se debía a la amenaza y la persecución política pero también refleja la penetración de prácticas y

380 Las cursivas son nuestras.

381 Los relatos sobre la organización en las cárceles salvadoreñas recuerdan a los testimonios sobre las prácticas de resistencia de los comunistas presos en los campos de concentración nazi. Los comunistas formaron redes, buscaron monopolizar –muchas veces en contra de otras redes de presos (especialmente de los delincuentes comunes)- los cargos y posiciones administrativas que la SS delegaba a los presos para mejorar de esta manera las posibilidades de sobrevivencia de sus militantes y organizar núcleos de resistencia clandestina. Véase, B. Moore, *op.cit.*, 1987, pp. 106-107.

representaciones militaristas a las organizaciones populares. El razonamiento militar considera lo político como un asunto de fuerza y de confrontación entre dos campos enemigos. En los espacios laborales este razonamiento se reflejaba en la articulación de las estructuras sindicales visibles con las estructuras “invisibles” de los comandos urbanos, y en el repertorio de la protesta sindical en la combinación de la movilización social –el paro, el cierre de la fábrica o del centro de trabajo- con la amenaza encubierta de eventuales ataques guerrilleros, en caso de que las autoridades no tomaban en cuenta las demandas sindicales:

El mismo gobierno en la época de la guerra había dicho que los sindicatos éramos como fachada del FMLN, la gente veía en nosotros detrás un poder y como vos también sabés que la gente se acerca al poder y como en nosotros miraban que éramos fachada del FMLN, entonces miraban detrás de nosotros armas... y entonces la gente por eso se acercaba a nosotros porque decía “ah, ¿no me va a defender el gobierno? Me van a defender ustedes.” ¿Verdad? Porque entonces era de vida o muerte, era guerra ¿verdad? [...] porque fijáte que era tan paradójico que nosotros llegábamos a una negociación ¿verdad? “queremos que restituyan a fulano despedido” y te decían “no” y sólo les decíamos “aténganse a las consecuencias”, entonces eso los asustaba, como creían que éramos guerrilleros, que era cierto, había guerrilleros porque había activos de unas células guerrilleras ¿verdad? pero no estaban para matar gente, pues, no estaban para eso porque tampoco fuimos escuadrones de la muerte... (Celso)

El relato de Celso ejemplifica cómo operaba la lógica de las prácticas sindicales en la administración pública. Los activistas apostaban a la amenaza militar –los “activos” guerrilleros- y a la movilización de las bases –el paro- para obtener concesiones respecto a reinstalaciones laborales y mejores salarios de los funcionarios que estaban interesados en mantener cierta “paz social” en las dependencias bajo su responsabilidad. Una ventaja de estas estrategias de acción sindical que se basaban en la amenaza, era que no requerían de grandes grupos movilizadas sino solamente de pequeños núcleos de activistas dispuestos a la confrontación. El principal efecto práctico estaba en el hecho que los otros agentes en el espacio laboral –los empleados, los altos funcionarios y los sindicalistas progubernamentales- reconocieron la organización gremial de hecho, es decir, sin registro legal como un interlocutor válido. Las relaciones directas, “cara a cara”, con altos funcionarios del gobierno democristiano hicieron posible que algunas veces los funcionarios advirtieron a sindicalistas sobre amenazas de persecución o intervinieron a favor de sindicalistas secuestrados por los cuerpos de seguridad a cambio de la promesa de que controlarían la movilización.

Dentro de la estrategia militar, los actos de protesta cada vez más violentos cumplían con una función específica. En 1987 avanzaba la preparación para la segunda ofensiva y los cuadros políticos responsables para formar los comandos urbanos aprovecharon los actos de protesta para detectar a

los activistas más arriesgados, probar su temple y acercarlos a los núcleos guerrilleros. Celso cuenta los “procedimientos” de selección para los comandos urbanos de la siguiente manera:

Baja una orden del partido y que me sacan [*de la UNTS*], que me dicen “mirá, vos te vas a quedar ya en otra área de trabajo” [...] en el sindicato siempre miraban al que era más combativo, él que era más decidido, él que uno creía que por algún motivo podría dar el salto para ser miembro de la guerrilla, o ser miembro de un partido del FMLN, a ese lo reclutábamos, y a la par formábamos como un núcleo clandestino que les dábamos atención política, les dábamos información militar, les dábamos formación militar, atención política y eran líderes sindicales.

Para preparar la ofensiva, sigue el relato de Celso, los militantes y cuadros estaban organizados en tres grupos. El primer grupo, -el más amplio y menos clandestino- tenía que realizar las actividades de protesta vinculadas a demandas laborales para aumentar de esta manera la presión política sobre el gobierno de Napoleón Duarte. A este grupo le seguían los “grupos de agitación y propaganda”, activistas más radicales y comprometidos con la guerrilla que eran los encargados de realizar actividades violentas en las marchas, como enfrentarse a la policía, realizar “quemados de bus” y actos de propaganda en las colonias populares para atraer a nuevos colaboradores para la guerrilla. Estas actividades tenían el objetivo de preparar el “ambiente insurreccional”, pero también probar la voluntad y “el temple” de los activistas para la lucha armada, es decir, valorar si eran aptos para ingresar a la estructura más compartimentada y clandestina de la guerrilla urbana: los Comandos urbanos, responsables para actos de sabotaje en la ciudad, tareas de logística, elaborar armas caseras y la participación en la lucha armada en el momento de la ofensiva

Las “quemados de bus” en los meses previos a la ofensiva de 1989, tenían la finalidad explícita de acostumbrar a los activistas de los comandos urbanos al riesgo, dar a los responsables políticos la oportunidad de verlos “en acción” y mostrar ante la población la presencia de la guerrilla en San Salvador:

Nosotros le decíamos a un grupo de compañeros “mira, vamos a ir a quemar un bus” ¿verdad? No los quemábamos ¿verdad? lo que hacíamos es que le decíamos a la gente “este es un...” -Íbamos como cuatro o seis posibles guerrilleros ¿verdad? nos tomábamos el bus, un grupo entraba por atrás y otro grupo por delante- les decíamos que éramos de la guerrilla, que les pedíamos por favor que bajaran despacio ¿verdad? que nadie fuera a hacer ningún movimiento porque nuestros compañeros estaban armados, nada más que bajaran despacio y nos bajábamos del bus, les pinchábamos las llantas y poníamos como que eran bombas, pero no eran bombas, nunca, al menos nuestro partido nunca dio línea de joder un bus así por joderlo... [...] era probando la disposición de lucha del compañero, pues y el compañero para no comprometer iba desarmado, los que iban armados eran dos o tres que eran los que nos daban seguridad... yo siempre andaba desarmado porque yo todavía estaba en mi vida gremial. (Celso)

La militarización de la política, como regla del juego buscaba transformar cada espacio social en una expansión del campo político en donde se reproducía el enfrentamiento militar con el enemigo.³⁸² Esto se refleja en las descripciones de los entrevistados de “agitación constante” de la movilización social, destacando el carácter contestatario de la protesta:

Siempre estuve en las calles gritando justicia y repudiando la injusticia, nunca me tapé la cara. (Miguel)

Y nosotros teníamos una consigna que gritamos en las marchas que decía “¡A más represión, más lucha!” Y yo creo que eso es lo que pasa, que entre era más dura la represión y más nos aventábamos... (Maria)

O la confrontación con las fuerzas del estado y con los patrones:

FENASTRAS se caracterizó por responder por sus líderes y dar respuestas categóricas [...] una acción de la policía era una acción de FENASTRAS, era una cuestión de medir poder pues y eso era una guerra santa, revolucionaria. (Horacio).

Presentamos listas de peticiones al ministro y como no daba todo, íbamos a la huelga, hacíamos concentraciones, marchas alrededor de la cuadra del ministerio. (Celso)

Las citas dan cuenta de las percepciones sobre la movilización social que dominaban en los círculos del activismo revolucionario de este periodo y que la consigna “A más represión, más lucha” logra expresar acertadamente: Para crear condiciones favorables al cambio político había que privilegiar la acción directa por encima de la vía institucional y agudizar los conflictos existentes en diversos espacios sociales, como el laboral, agrario o estudiantil y ámbitos laborales, agrarios o estudiantiles. De acuerdo a esta lógica, la acción armada no sólo formaba parte del repertorio de la acción directa, sino era la estrategia privilegiada dentro de este repertorio, el instrumento de presión más relevante y efectivo. Con la preparación de la ofensiva, otras formas de acción directa empezaron a ser consideradas como formas de aprendizaje para acostumbrar a los activistas más arriesgados a la violencia.

La priorización de la acción armada tenía varios efectos sobre la militancia: Si se compara la evolución de las estructuras partidistas en la ciudad y del aparato militar en los frentes de batalla, se puede ver que la estructura partidista urbana, concebida de acuerdo a los principios leninistas del partido centralizado, no tuvo la misma visibilidad como el aparato militar y diplomático del FMLN ubicado en las zonas de conflicto y en el extranjero. El partido en la ciudad estaba conformado por

³⁸² Sobre la militarización de la política en los movimientos radicales de los años setenta, véase, P. Calveiro, *op.cit.*, 2005 (b), pp. 123-130.

colectivos de trabajadores, empleados públicos, estudiantes o pobladores y sus núcleos, por cuestiones de seguridad, tenían que estar en permanente movimiento, integrar y desintegrarse constantemente, por lo cual no tuvieron la misma visibilidad como la estructura militar.

En las entrevistas es posible identificar la creciente centralidad del aparato militar en las referencias al “monte” para hablar de la dirección del movimiento. De acuerdo con los relatos, las líneas generales de la estrategia política fueron bajadas “desde el monte”: fuese para que una organización sindical llevara a cabo una serie de paros en San Salvador, para que un militante asumiera una nueva responsabilidad, realizara una determinada acción o dejara de hacer otra. De vez en cuando los dirigentes de las organizaciones populares “subieron” clandestinamente al monte –al Frente Guazapa o al volcán San Salvador- para reunirse con la dirección de sus partidos y recibir las estrategias político-militares, como cuenta Celso. Otras veces la dirección mandaba a cuadros político-militares a la ciudad para que tomaran el mando en la estructura clandestina, lo cual tendía a producir descontento y preocupación entre los militantes urbanos “porque ellos (los del monte) ya no sabían como era la dinámica del trabajo clandestino en la ciudad y podían poner a todos en peligro” (Maria).

La mención, en varias entrevistas, de los roces en el trabajo clandestino entre militantes urbanos semilegales y los cuadros clandestinos ya apuntan al futuro conflicto al interior de la estructura de la organización, que no se manifestaba directamente gracias a la cohesión del grupo propiciado por el enfrentamiento y la represión. También dan cuenta de las jerarquías entre lo militar y lo civil, creadas a partir de la militarización de la política, y que en los relatos se expresan en la frontera geográfica entre “monte” y “ciudad”. Una vez terminada la guerra estas jerarquías incidieron en el rumbo que las trayectorias políticas de los militantes tomarían. Mientras a lo largo de los años ochenta el aparato militar del FMLN consolidó su posición central en el espacio político, los militantes ubicados en las organizaciones populares perdieron visibilidad política debido a que en sus prácticas políticas cotidianas tuvieron que actuar de forma encubierta y subordinada a lo militar. En cambio la Comandancia General del FMLN empezaba a ocupar la posición de portavoz principal para hablar en nombre de la totalidad del movimiento de oposición al gobierno salvadoreño, lo cual le confería suficiente prestigio y poder para determinar los posicionamientos políticos en el momento de las negociaciones de paz.³⁸³

³⁸³ Pierre Bourdieu señala sobre la lógica de representación que transforma a un subgrupo selecto en voceros no cuestionados de todo un grupo: “La posibilidad de malversar el capital social reposa en el hecho de que un grupo puede ser representando en su totalidad, en las diversas acepciones del verbo, por un subgrupo (Teilgesamtheit) claramente delimitado, perfectamente visible, y conocido y reconocido por todos. Eso no es

Una fecha mencionada recurrentemente en las entrevistas como momento clave es 1992 –el año de la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, el análisis de los relatos muestra que los cambios, que iban a ser significativos en los años noventa, se anunciaron desde los últimos años de los ochenta. Sobre todo el periodo que abarca de marzo 1989 hasta febrero de 1990 fue clave: en marzo ARENA ganó las elecciones presidenciales, lo cual en un inició provocó un incremento en la violencia paramilitar en contra de las organizaciones populares identificadas con el FMLN o con el PDC y que culminó en el atentado a las oficinas de FENASTRAS y de COMADRES en octubre de 1989. También fue el año de la segunda gran ofensiva del FMLN en noviembre de 1989, por medio de la cual la guerrilla quería mostrar su fuerza para obligar al gobierno a negociar. Con la derrota electoral del FSLN en Nicaragua, en febrero de 1990, el FMLN dejó de contar con una retaguardia extraterritorial estratégica, y el movimiento insurgente salvadoreño perdió su referente político central que había servido como modelo político e inspiración para la acción. Con esto se evidenció que un ciclo de la movilización revolucionaria estaba terminando y que la vía de lucha armada en Centroamérica estaba –para este momento al menos- agotada. Lo que desde la perspectiva de hoy puede plantearse como una cuestión muy racional –el agotamiento de una forma de lucha- para la subjetividad militante fue un factor desmoralizador porque significó abandonar la apuesta de la lucha armada y de la transformación radical de la sociedad. También obligó a replantearse el vínculo con la población civil que no había seguido al llamado de la “vanguardia”, como evidenció la falta de movilización popular en el contexto de la ofensiva militar.

Al iniciarse el proceso de negociación, la visibilidad del aparato militar y diplomático en el campo político nacional e internacional se tradujo en la atención mayor que recibieron las necesidades y demandas de los combatientes y de las bases rurales de apoyo del FMLN, mientras las demandas de los núcleos urbanos y civiles de la militancia pasaron a un segundo plano. Como se señalará en el capítulo 4, los efectos prácticos de esta lógica de representación –la reconversión de los principales comandantes militares en políticos profesionales y la falta de atención a la agenda de reformas socioeconómicas- se convertirían en razones para la frustración de muchos activistas y colaboradores del FMLN después de 1992.

otro que el subgrupo de los “nobles” de la “gente conocida”, de los famosos los cuales pueden hablar por la totalidad, la representan y ejercen poder en su nombre. [...] Potencialmente, esa misma lógica de la representación gobierna también fenómenos como el “culto a la persona” o la identificación de partidos, sindicatos o movimientos sociales con su líder. Es como el signo terminara por asumir el lugar de lo significado o el representante el de los representados por él.” P. Bourdieu, “Las formas del capital...”, *op.cit.*, 2000, p. 156.

3.8. Conclusiones

Visto en perspectiva es fácil reconocer en la década de los ochenta, la pugna entre tres grandes proyectos políticos: el reformista democristiano, el popular-revolucionario del FMLN y el proyecto de liberalización económica de la derecha agroexportadora. Como es sabido, con la victoria electoral de Alfredo Cristiani en 1989 la derecha pudo imponer el modelo económico y político neoliberal que domina en El Salvador hasta el día de hoy. Sin embargo, al reconstruir el proceso de reorganización del campo político salvadoreño durante los ochenta llama la atención que la pugna central por imponer un proyecto se daba entre el FMLN y el PDC. Parece que los dos actores, al estar concentrados en la guerra civil, perdieron de vista la consolidación de este tercer actor cuyo proyecto estaba previsto a anular tanto la propuesta reformista como la revolucionaria.

Una de las razones que posiblemente explique esta incapacidad para reconocer a tiempo la fuerza de la derecha para reconstruir su hegemonía y renovar su proyecto reside en la visión bipolar del conflicto que compartieron tanto revolucionarios como reformistas. La lógica de la polarización política, que se consolidó en la guerra civil, impidió en el caso del movimiento popular la formulación de un proyecto político autónomo y alternativo. Mientras la UNOC apoyaba el “reformismo contrainsurgente” del gobierno democristiano, la UNTS –pese a su origen plural- se convirtió rápidamente en uno de los voceros clave para difundir las propuestas políticas del FMLN. Los propios militantes y cuadros políticos estaban conscientes de este fenómeno, como lo demuestra la entrevista de Celso. De acuerdo a su testimonio, en 1988 la UNTS había dejado de operar como un movimiento sindical amplio y empezó a manejarse como un “frente de masas” del FMLN que apoyaba en la preparación de la ofensiva. Tanto la UNOC como la UNTS aglutinaron en la segunda mitad de los años ochenta a organizaciones populares provenientes de diferentes sectores en torno a dos proyectos políticos opuestos.

Conforme se intensificaban los preparativos para la segunda ofensiva, el FMLN buscó reciclar las estrategias de la radicalización política del movimiento popular que habían sido tan exitosas en la década de los años setenta. Sin embargo, como señalamos en este capítulo, en la segunda mitad de los años ochenta estas prácticas ya no mostraron la misma efectividad para radicalizar las bases de las organizaciones populares. ¿A qué se debe la pérdida de efectividad? Según nuestra lectura de los procesos de reorganización del movimiento popular, la estructura diseñada por las organizaciones político-militares para estrechar nuevamente los vínculos con el movimiento popular permitió aprovechar la relativa apertura institucional, posibilitada por el gobierno de Napoleón Duarte, y el descontento popular provocado por el deterioro de las condiciones de vida para revitalizar las

organizaciones populares decaídas por la persecución y la violencia política de principios de los ochenta. Sin embargo, cuando se intentó reproducir la lógica de movilización de los años setenta, orientada a responder a cada acto de represión con una mayor y más combativa movilización, esta estrategia no funcionó sino tendió a acrecentar la brecha entre, por un lado, la capa de activistas politizados y por otro lado, el “pueblo no organizado”, preocupado más por asegurar día a día su subsistencia y ansioso que se restableciera paz y orden. Si comparamos el repertorio de protesta de los años ochenta con los setenta llama la atención que los dirigentes campesinos, gremiales o sindicales, vinculados con la guerrilla, apostaron a un juego peligroso porque al mismo tiempo que se presentaban como dirigentes gremiales, que si bien radicales no formaban parte de la estructura guerrillera, como cuadros políticos implementaron en su espacio laboral las líneas político-militares.

La brecha entre organizados y no-organizados aumentó porque los vínculos entre militantes, sus células y las bases sociales –los que en los años setenta habían conformado las redes de oposición– se debilitaron o desaparecieron durante la guerra. Por medio de la acción militante y la estructura clandestina leninista se buscó reconstruir estas redes y articular la población organizada y no-organizada. El hecho que estos intentos no prosperaron tanto como las organizaciones político-militares hubieran deseado apunta a un efecto no deseado de la estrategia guerrillera para preparar un ambiente insurreccional: después del ciclo de violencia política de 1981 y 1982, las acciones contestatarias distanciaron a la población no-organizada y atemorizada por la represión. La militarización de la política contribuyó, sin duda, a los desaciertos de la lectura del FMLN acerca de la coyuntura política de fines de los años ochenta en relación con las condiciones subjetivas de la población, la eficacia de los procesos electorales para reconstruir la legitimidad estatal y la efectividad política de la reorganización partidista de la derecha oligárquica.³⁸⁴

En 1989 ARENA ya no podía ser considerada exclusivamente el “frente agrario” o el “brazo político de los escuadrones de muerte”³⁸⁵ –aunque estas fracciones seguían jugando un papel decisivo en la definición de las políticas partidistas– sino requería de un análisis más matizado para entender por qué contaba no sólo con el apoyo del empresariado sino también con bases populares en las colonias marginales de las ciudades y en la zona cafetalera en el occidente del país.

³⁸⁴ Véase, por ejemplo, I. Sánchez, *op.cit.*, 1997, pp. 134-138.

³⁸⁵ La “Propuesta de integración y plataforma del gobierno provisional de amplia participación”, publicada por el FMLN en enero de 1984 decía: “Disolución de los cuerpos de seguridad, escuadrones de la muerte y de su brazo político el partido ARENA.” FMLN, *op. cit.*, s/f., p. 16.

La respuesta del FMLN para reconstruir las redes de oposición destruidas por la violencia del estado fue la de una organización clandestina, compartimentada y conspirativa. Esta forma de organización, basada en el modelo del partido de tipo leninista era sin duda la forma más adecuada de organización para asegurar la operación de la misma en un contexto marcado por la violencia y la persecución política. Pero al mismo tiempo tuvo un alto costo porque en el contexto de la guerra prolongada facilitó en la alianza revolucionaria la ampliación y profundización de prácticas militarizadas, expresadas en el establecimiento de jerarquías y principios de distinción basados en la beligerancia y experiencia militar. Si en los años setenta el trabajo político de las organizaciones político-militares había tenido su centro de gravedad en las ciudades y las organizaciones de masa, en los ochenta la guerrilla se volvió esencialmente rural y campesina, desplazando la ciudad y los militantes urbanos en un segundo lugar.

Los mecanismos de delegación que surgieron en este contexto generaron una paradoja: el vínculo con el FMLN funcionó como un recurso de poder importante para los sindicalistas de la UNTS en las negociaciones con empresarios y gobierno, así como en el acceso a fuentes de financiamiento internacional. Sin embargo, al delegar su voz en el FMLN, éste se convirtió en el principal portavoz para representar las demandas e intereses de una amplia y heterogénea oposición política y social. Se anticipaba pues, la autonomía del FMLN en las negociaciones con el gobierno salvadoreño para formular los puntos indispensables para la desmovilización de la guerrilla y su transformación en un partido político.

INTERLUDIO

PACIFICACIÓN Y NUEVAS MODALIDADES DE EXCLUSIÓN

*“...una revolución negociada”
(Álvaro de Soto sobre los Acuerdos de Paz)*

I. Introducción

¿Qué condiciones económicas y sociales enmarcaron las negociaciones de la paz e incidieron en el proceso de pacificación salvadoreño? ¿De qué manera permiten entender mejor la marginación política que sufrieron las organizaciones populares organizadas en la UNTS y la UNOC? Responder a estas preguntas es necesario porque permite entender las estrategias del FMLN para organizarse como partido, y de las organizaciones populares para mantenerse en el campo político reposicionándose ante el FMLN, el gobierno y los demás actores políticos, las cuales se presentarán en el capítulo IV. El objetivo de estas páginas es, a modo de paréntesis, mostrar primero las estrategias macroeconómicas de los gobiernos de ARENA, que determinaron a fin de cuentas el poco alcance de las medidas socioeconómicas inscritas en los Acuerdos de Paz y cambiaron las condiciones de posibilidad para la movilización política. En segundo lugar, tomando como punto de partida las tendencias esbozadas en el primer capítulo, queremos dar cuenta de las tendencias regionales para mostrar que los cambios en el FMLN y la consolidación de ARENA en el poder político no pueden explicarse exclusivamente a partir de la voluntad y decisiones individuales de los actores, sino fueron posibles gracias a un nuevo contexto económico internacional caracterizado por la consolidación del proyecto neoliberal y neoconservador.

La cita puesta al principio del capítulo da cuenta que los Acuerdos de Paz fueron concebidos como un hito importante en la reestructuración institucional y política del Estado salvadoreño. La cita de Álvaro de Soto, representante del Secretario General de las Naciones Unidas en las negociaciones de paz, señala la importancia que las organizaciones internacionales atribuyeron a la negociación para definir nuevas reglas que permitirían la incorporación de la izquierda armada al juego político-electoral y acabarían con una de las razones principales de la guerra civil. Por otra parte, si bien la puesta en práctica de los Acuerdos de Paz amplió los derechos políticos, simbolizados en la integración del FMLN al sistema de partidos, la falta de las reformas socioeconómicas necesarias y

la incompleta apertura del entramado institucional a la participación de actores de la sociedad civil impidieron una efectiva democratización.³⁸⁶

2. Inicios y consolidación del proyecto neoliberal en El Salvador

Al analizar las acciones gubernamentales para implementar el ajuste estructural en El Salvador llama la atención la facilidad con la cual ARENA se apropió del discurso neoliberal en contra de las instituciones estatales formadas por los gobiernos anteriores. Esto sucedió paralelamente a la instrumentación de la agenda neoliberal en otros países latinoamericanos, a raíz del fracaso de las medidas que anteriormente se habían empleado para lograr una estabilización a corto plazo de los desequilibrios macroeconómicos. En su estudio sobre las condiciones políticas internas que posibilitaron la implementación de las reformas neoliberales en América Latina durante los años ochenta, Juan Carlos Torre señala que el vacío conceptual, creado por la imposibilidad de los instrumentos desarrollistas para controlar las emergencias económicas y tendencias hiperinflacionarias a través de la intervención estatal, fue llenado por el nuevo diagnóstico, según el cual el origen del problema se ubicaba en la regulación excesiva del mercado por el Estado. Señala Torre que cuando en la política “se logra hacer prevalecer una definición de un problema público se condicionan, al mismo tiempo, las opciones de acción”, lo cual explicaría porque las políticas neoliberales lograron operar como un nuevo “sentido común”.³⁸⁷ Este enfoque no niega el papel central de actores externos, especialmente de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos del primer mundo, en la reformulación de las políticas en un contexto marcado por una creciente necesidad de los países latinoamericanos por financiamiento externo. Sin embargo, hay que reconocer que los grupos internos de poder tenían cierto margen de maniobra para negociar y para adoptar el proyecto político-económico del neoliberalismo impulsado por los asesores internacionales. En otras palabras, tenía que haber una voluntad política doméstica dispuesta a

³⁸⁶ Las cuentas pendientes de la pacificación fueron señaladas una vez más en la XV conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 2007. Por ejemplo, David Morales, extitular adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos –institución creada en el contexto de los Acuerdos de Paz– señala que el bien invaluable de los Acuerdos fue terminar el enfrentamiento armado. Sin embargo, otros aspectos como la reforma al sistema judicial, el castigo a criminales de guerra responsables de delitos de lesa humanidad y la partidización del Tribunal Supremo Electoral a favor de ARENA, evidencian el incumplimiento de los Acuerdos con respecto a la democratización del país y del Estado. Véase, Leonel Herrera, “Cumplimiento de DD.HH. sólo es posible sacando a ARENA del gobierno”, *Diario Colatino*, San Salvador, 17 de enero de 2007, disponible en línea www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=15227 (consultado en enero de 2007).

³⁸⁷ Véase, Juan Carlos Torre, *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 29.

desmantelar las instituciones del Estado desarrollista, consideradas anacrónicas y disfuncionales.³⁸⁸

En El Salvador, como en el resto de Centroamérica, desde los años setenta el modelo económico basado en la exportación de productos agrarios y bienes de consumo para el mercado regional, empezó a mostrar señales de agotamiento expresados en un creciente deterioro de los términos de intercambio y, en consecuencia, un endeudamiento para financiar las importaciones, el gasto público y, desde luego, el gasto militar. En este contexto, la apropiación del proyecto neoliberal por las elites salvadoreñas se hizo con facilidad, debido a dos factores: en primer lugar, porque desde el siglo XIX el liberalismo económico había sido la opción ideológica preferencial de los grupos agro-exportadores de toda la región.³⁸⁹ El segundo factor fue la inserción del conflicto bélico en el esquema bipolar de la guerra fría y la cruzada contra el comunismo: Después del colapso de las estrategias industrializadoras en los años ochenta, esta predisposición reconvirtió con mucha facilidad a un neoliberalismo ortodoxo, gracias al carácter ideológico de las guerras civiles y el rol activo del gobierno de Ronald Reagan. Como señalamos para el caso salvadoreño –lo cual es aplicable también para el caso nicaragüense y guatemalteco– la existencia de proyectos sociales alternativos obligó a las elites económicas a reagruparse y elaborar un proyecto económico y político propio para poder enfrentar los proyectos sociales alternativos. En este contexto la propuesta neoliberal y neoconservadora se convirtió en el marco cognitivo idóneo para rearticular el anticomunismo y anti-estatismo de estos grupos, al identificar los mecanismos de regulación estatal del mercado como el principal obstáculo para la reactivación de la economía.

La adhesión mayoritaria del empresariado salvadoreño al proyecto neoliberal en la década de los ochenta no se explica por la búsqueda pragmática de una solución práctica a los desajustes macroeconómicos, sino fue a la vez una respuesta motivada por razones ideológicas. Más bien fue su rechazo a las medidas intervencionistas del gobierno de Napoleón Duarte y al proyecto popular-

³⁸⁸ Los gobernantes latinoamericanos han usado los lineamientos del FMI para la reestructuración económica como pretextos para desviar las críticas de medidas impopulares y responsabilizar a las instancias internacionales aunque de hecho ellos han impulsado la inclusión de ciertas medidas. Esto sucedió también en El Salvador: Según Jaques Polar, ex consejero del FMI, ciertos compromisos que figuran en las cartas de intención, firmados entre un país y el FMI para formalizar el desembolso de un préstamo, figuran allí “porque el país lo quería”. Citado, en James K. Boyce, “Movilización de recursos externos”, J. K. Boyce (coord.), *Ajuste hacia la Paz. La política económica y la reconstrucción de posguerra en El Salvador*, México, PNUD/Ed. Plaza y Valdez, 1999, pp. 165-194, p. 181. Sobre la influencia externa en la formulación de proyectos económicos en América Latina hay una amplia bibliografía. Véase, por ejemplo, David Ibarra, “Los laberintos del orden internacional: la importación de reformas”, *Revista de la CEPAL*, Santiago de Chile, No. 82, abril de 2004, pp. 7-17.

³⁸⁹ Véase, J. Paige, *op.cit.*, 1997, p. 338ss.

revolucionario del FMLN, que lo llevó a actualizar los principios libre-cambistas basados en el liberalismo decimonónico, por medio de la adopción de los planteamientos neoliberales. Sin embargo, este radicalismo ideológico no impidió que el gobierno electo de ARENA entrara en negociaciones de paz con el FMLN. Esto se debe, por una parte, a la creciente presión internacional que se intensificó con la ofensiva guerrillera de 1989 y el asesinato de los Jesuitas de la UCA y sus empleados. Otro factor importante para entender el cambio hacia una actitud más pragmática fue la necesidad de pacificar el país para poder imponer la liberalización del mercado y el fomento de las exportaciones preparadas durante la década de los ochenta. Desde entonces, las lógicas de la acción gubernamental de ARENA se han caracterizado por una combinación de decisiones pragmáticas – como la decisión de negociar la paz para poder reorganizar la economía – y de actitudes orientadas a mantener visibles los principios de diferenciación ideológica. Describir el impacto de esta lógica de acción en la negociación de los Acuerdos de Paz y el campo político del posconflicto para entender las reacciones del FMLN es el objetivo de esta sección.

De oposición a gobierno: La reconversión exitosa de ARENA

La incorporación de prácticas políticas más pragmáticas al repertorio de acción de ARENA formó parte de un proceso de reconversión en el cual las fracciones más radicales de la elite agraria, vinculadas directamente a los escuadrones de la muerte, fueron desplazadas de la dirección del partido derechista.³⁹⁰ Según el estudio de Jeffery Paige, en la segunda mitad de los ochenta los representantes de la fracción agroindustrial de la elite cafetalera, organizada en el gremio de cafetaleros ABECAFE y en la fundación FUSADES, se apropiaron del aparato partidista, y sus representantes en la dirección del partido –por ejemplo, Alfredo Cristiani o Calderón Sol– empezaron a manifestarse a favor de una apertura controlada del sistema político y así terminar el conflicto bélico. Sin embargo, esta moderación ideológica fue relativa, circunscrita a una noción de democracia como ejercicio de los derechos políticos individuales –principalmente el derecho al voto– y la consolidación de un Estado de derecho. En cambio, desde la perspectiva de los empresarios, las libertades de asociación y de expresión tenían que subordinarse a la garantía de los derechos de propiedad y de la libre empresa.³⁹¹

Un factor que posibilitó el desplazamiento de los viejos grupos de poder de la dirección de ARENA fue la reconversión económica de algunos grupos agro-industrial los cuales, motivados por la reforma agraria y la guerra, empezaron a invertir su capital en sectores económicos no

³⁹⁰ Véase, v.v.A.A., *op.cit.*, 2004, pp. 241ss.

³⁹¹ ABECAFE Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café; J. Paige, *op.cit.*, 1999, p. 189.

agropecuarios -principalmente el sector servicios, comercio y financiero- y/o en tierras subutilizadas en las zonas no-conflictivas del país. El gobierno estadounidense canalizó, a través de AID, recursos económicos y técnicos a FUSADES que fomentaba iniciativas empresariales para explorar las posibilidades de exportar bienes no tradicionales y estudios para elaborar una agenda de medidas concretas que permitieran iniciar un proceso de modernización y de apertura económica. Fue FUSADES que formuló los tres ejes sobre los cuales debería operar la inserción de El Salvador a la economía internacional: el fortalecimiento del sector financiero, la cercanía del mercado estadounidense y el aprovechamiento de la mano de obra barata para producir bienes de consumo para el mercado externo.³⁹²

El otro factor que permitió la marginación de los grupos más derechistas de la dirección de ARENA fue la participación exitosa del partido en los procesos electorales. El resultado de las elecciones presidenciales de marzo de 1989, donde ARENA ganó la presidencia con un 53,82 por ciento de los votos y el PDC obtuvo sólo el 36 por ciento, confirmó la tendencia hacia la consolidación de la fuerza electoral de ARENA.³⁹³ Esto puso de manifiesto un cambio importante en el campo político salvadoreño: la derrota electoral de la Democracia Cristiana inauguró una prolongada crisis que produjo la fragmentación del partido hasta convertirla en un partido minoritario en el escenario electoral.³⁹⁴ El FMLN perdió con la derrota del PDC un referente central de la izquierda que había pasado de aliado ocasional en la coyuntura política de los setenta a un competidor por apoyos populares y principal adversario político y militar en los años ochenta. En el caso de ARENA, esta victoria le permitió aprovechar todavía más la mayoría legislativa obtenida en estos comicios para iniciar el periodo de gobierno con una primera serie de reformas económicas y administrativas que desmontaran las instituciones centrales del Estado intervencionista democristiano.³⁹⁵

³⁹² Véase, Siegel y Hackel, *op.cit.*, 1990, p. 165; Alexander Segovia, *op.cit.*, 2002, p. 37ss.

³⁹³ El PCN obtuvo el 4,07% y Convergencia Democrática -que agrupaba a los aliados socialdemócratas del FMLN, el 3,8%. Véase, "Crónica del mes", *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año XLIV, No. 485, marzo de 1989, pp. 241-249.

³⁹⁴ En las elecciones presidenciales de marzo de 2004 el PDC participó en la coalición CDU-PDC, encabezada por Héctor Silva, exalcalde de San Salvador y exmilitante del FMLN. En un contexto electoral marcado por la polarización política entre FMLN y ARENA, esta coalición obtuvo sólo el 3,92% del voto.

³⁹⁵ Carmelo Mesa-Largo y Katharina Müller señalan en un estudio comparativo sobre las reformas al sistema de pensiones en nueve países latinoamericanos que una constante para explicar el avance de reformas estructurales en contextos posautoritarios es una mayoría progubernamental en el Poder Legislativo. La probabilidad de un mayor avance hacia la privatización es aún más grande si el Poder Ejecutivo logra evitar un debate público sobre los pros y contras de la reforma. Véase, Carmelo Mesa-Largo y Katharina Müller, "The Politics of Pension Reform in Latin America", *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 34, Part 3, agosto de 2002, pp. 687-715.

El discurso inicial de Cristiani en su toma de posesión es ilustrativo para mostrar las principales pautas económicas, sociales y políticas del primer gobierno de ARENA: Cristiani prometió rescatar a El Salvador tanto de la “agresión marxista” como del “reformismo empobrecedor” democristiano, con lo cual el recién electo presidente nombró a los dos adversarios políticos centrales –el FMLN y el PDC-, que ARENA había combatido desde su fundación. Según Cristiani, la agresión de la izquierda y las políticas estructurales del PDC habían provocado la crisis económica, el desorden social, la pobreza y la corrupción que aquejaban el país porque buscaron imponer la intervención en las relaciones de propiedad por motivos políticos, algo –según él- completamente contrario a la identidad salvadoreña. En cambio, ARENA anunciaba una completa transformación del Estado, de un aparato burocrático e ineficiente en un actor casi imperceptible que regulara sólo las normas indispensables para asegurar el funcionamiento de la economía y garantizar la libertad individual. Con respecto a los sindicatos y organizaciones campesinas, Cristiani advirtió que en vez de mantener el “dogma destructivo de la lucha de clases” ellos deberían actuar como aliados del sector empresarial y sumarse al “acuerdo histórico” con el Estado para contribuir a la estabilización y el reajuste de la economía salvadoreña:

Comprendemos a cabalidad que nuestra economía está muy cerrada, hacia el interior y hacia el exterior. Iniciaremos un programa de apertura, que propicie la competitividad interna y que fomente las exportaciones en general y en especial las no tradicionales, que serán ambas nuestra salvación en el futuro. Sabemos que en esta apertura, habrá que hacer sacrificios. Instamos al esforzado y eficiente sector productivo a redoblar su capacidad de sacrificio, en razón de que tendrá toda la comprensión y el apoyo del gobierno, para que todos juntos trabajemos solidariamente en beneficio de El Salvador...³⁹⁶

El discurso de Cristiani se basó en una serie de oposiciones que le permitían esbozar el proyecto político propio a partir de la descalificación del modelo social de sus oponentes. Mientras el proyecto de ARENA es vinculado discursivamente con las nociones de “seguridad”, “imperio de la ley”, “orden” “progreso”, “libertad” y “responsabilidad individual”, los modelos del “reformismo empobrecedor” del PDC y del “colectivismo totalitario” de los marxistas son descritos con palabras como “inseguridad”, “el imperio de la fuerza”, “desorden”, “parálisis” y “paternalismo estatizante”. Los grupos no dispuestos a sumarse al “acuerdo histórico” para reactivar la economía –una advertencia dirigida directamente a la insurgencia armada e implícitamente a todos aquellos considerados simpatizantes de la causa guerrillera- podían esperar del gobierno de ARENA nada más que la aplicación de la ley:

³⁹⁶Alfredo Cristiani, “Discurso pronunciado en la toma de posesión”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año XLIV, No. 488, junio de 1989, pp. 521-527, p. 524.

Nuestro pueblo necesita seguridad, y se la daremos, aplicando la ley, no simplemente la fuerza. Pero no vacilaremos en ser legalmente enérgicos ante el desorden, la destrucción, y la anarquía, que tanto han flagelado a nuestro pueblo.³⁹⁷

El programa de gobierno de Alfredo Cristiani fue elaborado por FUSADES y se propuso como objetivo central sentar las bases para un modelo económico basado en el sector externo por medio de la diversificación de las exportaciones no tradicionales de origen agrícola e industrial.³⁹⁸ Las medidas inmediatas para lograr estabilizar la economía fue la reprivatización de la banca y la abolición del monopolio estatal del comercio exterior del café y azúcar, una reforma financiera para garantizar la autonomía del Banco Central y crear la Bolsa de Valores, reformas de aranceles para liberalizar los precios de granos básicos y el inicio del proceso de privatización y reestructuración del sector público para reducir el tamaño del Estado. En este contexto hubo ciertas medidas con un significado político especial para marcar las diferencias con el modelo anterior: Así el desmantelamiento de INCAFE (institución responsable para la comercialización del café en el mercado internacional) tuvo una relevancia simbólica específica para demostrar la derrota del proyecto reformador de la Democracia Cristiana, porque la oligarquía cafetalera había demostrado un resentimiento especial en contra del monopolio estatal sobre el comercio exterior considerado un ataque frontal a sus intereses.³⁹⁹ La desaparición del Instituto de Vivienda Urbana entre 1991 y 1992, no sólo respondió a meta gubernamental de reducir el tamaño del Estado, también era funcional para debilitar al sindicalismo del sector público porque significó anular al sindicato del Instituto, el SETIVU, que durante la guerra había sido uno de los sindicatos más reconocidos por haber iniciado, con su paro, la revitalización del sindicalismo opositor en 1984.⁴⁰⁰

³⁹⁷ *Ibíd.*, p. 523.

³⁹⁸ La exposición de las principales medidas económicas y políticas para instaurar un nuevo modelo económico durante la década de los noventa se basa en los siguientes textos: A. Segovia, *op.cit.*, 2002, pp. 37-41 y p. 223ss.; James K. Boyce, "Introducción"; A. Segovia, "La actuación y las políticas macroeconómicas a partir de 1989"; ambos textos se encuentran en J. K. Boyce (coord.), *op.cit.*, 1999, pp. 21-39 y pp. 77-101; A. Segovia, "La experiencia política del ajuste en El Salvador", Jerónimo de Sierra (coord.), *Los pequeños países de América Latina en la hora neoliberal*, Caracas, Nueva Sociedad, 1994, pp. 69-87; Kay Eekhoff Andrade, "Mercado laboral y equidad en El Salvador", E. Funkhouser y J.P. Pérez S., *op.cit.*, 1998, pp. 103-134.

³⁹⁹ Sobre los argumentos de la elite cafetalera en contra de INCAFE, véase J. Paige, *op.cit.*, 1997, especialmente pp. 194-198.

⁴⁰⁰ Las notas periodísticas de 1989 y 1990 evidencian las contradicciones internas de la elite económica salvadoreña, entre los que fueron beneficiados por la agenda de reformas económicas y los que salieron perdiendo. Por ejemplo, después de anunciar las principales medidas económicas para liberalizar la economía, el empresariado perjudicado solicitó de Cristiani apoyos especiales y un periodo de transición para iniciar un proceso de reconversión industrial que aseguraría la competitividad en el mercado internacional. Véase, Blanche Petrich, "Empresarios salvadoreños homenajearon a Cristiani", *La Jornada*, México, 1ero de junio de 1989, p. 22; Sobre los primeros meses del gobierno de ARENA se puede consultar también la Cronología elaborada por *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año XLIV, No. 490-491, agosto-septiembre 1989, pp. 727-743.

Si bien hubo un importante crecimiento de la economía salvadoreña durante la década de los noventa, esto no se logró a partir de la diversificación de las exportaciones, como estaba planteado en la estrategia original, sino con base en el dinamismo de los sectores no transables -especialmente comercio y servicios- dinamizados a partir de la privatización, el auge de la maquila y el creciente flujo de remesas de salvadoreños residentes en el extranjero. De acuerdo con Alexander Segovia, el flujo de remesas fue decisivo para posibilitar el ajuste económico porque amortiguó el costo social para los segmentos más pobres de la población y, al incorporarse al sistema financiero nacional, permitió a la economía salvadoreña en estos años “gastar más de lo que tenía.”⁴⁰¹

Apoyándose en estas tendencias el gobierno salvadoreño inició entre 1993 y 1994 el viraje hacia una estrategia macroeconómica que buscaba atraer inversión extranjera (principalmente hacia el sector maquilador), integrar la economía salvadoreña a la norteamericana y la transformación del país en un centro financiero regional. Los gobiernos de Calderón Sol (1994-1998) y Francisco Flores (1999-2004) fortalecieron las políticas que buscan, desde entonces, convertir el sector financiero en el eje principal del crecimiento de la economía salvadoreña. Este modelo se sostiene en cuatro pilares: el primer pilar, un excedente constituido por las remesas familiares, lo cual ha permitido superar las restricciones externas al crecimiento y dinamizar el consumo interno; el segundo, la estabilidad cambiaria formalizada a través de la dolarización de la economía en el 2001; como tercer pilar opera la integración de El Salvador a la economía norteamericana; finalmente, como cuarto pilar, puede considerarse la expansión del mercado interno en los años noventa, lo cual ha permitido una importante reactivación de la inversión privada. En cambio, el fomento del sector agropecuario no ha formado parte de las prioridades del nuevo modelo económico.⁴⁰²

⁴⁰¹ El incremento de las remesas desde la década de los años ochenta, y sobre todo en los noventa, ha sido considerable, como permiten observar las siguientes cifras: En 1979 las remesas fueron de 49,2 millones de dólares o 1,4 por ciento del PIB, en 1989 203,7 millones de dólares o 3,5 por ciento del PIB y en 1999 las remesas ascendieron a 1,580 millones de dólares o 12,6 por ciento del PIB. En el 2004, de acuerdo con el PNUD, el 22 por ciento del total de hogares salvadoreños recibió remesas, 2 mil 548 millones de dólares o el 16 por ciento del PIB. Para los datos de 1979 a 1989, véase A. Segovia, *op.cit.*, 1999, p. 83; Para las cifras de 1999 véase Katherina Andrade-Eekhoff y Claudia Marina Silva-Ávalos, *Globalización de la Periferia. Los desafíos de la migración transnacional para el desarrollo local en América Central*, Documento de Trabajo, San Salvador, FLACSO, septiembre de 2003, p. 9; Para los datos de 2004, véase, PNUD, *Una mirada al nuevo nosotros. El impacto de las migraciones*, Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005, p. 14, disponible en línea www.desarrollohumano.org.sv/migraciones/idhes2005pdf/sinopsis.pdf (consultado en junio 2007).

⁴⁰² Véase, A. Segovia, *op.cit.*, 2003, p. 223. Sobre la dolarización, véase, Carlos J. Glower, “La dolarización en El Salvador. Lecciones y advertencias para la región”, *Nueva Sociedad*, Caracas, No. 172, marzo-abril de 2001, pp. 150-164. Sobre el impacto de las remesas en el fortalecimiento del sector financiero, véase, Sarah

La transición del modelo agroexportador, en crisis desde fines de los setenta, hacia un modelo económico basado en el sector financiero y la integración a la economía norteamericana produjo cambios en las correlaciones de fuerza al interior de los grupos dominantes. Algunas de las familias cafetaleras más influyentes en los sesenta y setenta –por ejemplo, los Dueñas-, cuyas propiedades había resultado afectadas por la guerra, la Reforma Agraria y la reprivatización de la banca, perdieron posibilidades de incidir en la política gubernamental. Otras familias –por ejemplo, los Cristiani Burkard, los Poma y los Saca-, que incrementaron su fortuna a partir de invertir en la diversificación de cultivos, la industria de exportación, el sector servicios, el sector financiero o la inversión en bienes raíces, aumentaron su poder de incidencia en las políticas gubernamentales. El sector que ganó de manera decisiva influencia política ha sido el beneficiado por la privatización de la banca y del sistema de pensiones en 1996, y el ingreso de los excedentes de las remesas a los canales formales del sistema financiero. Sobre todo a partir de la administración de Francisco Flores, sus representantes ocuparon posiciones centrales en el gabinete. Por otra parte, forman parte del segmento de los ganadores las empresas trasnacionales que participaron en la privatización de los servicios de telecomunicación y de energía eléctrica, los industriales vinculados a la maquila y los empresarios vinculados al sector comercio y la construcción.⁴⁰³

Los principales perdedores fueron los grupos vinculados al campo: por una parte, los grupos agroexportadores, que no habían logrado diversificar su producción a tiempo, y sobre todo el sector campesino, las cooperativas del sector reformado y los trabajadores agrícolas debido a la falta de fomento productivo a la agricultura y el deterioro de los ingresos a partir de la liberalización de los granos básicos.

Ajuste y Acuerdos de paz

Varios factores impulsaron a los actores involucrados en el conflicto militar a emprender el camino de la negociación: La ofensiva guerrillera de noviembre de 1989 había evidenciado el empate militar entre las Fuerzas Armadas y el FMLN. Por otra parte, la presión internacional por una solución política aumentó con el cambio de gobierno en Estados Unidos y la derrota electoral del sandinismo

Gammage, “Exporting People and Recruiting Remittances. A Development Strategy for El Salvador?”, *Latin American Perspectives*, Riverside/CA, Vol. 151, Issue 151, No. 6, noviembre de 2006, pp. 75-99.

⁴⁰³ El actual presidente de El Salvador, Antonio Saca, también es un representante del “nuevo empresariado” salvadoreño. Su familia, de origen libanés, no forma parte de la oligarquía tradicional e hizo su fortuna con bienes raíces y, posteriormente, medios de comunicación. Sobre la recomposición de la elite agraria en los años ochenta y noventa, véase J. Paige, *op.cit.*, 1999; Sobre la década de los noventa, véase el artículo de Maria Dolores Albiac, en R. Cardenal y L.A. González, *op.cit.*, 2002, pp. 153-183.

en febrero de 1990, lo cual contribuyó de manera decisiva a la distensión regional después de una década de guerras internas. Como se señaló anteriormente, el proyecto económico de ARENA para su implementación necesitaba también la paz. El FMLN, para evitar un mayor desgaste de sus bases sociales, tenía que negociar condiciones para una desmovilización que le permitiría construir una base institucional legal –es decir, un partido político-. Todo esto permitió que en enero de 1992, después de una negociación de aproximadamente un año, el FMLN y el gobierno de Alfredo Cristiani firmaran la paz.⁴⁰⁴

Al repasar las estrategias macroeconómicas de los gobiernos de ARENA queda claro que la puesta en marcha de los programas de ajuste estructural no se vio alterada por la negociación y firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992. Al contrario, la rapidez con la cual fueron negociados los pasos necesarios para la desmovilización del FMLN, la desmilitarización del Estado salvadoreño y la integración de la izquierda al sistema político-electoral impidió la construcción de consensos sobre el orden socio-económico. Tampoco hubo voluntad política por parte del Ejecutivo salvadoreño de hacer de las estrategias macro-económicas un objeto de discusión en la mesa de negociación política, más allá del reconocimiento formal de que los problemas estructurales de desigualdad e injusticia social habían originado el conflicto militar. Para evitar que el tema socio-económico se convirtiera en un obstáculo que atrasara las negociaciones, las partes acordaron realizar un Foro Socio-Económico, inmediatamente después de la firma de la paz, en donde representantes de las organizaciones sindicales y campesinas, del sector empresarial y del gobierno deberían fijar las reformas laborales y socio-económicas necesarias.

Los balances que se han realizado en torno a los alcances y límites de los Acuerdos de Paz no coinciden si hubo un contenido socio-económico en dichos Acuerdos que se esfumó porque no hubo voluntad política para implementar las reformas planteadas, o si la intención nunca fue más que fijar reglas políticas que permitieran acabar con la guerra, desmovilizar al FMLN y posibilitar su participación en el juego político-institucional. Pero en la coyuntura de la implementación de los Acuerdos los equipos de negociación apelaron en sus discursos a las posibilidades para refundar el

⁴⁰⁴ Sobre los pormenores de las negociaciones y la implementación de los acuerdos de paz, véase por ejemplo Tommy S. Montgomery, “Getting to Peace in El Salvador. The Role of the United Nations Secretariat and ONUSAL” *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, invierno de 1995, disponible en línea www.findarticles.com/p/articles/miqa3688/is199501/ain8727862/pg8 (consultado en mayo de 2005); Laura Nuzzi O’Shaughnessy y Michael Dodson, “Political Bargaining and Democratic Transitions: A Comparison of Nicaragua and El Salvador”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 31, Parte I, febrero de 1999, pp. 99-127.

país sobre bases democráticas.⁴⁰⁵ Hoy en día, el desenlace de esta “refundación” está claro: los cambios institucionales y económicos fueron mínimos dado que los grupos dominantes pudieron evitar que los acuerdos políticos tocaran los fundamentos de su poder -en lo económico y en lo institucional- o los programas de ajuste estructural. En cambio, el movimiento popular organizado sufrió una serie de derrotas estratégicas tanto durante las negociaciones como durante la implementación.

Aunque a través del Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz, las organizaciones populares de la UNTS y UNOC, las ONGs de los refugiados y de derechos humanos, y representantes de las universidades buscaron incidir en los temas de la negociación, ésta se realizó casi exclusivamente entre los representantes del gobierno salvadoreño, del FMLN y los representantes de la ONU. El cierre del proceso de negociación a la participación de estos actores sociales reforzó las tendencias por medio de las cuales el FMLN se convirtió en principal vocero de la oposición social y política al gobierno de ARENA, que buscaba en ciertos temas -sobre todo el tema agrario- la asesoría de sus cuadros políticos en las organizaciones populares.

En realidad, los Acuerdos de Paz fijaron condiciones y acciones para asegurar la desmilitarización del FMLN a cambio de una reforma institucional para abrir el sistema político a la participación de la izquierda y depurar las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad para impedir nuevas violaciones a los derechos humanos en el futuro. En función de estos objetivos las partes acordaron una desmilitarización del poder estatal a partir de una reducción del número de efectivos del ejército en un 50 por ciento, una redefinición del papel constitucional de la Fuerza Armada, restringiendo sus funciones a la defensa de la seguridad nacional, así como la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad y de las fuerzas paramilitares; la creación de instituciones democráticas a partir de reformar la Corte Suprema de Justicia y el Sistema Electoral, la legalización del FMLN como partido político y la creación de una Policía Nacional Civil y de una Academia Nacional de Seguridad Pública encargada de la formación profesional de los miembros de la PNC.

En materia de derechos humanos, los Acuerdos de Paz establecieron la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la facultad de la Asamblea Legislativa para destituir al Director de la PNC y del Organismo de Inteligencia del Estado por causa de graves violaciones a los Derechos Humanos y el establecimiento de una Comisión de la Verdad para investigar los hechos

⁴⁰⁵ Para un balance de los alcances y limitaciones de los Acuerdos de Paz a 10 años de haberse firmados, véase Luís Armando González, et. al., “Los acuerdos de paz, diez años después”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LVII, No. 641-642, marzo-abril 2002, pp. 210-234.

de violencia ocurridos a partir de 1980. Por último, los Acuerdos establecieron como pautas para las reformas socioeconómicas, la realización de un Programa de Transferencias de Tierras para beneficiar a los desmovilizados del FMLN, del ejército y la población ubicada en las zonas del conflicto, un Plan de Reconstrucción Nacional para desarrollar las zonas de conflicto, atender las necesidades de la población más afectada por el conflicto y facilitar la reinserción de los excombatientes de ambos ejércitos y, por último, la creación de un Foro de Concertación Económica.⁴⁰⁶

Por el significado que tuvieron las medidas socio-económicas para orientar las demandas del movimiento popular durante la década de los noventa profundizaremos más sobre la naturaleza y el impacto de dichas medidas. El Programa de Transferencia de Tierras (PTT) surgió como un compromiso entre el gobierno salvadoreño y el FMLN, después de que este último desistió de su demanda por una ampliación de la Reforma Agraria. Por medio del PTT la guerrilla buscó asegurar tierras para sus bases sociales en las zonas que habían estado bajo control guerrillero. Estas tierras, de acuerdo al razonamiento de la guerrilla, no sólo deberían proveer a excombatientes y simpatizantes del FMLN con un medio de subsistencia sino también fungir como un espacio productivo alternativo. Cuando el programa fue dado por concluido, en 1999, habían sido entregadas 103,200 hectáreas -un 12 por ciento de las tierras cultivables- a 36,100 beneficiarios, de los cuales 27,481 eran desmovilizados del FMLN y tenedores en las zonas exconflictivas.⁴⁰⁷

El alcance que este programa -junto con la reforma agraria- hubiera podido tener para resolver el problema de la desigual distribución de la tierra y combatir la pobreza rural fue limitado, porque las políticas agrarias instrumentadas paralelamente tenían como finalidad la liberalización del mercado de tierras. Así, la tierra distribuida a través del PTT fue adquirida por los beneficiarios a precio de mercado y con base en créditos que, si bien tenían condiciones favorables, implicaban

⁴⁰⁶ Véase Gobierno de El Salvador, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Naciones Unidas, *Acuerdos de Paz*, firmados el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, disponible en línea www.cepaaz.org.sv/menu/Documentos/Negoc_GOES_FMLN/acuerdos_chapultepec_indice.html (consultado en julio de 2003); Joaquín Arriola y David Mena, “La transición: los proyectos en disputa”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año XLVIII, No. 536, Junio de 1993, pp. 527-544; Joaquín Mauricio Chávez Aguilar y Felipe Vargas Ortiz, *A 10 años de los Acuerdos de Paz de El Salvador*, San Salvador, CEPAZ, 2002.

⁴⁰⁷ En conjunto, las tierras redistribuidas por el PTT y la Reforma Agraria de los años 80 abarcaron para entonces aproximadamente un 40% de las tierras cultivables de El Salvador. Antonio Álvarez y Joaquín Mauricio Chávez, *Tierra conflicto y paz*, San Salvador, Colección Estudios de Paz/CEPAZ, 2001, pp. 37-38, p. 54. Michael W. Foley, et. al., *Tierra, Paz y Participación. El desarrollo de una política agraria de posguerra en El Salvador y el papel del Banco Mundial*, Informe, Washington Office on Latin America, julio de 1997, p. 2.

endeudarse.⁴⁰⁸ Pero a diferencia de los beneficiarios de la reforma agraria la entrega de las parcelas del PTT no estaba acompañada por asesoramiento técnico y créditos productivos para los nuevos propietarios.

Debido a la falta de escrituras –que no se entregan hasta el saldo de la deuda- se dificultó el acceso de los beneficiarios a financiamientos y subvenciones gubernamentales, mientras los préstamos con tasas de interés comercial han favorecido principalmente a propietarios con capital. Para resolver el problema de la deuda agraria, y en respuesta a la movilización política de organizaciones campesinas, cooperativas y finqueros simpatizantes de ARENA, en 1996 inició el programa de condonación parcial y de reestructuración de la deuda agraria pendiente que privilegió resolver el endeudamiento individual antes que las deudas adquiridas por las cooperativas. En 1997 se aprobó una ley que aseguraba la condonación del 70 por ciento de la deuda agraria con la condición del pago inmediato del 30 por ciento restante. Esto obligó a una parte significativa de las cooperativas – el sector que concentraba la mayor parte de la deuda agraria- de parcelar las tierras entre los asociados o vender una parte de las tierras para saldar las deudas. El gobierno de Cristiani –apoyado en los estudios del Banco Mundial que señalaban que para enfrentar la pobreza rural había que diversificar las fuentes de ingreso para la población en el campo, en vez de garantizar el acceso o la conservación de la tierra- promovió la parcelación de las tierras colectivas o su venta para saldar las deudas. Todo lo anterior llevó a observadores del proceso de pacificación, así como a representantes de la ONU y del PNUD, a concluir que las políticas agrarias se estaban implementando sin tomar en cuenta el proceso de paz.⁴⁰⁹

Tanto el Plan de Reconstrucción Nacional como el Foro de Concertación Social y Económica sufrieron las consecuencias de la pérdida de interés por parte de la comunidad internacional que no presionaron suficientemente para que el gobierno salvadoreño realizara las acciones a las cuales se había comprometido. Para el Plan de Reconstrucción Nacional el gobierno presentó en 1992 un presupuesto inicial de 1,351.4 millones de dólares –de los cuales 978,7 millones de dólares se consideraban inversiones prioritarias- para financiar diversos programas que abarcaban inversiones en infraestructura básica, en los sectores social y productivo y en la adquisición de tierras. La comunidad internacional se comprometió a desembolsar aproximadamente 600 millones de dólares y para junio de 1992 el gobierno había recibido más de 200 millones de dólares. En 1993, el gobierno

⁴⁰⁸ Y esto aunque el PTT fue financiado en un 85 por ciento por el gobierno estadounidense. Véase, *Ibíd.*, p. 14.

⁴⁰⁹ Véase, *Ibíd.*; E. Baumeister, *op.cit.*, 2001.

presentó un presupuesto modificado para la reconstrucción de 1,829.9 millones de dólares, especificando una asignación de 627 millones de dólares destinada a programas para la reinserción de los excombatientes y la mitigación de la pobreza en las zonas de conflicto. El gobierno, alegando restricciones fiscales, advirtió que sólo podría destinar 83.8 millones de dólares a estos dos programas por lo cual solicitaba el apoyo de la cooperación internacional.⁴¹⁰ Los programas coordinados por la Secretaría de Reconstrucción Nacional deberían implementarse en 115 municipios en las zonas de conflicto para reconstruir la infraestructura destruida, impulsar los sectores productivos y la reinserción de los combatientes de ambos bandos.

Pero desde 1993 aumentaron las críticas a la falta de voluntad política del gobierno de financiar la implementación de los Acuerdos de Paz, y garantizar el funcionamiento de las nuevas instituciones de seguridad pública y los programas de reinserción, por lo cual la cooperación internacional –con excepción de AID- dejó de canalizar sus apoyos financieros a través de la Secretaría de Reconstrucción Nacional, prefiriendo otros canales, como el PNUD, o financiando directamente a iniciativas locales y regionales de reconstrucción y desarrollo, lo cual promovió el crecimiento de ONGs especializadas en temas de desarrollo local. Hasta fines de 1995 –tres años después de firmarse la paz- los programas de reinserción habían recibido 232,4 millones de dólares, aproximadamente 1/3 parte de los recursos programados.⁴¹¹

Finalmente, el desenlace del Foro de Concertación Social y Económico evidenció que si bien los Acuerdos de Paz sentaron las bases para que el Estado respetara la integridad física de los activistas sindicales y campesinos, este respeto no significó que los representantes gubernamentales o empresariales los aceptaran como interlocutores y representantes legítimos de intereses sectoriales. El Foro de Concertación Social y Económico fue convocado en 1992 para abrir un diálogo sobre las reformas socio-económicas pendientes, y el reconocimiento de los derechos sindicales que habían sido excluidos de las negociaciones de paz. Si bien los representantes sindicales de la UNTS y UNOC pudieron obtener un reconocimiento formal de la libertad de asociación, y se acordó instituir en el Ministerio de Trabajo un Consejo Superior del Trabajo como espacio de negociación tripartita de los salarios mínimos, el Foro se estampó a partir de la resistencia de la patronal y del gobierno de recomendar a la Asamblea Legislativa la aprobación de los Convenios de la OIT respecto de la libertad sindical y la contratación colectiva (especialmente el Convenio 87 y 98 de la

⁴¹⁰ Sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, véase especialmente Elisabeth Wood, “Los Acuerdos de Paz y la reconstrucción de posguerra”, J. K. Boyce, *op.cit.*, 1999, pp. 103-139, especialmente pp. 117-125.

⁴¹¹ Para ver el avance financiero de los programas de reinserción del Plan de Reconstrucción Nacional, véase el cuadro 3.2 en A. Álvarez y J. M. Chávez, *op.cit.*, 2001, p. 61.

OIT), lo cual hubiera implicado ampliar estos derechos a los trabajadores del sector público que hasta el día de hoy no pueden formar sindicatos. Los representantes empresariales vincularon su rechazo por la supuesta inconstitucionalidad de estos convenios con la advertencia de no estar dispuestos a negociar con el sindicalismo bajo presión y amenazas. Llamaron al movimiento sindical

...que reconsidere el comportamiento que ha estado sosteniendo en público fuera del foro y que actúe conforme lo demanda el clima de armonía y respecto mutuo que debe prevalecer entre las partes, para que se produzcan resultados de positivo beneficio para todo el país, a lo cual debe subordinarse cualquier interés sectorial o de grupos en particular.⁴¹²

Los representantes empresariales repetían el mensaje central del discurso gubernamental, según el cual, las demandas de la UNTS y UNOC eran expresiones de intereses particulares contrapuestas al interés de la nación. Ante esta alianza política y discursiva, las organizaciones gremiales no lograban imponer sus propuestas. A esto contribuyó también la preparación del proceso electoral de 1994, que absorbió la atención de las fuerzas políticas y de las organizaciones internacionales. Sin disolverse formalmente, el Foro dejó de reunirse en la segunda mitad de 1993, concretando como resultado la instalación de un Consejo Supremo de Trabajo en el Ministerio de Trabajo, pero que - de acuerdo a investigadores y activistas del movimiento sindical salvadoreño- funciona como un instrumento para legitimar las decisiones y políticas del Ministerio y está dominado por las federaciones sindicales grandes y pro-gubernamentales.⁴¹³

El gobierno, con el consentimiento de las instituciones financieras internacionales, manejaba una estrategia que buscaba separar las políticas de estabilización y ajuste económico de la instrumentación del proceso de paz, lo cual explica los pocos resultados en la implementación de la parte socio-económica de los Acuerdos de Paz. Alexander Segovia concluye en su análisis sobre la movilización de recursos internos para consolidar el proceso de paz:

El gobierno salvadoreño no quería demorar la reforma económica y la reformulación de un nuevo modelo orientado a las exportaciones; vincular el proceso de paz a la política económica podría haber ocasionado una demora de ese tipo. Con la excepción de algunos organismos de las Naciones Unidas que mantienen que el cumplimiento de los Acuerdos de Paz debe tener prioridad sobre el cumplimiento de otros compromisos, las instituciones internacionales han alentado, por lo menos tácitamente, la subordinación del proceso de paz a la reforma económica, al exigir un progreso en la estabilización y la reforma estructural para conceder financiamiento externo.⁴¹⁴

412 “La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador expresa la verdad sobre el Foro”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año XLVIII, No. 534-535. abril-mayo de 1993, pp. 495-497, p. 497.

413 Entrevista con Víctor Aguilera, Concertación laboral y social, San Salvador, 31 de agosto del 2002.

414 A. Segovia, “Movilización de recursos internos”, J. K. Boyce, *op.cit.*, 1999, pp. 141-164, p. 161.

Exceptuando la distribución de tierras, que era necesaria para obtener el desarme de los combatientes guerrilleros, el resto de las medidas implementadas para cumplir con los Acuerdos de Paz no contribuyó a cambios estructurales para resolver el problema de la desigualdad social en el país. En parte, esto se debe a las limitaciones del capítulo socio-económico de los Acuerdos de Paz. Pero el carácter incompleto de la instrumentación de los Acuerdos de Paz da cuenta de la falta de voluntad política por parte del gobierno de ARENA, tolerada por la comunidad internacional, por resolver los problemas estructurales que habían ocasionado la guerra civil. El FMLN no supo enfrentar esta falta de voluntad gubernamental, lo cual implicó para los sindicatos y organizaciones campesinas una derrota estratégica.

Otro cierre del campo político: Exclusión y criminalización de la protesta social

La apuesta de ARENA por la paz llevó a algunos autores a interpretar esta actitud como un indicador de que el partido había abandonado su vocación autoritaria. Por ejemplo, para Dolores Albiac la firma de los Acuerdos de Paz demostró el nuevo pragmatismo de la elite económica salvadoreña que logró, a través de ARENA “encarrillar” a la extrema derecha e izquierda en el parlamentarismo, reducir al ejército y eliminar la guerrilla como una fuerza armada autónoma del Estado.⁴¹⁵

Si bien los compromisos adquiridos por medio de la firma de los Acuerdos de Paz obligaron a la derecha salvadoreña a aceptar la pluralidad ideológica en el campo político, las modalidades bajo las cuales fueron implementados dichos acuerdos aseguró que la nueva pluralidad no afectara las instancias centrales del poder estatal. Esto fue posible porque los grupos empresariales, que hasta 1989 habían incidido en la política y la Fuerza Armada indirectamente, por medio de contactos personales y lazos familiares, obtuvieron con ARENA el instrumento idóneo para controlar de manera legítima y reconocida el Poder Ejecutivo y Legislativo. En otras palabras, a los recursos informales del poder político basados en redes sociales, y al poder económico, se sumaba ahora el control institucionalizado sobre las instancias estatales y el considerable poder simbólico que emana de la legitimación que da una victoria electoral, sobre todo cuando se trata de las elecciones presidenciales.⁴¹⁶

⁴¹⁵ Véase, M. Dolores, *op.cit.*, 2002, p. 174.

⁴¹⁶ La idea de que la obtención de la presidencia reforzó el capital político de la elite dirigente de ARENA se basa en la distinción que hace Pierre Bourdieu entre diferentes “estados” de capital, de los cuales el más potente es el estado institucionalizado y que Gil Eyal aplica para estudiar la destrucción del campo político checoslovaco en la era poscomunista. Uno podría argumentar que la posición de ARENA en la Asamblea Legislativa como principal fuerza opositora legitimó e institucionalizó su capital político. Pero obtener la presidencia confirió un “plus simbólico” a este capital político, además del “plus práctico” que representaba el

Con respecto a las reformas judiciales incluidas en los Acuerdos de Paz, éstas tenían como objetivo instalar los candados institucionales necesarios para impedir que se repitieran las violaciones a los derechos humanos y garantizar al FMLN la libertad de asociación y expresión política. En función de estos objetivos se planteó la depuración del Ejército, la disolución de los cuerpos de seguridad y la construcción de un sistema de justicia eficiente y profesional que incluyera en su mandato la protección de los derechos humanos. Para separar a los oficiales responsables de graves actos de violencia de sus cargos, una Comisión ad Hoc, formada por tres juristas salvadoreños nombrados por el gobierno, identificó a 103 oficiales responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Gracias a la presión internacional y la publicación del Informe de la Verdad, que nombró directamente a algunos de estos oficiales, entre ellos el ministro y vice-ministro de Defensa, todos ellos se retiraron o fueron dados de baja hasta fines de 1993. Pero ninguno fue sometido a un juicio ante tribunales salvadoreños, debido a que el gobierno de Cristiani impulsó, cinco días después de la publicación del Informe, una amnistía que beneficiaba tanto a integrantes de las estructuras de mando de las Fuerzas Armadas como del FMLN, que habían sido nombrados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, no se cumplió la recomendación del Informe de la Verdad de establecer mecanismos de reparación de daño para recompensar a las víctimas y sus familiares de manera individual y colectiva, a través del recuerdo y el reconocimiento oficial de la responsabilidad estatal en las violaciones a los derechos humanos.⁴¹⁷

El desigual trato que recibieron víctimas y victimarios puso en evidencia la doble agenda del gobierno salvadoreño en cuanto al cumplimiento de los compromisos relacionados con el respeto a los derechos humanos: Mientras ante la comunidad internacional el gobierno salvadoreño se había comprometido con la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en la agenda política interna esta temática fue subordinada a la lógica central de obtener la desmovilización del FMLN con la menor cantidad de concesiones institucionales posibles. Este resultado pone en evidencia también la fuerza y el “poder de veto” de las Fuerzas Armadas que, si

control sobre las diferentes instancias estatales (desde el ejército, hasta los ministerios, las instituciones autónomas, etc.). Estudiar con más detalle el ascenso de ARENA al poder ejecutivo y la conservación del mandato por cuarta vez consecutiva en el 2004 mostraría como el capital económico, social y político combinados se refuerzan mutuamente y contribuyen a la acumulación de cada uno. Pero esto sería otra investigación. Véase, Gil Eyal, “La construcción y la destrucción del campo político checoslovaco”, Loïc Wacquant, (coord.), *El misterio del ministerio. Pierre Bourdieu y la política democrática*, Barcelona, Gedisa, 2005, pp. 179-208, p. 207.

⁴¹⁷ El monumento a la Memoria y la Verdad, que desde el 2003 recuerda a las víctimas civiles de la guerra y se encuentra en el parque Cuscatlán en el centro de San Salvador, fue construido por iniciativa de organizaciones de derechos humanos sin participación gubernamental.

bien aceptaron una reducción del número de efectivos y una cierta reforma a los reglamentos internos, no aceptaron la integración de ex guerrilleros en sus estructuras y mantuvieron un alto grado de autonomía⁴¹⁸ y facultades para participar en tareas de seguridad pública. Hasta el día de hoy el ejército sigue sin reconocer oficialmente su participación y responsabilidad en los crímenes cometidos durante la guerra civil.⁴¹⁹

La constitución de la Policía Nacional Civil (PNC) también se vio afectada por la poca voluntad política para depurar efectivamente las instituciones judiciales. Según los Acuerdos se iban a disolver los cuerpos policiales militarizados –Policía Nacional, Guardia Nacional, Policía de Hacienda- para constituir una nueva institución policial más profesional, bajo mando civil y conformada por egresados de la nueva Academia Nacional de Seguridad Pública, una parte de ellos ex guerrilleros y miembros de los viejos cuerpos policiales que no habían sido acusados de violaciones a los derechos humanos. Este proyecto inédito de reforma policial enfrentó una serie de obstáculos en su realización, entre ellos una falta de fondos y de personal capacitado para iniciar la Academia Nacional de Seguridad Pública y poder enfrentar la ola de violencia social y delincuencia común que afectó al país en los primeros años de la posguerra.⁴²⁰

⁴¹⁸ Ejemplo del poder que todavía tiene el ejército es el hecho que la cartera de Defensa sigue ocupada por un militar.

⁴¹⁹ Para analizar las reformas judiciales después de los Acuerdos de Paz, véase, Cath Collins, “Grounding Global Justice: International Networks and Domestic Human Rights Accountability in Chile and El Salvador”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 38, No. 4, noviembre de 2006, pp. 711-738; Charles T. Call, “Democratization, War and State Building: Constructing the Rule of Law in El Salvador”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 35, No. 4, noviembre de 2003, pp. 827-862; CIDAI, “Los Acuerdos de Paz, diez años después”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, No. 641-642, Año LVII, marzo-abril de 2002, pp. 209-234; Elizabeth Wood, “Los Acuerdos de Paz y la reconstrucción de Posguerra”, J. K. Boyce, *op.cit.*, 1999, pp. 103-139, especialmente pp. 128-134; Mike Kaye, “The Role of Truth Commissions in the Search of Justice, Reconciliation and Democratisation: the Salvadoran and Honduran Cases”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 29, No. 3, octubre de 1997, pp. 693-716.

⁴²⁰ En los años inmediatamente después de la firma de los Acuerdos el número de homicidios por 100,000 habitantes –uno de los indicadores más comunes para medir el nivel de violencia- se volvió alarmante al alcanzar una tasa de 164.5 en 1994 que bajó en 1996 a 139.0. Si bien es posible que estas cifras podrían ser sobreestimaciones, la tasa promedio de un mínimo de 80 homicidios por 100,000 habitantes para los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz sigue siendo alarmante. Como una de las razones principales para el aumento de la violencia delincencial se considera el desmantelamiento acelerado de las estructuras de seguridad, paramilitares y guerrilleras que produjeron un vacío de control institucional, paralelamente a una alta disponibilidad de armas en el país. Véase, Edgardo Alberto Amaya Cobar, “Las políticas de seguridad en El Salvador 1992-2002”, Lucía Dammert y John Bailey, *Seguridad y reforma policial en las América. Experiencias y desafíos*, México, Siglo XXI, 2005, pp. 219-238; José Miguel Cruz, “Violencia, inseguridad ciudadana y las maniobras de las élites: La dinámica de la reforma policial en El Salvador”, *Ibíd.*, pp. 239-270; Rafael Guido Véjar, “Pensar la violencia en El Salvador de fin de siglo”, v.v.A.A., *Violencia social en Centroamérica: ensayos sobre gobernabilidad y seguridad ciudadana*. Managua, CRIES, 1999, pp. 53-84.

El incremento de la delincuencia fue la justificación para incorporar a la PNC personal proveniente de la vieja policía y oficiales del ejército, y para transferir estructuras completas como la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos de la vieja Policía Nacional. Adicionalmente, y con el mismo pretexto, el ejército mantuvo su participación en las tareas de seguridad pública como, por ejemplo, en la vigilancia de las carreteras para prevenir secuestros y de las zonas cafetaleras en la temporada de cosecha para impedir asaltos. Con el ingreso de grupos provenientes de las viejas estructuras militarizadas se “diseminaron” nuevamente las prácticas y disposiciones institucionales que privilegian el uso desmedido de la fuerza (detenciones arbitrarias, tortura y exterminio de presuntos delincuentes, etcétera), por encima de estrategias para prevenir el crimen o situaciones de violencia. El caso más ejemplar al respecto fue la aparición entre 1994 y 1995 de un grupo de exterminio en el departamento San Miguel, conformado por miembros de la PNC y hombres de negocios, que al estilo de los escuadrones de muerte de los ochenta se dedicaba a asesinar a delincuentes.⁴²¹

Otro factor que posibilitó la diseminación de las viejas prácticas represivas ha sido la emergencia de un nuevo consenso social, el cual planteaba que el problema fundamental de El Salvador después de 1992 era la violencia derivada de la delincuencia común y no el respeto a los derechos humanos. Con base en este consenso social, expresado y difundido en los sondeos de opinión pública, diversos agentes –entre ellos los medios de comunicación, las cámaras de empresarios y fracciones más radicales de ARENA- han exigido una policía más eficiente así como el derecho a hacer justicia por mano propia.⁴²² Este debate dominado por los grandes medios de comunicación contribuyó a socavar la confianza ciudadana en la nueva institución policial. Así, de acuerdo con los sondeos del Instituto de Opinión Pública de la UCA, en 1995 un 48.6 por ciento de los encuestados consideró que la PNC era mejor que la antigua Policía Nacional, mientras un 26.3 por ciento la consideró igual y un 18 por ciento peor. En el 2000 el grado de aprobación bajó a 31.2 por ciento; un 26.3 por ciento consideró que no hubo cambios y un 38.5 por ciento la valoró como peor que la policía anterior.⁴²³

⁴²¹ Véase, C.T. Call, *op.cit.*, 2003, pp. 836ss.

⁴²² Por ejemplo, en marzo 1996 el empresariado de Usulután realizó un paro patronal para protestar en contra de la pasividad gubernamental ante el auge de la delincuencia. Esta situación apoyó el esfuerzo gubernamental por reformar las leyes y facilitar la investigación del delito simplificando procedimientos policiales y judiciales. El debate sobre las reformas legales siguió durante el año impulsado por representantes de cámaras empresariales como ANEP o la Asociación Cafetalera de El Salvador que exigieron la introducción de la pena de muerte como castigo para secuestradores. Véase, “Cronología Marzo 1996”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LI, No. 569, marzo de 1996, pp. 255-259 y “Cronología Septiembre 1996”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LI, No. 575, septiembre de 1996, pp. 822-829.

⁴²³ Véase, J. M. Cruz, *op.cit.*, 2005, p. 259.

Por todo esto el combate a la delincuencia se ha convertido en el eje estratégico de las políticas públicas de los gobiernos de Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009), apoyado por la actividad legislativa de la bancada parlamentaria de ARENA. Medidas legales como la promulgación de una nueva Ley de Defensa Nacional en agosto 2002 –que permite la combinación de labores de Defensa Nacional, Seguridad Nacional y Seguridad Pública y podría posibilitar nuevamente la intervención de la Fuerza Armada en el ámbito de la Seguridad Interna-, y reformas al Código Penal y a la Ley del Menor Infractor –para castigar con penas más severas a menores de edad que forman parte de las pandillas juveniles (denominado “Plan Súper Mano Dura”)- dan cuenta de una orientación represiva que apunta a la reconversión autoritaria de las instituciones y políticas de seguridad pública.⁴²⁴

La regresión autoritaria se expresa no sólo en el combate a la delincuencia sino también en el uso de la fuerza policial para reprimir actos de protesta social o criminalizar a activistas sociales acusándolos de alteración del orden o daños a la propiedad. Por ejemplo, después del 11 de septiembre de 2001, el gobierno salvadoreño, con el argumento de tener que proteger las vías de ingreso y egreso del país para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, militarizó el puerto de Acajutla y el Aeropuerto Internacional, paralelamente al despido injustificado de 198 trabajadores, miembros del sindicato SITEAIES.⁴²⁵ Asimismo, durante las huelgas de los médicos y trabajadores de la salud en contra de la privatización del Seguro Social y del sistema de salud, las prácticas autoritarias se expresaron en la negación gubernamental de negociar con los dirigentes sindicales, en la emisión de órdenes de aprehensión en contra de sindicalistas, la disolución violenta de actos de protesta por la PNC para “reestablecer el orden”, así como en la ocupación de clínicas y centros de trabajo por efectivos de la policía y del ejército para asegurar su funcionamiento, lo cual recuerda las medidas de militarización de la administración pública implementadas durante la guerra de los ochenta.⁴²⁶

⁴²⁴ Véase, por ejemplo, E. Amaya, *op.cit.*, 2005, p. 234. IDHUCA, “El gobierno se prepara legalmente para la conflictividad social”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LVII, No. 648, octubre de 2002, pp. 945-951.

⁴²⁵ SITEAIES: Sindicato de Trabajadores por Establecimiento del Aeropuerto Internacional El Salvador. Véase, Oscar Martínez Peñate, et.al., “El Salvador. Mundo Laboral y sindicatos 2001-2002”, *Jornadas. Revista del Mundo Laboral*, San Salvador, Nos. 8-9. 2003, p. 46

⁴²⁶ La resistencia en contra de la privatización del sistema de salud llevó dos veces a huelgas prolongadas, encabezadas por los sindicatos del Seguro Social, de trabajadores de la salud (STISSS) y de los médicos (SIMETRISSS, Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto de Seguro Social Salvadoreño), de septiembre 1999 a principios de marzo 2000 y de septiembre 2002 a febrero 2003. Las huelgas fueron declaradas ilegal con lo cual las autoridades del seguro social obtuvieron la justificación para retener los

El tema de la seguridad ha ocupado un lugar central en las estrategias políticas de ARENA para conservar apoyos electorales y aglutinar a sus bases. Así, la lucha contra las pandillas juveniles –las Maras- se ha vuelto un recurso discursivo central, cada vez que inician campañas electorales. Pero también hay una razón más profunda para elegir a las pandillas juveniles como ejemplos paradigmáticos de la violencia delincriminal: permite actualizar los principios de exclusión para justificar que determinados actores sociales –pandilleros juveniles, delincuentes, “comunistas”- que, según las elites, han perdido el derecho de participar en el campo político porque amenazan la “seguridad”, el “orden” y el “imperio de la ley”. De esta manera, la disposición de las elites económicas y políticas de estigmatizar y disciplinar a agentes sociales identificados como amenaza se expresa también en las prácticas institucionales que tratan a la protesta social como manifestaciones de anarquía y desorden, en contra de las cuales la fuerza estatal sirve como un mecanismo para detener la conflictividad social.

Pero antes de describir cómo los actores colectivos respondieron a estos cambios políticos, cabe señalar las tendencias regionales del ajuste estructural para entender los actos de protesta colectiva, de acomodo y de resignación dentro del contexto económico y social.

3. Reestructuración productiva y cambio social en Centroamérica:

Las políticas de ARENA, empleadas desde 1989, se inscriben en un contexto regional que se caracterizaba por la normalización de las relaciones bilaterales entre los países de la región y la apertura de los mercados a la inversión externa. Esta homogeneización de tendencias se dio después de que los gobiernos intentaran, en la década de los ochenta, resolver los desequilibrios macroeconómicos por medio de medidas puntuales de estabilización económica que aún no reflejaban una estrategia de transformación estructural consistente, pero que profundizaban la crisis del modelo anterior.⁴²⁷ No fue hasta fines de los ochenta y principios de los años noventa que

salarios de los trabajadores y médicos. Además se dictaron órdenes de aprehensión en contra de activistas y dirigentes sindicales y en varias manifestaciones intervino la policía con golpes y gas lacrimógeno que afectó a los manifestantes y la población cercana. Algunas clínicas y centros de trabajo del Seguro Social fueron “militarizados”, es decir, policías y militares entraron en los centros de trabajo para impedir con amenazas y represión en contra de los sindicalistas que continuara la huelga. Véase, Tito Alfredo Jacinto Montoya, *Modernización neoliberal del estado salvadoreño, conflicto social y cultura de paz*, San Salvador, sin editorial, 2002; STISSS, *Sólo el pueblo salvó al pueblo. Diez años tardó el despertar del pueblo*, Comunicado enviado por medio de un correo electrónico, 18 de noviembre de 2002.

⁴²⁷ Sobre la primera etapa de estabilización económica, véase, por ejemplo: Sylvia Saboría y Constantine Michalopoulos, “Centroamérica en una encrucijada”, *Revista de la Integración y el Desarrollo de Centroamérica*, Tegucigalpa, No. 49, julio-diciembre 1992, pp. 151-185; Ian Walter, “Ajuste estructural,

se instrumentaron los programas de ajuste estructural orientados a insertar las economías centroamericanas a la economía internacional. Tanto la estabilización como las políticas de ajuste estructural transformaron las sociedades centroamericanas profundamente, al impulsar nuevas ramas productivas (como las maquilas), agudizar la crisis del agro centroamericano e impulsar el crecimiento del sector informal.

De la estabilización al ajuste estructural

Los conflictos bélicos hicieron que las políticas de ajuste estructural iniciaron relativamente tarde en Centroamérica, comparado con el resto de América Latina. En los años ochenta –con excepción de Costa Rica– se llevaron a cabo sólo intentos esporádicos de estabilización económica, como en el caso del gobierno sandinista que aplicó políticas fuertes de reducción del gasto público y control de salarios a partir de 1988, o El Salvador, donde, como señalamos en el capítulo III, el gobierno de Napoleón Duarte empleó sólo un paquete de estabilización en 1986 que provocó un importante movimiento de protesta. También en el resto de los países, los gobiernos buscaron evitar los paquetes de estabilización financiera para no socavar el consenso social interno que era crucial para impedir el avance de las guerrillas. Países como Costa Rica u Honduras aprovecharon su posición como aliados regionales del gobierno estadounidense en contra de Nicaragua para obtener ayuda financiera sin cumplir con el acuerdo de instrumentar paralelamente políticas de ajuste estructural.⁴²⁸

Los programas de estabilización de los años ochenta giraron en torno a tres estrategias: la reducción del crédito al gasto público y privado, lo cual afectó principalmente al empleo público y a los pequeños productores urbanos y rurales; la devaluación de la moneda, la liberalización de precios y

integración económica y la estrategia del desarrollo en América Central”, *Revista de la Integración y el Desarrollo de Centroamérica*, Tegucigalpa, No. 45-46, julio-diciembre 1989/enero-junio 1990, pp. 373-421.

⁴²⁸ Entre 1981 y 1985, sólo el acuerdo que firmó Costa Rica con el FMI tuvo una consecución aceptable de los objetivos planteados. En el caso de Honduras se acordó un programa de estabilización con el FMI en 1981 y 1982 pero éste fue interrumpido por incumplimiento de las metas fijadas. Los gobiernos de Suazo (1981-1985) y de Azcona (1986-1990) mantuvieron formalmente políticas de estabilización, pero que en la realidad no fueron instrumentados de manera restrictiva porque el país recibió, entre 1982 y 1987, una considerable ayuda financiera del gobierno estadounidense a través de AID. Fue hasta fines de los ochenta, que el gobierno estadounidense empezó a condicionar todo tipo de ayuda adicional al establecimiento de un acuerdo con el FMI que entró en vigencia en 1990. Véase, Trevor Evans, “Ajuste estructural y sector público en Centroamérica y el Caribe. Introducción”, T. Evans (Coord.), *La transformación neoliberal del sector público. Ajuste estructural y sector público en Centroamérica y el Caribe*, Managua, Latino Editores/CRIES, 1995, pp. 1-47, especialmente pp. 4-5; Edward Funkhouser y Juan Pablo Pérez Sáinz, “Ajuste estructural, mercado laboral y pobreza en Centroamérica: Una perspectiva regional”, E. Funkhouser y J.P. Pérez Sáinz, *Mercado laboral y pobreza en Centroamérica. Ganadores y perdedores del ajuste estructural*, San José/Costa Rica, FLACSO, 1998, pp. 281-333; Juan Pablo Pérez Sáinz, *Ciudadanía social y derechos laborales en Centroamérica*, Cuadernos de Ciencias Sociales No. 108, San José/Costa Rica, FLACSO, 1998.

la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera del Mercado Común Centroamericano. Estas políticas impactaron de distintas formas sobre las condiciones de vida y los ingresos de los sectores populares, al afectar el empleo en el sector formal y público y generar un mayor desempleo y subempleo, lo cual profundizó la creciente desigualdad en términos de salarios y condiciones laborales.⁴²⁹

A principios de los años noventa empezó la sustitución de los programas nacionales de estabilización por estrategias macroeconómicas muy parecidas en cuanto a acciones y objetivos, lo cual permite hablar de un modelo económico regional. El grado de homogeneización de políticas de ajuste, en cuanto a su instrumentación, puede apreciarse en el cuadro I:

⁴²⁹ En un estudio comparativo sobre el mercado laboral y la pobreza en Centroamérica en el periodo del ajuste, Edward Funkhouser y Juan Pablo Pérez Sáinz reconstruyen las relaciones directas e indirectas entre programas de ajuste estructural, heterogeneización de los mercados laborales e incremento del número de pobres en la región hasta mediados de los años noventa. De acuerdo a sus conclusiones, las dinámicas globalizadoras, si bien generaron nuevos empleos en sectores económicos vinculados a la exportación, no pudieron recompensar la destrucción de empleo en otros sectores, especialmente en el sector público. Véase, E. Funkhouser y J. P. Pérez Sáinz, *op.cit.*, 1998.

Cuadro I. Ajuste estructural por medidas y país (1983-2007):

	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica
Inicio	1989	1989	1990	1990	1983
Apertura Comercial	SI	SI	SI	SI	SI
Liberación de Precios	SI	SI	SI	SI	SI
Reducción del gasto público	SI	SI	SI	SI	SI
Promoción de exportaciones	SI	SI	SI	SI	SI
Privatización de empresas estatales	SI	SI	PARCIAL	SI	PARCIAL
Esquemas de participación privada en Sector Salud	SI	NO	SI	SI	SI
Forma de administración de pensiones	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PÚBLICA	PRIVADA
Reforma Laboral	SI	SI	NO (Cambios se basan en interpretaciones al Código de Trabajo)	SI	PARCIAL
Ratificación del CAFTA	SI	SI	SI	SI	SI

Elaboración propia.⁴³⁰

Como puede observarse, con excepción de Costa Rica que inició un primer programa de ajuste estructural en 1983, el comienzo de estas medidas coincidió con la formalización de las políticas de ajuste en el Consenso de Washington (1990), lo cual posiblemente explica también la adopción consistente de la primera fase de reformas, que terminó en todos los países alrededor de 1991/92. Esta fase consistió principalmente de las medidas para dismantelar las instituciones del modelo económico anterior, a partir de la liberación de los precios, la eliminación de aranceles y otras barreras comerciales, el impulso decidido a las exportaciones no tradicionales y la privatización de

⁴³⁰ El cuadro fue elaborado con base en los siguientes textos: E. Funkhouser y J.P. Sáinz, *op.cit.*, 1998, p. 283; PNUD, *op.cit.*, 2004, p. 94; CEPAL, *La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad*, Santiago, CEPAL, 2006, p. 117, disponible en línea www.eclac.org (consultado marzo 2007); María Roquebert León (coord.), “Relaciones laborales en Centroamérica: Un debate que reinicia”, *Reformas laborales y acción sindical en Centroamérica*, Panamá, Ed. Novo Art/Fundación Friedrich Ebert, 2005, pp. 11-20; Leonardo Cademil, Juan Carlos Di Tata y Florencia Frantischek, “América Central. Ajuste y reformas durante los años noventa.”, *Finanzas y Desarrollo*, Washington, Vol. 37, No. 1, marzo de 2000, pp.34 - 37.

empresas comerciales e industriales del sector público, como aerolíneas, empresas telefónicas, comercializadoras, etcétera. El cuadro permite ver que esta primera fase de reformas se completó en los cinco países de la región, si bien en Honduras y Costa Rica la privatización de empresas públicas no abarcó al sector eléctrico y las telecomunicaciones, debido a la resistencia social que provocó el anuncio de estas medidas.

El objetivo central de las reformas posteriores fue la construcción de una nueva institucionalidad estatal a partir de la descentralización y apertura de los servicios públicos –particularmente, el sector salud, educación y el sistema estatal de pensiones- a la participación total o parcial de la inversión privada, la reforma laboral y la integración a la economía estadounidense por vía del CAFTA. En esta parte de la reforma del Estado los resultados regionales han sido más heterogéneos, debido a la incapacidad gubernamental de construir consensos internos. En el caso de la privatización del sector salud, en todos los países –menos El Salvador- se impusieron hasta 2003 esquemas de administración que permiten una participación parcial de particulares (clínicas privadas u ONGs) en la provisión de los servicios de atención, legitimados por la escasez de recursos y los incrementos en la demanda que rebasan las posibilidades de atención del sistema público. Sólo en El Salvador las huelgas de los médicos y trabajadores del Seguro Social en 1999-2000 y 2002-2003, apoyadas por una amplia alianza de organizaciones populares y el FMLN, pudieron frenar, al menos temporalmente, el proyecto de privatización del ISSS (Instituto del Seguro Social Salvadoreño). En cambio, en el caso de las reformas al sistema de pensiones, El Salvador presenta el mayor avance al introducirse en 1998 un sistema basado en la capitalización individual y administrado por empresas privadas, mientras en Costa Rica se estableció un sistema mixto compuesto por la contribución pública del Seguro Social y la aportación optativa, individual, pero bajo administración privada. En los otros tres países, se mantiene todavía el sistema público de pensiones.

En el caso de las políticas de flexibilización laboral la profundidad de las reformas laborales fue mayor o menor, dependiendo de los sectores productivos y la capacidad de resistencia de los sindicatos afectados. La desregulación de las relaciones ha operado a través de dos mecanismos: el primero –formal- a través de la vía legal, por medio de modificaciones a la legislación como en Nicaragua, El Salvador o Guatemala, o vía la jurisprudencia, es decir, cambios en la interpretación de los Códigos de Trabajo, como en Honduras y Costa Rica. El otro mecanismo ha sido por la vía de hecho, a partir del debilitamiento del poder colectivo de negociación de los sindicatos, debido a la competencia internacional entre países con bajos costos salariales y los altos niveles de desempleo y subempleo en la región. Para esto resultó clave la disminución del empleo público a través del

congelamiento de plazas o programas de retiro voluntario: como generalmente se caracterizaba por mejores condiciones laborales que el sector privado, al reducirse, su reducción reforzó ñas tendencias hacia un mayor deterioro de las condiciones laborales, de salarios y jornadas de trabajo.⁴³¹

Si bien el ajuste estructural en Centroamérica tuvo éxito en el dismantelamiento de las viejas estructuras estatales, los resultados en la construcción de una nueva institucionalidad fueron menos homogéneos.⁴³² Esto se debe a las diferencias en las estructuras de oportunidad política que condicionaron en cada país de manera diferente la implementación de las medidas, así como las acciones de resistencia de los grupos afectados. Factores importantes en la pugna por incidir en la transformación del Estado fueron las correlaciones de fuerza entre los grupos y las prácticas políticas arraigadas que condicionaron estrategias, repertorios de protesta y la capacidad de las elites gubernamentales para construir consensos, otorgar beneficios a algunos de los grupos afectados por las reformas o imponer una decisión unilateral.

Esta idea puede ilustrarse con la evolución del número de huelgas y trabajadores afectados desde los años setenta. Si analizamos las tendencias en la conflictividad laboral podemos ver, por una parte, una tendencia a la baja en el número de luchas laborales y, por otra parte, cambios en la conformación sectoral que apuntan a la creciente relevancia de nuevos actores laborales.⁴³³ Si bien los registros nacionales son sesgados porque incluyen sólo huelgas legales, es decir, reconocidas por las autoridades laborales, la información disponible sobre aumentos y bajas en el número de las luchas laborales indica, generalmente, coyunturas de avance y reflujos de la movilización social. En

⁴³¹ Sobre la primera generación de reformas y su impacto sobre el empleo público, véase, T. Evans, *op.cit.*, 1995, pp. 12-21; Una visión regional y actualizada sobre el estado de las reformas laborales y la reacción sindical, ofrecen los estudios de caso en M. Roquebert León, *op.cit.*, 2005, pp. 11-20; La conclusión sobre el impacto negativo de la reducción del empleo público sobre la evolución de la desigualdad social en Centroamérica se fundamenta en Juan Diego Trejos y Thomas H. Gindling, “La desigualdad en Centroamérica durante el decenio de 1990”, *Revista de la CEPAL*, Santiago de Chile, No. 84, diciembre de 2004, pp. 177-198.

⁴³² Los marcos explicativos para analizar los procesos políticos de las reformas económicas que fundamentan las siguientes conclusiones se pueden consultar en, J.C. Torres, *op.cit.*, 1998; K. Roberts, *op.cit.*, 2002; Raúl L. Madrid, “Labouring against Neoliberalism: Unions and Patterns of Reform in Latin America”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 35, No. 1, febrero de 2003, pp. 53-88; Mario F. Navarro, “Democracia y reformas estructurales: Explicaciones de la tolerancia popular al ajuste económico”, *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Vol. 35, no. 139, octubre-diciembre de 1995, pp. 443-465; Carlos H. Acuña y William C. Smith, “La economía política del ajuste estructural: La lógica de apoyo y oposición a las reformas neoliberales”, *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Vol. 36, No. 141, abril-junio de 1996, pp. 355-387.

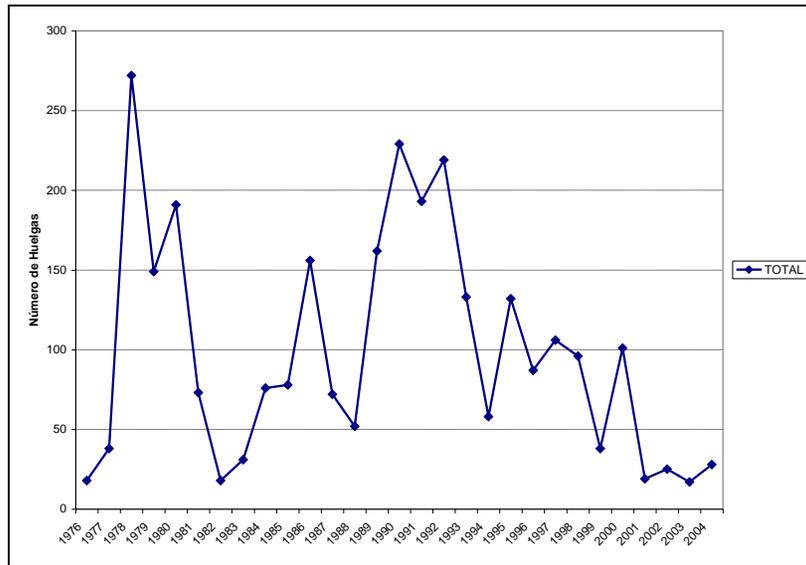
⁴³³ Para consultar el número de trabajadores afectados por huelgas por país consulte los cuadros en el Anexo.

primer lugar, porque, adicionalmente a las huelgas legales tienden a producirse también paros espontáneos y no autorizados por los Ministerios de Trabajo; además, en el contexto centroamericano, un alto número de huelgas legales puede apuntar a correlaciones de fuerza más favorables para la actividad sindical que se expresan en una mayor “tolerancia” estatal ante los desplazamientos y una mayor voluntad y confianza de los sindicatos de entrar en huelgas.

Partiendo de estas consideraciones, las siguientes dos gráficas permiten comparar distintas fases de lucha en Centroamérica. El gráfico 2 corresponde al número de huelgas entre 1976 y 2004. Como puede observarse, la evolución de las huelgas refleja a grandes rasgos los avances y reflujos de la movilización política en la región: hay un pico con más de 200 huelgas entre 1978 (en este año provocado principalmente por Guatemala) y 1980 y otro entre 1990 y 1992, que corresponde a la finalización de los conflictos bélicos y el arranque de los programas de ajuste estructural, que afectaron especialmente a los trabajadores del sector público. Desde entonces el número de huelgas legales ha tendido a bajar. El último incremento hubo en el 2000, debido principalmente a un aumento en el número de huelgas en Honduras y, en segundo lugar, El Salvador⁴³⁴ La curva del número de trabajadores afectados por huelgas y *lock outs* sigue la misma dinámica, como puede observarse en la gráfica 3: hay un primer auge en 1978 y un segundo entre 1992 y 1993 que coincide con el primer periodo del ajuste. La comparación entre los países para saber qué países concentran el mayor número de huelgas y trabajadores afectados, arroja que en 1978 y 1979 Guatemala y El Salvador concentraron más de la mitad de las huelgas en la región. La caída de las huelgas legales en 1981 a 15 en El Salvador y 3 en Guatemala da cuenta de la desmovilización social provocada por la violencia política y una creciente cerrazón institucional que desembocó en el estallido de las guerras civiles.

⁴³⁴ Estos datos son aproximaciones que se deben también al hecho que el registro de la OIT de huelgas y *lock outs* es incompleto a partir de 1997, al no incluir todos los países de la región. Las cifras pueden consultarse en el anexo.

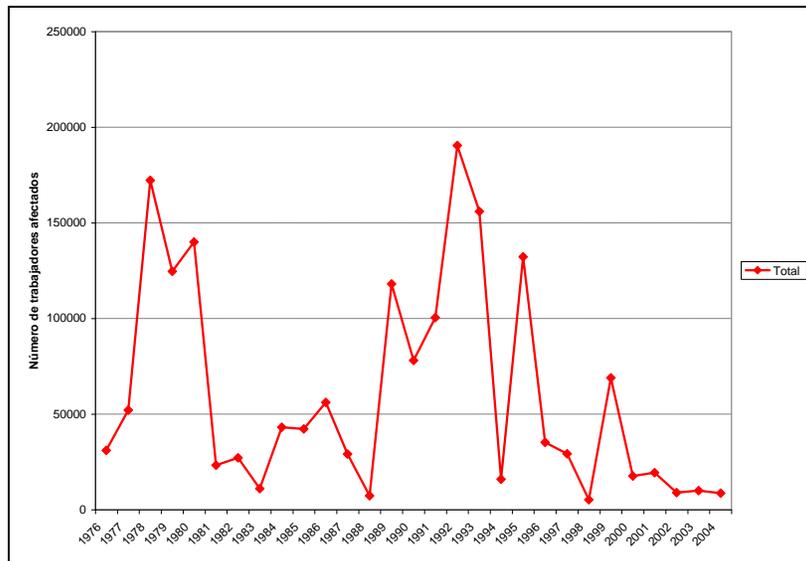
Gráfica I: Centroamérica: Número de huelgas legales 1976-2004*



*/Se excluyó Panamá.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OIT, *Base de datos LABORSTA*, disponible en línea www.ilo.org (consultado en abril de 2006).

Gráfica 2: Centroamérica:
Número de trabajadores afectados por huelgas y lock outs 1976-2004*



*/Se excluyó Panamá.

Fuente: *Ibid.*

La comparación entre países muestra que en la década de los noventa el número de huelgas por país osciló alrededor de 50 huelgas legales. Un factor que explica el incremento a partir de 1989 es la aparición de Nicaragua en estas estadísticas, debido a que en este año el gobierno sandinista levantó la suspensión del derecho a la huelga.⁴³⁵ De 1990 a 1991 –el primer año de la administración de Violeta de Chamorro– el número de huelgas en Nicaragua se incrementó de 55 a 133, y de 2420 a 28 835 trabajadores afectados. A lo largo de la década, mientras Guatemala registra una baja actividad huelguística, comparado con fines de los setenta, El Salvador mantiene una actividad regular con alrededor de 50 huelgas per año. Excepciones son 1989 y 1990, dos años en los cuales la actividad huelguística baja, posiblemente a raíz del endurecimiento de las relaciones sindicatos-gobierno, después de la victoria electoral de ARENA en marzo de 1989 y la ofensiva del FMLN en otoño del mismo año.

Pero las diferencias más marcadas en relación con la actividad huelguística no se encuentran en el número absoluto de huelgas o trabajadores involucrados, sino en las actividades económicas afectadas. Mientras las actividades económicas más afectadas por luchas sindicales fueron, hasta la primera mitad de los años ochenta, la manufactura y la agricultura –ésta última sobre todo en Costa Rica y Panamá–, desde fines de los años ochenta éstas se trasladaron hacia los servicios comunales y sociales que incluyen, entre otros, a los empleados del seguro social, de la administración pública y municipal, los médicos y maestros. Estos datos, que dan cuenta de las reacciones sindicales a los recortes del gasto público también confirman las observaciones sobre las transformaciones ocurridas en la composición social del movimiento sindical internacional, descritos en el Capítulo I. En Centroamérica, como en otras regiones del mundo, la pérdida de centralidad de los sindicatos del sector manufacturero fue acompañada por una creciente importancia de los sindicatos del sector público –con una presencia considerable de mujeres y profesionales– como actores relevantes en el campo político que combinan en sus luchas las reivindicaciones por mejores condiciones laborales y salariales con la defensa de los servicios públicos básicos (como salud, educación, agua).⁴³⁶

⁴³⁵ Una de las medidas que estableció el gobierno sandinista para enfrentar la guerra contrarrevolucionaria y el bloqueo económico era la suspensión del derecho a huelga. No obstante, sobre todo en la segunda mitad de los años ochenta, los activistas sindicales tuvieron que enfrentar crecientes manifestaciones de descontento obrero, por ejemplo, paros espontáneos, inasistencia laboral, disminución del ritmo del trabajo y robos.

⁴³⁶ Para ver los datos y gráficas correspondientes consulte el Anexo. La discusión detallada del caso salvadoreño se encuentra más adelante. Analizamos el papel de los sindicatos del sector público en las protestas en contra de las privatizaciones de los servicios básicos en Centroamérica en el artículo “La tensión entre lo local y lo global: modernización neoliberal y resistencias centroamericanas”, *Estudios Latinoamericanos*, México, Nueva Época, Año 10, No. 19, enero-junio 2003, pp. 103-117.

Estos datos reflejan el hecho que los grupos afectados por las nuevas políticas económicas –en este caso los trabajadores y empleados organizados- si se enfrentaron a la agenda de reformas pero no tuvieron mucho éxito. Esto se debe a que en Centroamérica los espacios estatales corporativos tradicionalmente han sido débiles. La coexistencia de los ciclos de huelga con la implementación de las medidas de ajuste demuestra que en la región –con excepción de Costa Rica- ha dominado la imposición unilateral por parte de los gobiernos y no la negociación con grupos afectados lo cual muy probablemente hubiera desactivado las protestas sociales. El caso contrastante de Costa Rica evidencia como el entramado institucional y determinadas tradiciones políticas incidieron en las condiciones políticas del ajuste: los avances más moderados en cuanto a las privatizaciones, y la resistencia social a la ratificación del CAFTA (que obligó a la realización de un referéndum en octubre de 2007 por medio del cual se aprobó al CAFTA), se deben a la protesta social y al hecho que los gobiernos –para no poner en entredicho la legitimidad del sistema político- tuvieron que respetar los principios de concertación y consenso social que han caracterizado la democracia costarricense desde los años cuarenta del siglo pasado.

Casos contrastantes fueron El Salvador y Nicaragua, donde los gobiernos combinaron la represión de las protestas sociales con incentivos selectivos para influenciar en la percepción de los grupos mejor organizados sobre las medidas y neutralizar la resistencia de los afectados. Así, para enfrentar las huelgas y protestas que acompañaron la primera ola de privatizaciones entre 1990 y 1994, en ambos países los gobiernos y sindicatos más fuertes negociaron la participación sindical en la compra de acciones de las empresas afectadas. En El Salvador, el gobierno aceptó la participación sindical en la privatización de las empresas de distribución y generación eléctrica para desactivar la protesta de uno de los sectores obreros más combativos. Pero sobre todo el caso de Nicaragua es emblemático para evidenciar que el consentimiento de los sectores mejor organizados, a través de sus dirigencias, fue clave para el éxito de las políticas instrumentadas: el desmantelamiento de las instituciones del Estado sandinista y de la economía mixta –sin duda, la reestructuración del sistema económico más profunda en Centroamérica- sólo fue posible gracias a los acuerdos formales e informales que el gobierno posrevolucionario de Violeta de Chamorro logró establecer con los dirigentes de las organizaciones sandinistas y con el FSLN.⁴³⁷

⁴³⁷ Como uno de los últimos ejemplos para ilustrar esta participación podemos considerar el comportamiento de la bancada sandinista en la ratificación del CAFTA por la Asamblea Legislativa en Nicaragua en el 2006. Los diputados sandinistas, si bien no votaron a favor del CAFTA, con su asistencia a la sesión parlamentaria, ellos aseguraron el quórum necesario para la aprobación. Véase, Edgard Barberena, “FSLN dejará pasar Cafta”, *El Nuevo Diario*, Managua, 9 de octubre de 2005, disponible en línea www.elnuevodiario.com.ni/2005/10/09/nacionales/2970, (consultado en marzo de 2007).

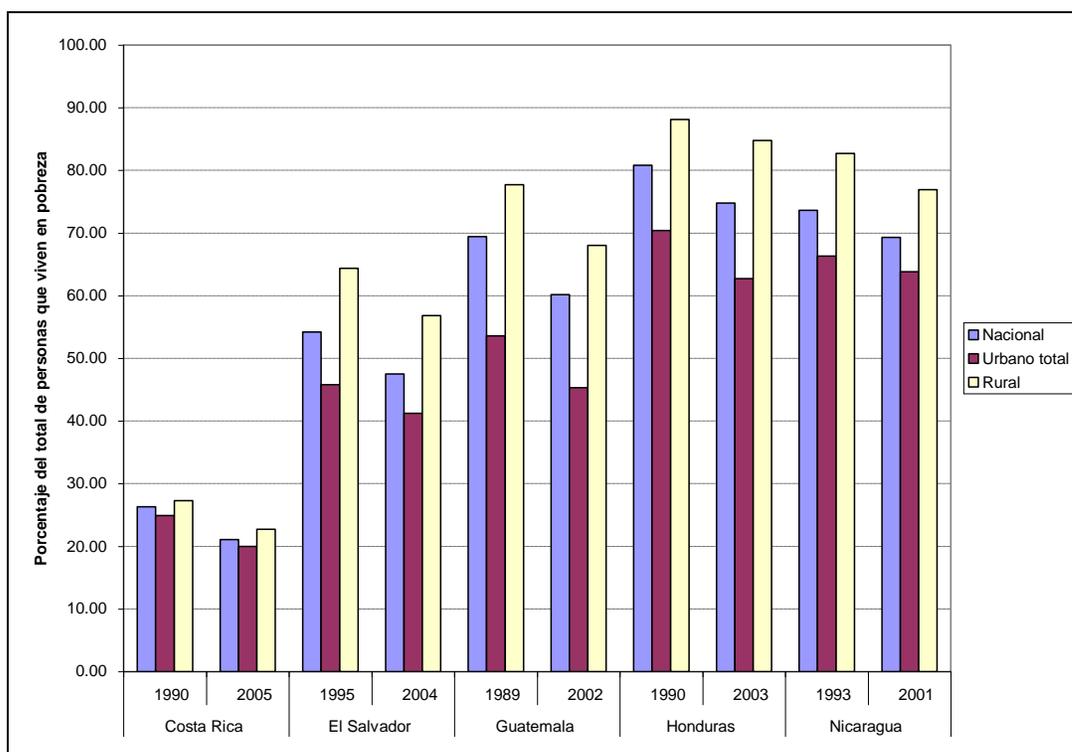
Los efectos sociales del ajuste

Las lógicas de la protesta social en los años noventa han sido condicionadas por dos factores: las medidas concretas que provocaron la protesta y los efectos prácticos del ajuste que limitaron la acción política de algunos sectores y promovieron la de otros. En esta sección interesa problematizar este último factor a partir de profundizar sobre tres tendencias –el empobrecimiento, la informalización y precarización del empleo urbano y la descampesinización– que afectaron de distintas formas a las organizaciones sindicales y campesinas.

Si bien el proceso de pauperización se detuvo, y parcialmente se revirtió en los noventa, este mejoramiento no se debe a la creación de empleo formal, sino a otros factores. Un papel importante jugó la diversificación de las estrategias de los hogares pobres para incrementar sus fuentes de ingresos, entre ellas la incorporación de más miembros, especialmente de las mujeres, al mercado laboral y la emigración. Por otra parte, también la expansión de programas focalizados de combate a la pobreza, como Fondos de Inversión Social, transferencias monetarias directas o programas de empleo temporal contribuyeron a bajar las tasas de la población en pobreza extrema.⁴³⁸

⁴³⁸ De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano de Centroamérica, 2003, el gasto público para el campo, donde se concentra la pobreza extrema, se destinó a servicios sociales –principalmente las transferencias y subsidios de los programas de combate a la pobreza– y programas de infraestructura rural, y sólo en tercer lugar a actividades agropecuarias: En el caso de El Salvador, entre 1999 y 2000, 159 millones de dólares fueron destinados a servicios sociales, 59 a infraestructura rural y sólo 20 a actividades agropecuarias. En Guatemala fueron 173 millones de dólares para servicios sociales, 117 para infraestructura y 35 millones para el sector agropecuario. En Nicaragua, fueron 47, 46 y 64 millones de dólares, respectivamente. Véase, PNUD, *op.cit.*, 2003, p. 137.

Gráfica 3: Centroamérica en los noventa:
Porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza*



*/ Porcentaje de personas cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta básica de alimentos. Incluye las personas en situación de indigencia.

Fuente: CEPAL, *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2006*, Santiago de Chile, CEPAL/ONU, 2007, disponible en línea websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2006/ (consultado en marzo 2007).

Esta gráfica muestra la evolución de la pobreza, conceptualizada como porcentaje de personas cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta básica de alimentos. Entre los países sólo en Costa Rica menos del 30 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Un primer grupo constituyen El Salvador y Guatemala, donde la población que vive en esta condición disminuyó en los 90 de 54 a 47 por ciento y de 69 a 60 por ciento, respectivamente; un segundo grupo está conformado por Honduras y Nicaragua donde la pobreza total disminuyó de 80 a 74 por ciento y de 73 a 69 por ciento. Un aspecto alarmante es la pobreza rural que supera en todos los países el promedio nacional.

Si bien la gráfica refleja las tendencias nacionales, una mayor desagregación de los datos nacionales para comparar el ámbito urbano y rural arroja resultados más matizados que apuntan hacia el estancamiento del número de pobres en los últimos años.⁴³⁹

Las cifras desglosadas por país, áreas geográficas y años demuestran que la disminución de la pobreza e indigencia en los últimos años es menos dinámica que en la primera mitad de los noventa. En el caso de Costa Rica puede observarse un ligero aumento de la pobreza e indigencia en las áreas urbanas. En El Salvador, entre 1999 y 2004, el porcentaje de personas en pobreza e indigencia rural disminuyó con un promedio anual de 1,6 y 1,5 por ciento, respectivamente. Esta reducción, que es extraordinaria si la comparamos con el resto de los países, puede estar relacionada con diversos factores como la contribución decisiva de las remesas a los ingresos de los hogares rurales,⁴⁴⁰ el impacto de los programas focalizados de combate a la pobreza o a cambios en la medición. Honduras se ha caracterizado por una importante disminución de la pobreza e indigencia, si bien este dato se relativiza debido al alto porcentaje de población que vivía en estas condiciones en la década de los noventa. Así, de acuerdo con las cifras de la CEPAL, el país alcanzó apenas en el 2003 el nivel que el resto de los países centroamericanos presentaba en la primera mitad de los años noventa.

Comparando la evolución de la pobreza y la indigencia resalta sobre todo el hecho que el decrecimiento de la pobreza tendió a ser ligeramente más dinámico que la disminución de la indigencia. En el caso de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, la proporción de población en situación de indigencia incluso aumentó en la primera mitad de esta década, lo cual da cuenta del carácter estructural de la pobreza extrema en las sociedades centroamericanas.

Uno de los factores señalados con mucha frecuencia para explicar la continuidad de los bajos niveles de vida, pese a la recuperación económica, es la heterogeneidad de los mercados laborales nacionales, donde fenómenos como la informalización y precarización laboral han profundizado la desigualdad social en las zonas urbanas y rurales. Todos los estudios coinciden en que la reducción del empleo en el sector público contribuyó a que empeoraran las condiciones laborales y salariales en el mercado laboral centroamericano. En este contexto, el sector informal se mantiene como una importante alternativa de empleo en la región, incluso para profesionales y técnicos que habían

⁴³⁹ Los cuadros que ilustran las conclusiones de los siguientes párrafos se encuentran en el Anexo No. VII.

⁴⁴⁰ Sobre el impacto de las remesas en la reducción de la pobreza en El Salvador, véase, A. Segovia, *op.cit.*, 2002, especialmente pp. 207-213.

perdido su trabajo a raíz de los recortes en el sector público. En todos los países el crecimiento del empleo se dio principalmente en actividades por cuenta propia y microempresas, que por lo general apenas garantizan la subsistencia sin permitir acumulación o crecimiento. Los empleos del sector formal fueron creados principalmente en el sector privado vinculado al sector exportador.⁴⁴¹

¿Y qué sucedió con el empleo en el sector agropecuario, el cual fue la fuente de empleo principal para la población centroamericana hasta los años ochenta? La información disponible revela dos fenómenos: por una parte, confirma la pérdida de relevancia del sector agrícola como generador de empleos e ingresos porque en todos los países de la región, la Población Económicamente Activa *ocupada en actividades agropecuarias* (PEA *agrícola*) –como trabajadores agrícolas, propietarios o empleados de industrias agrarias– disminuyó. Pero una parte considerable de la población ocupada permanece en las áreas rurales –es la PEA *rural*– aunque ya no trabaja en actividades agropecuarias. Si bien disminuyó entre 1980 y 2000 –lo cual refleja los procesos de migración interna y externa de los campesinos centroamericanos–, no lo hizo con la misma intensidad como la PEA agrícola. Estos datos indican que el campo sigue siendo un lugar importante de residencia para la población ocupada. La única excepción en este panorama es Nicaragua, donde sólo el 37.1 por ciento de la PEA nacional vive en las zonas rurales. Pero esto no expresa mayores opciones de empleo en las ciudades de este país, sino la fuerte crisis social y económica que ha afectado el campo nicaragüense desde la década de los ochenta.

⁴⁴¹ Véase, PNUD, *op.cit.*, 2003, p. 125.

Cuadro 2: Centroamérica: población económicamente activa rural y agropecuaria, 1980, 1990, 2000 (porcentaje de la población económicamente activa total)

Año	Costa Rica		El Salvador		Guatemala		Honduras	
	PEA rural	PEA agrícola	PEA rural	PEA agrícola	PEA rural	PEA agrícola	PEA rural	PEA agrícola
1980	56.1	34.9	52.1	43.6	59.3	53.8	62.5	57.2
1990	52.5	26.1	45.9	36.4	58.2	52.4	55	41.4
2000	48.2	20.1	40.3	29	56.8	46.1	47.8	31.7

Año	Nicaragua		Centroamérica	
	PEA rural	PEA agrícola	PEA rural	PEA agrícola
1980	46.7	39.6	55	46.1
1990	41.6	28.6	51.1	38.8
2000	37.1	20	47	31.5

Fuente: PNUD, *op.cit.*, 2003, p. 134, con base en datos de CEPAL (porcentajes de PEA rural) y FAOSTAT, en www.fao.org.

Las diferencias entre la proporción de población ocupada en actividades agrícolas y población que vive en las áreas rurales, dedicándose a otras actividades, dan cuenta que el proceso de descampesinización constatado para el caso de Centroamérica, no ha implicado necesariamente una disminución significativa de la población rural (con excepción de Nicaragua). Más bien ha dado lugar a una nueva complejidad de las relaciones sociales, moldeadas a partir de la necesidad de los hogares rurales pobres de diversificar sus fuentes de ingreso, integrando más miembros al mercado laboral u optando por la migración. Y esto ha implicado nuevos retos y dinámicas para la acción colectiva del movimiento campesino y sus aliados.⁴⁴²

4. Conclusiones

Introducir el contexto regional tenía como propósito mostrar que las negociaciones entre el gobierno salvadoreño y el FMLN iniciaron en una coyuntura nacional e internacional marcada por la hegemonía del proyecto económico neoliberal que defendía los beneficios de la desregulación de los mercados y la reducción del Estado para la economía. La coincidencia entre los intereses locales de los grupos de poder y el sentido común imperante en las organizaciones internacionales explica,

⁴⁴² Sobre la situación en el campo centroamericano, véase, Ronny Viales Hurtado, “Desarrollo rural y pobreza en Centroamérica en la década de 1990. Las políticas y algunos límites del modelo ‘neoliberal’”, *Anuario de Estudios Centroamericanos*, Universidad de Costa Rica, Vol. 25, No. 2, pp. 139-157, 2000; PNUD, *op.cit.*, 2003, pp. 132-143.

hasta cierto punto, el poco éxito de proyectos políticos y económicos alternativos al proyecto neoliberal, como sucedió con la propuesta socio-económica esbozada en los Acuerdos de Paz.

Este interludio tuvo como objetivo mostrar las múltiples interrelaciones entre cambios regionales e internacionales, por una parte, y procesos internos que facilitaron la implementación del proyecto económico neoliberal en El Salvador después del ascenso de ARENA al gobierno. Un factor central fue el hecho que los nuevos principios hegemónicos de la política económica, formulados en torno al proyecto neoliberal, encajaban perfectamente en la tradición anti-estatista de la elite económica salvadoreña. En cambio, tanto el proyecto desarrollista-estatista de la Democracia Cristiana como el proyecto socialista-antiimperialista del FMLN eran, para entonces, propuestas que parecían anacrónicas y contrarias al sentido común emergente. El proyecto económico democristiano estaba desprestigiado debido al estancamiento económico que había sufrido El Salvador durante la década de los ochenta, la incapacidad de finalizar la guerra y de resolver los problemas estructurales de la desigualdad y pobreza. En el caso del FMLN, y de la izquierda en general, una serie de acontecimientos externos que iniciaron en 1989 –entre ellos, el derrumbe del bloque socialista, la entrada de Cuba al periodo especial en tiempos de paz y la derrota del Sandinismo en Nicaragua- contribuyeron a la pérdida de certezas y a una sensación entre la militancia que el proyecto socialista solamente servía como una utopía, y que su concreción por medio de la práctica política era imposible (e incluso indeseable).

Todo esto significó una correlación de fuerzas favorable a la derecha que permitió al gobierno de Cristiani separar la negociación de la paz con el FMLN de la construcción de un nuevo consenso sobre las políticas económicas. Entre 1989 y 1999 el gobierno –apoyándose en una mayoría de partidos de derecha en la Asamblea Legislativa- pudo impulsar rápidamente las principales reformas económicas, con excepción de la reforma al sistema público de salud, sin que las manifestaciones de descontento y la resistencia de los movimientos populares pudieran impedirlo. Ésta es una diferencia fundamental con respecto al periodo anterior, donde el contexto de la guerra y el vínculo ideológico y organizativo de la Democracia Cristiana con organizaciones sindicales y campesinas, obstaculizaron la instrumentación de paquetes de estabilización económica.

Un aspecto que conviene destacar porque contribuyó a la capacidad de ARENA de impulsar la modernización neoliberal, es el capital político que el partido derechista supo acumular gracias a las victorias electorales sucesivas en los comicios presidenciales. Indirectamente e involuntariamente el FMLN contribuyó a esta legitimación porque al participar en las elecciones a partir de 1994 no sólo aceptó las reglas del juego de la democracia procedimental que asigna una centralidad estratégica a

los resultados emanados de un proceso electoral “limpio”, como una expresión de la voluntad general popular, también contribuyó a legitimar la reorganización del campo político en esta modalidad. Lo cual demuestra el papel central de las instituciones estatales tanto para la consolidación de actores políticos legítimos, es decir, reconocidos por el universo de actores del campo político, así como para la deslegitimación de otros. En este contexto, el recurso de la deslegitimación, por medio del ninguneo de actores sociales y la criminalización de formas de protesta, ha sido una estrategia central gubernamental para estigmatizar a agentes sociales y legitimar el uso de la fuerza para detener la conflictividad social.

Desde la perspectiva de las organizaciones populares, las limitaciones en la implementación de los Acuerdos de Paz significaron una derrota estratégica. Exceptuando la distribución de tierras - aunque también los efectos redistributivos de esta medida han sido cuestionados por la falta de políticas agrarias para asegurar la productividad-, el resto de las medidas instrumentadas no permitieron los cambios estructurales necesarios para resolver el problema de la desigualdad social en el país. Esto se debe a las limitaciones del capítulo socio-económico de los Acuerdos de Paz, la falta de voluntad gubernamental y la incapacidad del FMLN de enfrentar de manera eficaz el bloqueo gubernamental y empresarial. Lo cual demuestra una vez más el complejo entrelazamiento entre cambios estructurales, sus efectos prácticos sobre la acción colectiva y una coyuntura específica del campo político, que obliga a los agentes a buscar nuevas respuestas y estrategias.

El siguiente capítulo está dedicado a reconstruir las estrategias que tanto el FMLN como las organizaciones populares emplearon para hacer frente a esta nueva coyuntura. Las líneas de acción que emanaron de dichas estrategias contribuyeron, como se podrá ver, a un creciente distanciamiento entre el FMLN, en plena reconversión hacia un partido electoral, y los movimientos y organizaciones populares que habían participado en el movimiento revolucionario salvadoreño.

CAPÍTULO IV

DE LA DESMOVILIZACIÓN A LA REINSERCIÓN CIVIL: LAS RECONVERSIONES DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO

*“¿Desde qué utopía, o desde qué fines, la epopeya de la historia es
concebible una vez que se apaga la fogata del sueño
revolucionario [...]?”
Martín Hopenhayn⁴⁴³*

4.1. Introducción

Señalamos en el apartado anterior que la razón principal por la cual las elites políticas y económicas aceptaron la negociación de la paz fue la necesidad de terminar con el conflicto armado y desmovilizar el FMLN como condición básica para hacer funcionar el nuevo modelo económico. Por varias razones resulta más complejo reconstruir las expectativas y apuestas del FMLN con respecto a las negociaciones de paz y su inserción en el juego político-electoral: en primer lugar, porque la dirección político-militar del FMLN, responsable para el proceso de negociación- tenía que reconciliar ante sus bases el proyecto político-ideológico original –la toma de poder para construir una sociedad más justa- con los resultados de la negociación. En segundo lugar, la decisión de convertirse en partido político implicaba un proceso de unificación organizativa que generó una serie de tensiones entre las cinco organizaciones que conformaron el FMLN. Aunque el estallido de la guerra civil había acelerado la unificación organizativa en el plano diplomático, internacional y militar –donde las decisiones fundamentales se tomaban con base en la decisión de mayoría en la Comandancia General-, las cinco organizaciones habían conservado sus propias estructuras militares, políticas y financieras y operaron en muchos aspectos de manera independiente.

Una de las conclusiones centrales del capítulo tres fue que la militarización de la política, propiciada por la guerra, permitió que la dirigencia del FMLN se convirtiera en el portavoz legítimo del movimiento de oposición que hegemonizó la negociación con el gobierno. En este capítulo se analizará la continuación del proceso de diferenciación entre la estructura partidista y las bases del

⁴⁴³ Martín Hopenhayn, *Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en América Latina*, Santiago/Chile, FCE, 1994, p. 21.

movimiento revolucionario a partir de la integración del FMLN a las instituciones representativas, y los efectos prácticos de dicha diferenciación sobre la acción colectiva. Nos interesa reconstruir el proceso por medio del cual el FMLN transitó de movimiento insurgente a partido político, adaptando su proyecto ideológico y sus prácticas partidistas a la nueva posición ocupada en el campo político. De acuerdo con nuestra lectura, las luchas internas que iniciaron entre las diferentes fracciones políticas del FMLN, a partir de 1994, fueron uno de los mecanismos por medio de los cuales se llevó a cabo esta transición que abarcaba varios aspectos: la legalización del partido, la ampliación de la estructuras partidistas a raíz del crecimiento numérico de la militancia,⁴⁴⁴ la apropiación de nuevos conocimientos y prácticas para realizar la actividad legislativa y gobernar municipios. Todos estos aspectos (y otros) constituían en conjunto la transición de un frente político-militar a un partido político unitario que, además, expresa públicamente su compromiso con el funcionamiento democrático de las estructuras internas.⁴⁴⁵

En segundo lugar, interesa conocer cómo se fueron reformulando las apuestas de acción de diferentes agentes del campo político en función de la nueva coyuntura, y de qué manera estas reconversiones incidieron en las transformaciones de la sociedad civil. Los actores sociales formulan sus apuestas y propósitos de acción no de manera arbitraria sino de acuerdo a determinadas condiciones sociales y simbólicas de posibilidad. Describir las nuevas estructuras de oportunidad política desde la perspectiva de las organizaciones populares es el propósito de la segunda parte del capítulo. A partir del mapeo del campo político de la posguerra es posible entender el significado de los intentos de reagrupamiento de las organizaciones como una estrategia para superar políticamente la dispersión; además permite reconstruir las estrategias de reconversión organizativa e individual que surgieron en respuesta a la desmovilización de las estructuras militares del FMLN.

El capítulo finaliza con el análisis de los relatos militantes, para mostrar cómo ellos experimentaron y valoraron el desenlace del conflicto militar. Sus experiencias sobre la desmovilización de las estructuras político-militares permiten ilustrar un aspecto poco estudiado de la pacificación: el

⁴⁴⁴ De acuerdo con los registros de ONUSAL, en 1992 el FMLN contabilizaba entre combatientes, civiles y cuadros políticos a 15,000 miembros. Esta cifra se quintuplicó en los siguientes años: según el padrón electoral interno del FMLN en julio del 2001 había 75,111 militantes. Véase, Marta Lilian Coto de Cuéllar, “Informe del Tribunal Electoral del FMLN”, XIV Convención Nacional del FMLN, 16 de diciembre del 2001, *Documentos*, San Salvador, publicado por el FMLN, 2002, p. 15.

⁴⁴⁵ Véase, Rubén Zamora, *La izquierda partidaria Salvadoreña: entre la identidad y el poder*, San Salvador, FLACSO, 2003, pp. 76 –87; Luis Armando González, “De la ideología al pragmatismo. Ensayo sobre las trayectorias ideológicas de ARENA y el FMLN”, *Estudios Centroamericanos*, El Salvador, Año LVIII, Nos. 661-662, noviembre-diciembre del 2003, pp. 1173-1202.

impacto de las transformaciones políticas sobre las lógicas de participación y movilización del activismo, que pueden ser analizadas como una respuesta de agentes sociales quienes, al encontrarse de repente “fuera de lugar”⁴⁴⁶ y con una identidad política en crisis por los profundos cambios de los noventa, se vieron obligados a reelaborar sus estrategias de acción. En este sentido, la sección sobre el cierre del campo político se entrelaza con la reseña de las estrategias de reconversión empleadas por los militantes para ocupar nuevamente un lugar en el espacio político de la posguerra. Identificamos tres principales estrategias: la *tecnificación* del activismo social, por medio de la formación de ONGs, el trabajo como asesor(a) en los gobiernos municipales del FMLN o como político(a) profesional; la *gremialización* o *sindicalización* del activismo sindical o campesino, es decir, la priorización de la representación sectorial de los agremiados; por último, identificamos como una estrategia para enfrentar el cambio el abandono de formas directas de participación social y política –“*irse para la casa*”- para (re)iniciar trayectorias educativas o laborales que la guerra y la militancia revolucionaria habían interrumpido o puesto en un segundo plano de importancia.

4.2. Socialismo y revolución democrática: El FMLN y su “marcha por las instituciones”

Los esfuerzos de los dirigentes del FMLN por reformular su proyecto y estrategias políticas se inscribieron en un contexto internacional marcado por lo que parecía ser la crisis final de las propuestas socialistas y desarrollistas y el avance incontenible de un capitalismo de libre mercado. Mientras en el contexto internacional de la década de los setenta –la ola revolucionaria en países tan diversos como Portugal (1974), Irán (1979) y Nicaragua (1979), pero también la ampliación del Estado de Bienestar en Europa occidental por los gobiernos socialdemócratas- parecía factible que una amplia alianza revolucionaria pudiera acceder a un gobierno e iniciar una serie de reformas para modernizar y democratizar el país, el panorama a principios de los noventa era radicalmente distinto. La disolución de la Unión Soviética en 1991, la crisis de la revolución cubana, la derrota electoral del sandinismo en Nicaragua y la adopción de políticas de estabilización y ajuste estructural incluso por gobiernos socialdemócratas en Europa evidenciaron que los modelos económicos basados en el desarrollo de mercados nacionales habían llegado a su fin.⁴⁴⁷ En este contexto, las propuestas convencionales de la izquierda de resolver el problema de la desigualdad por medio de la intervención de un Estado fuerte en el mercado parecían perder su sentido, lo cual posiblemente haya sido una de las razones por las cuales los dirigentes del FMLN centraron su

⁴⁴⁶ Véase, M. Augé, *op.cit.*, 2004.

⁴⁴⁷ Sobre la ofensiva neoliberal, véase, P. Anderson, *op.cit.*, 1997; Sobre las implicaciones del fin de un ciclo para los movimientos antisistémicos, véase G. Arrighi et.al, *op.cit.*, 1999.

esfuerzo en la reforma democrática para ampliar los espacios de la participación política. La cercanía temporal entre las negociaciones de paz y las transiciones a la democracia en los países del Cono Sur, por medio de pactos políticos para posibilitar la participación electoral de la oposición sin tocar los fundamentos de los poderes fácticos, debe haber sido otro factor que inició en los debates del FMLN sobre las estrategias más adecuadas para insertarse en el orden posbélico.

Cuando el FMLN firmó los Acuerdos de Paz en enero de 1992 aceptó el desmantelamiento de sus estructuras armadas a cambio de la apertura del sistema político y la desmilitarización del Estado salvadoreño, incorporándose como partido legal al juego político-institucional de la democracia representativa. Desde su perspectiva, el afianzamiento de la transición política hacia un sistema más pluralista era una condición necesaria pero no suficiente para asegurar la conversión de movimiento insurgente a partido político.⁴⁴⁸ Para esto se requería como condición inicial tener bases institucionales y económicas aseguradas que le permitirían actuar como un partido de masas, es decir, contar con una estructura social y territorial de base conformada por excombatientes y partidarios civiles. Por otra parte, para dar seguridad a la militancia desarmada había que contar con la máxima desmilitarización posible del aparato estatal. El poder de negociación del FMLN para obtener esto dependía de su control sobre las armas, por lo cual la amenaza de frenar o interrumpir la desmovilización era el recurso estratégico para obtener la mayor cantidad de concesiones posibles con respecto a la transferencia de tierras (en cuanto a la superficie y el potencial económico), programas de crédito y capacitación para los excombatientes y el debilitamiento del ejército.⁴⁴⁹ La estrategia de negociación fue diseñada e instrumentada por la Comandancia General del FMLN, pero la implementación de la parte socioeconómica –es decir, la elaboración de las listas de beneficiarios para el Programa de Transferencia de Tierras (PTT) y los diversos programas de reinserción a la vida civil- estaba a cargo de cada organización político-militar y sus militantes, que participaban en las diversas organizaciones populares.

En este contexto, marcado por la negociación de las modalidades específicas bajo las cuales se implementarían los Acuerdos y la preparación del FMLN para participar en las elecciones de 1994, inició el primer conflicto sobre la naturaleza del partido. Sus protagonistas fueron todavía las cinco organizaciones político-militares que mantenían sus cuotas de poder al interior de las instancias partidistas. La fracción que se consideraba “socialdemócrata” –conformada por el ERP (que había

⁴⁴⁸ De hecho, las ofertas de diálogo de Napoleón Duarte siempre se habían limitado a esta dimensión de transición política pero sin ofrecer mecanismos al FMLN para convertirse en un partido político con bases institucionales.

⁴⁴⁹ Véase, E. Wood, *op.cit.*, 1999, p. 104.

cambiado su nombre de Ejército Revolucionario del Pueblo a Expresión Renovadora del Pueblo) y Resistencia Nacional- planteaba que la democratización política, abierta con la firma de los Acuerdos de Paz, requería de un nuevo proyecto político que superara la polarización caduca entre izquierda y derecha para contribuir a la búsqueda de consensos, la consolidación democrática y la modernización del capitalismo excluyente. Con el fin de la guerra habían desaparecido las razones de ser del FMLN, por lo cual la organización debería desaparecer o mantener sus estructuras abiertas y relativamente flexibles para permitir la autonomía de cada grupo en la toma de las decisiones políticas. En contraste, las otras tres organizaciones –PRTC, PCS y FPL- partieron de la concepción que la desigualdad social no resuelta por los Acuerdos de Paz era suficiente justificación para mantener la bandera anticapitalista y defendieron la construcción de la sociedad socialista como un objetivo estratégico del partido.⁴⁵⁰ Para construir el partido promovieron la disolución de las estructuras paralelas –lo cual se hizo en la convención partidista de 1994- y la redefinición de los vínculos con las organizaciones populares pero sin plantearse la ruptura. En este contexto se ubica la advertencia de Schafik Handal acerca de los peligros de atomización que encerraban las demandas por la autonomía de las organizaciones populares:

Si reivindicamos la autonomía, pero no definimos puntos en común [*con los partidos políticos*] estamos fritos con la atomización. Habrá entonces un mar de dispersión, cientos de organismos autónomos, cada quién por su lado.⁴⁵¹

Por su parte, el modelo de partido que los dirigentes de RN y ERP impulsaron no se planteó un vínculo específico con los movimientos sociales, lo cual podría explicar la creciente autonomía de las organizaciones populares, los sindicatos y ONGs vinculados anteriormente a estas dos organizaciones político-militares.

Sin embargo, el vínculo entre organizaciones sociales y organización partidista no fue un tema prioritario en las discusiones entre las corrientes acerca del rumbo que el partido debería tomar en el periodo posbélico, posiblemente porque nunca habían existido lazos formales. En las elecciones legislativas de marzo de 1994 el FMLN obtuvo 23 diputados (de 84 diputados en la Asamblea Legislativa), que fueron distribuidos entre las cinco organizaciones político-militares. En mayo del mismo año, siete diputados del ERP y RN apoyaron a la bancada de ARENA para elegir la junta directiva de la Asamblea Legislativa a cambio de obtener dos puestos en ella. Justificándose con la

⁴⁵⁰ Para una reconstrucción de las dos posturas ideológicas véanse, por ejemplo, Carlos Figueroa, “Naufragio y sobrevivencia: la izquierda en Centroamérica”, *Estudios Latinoamericanos*, México, Nueva Época, No. 3, enero-junio de 1995, pp. 71-86, pp. 79-83; “FMLN se transforma en partido unitario”, *Inforpress Centroamericana*, No. 1140, 17 de agosto de 1995, p. 10.

⁴⁵¹ “Trabajadores: las organizaciones de trabajadores en la búsqueda de agendas comunes en la sociedad civil”, *Colatino*, San Salvador, 25 de abril de 1996, p. 9, cit. en M. Anner, *op.cit.*, 1996, p. 610.

autonomía de sus organizaciones y con la necesidad de construir consensos dentro de la institucionalidad democrática ignoraron la postura del Consejo Nacional del FMLN que había acordado abstenerse de la elección. Los siete diputados fueron desautorizados como representantes del FMLN por el Consejo Nacional y, finalmente, las dos organizaciones se salieron del partido para formar el Partido Demócrata en marzo de 1995.⁴⁵² Para evitar futuras rupturas y preparar la participación del partido en las elecciones legislativas de 1997, los tres partidos restantes en el FMLN aceleraron la disolución de sus estructuras en una organización política unitaria que, sin embargo, permitía la existencia de diferentes tendencias político-ideológicas en su interior. El FMLN debería convertirse en un partido de nuevo tipo: pluralista, con mecanismos para asegurar la democracia interna, y comprometido con la construcción de un proyecto socialista democrático.

El segundo conflicto empezó a perfilarse poco tiempo después, en 1997. A diferencia del primero -el cual se había producido según las divisiones partidarias de los setenta y ochenta y había fortalecido con la salida del ERP y RN, la posición de las FPL y del Partido Comunista- ahora las fronteras internas se estaban difuminando, dando lugar a reagrupamientos políticos en torno a dos corrientes: la Tendencia Renovadora (o *renovadores*) y la Corriente Revolucionaria Socialista (los *ortodoxos*). La corriente revolucionaria-socialista, encabezada por los dirigentes históricos Schafik Handal (Secretario General del Partido Comunista) y Salvador Sánchez Cerén (máximo dirigente de las FPL después de la muerte de Cayetano Carpio), sostuvo la necesidad de conservar el carácter revolucionario del FMLN, mostrarse opuesto a las privatizaciones de los servicios públicos, apoyar a los movimientos sociales y defender un proyecto de Estado benefactor y regulador del mercado. Esta postura estaba en profundo desacuerdo con la corriente renovadora, que controlaba el aparato partidista desde 1997 y cuyo vocero reconocido era Facundo Guardado, que había sido secretario general del Bloque Popular Revolucionario y, durante la guerra, uno de los comandantes centrales de las FPL. Los renovadores plantearon que, para convertir el FMLN en “una opción de poder”, había que abrirlo hacia otras fuerzas políticas, sobre todo al empresariado, modernizar el discurso político del FMLN y adoptar una postura de centro, en vez de izquierda.⁴⁵³ En las elecciones presidenciales de 1999, la tendencia ortodoxa apoyó sólo parcialmente la campaña electoral de Facundo Guardado, lo cual no sólo contribuyó a la agudización de la crisis interna sino puso de manifiesto la poca unidad institucional del partido. En la Convención Nacional Extraordinaria de

⁴⁵² “El Salvador: Viejas rupturas, nuevos partidos”, *Inforpress Centroamericana*, No. 1122, 6 de abril de 1995, p. 6. Los siete diputados fueron Ana Guadalupe Martínez, Eduardo Sancho, Juan Ramón Medrano, Fidel Recinos, Elí Días, Sonia Aguiñada y Francisco Mena.

⁴⁵³ Véase, “El FMLN busca modernizarse y ganar las elecciones del 99”, *Inforpress Centroamericana*, No. 1251, 28 de noviembre de 1997, pp. 8-9.

julio de 1999 la corriente revolucionaria socialista recuperó el control sobre las instancias partidarias, incluyendo el cargo de Coordinador General. La expulsión de Facundo Guardado en octubre del 2001, junto a otros cinco diputados de la Asamblea Legislativa identificados con la corriente renovadora, fue justificada por la dirección del partido con el desacato, por parte de estos diputados, de la decisión partidista de no apoyar las iniciativas gubernamentales para ratificar el Tratado de Libre Comercio con Chile y la autorización de un préstamo del gobierno japonés.

Después de las expulsiones, que debilitaron la tendencia renovadora al interior del partido, la Convención Nacional de diciembre del 2001, declaró la disolución oficial de las tendencias internas, reafirmando con esto la hegemonía de la corriente socialista en todas las instancias partidistas. Esta situación se confirmó en la Convención Nacional del partido en noviembre del 2004, cuando Medardo González -el candidato apoyado por Schafik Handal y Salvador Sánchez Cerén- le ganó en los comicios internos para el cargo de Coordinador General al alcalde de Santa Tecla, Oscar Ortiz, vocero más importante de los grupos que promovían un cambio generacional en las instancias de dirección del partido.⁴⁵⁴

La revolución democrática en el discurso programático del FMLN

Desde que la corriente socialista recuperó el control sobre las instancias internas, el FMLN ha vuelto a emplear la noción de revolución democrática para trazar el horizonte histórico que condiciona las tareas políticas del momento actual. La noción de la revolución democrática y nacional, empleada por primera vez en 1990, abarca cuatro grandes cambios sociales y económicos: “...el fin del militarismo, el nuevo orden económico y social, la democratización nacional y el rescate a la soberanía y política exterior independiente.”⁴⁵⁵

En la propuesta de la revolución democrática y nacional se anticiparon las principales posiciones que el FMLN impulsaría en las negociaciones de paz: Así, el fin del militarismo se debería alcanzar mediante la abolición del ejército (siguiendo el ejemplo de Costa Rica), la instalación de un nuevo aparato de seguridad pública y el castigo a los violadores de los derechos humanos; en el marco del nuevo orden socioeconómico el FMLN demandó la profundización de la reforma agraria y el fortalecimiento del Estado para que pudiera regular el mercado con los instrumentos adecuados y

⁴⁵⁴ “El Salvador: ortodoxos se imponen en el FMLN, *La Jornada*, México, 9 de noviembre de 2004, disponible en línea <http://www.lajornada.unam.mx> (consultado en noviembre de 2004).

⁴⁵⁵ FMLN, “Proclama del FMLN a la nación. La revolución democrática”, septiembre de 1990, Secretaría Nacional de Educación del FMLN, *Planteamientos Programáticos, enero de 1980 a marzo de 1994*, San Salvador, s/f., pp. 25-31, p. 25.

llevar a cabo políticas públicas en beneficio de los sectores populares. Como medida para contribuir a la recuperación del empleo y de los ingresos de los sectores populares, el FMLN propuso la instalación de un “polo económico popular”, con apoyo público-estatal, que debería operar como un espacio productivo en torno a las empresas en manos de los trabajadores del campo y de la ciudad (cooperativas y otras formas de propiedad social) y los pequeños y medianos empresarios privados. Esto, junto a la constitución de un espacio de concertación tripartita para negociar salarios, precios y créditos, debería posibilitar una mayor participación social en la formulación de las políticas económicas y sociales. La plataforma reivindicativa del FMLN incluía también la demanda por la protección del medio ambiente y la lucha en contra de la discriminación de género.

Para iniciar la democratización política el FMLN propuso la realización de una Asamblea Constituyente. Una nueva constitución, así su argumento, representaría un nuevo pacto entre todas las fuerzas políticas y sociales del país para constituir un Estado democrático de Derecho mediante la formulación de un nuevo sistema electoral incluyente, la descentralización municipal y la expansión y garantía de los derechos políticos y los derechos humanos.⁴⁵⁶

En estos planteamientos se esbozan los principales ejes programáticos del FMLN para el periodo posbélico: en primer lugar, el fortalecimiento de las facultades reguladoras del Estado en los ámbitos de la política social y económica, segundo, el fomento a la participación y concertación entre sectores organizados de la sociedad civil y el Estado -asegurando los derechos de los grupos más vulnerables como las mujeres y los jóvenes-, y, en tercer lugar, la ampliación y profundización de la democracia representativa con un Estado democrático de Derecho.

En la plataforma electoral, anunciada en septiembre de 1993, el FMLN retomó la propuesta de 1990 de organizar un nuevo espacio productivo: el “sector popular de la economía”. El núcleo inicial de este sector económico -conformado por tierras del Sector Reformado y del Programa de Transferencia de Tierras- debería recibir un tratamiento preferencial en forma de créditos y asesoría técnica por parte del Estado. En esta propuesta electoral se refleja la intención partidista de consolidar sus bases institucionales y económicas -como punto de partida para asegurar la sobrevivencia organizativa en la posguerra- a partir de los núcleos organizados territorialmente y conformados por militantes civiles, repobladores y excombatientes. La viabilidad de este modelo

⁴⁵⁶ *Ibíd.* pp. 29-30.

económico basado en la asociación popular debería mostrarse a partir de la operación de las cooperativas instaladas en las tierras transferidas por medio del PTT.⁴⁵⁷

Como puede observarse, el énfasis del proyecto socioeconómico del FMLN estaba puesto en el fomento al sector agropecuario, lo cual puede entenderse como una respuesta a las demandas de sus bases sociales que, después de 10 años de guerra en las zonas rurales, eran primordialmente de origen campesino. La viabilidad económica de este proyecto se vio afectada por la crisis estructural del agro salvadoreño y la reorientación productiva de la economía salvadoreña hacia el sector servicios y financiero.⁴⁵⁸ Adicionalmente, el gobierno impulsó medidas para beneficiar principalmente a los pequeños y medianos propietarios individuales –como por ejemplo los programas de condonación de la deuda agraria-, lo cual incentivó la parcelación de la propiedad colectiva y la disolución de las cooperativas. Por tanto sólo pocas cooperativas de excombatientes y repobladores –considerados por el partido como la base principal del modelo de economía popular- lograron superar las condiciones iniciales de precariedad social para convertirse en opciones productivas.

El lugar privilegiado que ocupan, en la plataforma electoral de 1994, las propuestas sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas “a favor de las mayorías populares” evidencia la apuesta partidista de concentrarse en la reforma política. Para ampliar la democracia prometió establecer mecanismos participativos a nivel nacional –como el derecho a la realización de consultas populares para iniciativas de leyes-, promover la descentralización y autonomía municipal y velar por los derechos individuales y sociales de las personas con especial énfasis en los derechos de las mujeres y de los jóvenes. Esto demuestra que, con respecto a las reformas institucionales, el programa electoral del FMLN no se diferencia sustancialmente de planteamientos liberales sobre la democracia y el Estado de Derecho. En cambio existe una diferencia importante en el papel que se asigna al Estado. En la plataforma de 1993, el FMLN declaró estar a favor de un Estado activo en el ámbito de las políticas sociales y la regulación del mercado, pero sin sustituir el papel de la empresa y de la inversión privada. En marzo de 1994, para responder a los ataques de ARENA durante la campaña electoral, el FMLN puntualizó sobre esta temática:

Nosotros reconocemos el papel indispensable de la empresa privada en el logro de este desarrollo, apoyamos la libertad de empresa (...) Por esto estamos en contra de la existencia de monopolios y oligopolios. Nosotros queremos que la mayor parte de la economía

⁴⁵⁷ Véase, FMLN, “Lineamientos para la plataforma electoral”, San Salvador, septiembre de 1993, FMLN, *op.cit.*, s/f, pp. 33-41, p. 35.

⁴⁵⁸ Véase, J. Arriola y D. Mena, *op.cit.*, 1993, pp. 537-539.

nacional esté en manos y en propiedad de la sociedad y no del Estado. Consideramos que el Estado debe establecer el marco estratégico del desarrollo, propiciar la concertación nacional, desarrollar la capacidad y actividad negociadora internacional, asegurar a toda la población los servicios sociales y la infraestructura económica (...) contribuyendo así al incremento de la productividad y competitividad global de la economía...⁴⁵⁹

La estrategia de desarrollo presentada por el FMLN en 1993 y 1994, al proponer la adopción de medidas reguladoras y mecanismos redistributivos cuestionaba el mensaje ideológico neoliberal de ARENA que presentaba al mercado como único motor del desarrollo económico. Sin embargo, no puede considerarse un planteamiento radical porque excluyó la participación directa del Estado en la economía vía empresas estatales o una eventual intervención en relaciones de propiedad existentes, como la renacionalización de la banca.

Tras diez años de evolución política del FMLN, que incluye las dos escisiones señaladas y la consolidación de la influencia de la Corriente Socialista Revolucionaria al interior del FMLN, el partido, con base en los resultados de las elecciones legislativas del 2003, se esperaba una victoria electoral en las presidenciales de marzo del 2004. En el contexto de estas expectativas el Programa Social y Democrático para El Salvador,⁴⁶⁰ presentado en septiembre del 2003 como plataforma electoral del candidato presidencial Schafik Handal adquirió mucho peso como posible programa de gobierno. Dos ejes programáticos atravesaron el planteamiento del FMLN: la necesidad de reconstruir la economía nacional después de 15 años de administraciones neoliberales por medio del fortalecimiento del desarrollo de las fuerzas productivas nacionales y el énfasis puesto en el papel activo del Estado como agente del desarrollo económico y social.

En el Programa Social y Democrático para El Salvador se propone un cambio del modelo económico, orientado al mercado exterior, hacia una economía basada en la sustitución de importaciones, el impulso a la demanda interna y la promoción de las exportaciones. Para lograr esto, el FMLN propuso recuperar la circulación de la moneda nacional, el Colón, fomentar la inversión productiva -incluyendo las maquilas siempre y cuando generen empleos durables y aprovechen insumos nacionales-, generar acceso a créditos para la producción, suspender y revisar las privatizaciones y buscar una integración latinoamericana y centroamericana. La creación de “Sistemas Económicos Integrados”, con la participación de la micro, pequeña y mediana empresa debería contribuir a la

⁴⁵⁹ Comisión Política del FMLN, “Resolución sobre los lineamientos programáticos”, marzo de 1994, FMLN, *op.cit.*, s/f, pp. 42-45, p. 43.

⁴⁶⁰ FMLN, *Programa social y democrático para El Salvador*, San Salvador, 2003.

rearticulación del tejido económico y social del país por medio de la reconstrucción de los círculos de producción, comercialización y servicios.⁴⁶¹

El documento programático del FMLN evidencia la oposición existente entre proyectos políticos de las principales dos fuerzas políticas de El Salvador: mientras el proyecto de ARENA está orientado a convertir a El Salvador en un centro financiero y de servicios –para lo cual depende fuertemente del flujo de capitales (remesas e inversiones)- el proyecto del FMLN enfatiza la necesidad de reconstruir la industria nacional, la reconversión y modernización productiva y la recuperación agropecuaria. Por esto el fomento a la migración –como mecanismo para aliviar las presiones demográficas sobre el mercado laboral y detener el deterioro de los ingresos- no juega el mismo papel estratégico en la propuesta de la izquierda como en el proyecto económico de ARENA.

En la noción del “Estado social y democrático de Derecho”, que promueve el FMLN en la propuesta programática del 2004 se perfila el objetivo estratégico de la “marcha por las instituciones”, que inició el FMLN con la firma de la paz en 1992: en el plano socioeconómico se trata de construir un Estado activo y fuerte, con facultades para controlar los mecanismos excluyentes del mercado. Por otra parte, promete ser más eficiente y democrático que el Estado desarrollista y autoritario de los sesenta y setenta. Según el programa:

El cambio político es determinante para imprimir y elevar la calidad democrática y la función social que corresponde al Estado como gestor, promotor, regulador y orientador del desarrollo humano. Ese proceso podrá avanzar como iniciativa y obra de todas las fuerzas decisivas del país, trabajadoras, empresariales, intelectuales y culturales.⁴⁶²

Por tanto, una de las principales fuentes de legitimidad del Estado “posneoliberal” sería la democratización expresada en mecanismos institucionales para que organizaciones sectoriales y de base, ONGs, y la ciudadanía en general –es decir no organizada- puedan participar en la formulación de las políticas públicas.⁴⁶³

⁴⁶¹ Véase, *Ibíd.*, pp. 67-71.

⁴⁶² *Ibíd.* p. 93.

⁴⁶³ *Ibíd.* p. 15. Por estas características, las metas estratégicas del FMLN se inscriben en la vertiente del “modelo democrático-participativo”, señalado como uno de los proyectos políticos que en la última década han estado en pugna en América Latina, enfrentándose al proyecto neoliberal y al proyecto autoritario. Véase, Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi, “Introducción: Para otra lectura de la disputa por la construcción democrática en América Latina”, E. Dagnino, A. J. Olvera y A. Panfichi (coords.), *La disputa por la construcción democrática en América Latina*, México, FCE/CIESAS/Universidad Veracruzana, 2006, pp. 15-99.

Pero el planteamiento programático no termina en el Estado de derecho social y democrático, sino plantea como horizonte histórico la transición hacia el socialismo.⁴⁶⁴ En los documentos internos dirigidos a la militancia la dirección del FMLN parte del diagnóstico que la transición democrático-revolucionaria inició con la firma e implementación de los Acuerdos de Paz, pero fue interrumpida y revertida, tanto en el plano de la superación de la desigualdad como en el plano institucional, por la “transición neoliberal” impulsada paralelamente por ARENA y los grupos empresariales. Por lo tanto habría que reiniciar la lucha por la transición democrático-revolucionaria, combinando la estrategia parlamentaria y electoral con la reorganización del partido y el acompañamiento político de las luchas sociales. En el 2002 –ya en el contexto de preparación de las campañas electorales del 2003 y 2004– la estrategia fue sintetizada de la siguiente manera:

Trabajar para construir un movimiento, un bloque social y político de fuerzas, y concertando con ellas las acciones fundamentales para transformar la sociedad salvadoreña, con las cuales se comprometa un Gobierno Democrático de Salvación Nacional APEGADO A LA CONSTITUCIÓN AHORA VIGENTE.⁴⁶⁵

La “transición democrático-revolucionaria”, que tiene que pasar por el acceso del FMLN al gobierno nacional a través de elecciones, debería llevar paulatinamente hacia la transformación socialista. En este sentido, la vía electoral se instituye como la estrategia política central no solamente para alcanzar el gobierno sino como un mecanismo de educación y difusión para los planteamientos socialistas y oportunidad de diferenciarse de la izquierda “moderada”. Así lo señaló Schafik Handal en el contexto de la campaña electoral de 2004, para justificar por qué una izquierda socialista debía participar en procesos electorales:

Para algunos de estos últimos [la izquierda que decidió participar en elecciones], las elecciones pueden ser vía de la izquierda hacia el poder si esta se “modera”, [...] se convierte en un proyecto “viable”, tolerable para el imperio, para el gran capital oligárquico y para los militares reaccionarios [...] Mientras tanto, otra parte de la izquierda se ha planteado ascender a los gobiernos por vía electoral para cambiar el sistema del capitalismo neoliberal y consumir verdaderas revoluciones democráticas [...] Para esta parte de la izquierda los procesos electorales son una gran oportunidad para la comunicación de las propuestas

⁴⁶⁴ La reconstrucción de la noción de socialismo que el FMLN maneja en la actualidad se basa en los siguientes documentos publicados por el FMLN para su militancia: FMLN, *Nuestra orientación hacia el socialismo*, Versión corregida, elaborada por la Comisión de Debate sobre El Socialismo, designada por el Consejo Nacional, San Salvador, octubre 2002; FMLN, *Democracia, prosperidad y justicia social. Documento de Consulta para la Construcción de un Proyecto de País*, Comisión Política y Consejo Asesor del FMLN, El Salvador, agosto de 2002; FMLN, *Estrategia del FMLN*, San Salvador, Consejo Nacional 2002-2004, mimeo., 12 de febrero del 2002; FMLN, XIV Convención Nacional del FMLN, *op.cit.*, 2002.

⁴⁶⁵ Consejo Nacional 2002-2004, *op.cit.*, 12 de febrero del 2002. Las mayúsculas están en el documento original.

revolucionarias a la gente y un gran escenario para la lucha de ideas contra el capitalismo neo-liberal y por una sociedad justa.⁴⁶⁶

De esta manera el FMLN ha conservado públicamente su orientación ideológica, aunque plantea la sociedad socialista como un horizonte histórico, cuya realización depende de que la sociedad civil la asuma como un proyecto propio. La visión de la sociedad socialista es presentada como un modelo adecuado a las condiciones históricas de El Salvador que debe cumplir con los siguientes criterios:

...sociedad próspera, culturalmente avanzada, socialmente justa, democrática, segura, integracionista y ambientalmente sustentable, centrada en el bienestar, la realización y la autodeterminación del pueblo. Que comparte equitativamente los recursos y la generación de riqueza, brindando oportunidades de desarrollo para todos los salvadoreños y salvadoreñas radicadas dentro y fuera de nuestro país.⁴⁶⁷

En *Nuestra orientación hacia el socialismo*, documento difundido en octubre del 2002, se puntualiza este planteamiento: el Estado socialista es visualizado como un Estado fuerte, democrático y plural, que debe estar conducido principalmente “por las fuerzas políticas y sociales comprometidas con el socialismo; por decisión democrática del pueblo”. La economía socialista es presentada como una economía mixta donde coexisten la propiedad privada, la propiedad estatal y la propiedad autogestionada por los trabajadores y trabajadoras y donde sigue funcionando el mercado, aunque regulado por el Estado y los intereses sociales.⁴⁶⁸

En síntesis, el discurso ideológico del FMLN se mueve en dos planos: por una parte ofrece, como utopía concreta, la instalación de un Estado benefactor con políticas redistributivas y reguladoras de la economía capitalista; por otra parte, enuncia la sociedad socialista como un horizonte histórico lejano que debe orientar la práctica política de los militantes del partido. En el contexto político de El Salvador esto ha generado contradicciones y silencios en los mensajes ideológicos del FMLN, sobre todo con respecto a la forma que podría o debería adoptar la (necesaria) ruptura (política, social, cultural) entre sociedad capitalista y socialista.⁴⁶⁹ Durante las campañas

⁴⁶⁶ Schafik Jorge Handal, “El debate de la izquierda en América Latina”, *La trinchera roja*, San Salvador, mimeo, 29 de julio de 2004.

⁴⁶⁷ FMLN, *op.cit.*, agosto de 2002, p. 23.

⁴⁶⁸ FMLN, *op.cit.*, octubre de 2002.

⁴⁶⁹ Un ejemplo para estos mensajes contradictorios es el planteamiento programático acerca del fortalecimiento de la familia, la cual, en varios documentos internos desde 1994, es señalada como uno de los “colectivos solidarios” que habría que fomentar en la sociedad socialista. Este posicionamiento no problematiza el carácter represivo e incluso violento que adquiere la familia en muchos casos para algunos de sus integrantes más vulnerables (niños, adolescentes, mujeres). Los mensajes sobre la conservación de la familia coexisten con la reivindicación, presente en todas las plataformas electorales y programáticas del FMLN de abolir las discriminaciones de género.

electorales, los adversarios políticos, especialmente ARENA, han explotado estos silencios para establecer la conexión entre la noción de socialismo/comunismo, la violencia de los ochenta y el FMLN.⁴⁷⁰

Dos aspectos son particulares en el discurso programático del FMLN y lo diferencian profundamente del discurso neoliberal manejado por ARENA. El Estado es visualizado como un agente activo y regulador, que promueve y orienta el desarrollo de sectores específicos de la economía nacional y asegura, mediante el gasto social, una redistribución de los ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. En segundo lugar, interactúa con los sujetos colectivos –organizaciones sociales, ONGs, gremios, sindicatos– reconociéndolos como “interlocutores” del Estado y del gobierno. Detrás de la revaloración del Estado y los sujetos colectivos y la voluntad de “regular” el mercado se encuentra la idea o ambición –proveniente del ideario socialista– de proteger y reconstruir, por medio de la acción colectiva y organizada, las solidaridades amenazadas por el juego de las fuerzas económicas. La utopía del FMLN con su énfasis en la centralidad del Estado y la transformación paulatina de la sociedad capitalista hacia el socialismo, se parece, pues más al reformismo de la Segunda Internacional, previo a la primera guerra mundial, al Eurocomunismo italiano o al Estado benefactor escandinavo que al voluntarismo político y el radicalismo ideológico de las organizaciones político-militares que fundaron el FMLN en 1981.

La participación electoral como nueva lógica de acción

La separación en el planteamiento del FMLN entre el socialismo como horizonte histórico lejano y el proyecto político concreto de un Estado de bienestar ha llevado a varios autores a señalar esta situación como un indicador del “adelgazamiento ideológico”, que comparten izquierda y derecha salvadoreña. Para Rubén Zamora la vaguedad ideológica ha permitido que la dirección partidista del FMLN pueda ser flexible en su práctica política cotidiana y negociar con otras fuerzas políticas mientras, al mismo tiempo, los núcleos duros de la ideología operen como mecanismos para asegurar la cohesión interna.⁴⁷¹ Pero estas explicaciones racionales no permiten entender por qué los debates internos sobre la naturaleza ideológica del FMLN, que se hicieron públicos desde 1994, se han llevado a cabo con tanta pasión. Tampoco permite entender las razones por los fracasos electorales de los grupos disidentes, mientras el FMLN pudo consolidar su posición como segunda

⁴⁷⁰ Véase en el Anexo el cartel de la Fundación Libertad, publicado en los grandes periódicos salvadoreños durante la campaña electoral 2004.

⁴⁷¹ Véase, por ejemplo, L. A. González, *op.cit.*, 2003, pp. 1173-1202.

fuerza electoral.⁴⁷² Una manera para entender esta aparente contradicción es interpretar la adhesión pública de la dirección del FMLN al socialismo no sólo como un mecanismo instrumental para conservar el control sobre el partido, sino como una estrategia para cerrar simbólicamente la brecha que -con la integración del partido en el juego de la democracia representativa- se estaba abriendo entre políticos profesionales del FMLN, funcionarios del aparato partidista y las bases sociales.

La plena integración del FMLN al campo político formal -que inició con las negociaciones de los Acuerdos de Paz y se consumió con la participación del partido en el proceso electoral de 1994- marcó, en este sentido, un hito importante al poner fin a su histórica exclusión política. Pero al mismo tiempo, la *reconversión* de estructura guerrillera en partido electoral obligó a un profundo cambio en modalidades y prácticas de organización, lo cual absorbió una parte considerable de la atención y energía institucionales. Nuestra hipótesis inicial fue que la incorporación de un actor colectivo a la institucionalidad estatal le permite acceder a formas institucionalizadas de capital político y le abre el horizonte a nuevas apuestas y formas de acción, incluyendo la posibilidad de planificar y administrar el tiempo político más a largo plazo. Pero al mismo tiempo, este proceso obliga a los agentes a subordinarse a las reglas del juego que rigen el campo político formal y obligan a excluir determinadas estrategias -como la acción directa- que antes formaban parte del repertorio de acción. En estas circunstancias, la ideología puede operar como un mecanismo de interpelación que permite superar la brecha producida por el distanciamiento entre agentes que antes compartían posiciones vecinas en el espacio político y social.⁴⁷³

Paralelamente al fracaso de los intentos por construir espacios de producción, gestión y participación popular en la economía -como el Foro de Concertación Social y Económica o el Modelo de Economía Popular-, el FMLN pudo ampliar su presencia electoral en los espacios institucionales de la democracia representativa, transformándose los municipios gobernados por el FMLN y la Asamblea Legislativa en los principales espacios de acción de la izquierda partidista. En consecuencia emergió una nueva lógica de acción en torno a los ciclos electorales y los procesos internos para seleccionar a los candidatos para cargos de elección popular que se convirtieron en mecanismos estratégicos para reactivar periódicamente a las bases del partido, incorporándolas en

⁴⁷² Durante la campaña electoral del 2004 hubo una serie de enfrentamientos violentos entre militantes de ARENA y del FMLN a partir de las provocaciones verbales de los primeros que gritaban consignas anticomunistas. Véase, “ARENA y la violencia electoral en el nororiente de Chalatenango”, *Proceso*, San Salvador, Año 24, No. 1076, 2 de diciembre de 2003, pp. 4-6.

⁴⁷³ Véase, Capítulo 1.

las dinámicas internas del aparato a través de los procedimientos para elegir los candidatos, presentar las plataformas electorales y difundir la propaganda. Las elecciones se volvieron en un vehículo importante para reafirmar, junto al sentido de pertenencia de los militantes del FMLN, las principales diferencias frente al adversario político.⁴⁷⁴

Desde su legalización, el FMLN ha participado en seis procesos electorales y ha consolidado su posición en el sistema de partidos salvadoreños como el principal partido de oposición. Como puede observarse en los dos cuadros a continuación, el FMLN incrementó su votación de 287,811 votos en las elecciones legislativas de 1994 a 784,694 votos en el 2006. En las elecciones presidenciales pudo pasar de 343,472 votos (29.05 por ciento) en 1999 –año en el cual el partido participó por primera vez sin alianzas con otros partidos⁴⁷⁵- a 812,519 votos en el 2004 (35.68 por ciento).

⁴⁷⁴ El procedimiento para elegir las autoridades del partido y los candidatos a cargos de elección popular ha sufrido varios cambios en los últimos años: en la penúltima reforma al Estatuto del FMLN se estableció en el Art. 64 que todos los afiliados y afiliadas al Partido inscritos en el Padrón Electoral pudieran elegir candidatos y autoridades del partido a través del voto directo y secreto; pero este mecanismo de las primarias fue revocado en la XXII Convención Nacional, de diciembre de 2006. Según el Art. 31 de los Estatutos vigentes, corresponde al Consejo Nacional elegir a los militantes que el partido postula como candidatos al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa, a la Presidencia y Vice-Presidencia. La Convención Nacional “da a conocer” los candidatos a la Presidencia y Vice-Presidencia. Véase, para el Estatuto anterior M. L. Coto de Cuéllar, *op.cit.*, 2002, p. 13; Para el Estatuto vigente, véase, *Estatutos del partido político FMLN*, reformado en 2007, disponible en línea fmln.org.sv/portal/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=2 (consultado en mayo 2007).

⁴⁷⁵ En 1994 el FMLN participó en una alianza electoral con las fuerzas de centro-izquierda Convergencia Democrática y Movimiento Nacional Revolucionario.

Cuadro 4.1 Desempeño electoral del FMLN y ARENA (1994-2006)

Año	1994		1997		1999	
Partido	FMLN	ARENA	FMLN	ARENA	FMLN	ARENA
Elecciones Legislativas	287,811	605,577	369,709	396,301		
Elecciones Presidenciales					343,472	614,268

Año	2000		2003		2004		2006	
Partido	FMLN	ARENA	FMLN	ARENA	FMLN	ARENA	FMLN	ARENA
Elecciones Legislativas	426,289	436,169	475,130	446,279			784,694	783,208
Elecciones Presidenciales					812,519	1,314,436		

Fuente: Elaboración propia con base en R. Zamora, *op.cit.*, 2003, p. 88; W. Grigsby, *op.cit.*, 2004, p. 28; 2006.

En las elecciones municipales el FMLN se consolidó como segunda fuerza electoral que gobierna los centros urbanos más importantes del país, entre ellos la capital, San Salvador. La incorporación de la izquierda al sistema político salvadoreño ha tenido un impacto positivo sobre la participación electoral, porque la competencia entre ARENA y el FMLN contribuyó a una mayor movilización del electorado en general. De esta manera, las últimas dos elecciones rompieron con el alto abstencionismo que había caracterizado los procesos electorales en El Salvador durante los setenta y ochenta: en el 2004, la participación alcanzó el 65 por ciento y en el 2007 el 52.56 por ciento del padrón electoral.⁴⁷⁶

Cuadro 4.2 Alcaldías gobernadas por ARENA y FMLN por elecciones

	1994	1997	2000	2003	2006
ARENA	207	160	127	111	147
FMLN	15	54	79	74	59
Otros	40	48	56	77	56
Total	262	262	262	262	262

Fuente: W. Grigsby, *op.cit.*, 2006.

⁴⁷⁶ Cifras tomadas de: FMLN, *Cronología del Origen y Desarrollo del FMLN*, publicado por la Comisión Nacional de Educación Política del FMLN, San Salvador, octubre del 2002, p. 11; R. Zamora, *op.cit.*, 2003, p. 86-98; William Grigsby Vado, “¿Perdió el FMLN o ganó el miedo?”, *envío*, Managua, Año 23, No. 265, abril del 2004, pp. 27-39, p. 28; “Elecciones 2006: un balance contradictorio”, *envío*, Managua, Año 25, No. 289, Abril 2006, disponible en línea, www.envio.org.ni (consultado en abril 2007).

Detrás de estas cifras se esconde el proceso de aprendizaje por medio del cual el FMLN fue apropiándose de las reglas del juego de la participación electoral. La planificación de una estrategia electoral partidista implicó que los ciclos electorales adquirieron cada vez más importancia para la vida interna del partido.⁴⁷⁷ Estas cifras demuestran que, no obstante el indudable avance electoral del FMLN, no le ha sido posible romper la posición dominante de ARENA. Pero la inserción del partido de izquierda en el juego político-electoral, al mismo tiempo que otorgó una mayor legitimidad a las instituciones democráticas del país, moldeó las apuestas y estrategias del partido de izquierda. Sobre todo cambiaron las percepciones, entre los grupos y corrientes que conforman el FMLN, acerca de las metas políticas, la coyuntura y el tiempo político.⁴⁷⁸

Un primer cambio afectó la caracterización de la coyuntura política y la definición de las metas políticas del partido. Joaquín Villalobos fue uno de los primeros quien planteó, entre 1993 y 1994, que la revolución democrática había llegado a su fin gracias a la apertura del sistema político a la actividad de la izquierda. Por tanto, ahora sólo habría que perfeccionar la institucionalidad existente y competir en las elecciones. Unos años después, las declaraciones de Facundo Guardado, en representación de la corriente renovadora, de “hacer del FMLN una opción de poder” actualizaron esta percepción de los nuevos tiempos políticos, al señalar que los viejos antagonismos político-ideológicos entre izquierda y derecha formaban parte del pasado, por lo cual había que superarlos para garantizar la gobernabilidad del país. Con la recuperación de la dirección del partido por los viejos dirigentes del PC y de las FPL en el 2000, volvió el concepto de la revolución

⁴⁷⁷ Un balance interno de las FPL de 1994, a partir de analizar las deficiencias de la campaña, enumeró las tareas pendientes para preparar mejor la campaña de 1997, entre ellas “preparar nuestro aparato electoral para realizar (por primera vez en 1997) una conducción profesional de la campaña electoral [...], un método democrático y participativo en la elección de candidatos (elecciones primarias) [...], desarrollar nuestra plataforma y nuestro programa de gobierno”. Véase, FPL-Farabundo Martí, *Hacia una nueva estrategia de poder 1994-1997 (versión revisada)*, mimeo., s/l, s/f (aproximadamente octubre/noviembre de 1994), p. 14.

⁴⁷⁸ Como demuestra este cuadro, desde las elecciones de 1994 sólo tres años –1995, 2001 y 2007- no han sido afectados por algún momento del proceso electoral.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Elecciones municipales	X		o	X			X		o	X		o	X		o	X
Elecciones Legislativas	X		o	X			X		o	X		o	X		o	X
Elecciones Presidenciales	X				o	X				o	X				o	X

Fuente: Elaboración propia. (El símbolo X significa años electorales, O significa años en los cuales inicia un proceso electoral).

democrática para enfatizar la necesidad de retomar las demandas que el FMLN había formulado en el contexto de las negociaciones de la paz.⁴⁷⁹

Aunque esta fracción reivindica el socialismo, tampoco cuestiona la meta política central de convertir el FMLN en una institución política competitiva para derrotar a ARENA por la vía electoral. Es decir, ningún grupo que, durante los noventa, se disputó el control sobre el aparato partidista ha cuestionado el principio de la democracia representativa y de las elecciones como mecanismo para acceder al poder estatal y transformar desde allí las relaciones desiguales y antidemocráticas.⁴⁸⁰ El hecho que hoy en día la izquierda salvadoreña puede visualizar solamente una estrategia para cambiar la realidad social da cuenta de las profundas transformaciones en el horizonte político ocurridas desde la década de los setenta. Mientras en esa época existía un consenso básico entre los grupos reformistas y radicales acerca de los cambios necesarios y posibles en El Salvador –una reforma agraria, la democratización política, la desmilitarización– y la diferencia residía en las estrategia para lograr este cambio –por la vía pacífica o a través de las armas–, después de 1992 se estableció el consenso que la única estrategia para acceder al poder estatal era por medio de elecciones. Este cambio en el sentido común sobre las formas y metas de la acción política se debe también al impacto de las crisis de los modelos políticos de la izquierda centroamericana a partir de la derrota electoral del FSLN en Nicaragua, la caída de la Unión Soviética y la crisis económica y social del régimen cubano.

Al adoptar la meta política de convertir el FMLN en una institución competitiva desde el punto de vista electoral, las prácticas partidistas tendieron a operar cada vez más en torno a los momentos determinados por el ciclo electoral: la selección y el registro de candidatos, la definición y discusión

⁴⁷⁹ El diagnóstico sobre la parcial reversión de las transformaciones iniciadas en 1992 por las políticas económicas y sociales de ARENA se repite en los balances publicados por el FMLN, organizaciones sociales y ONGs en el décimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Véase: Comisión Política del FMLN, *Posición oficial del FMLN en el X aniversario de la firma del acuerdo de paz*, mimeo., San Salvador, 16 de enero del 2002 y CEPAZ, *A 10 años de los Acuerdos de Paz de El Salvador*, San Salvador, Ediciones CEPAZ, 2002.

⁴⁸⁰ Por ejemplo, un documento interno de las FPL –grupo que defendía el carácter socialista del FMLN– escrito en 1994 para analizar el rumbo que debería tomar el FMLN señaló en el diagnóstico inicial, “En el FMLN las motivaciones originales para la lucha ya no existen, ni las ideológicas ni las políticas, *sólo queda el interés común de aportar al proceso de democratización del país desde distintas ópticas*. Los partidos con identidad social-demócrata están trabajando por la creación de su propia expresión política, FPL-PRTC-TD estamos cada vez más identificados en la idea de crear un nuevo partido de izquierda democrática, el PCS aunque se manifiesta favorable a la idea del nuevo partido, sigue apoyando la adopción de un ambiguo y precario pacto de unidad entre las dos tendencias políticas.” FPL-Farabundo Martí, *Hacia una nueva estrategia de poder 1994-1997 (versión revisada)*, mimeo, s/l, s/f (aproximadamente octubre/noviembre de 1994), p. 3, (las cursivas son nuestras).

de un programa electoral, la realización de sondeos de opinión sobre temas y candidatos –para orientar la acción partidista- y la realización de la campaña. Esta situación se refleja en que los conflictos entre las corrientes por controlar el aparato burocrático y la dirección ideológica empezaron a expresarse en las disputas por candidaturas a nivel municipal, para la Asamblea Legislativa y, especialmente, para la candidatura presidencial: en este contexto, las primarias para seleccionar al candidato presidencial en el 2004 profundizaron las diferencias entre las corrientes, al movilizar los militantes del partido en torno a las dos opciones. La pérdida electoral de Schafik Handal abrió otro ciclo de conflicto en el partido entre quienes vieron la oportunidad de cuestionar públicamente la dirección. En cambio, los dirigentes y sus simpatizantes descalificaron las críticas, señalándolas como expresiones sectarias, traición al partido, una amenaza a la unidad e incluso como obra de “infiltrados” o “aliados” de ARENA.⁴⁸¹ Estas confrontaciones –documentadas y resaltadas por la prensa salvadoreña para evidenciar la conflictividad interna de la izquierda-, se agudizaron en el 2005, al elegirse los candidatos para las elecciones legislativas y municipales del 2006, y terminaron en otro desprendimiento en la dirección del FMLN.⁴⁸²

La centralidad de los ciclos electorales para la operación del partido y las disputas entre fracciones del FMLN por la hegemonía interna –los dos procesos centrales que acompañaron la inserción del FMLN al campo político formal- afectaron asimismo la relación entre organizaciones populares y la organización partidista. En primer lugar, porque el FMLN, al aceptar los tiempos propios del juego institucional y electoral, se distanció de las dinámicas propias de las luchas y movimientos sociales. Esto se expresó, por ejemplo, en el fracaso del Foro de Concertación Social y Económica que

⁴⁸¹ A modo de ejemplo para este discurso, que visualiza los conflictos internos como expresiones sectarias que benefician al enemigo –ARENA- citamos un párrafo de un documento escrito en el contexto de los conflictos fraccionales del 2005 para cuestionar la postura de los críticos de la dirección del FMLN: “El principal problema pseudo-ideológico del FMLN es la existencia de un sectarismo viejo, cuya expresión nueva, aunque no única, pero sí la más dañina en este momento, se puede denominar como un FPL:ismo [sic.] de derecha. A pesar de que todas las organizaciones que conformaron el movimiento guerrillero FMLN, acordaron disolverse para construir un partido amplio de movimientos, todavía existen algunos grupos (entre otros) que añoran la dizque “grandeza de las FPL”. Existen pues, dentro del FMLN varias agrupaciones y personajes que, aunque NO están de acuerdo y desconociendo la esencia ideológica de las FPL, sufren y lloran por NO verse en la cúpula y/o real dirigencia del FMLN. En sus borracheras pseudo-políticas, por un lado, balbuceando dibujan la grandeza de las FPL y por ende su “determinado” papel de líder en el partido de movimientos; mientras que por el otro, vomitan un trasnochado y arcaico discurso anti-izquierdista, anti-comunista y anti-PC:ista [sic.] que mucha veces es más extremista que el de la derecha neo-fascista y su partido ARENA.”, Alejandra Abarca & Bernabe Celis. S.S. *Sobre la problemática interna del FMLN*, s/l, mimeo, 19 de Agosto 2005.

⁴⁸² Sobre los conflictos internos después de las elecciones de 2004, véase, Luís Alvarenga, “El desafío del cambio en el FMLN” y Aquiles Montoya, “Retos de la Izquierda”, ambos artículos pueden consultarse en *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LIX, No. 665-666, marzo-abril 2004, pp. 393-342 y 335-338, respectivamente; Luís Armando Gonzáles, “El FMLN en la encrucijada”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LIX, No. 668, junio 2004, pp. 617-620.

coincidió con la legalización del FMLN y sus preparativos para participar en las elecciones de 1994. Posiblemente este esfuerzo explica la poca atención que las estructuras partidistas dieron en estos momentos a las negociaciones sobre las reformas socio-económicas del Foro. En segundo lugar, aunque la reformulación de las líneas de la acción política produjo una redefinición de los lazos entre sociedad y partido, esto no inmunizó a las organizaciones populares de sufrir los efectos negativos de las disputas partidistas. Como se explicará más adelante, con el distanciamiento de Resistencia Nacional y del ERP del FMLN, se abrió un periodo de conflictos internos en organizaciones de base y ONGs, afines a estas dos organizaciones, lo cual finalizó, por lo general, con la ruptura de estas organizaciones con el FMLN. Así sucedió con FENASTRAS, cuyo alejamiento del FMLN significó una importante pérdida para la UNTS porque afectó su capacidad de convocatoria. En otras organizaciones gremiales, como por ejemplo ANDES, las disputas entre fracciones políticas provocaron escisiones de cuadros dirigentes que a partir de 1999 y 2000 fundaron nuevas organizaciones magisteriales. De esta manera, la ruptura de la alianza político-militar, que se dio con la inserción en la institucionalidad democrática, indujo la dispersión de las organizaciones populares, lo cual evidenció no sólo la fragilidad de las alianzas sectoriales, conformadas durante la guerra, sino también el debilitamiento de las bases sociales organizadas del FMLN.

La reconversión del FMLN en partido político-electoral significó para las bases que su participación tendía a reducirse cada vez más a una participación limitada en los procesos electorales realizando actividades proselitistas, ser “voto duro” o vigilando centros de elección durante la jornada electoral. Para enfrentar el distanciamiento entre bases y estructuras partidistas, el Consejo Nacional del FMLN anunció en el 2002 la revitalización del partido a través del fortalecimiento de los Comités de Base cuyos integrantes deberían intervenir en las luchas sociales y recuperar las necesidades y demandas populares:

Ello [la derrota al capitalismo neoliberal vía la instauración de un gobierno de salvación nacional] supone que cada militante en el FMLN realice un giro fundamental, el de que se convierta en un luchador social, una luchadora social [...] Los militantes del Frente debemos dejar de ser sólo votantes en los procesos electorales nacionales o internos. ⁴⁸³

Estos planteamientos coincidieron con el primer auge de movilización social después de los Acuerdos de Paz que se produjo en el 2002 como respuesta al proyecto de privatización del sistema de salud. La capacidad de movilización, expresada en resultados electorales pero también en la movilización directa y visible de sus bases políticas (por ejemplo en marchas, mítines, etcétera),

⁴⁸³ Estrategia del FMLN, *op.cit.*, 12 de febrero del 2002.

operó en estos contextos como un recurso político central para reforzar la presencia del FMLN en el campo político y para negociar con el Poder Ejecutivo o con la bancada legislativa de ARENA. De esta manera, la interpelación de la militancia por medio de los valores socialistas, los compromisos de la comunidad virtuosa –como la solidaridad, el sacrificio y la mística- y los símbolos de las víctimas de la violencia estatal, como Monseñor Oscar Arnulfo Romero, los dirigentes del FMLN pudieron aglutinar no sólo a la militancia sino también a las bases sociales más amplias en torno a propuestas electorales y un proyecto político mucho menos radical que el discurso ideológico hace presuponer.

En este contexto, el radicalismo discursivo adoptado por los dirigentes del FMLN después del 2000 puede interpretarse como una apuesta para evitar una mayor dispersión por medio de la recreación simbólica de la “comunidad virtuosa” del partido revolucionario. La presentación de los conflictos partidistas sobre alianzas y programas electorales en el lenguaje político-ideológico propio de la izquierda marxista-leninista ocupa entonces el lugar que, durante los setenta, ocupaba la “lucha por la hegemonía” como práctica central para marcar las fronteras entre militantes y sociedad, definir las lealtades políticas y asegurar la cohesión interna del grupo. Pero mientras estas prácticas hacen sentido para los iniciados de la comunidad virtuosa –los militantes del partido que participaron en los conflictos y conocen los bienes simbólicos que estaban en juego- para los que están fuera, incluyendo los que simpatizan con el FMLN sin participar en él, éstas parecen como conflictos sin sentido y, por tanto, contraproducentes. Por lo cual la amplia difusión de los conflictos entre las corrientes del FMLN, a través de los medios de comunicación, ha profundizado en el contexto posbélico la impresión que el partido se aleja de la sociedad, al estar inmerso en una lucha estéril entre grupos que buscan controlar el aparato partidista y el capital político y simbólico que representa el FMLN.⁴⁸⁴

⁴⁸⁴ La diferencia del sentido que la lucha por el rumbo ideológico del partido tiene para militantes y no militantes del FMLN puede entenderse a partir de la imagen evocada por Bourdieu para explicar como la *illusio* –es decir, la apuesta del juego en un campo específico- organiza y condiciona el funcionamiento del campo. Bourdieu describe una escultura que se encuentra en la catedral de Auch (Gerch) y que representa dos monjes luchando por conseguir el bastón de prior, señalando que esta pelea por “un bastón cuyo valor sólo existe para alguien que está en el juego, cogido por el juego.” refleja el hecho que reconocer el valor simbólico de determinados bienes es la premisa para ingresar y mantenerse en un campo, mientras para los que están afuera, el mismo bien puede ser completamente indiferente. Véase, P. Bourdieu, “¿Es posible un acto desinteresado?”, *op.cit.*, 1997, p. 143.

4.3. La marginación de las organizaciones populares

A lo largo de la guerra civil, buscar una solución negociada se volvió una demanda que aglutinaba a diversos actores sociales -organizaciones populares, iglesias, universidades- en foros y coordinadoras, como -en los últimos años de la guerra civil- el Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz. Sin embargo, en la negociación para fijar las condiciones para la desmovilización participaron sólo el gobierno salvadoreño y la dirigencia del FMLN. Una excepción fue el tema agrario donde la delegación negociadora del FMLN consultó a representantes de las organizaciones campesinas, cooperativas, así como a las organizaciones de repobladores para elaborar sus posicionamientos. Aunque durante la implementación de los Acuerdos de Paz parecían abrirse algunos espacios a la participación de organizaciones de base y ONGs, como el Foro de Concertación Social y Económica y el Programa de Transferencia de Tierras, esto no significó automáticamente una mayor incidencia en el proceso de toma de decisiones sobre la institucionalidad de la posguerra.

Esta situación aparentemente contradictoria deriva de que las condiciones de posibilidad para la participación política y social de estas organizaciones se fueron moldeando no sólo por los efectos prácticos de la pacificación y los programas de ajuste estructural, sino también por la desmovilización de las estructuras militantes del FMLN y por la dispersión organizativa del Partido Demócrata. A partir de la premisa que se trata de estrategias de reconversión de grupos que buscan conservar una posición en el campo político, la siguiente sección pretende reconstruir las nuevas modalidades de organización y nuevas estrategias de acción que se formaron en respuesta a la desmovilización del aparato político-militar del FMLN.

De la desmovilización a las estrategias de reconversión organizativa

La desmovilización del FMLN se llevó a cabo dentro del marco establecido por los Acuerdos de Paz, el cual incluyó una serie de mecanismos y programas para ofrecer vías de reinserción a la vida civil para combatientes y la población asentada en las zonas de conflicto. Una pequeña parte de excombatientes del FMLN -principalmente de las estructuras de mando medio y alto- fueron incorporados a la nueva Policía Nacional Civil, junto con miembros de los disueltos cuerpos de seguridad, que no habían sido acusados de violaciones a los derechos humanos. Pero el grueso de los excombatientes de las Fuerzas Armadas y del FMLN, así como las bases de apoyo de la guerrilla en las zonas del conflicto, se adhirieron al PTT. Esto se debe a que en las zonas de conflicto muchas familias campesinas -tanto bases de apoyo del FMLN como familias que se habían mantenido al margen del conflicto bélico- habían ocupado tierras abandonadas durante el conflicto. Para ellos, la

inclusión del tema de la distribución de tierras en los Acuerdos de Paz sirvió para reivindicar la tenencia de facto de las propiedades y buscar su legalización por medio de su inclusión en el PTT.⁴⁸⁵

El PTT fue el centro de la estrategia global de reinserción civil porque estaba orientado a atender las necesidades de tres grupos: soldados desmovilizados, ex combatientes del FMLN y población asentada en las zonas de conflicto. Por medio del PTT, fueron beneficiados 8,519 ex soldados con 725 propiedades, que abarcan en total 31,304.13 manzanas, así como 27,481 excombatientes del FMLN y tenedores de las zonas de conflictos con 2,580 propiedades, en total 116,358.70 manzanas.⁴⁸⁶ Adicionalmente a la distribución de las tierras se instrumentaron, con el apoyo del PNUD y ONGs, una serie de programas para facilitar la reinserción y crear oportunidades para los grupos afectados por la guerra: un primer grupo de iniciativas fue dirigido hacia las personas que se dedicarían a la agricultura por medio del PTT para ofrecerles capacitaciones, crédito agropecuario y préstamos de cinco años para capitalizar las fincas. Para los ex combatientes que preferían no dedicarse a la agricultura, había la posibilidad de conseguir préstamos para microempresas, cursos técnicos y becas. Finalmente, para 600 mandos medios y líderes sociales del FMLN se puso en marcha un programa de capacitación y crédito empresarial para que pudieran iniciar sus propias empresas.⁴⁸⁷ Pero la realización del PTT y de los programas que lo acompañaron, se tardaron más de lo provisto, por lo cual una parte de los ex combatientes abandonó las concentraciones militares, instaladas después de la firma de los Acuerdos de Paz y que sirvieron de base para contabilizar los potenciales beneficiarios, para atender las necesidades familiares sin tener asegurados una propiedad o haberse registrados previamente en las listas de desmovilizados de ONUSAL. Esto significó que una parte de ellos no pudo hacer valer su derecho de acceder a tierras u otras recompensas, abriéndose una vertiente de conflictividad que iba a caracterizar la sociedad salvadoreña en la década de los noventa.

La concentración en el PTT como mecanismo principal de reinserción se explica porque el FMLN, en los años del conflicto bélico, se había convertido en un ejército campesino y porque existía un

⁴⁸⁵ De acuerdo a las contabilizaciones del FMLN, a finales de la guerra civil 4,666 propiedades (268,451 ha) habían sido ocupadas (aproximadamente 18,5 por ciento de las tierras cultivadas del país) principalmente por cooperativas insurgentes. Véase, E. J. Wood, *op.cit.*, 2003, p. 85.

⁴⁸⁶ A. Álvarez y J. M. Chávez, *op.cit.*, 2001, p. 54.

⁴⁸⁷ El PNUD coordinó un grupo de ONGs que se encargaron de este programa e implementaron tres subniveles: el 33 por ciento de los beneficiarios participaron en el subnivel de formación técnico-vocacional, el 58 por ciento en administración de empresas y el 9 por ciento en la formación de ejecutivos. Véase, E. Wood, *op.cit.*, 1999, pp. 123-125.

consenso básico entre los actores políticos que la desigual distribución de la tierra había sido la razón estructural principal del conflicto. Sin embargo, esto implicó una serie de exclusiones debido a la definición restrictiva de la población beneficiaria y la concentración en los áreas rurales: Por ejemplo, los combatientes de ambos bandos que eran menores de edad en el momento que se elaboraron las listas de beneficiarios no podían ser incluidos en ellas, porque la legislación vigente sobre la propiedad agraria no permitía que fueran propietarios. Esta situación afectó especialmente a ex combatientes del FMLN que se habían integrado a la guerrilla en los últimos años de la guerra, siendo todavía niños. En el caso de los integrantes de los grupos paramilitares, que habían operado en las zonas de conflicto, ellos no recibieron ninguna atención por parte del gobierno al negar ARENA cualquier vínculo y responsabilidad.⁴⁸⁸

Un sector, cuyas necesidades tampoco fueron atendidas de manera satisfactoria, fueron los lisiados de guerra. Su demanda por la constitución de un fondo gubernamental para otorgar prestaciones tanto a las personas discapacitadas por los enfrentamientos y las familias afectadas por la pérdida de su sostenedor principal a raíz de la guerra se tardó más y suscitó mayores conflictos entre el FMLN, el gobierno salvadoreño y las organizaciones que representaban los intereses de las víctimas de la guerra. Hasta finales del 2001, gracias a la mediación de las Naciones Unidas se logró un acuerdo político para determinar los derechos de los potenciales beneficiarios del Fondo para la Protección de los Heridos y Lisiados a Raíz del Conflicto Armado. Con este acuerdo se cerró formalmente el último punto pendiente de los Acuerdos de Paz y el secretario general Kofi Annan declaró el final de la misión de verificación de las Naciones Unidas.⁴⁸⁹

Desmovilizar las estructuras político-militares de la guerrilla afectó por lo menos a 15,009 personas -4,492 mujeres y 10,517 hombres- que es el número registrado por ONUSAL como miembros del FMLN. Según estas estadísticas, la guerrilla consistía de 8,552 combatientes, 2,474 civiles lisiados y 3,938 cuadros políticos. Como puede verse en el Cuadro 4.3, las organizaciones más grandes fueron las FPL con 5,082 y el ERP con 3,930 miembros, seguidos por los grupos Resistencia Nacional con 2,499, el Partido Comunista con 2,250 y el PRTC con 1,248 miembros.

⁴⁸⁸ Sobre los grupos excluidos del PTT, véase, Álvarez y J. M. Chávez, *op.cit.*, 2001, pp. 120-127.

⁴⁸⁹ Véase, Kofi Annan, “La situación en Centroamérica. Informe del Secretario General”, *Colatino*, San Salvador, 13 de enero de 2003, pp. 12 y 13.

Cuadro 4.3 Organizaciones político-militares del FMLN por grupo y por género (aproximadamente 1992)

Grupo	Mujeres	Porcentaje	Hombres	Porcentaje	Total	Porcentaje	Proporción de mujeres del total
ERP	1,156	25,7	2,774	26,4	3,930	26,2	29,4
FAL (PC)	734	16,3	1,516	14,4	2,250	15,0	32,6
FPL	1,397	31,1	3,685	35,0	5,082	33,9	27,5
PRTC	356	7,9	892	8,5	1,248	8,3	28,5
RN	849	18,9	1,650	15,7	2,499	16,7	34,0
Total	4,492	100,0	10,517	100,0	15,009	100,0	29,9

Fuente: ONUSAL, *Proceso de desmovilización del personal del FMLN*, San Salvador, El Estudiante, s/f; Cit. en, I. Luciak, *op.cit.*, 1999, p. 48.

Pero estos datos son sólo una aproximación a las cifras verdaderas. De acuerdo a Luciak, se estima que entre un 10 a 15 por ciento de los miembros del FMLN no se registraron como desmovilizados con ONUSAL, fuese por desconfianza ante las instituciones gubernamentales, por no necesitar de un programa de reinserción (por ejemplo en el caso de los cuadros políticos dirigentes) o por no querer exponerse a ser identificados como “ex guerrilleros”, como pudo suceder en el caso de activistas de las organizaciones populares. Hasta 1994 operaban grupos paramilitares –lo cual quedó evidente a raíz de algunos asesinatos políticos de militantes del FMLN, secuestros y amenazas de muerte dirigidos en contra de dirigentes de la izquierda- por lo cual los temores de los militantes del FMLN tenían justificación. Por otra parte, había desconfianza de una parte de la población hacía los guerrilleros. Posiblemente esta situación inhibió también a activistas de las estructuras civiles de declarar en un primer momento su pertenencia al FMLN.⁴⁹⁰

El desmantelamiento de las estructuras del FMLN afectó de manera particular a los activistas de las organizaciones político-militares cuya militancia se había desarrollado en las estructuras políticas clandestinas (insertadas en el movimiento sindical, las organizaciones de derechos humanos o el movimiento urbano popular), muchos de los cuales habían participado en la preparación de la ofensiva de 1989 como integrantes de los Comandos Urbanos. Su desmovilización no recibió una atención específica –a diferencia de los combatientes campesinos- porque no fueron considerados y contabilizados como parte del aparato político-militar del FMLN. Y aunque parece factible que algunos activistas y cuadros políticos del FMLN, con familiares en las zonas de conflicto o en los

⁴⁹⁰ Daniela, exmilitante de Resistencia Nacional cuenta que, como activista del FMLN, era difícil en los primeros años de la pacificación acercarse a la gente fuera de los círculos del activismo por la desconfianza que se tenía a la guerrilla. Entrevista, San Salvador, 22 de marzo de 2004.

campos de refugiados se hayan trasladado al campo y a las áreas de concentración militar del FMLN para ser contabilizados en los censos de beneficiarios del PTT, parece poco probable que el grueso de activistas urbanos –sin vínculos con el campo- haya apostado a esta oportunidad de reinserción civil.

La reinserción requería de energía social e individual por lo cual la desmovilización programada y planificada, cuyos pasos se han descrito hasta este momento, fue acompañada por una desmovilización espontánea derivada del abandono de la participación activa a partir de múltiples factores: el desgaste subjetivo por la guerra, la energía y el tiempo que implicaba la solución a problemas individuales y la frustración debido a que las expectativas, que la pacificación iba a proveer de los recursos necesarios para enfrentarse a la vida bajo la lógica del mercado, no se cumplieron. Por ejemplo, había combatientes que abandonaron las concentraciones militares del FMLN para buscar sus familias y resolver necesidades individuales y familiares después de 10 años de guerra,⁴⁹¹ y muchos militantes y cuadros políticos optaron por poner la participación política en un segundo plano para resolver problemas familiares o retomar trayectorias educativas o laborales que habían sido interrumpidas a raíz de las exigencias de la militancia. Un diagnóstico interno del Comité Central de las FPL, elaborado en noviembre de 1994 en el contexto de los debates sobre la renovación ideológica y organizativa del partido, planteaba el problema de la siguiente manera:

La reinserción ha tenido un fuerte impacto en la conducción del partido. Con el fin de la guerra, cada militante ha debido enfrentar problemas económicos, laborales, familiares y de otra índole que estuvieron soslayados durante la guerra. Ante esta situación todos hemos reajustado nuestros criterios y disponibilidad de tiempo efectivo de participación política. En muchos casos los cambios han sido drásticos, sin que hayan sido explicitados a los organismos correspondientes. De manera que el partido asume que tiene un staff de militantes a tiempo completo, sin que ello sea realmente cierto.⁴⁹²

Al cruzarse la desmovilización “desde arriba” –es decir, el desmantelamiento negociado de la estructura político-militar- con la desmovilización espontánea “desde abajo”, los agentes políticos y sociales agrupados en torno al FMLN tuvieron que replantearse las estrategias de acción. Estas líneas de acción consistieron, en primer lugar, en una nueva delimitación de las fronteras de la acción política, en segundo lugar, en una mayor *tecnificación* del activismo –impulsada por las ONGs- y, en tercer lugar, en la *gremialización* de las organizaciones sindicales y campesinas, es decir, el abandono de las funciones de voceros políticos por parte de estos actores para convertirse en voceros de intereses sectoriales particulares.

⁴⁹¹ Véase, A. Álvarez y J. M. Chávez, *op.cit.*, 2001, p. 60.

⁴⁹² FPL-Farabundo Martí, *Documento de Discusión Marco Conceptual para la Renovación del Partido*, Documento interno, mimeo, 4 de noviembre de 1994, p. 35.

La primera línea de acción significó en el plano de la actividad propiamente partidista una mayor división del trabajo al interior del aparato, una especialización del activismo político y la consolidación de un cuerpo de funcionarios partidistas. A modo de ejemplo sirva el citado documento de las FPL que señalaba como uno de los principales retos para las instancias de la organización transformar un partido “que hace prácticamente de todo” en una organización capaz de llevar a cabo las actividades y estrategias orientadas al acceso y ejercicio del poder político, lo cual se complementaría con otras formas de institucionalidad -autónomas del partido, como sindicatos u organizaciones comunales de base-, que tenían en común un proyecto histórico de cambio estructural del sistema político y socioeconómico del país.

A partir del diagnóstico que el esfuerzo de las instancias partidarias para abarcar todos los ámbitos de acción política y social, estaba produciendo un desgaste profundo entre la militancia, el documento del Comité Central de las FPL planteaba una división de trabajo a partir de tres ámbitos de acción: la organización partidista cuyas áreas de trabajo abarcarían la formulación de la agenda nacional y legislativa, los apoyos políticos a plataformas sectoriales, la orientación política de los gobiernos municipales, la elaboración de la propaganda política, la definición de las alianzas y el aparato electoral. Un segundo ámbito de acción sería la organización comunitaria a nivel urbano, sub-urbano y rural con actividades que se estructurarían principalmente en torno a proyectos de desarrollo económico y social y cuyos referentes para solicitar apoyo técnico y recursos serían los gobiernos municipales, el gobierno central y ONGs. En este ámbito la estructura territorial del partido coincidiría con las expresiones locales de organización comunitaria sin que la primera forma de acción debiera sustituir a la segunda. El documento señalaba que el desplazamiento de activistas de las FPL a estas nuevas formas de organización podría disminuir en el corto plazo las capacidades organizativas del partido pero a la larga reforzaría el arraigo social y territorial en las comunidades. El tercer y último ámbito que tendrían que deslindarse del trabajo partidista como tal era la organización gremial: si bien el partido debía -y tenía el derecho- de apoyar desde su institucionalidad formalmente política las luchas reivindicativas de las asociaciones gremiales no debía ser el responsable de “organizar, dinamizar y conducir tales asociaciones para el logro de propósitos formalmente gremiales.”⁴⁹³

Esta división de trabajo entre estructura partidista, organizaciones comunitarias y movimientos gremiales, advertía el documento, no debería conducir a una unificación de los tres esfuerzos en la

⁴⁹³ *Ibíd.*

cúpula para armonizar o controlar las líneas de acción. Más bien cada actor –partido, organización comunitaria y movimientos gremiales- estaría libre a desarrollar su propia agenda social y política dentro del marco de un proyecto y estrategia política común. Sería a través de la participación gremial o comunal de los militantes del partido y la identidad política-revolucionaria compartida de las organizaciones que se podría asegurar la unidad de acción y la promoción de una “estrategia de poder orientada a lograr las transformaciones profundas que el país necesita”.⁴⁹⁴

Sin embargo, este proceso de división de funciones no se dio de manera tan armónica y organizada como aparece en este documento. Un balance sobre los aciertos y dificultades en el proceso de disolución de los grupos político-militares en el FMLN, realizado desde la perspectiva del PC pero que se repite en los documentos de las otras fracciones, señala que si bien la decisión de crear un solo partido había sido acertada, la forma como se llevó a cabo, caracterizado por el carácter cupular de la toma de decisión, la falta de discusión interna antes de disolverse y la poca planificación de la integración, contribuyó a la desmoralización de muchos militantes y cuadros políticos que se retiraron a la vida privada:

Muchos esperábamos ser llamados y recibir instrucciones de la dirección como era nuestra costumbre o al menos ser consultados. Lo que sucedió durante la disolución pareció algo frustrante para varios compañeros y compañeras; daba la impresión de que muchos de los cuadros con experiencia acumulada ya no eran necesarios. No hubo los mejores criterios ni procedimientos para la selección y distribución de cuadros, que es muy importante para un Partido revolucionario. El oportunismo y el arribismo fueron la nota dominante, y la Dirección del Partido cayó a la vorágine de los cargos de elección pública.⁴⁹⁵

Lo que dentro del partido se planteaba como una estrategia para obtener una división del trabajo político más apropiado al periodo de la paz -que permitiría al partido dedicar sus esfuerzos a la construcción de una estructura con presencia territorial en todo el país y un aparato apto para la lucha electoral- hacia fuera se planteaba como una toma de distancia para permitir que organizaciones comunitarias y gremiales afines a la izquierda podrían elaborar sus propias proyecciones estratégicas en función de sus intereses gremiales.⁴⁹⁶

La segunda línea de acción –la tecnificación del activismo social a través de las ONGs- surgió desde la segunda mitad de los ochenta, cuando se abrieron ciertos espacios a la participación social y las

⁴⁹⁴ Véase, *Ibíd.*, pp. 28-29.

⁴⁹⁵ D. Santacruz, *op.cit.*, 2005.

⁴⁹⁶ Así, Schafik Handal planteó en una reunión con sindicalistas, poco después de que terminó el conflicto bélico, que la nueva línea era que ahora ya no había línea sino que los sindicalistas debían construir su propia línea. Citado en Rosa Inés Arrivillaga, et.al, “Transformaciones económicas y relaciones laborales en El Salvador”, M. Roquebert León (coord.), *op.cit.*, 2005, pp. 79-123, p. 105.

agencias internacionales de cooperación empezaron a canalizar cada vez más fondos a través de ONGs para atender las necesidades primarias de la población civil en las zonas de guerra y apoyar la reconstrucción y el desarrollo local de dichas zonas.⁴⁹⁷ En los primeros años de la posguerra los diversos actores políticos se “disputaron” la sociedad civil⁴⁹⁸ porque tanto ARENA como el FMLN buscaron canalizar recursos a las organizaciones afines a sus posiciones políticas. Por ejemplo, los fondos de AID, que financiaron en 1993 el Plan Nacional de Reconstrucción, beneficiaron principalmente a ONGs y organizaciones comunitarias vinculadas a FUSADES y excluyeron a organizaciones identificadas con la oposición, tanto del PDC como del FMLN. FUSADES, por su parte, inició una campaña para convencer al empresariado salvadoreño de instituir pequeñas fundaciones locales para beneficiar a comunidades vulnerables con proyectos de infraestructura social y evitar de esta manera que el FMLN llenara este vacío organizativo. En el marco de esta estrategia, desde 1990 FUSADES inició FORTAS un programa cuyo objetivo es impulsar a empresarios salvadoreños –principalmente cafetaleros- a financiar en sus lugares de origen pequeñas fundaciones locales para construir infraestructura básica social (centros de salud, escuelas, etcétera) y para capacitar a líderes locales en temas vinculados con desarrollo sostenible. Estos proyectos –una combinación de paternalismo y control político- se han llevado a cabo principalmente en la zona occidental del país donde refuerzan la hegemonía política y la presencia electoral de ARENA.⁴⁹⁹

Para las cinco organizaciones del FMLN, la fundación de ONGs que atendieran grupos específicos – como, por ejemplo, mujeres o repobladores- fue una estrategia que desde mediados de la década de los ochenta estaba orientada a acceder a recursos externos vía las redes internacionales de solidaridad, para atender las necesidades inmediatas de sus bases locales y sectoriales y para financiar el aparato partidista. Con el cese del enfrentamiento bélico y la implementación de los programas de reconstrucción y reinserción, estas organizaciones con sus contactos nacionales e

⁴⁹⁷ El auge de las ONGs a partir de 1985 se refleja en los registros gubernamentales pese a la resistencia institucional de reconocer asociaciones consideradas simpatizantes con el FMLN: en el Ministerio de Interior (ahora Ministerio de Gobernación) fueron registrados en 1980 sólo 10 organizaciones y entre 1980 y 1984 menos de 20 organizaciones por año, lo cual contrasta con el crecimiento acelerado entre 1985 y 1989 cuando fueron registrados un promedio de 30 asociaciones por año y en 1990 60 organizaciones. A partir de 1987 las fundaciones adquirieron mayor relevancia. Mientras entre 1987 y 1991 un promedio de 10 fundaciones por año obtuvieron la personería jurídica, en 1992 fueron 25 y en 1993 fueron 27. Véase, M. W. Foley, *op.cit.*, 1996, p. 95. Sobre la creciente importancia de las ONGs, véase también Ana Kelly Rivera, “Contribución de las ONGs a la cultura en El Salvador”, Stefan Roggenbruck (ed.), *Cultura y Desarrollo en El Salvador*, San Salvador, Fundación Konrad-Adenauer, 1994, pp. 155-207

⁴⁹⁸ M. W. Foley, *op.cit.*, 1996.

⁴⁹⁹ FORTAS: Programa de Fortalecimiento Social, véase M. Foley, *op. cit.* 1996, pp. 77-78. Véase, también el sitio de FORTAS en la página electrónico de FUSADES, www.fusades.com.sv (consultado en mayo 2007).

internacionales aumentaron de importancia hasta convertirse en intermediarias estratégicas entre organizaciones de base, comunidades locales y agencias de cooperación internacional.⁵⁰⁰ A partir de proyectos para apoyar el repoblamiento y la repatriación de los desplazados, programas de reconstrucción y desarrollo local y asesoría técnica y legal, las ONGs tejieron redes que articulaban agencias de cooperación internacional, principalmente de Europa, con organizaciones comunitarias o sectoriales y municipios en aquellos territorios donde la respectiva organización político-militar había ejercido influencia durante la guerra civil.⁵⁰¹

En torno a estas modalidades de intermediación se consolidaron las prácticas sociales que caracterizan la *tecnificación* del activismo social, entre ellas la búsqueda y promoción de *expertise* –definida como especialización temática y conocimiento técnico–, la representación de poblaciones específicas (mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos) y la oferta de servicios, como asesoría legal y técnica, capacitación, facilitación de contactos internacionales o consultorías. Este activismo, propio de las ONGs, tiende a trabajar en función de proyectos que requieren financiamiento externo, lo cual lo independiza de los actores políticos nacionales –como instituciones gubernamentales o partidos políticos– al mismo tiempo que lo hace muy dependiente de los vaivenes en las modas e intereses de las agencias internacionales de cooperación.⁵⁰²

La tercera línea de acción –la *gremialización* de los sindicatos de izquierda– se perfiló como estrategia de reconversión después de 1992, cuando la promoción de proyectos políticos por actores sindicales empezó a perder cada vez más legitimidad. Los sindicatos, que habían formado parte de la alianza con el FMLN, pasaron –una vez superada la amenaza de la guerra y con el retiro del aparato partidista de los asuntos internos sindicales– por fuertes conflictos internos que produjeron

⁵⁰⁰ Véase, FPL, *op.cit.*, 1994, p. 28; Véase también, E. Wood, *op.cit.*, 2003, p. 186.

⁵⁰¹ Las cinco ONGs son Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES), Fundación para la Autogestión y Solidaridad de los Trabajadores Salvadoreños (FASTRAS), Fundación para la Reconstrucción y el Desarrollo de El Salvador (REDES), Asociación Salvadoreña de Desarrollo Integral (ASDI), Fundación Salvadoreña para la Promoción del Desarrollo Social y Económico (FUNSALPRODESE).

⁵⁰² Sobre la caracterización conceptual de las ONGs, véase, Nora Rabotnikof, “La caracterización de la sociedad civil en la perspectiva del BID y BM”, *Perfiles Latinoamericanos*, México, No. 15, diciembre 1999, pp. 27-46; Juan E. Méndez, “Sociedad civil y calidad de la democracia”, PNUD, *La Democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas*, PNUD, New York, 2004, pp. 131-138; Sobre la consolidación organizativa de organizaciones de base y ONGs en el periodo de la posguerra en El Salvador, véase, por ejemplo, Serena Cosgrove, “Levels of Empowerment. Marketers and Microenterprise-Lending NGOs in Apopa and Nejapa, El Salvador”, *Latin American Perspectives*, Riverside/CA, Issue 126, Vol. 29, No. 5, septiembre de 2002, pp. 48-65; Leigh Binford, “Grassroot Development in Conflict Zones of Northeastern El Salvador”, *Latin American Perspectives*, Riverside/CA, Issue 93, Vol. 24, No. 2, marzo de 1997, pp. 56-79.

escisiones y debilitaron a las organizaciones. Los conflictos se generaron a partir de las disputas entre grupos para ocupar secretariados y comités directivos, lo cual daba acceso a alianzas internacionales y recursos que el sindicalismo europeo seguía otorgando, pero que ya no estaban controlados por el aparato partidista.

La competencia con las ONGs, que a partir del tema de los derechos humanos y los derechos de las mujeres entraron al terreno de la promoción y defensa de los derechos laborales, fue un factor importante para obligar a los sindicalistas a apropiarse de nuevas estrategias y prácticas de representación. La nueva lógica de acción, visible en discursos y agendas sindicales, tiene como finalidad identificar y defender los intereses propios del sector obrero y la búsqueda de soluciones negociadas con la patronal y el Estado para que los trabajadores organizados puedan participar en beneficios y ganancias generadas en la producción. Destacan una serie de estrategias: la formulación de proyectos y objetivos sectoriales particularistas y tendencialmente independientes de proyectos partidistas; la concentración de la acción en funciones y fines propiamente sindicales, como es la ampliación de la contratación colectiva y la cobertura de la afiliación; lograr la autosustentabilidad financiera por medio del cobro de cuotas sindicales, la creación de un frente común entre gremios, que trasciende distinciones partidistas, a partir de la unificación de sindicatos por ramas de actividad económica; la creación de mecanismos para impulsar la democratización interna y la participación de la mujer; y el fortalecimiento de una *expertise* propia, concebida como un conocimiento técnico específico sobre las transformaciones actuales del mundo laboral -por ejemplo, el impacto de los Tratados de Libre Comercio- y sobre derecho laboral y constitucional.⁵⁰³

La reconversión gremialista en El Salvador se ha encontrado con el obstáculo que el sindicalismo salvadoreño históricamente ha estado vinculado al Estado o actores políticos de la oposición.⁵⁰⁴ Por tanto, si bien la estrategia de la reconversión gremial fue incorporada en las agendas programáticas sindicales, en la práctica cotidiana de representación y participación se han combinado nuevas y viejas líneas de acción que siguen incluyendo la vinculación con actores gubernamentales o con las fuerzas de oposición, especialmente el FMLN.

⁵⁰³ Los elementos centrales de la “lógica gremialista” pueden reconstruirse a partir de diversos documentos que en los últimos diez años han sido publicados por ONGs u organizaciones internacionales que formulan, a partir del análisis de la situación del mundo laboral salvadoreño, una serie de recomendaciones que, en realidad, son propuestas de estrategias organizativas y políticas dirigidas a los actores del mundo laboral, especialmente los sindicatos. Véase, por ejemplo, A. E. Cardona, *op.cit.*, 1999, pp. 77-82; R.I. Arrivillaga, et.al., *op.cit.*, 2005, p. 119.

⁵⁰⁴ Véase, Capítulo 2.

La gremialización se dio en varias modalidades: una opción fue, por ejemplo, independizarse totalmente de la organización partidista como sucedió en el caso de FENASTRAS. Esta opción se facilitó gracias al distanciamiento de la dirigencia de Resistencia Nacional del FMLN y de los asuntos internos del movimiento sindical después de 1992, lo cual posibilitó que dirigentes sindicales como Juan José Huezo, desde 1991 secretario general de FENASTRAS, jugaran un papel cada vez más autónomo. En 1992 Huezo declaró la separación de FENASTRAS de Resistencia Nacional y en 1993 el retiro de la UNTS, justificando esta decisión con la autonomía sindical y con los desacuerdos que habían surgido a partir de la forma de los representantes sindicales de llevar a cabo las negociaciones en el Foro de Concertación Social y Económica. Resistencia Nacional, que en estos momentos se estaba disolviendo, no pudo o quiso impedir la separación de esta federación, que en los últimos años de la guerra se había convertido en una fuente importante de ingresos para la organización político-militar, gracias a sus vínculos y reconocimiento internacional. Tampoco se evitó la división de FENASTRAS en 1994, cuando siete sindicatos se retiraron de la federación después de impugnar la elección de Huezo alegando que él había manipulado las bases sindicales para ser elegido secretario general. En consecuencia estos sindicatos fundaron una nueva federación, FESTRAES. La autonomización de FENASTRAS llegó a tal grado que se convirtió en un “cascarón” –es decir, un nombre vacío apropiado por un grupo de dirigentes- que han usado el prestigio de la federación para acceder a fondos internacionales y, cuando éstos desaparecieron, apoyos gubernamentales y empresariales. En 1996 empresarios del sector maquilador denunciaron a Huezo por haber solicitado dinero a cambio de inhibir la constitución de sindicatos libres en las plantas, evidenciándose con esto la reconversión de FENASTRAS a un sindicato “blanco”.⁵⁰⁵ La combinación de estos factores –disputas internas por el control y escisiones, pérdida de los fondos internacionales y el cierre de empresas sindicalizadas- hizo que disminuyera el número de afiliados de los 26 mil, que la federación tenía en la década de los ochenta, a 3,477 en el 2001. Los sindicatos que se habían escindido tampoco corrieron una mejor suerte: FESTRAES contabilizó 1,175

⁵⁰⁵ Véase, “La maquila nuevamente cuestionada”, *Inforpress Centroamericana*, 27 de junio de 1996, p. 8, No. 1181. Huezo atacó también fuertemente las campañas internacionales para presionar a favor de mejores condiciones laborales en las maquilas, señalando que era una estrategia proteccionista de sindicatos estadounidenses para impedir el traslado de puestos laborales a Centroamérica. Esta posición opuesta a la opinión mayoritaria en el movimiento sindical centroamericano, que es internacionalista, se asemeja a la postura descrita por Joachim Hirsch como *Standortlogik* (Lógica del lugar óptimo), que domina en el capitalismo neoliberal y promueve el consenso nacional entre trabajo y capital de bajar salarios y prestaciones para atraer inversiones internacionales. Véase, Joachim Hirsch, “La globalización del capitalismo y la transformación del Estado: hacia el Estado nacional de competencia”, J. Hirsch, *Globalización, capital y Estado*, México, UAM-Xochimilco, 1996, pp. 95-105.

afiliados.⁵⁰⁶

Otra modalidad de gremialización ha sido la toma de distancia del partido sin perder por completo la afinidad ideológica y los vínculos de militancia. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de sindicatos del sector público como STISSS, STCEL o SETA, donde las directivas pudieron negociar el reconocimiento de la actividad sindical en las empresas con los gerentes de las empresas. A principios de los noventa, los funcionarios reconocieron la presencia sindical a cambio del compromiso de la directiva de no vincularse abiertamente con actividades político-partidistas, lo cual demostró que el gobierno estaba dispuesto a ciertas concesiones en el ámbito laboral, si esto facilitaba el funcionamiento de las instituciones y fomentaba un sindicalismo centrado en actividades gremiales que no buscaba convertir el espacio laboral en un espacio para la disputa política. El esfuerzo por construir una identidad laboral más allá de afinidades partidistas se manifestó también en la fundación de la federación FESTRASPE, conformada por los principales sindicatos del sector público. Sin embargo, en el espacio público los sindicatos de FESTRASPE tienden a mostrar un perfil contestatario y una proyección política que los vincula con la izquierda partidista. Participan por medio de la participación en alianzas y movimientos más amplios, como por ejemplo en el 2004, cuando estos sindicatos (entre otros) se adhirieron públicamente a la plataforma electoral del FMLN.

La trayectoria de ANDES en el periodo de la posguerra es, en cambio, ejemplo para una gremialización parcial porque se mantuvo la identificación unívoca con el FMLN.⁵⁰⁷ Esto significa que las líneas de los conflictos partidistas, que acompañaron la institucionalización del FMLN, intervinieron también en las disputas que surgieron entre diversas corrientes sindicales por el control de la directiva sindical. Tanto las disputas internas como la actitud del Ministerio de Educación de desconocer, en los primeros años de la pacificación, a ANDES como contraparte en las negociaciones salariales contribuyeron al debilitamiento del gremio de maestros: en 1992 y 1993

⁵⁰⁶ FESTAES: Federación Sindical de Trabajadores de El Salvador. Véase, “Resurgen divisiones en FENASTRAS”, *Infopress Centroamericana*, No. 1078, 12 de mayo de 1994, p. 15. Sobre la crisis en FENASTRAS, véase también Henry J. Frundt, “Central American Unions in the Era of Globalization”, *Latin American Research Review*, Austin/Texas, Vol. 37, No. 3, pp. 7-53, pp. 31-33. Los números de afiliados son tomados de O. Martínez P., *op.cit.*, 2003, p. 113.

⁵⁰⁷ De acuerdo con las declaraciones de ANDES 21 de Junio, el 90 por ciento de los 10,000 afiliados son simpatizantes o miembros del FMLN, lo cual da cuenta del estrecho vínculo entre gremio y partido. Véase, José Antonio Candray, *Reforma Educativa y Concertación en El Salvador*, Seminario Internacional “Sindicalismo magisterial, concertación y reforma educativa en América Latina. Condiciones, obstáculos y consecuencias” San Pedro Sula/Honduras, Noviembre de 2001, p. 28, disponible en línea www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/conflictividad_el_salvador_reforma_concertacion.pdf (consultado en mayo 2007).

ANDES llevó a cabo una serie de paros y movilizaciones, enfrentándose directamente a la ministra de educación, para exigir un incremento salarial y la devolución de la Casa del Maestro, sede histórica del gremio y ocupada por el ejército. Pero la movilización recibió poco apoyo y el Ministerio negoció el incremento salarial con las otras organizaciones sindicales del sector educación desconociendo con esta actitud a ANDES señalada como fachada del FMLN. El desenlace del primer conflicto laboral de la posguerra debilitó al gremio magisterial, lo cual contribuyó a que la tendencia de Schafik Handal y Salvador Sánchez Cerén enfrentara poca resistencia al impulsar a sus cuadros para dirigir el gremio, frenando de esta manera un incipiente proceso de autonomización. Al convertirse el sindicato en una arena del conflicto entre corrientes se produjeron escisiones que fundaron nuevas organizaciones sindicales: Concertación Magisterial en 1993, SGPEES en 1999⁵⁰⁸ y Bases Magisteriales en el 2000. ANDES, por su parte, que mantuvo el vínculo con el FMLN, pudo recuperar una posición privilegiada en las negociaciones con el Ministerio de Educación, presentándose como una fuerza político-sindical, lo cual le permitió, por ejemplo, recuperar la Casa del Maestro en el centro de San Salvador.

Estos ejemplos demuestran que en las disputas fraccionales de la posguerra para controlar los sindicatos se reciclan –aunque con menos fuerza– las prácticas que alguna vez constituyeron la lógica de la lucha por la hegemonía, aunque ya no interpelan o movilizan las bases sindicales. Un caso paradigmático en este sentido es representado por el caso de ANDES, donde la lucha por el control del aparato y nombre del sindicato llevó a una dispersión organizativa en cuatro asociaciones sindicales cuyas raíces históricas están en el movimiento revolucionario. Otro caso paradigmático para ejemplificar las consecuencias negativas de las rupturas en el movimiento revolucionario es la evolución de FENASTRAS que, al desvincularse de las lógicas partidistas, perdió relevancia y combatividad hasta convertirse en un sindicato blanco al amparo del gobierno.

En cambio, aquellos sindicatos que apostaron a la gremialización sin perder por esto su identidad política pudieron sobrevivir en el campo político posbélico pese a la pérdida de centralidad como actores políticos. Pero no son solamente las prácticas sindicales politizadas que imponen límites a la reconversión gremialista, sino también las posiciones de la patronal y del gobierno salvadoreño que no reconocen en el sindicalismo un interlocutor válido. Esta actitud de ninguneo gubernamental ha impulsado a sindicatos y asociaciones gremiales a mantener la alianza política con el FMLN.

⁵⁰⁸ SGPEES: Sindicato Gremial de Educadores de la Empresa Privada de El Salvador.

La disputa por el reconocimiento: nuevos y viejos portavoces

Antes de introducir los relatos militantes, conviene mapear las posiciones políticas para evidenciar lo que se ha identificado como el principal problema de la izquierda social en la época de la posguerra: la dispersión organizativa explicada, por lo general, por la “sobrepolitización” o “sobreideologización” heredada de la guerra.⁵⁰⁹ En esta sección nos interesa problematizar la noción de “sobrepolitización”, señalando que a la vez que las divisiones partidistas afectaron la cohesión interna de muchas de las alianzas construidas durante la guerra, paradójicamente la adhesión a redes sociales constituidas en torno a lealtades políticas y afinidades ideológicas ha permitido nuevas formas de coordinación entre estos agentes del campo político.

La dispersión organizativa fue provocada por tres factores: el fracaso del Foro de Concertación Social y Económica, las escisiones partidistas y la desmovilización política generalizada, expresada en la ausencia de movimientos de masas (hasta las huelgas de los trabajadores del Seguro Social a partir de 1999) y el decrecimiento de organizaciones sociales identificados con la izquierda. Las organizaciones populares, para superarla, han buscado formar alianzas en dos modalidades: a partir de luchas sociales específicas o a partir de la formulación y promoción de agendas programáticas en determinadas coyunturas electorales.

Fue la victoria electoral de ARENA en 1989 que abrió nuevas oportunidades a la formación de alianzas sociales porque desapareció el antagonismo político entre gobierno democristiano y FMLN que había afectado al movimiento popular. Para enfrentar las políticas de ajuste estructural de ARENA, el incremento de la violencia en contra de organizaciones populares en el contexto de la ofensiva de 1989 y la exclusión política, que ya no afectó solamente a las bases de la izquierda sino también del PDC, la UNTS y la UNOC fundaron en 1990 –en un contexto político marcado por las protestas gremiales en contra de las primeras medidas de estabilización económica- la Intergremial, a la que se sumaron CTS, CGT y AGEPYM. Esta alianza se propuso servir como un espacio de coordinación para enfrentar las medidas de estabilización económica a costa de los sectores populares, impedir la reversión del proceso de reforma agraria, exigir la disolución de los cuerpos de seguridad y escuadrones de la muerte y apoyar el proceso de negociación entre la guerrilla y el gobierno.⁵¹⁰

⁵⁰⁹ Véase, por ejemplo, T. Fitzsimmons y M. Anner, *op.cit.*, pp. 114-120

⁵¹⁰ Entrevista con David Mena, Comisión Nacional de Desarrollo, San Salvador, 27 de agosto del 2002; véase también Joaquín Arriola Palomares/José Antonio Candray, *Derechos prohibidos. Negociación colectiva y sindicatos en El Salvador*, Documentos de Investigación No. 1, San Salvador, UCA, Mayo de 1994, pp. 37-39.

La participación en el Foro de Concertación Social y Económica fue otro incentivo importante para conservar la Intergremial como un espacio para elaborar propuestas para reformar y democratizar las relaciones laborales y coordinar acciones aunque la guerra ya había terminado. Un acontecimiento crucial que evidenció el grado de acercamiento posible, ahora que había terminado la guerra, fue la amenaza de los representantes de la UNOC y UNTS de pedir al gobierno estadounidense excluir El Salvador de los beneficios del sistema general de preferencias arancelarias si los gremios empresariales y el gobierno no aceptaran la adhesión del país a los Convenios de la OIT sobre la libertad sindical. Los empresarios denunciaron a los sindicalistas por su “actitud antipatriótica”, con la cual dañarían la economía del país.⁵¹¹

Pero la Intergremial se desmembró por varias razones. Por una parte, la poca disposición del grupo empresarial y gubernamental de reformular la política laboral y económica del país impidió que el Foro se convirtiera en un espacio para construir nuevos consensos sociales y alianzas duraderas.⁵¹² Por otra parte –y, posiblemente, esto contribuyó también al fracaso del Foro– en este periodo tanto la UNTS como la UNOC pasaron por conflictos internos en los cuales la pregunta sobre las estrategias más adecuadas para enfrentar los cambios de la posguerra se vincularon con las disputas entre grupos para controlar las instancias de decisión y el acceso a las redes internacionales de apoyo. Como consecuencia, la UNTS y la UNOC –por ende, la Intergremial– se debilitaron y se disolvieron con el abandono de integrantes estratégicos. Por ejemplo, en 1993 la dirigencia de FENASTRAS –paralelamente a su toma de distancia con respecto al FMLN– anunció su retiro definitivo de la UNTS por estar en desacuerdo con la forma como los representantes de la UNTS estaban llevando a cabo las negociaciones en el Foro. La UNOC, por su parte, se vio afectada por la fragmentación del PDC.

A partir de 1995 –año en el cual las campañas internacionales sobre los derechos de los y las trabajadoras de las maquilas adquirieron más fuerza– la creciente participación de actores no sindicales en asuntos laborales (ONGs de Derechos Humanos, asociaciones eclesiales, etcétera) significó una nueva competencia para los sindicatos. Algunas ONGs –como “Las Mélicas” (una

⁵¹¹ Véase, “Comentario: Los avances del foro de concertación”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año XLVIII, No. 537-538, julio-agosto de 1993, pp. 735-742; Acusaciones similares de los gobiernos de ARENA y los gremios empresariales podían observarse durante las campañas internacionales que en 1995 realizaron ONGs y sindicatos a partir del conflicto laboral en la empresa textil Mandarin International, (productora para la marca The Gap) en Estados Unidos para denunciar las condiciones laborales en las maquilas. Véase, N. Molina y A. C. Quinteros, *op.cit.*, 2000, pp. 82-99.

⁵¹² Entrevista con David Mena, Comisión Nacional de Desarrollo, San Salvador, 27 de agosto del 2002.

asociación fundada originalmente para atender las necesidades de mujeres ex combatientes de las FPL) o CENTRA (conformado por exsindicalistas de Resistencia Nacional)- se especializaron en la investigación y asesoría de asuntos laborales y sindicales, participaron en campañas nacionales e internacionales, vinculándose de esta manera a redes internacionales de acción solidaria junto con sindicatos, asociaciones estudiantiles, grupos eclesiales y asociaciones de consumidores.⁵¹³

El Foro de Concertación Social y Económico fue un momento clave en el proceso de cierre del campo político que acompañó la instrumentación de las políticas económicas neoliberales porque demostró el poco efecto de las acciones de los sindicatos y organizaciones sobre las decisiones de los grupos político y socialmente dominantes. Otro factor que debilitó al movimiento sindical fue el desempleo que afectó a bases y directivos de las grandes federaciones de izquierda después del cierre de empresas y la reducción del empleo en el sector público por medio de Decretos de Retiro Voluntario.⁵¹⁴ Mientras durante la guerra los vínculos partidistas y la cooperación externa habían permitido a sindicalistas despedidos mantenerse en el movimiento sindical, empleándose generalmente como cuadros técnicos en las federaciones, esto se volvió cada vez más difícil tanto por la falta de recursos de los propios sindicatos como porque la estabilidad laboral se volvió un condicionante importante para no perder la legitimidad como representante sindical.

La marginalización política del sindicalismo no cambió de manera significativa en los siguientes años y contrastó con el mayor protagonismo político de las organizaciones campesinas que

⁵¹³ CENTRA: Centro de Estudios del Trabajo. Es una Fundación sin fines de lucro que data de 1990 y se dedica al estudio de la problemática laboral y sindical. Otros ejemplos para la introducción de esta temática en el trabajo de instituciones que durante la guerra se habían concentrado más bien en la defensa de los derechos humanos fue el caso de la lucha laboral en la maquila Mandarin en 1996. A partir del apoyo a los sindicalistas despedidos se formó el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GIMES), en el cual participaron instituciones como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA o la Oficina de la Tutela Legal del Arzobispado. Véase, Norma Molina y Aída Carolina Quinteros, “El Monitoreo Independiente en El Salvador”, R. Koepke, et.al. (comp.), *op.cit.*, 2000, pp. 82-99, p. 92.

⁵¹⁴ Entre 1998 y 2004 el número total de afiliados sindicales aumentó en un 12 por ciento, de 120,288 afiliados a 135,060. Pero este crecimiento no benefició a los sindicatos de izquierda: en este lapso de tiempo los afiliados a la CUTS (Confederación Unitaria de Trabajadores Sindicales), conformada por los sindicatos cercanos al FMLN -FUSS, FESTES (Federación de Sindicatos de Trabajadores de El Salvador), FEASIES (Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador) y FENASTRAS- disminuyeron en un 36 por ciento, de 8,701 a 5,521 afiliados. Elaboración propia con base en las siguientes fuentes: 1998: CENTRA, *Situación de las Organizaciones Sindicales en El Salvador*. Documento de Investigación, San Salvador, CENTRA, 1999; 2004: Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, disponible en línea: www.mtps.gob.sv/imagenes/estadisticas/2004/Modulo3/CUADRO_3.13.2.pdf (consultado en mayo 2007). Con respecto al empleo en el sector público, entre 1994 y 2002, por medio de decretos presidenciales, reformas legales y, por último, la militarización de los puertos y aeropuertos (2001) fueron despedidos un total de 40 mil empleados públicos, muchos de los cuales sindicalistas. Véase, O. Martínez Peñate, et.al, *op.cit.*, 2003, pp. 64-66.

podieron aprovechar las gestiones en torno al Plan de Transferencia de Tierra, los programas de desarrollo local y la condonación de la deuda agraria para la construcción de alianzas que incluían también a ex combatientes de las Fuerzas Armadas y productores cercanos a ARENA, afectados por la deuda agraria. Pero también estas formas de movilización política se caracterizaron por su particularismo que no lograba obtener una adhesión social más allá de los grupos inmediatamente afectados. Casos emblemáticos fueron las privatizaciones de las empresas estatales, como la banca, la empresa de teléfonos ANTES, las empresas distribuidoras de energía eléctrica, los ingenios azucareros y los puertos- donde la resistencia a la privatización fue realizada casi exclusivamente por los sindicatos afectados y cesó cuando los hechos estaban consumados.⁵¹⁵

Esto cambió a partir del plan gubernamental de privatizar después del Sistema de Pensiones en 1997, también los servicios de salud. Las movilizaciones en torno a las huelgas de los trabajadores y médicos del Instituto del Seguro Social, que se gestaron a partir de 1997 –año en el que se funda el sindicato de médicos SIMETRISSE-, llevaron a la mayor movilización social del periodo de la posguerra que da cuenta de un nuevo eje de conflictividad sociopolítica con nuevos actores sociales. Hubo dos momentos clave: la primera huelga en 1999/2000 y la segunda huelga que duró de septiembre 2002 a febrero 2003. Los protagonistas del movimiento fueron los sindicatos de las instituciones amenazadas por la privatización y las redes de organizaciones civiles –la Alianza Ciudadana en contra de la Privatización- que jugaron un papel central tanto en la “puesta en marcha” como en el desenvolvimiento posterior del movimiento antiprivatizador.

La combatividad del sindicalismo del Seguro Social en contra de las políticas económicas neoliberales del gobierno de Francisco Flores fue posible, por una parte, por la relativa seguridad y estabilidad laboral que existe en este sector y que se refleja en la construcción de sindicatos relativamente fuertes, comparado con el sector privado. Por otra parte, el alto prestigio social de los trabajadores y médicos del sector salud les permitió usar formas de lucha laboral más radicales que los empleados del sector privado. Sus demandas giraban en torno a dos ejes: un eje gremial de defensa de prestaciones laborales y contratos colectivos y otro eje político-social que enfatizaba la necesidad de rechazar los proyectos de privatización para asegurar el acceso de la población pobre a la salud.

⁵¹⁵ Véase, Luis Armando González y Roxana Martel, “Pobreza y sociedad civil: el caso de El Salvador”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LVIII, No. 659, septiembre de 2003, pp. 881-904. Los acontecimientos y conflictos sociopolíticos más relevantes entre 1996 y 1997 se reconstruyeron con base en las Cronologías que se encuentran en la revista *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LI, No. 570 abril de 1996 hasta Año LII, No. 588, octubre de 1997.

La superación de una lógica exclusivamente gremialista por sindicatos puede considerarse además como una respuesta a las estrategias gubernamentales de criminalizar la protesta sindical señalando que éste actuaba en función de intereses particulares o partidistas. Para contrarrestar el discurso de desprestigio, los sindicatos elaboraron un contradiscurso que enfatizaba la defensa del interés general de la población. El punto de partida de este discurso es la premisa que existen servicios que por ser estratégicos para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población pobre no deben ser privatizados. En este sentido los sindicatos del Seguro Social justificaron su huelga sólo en parte con las necesidades gremiales (aunque esto también estaba presente), sino con el derecho a la salud para todos los salvadoreños y salvadoreñas. A partir de centrar el debate en este derecho básico, los actores del movimiento contra la privatización pudieron criticar no sólo el proceso de descapitalización de las instituciones públicas y demandar una mejor provisión de servicios médicos, sino cuestionar el mensaje central del discurso oficial según el cual la estrategia más adecuada para asegurar el derecho a la salud era la apertura del sector a la inversión privada.

La presión social a favor de un debate público obligó al gobierno a instalar comisiones o consejos en donde se debería debatir el futuro de las instituciones públicas. Pero el Consejo de Reforma del Sector Salud, convocado por el gobierno de Francisco Flores después de la primera huelga en 1999 recopiló cinco propuestas de privatización sin tomar en cuenta las propuestas sindicales. Esta falta de atención oficial agudizó el conflicto entre sindicatos, autoridades del ISSS y gobierno. La segunda huelga que estalló en septiembre de 2002 –y que convocó en una marcha en San Salvador a 200,000 personas, la mayor manifestación en El Salvador desde la Marcha de la Unidad en enero de 1980- parecía finalizar con una victoria del movimiento contra la privatización, al lograr la aprobación de un decreto parlamentario que prohibiría la privatización del sistema de salud. Pero un cambio en las alianzas parlamentarias llevó a la derogación del decreto por ARENA y otros partidos de centro-derecha. Esta situación evidenció que la correlación de fuerzas en el campo político era desfavorable para el movimiento en contra de la privatización, debido al control de ARENA sobre las instancias estatales.⁵¹⁶

Desde entonces, el tema de la privatización del sistema de salud ha sido un objeto de permanente disputa entre las fuerzas políticas que delimita fronteras entre fuerzas pro-gubernamentales y opositores en el campo político salvadoreño. La carga simbólica del conflicto se evidenció una vez

⁵¹⁶Marco Antonio R. Cativo: *Reforma del Sector Salud. Una necesidad impostergable para la Nación*, Comunicado del STISSS, mimeo., San Salvador, agosto del 2001.

más en la campaña electoral del 2004: el candidato a vicepresidente de la fórmula del FMLN era Guillermo Mata, el dirigente del sindicato de médicos SIMETRISS. Por otra parte, la compañera de fórmula del candidato de ARENA era Ana Vilma Albañez de Escobar, que había sido Directora del Instituto del Seguro Social durante la huelga de 1999/2000.

En este contexto de incipiente movilización política se reactivó una estrategia de las organizaciones populares que denominamos “aprovechar la ocasión”, es decir, usar los conflictos laborales de otros sectores como punto de partida para luchas propias, para plantear demandas sociales y políticas, ejercer una mayor presión política y entrelazar de esta manera conflictos particulares.⁵¹⁷ Esta lógica de acción se expresó en alianzas organizativas como el MOLI en 1999, la CSTS en el 2000/2001⁵¹⁸ y también en la Alianza Ciudadana en contra de la Privatización en el 2002, una red de organizaciones sociales y ONGs que se conformaron para apoyar la movilización de los sindicatos del Seguro Social. Todas estas iniciativas tenían como objetivo expreso formar alianzas multisectoriales para fortalecer luchas particulares y resolver por este medio la dispersión de los movimientos sociales. Por ejemplo, a partir de las huelgas del sector salud se conformó una alianza entre sindicalistas, la Alianza Ciudadana contra la Privatización y la bancada legislativa del FMLN que apostó en el 2004 a la unificación de fuerzas –expresada en la fórmula presidencial de Schafik Handal y Guillermo Mata- a un cambio de las correlaciones de fuerzas en el campo político por medio de una victoria electoral del FMLN.

El hecho que, desde una posición de distanciamiento y poco vínculo histórico con el FMLN, porque SIMETRISS se fundó en 1997 y no tenía vínculos históricos con la izquierda revolucionaria, existan actores sociales que apuestan a una alianza con la izquierda política, pone de manifiesto el profundo anclaje de una lógica de acción en la cual los actores sociales buscan en el vínculo político, por un lado, un recurso para cambiar las correlaciones de fuerzas desfavorables en el espacio social y el campo político y, por el otro, un medio para superar la dispersión organizativa aunque ésta tiene –paradójicamente- sus orígenes en los conflictos partidistas.

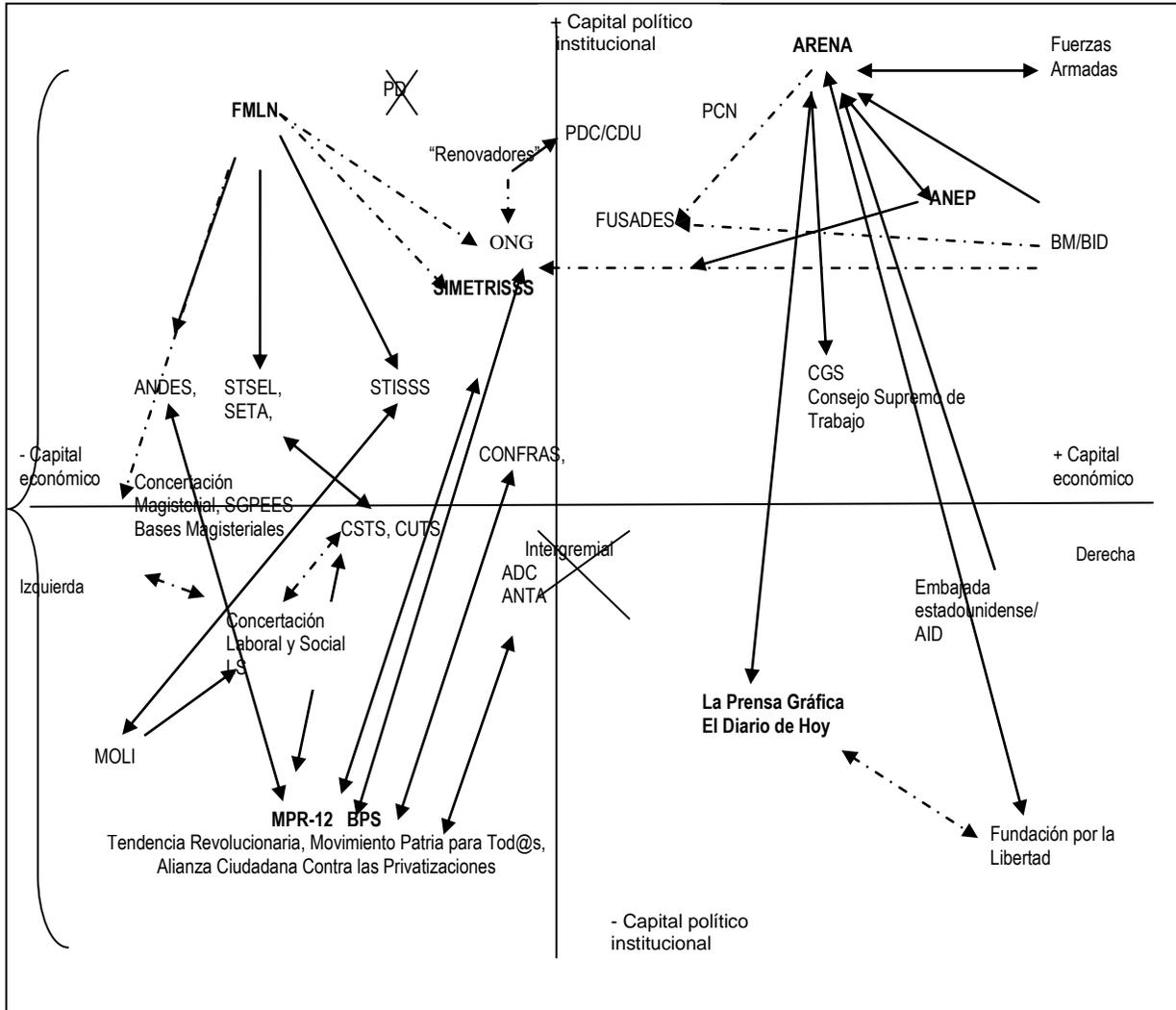
El diagrama 4.1 ilustra esta paradoja al visualizar la dispersión organizativa y los vínculos entre actores: por una parte puede observarse que en el espacio de la política institucional ahora hay más

⁵¹⁷ Por ejemplo, durante un paro llevado a cabo en el Ministerio de Salud en 1993, ANDES y otras asociaciones de empleados públicos aprovecharon este conflicto laboral para también realizar paros, mostrar su presencia y dar más énfasis a sus demandas particulares. Véase, *Cronología*, Estudios Centroamericanos, San Salvador, Año XLVIII, No. 539, septiembre de 1993, pp. 890-894.

⁵¹⁸ MOLI: Movimiento de Organización Laboral Integrada. CSTS: Coordinadora Sindical de Trabajadores Salvadoreños.

agentes de izquierda que antes y durante la guerra civil, lo cual da cuenta de los procesos de integración política que se hicieron posibles a partir de los Acuerdos de Paz. En cambio, en el espacio que corresponde a los actores de la derecha ha habido pocos cambios. Como puede verse, la fuerza de ARENA se basa en sus múltiples vínculos con actores nacionales del aparato estatal, como las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil –por ejemplo, ANEP, FUSADES, Fundación por la Libertad, FENASTRAS- y de los medios de comunicación –la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy-. También está relacionado con actores internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo que por medio de la política de créditos intervienen en las políticas públicas del Estado salvadoreño. Por otra parte, se observa que las organizaciones sociales de la Democracia Cristiana –organizadas en la UNOC- desaparecieron o se movieron hacia la izquierda, lo cual contribuyó adicionalmente al debilitamiento del PDC como opción partidista cuya influencia actual se reduce prácticamente a una presencia mínima en la Asamblea Legislativa.

Diagrama 4.1 Actores del campo político salvadoreño 2004



Elaboración propia.

En la izquierda del campo político destaca la posición central del FMLN, que cuenta con una porción importante de capital político institucionalizado –es el partido de oposición más fuerte– con el capital simbólico de haber encabezado la lucha en contra del Estado autoritario y con el capital social de mantener vínculos con diversos actores de la sociedad civil. El diagrama también visualiza que las escisiones del FMLN, que conformaron el Partido Demócrata y los grupos de “renovadores” que se desprendieron en el contexto de las luchas fraccionales de la segunda mitad de los noventa, no pudieron revalorizar su capital político porque no pudieron conservar el capital social y simbólico que confiere pertenecer al FMLN.

Otro aspecto que llama la atención son los cambios de posición de las organizaciones populares que formaron parte de la alianza revolucionaria. Puede verse, por ejemplo, que organizaciones sindicales del sector público, como STSEL (refundado después de 1991), ANDES, STISSS y asociaciones de cooperativas como CONFRAS, han podido conservar su posición en el campo político gracias al reconocimiento legal que se hizo posible con la pacificación; en cambio, organizaciones que habían sido relevantes antes y durante la guerra civil –como la federación comunista FUSS o la UNTS– “desaparecieron”, lo cual quiere decir que sus actos ya no tienen impacto en el campo político o que su presencia se “diluyó” en alianzas más amplias. Hay nuevos actores, como las ONGs, el sindicato de los médicos SIMETRISSS o las nuevas asociaciones de los maestros que surgieron de escisiones de ANDES (SGPEES, Bases Magisteriales y Concertación Magisterial). Las coaliciones de organizaciones campesinas y de trabajadores agrícolas como CONFRAS o ANTA pueden considerarse nuevos actores que pudieron, entre 1990 y 1997, perfilarse como voceros de las demandas campesinas, primero al enfrentarse a la reversión de la Reforma Agraria y, después, al impulsar el Programa de Transferencia de Tierras y buscar un acuerdo político con el gobierno a favor de la condonación de la deuda agraria.⁵¹⁹

También han surgido nuevas organizaciones “de hecho”: asociaciones, centrales y coordinadoras. Algunos ejemplos que dan cuenta de las diversas modalidades de organización posibles en el espacio político informal son la coordinadora sindical CSTS y la Concertación Laboral y Social CLS. La CSTS es una coordinadora de sindicatos anti-gubernamentales que agrupa a sindicatos del sector de servicios públicos, del sector manufacturero y de la maquila, así como a trabajadores del sector informal, para promover acciones en común que conduzcan con el tiempo a la unidad orgánica del movimiento sindical salvadoreño. Paralelamente surgió la CLS, concebida por sus fundadores como un espacio de formación política y una alianza amplia que incluye, además de sindicatos, organizaciones estudiantiles, comités eclesiales de base y asociaciones comunitarias. El factor que aglutina a la Concertación es la afinidad política que se expresa en objetivos compartidos: la lucha contra las privatizaciones de las instituciones públicas, la resistencia al “terrorismo neoliberal”, la lucha por incrementar el salario mínimo, en contra de las medidas de

⁵¹⁹ ANTA: Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios; ADC: Alianza Democrática Campesina conformada en 1990 principalmente por las federaciones de cooperativas beneficiadas por la Reforma Agraria. Algunos de los integrantes más relevantes son: ANTA, FESACORA, COACES, CONFRAS, FENACOA, UCS.

flexibilización laboral o la búsqueda de vínculos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los secretariados profesionales internacionales.⁵²⁰

El mapa político de las organizaciones populares y partidos políticos, esbozado en el diagrama, permite visualizar la dispersión organizativa: pocas organizaciones -como CONFRAS o la CSTS (como central sindical “de hecho”)- tienen la capacidad de fungir efectivamente como voceros colectivos de los grupos representados que formulan posicionamientos políticos con base en intereses sectoriales. Solamente algunas organizaciones -por ejemplo, STISSS y SIMETRISSS durante las movilizaciones en contra de la privatización del Seguro Social- han logrado transformarse en ciertas coyunturas de voceros sindicales en voceros generales de una amplia alianza en contra de la política gubernamental. Por otra parte siguen existiendo alianzas entre organizaciones populares con identidades político-partidistas compartidas. El principio de diferenciación que constituye las alianzas es el grado de aproximación o distancia con respecto a la actual dirección del FMLN.

Esto se debe a que las coordinadoras y alianzas del movimiento popular, formadas a partir del 1992 tendieron a ser coyunturales: en la coyuntura de las elecciones de 2003 y 2004, caracterizada por el éxito electoral del FMLN, se formaron cinco alianzas de organizaciones sociales que presentaron su agenda política ante el FMLN. A partir del compromiso público de Schafik Handal de incorporar las demandas sectoriales en su programa de gobierno, afirmando simbólicamente este compromiso con la celebración pública de acuerdos con alianzas de organizaciones populares, sus dirigentes declararon su apoyo electoral a favor del partido de izquierda. Lo que llama la atención en la descripción de cada una de las cinco alianzas son los referentes históricos a organizaciones y movimientos de los años setenta y ochenta:

- Movimiento Popular de Resistencia-12 de Octubre (MPR-12): Izquierda vinculada a las extintas FPL y sectores campesinas que aglutina el mayor número de activistas. Las organizaciones que lo conforman son organizaciones que surgieron con el movimiento de los desplazados (CORDES, CRIPDES), representantes de las cooperativas (y organizaciones campesinas agrupadas en la Coordinadora de Comunidades Rurales de Chalatenango (CCR).
- Bloque Popular y Social (BPS): Izquierda “ortodoxa” vinculada al ala comunista del FMLN. Está conformado por ANDES 21 de junio; STISSS, la organización juvenil Bloque Popular Juvenil, la asociación campesina ANTA, STCEL.

⁵²⁰ Véase, O. Martínez P., *op.cit.*, 2003, pp. 118-121; Entrevista con Víctor Aguilera, Coordinador de Concertación Laboral y Social y miembro de la CSTS, San Salvador, 31 de agosto de 2002. Los objetivos de Concertación Laboral y Social fueron retomados del documento interno *Agenda Político-social de Concertación Laboral y Social “Primero de Mayo”*, mimeo., s/1, 2002.

- Tendencia Revolucionaria (TR): Izquierda no partidista vinculada a las fracciones comunistas y de Resistencia Nacional que se salieron del FMLN, intelectuales y ambientalistas. La conforman organizaciones como las ONGs Centro Salvadoreño de Tecnología Apropriada (CESTA, fundada en 1980), Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Acción para la Salud en El Salvador (APSAL) y Las Dignas, además de la organización estudiantil Brigadas Revolucionarias de Estudiantes de El Salvador (BRES), la CSTS y SIMETRISSS.
- Alianza Ciudadana contra las Privatizaciones: Es la izquierda no partidista vinculada a la extinta FPL y grupos del sector salud. Participan la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (ANTMSPAS).
- Movimiento Patria para Tod@s (MPT): Vinculado a la extinta Resistencia Nacional agrupa a sectores académicos, estudiantiles, organizaciones del movimiento popular y comunidades campesinas. Participan en él el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), REDES, Colectivos estudiantiles de diversas facultades de la Universidad de El Salvador y organizaciones locales de comunidades campesinas en Guazapa, Usulután, La Libertad, Morazán y Victoria.⁵²¹

Este mapeo de posiciones políticas permite visualizar la lógica de acción que rige a los actores con menos capital político institucionalizado y que se caracteriza por hacer y deshacer alianzas de acuerdo a necesidades coyunturales pero siempre dentro de las opciones que permiten las afinidades ideológicas en un marco caracterizado por la polarización política entre izquierda y derecha. Estas prácticas no son sólo herencias de la guerra, sino se deben a la falta de espacios institucionales donde las organizaciones pueden participar e incidir en los procesos de toma de decisiones. La única instancia existente es el Consejo Supremo del Trabajo, que es hegemonizado por el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresariales y las grandes federaciones sindicales de derecha. La alineación política con el FMLN puede considerarse, por lo tanto, no sólo como una respuesta a la fragilidad de identidades colectivas –especialmente las identidades sectoriales– sino también como una estrategia de aprovechar los vínculos históricos y redes sociales para mantener presencia en el campo político, aunque sea mediada por una instancia partidista.

4.4. “Fuera de lugar”: Las prácticas de militancia en el campo político posbélico

La reconstrucción de los procesos políticos y sociales permitió visualizar los cambios en las condiciones sociales y simbólicas de posibilidad que afectaron la movilización política y la acción colectiva en la década de los noventa y que definimos como cierre neoliberal del campo político. En esta última parte del capítulo nos dedicamos a presentar, a partir del análisis de los relatos de los

⁵²¹ Debemos esta descripción detallada de las organizaciones que integran cada una de las cinco alianzas a las explicaciones de Marco Antonio Cativo en una conversación en las instalaciones del IEJES en San Salvador en marzo de 2004 y un correo electrónico enviado posteriormente.

militantes los efectos de estas transformaciones sobre las prácticas de la militancia y las estrategias que los actores emplearon para enfrentar la nueva situación.

Para poder interpretar los cambios en la forma de hacer política que se expresan en los relatos de los militantes recurrimos a dos conceptos: la noción de no-lugar y las estrategias de reconversión. Como señalamos en el primer capítulo, empleamos el término “no-lugar”, utilizado por Marc Augé para describir las transformaciones de las identidades en el mundo moderno, para pensar los efectos de la pérdida de las certezas ideológicas y del referente partidista sobre la identidad militante. Para Augé los “no-lugares” son puntos de tránsito y ocupaciones provisionales, donde los agentes se encuentran en permanente movimiento,⁵²² lo cual es una adecuada descripción de la experiencia de los militantes después de la desmovilización de las estructuras guerrilleras en 1992 y la búsqueda de nuevos referentes políticos e identitarios. Por otra parte, retomamos el concepto de “estrategias de reconversión social” de la propuesta conceptual de Bourdieu para reconstruir e interpretar las líneas de acción desarrolladas por los militantes para mantener o mejorar su posición en la estructura de las relaciones de poder en el campo político,⁵²³ y que devinieron en nuevas formas de acción política y modalidades de organización social. La identificación de estas estrategias de reconversión permitió visualizar uno de los cambios principales ocurridos en los mundos de la militancia: la particularización de la representación de intereses colectivos –especializándose en la defensa de grupos específicos- y la tecnificación del activismo social impulsado por las ONGs y el desgaste de la militancia activa a partir del desencanto y la necesidad de retomar trayectorias individuales interrumpidas por la guerra.

El desgaste de la militancia

Las entrevistas permiten observar que la desmovilización de las organizaciones político-militares abrió en las trayectorias individuales, un periodo de “pasaje” de una posición a otra, que podríamos denominar un “no-lugar”. Si este momento fue experimentado como inicio de la marginación política o como una apertura de nuevas opciones de acción dependía de las circunstancias de cada entrevistado, pero indistintamente implicó para cada uno de ellos romper con las prácticas de participación y representación que habían sido funcionales durante la guerra.

El periodo crucial, que preparó el periodo de búsqueda de nuevas definiciones y referentes, no es 1992 sino 1989/1990 porque entre estos años se acumularon una serie de acontecimientos nacionales

⁵²² Véase, M. Augé: *op.cit.*, 2004, p. 81ss.

⁵²³ Véase, P. Bourdieu, *op.cit.*, 2002, p. 122ss.

e internacionales que marcaron el final de una época: en este lapso ganó la presidencia ARENA, la Ofensiva “final” del FMLN no resultó en una insurrección popular, en diciembre ocurrió la intervención estadounidense en Panamá para desmontar el gobierno del General Noriega, y en febrero de 1990 el FSLN perdió las elecciones en Nicaragua. Sorprendentemente, en las entrevistas, el tema de la elección presidencial no ocupa un lugar central en los relatos de los militantes, comparado con temas como los preparativos para la ofensiva del FMLN, el incremento en la violencia estatal o el momento de la ofensiva propiamente tal. En este sentido la siguiente cita, tomada de la entrevista con Maria, es ilustrativa porque demuestra la poca relevancia que, desde la perspectiva de los activistas, tenía el proceso electoral. Si comparamos esta percepción con la centralidad que adquirieron los ciclos electorales para las estrategias políticas del FMLN, después de su inserción a las instituciones representativas, nos podemos dar cuenta de la distancia que separa ambas visiones sobre las vías legítimas para obtener un cambio en la política y las instituciones estatales.⁵²⁴

¿Cuándo ganó ARENA por primera vez, tú estuviste en El Salvador? ¿Qué pensaron ustedes cuando ganó?

Lo que pasa es que en ese tiempo... a ver... [*silencio, intenta recordar*] estaba la Democracia Cristiana. Por ejemplo, yo, en ese tiempo estábamos bien metidos en la onda de preparar la ofensiva... Y nosotros pensábamos que había ya un desgaste nuestro de que la gente estaba cansada de la guerra, y pensaban que ya que con eso ya, la guerra se iba a terminar... nosotros lo veíamos en general por allí. Pero también casi ninguno de nosotros votó... fue una elección que se logra con muy poca gente pero que la derecha había retomado... Es que d'Aubisson fue un elemento muy importante porque antes la derecha se había desarticulado, entonces este personaje los agrupó alrededor de él -por esto le han hecho su estatua- ellos agarran fuerza. Entonces él empieza a militarizar [a] la gente, o sea, todo el mundo tiene su ejército privado, los escuadrones de la muerte y él los empieza a organizar para empezar a desarticular a la izquierda. Entonces para ese tiempo ellos ya se habían consolidado nuevamente, la organización. Yo si me acuerdo que para esas elecciones el Frente había llamado a no votar -yo no fui a votar por supuesto- un montón de gentes que no fueron a votar, pero si ganaron ellos... pero como ya estábamos viendo lo de la cuestión de la insurrección: “qué gane él que quiera ganar”⁵²⁵.

⁵²⁴ En enero de 1989 el FMLN lanzó una propuesta de paz en la cual anunció participar en las elecciones de ese año, siempre y cuando éstas se pospusieran seis meses para asegurar una serie de medidas que dieran credibilidad al evento. Prometió reconocer los resultados independientemente del partido que resultara ganador. El gobierno rechazó esta propuesta. Este hecho parece contradecir nuestras afirmaciones solamente si ignoráramos que paralelamente al reconocimiento discursivo de la vía electoral por parte de la Comandancia General, la guerrilla estaba preparando -al menos desde septiembre 1988- las condiciones logísticas para la ofensiva. Según Carlos, la primera fecha programada para la ofensiva fue febrero de 1989, pero que se tuvo que posponer, lo cual demuestra que pese al discurso político de la dirección en el interior de la organización se mantenían las prácticas y convicciones que atribuían poca importancia al proceso electoral y la democracia electoral.

⁵²⁵ Las cursivas son más.

Maria menciona el desgaste de la militancia como un motivo para tener que poner fin a la guerra. Esto, y otras entrevistas, permiten interpretar 1989 como un conjunto de situaciones “límite” que se relacionan con el incremento de la violencia política en el campo y la ciudad, con las detenciones y/o la movilización de las fuerzas clandestinas en el contexto de la ofensiva militar. De los ocho entrevistados, tres pasaron una parte de 1989 en la cárcel, una entrevistada tuvo que desplazarse para evitar que la detuvieran las fuerzas policiales y dos mencionan, que participaron en los preparativos logísticos para la ofensiva.

Cuadro 4.4 El año 1989 en las trayectorias de los militantes entrevistados

Ana	Administración de la empresa quiere cerrar la planta sin pagar una indemnización a trabajadoras. La ocupación de la fábrica por las trabajadoras finaliza con la “toma” de la planta por los cuerpos policiales y la detención de las sindicalistas. Sandra es detenida por “participación en actividades subversivas”. Pasa ocho meses en la cárcel, mientras su madre se encarga de las hijas.
Adriana	En el contexto de la ofensiva, para evitar una detención por los militares, regresa con sus hijos a Suchitoto.
Horacio	Asesor y miembro del Comité Ejecutivo de FENASTRAS, participa en la preparación clandestina de la ofensiva. Sobrevive al atentado a las instalaciones de FENASTRAS en octubre 1989.
Celso	Participa en el entrenamiento de los Comandos Urbanos para la ofensiva. En el transcurso de la ofensiva es detenido y encarcelado hasta enero 1990.
Miguel	Miembro del Comité Ejecutivo UNTS, Presidente de la Fundación para la Autogestión de Trabajadores Salvadoreños (FASTRAS) y de CONFRAS.
Maria	Trabaja en FENASTRAS en la elaboración de proyectos y recaudación de fondos de la solidaridad internacional, participa en estructuras urbanas del Resistencia Nacional. Unas semanas antes de la ofensiva es detenida por fuerzas de seguridad durante varios días. Después de su liberación sale a México.
Daniela	Participación en la asociación sindical, apoyo logístico durante los preparativos y el avance de la ofensiva del FMLN.
Marta	Vive en San Marcos Lempa y está enferma, por lo cual no recuerda mucho de este periodo.

Fuente: Entrevistas.

La acumulación de estas situaciones límite, de responsabilidades y tareas adicionales contribuyó a que creciera la sensación de desgaste entre los militantes y los cuadros políticos, porque los preparativos para la ofensiva, descritos en el Capítulo 3, se llevaron a cabo en un ambiente de desmovilización social, por lo cual quienes llenaron estos huecos en las organizaciones populares fueron los militantes civiles de la guerrilla. Maria describe el desgaste como una sensación que la prolongación de la guerra había agotado posibilidades y opciones de acción:

Mira, en el trabajo, todos los fondos congelados, porque todo el dinero iba para la guerra, entonces no podías inventar proyectos, no podías hacer nada. Todo era nada más con buena

voluntad, ir caminando, ir manteniendo las instituciones, pero más que todo por inercia que porque hubiera algo de vitalidad...

Esta cita ilustra como en las luchas cotidianas se fue desligando el proyecto político de la izquierda, representado discursivamente en los términos de revolución, democracia, insurrección, de las percepciones individuales sobre la posibilidad de “hacer algo” a través de la acción política, es decir, intervenir en la realidad para cambiar algo y reconocerse en estas luchas como sujeto y actor político. Tomando en cuenta que el *habitus* militante incluye la convicción de la necesidad y posibilidad de intervenir en la realidad social por medio de la acción consciente y organizada, sentir que los propios actos ya no provocaban efectos en el campo político, y que los espacios para la participación se iban cerrando, contribuyó a que la militancia como práctica social perdiera significado.

Junto a estas experiencias vivenciales e inmediatas sobre la imposibilidad de cambiar algo en el espacio nacional, la crisis del proyecto ideológico socialista y comunista -representada por algunos entrevistados en imágenes paradigmáticas como la caída del muro de Berlín o el juicio y la ejecución de la pareja dictatorial rumana Nicolae y Elena Ceaucescu- significó una pérdida de referentes y certezas. Esta situación se convirtió en un factor adicional que profundizó el desgaste y la desmoralización después del fracaso de la ofensiva, sobre todo para quienes la motivación ideológica había sido central en su decisión de participar en una organización político-militar:

...para mí fue doloroso, pero doloroso, es la etapa más difícil de mi vida, los años noventa cuando veo, estaba en la cárcel yo, fijáte, que había caído combatiendo, que cuando veo la caída de Ceaucescu ¿verdad? Y salía en televisión que tenía como mil pares de zapatos con puntas de oro la vieja [*Elena Ceaucescu*] ¿verdad? Para mí fue... dije: “¿por qué he luchado yo? quería que se instaurara un sistema socialista que ha fracasado totalmente y que habían zares prácticamente, ese era otro zar”... (Celso)

Con base en el material disponible de las entrevistas, no es posible determinar con exactitud de qué manera la percepción del cambiante panorama internacional condicionó la percepción de los militantes sobre las distintas opciones políticas. Pero es muy probable que la cadena de los acontecimientos nacionales y regionales, que describimos en el apartado anterior, haya confluído con las impresiones en torno a la crisis del proyecto socialista y comunista para reforzar una impresión compartida por la militancia de base sobre la inevitabilidad de ciertos procesos económicos y políticos y la imposibilidad de alcanzar los objetivos políticos trazados

originalmente.⁵²⁶ En este contexto la firma de los Acuerdos de Paz, al poner fin a la guerra, fue considerado un alivio aunque no se incluyera una gran parte de las demandas originales del movimiento revolucionario.

Y en este momento de los Acuerdos de Paz ¿tú estás en el sindicato y en el partido? ... si... ¿Y en el partido qué pasa en este momento?

Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz la alegría que a mí me dio fue que ya no íbamos a estar viendo morir a nuestros compas... porque lo triste que veías era morir a un amigo [sic], a un compañero, aquí a tus pies quedaba y no lo podías ayudar, ahí los dejabas botados, este, eso era como un alivio que ya no íbamos a seguir viendo acabar gente así y por el peligro que nosotros corríamos pero teníamos desconfianza, realmente yo siempre tuve desconfianza de que fueran a cumplir y hasta este momento muchos acuerdos no se cumplieron como se habían pactado... Sí, fue bien emotivo cuando por primera vez la Comandancia General se presentó aquí en el Palacio Nacional ¿verdad? [...] entonces eso nos alegró, pero al mismo tiempo siempre tuvimos desconfianza, siempre durante los Acuerdos nosotros tuvimos desconfianza y ahí hay algunas tesis que se han confirmadas, que por ejemplo, no debimos haber salido demasiado... hasta que se cumplieran los Acuerdos... (Daniela)

Asimismo, hay indicios en las entrevistas que la noción de vanguardia –un elemento identitario central para asegurar la cohesión de la “comunidad virtuosa” de la organización revolucionaria- empezó a vaciarse de sentido ante la evidencia que el FMLN, sobre todo en las ciudades y en las zonas alejadas de sus operaciones, no tenía el apoyo popular que se esperaba. Esta impresión se percibe en los relatos, por ejemplo, cuando se narra que durante la ofensiva la población solamente observaba a los guerrilleros, pero no se sumaba a la lucha, que la gente dejó de involucrarse con las organizaciones sindicales más identificadas con la izquierda o que, durante la primera campaña electoral del FMLN, los activistas percibieron que alguna gente les “tenía miedo”:

¿Y qué pasó con el partido después del 92?, ¿cómo viviste el proceso de transformación en partido político?

Optimista, yo me sentí optimista pero al mismo tiempo fue demasiado costoso, la gente te tenía miedo... votaron unos dos por el partido cuando participamos en el 94, no, no votó mucha gente por el partido y, y la gente le tenía miedo a uno, se metía en las casas, no te dejaban pasar ¿verdad?, porque el partido del gobierno les había metido o les había dicho de que nosotros comíamos niños... ¿verdad?, que nosotros comíamos niños, cosas así por ejemplo, cosas inauditas pero así se las decían y la gente humilde siempre se ha creído cualesquiera afirmación que los gobiernos han hecho se la han creído, prueba de ello es que hoy gane ARENA, con tremenda diferencia, es que todavía hay gente que nos tiene miedo... (Daniela)

⁵²⁶ Los entrevistados recurren principalmente a factores nacionales –la ofensiva, el recrudecimiento de la violencia bajo el gobierno de Cristiani, etcétera- para explicar el desgaste personal y político que ellos sintieron hacia principios de la década de los noventa. Esto no quiere decir que la percepción de las nuevas correlaciones de fuerza en el ámbito internacional no haya jugado un papel en las modificaciones de la subjetividad militante, sino que ésta se articuló con las experiencias vivenciales de los respectivos mundos sociales donde se practicaba el activismo.

Alegría y tristeza, optimismo y desconfianza, alivio y preocupación... éstas son las palabras que representan las sensaciones encontradas vinculadas a la firma de los Acuerdos de Paz. Los militantes entrevistados reconocen que con la integración política del FMLN cambiaron las condiciones para la acción política de la izquierda: la participación abierta en elecciones, la libertad de organización y expresión, así como la posibilidad de gobernar a nivel local -y la expectativa de acceder por la vía electoral al gobierno nacional en un momento no demasiado lejano- fueron nuevas experiencias para activistas cuya socialización política había ocurrido en medio de la persecución política y la guerra civil. Adicionalmente, las modalidades de organización social, como ONGs, cooperativas y proyectos productivos tuvieron un importante auge durante la coyuntura de la reconstrucción y reinserción civil. Pero el cambio fundamental se ubica, sin duda, en el abandono de la organización clandestina -es decir, los colectivos de formación política y las estructuras de mando subordinadas al mando militar y paralelas a las estructuras gremiales- que durante la guerra habían articulado organizaciones político-militares, organizaciones gremiales y ONGs.

Las entrevistas confirman que la desmovilización del FMLN -entendida como desmantelamiento de las estructuras político-militares- afectó no sólo a los miles de combatientes sino también a los militantes clandestinos que habían participado y dirigido las organizaciones populares de la izquierda, e implicó, por tanto, una bifurcación importante en las trayectorias de los militantes. Para construirse una nueva posición en el espacio social y político había que redefinir los vínculos con un partido que estaba en vías de legalizarse, pero donde a la vez las organizaciones político-militares -principales puntos de referencia identitaria de los militantes- se estaban disolviendo. La redefinición, por parte de los militantes, de su vínculo con la organización política fue, por tanto, la otra cara de la construcción de las nuevas estructuras partidistas orientadas a dividir las funciones de representación política, representación gremial y participación social. Este proceso complejo de redefinición de marcos cognitivos y referencias identitarias sucedió paralelamente a otro fenómeno crucial en la reorganización de las relaciones entre los diversos actores políticos: el cierre del campo político posbélico.

El cierre del campo político

En el primer capítulo se definió el cierre del campo político como un proceso de autonomización, expresado en la reducción significativa de agentes sociales cuyos actos tienen consecuencias en el campo porque las condiciones de ingreso al campo político -competencias específicas, capital económico, redes sociales- se convirtieron en obstáculos insuperables para los excluidos. Esto

evidencia también la desvalorización de recursos sociales y simbólicos, así como un cambio en las correlaciones de fuerza. Entre los efectos prácticos del cierre están la desmovilización política de la sociedad, pero también la creciente presión hacia la profesionalización y tecnificación de aquellos que quieren mantenerse como “jugadores” dentro del campo político. La siguiente cita de la entrevista con Manuel ilustra como la profesionalización política se ha convertido en un nuevo principio de diferenciación que opera como un mecanismo de exclusión ante actores que cuentan con saberes prácticos de representación de intereses sociales –“poder leer y escribir de la vida de la gente”-, adquiridos por medio de años de activismo.

Mi mayor parte ha sido el trabajo en el FMLN, el año pasado tuve la oferta de ir como candidato a diputado, yo les dije “no”. “No, voy a esperar un tiempo más”, no porque no tenga las condiciones o porque considero que la gente no me aprecia ¿cómo no? Yo siento mucho aprecio en la gente cuando estamos juntos, pero creo que las condiciones para mí están todavía no adecuadas porque ir a la Asamblea Legislativa, un foro político, donde hay intereses políticos, intereses económicos... todavía quizá no, mi pensamiento no está para estar en un foro como esos ¿verdad? pueda estar en esas condiciones.

¿Y por qué no? ¿Por cansancio?

Una es por cansancio, la otra es por mi capacidad académica ¿verdad? mis conocimientos no son académicos sino que son conocimientos diferentes, poco puedo escribir, poco puedo leer, lo que si puedo leer es la vida de la gente, puedo escribir la vida de la gente, pero no estar en debates sofisticados como lo es en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, Manuel menciona en la misma entrevista que una vez fue diputado por parte del FMLN en la Asamblea Legislativa. La cita ilustra, por tanto, no sólo los nuevos principios de diferenciación sino también el cambio que implicó para las prácticas políticas de la izquierda la integración a las instituciones representativas. En un lapso de diez años la profesionalización política de la izquierda llevó a una mayor valorización de conocimientos formales –expresados, por ejemplo, en títulos académicos- por encima de los saberes prácticos de los líderes sociales. Adoptar las reglas del juego del sistema representativo significó para la izquierda reproducir los principios de diferenciación, basados en la educación formal, que legitiman la exclusión de quienes no cuentan con estas competencias. El hecho que agentes, que lucharon durante más de una década en contra de la exclusión política por razones ideológicas y de clase, aceptaran -o más bien se resignaran- a estos principios de diferenciación da cuenta de la eficiencia de los mecanismos de dominación simbólica en el campo político para erigir barreras y neutralizar expectativas y aspiraciones sociales de los grupos dominados.

El proceso descrito en términos conceptuales como cierre o autonomización del campo político aparece en los relatos de los activistas como una serie de actos y procesos que expresan una

correlación de fuerzas que desfavorece a los activistas pero que ellos aceptan para poder participar en el campo político. La negociación entre gobierno salvadoreño y la dirección del FMLN para definir las condiciones de la firma de los Acuerdos de Paz anunciaba la marginación política de los representantes de las organizaciones populares, al ser tratado como un asunto entre actores políticos y actores militares que excluye el conjunto de la sociedad. Solamente en algunos temas – como el tema de la distribución de tierras y el Programa de Transferencia de Tierra- el comité de negociación del FMLN consultaba a sus militantes (dirigentes campesinos y líderes comunitarios) en las organizaciones campesinas.

Pero en el caso de los sindicatos, el desenlace del Foro de Concertación Social y Económica afectó de manera importante la presencia política de los representantes sindicales. Aunque la instalación del Foro formó parte de los Acuerdos de Paz, el bloqueo empresarial y gubernamental junto a la falta de atención por parte del FMLN, en plena preparación para participar en las elecciones de 1994, contribuyeron al fracaso del mismo. Como demuestra el relato de Celso, la estrategia gubernamental y patronal residía en prolongar el Foro sin llegar a acuerdos con los sindicatos, contribuyendo con esto a la dispersión de la alianza sindical de la Intergremial. En retrospectiva también es posible observar que la propuesta económica de los sindicatos de la UNTS y la UNOC retomaba la propuesta desarrollista de revitalizar la industria nacional y el Sector Reformado, no tomando en cuenta que los sectores económicos dominantes ya habían apostado a la liberalización del mercado y a la inserción productiva y financiera en los circuitos económicos internacionales:

Con eso se vino el Foro de Concertación Económica, o sea en 92... entonces ahí, en la UNTS elegimos a dos compañeros, [...], porque había dos representantes por gremio, dos de AGESPYM, que terminaron siendo del gobierno, dos de la UNOC, dos de la UNTS, dos de CGS y dos más... ellos eran del gobierno ¿verdad?, así que estaban en minoría, los de la UNOC y nosotros, que éramos los que estábamos con la izquierda prácticamente, a esas alturas prácticamente la UNOC se había vuelto como izquierdista ¿verdad? para enfrentar a Cristiani -porque era un engendro de la democracia cristiana ¿verdad? pero de ahí hacían cuerpo con nosotros- nosotros cuatro enfrentábamos a los otros seis y enfrentábamos a la empresa privada y [*risas*] enfrentábamos al gobierno, o sea que estábamos en una total desventaja, horrible... y esa correlación de fuerza desfavorable fue la que no permitió que el Foro se mantuviera porque nosotros decíamos una cosa, aquellos iban a decir otra, y eran tan, tan, tan cínicos y tan sinvergüenzas los dirigentes, que una vez un dirigente, Amador Pérez Marroquín, que era un dirigente gremial ¿verdad? de obreros ¿verdad? le dice al de la ANEP “¿cuándo me van a pagar el local pues?”, o sea, presionó ahí en el Foro para que le dieran el cheque de pagar la planilla de todos los que estaban detrás de él, más el local, el local del sindicato... [...] así, entonces había una correlación desfavorable, tanta pues que el Foro fracasó ¿verdad? En el Foro se formaron mesas, la mesa industrial, la mesa comercial, etcétera, varias mesas, a mí me tocó ir a la mesa industrial, ahí estaba la pequeña empresa que es el Ministro de Hacienda que está hoy; ahí estaba el Ministro de Economía, por el gobierno estaba el Ministerio de Economía y sus asesores pues ¿verdad? por el lado de los gremios estaba FENASTRAS y como FENASTRAS era de la RN, a mí me dijeron “vos, anda

a apoyar”, yo era como el asesor de FENASTRAS ¿verdad?, entonces este, les hicimos una propuesta de desarrollo industrial ¿verdad?, pero prácticamente esas mesas eran como para estar jugando con nosotros ¿no?, y ahí estaba por la empresa privada, por la ANEP estaba un representante de la ACI, que es la Asociación de Compañías Industriales [...] sobre nuestras propuestas trabajaron ¿verdad? porque nosotros trabajamos una propuesta de desarrollo industrial del país pero que en el capítulo introductorio se entrampó, ahí se entrampó y ahí estuvimos reuniéndonos, nos daban comida, el Ministerio de Economía y para empezar, éramos el ejemplo de las mesas, porque ninguna otra mesa funcionaba y a mi criterio, estaban entrampados ... [...]

Nos planteábamos una dislocación o una inserción geográfica de la industria ¿verdad?, que no estuviera concentrada en San Salvador y que no utilizara tecnología, tendría que ser la tecnología apropiada ¿verdad? y que se montara un centro de desarrollo industrial, de investigación, pero a veces yo siento que era un poco idealista porque el imperio tampoco te va a soltar la investigación, te la va a soltar así porque no más, o va a dejar prosperar un centro de desarrollo y de investigación en un país... nosotros no proponíamos Zona Franca ¿verdad?, sino que polos de desarrollo, pero ellos Zonas Francas han puesto y han desconcentrado [...] Proponíamos que las fábricas de agua, de la energía siempre fueran del Estado, pero además del Estado, que fuera que el Estado tuviera este, una fábrica de calzado, una fábrica de ropa ¿verdad? y bancos ¿verdad? y también proponíamos, de las cosas que me recuerdo que proponíamos ... que se reactivara el instituto como de alimentación básica del pueblo ¿verdad?, que el Estado manejara como industrias este, de alimentación ¿verdad? Eso me recuerdo de los debates que tuvimos con FENASTRAS de cuáles eran las necesidades de este pueblo ¿verdad? Y que se instalaran en las zonas más pobres, como nosotros de ahí veníamos, de lugares como por ejemplo el norte de Chalatenango, el norte de Morazán, donde había estado la guerrilla y nosotros queríamos que estuvieran esas fábricas, para que de esos lugares tan empobrecidos tuvieran trabajo digno... No se hizo nada, pusieron fábricas en Santa Ana, en San Miguel, en Cabañas, pero no en donde nosotros proponíamos ¿verdad? en los pueblos donde estábamos nosotros, o sea, eso lo que el aporte que hicimos en el Foro, de ahí el Foro duró unos ¿qué será?, unos seis meses... se quebró, se desintegró, no se logró nada.

Si el fracaso del Foro fue un factor “exógeno” que aceleró la dispersión y marginación política del movimiento sindical en general, los conflictos partidistas y las escisiones fueron factores endógenos que incidieron en la percepción militante sobre la autonomización del campo político después de 1994. Según ellos, la salida de fracciones y grupos políticos del FMLN contribuyó a la fragmentación del movimiento popular organizado porque se rompieron las redes partidistas que habían articulado la acción sindical más allá del espacio laboral. Sobre todo en el movimiento sindical, donde la identidad partidista había cohesionado a grupos de activistas de distintos centros de trabajo, la dispersión de la alianza revolucionaria –en 1994 la salida de Resistencia Nacional, posteriormente los desmembramientos de pequeños grupos de las FPL y del PC, en el contexto de los realineamientos internos del FMLN–, implicó que desaparecieron los vínculos intersindicales. Celso describe el efecto práctico de este proceso sobre el sindicalismo de la administración pública

con la frase que “cada quien *[está]* velando por su santo”, es decir, cada grupo gremial empezó a defender y representar sólo los intereses y demandas específicos de sus agremiados.

La organización que más movimiento sindical tuvo fue la RN... Si, fijáte entre todas juntas el PC y las FPL no hacían lo que nosotros teníamos entonces en el movimiento sindical como en el movimiento obrero ¿verdad? las FPL fue fuerte en el sector campesino ¿verdad? en el sector campesino, pero el movimiento sindical fue bien débil, sólo tuvieron una federación con unos como cinco o diez sindicatos que le pusieron FEASIES, lo mismo la FUSS –los del Partido Comunista- que si tenía doce sindicatos tenía bastante... mientras que la FENASTRAS tenía sindicatos de industria que tenían hasta en diez industrias ¿verdad? [...] o sea, cuando nosotros nos vamos saliendo ¿verdad? aquellos van perdiendo [...] el partido se nos deshizo, desapareció y no hay nada que nos agrupe que nos nuclée [sic.], andamos todos dispersos, y hay una atomización horrible en el movimiento sindical, ahorita, *cada quien velando por su santo*⁵²⁷...

Algunos de los entrevistados que acompañaron la salida de Resistencia Nacional o ERP del FMLN, recuerdan la gran desilusión que produjo el alineamiento de sus dirigentes con ARENA. Esto llevó, para algunos, a un distanciamiento permanente del FMLN y del activismo político-partidista, otros solicitaron después de un tiempo nuevamente su ingreso al partido y volvieron a participar en las actividades partidistas. Los entrevistados señalan las dificultades que significó retomar la trayectoria partidista después del rompimiento de Resistencia Nacional y el ERP con el FMLN, debido a la desconfianza que otros miembros del partido expresaron en contra de ellos. Incluso en estructuras que formalmente estaban alejadas del partido, como las estructuras sindicales de la UNTS, la diferenciación partidista marcaba la pauta:

El partido al que yo pertenecía rompió con el FMLN en el 94, tuve que botar de la UNTS aunque los daneses que mantuvieron a la UNTS llegaron en 1995 a buscarme para que volviera yo a la UNTS... ellos me iban a pagar, que renunciara al Ministerio de Educación que ellos me iban a... yo pasaba a ser como un empleado del gobierno de Dinamarca ¿verdad? dirigiendo a la UNTS, porque vieron eso en el 94, eso se vino a pique ¿verdad? y como que los daneses también miraban el informe, porque yo fui a Dinamarca ¿verdad? miraban el informe de la UNTS porque yo dejé el proyecto [...] pero les dije que no, como ya yo no sentía respaldo político ¿verdad?, mi partido se había salido del FMLN y ahí seguía la gente del FMLN en la UNTS iba a llegar sin respaldo político, más que el respaldo económico de Dinamarca... pero que siempre yo iba a sentir que la gente del PC me iba a boicotear, que la gente de las FPL me iba a boicotear, que la gente del PRTC me iba a boicotear, entonces yo iba a estar solo. Me ofrecieron un buen dinero pues, no dejó de tentarme, era como tres veces lo que gano aquí en el Ministerio de Educación ¿verdad? pero les dije que lo lamentaba mucho, que yo ya no me iba a sentir bien ahí (Celso).

Una estrategia para neutralizar el efecto de los conflictos partidistas sobre la trayectoria en el campo político fue la búsqueda de otros referentes políticos. Esto puede observarse con mucha

⁵²⁷ Las cursivas son más.

claridad en la trayectoria de Adriana: para ella la autonomización del campo político significó la oportunidad de iniciar una carrera política local, independiente del partido.

Adriana y Manuel: Perspectivas contrastante sobre el cierre del campo político

Adriana inició su carrera como política local en Suchitoto en 1994, aunque una serie de sucesos y movimientos previos prepararon las condiciones para esto. En 1989 ella regresó a Suchitoto, para constituirse en líder comunitaria de la organización local de repobladores y enlace clandestino con la guerrilla en el Volcán Guazapa. En 1992 ella fue nombrada representante de Resistencia Nacional para gestionar, ante la Comisión de Tierra –organizadora del PTT-, la transferencia de tierras para los excombatientes de su municipio. La capitalización de las redes sociales y el prestigio adquirido como activista y líder comunitaria, durante los años de la guerra, se manifestó en las elecciones municipales de 1994, cuando Adriana formó parte de la planilla del FMLN e ingresó al Consejo Municipal como concejal suplente. Ella valora este primer cargo público como un “aprendizaje” para ella y todo el grupo de militantes que, por primera vez, ocuparon puestos de gobierno. No se puede subestimar la novedad de esta experiencia para agentes, excluidos históricamente del ejercicio político por razones de clase, de género y de ideología, y para quienes se abrió un espacio institucional de participación política. ¿Qué significaba este proceso de aprendizaje? Antes que nada la adquisición de nuevas competencias que acompañaba la reconversión de una militante contestataria a funcionaria pública de un gobierno local. Esto significaba incorporar nuevas prácticas y códigos de representación y participación política, propios de un sistema político liberal. Adriana narra su reconversión de la siguiente manera:

Una de las primeras cosas cuando llegamos, yo bien recuerdo, era que sabíamos que toda la gente que estaba ahí, los empleados que había en esa alcaldía eran gente de la derecha, entonces llegando ahí lo único que pensamos fue “vamos a quitar a toda esta gente que es derecha y vamos a poner gente que, que sí se identifica con el movimiento de la izquierda” y intentamos hacerlo pero no, como no sabíamos que eso no lo podíamos hacer y cuando empezamos a ver el Código Municipal a leer, a leer la documentación y a saber que los empleados municipales tienen organización, y que hay gente que uno no puede quitar así por así y entonces el tener que retractarse de cosas que intentamos hacer también eso es aprendizaje muy bueno pero a la vez muy difícil... el tener que después hablar con la gente que estábamos diciendo “usted ya no va a trabajar aquí”, y era la inexperiencia, aparte de que encontramos una alcaldía que no tenía nada, ningún fondo, la caja de tesorería estaba cero, no tenía fondos y cuando se llega que había que pagar, el día de pagar la planilla de los empleados municipales y no teníamos los fondos, eso fue también otra experiencia muy dura [...] la otra cosa que aprendí, por ejemplo que, cuando se llega a un cargo público, no debes pensar en que vas a gobernar para un grupo... si no que se llega a gobernar para el pueblo y no importa si es de derecha o es de izquierda...

La cita da cuenta de varios aspectos de la reconversión: en primer lugar, que la reconversión en funcionario de gobierno implica un cambio en el punto de vista –gobernar implica no representar

solamente los intereses del propio grupo- y, en segundo lugar, la obligación de adquirir conocimientos técnicos sobre la administración pública. La entrevista de Adriana ejemplifica la tecnificación con el conocimiento del presupuesto: aprender a manejar las restricciones presupuestarias formaba parte del aprendizaje y especialización del político profesional. Como cuenta Adriana, el presupuesto municipal ordinario apenas alcanzaba para pagar a los empleados municipales pero no para desarrollar proyectos de desarrollo o de infraestructura social. Resolver dónde y cómo conseguir fondos adicionales –del gobierno central, de la cooperación internacional, de mejorar la recaudación de impuestos etcétera-, para ampliar de esta manera los espacios de acción para la gestión municipal se volvió en un desafío importante que absorbía energía y tiempo de los nuevos funcionarios.

Los relatos de Adriana sobre las primeras experiencias “siendo gobierno” revelan las diferencias entre las expectativas suscitadas por el proyecto original –representado por la idea de la “toma del poder”- y la realidad de “tomar posición de un gobierno municipal” en un marco institucional preestablecido y con todas las limitaciones de un municipio pobre en una zona de conflicto. La apuesta del FMLN de integrarse en el espacio institucional y competir con otras fuerzas políticas significó para sus militantes acostumbrarse a estas nuevas prácticas políticas, relacionadas con la representación política y las reglas de las instituciones administrativas y legislativas: había que respetar en el campo institucional la “cohabitación política” con otras fuerzas políticas, especialmente con el principal adversario político, ARENA.

Al gobernar municipios con serias limitaciones presupuestarias había que buscar fuentes adicionales de ingreso, por ejemplo a través de la cooperación internacional, las ONGs y el mismo gobierno central, y crear mecanismos alternativos para legitimar la administración sin cargar adicionalmente el presupuesto. Posiblemente la progresiva implementación de mecanismos participativos en los municipios gobernados por el FMLN, por ejemplo las consultas populares, el presupuesto participativo, la instalación de comités comunales o la colaboración con ONGs, al mismo tiempo que respondió a un reclamo ciudadano por una mayor democratización cumplió también con el propósito de legitimar la gestión municipal.⁵²⁸

⁵²⁸ Sobre las primeras experiencias de gobiernos municipales del FMLN, véase, Nidia Díaz, “El buen gobierno: Reto de la izquierda en El Salvador”, Beatriz Stolowicz (coord.), *Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio*, México, Plaza y Valdés, 1999, pp. 111-132; Estas hipótesis se formularon a partir del análisis de la trayectoria de Adriana y la lectura de las notas de investigación de Felipe Varela sobre la gestión municipal y el presupuesto participativo del gobierno municipal del FMLN en San Salvador, así como la revisión de la información que se encuentra en la página electrónica del Instituto de

Fue Resistencia Nacional que, de acuerdo a las lógicas de cuotas partidistas en las estructuras de mando del FMLN, impulsó la candidatura de Adriana como suplente en la planilla del gobierno municipal en 1994. Pero a diferencia de otros líderes la trayectoria de Adriana como política profesional no terminó con el desmoronamiento de las estructuras de Resistencia Nacional, sino adquirió una dinámica independiente de los procesos de selección de cuadros políticos y dirigentes del FMLN. Aunque ella abandonó el FMLN, mantuvo su cargo en el gobierno municipal hasta las elecciones legislativas y municipales de 1997 y en el 2000 ingresó nuevamente al Consejo Municipal, ocupando un cargo como concejal propietaria. ¿A qué se debía esta reconversión exitosa?

En primer lugar, ella apostó a tiempo a la separación de su trayectoria política individual de la suerte de la organización partidista al formar parte de un grupo de mujeres que actuaba, desde antes de 1992, como grupo de interés local en nombre de las mujeres de Suchitoto. Este grupo le permitió constituirse en representante de las mujeres del municipio, más allá de los vínculos partidistas. En segundo lugar, a partir de 1994, al mantener el anclaje social en su comunidad, supo aprovechar el proceso de institucionalización de las organizaciones comunitarias y liderazgos locales en las llamadas ADESCOS, que fue el marco formal usado por el gobierno municipal del FMLN en Suchitoto para formalizar su relación con las organizaciones comunitarias existentes.⁵²⁹ Estas asociaciones, conformadas por representantes de organizaciones de base presentes en cada localidad (cooperativas, comités comunales, proyectos de desarrollo, etcétera), deberían funcionar como un mecanismo para ejecutar acciones de desarrollo local y posibilitar la participación de la población en la toma de decisiones sobre su comunidad. Por medio de una ordenanza municipal que vincula la legalización de una asociación local a la presencia de mujeres en la Junta Directiva y la instalación de una secretaria de la mujer, el consejo municipal aseguró legalmente la participación de las mujeres en las ADESCOS. Y si se toma en cuenta que el acceso a recursos para proyectos de desarrollo se facilita, por lo general, a partir de la existencia de estructuras reconocidas por el gobierno municipal, la legalización se convierte en un incentivo importante para formar la organización de acuerdo a los requisitos establecidos. A partir de estas dos bases –el grupo de mujeres de Suchitoto y la ADESCOS– Adriana volvió en el 2000 al gobierno municipal del FMLN como representante independiente de “las mujeres.”⁵³⁰

Ciencias Políticas y Administración Pública Farabundo Martí, disponible en línea www.fmln.org.sv (consultado en mayo 2005).

⁵²⁹ ADESCOS: Asociación de Desarrollo Comunal de Suchitoto. Véase, Municipio de Suchitoto, *Política de Equidad de Género*, s/l, Las Dignas y Ayuntamiento de Repollet, 2002, pp. 14-15.

⁵³⁰ Analizaremos más adelante este proceso de reconversión con más detalle.

Tanto el relato de Adriana como el de Manuel apuntan a la importancia de las “escenificaciones” como estrategias simbólicas para confirmar y revalorizar los liderazgos en el campo político. En el caso de Adriana, su candidatura como representante de las mujeres en el 2000 fue legitimada públicamente por medio de asambleas abiertas, donde las mujeres independientemente de su afiliación partidista escogían a “su” candidata para que se integrara a la planilla local del FMLN.

Manuel, en un primer momento, acompañó la salida de Villalobos del FMLN y participó en la fundación del Partido Demócrata. Aunque, “este error” duró sólo “un par de días” –porque junto con otros compañeros renunció públicamente al nuevo partido y regresó al FMLN-, después de esto, su carrera como “político profesional” del FMLN no prosperó. Pero él no culpa al FMLN por esto, sino los cambios ocurridos en las instituciones representativas que exigen cada vez más conocimientos técnicos y académicos. El partido, cuenta Manuel, lo recibió con los brazos abiertos:

¿Me puedes contar un poco más como viviste la salida de Villalobos?

Penoso, para mí fue penoso... fue tan dramático que quizás no tengo las palabras como para poder decir como me sentí de pena frente al campesino ¿verdad? el hombre [Villalobos] sí no le dio pena y todavía sigue hablando tonteras ¿verdad? Cuando yo me salí, digamos, de ese partido que era el PD y nos incorporamos nuevamente al FMLN, el FMLN nos agarró con mucha alegría... y empezamos a trabajar, pero mi examen lo pasé cuando hicimos una actividad, cuando andábamos peleando la deuda agraria y bancaria e hicimos una concentración de no menos de unas 30 mil personas y llamamos a los diputados del FMLN y de otras fracciones a que fueran a darnos su voto de apoyo a donde estábamos, nos colocamos en la Juan Pablo Segundo [avenida en San Salvador] y cuando me llaman, yo tenía un discurso central, tuve un apoyo tan excelente de la gente como no tiene idea... aplausos, aplausos, en fin, una serie de cosas, di mi discurso y yo dije “realmente he vuelto a ganar la confianza y el corazón de la gente”, porque antes de mi llamaron a Jonás, un diputado que era del PD y ese hombre la gente le dijo hasta de lo que se iba morir... lo abuchearon, lo putearon, lo chiflaron... y como eso fue primero que a mí, dije yo “a mí me van a matar aquí” pero no fue así ¿verdad? total, el partido, pienso, que confía en mí...

La escenificación pública de la relación entre líder social y partido se expresa en el relato de Manuel en el hecho que el lugar donde él reconoció públicamente tanto su “error” –haber participado en la salida del ERP- como su compromiso con el FMLN fue un mitin político para demandar una solución al problema del endeudamiento de las cooperativas. El otorgamiento –también público- del perdón expresado en las manifestaciones de apoyo de las bases partidistas, confirmó a la vez el estatus de Manuel como líder del sector campesino.

Tanto en el caso de Adriana como de Manuel es posible reconocer la estrategia de la izquierda política salvadoreña, después de 1992, de formar alianzas con dirigentes sociales para ampliar su

influencia e incrementar el número de votos en las elecciones. Otorgar “un lugar” a estos líderes – como sucedió con el secretario general de SIMTETRISSS Guillermo Mata en las elecciones 2004- ha consolidado la legitimación del FMLN como principal opción política de la izquierda en detrimento de los grupos y corrientes que optaron por la escisión después de 1994. La flexibilidad que ha mostrado el FMLN en sus alianzas externas con organizaciones sociales, sobre todo en coyunturas electorales, contrasta con la cerrazón del aparato partidista dominado por los cuadros de las tres organizaciones político-militares (Partido Comunista, FPL y PRTC) que no abandonaron el partido. Esta cerrazón interna, expresada como una “falta de confianza” de los funcionarios del FMLN ante ex activistas de Resistencia Nacional y ERP o manifestada en la consigna que para obtener un puesto en el FMLN “primero hay que sudar la camisa” (es decir, hacer trabajo de base), implica que ha sido difícil para quienes optaron por volver o permanecer en el partido ocupar lugares destacados en las estructuras partidistas.

4.5. Oportunidades de inserción y estrategias de reconversión social

De acuerdo a su posición y las competencias adquiridas, los militantes emplearon una serie de estrategias para adaptar y reintegrarse a la vida civil después de la guerra. A partir de estas estrategias se constituyeron tendencias y líneas de acción que contribuyeron a la reconfiguración del campo político pero, especialmente, a la redefinición de los vínculos entre los sectores organizados de la sociedad –la sociedad civil- y el conjunto de partidos políticos e instancias estatales –la sociedad política-. A partir de las estrategias individuales para reinsertarse y las prácticas de reconversión identificamos tres grandes líneas de acción, que denominamos *tecnificación* del activismo social, *gremialización* del sindicalismo e “*irse para la casa*”, es decir, distanciarse de formas activas de participación política y social.

Estrategias de reconversión I: La tecnificación del activismo

Una de las competencias que se ha vuelto clave para ingresar o permanecer en el campo político es el conocimiento detallado y especializado de ciertas temáticas que permiten representar los intereses de grupos específicos. En la jerga de los organismos internacionales y ONGs, esta habilidad se llama *expertise*. Para algunos de los militantes entrevistados fueron precisamente los conocimientos prácticos adquiridos con su participación en organizaciones populares durante la guerra, que sirvieron como recursos estratégicos para insertarse en el orden de la posguerra. Habilidades, como tener iniciativa propia para organizar a la gente y formular propuestas, hablar en una asamblea en nombre de un grupo, o la capacidad de negociar en nombre del grupo con agentes

del gobierno o de organizaciones de la cooperación externa, son competencias escasas en el mundo popular porque requieren de capital cultural, es decir, conocimiento técnico -aunque no es adquirido formalmente en instituciones educativas-, y de capital social que se obtiene a partir de participar en redes sociales y constituirse como intermediario entre comunidades específicas y agentes externos.⁵³¹

Según Ana, la participación en FENASTRAS y en los colectivos de formación política de Resistencia Nacional le permitió formar habilidades, como la capacidad de análisis y de organización que posteriormente le permitieron insertarse en el mundo de las ONGs:

Ahí [*en Resistencia Nacional*] aprendí mucho más a hacer análisis ¿verdad? De la situación política, también aprende uno cómo plantear la situación a la demás gente... cómo, este, irle enseñando a que vayan haciendo análisis y que vayan tomando decisiones ya con conocimiento de causa.

Todas las mujeres entrevistadas (sin excepción) incorporaron después de la guerra el tema de género en su discurso. El proceso por medio del cual se convirtieron en “promotoras” de proyectos de mujeres, asesoras de ONGs feministas o apostaron a la promoción del tema de género en sus sindicatos, ejemplifica de qué manera se introdujeron las nuevas demandas y prácticas en el campo político salvadoreño. Sus relatos dan cuenta cómo los discursos que reivindican la diferencia y particularidad -como el discurso de género- cobraron cada vez más relevancia, marginando los discursos contrahegemónicos clásicos, como el discurso clasista o de liberación nacional.

El primer ejemplo de cómo la tecnificación del activismo se articula con la emergencia de nuevas prácticas y discursos es la trayectoria de Ana que cuenta como los primeros años, después de los Acuerdos de Paz, fueron difíciles para ella. Después de salir de la cárcel en 1989 empezó a trabajar directamente en FENASTRAS para asesorar grupos sindicales en el proceso de legalización sindical. Pero a raíz de los conflictos internos en la federación fue expulsada de la federación, perdiendo de esta manera también el ingreso con el cual había contado desde 1989.⁵³² Al quedar fuera de la Junta Directiva en 1991, se le cerraron repentinamente todos los espacios de

⁵³¹ Como referente empírico comparativo sirva el estudio sobre los programas de combate a la pobreza en Perú que explica la poca renovación de los líderes de organizaciones populares con la escasez de capacidades de liderazgo y organización en el mundo popular por lo cual los y las dirigentes se mantienen en sus puestos por mucho tiempo y se tienden a “profesionalizar” en el ejercicio de este papel. Véase, Martín Tanaka y Carolina Trivelli, *Las trampas de la focalización y la participación. Pobreza y políticas sociales en el Perú durante la década de Fujimori*, Documento de Trabajo No. 121, Serie Sociología y Política 35, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2002, p. 25, disponible en línea www.iep.org.pe (consultado en mayo de 2006).

⁵³² Más adelante desarrollaremos con más detalle las razones y efectos prácticos de la crisis de FENASTRAS, desde la perspectiva de los sindicalistas entrevistados.

participación en la federación y Ana, a los 38 años, se vio obligada a buscar un nuevo trabajo. ¿Qué recursos y competencias tenía ella a su disposición en este momento? Según su relato, en un primer momento ella volvió a trabajar en una fábrica textil donde buscó fundar un sindicato de empresa, posiblemente pensando en repetir la estrategia de inserción en el campo sindical que había resultado exitosa en 1977. Pero después de las luchas fraccionales, FENASTRAS no estaba dispuesta a ayudar, más bien –según Ana- el secretario general la difamó, señalando que ella ya no formaba parte de FENASTRAS. El sindicato de empresa no obtuvo la personería jurídica y Ana perdió su empleo. Por su edad, y el estigma de ser sindicalista, la entrevistada ya no pudo encontrar trabajo en el sector manufacturero.

Según Ana, ante la imposibilidad de continuar su trayectoria obrera y sindical ella estuvo *rebotando de un lugar para otro*, es decir, tuvo que probar diversas estrategias hasta encontrar –más bien “construirse”- un nuevo lugar en el espacio social. En el siguiente relato podemos apreciar que este proceso consistió de una serie de experimentos y fracasos hasta que, por medio de las competencias y el capital social adquirido con el activismo político y sindical, pudo ingresar a trabajar en una ONG. Los recursos que le fueron útiles en su reconversión fueron la habilidad de organizar y asesorar grupos y el acceso a redes sociales nacionales e internacionales (la *cooperación*):

Entonces yo empecé, anduve por ahí rebotando, decimos aquí, haciendo trabajos sencillos poco remunerados, trabajando en mi casa, y, luego empecé a trabajar en un proyecto de guarderías que tenía el Comité Femenino [*de FENASTRAS*] y que por malversación de fondos la cooperación se los quitó y lo entregó a las personas que en ese momento estaban laborando en la guardería. Nos sentamos, nos reunimos con gente representante que estaba de la cooperación aquí en el país y buscamos la forma cómo esos proyectos podrían contribuir a la organización del sector para que estaba prestando el servicio, lo prestaba para mujeres vendedoras del Mercado Central ¿verdad?, entonces, con el objetivo de ir a organizar a las mujeres del sector informal, llegué a trabajar en ese proyecto... se organizó una Asociación de Mujeres del Sector Informal —así se llama—les gestionamos la personería jurídica, se capacitaron a mujeres, bueno, ahora ellas siguen trabajando en la organización ¿verdad?, son mujeres humildes pero que aprenden mucho, además, si dicen “vamos a lograr esto, vamos a luchar”, ellas lo hacen y lo han estado haciendo, entonces ahí está ese esfuerzo que quedó de ese otro proyecto, la guardería cerró porque ya no tuvo financiamiento, pero lo principal y lo rescatable de esa experiencia fue que quedó algo organizado, una estructura organizativa con personería jurídica y que hasta esta fecha se mantiene.

Por medio del proyecto de la guardería Ana entró a Redes, una ONG fundada por activistas vinculados a Resistencia Nacional hacia fines de la década de los ochenta para obtener fondos internacionales para proyectos de reconstrucción y desarrollo. Con la salida de Resistencia Nacional del FMLN, esta ONG se independizó del aparato partidista pero mantenía los programas de proyectos productivos, de capacitación y de género para apoyar a organizaciones de base.

Justo la existencia de este tipo de ONGs -orientadas a prestar servicios de capacitación y vinculación internacional- permitió que otras mujeres de origen popular y campesino empezaran a participar en organizaciones de base. Así fue el caso de Marta, quien cuenta que al terminar la guerra, la cooperativa de la cual ella fue socia -como muchas otras cooperativas del sector reformado- se encontró en una situación deplorable. Antes de la expropiación había sido una hacienda algodonera con mucha propiedad (tierra y maquinaria) que se fue perdiendo, según Marta, por los robos y saqueos durante la guerra y, después, por los efectos del endeudamiento que prácticamente la hacía insostenible. Con los programas de reconstrucción, la cooperación externa empezó a canalizar, por medio de ONGs y organizaciones agrarias, los primeros programas de crédito para proyectos productivos en el campo. También CONFRAS integró en sus programas una vertiente de créditos productivos. En 1994, a los 35 años, Marta ingresó en un programa de capacitación para mujeres, aprendió “corte y confección” y entró en el curso de alfabetización para adultos. En ese tiempo llegó una *promotora* para impulsar a las mujeres a formar una cooperativa para gestionar y administrar créditos productivos para mujeres campesinas, por ejemplo, para poner una tortillería. Marta formó parte de la Junta Directiva de esta asociación.⁵³³

Fíjese que en el 94, de parte de la federación [*de cooperativas*] llegó un programa donde dijeron que entraran diez mujeres asociadas a la cooperativa, era un programa de capacitación de seis meses más o menos. Entonces, de las que integramos, quedamos ¿verdad? como cinco, nos graduamos de corte y confección en marzo del 94, entonces en abril llegó una promotora de la federación que andaba organizando grupos de mujeres en cooperativas, entonces nosotras dijimos “¿para qué?”, ¿verdad? lo primero “¿para qué?”, y dijo “Bueno, miren, la organización es importante y por medio de la organización tanto las mujeres como los hombres pueden beneficiarse porque lo importante es la organización.” Fue de esa manera como yo comencé ya en la organización desde 1994 y comenzamos a trabajar con créditos, ya desde acá de CONFRAS, entramos a las capacitaciones que el Programa Género ya impartía a las mujeres cooperativistas, porque el grupo de mi cooperativa es un grupo de 20 compañeras ahora, nos formamos así como una asociación empresarial ¿verdad? como poner negocios. Cuando se formó la Junta Directiva del Comité [de la cooperativa de mujeres] me pusieron de Secretaria [...] en el 94 hubo oportunidad de ir a la escuela para adultos, me daba pena pero me dicen mis compañeros “anda, si te interesa”, a mí me interesaba aprender mucho matemáticas, a mí me gustan mucho los números, entonces les dije “si es por aprender matemáticas yo voy”.

Marta relata con detalle como, aprovechando esta oportunidad, se convirtió en líder reconocida por las compañeras de la cooperativa de crédito, y, poco a poco, también ante la cooperativa algodonera de la cual ella era socia. Hasta 2001, año en el cual el Departamento de Asociaciones del Ministerio

⁵³³ Los proyectos de microcréditos para proyectos productivos empezaron en Centroamérica a principios de los años noventa y con fondos de la cooperación externa. El objetivo era proveer con alternativas de ingreso a sectores vulnerables y afectados por los programas de ajuste estructural.

de Trabajo empezó a exigir como requisito de reconocimiento legal una presencia mínima de mujeres en las instancias directivas de las cooperativas, no había mujeres en el consejo directivo de la cooperativa. Pero desde entonces –y como resultado del proceso de reconocimiento como líder social de las mujeres- Marta fue elegida al Consejo aunque solamente como miembro suplente. Esta posición es considerada un puesto sin mucha importancia real porque, según ella, “los suplentes no participan en las reuniones del Consejo”. Pero en el mismo año ella fue nombrada también Presidenta del Comité Nacional del Programa de Género de CONFRAS que administra el programa de microcréditos para mujeres. Para posicionar mejor el comité local de mujeres ante el Comité Directivo de la cooperativa Marta propuso a las mujeres una estrategia: aprovechar el acceso al programa de créditos de CONFRAS para ofrecer a los socios de la cooperativa créditos con tasas de interés preferenciales y, a la vez, conservar un porcentaje de los intereses para el servicio prestado (tramitar el crédito) para la operación del comité de mujeres. Gracias a esta gestión, 16 hombres de la cooperativa obtuvieron en 2004 recursos adicionales para mejorar sus cultivos, mientras las mujeres organizadas consiguieron un ingreso adicional a cambio de gestionar y administrar los créditos.

El ejemplo de Marta demuestra que en un contexto social, marcado por la distribución desigual de las capacidades de organización y de liderazgo, una de las estrategias más eficaces para construir reconocimiento social es la habilidad de convertirse en intermediario entre comunidad y agentes externos y “ayudar a la gente”:

A mi me gusta muchísimo ir al campo y, y encontrar algo, a alguien que me diga “mire, usted me puede ayudar en eso”, yo me siento muy bien cuando yo los puedo ayudar, y me siento tan, tan bien, que lo que yo estoy haciendo es importante porque es útil para otras mujeres o ya sea para hombres, si les sirve, yo les proporciono mi apoyo.

El propósito explícito de esta estrategia es, al menos así lo explica Marta, hacer del comité de mujeres un interlocutor válido ante los dirigentes de la cooperativa:

Ir ganando puntos para cuando haya una próxima elección puedan elegir una mujer al Consejo, y por ahí los podemos ir trabajando a ellos [*los hombres que recibieron créditos*] para que ellos propongan ¿verdad? Y luego las demás mujeres que apoyen, porque eso es el ir buscando la estrategia, que si servimos para algo, ¿por qué no podemos estar en el Consejo?

Sin mencionar la palabra –de hecho no aparece en toda la entrevista- Marta apuesta a una estrategia de “empoderamiento”. El término adquiere significado en el contexto concreto de la cooperativa, a partir de la construcción de liderazgos femeninos y las disputas entre el comité de mujeres y los representantes del Consejo Administrativo por una mayor incidencia de ellas en las estructuras locales de participación y representación.

Tanto el relato de Ana como el de Marta permiten destacar algunos rasgos típicos de las nuevas modalidades de organización y sus efectos prácticos para la participación social y política: se puede observar como las organizaciones, surgidas durante la guerra, operaban durante la pacificación y reconstrucción del país como mecanismos y redes sociales que articulaban la cooperación externa con demandas específicas de ciertos grupos populares, como vendedoras del mercado o mujeres rurales. Esta función de intermediación hizo posible la emergencia de promotores y gestores de proyectos locales que jugaban el papel de intermediarios con capacidades para proponer proyectos, así como para capacitar y asesorar a los grupos beneficiados. En el relato de Marta aparece la figura de la *capacitadora* y *promotora* que representa a los cuadros técnicos que integraron las ONG, muchos de ellos exactivistas políticos y egresados universitarios, que participan en la capacitación de las y los beneficiarios de proyectos productivos y sociales.

El papel clave de estas personas como intermediarios y capacitadores se explica a partir de las desigualdades de conocimientos entre ellos y los grupos que atienden. Las beneficiarias de proyectos como la guardería, donde trabajaba Ana, o la cooperativa de créditos de Marta no contaban, en un inicio, con las competencias para planear y administrar proyectos de acuerdo con los lineamientos de las agencias financiadoras ni con los contactos internacionales. Los talleres de capacitación, asesoría y acompañamiento nacieron a partir de esta necesidad y contribuyeron al fortalecimiento del papel de los promotores y gestores de proyectos. La demanda de las agencias internacionales de cooperación de contar con contrapartes, y las deficiencias en capacitación y competencias organizativas en la comunidades atendidas fueron, por lo tanto, condiciones de posibilidad para la reconversión de activistas de las organizaciones populares de los ochenta en cuadros técnicos de ONG.

La reelaboración de las diferencias legítimas

¿Qué relación podemos identificar entre la profesionalización/tecnificación como estrategia de reconversión y la emergencia de nuevos intereses colectivos que se expresan en nuevas formas de representación y mecanismos de delegación? La trayectoria de Adriana a partir de 1992 permite ilustrar la emergencia de las “nuevas subjetividades sociales” –en este caso las mujeres– como sujetos políticos, es decir actores con prácticas, modalidades de organización y agendas programáticas diferentes a las organizaciones basadas en la representación de intereses de clase. Vale la pena reiterar que en este proceso el papel de las ONGs como vehículos para transferir recursos materiales, conocimiento, redes sociales y discursos fue clave.

Como señalamos antes, la trayectoria política de Adriana resulta interesante porque su separación del partido en 1994 no significó el final de su carrera política sino permitió una reconversión exitosa en representante política de las mujeres de su municipio. Desde 1992 ella forma parte de la Junta Directiva Municipal del Comité de Reconstrucción y Desarrollo de Cuscatlán (CRC), entre 1994 y 2003 Adriana ocupó dos veces un cargo en el Consejo Municipal y como miembro fundadora de la asociación civil Concertación de Mujeres ocupa una posición importante como portavoz reconocida de los intereses de las mujeres de su municipio. Analizar su trayectoria política, después de la guerra, permite ilustrar a partir de un ejemplo local las condiciones de posibilidad para la politización de la diferencia de género, es decir, para que las demandas de las mujeres se convirtieran en un tema reconocido en el campo político y sus representantes en agentes legítimas del mismo.

Conviene reiterar que las dinámicas de la implementación de los Acuerdos de Paz contribuyeron a la reproducción de liderazgos sociales originados en el periodo de la guerra. Adriana cuenta que el registro de las tierras en el contexto de la transferencia de propiedades no era sólo una tarea administrativa sino política porque las organizaciones del FMLN buscaban asegurar un máximo posible de tierras para sus bases de apoyo. Por lo tanto, cada partido del FMLN encargó esta tarea a dirigentes locales de confianza, conocedores de la zona y reconocidos por los pobladores del área, para seguir una estrategia: tenían que asegurar los lugares ya ocupados por campesinos y desmovilizados y organizar la ocupación de propiedades abandonadas o semi-abandonadas, registrar estas propiedades y negociar posteriormente la verificación de estos predios con la Comisión de Tierra encargada del programa:

Yo representaba a la RN, yo defendía los intereses de la RN, y luchaba por lograr, negociar la tierra para los excombatientes de la RN para la gente de la población civil, en este, sobre todo en este municipio... ¿verdad? Al cual yo estaba representando, entonces esa era la dinámica, aparte de que se hicieron estrategias, por ejemplo, ya internas que uno ponía a las familias aquí o allá, en puntos estratégicos, en tierras que teníamos interés de negociar y no todas las logramos... hay unas que no las logramos porque los Acuerdos de Paz decían también que el dueño de la tierra tenía el derecho a decidir si quería vender la tierra o no quería, y si no quería nadie lo podía obligar y entonces había que quitar a la gente y llevarla a otro lado, entonces eso también nos dio bastante dificultades... generó conflictos y cuestionamientos porque la gente se había aferrado a que esa tierra quería, no quería otra, y porque ya le tenía amor a un árbol de mango que había sembrado o un palo de naranja y no quería dejarlo...

Adriana relata aquí el conflicto que ella experimentó al pasar de una representante contestataria - "voz" de un grupo de campesinos- a representante de una fuerza política, que estaba en proceso de legalización y con una agenda política nacional que no coincidía necesariamente con las

necesidades locales. Conforme avanzaba la integración institucional del partido aumentaban también las dificultades para reconciliar la posición de líder social con la de representante partidista. Esto podía implicar, en algún momento, entrar en posibles conflictos con la comunidad. Para enfrentar estos conflictos, el relato indica dos líneas de acción posibles: por una parte afirmar el liderazgo social local a través de la movilización de las bases, aunque esto podía implicar una ruptura con el partido; la otra estrategia era la apuesta a las redes del partido y a una carrera partidista. Esto podía significar un desgaste del liderazgo local, al tener que defender estrategias políticas elaboradas y negociadas en otros lugares y en función de otras necesidades. Adriana apostó, como demuestra su relato, a una tercera estrategia: la reconversión política para ser representante de las mujeres de su municipio. Esta decisión coincidió con el desmantelamiento de las estructuras partidistas de Resistencia Nacional.

Fue en 1991 que inició el esfuerzo de un grupo de mujeres politizadas, de construir una organización local orientada a defender los intereses específicos de las mujeres. Cuenta Adriana que esta organización –que hoy se llama *Concertación de Mujeres*- nació por la iniciativa de dos monjas norteamericanas que reunieron a las mujeres con experiencias de militancia política para elaborar y coordinar estrategias que promovieran el tema de género y beneficiaran a las mujeres del municipio. La mención de las monjas extranjeras es relevante porque es un indicio de continuidad en las prácticas de organización social: la continua presencia de agentes externos y extranjeros (y de la iglesia católica) en el mundo popular salvadoreño y su papel importante en la organización y constitución de sujetos colectivos.

Para hacer funcionar este espacio las integrantes llegaron a un acuerdo: “dejar fuera los debates ideológicos y los nexos partidistas para concentrarse en los problemas de las mujeres”. El grupo de mujeres se centró en la acción política para abrir espacios que permitieran que las mujeres participaran en la toma de decisiones relacionadas con sus comunidades. Para lograr esto aplicaron dos estrategias: una estrategia discursiva de “sensibilización de género”, es decir, denunciar las actitudes de discriminación y concientizar a las mujeres sobre sus derechos, y una estrategia organizativa de impulsar cuotas de participación de las mujeres en las organizaciones e instancias de participación política formal.

Si bien Adriana llegó por primera vez al Consejo Municipal gracias a su nombramiento por Resistencia Nacional, el desmoronamiento de las estructuras partidistas en los siguientes meses la debe haber liberado del compromiso de seguir una línea partidista preestablecida. Estos cambios le abrieron la posibilidad para pelear por mecanismos de delegación que permitieran una mayor

representación de mujeres en las instancias del municipio:

...yo no me quedé, así directamente en el partido... lo que yo quiero decir es que si yo he participado después de la salida de RN, yo he participado en ser Concejal en la alcaldía del FMLN [*lo que*] significa que me han aceptado porque son las mujeres... las que me llevan... hay como más, ahí hay respaldo ¿verdad? Hay el respaldo de un grupo de mujeres para poder volver nuevamente a estar en el Consejo...

Desde el espacio de *Concertación de Mujeres* se promovió el mensaje que, para promover las necesidades específicas de las mujeres, había que colocar a más mujeres comprometidas con las demandas de género en puestos decisivos del gobierno municipal. Por medio de la sensibilización pública y el cabildeo como grupo de interés la *Concertación de Mujeres* logró obtener, en la campaña electoral de 1997, una concesión importante de la dirección local del FMLN: un puesto en la planilla municipal del FMLN estaría reservada a una “representante de las mujeres”, es decir, una candidata elegida no por los militantes del partidos sino en una asamblea de mujeres donde la afiliación partidista no condicionaba el derecho a votar ni a ser elegida.⁵³⁴

El relato de Adriana ilustra la reproducción de las estrategias de representación por medio de formas directas de participación como las asambleas. Realizar asambleas –como lo habían reconocido los militantes radicales desde los años setenta- es un instrumento importante en el proceso de construcción de un grupo *práctico, actuante*, porque muestra el grupo como una agregación de individuos y voluntades y, al ser un espacio para elegir y legitimar voceros, es un mecanismo ritualizado de delegación.⁵³⁵ Designar en el municipio de Adriana a las integrantes femeninas de la planilla municipal del FMLN por medio de asambleas abiertas de mujeres expresó, por una parte, una incipiente flexibilización del monopolio de las instancias partidistas sobre la selección de sus candidatos a elección popular –sobre todo si lo comparamos con el proceso de selección de 1994-, y, por otra parte, formaba parte de las estrategia simbólicas que contribuyeron a la revalorización y adaptación de liderazgos sociales y políticos a los nuevos tiempos.

⁵³⁴ En El Salvador el número de regidores en los Consejos Municipales es proporcional a la población y no existe representación proporcional partidaria en ellos, o sea, todos los integrantes de un consejo pertenecen a una lista (de un partido o de una alianza entre partidos). Véase, N. Díaz, *op. cit.*, 1999, p. 117.

⁵³⁵ Esta conceptualización de la asamblea como un acto de institución, instrumento simbólico para designar a los portavoces autorizados de un grupo se basa en los trabajos de Bourdieu sobre los procesos en los cuales se constituyen las clases como grupos actuantes. Bourdieu señala al respecto: “Así, el acto de institución es un acto de comunicación, pero de un tipo particular: *significa* a alguien su identidad, pero a la vez en el sentido de que la expresa y la impone expresándola frente a todos (*kategoresthai*, es decir, acusar públicamente) notificándole así con autoridad lo que él es y lo que él tiene que ser.” P. Bourdieu, “Los ritos de institución”, *¿Qué significa hablar? Economía de Intercambio*, Madrid, Ed. Akal, 1992, pp. 78-86, p. 81.

A partir de este procedimiento y apoyada por el grupo de mujeres Adriana ingresó en las elecciones de 2000 nuevamente al Consejo Municipal, este vez como concejal propietaria que representaba a las mujeres. La auto-identificación de Adriana como *concejal de las mujeres* en una alcaldía del FMLN sin que ella tuviera afiliación partidista fue posible, en primer lugar, porque recibió el apoyo de las mujeres politizadas del municipio, independientemente de las lealtades partidistas. En segundo lugar, con la construcción discursiva y efectiva, por medio de asambleas y campañas de sensibilización, el grupo *Concertación de las Mujeres* pudo mostrarse como un grupo no identificado con una organización partidista. Estos dos factores le permitieron separar la trayectoria política individual de las dinámicas internas del FMLN.

La apuesta de las activistas de Suchitoto a la identidad de género para fortalecer su posición en el campo político se inserta en la coyuntura particular de la disolución formal de las cinco organizaciones político-militares y la institucionalización del FMLN como aparato partidista-electoral. Apostar, en este contexto, a la identidad de género era una opción racional desde el punto de vista de las mujeres politizadas, porque les permitió mantener o mejorar su posición en el campo político en una coyuntura que otros mecanismos reguladores del acceso a las instancias de decisión –principalmente las cuotas de las cinco organizaciones en las instancias del FMLN– perdieron vigencia.

Estrategias de reconversión II: La “sindicalización” de los sindicatos 536

Como señalamos en el Capítulo III, las coordinadoras y uniones sindicales, que surgieron a partir de 1985 y culminaron en la formación de dos bloques con identidades políticas claramente definidas (UNOC y UNTS), agruparon a las organizaciones populares según lealtades partidistas y no según las identidades laborales o sectoriales. La UNTS se caracterizaba por ser una organización “paraguas” que representaba a distintas organizaciones populares y actuaba como portavoz del proyecto político insurgente. Tanto dirigentes como el grueso de los activistas sindicales habían sido, durante la guerra, colaboradores y militantes del FMLN. Con la recomposición del campo político a partir de la institucionalización del FMLN, la pérdida de importancia del PDC y la consolidación de ARENA, como partido gobernante, el papel de voceros políticos fue asumido cada vez más por los partidos. Perder la función de portavoz es, posiblemente, una de las razones principales de la crisis y pérdida de relevancia política de la UNTS.

⁵³⁶ Este término es tomado de las propuestas y discursos sindicales de este periodo. Véase a modo de ejemplo, J. Arriola Palomares/J. A. Candray, *op.cit.*, 1994, pp. 107-108.

En las entrevistas con los sindicalistas es posible reconstruir las estrategias que ellos emplearon para superar el desgaste político y organizativo que el movimiento sindical de izquierda había sufrido durante la guerra. Ellos promovieron la *sindicalización* o gremialización de las prácticas de representación y organización sindical, que incluía una serie de líneas de acción: separar la acción política de la defensa gremial, mantener un perfil político-partidista más bajo y desarrollar habilidades para legitimarse ante los trabajadores, como conocimientos técnicos, pragmatismo ideológico y capacidades de negociación con la patronal para obtener beneficios para las bases sindicales. En el desarrollo de estas estrategias, las ONGs jugaron también un papel importante, por una parte, como aliados y, por otra parte, como rivales en la disputa por el acceso a los fondos de la cooperación internacional.

En esta sección interesa reconstruir las prácticas políticas y modalidades de organización social que configuraban esta estrategia de reconversión, a partir de los relatos de Celso, Horacio y Miguel. La experiencia de marginación que señalamos como característica del cierre del campo político en los años noventa fue especialmente grave para el sector sindical. ¿Cómo relatan los sindicalistas el “desclasamiento” político y simbólico que sufrieron a partir de 1992?

En el ámbito sindical, la crisis interna de FENASTRAS fue un acontecimiento importante porque marcó el deceso del sindicalismo político y militante de los ochenta. Las explicaciones de los involucrados en el conflicto interno toman como punto de partida las características personales del secretario general, que durante la guerra había sido activista sindical y “comando urbano”, y de su mujer. De acuerdo con estas interpretaciones, ambos estaban “enfermos del poder” y muy ambiciosos; se sospecha también que fueron corrompidos por personas del gobierno y de la embajada norteamericana, además que querían controlar el “pisto” –es decir los fondos- que FENASTRAS recibía de la cooperación externa y de organizaciones sindicales europeas. Pero otra razón, crucial, para determinar el desenlace del conflicto sindical fue el retiro de la comandancia partidista como actor clave y árbitro en los asuntos de la federación, tomando en cuenta que todos los involucrados en el conflicto eran miembros de las estructuras políticas de Resistencia Nacional, y que la Comandancia durante la década de los ochenta decidía los asuntos internos estratégicos de la federación. Cuando Resistencia Nacional abandonó el FMLN y desmanteló las estructuras que la vincularon con las organizaciones de base -como sucedió en otros sindicatos y ONG vinculadas a RN- las relaciones de poder se reestructuraron en torno a los voceros más visibles de la federación. El secretario general de FENASTRAS aprovechó el discurso de la “autonomía sindical” para evitar la injerencia de instancias externas en la gestión de la federación. Otro factor fue el “ahuecamiento” de

la federación, que convirtió a la dirección sindical en un cuerpo aislado de los sectores obreros que decía representar. Muchos sindicatos, que se habían afiliado a FENASTRAS en su periodo de auge (1975 a 1981), existían 15 años después sólo con el nombre debido a la persecución política y el cierre de muchas empresas del sector manufacturero durante la guerra. Sin bases sociales, pero con un “ejército” de sindicalistas despedidos para quienes la federación buscaba fuentes de ingresos, los mecanismos de delegación en las que se fundamenta la representación sindical dejaron de operar como un mecanismo de renovación de liderazgos:

A esas alturas la Federación tenía una cantidad exorbitante de desempleados y de sindicatos, por ejemplo, como el de zapatos que habían sido despedidos, todos, todos, todos los trabajadores que participaban en el sindicato, entonces teníamos un buen de personas sindicalistas, entre comillas, porque ya no eran sindicalistas porque ya no eran trabajadores pero que habían sido despedidos por la lucha sindical ¿no? Entonces con ellos tratamos de llevar a cabo cooperativas de calzado pero no fueron cosas muy exitosas porque nosotros no teníamos experiencia en echar andar empresas, ni hacer estudios de mercado, no competir, no teníamos información como para decir “podemos comprar la materia prima acá y acá y acá de tal manera que los costos bajen, teníamos muchas veces que construir una red solidaria para colocar el producto de las cooperativas...” (Maria)

La particularización de organizaciones sindicales en torno a sus líderes fue en este periodo un proceso recurrente que contribuyó a la dispersión del movimiento sindical. En la administración pública la desmovilización significó dismantelar las estructuras clandestinas que habían vinculado los grupos sindicales en los centros de trabajo, y con la desaparición de los Comandos Urbanos, los sindicalistas-militantes perdieron un crucial instrumento de poder para negociar con los funcionarios de gobierno. La siguiente anécdota, que aparece en la entrevista con Celso, refleja las dificultades que significó para estos activistas abandonar las prácticas de presión basadas en la amenaza militar, porque su socialización política había ocurrido durante la guerra: en una jornada de protesta -el FMLN ya estaba negociando el proceso de paz con el gobierno salvadoreño- un grupo de activistas sindicales tiró los portones de una dependencia del Ministerio de Educación. En respuesta la Ministra de Educación anunció públicamente que “ahora sí” iba a meter a los sindicalistas al “cajón del Estado de Derecho” e interpuso una demanda judicial en contra de Celso, quien como dirigente sindical supuestamente había encabezado la destrucción de propiedad ministerial. Las células guerrilleras se acercaron a Celso para ofrecer “ponerle un bazucazo” a la Ministra. Pero él se opuso a esta acción porque sabía “que los acuerdos de paz vienen”, por lo cual había que elaborar otras formas de presión. Finalmente, el acta penal fue cerrada, no por la amenaza de los guerrilleros, sino gracias al trabajo de los abogados que presentaron un video para demostrar que nadie había incitado directamente a la violencia sino “todo el grupo” movilizado había empujado el portón hasta destruirlo.

Reconocer las posibilidades que ofrecía la vía institucional para resolver problemas laborales era sólo un primer desafío. Los relatos de Celso permiten identificar otros retos para los cuales los sindicalistas no contaban con estrategias adecuadas, como por ejemplo, el proceso de atomización del movimiento sindical y de pérdida de espacios de negociación, como consecuencia de las escisiones del FMLN y la pérdida de relevancia política de la Democracia Cristiana. Otro reto fue la reducción del empleo que en la administración pública se realizó por medio de la Ley de Retiro Voluntario y que ofrecía una indemnización a todos los empleados que pusieron a disposición su puesto.⁵³⁷ ¿Cómo enfrentaron los sindicalistas estos desafíos? Según la entrevista con Celso, para mantener la presencia política y los espacios de incidencia, los sindicalistas buscaron en un primer momento redefinir, sin romper, los vínculos entre gremio y partido. Ellos pelearon a favor de una mayor autonomía sindical que incluiría, sin embargo, un compromiso político de la dirección del FMLN con la agenda sindical. Esta estrategia no apostó a un cambio en las reglas del juego, porque seguía reconociendo el vínculo orgánico y las jerarquías construidas entre partido y sindicato, pero buscaba una redefinición de estas reglas que permitiría una mayor autonomía sindical.

El siguiente relato da cuenta de las presiones y amenazas a las cuales aquellos que intentaron renegociar las jerarquías se vieron expuestos, pero también permite reconocer la disposición de aceptar estas reglas. Esta disposición se complementaba con la pretensión de la dirección partidista de mantener el control sobre los sindicatos como instancias de movilización social y política. Esto era el caso de Celso, a quien la dirección de Resistencia Nacional mandó en 1992 a la UNTS con la tarea de reorganizar y revitalizar esta estructura:

Nuevamente el partido me da línea de que me vuelva yo otra vez a la UNTS, yo ya no quería regresar a la UNTS ¿verdad? porque yo decía, para mi criterio, que todos los gremios que eran de la guerra tendrían que haber muerto con la guerra ¿verdad? y que teníamos que desaparecer con nuestros métodos de trabajo, ¿verdad?, con nuestro estilo de trabajo, estructura de liderazgo, en esa época yo en mis discursos decía que teníamos que tener cuatro grandes líneas de trabajo, que era la *gremialización* del gremio, *despartidización* del gremio, la autonomía sindical y la democracia sindical, les decía que esos eran los cuatro métodos que nos darían energía en el nuevo sindicalismo, pero los partidos no me hicieron caso porque ellos querían seguir controlando los gremios. Entonces yo no pude, no fui capaz y creo que nunca, nadie sabíamos cómo hacer, quería como convencer a todos, una vieja dirigencia ¿verdad? ya metida de que tenía que perdurar la línea del partido, inclusive el dinero del partido que mantenía ahí a muchos ¿verdad? entonces llegarles a convencer “tenemos que empezar a decirles: un momento, vamos a ver si esta línea de trabajo le hacemos caso o no” ¿verdad? entonces, y empecé a bajar línea, me empezaron a tildar de

⁵³⁷ De acuerdo a Amílcar Efrén Cardona, investigador de CENTRA, la Ley de Retiro Voluntario produjo un cambio en la correlación de fuerzas en la administración pública en detrimento de simpatizantes o colaboradores de la izquierda y del PDC porque muchas de las plazas de trabajadores que aprovecharon esta ley y renunciaron no fueron congeladas, como se había previsto originalmente, sino fueron ocupadas por afiliados y simpatizantes del partido ARENA. Véase A. Efrén Cardona, *op.cit.*, 1999, p. 24.

traidor, o sea de que yo estaba queriendo meter divisionismo. *Al menos mi partido no era tan ortodoxo ¿verdad? entonces no me expulsaron pues ni me mataron ¿verdad? [se ríe]*⁵³⁸

Esto indica que las lógicas prácticas del sindicalismo anti-gubernamental de buscar el vínculo partidista y que había funcionado desde antes de la guerra, chocaba con las intenciones racionales de los dirigentes sindicales de buscar un cambio y una renovación. La radicalización política y el crecimiento del sindicalismo público a finales de los años setenta habían sido procesos entrelazados, por lo cual la identidad ideológica condicionaba la identidad gremial. Al desaparecer el aglutinador partidista y los espacios de concertación del gobierno democristiano, las condiciones sociales y simbólicas de posibilidad en el espacio laboral redujeron el margen de acción de la actividad sindical a la defensa y gestión de demandas laborales muy específicas, por ejemplo, obtener mejores servicios y seguros médicos u organizar viajes de recreo para las familias de los empleados. Parece que los sindicalistas de izquierda se encontraban ante la disyuntiva de actuar como un grupo de interés, y recuperar de esta manera un cierto apoyo entre los empleados, o retirarse de la vida laboral y sindical, como lo hizo una mayoría de los dirigentes sindicales de la época de la guerra aprovechando las indemnizaciones de Ley de Retiro Voluntario.

Los problemas de consolidación institucional de la organización sindical en el sector público se mantienen a la fecha. Un estudio realizado en 1999 destacó la falta de disposición de muchos dirigentes sindicales de obtener la personería jurídica como asociación sindical, lo cual se manifiesta en la heterogeneidad de modalidades organizativas en el sector público salvadoreño. De las 40 organizaciones de trabajadores y trabajadoras registradas en este estudio, 18 estaban registradas bajo la modalidad de sindicatos (principalmente en las instituciones oficiales autónomas) y 22 como asociaciones laborales. Pero sólo una parte de las organizaciones estaban legalmente constituidas, otras tenían la personalidad jurídica pero eran acéfalas o existían sólo como organizaciones de hecho.⁵³⁹

Otro escenario de reacomodo sindical se presentó en las empresas paraestatales (las llamadas empresas autónomas), como las compañías de generación y distribución de energía eléctrica o la empresa de agua y alcantarillado. En estas empresas se levantaron entre 1990 y 1991 las restricciones para la actividad gremial legal a cambio de la exigencia, por parte de la administración empresarial, de “despolitizar” estos sindicatos.

⁵³⁸ Las cursivas son nuestras.

⁵³⁹ Véase, *Ibíd.*, pp. 54 – 58.

Cuando en 1990 Horacio volvió a su puesto laboral original en la compañía de electricidad, recientemente había roto con el partido y con FENASTRAS. El exilio en Holanda lo había puesto en contacto con el sindicalismo corporativo que lo había impresionado por una fuerza organizativa basada en un alto grado de afiliación sindical y la existencia de un entramado institucional que vinculaba sindicatos, patronal y el Estado y permitía negociaciones tripartitas. Horacio buscó introducir estos conocimientos en el ámbito sindical salvadoreño, primero como asesor político de FENASTRAS y después, por medio de la fundación de una ONG especializada en temas laborales. En términos personales, el fraccionamiento de las estructuras de Resistencia Nacional, que siguieron al conflicto interno de FENASTRAS, lo llevó a tomar distancia del FMLN y, por ende, del movimiento sindical cercano al FMLN.

El reagrupamiento de grupos de interés al interior de FENASTRAS afectó a Horacio porque los activistas sindicales más jóvenes, que habían entrado a FENASTRAS en el contexto de la guerra, desconocieron su trayectoria y liderazgo político-sindical. “Yo ya no era nadie”, “de cierta manera te aíslan, ya no eres nadie importante, que no sos útil y, entonces ¿qué estás haciendo?” así resume la frustración provocada por la marginación de su liderazgo que lo llevó a abandonar FENASTRAS y Resistencia Nacional para dedicarse exclusivamente a la reconstrucción sindical en la compañía de electricidad y a la participación sindical en las negociaciones de privatización.

Horacio peleó junto con dos sindicalistas más el regreso a su viejo puesto en la empresa de energía. La administración de la empresa concedió la reinstalación de los tres sindicalistas y el reconocimiento de la asociación sindical ATCEL a cambio del compromiso que los sindicalistas se desligaran de la actividad política. Para insertarse en el nuevo sindicato, Horacio fue a “visitar a las bases” –los trabajadores en los diversos centros de trabajo- para obtener su apoyo en las elecciones a la junta directiva de ATCEL, desde donde participó en la elaboración de una propuesta sindical de cómo enfrentar la privatización de la empresa CEL. Pero este reinicio no fue exento de conflictos y cuestionamientos porque otros sindicalistas le cuestionaron la participación sindical en el movimiento revolucionario de fines de los años setenta cuyo costo político había sido muy alto: persecución y prohibición del sindicato durante 10 años. Aunque Horacio reconoce que estas críticas están en lo correcto, nunca deja de justificar su apuesta individual y la del sindicato a favor del proyecto revolucionario. Para él, el proceso revolucionario había sido un momento histórico -y no un capricho personal- que había exigido de todos los participantes un mayor compromiso – “hacer más cosas”- que en épocas normales.

Para enfrentar el contexto adverso al sindicalismo salvadoreño, Horacio empezó después de 1992 a promover un “sindicato corporativo”, es decir, un sindicato independiente de los partidos políticos, con un alto nivel de sindicalización de la fuerza de trabajo, fondos propios suficientes y una relación constructiva con la patronal –en este caso la dirección de CEL- para obtener beneficios de productividad y prestaciones para los trabajadores a cambio de alejarse de la vida política. La siguiente cita ilustra esta “reconversión” hacia un mayor pragmatismo como respuesta a los cambios económicos, políticos e ideológicos.

¿Cuándo inicia esta discusión sobre la privatización?

Los primeros planteamientos los hicimos en el 93. Cómo íbamos a enfrentar la modernización, privatización, globalización en temas que nadie estaba tocando... y la CEL se estaba preparando también que en los tiempos de paz, que eso era lo primero que iba a dinamizar y metíamos todos los recursos, que cuáles habían sido las experiencias en Europa de los sindicatos y cuál era la visión que tenía aquí el liderazgo, que traíamos nosotros... te podría decir que hubo mucha discusión interna primero y después con las bases, y después que definimos la estrategia de enfrentar esa situación... con dos alternativas, una era enfrentarla sólo nosotros y otra era si lográbamos sumar al resto del movimiento sindical en El Salvador y no tener dos proyectos. Porque era con el nivel de radicalización, con el nivel de ideologismo y el concepto de pureza en los sindicatos, digamos más fuertes o de izquierda, o lo que siempre se había dicho aquí o como se había concebido la ideología del movimiento sindical... pues la confrontación era grande con las ideas nuestras [...] qué si no se podía detener [la privatización] ¿qué íbas a hacer?, ¿dejar que otros se llevaran la parte tuya? Si estaban repartiendo la nación o parte de la nación... hubo una [sic.] “o participás o no participás” ¿qué trae una cosa contra la otra? [...] *La responsabilidad de ser dirigente es no sólo decir “no, esto quiero”, sino más que todo pensar en los de atrás, no lo que uno quiere ni lo que le dice el partido.*⁵⁴⁰

Los relatos de Horacio dan cuenta de las razones que contribuyeron a que este sindicalismo apostara a la defensa de intereses sectoriales de los agremiados por encima de intereses políticos más generales como nuevos principios para legitimar su acción: por una parte, la represión y la guerra habían funcionado como mecanismos eficientes para disciplinar políticamente al sindicalismo politizado –de esto dan cuenta los cuestionamientos al liderazgo sindical de los setenta señalados por Horacio-, y el desgaste de las bases sindicales se complementó con la frustración de los dirigentes, quienes sintieron que con su apoyo al proyecto revolucionario habían arriesgado derechos sindicales conquistados pero que, después de la guerra, no fueron reconocidos por el FMLN.

Por otra parte, el gobierno de ARENA, al impulsar la privatización del sector paraestatal, estaba en la ofensiva para imponer un conjunto de reformas para liberalizar la economía. Horacio plantea

⁵⁴⁰ Las cursivas son nuestras.

estas iniciativas nacionales en relación con tendencias como la “globalización” y “modernización”, lo cual les da un aura de inevitabilidad y parece dejar sólo dos opciones: asumir estos cambios, adaptarse a ellos –usando la fuerza sindical para participar en la privatización, por ejemplo- o perecer.

Desde la posición de los sindicalistas de CEL, actuar por cuenta propia –es decir, en defensa de los intereses de los sindicalizados de la propia empresa- contribuía más a mantener su liderazgo sindical y su presencia en el campo político que apostar a una unidad sindical amplia. Esto significaba “dosificar” la solidaridad, hacer un “uso razonable” de la fuerza:

[A] finales de los 70 y 80 el sindicato siempre fue muy activo, como un pivote importante para cohesionar y para definir algunas luchas... Pero la realidad de las cosas es de que sí fue más activo políticamente... yo creo que esa fase es importante y yo creo que sí, sí pasó a la historia... el sindicato combativo. Pero después, al perder todo... Sin embargo, hubo huelgas con sindicato y sin sindicato... hubo negociaciones importantes en los 90... lo único que ahí se hizo, yo digo que se hizo más *un uso razonable de la fuerza... y que eso obligó para ciertos objetivos reivindicativos del mismo sindicato. O sea pasamos de la fase –yo creo que [por] la que pasó todo el mundo ¿verdad?- de la SOLIDARIDAD incondicional a la fase de la solidaridad, digamos, muy razonada.*⁵⁴¹ (Horacio).

Las últimas frases ilustran el cambio de razonamiento para pasar del sindicalismo “movimentista” de los setenta y ochenta a un sindicalismo más corporativo. Anteriormente, los sindicatos habían jugado un papel importante en la labor política de movilización, como apoyo logístico para la acción armada y como ejes articuladores entre las demandas de obreros y otros grupos sociales, contribuyendo de esta manera a la construcción del movimiento popular revolucionario como un actor colectivo. Al desaparecer estos ejes y lógicas de acción después de la guerra, la atomización y dispersión del movimiento sindical se profundizó.

El impulso a la dispersión se ha manifestado también en el sector agrario, donde muchas cooperativas de la Reforma Agraria fueron desmanteladas porque los mecanismos que ofreció el gobierno para facilitar el pago y la condonación de las deudas fomentaron la parcelación. Una de las estrategias para conservar la propiedad asociativa ha sido la conversión de cooperativas productivas en cooperativas de servicio donde cada socio produce por su cuenta, mientras la cooperativa ofrece beneficios para detener las fuerzas centrífugas y mantener una organización unida. Manuel cuenta al respecto:

En donde nosotros hay alrededor de unos, no pasan de 20 –somos 150- no pasan de 20 que ya han pedido de alguna manera ya su parcela, y lo que el Consejo de Administración les ha

⁵⁴¹ La cursiva es nuestra. La palabra “solidaridad”, escrita en mayúscula, fue enfatizada por el entrevistado.

dicho “sí, miren, espérense, vamos a terminar de pagar” –porque todavía estamos pagando lo del 15 por ciento [Deuda Agraria]- “cuando terminemos de pagar esto, entonces el que quiera la parcela se le da la parcela y el que no quiere la parcela, pues se queda trabajando en cooperativa, pero hay una cosa, hay que entender de que para parcelarse hay que tener dinero para pagar la medidora y para pagar las escrituras, el que tenga como pagar la medición y su escritura pues se le da su parcela”. [habla sobre la posibilidad de parcelación “de hecho” de las cooperativas.] cuando se le dice a la gente “ah, como no, si cuando hagamos esto, se le va a entregar su tierra, pero usted va a estar de acuerdo a que ya no le va a prestar la cooperativa” –hoy la cooperativa le presta ¿verdad? le ayuda cuando está enfermo a él o a sus hijos ¿verdad?, le da el abono, el veneno, herbicida, si quiere, fiado, se le rastrea su tierra dos, tres pasadas de rastra, fiada [...] entonces cuando nosotros le decimos así al asociado “le vamos a dar su pedazo, pero usted va a estar seguro que no va a tener todas las prestaciones que hoy las tiene, porque usted va a tener su propia tierra, usted va a hacer lo que usted quiera con esa tierra, lo que no va a poder hacer es venderla porque es de la cooperativa”, ahí se pegan el reculón... dice “pero ¿cómo es posible si yo soy socio?”, “sí, pero usted no quiere ser socio, es mentira lo que usted está diciendo, usted no es socio ¿verdad?, usted quiere su pedazo, usted quiere su mundo aparte, usted quiere rezar para su santo, no para todos los santos.

Si bien la ruptura del ERP con el FMLN interrumpió la carrera de Manuel como político profesional y marcó su regreso -una “re-reconversión”- a una posición de representante gremial, desde esta posición ha podido mantener su prestigio como uno de los portavoces relevantes del sector cooperativo salvadoreño al gestionar beneficios para su cooperativa y para las cooperativas agrupadas en la confederación CONFRAS. Al interior de la cooperativa los beneficios consisten en determinados servicios para los socios como el acceso a créditos, el uso de maquinarias y la oferta de talleres de capacitación.⁵⁴² Las estrategias para aglutinar la Confederación son más amplias y estratégicas: buscan establecer redes de comercio alternativo con Europa y Estados Unidos, asesorar a las cooperativas asociadas en la reorientación hacia cultivos orgánicos, gestionar proyectos de desarrollo local y regional y formular posicionamientos políticos sobre el futuro del sector agrario salvadoreño. Sobre todo en el tercer tema, el vínculo con el FMLN sigue siendo estratégico, aunque el vínculo de CONFRAS con el partido es indirecto.⁵⁴³ En la campaña electoral de 2004 Manuel firmó como integrante del MPR-12 el “Pacto Agrario” con el FMLN, en el cual se confirmaba públicamente el apoyo político de las organizaciones campesinas del MPR-12 a Schafik Handal. A cambio, Handal incluyó en su plataforma electoral una serie de medidas para beneficiar al sector campesino con programas de créditos y asesoría productiva y la promesa de revitalizar la Reforma Agraria.

⁵⁴² El relato de Marta incluye varias referencias a estos beneficios como por ejemplo las capacitaciones y el acceso a créditos.

⁵⁴³ Esto se debe, de acuerdo, con Manuel a que no todas las cooperativas simpatizan con el FMLN, por lo cual un alineamiento claro con el FMLN rompería la confederación.

En la entrevista que realizamos pocos días antes de las elecciones, Manuel estaba lleno de confianza de que esta vez el FMLN podría ganar la presidencia e implementar las reformas prometidas. Sin embargo, señaló, incluso si perdieran, seguirían trabajando hasta conquistar la verdadera justicia, democracia y paz, que para él se concentraba en cuatro elementos: un trabajo con un salario digno y acceso a estudios, vivienda y salud para la mayoría de la población. Es el sueño incumplido hasta el día de hoy...

Estrategias de reconversión III: “Irse para la casa”

El repertorio de estrategias sociales de reconversión no estaría completo si no tomáramos en cuenta lo que posiblemente ha sido la reacción más común a las transformaciones sociales y políticas después de 1992: abandonar la militancia activa, ya no seguir las reglas que dominan el juego político-partidista, en otras palabras, “salir” del campo político. La toma de distancia del mundo de la militancia no tenía que ser, necesariamente, una decisión permanente, sin embargo, lo que se puede observar en las entrevistas es que si se reanudaba la participación después de un tiempo, esto implicaba una relación distinta con la organización.

Para una investigación sociológica sobre la participación política y social, estas son las estrategias más difíciles de aprehender por parecerse, a primera vista, a estrategias individuales que ocurren en el espacio social y no a respuestas sociales que se dan en función de un determinado contexto político. Pero la deserción de agentes que por medio de su participación directa e indirecta -por medio del voto, la inscripción en los registros y la asistencia a eventos públicos como asambleas, mítines y movilizaciones- dan vida y legitiman a organizaciones, que se constituyen específicamente para expresar intereses colectivos, es un problema y una amenaza continua que puede socavar una legitimidad fundamentada en la idea de la representatividad. Puede poner en entredicho -si sucede de manera masiva- la autoridad de los portavoces del grupo social porque sin representados la “voz reconocida” del representante pierde toda fuerza. Preguntarse, entonces, por las circunstancias bajo las cuales los miembros de una organización deciden abandonarla también permite aproximarse a los cambios ocurridos en los mecanismos de delegación y representación.⁵⁴⁴ Conviene tomarlo en cuenta en un estudio sobre las transformaciones de la acción colectiva porque aporta elementos para reconstruir el comportamiento social dominante de los noventa: la pérdida

⁵⁴⁴ Véase, P. Bourdieu, “Breve nota sobre la antinomia de la protesta colectiva”, P. Bourdieu, *op.cit.*, 2001, pp. 49-51.

de credibilidad que ha afectado en mayor o menor grado a partidos políticos, organizaciones sindicales y campesinas, y también a las ONGs.

Los entrevistados nombran diferentes razones que llevaron a la ruptura de la trayectoria como militantes: el desencanto y el cansancio, el reinicio de una trayectoria profesional o educativa, interrumpida por la militancia, la necesidad de “ganarse el pan” –es decir, buscar trabajo- y también la migración al extranjero por no percibir perspectivas profesionales (ni esperanzas políticas) en El Salvador de la posguerra.⁵⁴⁵

Sí, tenía retos importantes y presiones incalculables ¿verdad? para poder hacer más solidaridad, más poder económico, más poder político ¿me entiendes? Queríamos otro estatus realmente... [...] mira, si yo tenía control desde el 75, 76, comienza la lucha ideológica y, hasta 90 allá adentro, y luego un poco de paz y después vuelve la lucha ideológica y seguir en la misma idea... fijate, estas cosas son las que para mí me agotan y a lo mejor por viejo pero ya la tolerancia como que se me agotó [...] seguir discutiendo cosas que a mí no me gusta discutir, por ejemplo, no me gusta discutir de lo mismo todo el tiempo, pase lo que pase tiene que estar superada en la siguiente fase, en la otra, si no, no avanzas... puedo decir soy el único de los dirigentes que ha renunciado a los puestos. Todos se han ido por viejos, los indemnizaron, en el caso mío, una renuncia, en donde les dije, “voy a trabajar hasta el techo, pero tengo otros retos no me siento bien, aquí a hacer lo mismo, no me gusta, tengo la peor parte del trabajo y no quiero morirme aquí...” (Horacio)

Mira, lo que pasa es que para mí no llenaron mis expectativas. Primero los salarios: el año que yo volví [*de México a El Salvador*] 92, 93 yo estuve allí trabajando con las mujeres y luego me quedé muy decepcionada otra vez de los proyectos productivos con las mujeres. Entonces yo sentía que la cuestión de la reconstrucción iba a ser muy difícil porque todo el problema del poder y de la repartición del poder era una cosa que no dejaba, yo sentía que no caminábamos para ninguna parte porque era una rebatinga de que “a mí me toca y a mí me toca, pero a mí me toca más porque yo tengo dos años más que tú” y no sé qué y divisiones y más divisiones, muy feo, y yo dije “no, yo voy a dejar que pase todo esto y cuando medio se siente la cosa y pueda volver, vuelvo...” (Maria)

Cuando uno entra a la vida privada, que uno ya tiene su propia familia, uno tiene también que compartir ese tiempo con la familia y con las tareas que te encomiendan (Daniela)

En todas las entrevistas encontramos indicios para un patrón social de distanciamiento ante formas activas y sistemáticas de participación y que tiene como efecto práctico la desmovilización política.

⁵⁴⁵ De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2005 de El Salvador, publicado por el PNUD, las estimaciones sobre los salvadoreños emigrados son muy imprecisas debido a la insuficiencia de los registros oficiales tanto en El Salvador como en Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales estadounidenses, hay entre 655 mil a 1 millón 272 mil salvadoreños viviendo en Estados Unidos, lo cual parece ser una subestimación debido al subregistro de los emigrantes indocumentados. Los datos de migración manejados por fuentes gubernamentales salvadoreños parecen incluir sobreestimaciones, a partir de saldos migratorios y números de deportados. Señalan que entre 2.5 millones y 3.3 millones de personas viven en el extranjero, 95 por ciento de ellos en Estados Unidos y Canadá. Según estas cifras, en los últimos 30 años aproximadamente el 20 por ciento de salvadoreños ha emigrado. Véase, PNUD, *op.cit.*, 2005, p. 14.

Aquellos entrevistados que siguen en organizaciones sindicales y campesinas, como Celso o Manuel, perciben la desmovilización como un problema que socava la representatividad de sus liderazgos en el tiempo de la paz. En sus relatos aparecen diferentes estrategias de los dirigentes de organizaciones sectoriales para enfrentar el reflujo de los afiliados y militantes: demostrar ante las bases la utilidad de la organización para obtener mejores condiciones laborales -y de esta manera detener la deserción-, sustituir la movilización contestataria por una actividad profesional y de cabildeo político, que requiere solamente de algunos cuadros técnicos o el hiperdesarrollo de las instancias directivas y administrativas (burocratización), las cuales al no tener bases afiliadas y/o movilizadas se encierran en sí mismas.⁵⁴⁶

Otras entrevistas permiten visualizar la otra cara de la moneda, es decir, los factores que contribuyeron a la decisión de separarse de la organización partidista y distanciarse de formas activas de participación. Un factor que aparece como importante es la frustración sobre los conflictos que acompañaron la transformación del FMLN de partido guerrillero en partido político. ¿Pero por qué ahora los conflictos se volvieron motivo de desencanto, si antes la “lucha por la hegemonía” había sido una lógica constitutiva de la identidad militante en los grupos radicales de izquierda? A diferencia de antes, los militantes percibían que el objeto de la disputa ya no era quién podría y debería dirigir la insurrección y la revolución sino terriblemente “terrenal”, eran conflictos entre personas “interesadas” en búsqueda de “el poder”, “recursos” y el “pisto” (dinero). La fragmentación de la “bonita alianza” (Celso) entre las cinco organizaciones político-militares fue acompañada por el deceso de la percepción del partido como una “comunidad virtuosa”, la cual durante la guerra había dado un sentido de pertenencia y significado a la acción individual. Los mecanismos de delegación por medio de los cuales el militante y la dirección del FMLN habían contado con la autoridad política y moral para hablar en nombre del movimiento revolucionario y ejercer la representación del conjunto de la oposición, dejaron de funcionar.

El marco cognitivo de las organizaciones guerrilleras se había apoyado en un sistema de oposiciones excluyentes -enemigo/amigo, derecha/izquierda, otro/mismo, externo/interno, malo/bueno, reaccionario/progresista, derrota/victoria, desconfianza/confianza- que permitían organizar el significado de la acción. Los conflictos internos en las organizaciones político-militares, pero

⁵⁴⁶ Según De Certeau, la pérdida de credibilidad de los aparatos burocráticos -iglesias, instituciones estatales, partidos, etcétera- lleva al hiperdesarrollo de sus instancias administrativas para recompensar la movilidad de los militantes y la diseminación de las creencias que tanto tiempo han fomentado, sostenido y controlado. Véase, M. de Certeau, *op.cit.*, 1996, pp. 193-196. La degeneración de FENASTRAS después de 1992 a un “sindicato patronal” acusado de negociar contratos colectivos y la personería jurídica de sindicatos en las zonas francas sería un ejemplo de este tipo de burocratización.

también en las organizaciones sectoriales como FENASTRAS o ANDES, rompieron con estos sistemas de oposición, produciendo un vacío de sentido -una “orfandad política” (Maria)-, que tendía a inducir a una salida individual. La sensación de orfandad política podía producirse también en el momento de darse cuenta que el marco cognitivo ofrecido por la organización no permitía explicar experiencias que uno consideraba vitales. Esto era, por ejemplo, el caso de muchas mujeres militantes que con la difusión del discurso y las temáticas feministas empezaron a sentir que “los hombres” de la izquierda eran cómplices de la discriminación y violencia de género:

...la violencia doméstica era como otro asunto que no tenía nada que ver con la vida pública, ni política ni sindical, ni nada ¿no? Y sacar a luz como muchos de los compañeros -los grandes líderes- eran unos verdaderos cabroncitos con sus esposas... también la cuestión de la infidelidad, era otra cosa... como muchos de los compañeros andaban con una compañera en el sindicato, con otra compañera del partido, además tenían su esposa que no participaba en nada ¿no? y esto eran temas muy difíciles de tratar con los varones porque entonces el partido empezó a acusarnos de que queríamos meter una lucha al interior de la misma organización y que lo que estábamos intentando era dividirlos [...] después de la guerra los comandantes, por ejemplo decían porque ellos agarraron diputaciones y se posicionaron de organizaciones no gubernamentales, etcétera... y cuando las mujeres empezaron a decir “bueno, pero yo tengo 12 años de estar también allí en el monte, contigo, también con el fusil y todo y no me toca” - “es que Ustedes no se lo han ganado” [...] Entonces un montón de devaluaciones de ese tipo... (Maria)

Darse cuenta de la poca importancia que “los hombres” de la organización daban a las necesidades, demandas y trayectorias políticas de las mujeres llevó a sindicalistas como Maria a distanciarse de FENASTRAS y del activismo político-partidista. Los conflictos se agudizaron cuando se trataba del control sobre recursos, contactos y proyectos.

Los relatos dan cuenta que perder la fe y la confianza en la organización revolucionaria no significaba necesariamente dejar de creer en algo. Había otras opciones de creer -desde el feminismo hasta el protestantismo-, redes de apoyo y comunidades solidarias donde bajo ciertas circunstancias una militancia desencantada podía reactivarse. En este contexto las ONG no operaron sólo como una opción de empleo, sino también como agentes que ofrecieron discursos alternativos -la democracia, los derechos de la mujer o de los jóvenes- para resignificar la acción militante y dirigirla hacia otros objetos.

Cabe señalar, finalmente, que los relatos apuntan a un factor adicional que podía llevar al distanciamiento y que tenía que ver con la edad. Casi todos los militantes entrevistados (con excepción de dos) tenían aproximadamente 20 a 25 años, cuando estalló la guerra, y estaban al inicio de sus trayectorias en el campo educativo o profesional. Unos 10 años después, el cese de la violencia política permitió normalizar las rutinas cotidianas y reanudar o iniciar trayectorias

educativas, laborales o familiares. Con la integración política y la profesionalización de la izquierda se debilitaron las presiones por subordinar toda la vida a las exigencias de la militancia y la comunidad moral de los compañeros. Si en estas condiciones se presentaba la opción de formar una familia, terminar una carrera universitaria, iniciar una trayectoria profesional o irse del país era factible que las energías individuales necesarias para iniciar un nuevo tramo vital produjeron un distanciamiento temporal o definitivo de la militancia. Durante la guerra, en muchos casos, las estructuras partidistas o sindicales habían asegurado un mínimo de subsistencia individual a los militantes por medio de un pequeño ingreso monetario. Esta posibilidad de subsistencia terminó junto con la guerra, lo cual obligó a buscar otras formas de ingreso, buscando un trabajo remunerado o emigrar a otros países. La guerra había “congelado” proyectos vitales que –a partir del agotamiento del proyecto revolucionario- recobraron nuevamente importancia. Como lo señala Maria, había muchos militantes que querían regresar a una vida “normal” después de una década agitada:

Mucha gente del partido ya no quería ser partido, quería irse a su casa y vivir como cualquier hijo de vecino con su esposa y sus hijitos y ya ¿no? Había mucho cansancio, otra gente sí dijeron “nos convertimos en partido y seguimos siendo FMLN y luchando ahora en la parte legal y bla, bla, bla”, pero otra gente se salió, otra gente se fue del país etcétera.

El fenómeno de la deserción por razones personales y no políticas demuestra que la militancia revolucionaria –pese a su pretensión de construir una comunidad virtuosa que abarca la totalidad de la vida del individuo- no puede abarcar todas las facetas de la vida humana.

Proyectos inconclusos

Los sindicatos los han ido acabando Calderón Sol y Paco Flores y todo vale madres si gana ARENA hoy, quizá este cuento que te estoy contando ahora, dentro de dos años ya no te lo voy a estar dando [...] te voy a decir “mirá, ya no trabajo en el Ministerio de Educación.” [...] así está la triste historia del movimiento sindical. (Celso)

Creo que en lo que nosotros estábamos muy ocupados adentro tratando de ver qué hacíamos para que la gente tuviera de comer y cómo [la] volvés a insertar en el mercado productivo, los grandes empresarios estaban haciendo sus nexos a nivel de monopolios internacionales y todo esto y volvieron a El Salvador pero mucho más poderosos. (Maria)

La gente está menos temerosa, por ejemplo, hoy quien se quiere poner su placa, la camiseta con las cuatro letras [FMLN] se la pone y no hay el peligro de que lo vayan a matar o a secuestrar por esto, cualquiera puede decir ‘yo soy militante del Frente’ o ‘quiero votar por el Frente’, así libremente y lo más que puede pasar es que lo despidan de su trabajo pero no que lo vayan a matar. (Ana).

Quien expone su historia de vida ante un interlocutor, nunca relata todo, sino escoge los momentos y los pone en serie de acuerdo al significado que adquieren en el presente y al interés que el

entrevistador expresa en sus preguntas.⁵⁴⁷ Esta especificidad de las entrevistas biográficas hay que tomar en cuenta en el momento de analizarlas e interpretar su contenido. Cuando realizamos las entrevistas en el 2004 faltaba poco tiempo para las elecciones presidenciales y las encuestas anunciaban un empate técnico entre ARENA y el FMLN. La euforia entre los que apoyaban a Schafik Handal del FMLN era palpable porque el triunfo político –la “toma del poder” por la vía electoral- parecía cerca. El contraste entre las emociones de alegría y confianza, manifestadas antes de la jornada electoral, la desilusión y necesidad de explicarse la pérdida electoral en los días posteriores marcó el tono de las entrevistas, sobre todo de aquellos que seguían en las filas del FMLN.

El contexto electoral era un factor que influía sobre el “tono” de los relatos. El otro factor importante era la relación de los entrevistados con el FMLN. Cuatro de los entrevistados seguían militando en el partido, pero no como cuadros profesionales. Sus responsabilidades y actividades comprendían desde la participación en un colectivo o en una Asamblea Municipal del FMLN hasta la participación en las jornadas electorales como promotores del voto o vigilantes de casilla. Tres de los entrevistados se habían distanciado en el contexto de los conflictos partidistas de 1992 a 1994, que llevaron a la salida de Resistencia Nacional y del ERP. Sólo para una entrevistada –Marta, la dirigente de la sección femenina de la confederación de cooperativas CONFRAS-, cuya trayectoria como líder social empezó después de la guerra civil, el tema de la identidad partidista no resultó relevante en su narración.

Esta situación y el tema de la entrevista –participación social y militancia política en distintos contextos políticos- invitaban a hacer un balance sobre los costos de la lucha política y social, sus alcances y los límites de las reformas alcanzadas por medio de los Acuerdos de Paz. Hay dos temas que atraviesan los relatos de los entrevistados: primero, el balance si los logros obtenidos –principalmente la inclusión política a partir de la legalización del FMLN y el fin de la violencia política- valieron la pena de tanto sufrimiento y, segundo, aunado al primer tema, la valoración de la participación del FMLN en el sistema institucional de la posguerra.

Como se señaló anteriormente, cuando terminó la guerra en 1992 la desmovilización del ejército guerrillero afectó no sólo a los combatientes armados, sino también a las estructuras clandestinas

⁵⁴⁷ Francisca Márquez describe el relato de vida como una fotografía tomada desde un presente, una serie de fragmentos biográficos cuya relevancia en el presente no necesariamente corresponde a la que tuvieron en el pasado. Véase, Francisca Márquez, “La vida realizada-la vida postergada: la construcción biográfica en Chile”, *Perfiles Latinoamericanos*, México, No. 21, Diciembre 2002, pp. 73-98, especialmente pp. 75-76.

que habían articulado las organizaciones político-militares con los gremios sindicales y campesinos, y las ONGs de la segunda mitad de los años ochenta. Por lo tanto la “reinserción” a la vida civil no era sólo un momento crítico para los combatientes guerrilleros sino para todos los activistas obligados a redefinir su lugar en el campo político y sus lealtades ideológicas, sus lazos con el FMLN -ahora reconvertido en partido legal- y con las organizaciones sociales, en las cuales habían participado. El desenlace de este momento crítico en la trayectoria individual incide en la valoración que, desde el presente, se hace sobre el pasado militante.

Las tres citas al principio ilustran el balance ambiguo después de 12 años de paz. Por una parte, los entrevistados reconocen los avances que se lograron en términos de participación política con la desmilitarización de la sociedad y el (relativo) abandono de las estrategias de exterminio por la extrema derecha. El hecho de poder ejercer abiertamente una militancia de izquierda y mostrar la afinidad ideológica por medio de sus símbolos (las calcomanías, la bandera roja o camisetas con una estrella blanca y el nombre del FMLN) es considerado, por lo tanto, un cambio importante en las condiciones para hacer política.

Al mismo tiempo hay una marcada diferencia entre, por un lado, la coexistencia de izquierda y derecha en el campo político y, por otro lado, las restricciones que se siguen experimentando en el espacio social. A esta contradicción apunta la valoración de Ana que cuenta como en algunas empresas expresar la identidad partidista puede provocar, todavía hoy, un despido. Asimismo el comentario de Celso da cuenta como los ministerios se deshicieron de los sindicalistas de izquierda por medio de recortes de plazas y programas de retiro voluntario. María introduce otra temática que explica la ambigüedad de los balances: la democratización política no fue acompañada por una democratización social entendida como redistribución de los ingresos y riquezas. La percepción de María acerca de la reorganización económica y financiera del empresariado se refuerza con lo que sucede en el campo salvadoreño y que comentan Manuel y Marta de CONFRAS. Para ellos, la Reforma Agraria de 1980 fue revertida por los gobiernos de ARENA en los años noventa y su política de impulsar por vía legal la parcelación de las cooperativas agrícolas, lo cual ha iniciado un nuevo proceso de concentración de las tierras.

El balance del periodo transcurrido después de los acuerdos de paz depende de la trayectoria de cada entrevistado en los noventa, si la experimentó como un ascenso social o como una desvalorización de su posición y prestigio.⁵⁴⁸ Por ejemplo, para Adriana, quien inició su carrera

⁵⁴⁸ Véase la tabla de las trayectorias en el Anexo.

política como representante de las comunidades desplazadas de Suchitoto y terminó siendo concejal de las mujeres por parte del FMLN- los Acuerdos de Paz fueron un momento importante en su vida personal, por una parte, porque así finalizó la guerra y, por otra parte, porque siente satisfacción personal al recordar que ella contribuyó por medio de sus acciones a este particular desenlace del conflicto. Esta mirada positiva sobre los Acuerdos está relacionada con el contexto de apertura institucional que hizo posible la conversión de una líder social a concejal, profesional de una ONG y representante reconocida de las mujeres de su municipio.

A cambio, el liderazgo político y social de los dirigentes sindicales entrevistados se debilitó de manera importante después de 1992 en el contexto de una combinación infortunada de cambios económico-estructurales –que provocaron despidos y pérdidas de centralidad productiva- y los conflictos políticos al interior del FMLN. Por lo tanto sus visiones del periodo son marcadas por una sensación de progresiva marginación política que refuerza las conclusiones que la pacificación no cumplió sus promesas. Citamos como primer ejemplo a Horacio quien considera que su desencanto no deriva de la solución negociada del conflicto bélico –“como organización la militancia sabía que teníamos que hacer un proceso de negociación, que había que prepararse para ello y que no era el poder total lo que se iba a lograr” –responde a mi pregunta- sino darse cuenta que el movimiento sindical salvadoreño no contaba con un proyecto propio, es decir, que dependía en la formulación de su horizonte político y, por tanto, de sus estrategias de otro actor: el partido. Esta carencia salió a la luz, según él, cuando el vínculo entre organizaciones político-militares y sindicatos fue desmantelado. En otras palabras, cuando se desvalorizó el capital político de aquellos dirigentes sindicales, cuyo liderazgo se había formado conjuntamente con los vínculos con una organización político-militar. Al no contar con un proyecto propio, que podría dar sentido a la acción colectiva, el repertorio de protesta pierde sentido. Así, lo expresa Horacio:

Lo que vendés como dirigente es esperanza ¿verdad? Algún día mejoría y hay que construirla... y por supuesto que yo estoy satisfecho de lo que hice, me metí consciente en esto lo analicé, los riesgos ¿verdad? Yo discutí con mis hijos más grandes y con mi mujer... Pero es una cosa de, cuando tenés vocación de servicio ¿verdad? y no te llevan las intereses personales [...] Todo el proyecto de los trabajadores no hay, yo te lo aseguro, no hay, más que volver a salir a las calles a hacer huelga [...] mira, si yo tenía control desde el 75, 76, comienza la lucha ideológica y hasta 90, allá adentro y luego un poco de paz, y después vuelve la lucha ideológica y seguir en la misma idea... no fijate que estas cosas son las que para mí me agotan y a lo mejor por viejo pero ya la tolerancia como que se me agotó [...] y no sirvo para que me humillen yo no doy trato así, no me gusta sentirme ultrajado o humillado aislado, dependiente [...] de cierta manera te aíslan, ya no eres nadie importante, que no sos útil y entonces ¿qué estás haciendo?

Falta de importancia, de “utilidad”, de reconocimiento... con estas palabras describen los sindicalistas la desvalorización de su capital político. Para Celso, por ejemplo, la década de los

noventa es tanto la década de la pacificación como de la sucesiva pérdida de posiciones y cargos, lo cual ilustra la progresiva marginación del movimiento sindical en el campo político. Durante la guerra Celso fue dirigente nacional de la UNTS por parte de Resistencia Nacional -un puesto de carácter más político que gremial porque servía para dialogar directamente con los ministros del gobierno de Napoleón Duarte-, pero el desmembramiento de su organización política lo hizo perder sus cargos hasta quedar sólo como secretario general de una asociación sindical ministerial, el mismo cargo con el cual inició su carrera político-sindical antes del estallido de la guerra. En el 2004 seguía militando en el FMLN, por lo cual sus palabras expresan la tristeza por la marginación política, cuando señala que el FMLN aún no ha saldado sus deudas con el movimiento popular organizado, que puso tantos muertos durante la guerra sin obtener el reconocimiento correspondiente en las estructuras del partido.

Algunos militantes optaron por transferir sus habilidades organizativas y el compromiso ético a otros grupos sociales sin privilegios como, por ejemplo, las mujeres. La comparación de los puntos de partida de las trayectorias vitales de tres de las cinco entrevistadas -Ana fue trabajadora textil, Adriana esposa de un activista campesino y ama de casa, Marta viuda y trabajadora- y sus puntos de llegada -cuadros técnicos de ONGs, y en el caso de Adriana concejal municipal- permite ver que militancia política y participación social podían convertirse en mecanismos de ascenso social. La agenda feminista ayudó a que estas mujeres de origen popular recibieran las capacitaciones, incentivos y reconocimientos necesarios para que desde una posición de “activista inquieta” pudieran iniciar un camino propio como agentes en el campo político salvadoreño. Beneficiadas por un ambiente internacional, preocupado por el tema de la equidad y los derechos de la mujer, las exmilitantes entrevistadas apostaron a la politización de la identidad de género, para elaborar estrategias de acción, construir grupos y acceder a recursos. Pero hay que tomar en cuenta que para estas mujeres el catalizador inicial de sus potencialidades fue la participación en las organizaciones sociales vinculadas al movimiento guerrillero.

Un tema importante en estos relatos biográficos es el tema de la identidad política y de la organización partidista. Por más distante que estaban algunos de los entrevistados del FMLN, en el momento de realizarse las entrevistas, la reflexión sobre el partido, sus aciertos y errores, formaba parte de su discurso. En el tratamiento de esta temática había diferencias entre los que seguían militando en el FMLN y los que se habían salido. Los que abandonaron el activismo partidista en el periodo de la posguerra conciben al partido como un actor ajeno y lo valoran como tal. Pero a la vez participan, a través de sus amistades, el trabajo en ONG, gobiernos municipales del FMLN u organizaciones comunales, de las redes que conforman la sociedad civil salvadoreña, este conjunto

de organizaciones de base, sindicatos, gremios campesinos, asociaciones civiles, medios de comunicación, consultores y líderes de opinión que surgieron en el contexto de la pacificación y tienen sus raíces en el contexto de la guerra.

Los entrevistados que siguen participando en el FMLN, tienen una relación compleja con el partido. Por una parte identifican al FMLN como “su partido”, al mismo tiempo que siguen considerando las organizaciones político-militares ya disueltas como su “raíz partidista”. Los exmilitantes de Resistencia Nacional se sienten traicionados por su dirigencia, que abandonó el partido, y discriminados por los dirigentes actuales del FMLN que pertenecieron a otras organizaciones político-militares. Para enfrentar esta situación formaron el “Movimiento Patria para Tod@s” (MPT) como una red de organizaciones sociales e individuos que permite aparecer y negociar como grupo cohesionado con los dirigentes del FMLN. La tendencia de formar redes, corrientes o fracciones –por cierto, compartida por los militantes de las otras organizaciones- también da cuenta de la disposición de organizarse en torno a agendas programáticas y posicionamientos ideológicos que es el *habitus* político de la izquierda salvadoreña en particular y la izquierda radical en general.⁵⁴⁹

Ana, que trabajaba en el momento de la entrevista en la ONG Redes, coordinando proyectos productivos para mujeres, sigue siendo una militante del FMLN que critica al partido desde “adentro”, sintiéndose parte de la organización. Desde esta perspectiva “de adentro”, ella marca las diferencias entre el “nosotros” –la gente conciente que apoya o vota por el FMLN- y los “otros” que votaron por ARENA.

El Frente es fuerte, 700 mil votantes por el Frente es una cifra muy respetuosa; un millón 200 mil votantes por ARENA sería una cifra respetuosa si fuera realmente gente conciente ¿verdad?, gente que fue a votar sin amenaza, gente que no les decomisaron su DUI [Documento Único de Identificación] para que fuera a votar por ARENA, entonces para mí no es una cifra respetuosa porque realmente no es gente que votó concientemente... sino que mucha gente votó amenazada [...] *[sigue una parte en la cual Sandra explica las debilidades del partido a partir de cómo se desmembró la estructura partidista después de 1992 porque mucha gente “salen a ganarse la vida, después de pasar 12 años en la montaña” lo cual dificulta la consolidación organizativa]* se ha descuidado la organización rural, no hay, en los sectores rurales esa estructura de partido ¿verdad? Las mismas escuelas políticas van abriendo los ojos, le van abriendo los ojos a la gente, pero todo eso ha quedado descuidado ahora. Aquí en la capital, en las ciudades urbanas es donde se concentra la parte más fuerte del partido, porque es la

⁵⁴⁹ Lo que nos llamó la atención durante la investigación de campo, es que las lealtades a las organizaciones político-militares disueltas parecen reproducirse (aunque más leve) en la generación de nuevos activistas estudiantiles y partidistas. La reproducción de las diferencias partidistas, surgidas en los años setenta, a través de los mecanismos de reclutamiento y el medio familiar es una hipótesis que valdría la pena explorar en futuras investigaciones.

gente que tiene acceso a la información ¿verdad? Tanto escrita como televisiva, radial... no así la gente de la zona rural donde no hay energía eléctrica, donde no llega el periódico, que ahí funcionaría muy bien la organización partidaria, pero eso sí lo dejó descuidado el Frente...

Esta cita ejemplifica un tema recurrente en casi todas las entrevistas: los militantes sienten que la inserción del FMLN a las instituciones democráticas fue acompañada por el abandono de las estructuras de base a nivel local. La noción del partido se diferencia de la que dominaba en los años setenta y ochenta: la organización ya no es vista como un instrumento para imponer una visión del mundo, como fue en los setenta, tampoco un mecanismo de control en un medio hostil, como en los ochenta. En la década de los noventa el partido es concebido no sólo como una maquinaria electoral sino como un aglutinador de masas, una herramienta de organización con una ideología y políticas definidas que se enfrenta a otras fuerzas políticas, especialmente a ARENA. Pero sobre todo, el partido es “suyo”, el resultado palpable de sus esfuerzos y luchas.

Esta concepción se puede ver en la entrevista con Miguel, realizada pocos días antes de las elecciones. Al final de la entrevista esbozó algunas de las cuentas pendientes en el plano económico y social que el FMLN en el poder tendría que resolver:

Si hay un cambio de gobierno y este cambio abre las puertas del desarrollo con una banca de desarrollo rural, con asistencia técnica, con nuevos mercados, hombre digo, los pobres van a tener opción ¿verdad? Van a tener opción y van a poder cultivar más, van a poder abrir más fuentes de trabajo porque la mejor fuente de trabajo de este país estaba en el área rural [...] quitando los créditos, haciéndonos competir con productos subsidiados de los Estados Unidos, de los mismos productos que nosotros cultivamos aquí ¿cómo vamos a salir adelante?

Para Manuel la tarea estratégica a la que tiene que responder el proyecto político de izquierda sigue siendo el problema agrario porque es la razón estructural de la pobreza. Para otros entrevistados, provenientes del ámbito urbano y sindical, las cuentas pendientes de democratización –la libertad sindical, la realización de campañas electorales sin intimidación y amenazas, políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los pobres, etcétera- ocupan un lugar estratégico en sus reflexiones sobre la política y el papel del FMLN.

Analizar las entrevistas permitió ver la articulación entre el proyecto estratégico de la izquierda salvadoreña, con proyectos colectivos de grupos específicos que luchaban por tierra, derechos sindicales o el cese de la represión política y las apuestas individuales que daban sentido a la acción política. Los proyectos colectivos, al ser proyectos inconclusos y no cumplidos, siguen operando como ejes que constituyen un horizonte histórico y organizan la memoria. Pero al perder la

esperanza en la posibilidad de un cambio radical y profundo la militancia revolucionaria perdió su significado.

4.6. Conclusiones

El objetivo de este capítulo fue mostrar los múltiples efectos de la institucionalización partidista del FMLN sobre las organizaciones populares y el mundo social de la militancia. Uno de los fenómenos más característicos de los años posteriores a la finalización de la guerra ha sido la transformación de la polarización de la guerra entre dos fuerzas políticas en un esquema bipartidista dominado por ARENA y el FMLN. La consolidación del FMLN de ejército guerrillero al principal partido de oposición implicó una transición en dos planos: político-ideológica, al definir como horizonte histórico a un Estado socialista con una economía mixta y un Estado de derecho con mecanismos participativos para la sociedad civil; organizativa, al disolverse las cinco organizaciones político-militares para dar lugar a una nueva institucionalidad partidista, orientada a construir una estructura territorial capaz de movilizarse para la competencia electoral y enfrentar la desmovilización de la militancia política después de 1992.

No cabe duda que el FMLN es hoy en día una de las pocas organizaciones guerrilleras en América Latina que lograron transformarse en partidos legales de oposición sin perder relevancia política después de haber entregado las armas. Pero el avance electoral ha sido acompañado por disputas al interior del FMLN sobre cómo definir la naturaleza –socialista o socialdemócrata- del partido. Mientras que los “socialdemócratas” o “renovadores” han propuesto la modernización del discurso partidista, alejándose de mensajes demasiado radicales, para favorecer la apertura del partido a nuevos segmentos electorales y abrir, de esta manera, el acceso al gobierno nacional a través de elecciones, los “socialistas”, aunque no han puesto en cuestión el objetivo de acceder al gobierno mediante elecciones, han defendido el carácter socialista y revolucionario del partido y la necesidad de acompañar las luchas sociales para construir la mayoría necesaria para una victoria electoral.

El proceso de institucionalización del partido pasó por tres periodos y en cada uno de ellos la importancia que la dirección partidista atribuyó a su relación con las organizaciones populares cambió: entre 1992 y 1994, la atención del FMLN se centró en dos cuestiones: primero, asegurar la implementación de los Acuerdos de Paz y, segundo, preparar una estructura territorial que permitiera participar en las elecciones. Dentro de estas medidas, prestar atención a lo que sucedía con las organizaciones populares jugó un papel secundario, como se manifiesta en el distanciamiento del partido de los acontecimientos en el Foro de Concertación Social y Económica.

El segundo periodo abarca los años 1995 hasta julio de 1999, que se caracteriza por el control de la fracción “renovadora” sobre las instancias partidistas. En estos años, en los cuales las luchas sociales eran muy limitadas, el FMLN se concentró en apropiarse las prácticas de la lucha parlamentaria y en aprender a gobernar los municipios. Si bien apoyó a luchas sociales y organizaciones populares, los esfuerzos del partido se dirigían más hacia el plano de dominar y aprovechar los procedimientos de la democracia formal. El tercer momento inició con la recuperación del control sobre las instancias nacionales partidistas por la fracción “socialista” en la Convención Nacional Extraordinaria en julio de 1999 y coincidió con el primer auge de movilización política de la posguerra –la huelga de los trabajadores y médicos del Seguro Social-, lo cual implicó un mayor acercamiento a las organizaciones populares. Esto se evidenció en el apoyo que mostró la bancada legislativa del FMLN a las demandas de la Alianza Ciudadana en contra de la Privatización, al impulsar el Decreto Legislativo para prohibir la privatización del sistema de salud y en la campaña electoral del 2004.

Paralelamente a la consolidación del FMLN como partido político, en el campo de la sociedad civil organizada avanzó la dispersión, no por último debido a los efectos prácticos de los conflictos interpartidistas. Durante la década de los ochenta, cuando bajo la amenaza de la violencia del Estado cualquier otro conflicto parecía secundario, las diferencias entre organizaciones y militantes de diferentes organizaciones político-militares no se expresaron públicamente y fueron colocadas en un segundo plano. Por otra parte, fueron las estructuras partidistas que encomendaban y vigilaban no sólo la implementación de las líneas políticas estratégicas, sino también los recursos y fondos de las organizaciones, donde una parte se canalizaba a la estructura armada-clandestina y otra al trabajo de las organizaciones civiles. Este modelo de organización que extendía el mando político-militar a las organizaciones populares vinculadas al FMLN fue desmantelado después de 1992. Con la fragmentación de la UNTS, a partir del fracaso del Foro de Concertación Social y Económica y el retiro de Resistencia Nacional del movimiento sindical, desapareció el último actor que operaba según el esquema de participación de acuerdo a cuotas de las organizaciones político-militares, y que había funcionado durante la guerra como representación civil y vocero político del FMLN. Desde entonces, las alianzas entre organizaciones populares han sido muy dinámicas y de poca duración constituyéndose en función de coyunturas específicas y de conflictos sociales inmediatos.

La desmovilización de las estructuras clandestinas de la militancia política, la institucionalización del FMLN en un partido legal, el distanciamiento entre las estructuras propiamente partidistas y otras formas de organización, los conflictos entre grupos y corrientes fueron procesos centrales en la reconfiguración del campo político salvadoreño y en la marginación política de las organizaciones

populares. Desde la perspectiva de los militantes, estos cambios fueron contradictorios y ambiguos: por una parte la pacificación permitió el ejercicio de las libertades políticas para la izquierda, pero a la vez se aceleró, con el cierre neoliberal del campo político, la expulsión y marginación política de agentes sociales que habían “aprendido” a vincular reivindicaciones sociales con demandas políticas y a actuar fuera de los procedimientos formales del campo político.⁵⁵⁰

De acuerdo a su posición y las competencias adquiridas, los militantes emplearon una serie de estrategias para adaptar y reintegrarse a la vida civil después de la guerra. En las estrategias individuales de reinserción se reflejan tres grandes líneas de acción que denominamos *profesionalización* del activismo social, *gremialización* del sindicalismo e “*irse para la casa*”, es decir, tomar distancia de formas activas de participación política y social. En estas líneas de acción se reflejan las lógicas que han moldeado los vínculos entre sociedad civil y sociedad política en El Salvador de la posguerra y que expresan el nuevo sentido común sobre la política y el poder. La noción de espacio público se reduce cada vez más a lo estatal, la política a un actividad de expertos y el acceso al campo político depende de la posesión de conocimientos específicos y técnicos de los agentes. En esta coyuntura histórica, una de las arenas de lucha entre este nuevo sentido de época y el habitus militante -cuyas prácticas y disposiciones estaban orientadas a *politizar* los mundos sociales- son las definiciones en torno a la acción colectiva, su razón de ser, la legitimidad de determinados fines y las formas de protesta más adecuadas. Lo cual echa luz sobre la coexistencia conflictiva de nuevos y viejos actores y formas de protesta en las movilizaciones políticas de los últimos años.

Las entrevistas confirman que la desmovilización del FMLN -entendida como desmantelamiento de las estructuras político-militares- afectó no sólo a los miles de combatientes sino también a los militantes civiles que habían participado y dirigido las organizaciones populares de la izquierda e implicó, por tanto, una bifurcación importante en sus trayectorias vitales y políticas. Para construirse una nueva posición en el espacio social y político había que redefinir los vínculos con un partido que estaba en proceso de legalización y donde los grupos guerrilleros -principales puntos de referencia identitaria de los militantes- se estaban disolviendo. La redefinición del vínculo de cada uno de los militantes con el FMLN fue, por tanto, la otra cara de la construcción de una nueva institucionalidad partidista orientada a dividir las funciones de representación política, representación gremial y participación social.

⁵⁵⁰ Véase Capítulo I.

REFLEXIONES FINALES

“Creo que cuando me metí no tenía ninguna aspiración, lo único que me movía era que era importante trabajar por cambiar las condiciones de vida [...] el haber participado en el movimiento cambió muchas cosas de mí, yo dejé de ser una mujer pasiva [...] si alguien me hubiera conocido en aquella época y a la mujer que soy ahora, yo creo que sí notaría esa gran diferencia de la mujer de ayer y la mujer de hoy...”
Adriana

Poner un punto final al trabajo invita a reflexionar sobre el significado de esta investigación en términos personales y profesionales. Hacer esta tesis fue un proceso de aprendizaje en muchos sentidos. Por supuesto, significó aprender sobre El Salvador, la historia de sus luchas sociales y de los actores que enfrentaron la exclusión social y política, en contra de una oligarquía racista y clasista. También me permitió apreciar las especificidades de su movimiento revolucionario, los rasgos distintivos frente a sus pares contemporáneos en otros países latinoamericanos, incluyendo Guatemala y Nicaragua. Desde un punto de vista metodológico, esto implicó desarrollar una mirada más aguda e histórica sobre los procesos sociales y con una mayor precaución ante una de las tentaciones propias del pensamiento sociológico, como lo es la construcción de marcos explicativos abstractos para reducir la complejidad de lo social. Pienso que esta investigación me permitió incorporar la perspectiva histórica como una herramienta central para reconstruir las lógicas de la acción social y construir hipótesis empíricamente fundadas sobre causalidades y mecanismos que constituyen el mundo social.

La incorporación de la perspectiva histórica fue inducida y orientada por los referentes teóricos – principalmente Immanuel Wallerstein, Charles Tilly, Edward P. Thompson y Pierre Bourdieu- que usé para la elaboración del marco analítico. Comprender la articulación entre la transición exitosa del FMLN de frente guerrillero a partido legal en la década de los noventa, paralelamente a la dispersión organizativa de sus bases sociales en el movimiento popular fue la motivación que orientó la investigación desde un inicio, pero esta interrogante además estaba vinculada a la inquietud - teórica y política- de entender los efectos prácticos del ascenso del neoliberalismo y del derrumbe del “socialismo real” en Europa oriental sobre la relación que la izquierda había establecido entre movilización social y acción política. Mi intención era, entonces, entender los cambios en la izquierda salvadoreña como una expresión particular y nacional de un cambio más general, que ha afectado las modalidades de organización, las prácticas de protesta, los referentes y

los proyectos ideológicos de la izquierda en el ámbito internacional, y que condicionan hoy en día la acción colectiva contrahegemónica.

El enfoque explicativo de los Nuevos Movimientos Sociales ha sido frecuentemente usado para interpretar las formas de acción colectiva que emergieron en el contexto de la democratización de los Estados autoritarios. Pero estas conceptualizaciones no me parecieron apropiadas porque establecen una distinción entre “nuevos” y “viejos” sujetos sociales, entre agentes “democráticos” y “neo-populistas”, entre los que –de acuerdo a estas posturas- saben comportarse en los nuevos contextos políticos y los que siguen atados a demandas y denuncias añejas. De esta manera contribuyen a la naturalización de los mecanismos de dominación simbólica, que estigmatizan y excluyen a determinados actores sociales, y dificultan la orientación de la mirada sociológica hacia una mayor profundidad histórica. En esta investigación demostramos que es imposible entender por qué las políticas económicas instrumentadas por el gobierno de ARENA en El Salvador no generaron una mayor resistencia social, si no se toma en cuenta el contexto previo de la violencia política, y que tampoco pueden soslayarse los múltiples lazos que articulan a nuevos y viejos actores colectivos en la época de la posguerra.

En cambio, la conceptualización de los movimientos antisistémicos como complejas formas de acción social con una historicidad propia, siguiendo en esto a Charles Tilly, Immanuel Wallerstein y Edward P. Thompson, que emergen a partir de conflictos y antagonismos y entrelazan a agentes individuales y colectivos permitió visualizar el carácter multifacético y plurisectorial del movimiento revolucionario salvadoreño. Y esto implicó también reconocer que la unidad del movimiento representada en distintos momentos por diversos actores –por ejemplo, la Coordinadora Revolucionaria de Masas, el FMLN-FDR y la UNTS- no fue espontánea sino el resultado de estrategias políticas para construir dicha unidad. Con el cambio de la coyuntura política en la década de los noventa estas estrategias –como la lucha por la hegemonía y la militarización de la política - perdieron legitimidad y, por ende, su funcionalidad social.

Desde la perspectiva de la teoría del sistema-mundo, el movimiento revolucionario salvadoreño formó parte del (hasta ahora) último ciclo mundial de movimientos antisistémicos caracterizado por la participación de nuevos segmentos sociales (como mujeres, estudiantes, etcétera), la crítica a las metas y estrategias políticas de los viejos actores antisistémicos (partidos socialdemócratas, comunistas y populistas) y el uso de formas de acción directa, no mediadas por aparatos burocráticos. Pero hacia fines del siglo veinte, una serie de acontecimientos –representados emblemáticamente por el ascenso de los conservadores Ronald Reagan y Margaret Thatcher al

gobierno de EEUU y Gran Bretaña, respectivamente, la caída del muro de Berlín y la derrota electoral del FSLN- puso en duda certezas que habían orientado la acción antisistémica hasta este momento. Siguiendo esta lectura, la institucionalización del movimiento revolucionario salvadoreño en diversas formas de acción burocratizada y técnica –el FMLN como partido electoral, las ONGs especializadas en la representación de grupos particulares, las organizaciones comunitarias de desarrollo local y comercio justo, para nombrar solamente algunos ejemplos - no se debe exclusivamente a razones particulares, nacionales sino forma parte de estos cambios globales que han caracterizado la decadencia de las modalidades de acción antisistémica centradas en la toma de poder en el marco del Estado-nación.

Las explicaciones de Immanuel Wallerstein son sugerentes para entender la interdependencia entre procesos globales y nacionales en la constitución de actores colectivos, pero a la luz de los hallazgos de esta investigación plantean un problema que debería orientar futuras investigaciones. No podemos suponer automáticamente que estos cambios globales fueron percibidos e interpretados por *todos* los activistas y militantes del movimiento revolucionario salvadoreño de la misma manera. Esto se debe al carácter heterogéneo y multclasista del movimiento revolucionario salvadoreño: si bien había un marco cognitivo revolucionario compartido, su significado variaba de acuerdo a la trayectoria de los militantes y los mundos sociales donde ellos practicaban el activismo político. ¿Cómo impactó el cambio internacional en diversos espacios sociales y través de qué mediaciones? ¿Cuáles fueron las estrategias de adaptación? Estos son preguntas analíticas que pueden formularse a partir de conceptualizar la militancia como una práctica social. Abren el horizonte problemático y dan pistas para futuras investigaciones porque permiten pensar al movimiento no como un actor con una sola identidad social, sino como una unidad constituida por diferentes agentes sociales que, si bien comparten un horizonte de esperanzas políticas, no necesariamente coinciden en el espacio social.

Esto nos lleva a la hipótesis central del trabajo: la reestructuración del campo político salvadoreño fue producto, por una parte, de las respuestas de los sectores dominantes a la crisis política provocada por la movilización colectiva y, por otra parte, de las estrategias de reconversión de los representantes sociales de los excluidos. Siguiendo esta hipótesis, elaborada a partir de las teorizaciones de Pierre Bourdieu sobre el campo político, el acercamiento entre grupos guerrilleros y organizaciones populares iniciado en 1970 ya no aparece como una sucesión cronológica de encuentros y desencuentros entre agentes diversos sino como una serie de desplazamientos en un

campo político jerárquico y polarizado, donde cada posición permitía acceder a redes sociales, recursos y estrategias de acción. Esta hipótesis permitió llegar a varias conclusiones:

Primero, como demostraron las genealogías organizativas, el movimiento revolucionario salvadoreño tiene múltiples orígenes y raíces, por lo cual estudiar la institucionalización del movimiento revolucionario antisistémico en El Salvador obliga no sólo a tomar en cuenta la integración del FMLN en el sistema de partidos, sino también la transformación de las modalidades organizativas y prácticas de participación de los otros integrantes de la alianza revolucionaria, especialmente de las organizaciones populares, a partir del proceso de paz. En los años setenta, las organizaciones político-militares pudieron ampliar su influencia porque sus activistas participaron en las redes sociales de oposición y competían con otras fuerzas partidistas, especialmente el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, para obtener la adhesión y el apoyo político de activistas y dirigentes del movimiento popular. La confrontación de proyectos y estrategias –lo que dominamos lucha por la hegemonía– permitió a los militantes guerrilleros ampliar su influencia porque, en un ambiente de creciente violencia estatal, la apuesta a la radicalización y politización de los conflictos sociales hizo sentido. Tanto la movilización insurreccional en la segunda mitad de los setenta como la guerra en los ochenta operaron como mecanismos para cohesionar a actores con proyectos particulares en torno a los grupos guerrilleros del FMLN. Pero después de 1992, las apuestas particulares de los grupos que dominan el FMLN y las diferentes organizaciones sociales han operado como fuerzas de dispersión que dificultan las políticas de alianzas.

Segundo, el análisis de la emergencia del movimiento revolucionario resalta la centralidad de los espacios públicos no estatales como una condición esencial para la convergencia de actores sociales y la constitución de actores colectivos fuertes y unidos. Si bien los años previos a la guerra civil se caracterizaron por la censura y el cierre de las instancias formales de la representación política a la participación de la oposición, al mismo tiempo había un amplio espacio público no estatal –la Iglesia católica, las universidades, la calle, para nombrar algunos espacios–, dónde revolucionarios y reformistas se disputaban la hegemonía sobre el movimiento popular. Los debates sobre la vía más adecuada para lograr un cambio político y social en el país fueron posibles porque, al fin y al cabo, todos los actores compartían un mismo universo simbólico que incluía la primacía de lo político y lo público sobre lo privado y el mercado, y la confianza en las posibilidades de transformar la sociedad a través de la acción consciente de los sujetos (fuese este sujeto un individuo, colectividades o el Estado). Según nuestro juicio, el achicamiento de los espacios públicos no estatales en la democracia de la posguerra dificultan la deliberación política y la construcción de consensos, lo

cual ha contribuido al distanciamiento entre actores políticos y sociedad, tan característico del cierre neoliberal del campo político.

Tercero, comprender las lógicas de la acción políticas como consecuencia de vínculos y lealtades políticas entre actores con distintos niveles de organicidad, apuestas políticas y esperanzas colectivas es complejo y no debe ser reducido a términos como “sobreideologización” o “sobrepolitización”. Desde antes de la década de los setenta, una estrategia de la oposición política salvadoreña para enfrentar la exclusión política fue vincularse con otros actores sociales –como, por ejemplo, sindicatos, colectivos estudiantiles o grupos eclesiales- que asumieron ante el régimen militar el papel de voceros políticos. Esto significó que las fronteras entre actividades de representación sectorial de intereses sociales y representación política se difuminaron, dando lugar a alianzas sociales heterogéneas y plurisectoriales que identificaban en el aparato estatal y el régimen militar los principales obstáculos a la democratización política y al desarrollo socioeconómico del país. En el caso de las organizaciones populares, la exclusión política y los obstáculos para la actividad legal, produjeron prácticas de movilización y modalidades de organización “movimentistas”, caracterizadas por una creciente indiferencia por el marco jurídico que regulaba la participación social. Estos actores compartían el rechazo a los lazos clientelares y corporativos de las organizaciones sectoriales pro-gubernamentales, la preferencia por la acción directa y la tendencia de formar alianzas multisectoriales apoyadas en afinidades ideológicas.

Durante la guerra civil parecía que la ideología dejaba de operar como un principio de oposición en el campo de la alianza revolucionaria debido a que las amenazas externas –específicamente el terrorismo de Estado-, la identificación de un enemigo común y las estrategias político-militares aprobadas al interior de la Comandancia General del FMLN actuaron como eficientes mecanismos de cohesión. La estructura bipolar del conflicto se expresó en el ámbito de la sociedad civil organizada en la emergencia de la UNTS y la UNOC como dos actores colectivos –en realidad alianzas de organizaciones- que representaban a los dos proyectos políticos en pugna. Pero con el ascenso de ARENA al gobierno y la pulverización partidista del PDC, el adversario principal del FMLN en el campo político y bélico cambió.

Los Acuerdos de Paz de 1992, la desmovilización del aparato militar del FMLN y los conflictos entre las cinco organizaciones político-militares, que llevaron a la salida de RN y el ERP, cambiaron las condiciones para la acción política pero sin cortar lealtades políticas establecidas. Esto permite entender porque tanto el distanciamiento del aparato partidista del FMLN, ocupado en los preparativos para la contienda electoral de 1994, como los conflictos entre partidos contribuyeron a

la dispersión de la UNTS y las escisiones en organizaciones como FENASTRAS o ANDES. La militarización de la política que durante la guerra había funcionado como un mecanismo eficiente para que los militantes clandestinos impulsaran las líneas político-militares de su organización y del FMLN, se volvió contraproducente para la cohesión organizativa de la posguerra porque no proporcionó mecanismos adecuados para procesar las diferencias internas sin romper la organización. Más que “sobrepolitización” fue la militarización de la toma de decisiones al interior de las organización que preparó la dispersión, al no proporcionar mecanismos adecuados para procesar conflictos internos.

En cuarto lugar, con la pacificación y la finalización de las concepciones bipolares del conflicto político, el habitus militante –entendido como el sistema de disposiciones interiorizados en el cuerpo y la mente, que se había conformado a partir de las actividades para impulsar el proyecto contrahegemónico en un contexto autoritario y represivo- empezó a aparecer como una actitud anacrónica e incluso contraproducente para la inserción de la izquierda en el orden posbélico y el sistema de partidos. Con la figura del político electo del FMLN (alcaldes, concejales, diputados), la figura del militante como promotor de un proyecto contrahegemónico y bisagra entre mundos sociales y el campo político, tendió a perder relevancia. Con la creciente legitimidad de la lógica electoral al interior de la izquierda, las estrategias que durante la guerra habían funcionado para mantener con vida el proyecto de la izquierda, fuera de los frentes de guerra, perdieron su funcionalidad –es decir su sentido- con la legalización del FMLN. En este sentido, podemos interpretar las disputas entre ONGs, organizaciones sectoriales y fracciones partidistas no sólo como una pelea por recursos (materiales, redes sociales y la apropiación de símbolos) sino también como una disputa por redefinir el sentido y la relación entre los ámbitos de la acción política y social y por aclarar la interacción entre éstos.

La emergencia de un nuevo sentido común sobre los límites de la acción colectiva y la necesaria separación entre actividad política y activismo social no fue exenta de violencia simbólica. El cierre de opciones de cambio y el achicamiento del horizonte histórico fueron aspectos de la transición de los noventa que se expresan en los relatos biográficos como una pérdida de referentes personales (la “traición” de los líderes de RN y ERP) e ideológicos (la insuficiencia del marco cognitivo revolucionario para interpretar los cambios políticos en el ámbito nacional y global), y como una marginación política individual. A esto se añade la estigmatización de la protesta social y de la acción directa por los medios de comunicación y los gobiernos de ARENA como expresiones disfuncionales de sectores poco integrados al consenso posbélico o grupos manipulados por la dirección del FMLN. En este sentido, hay que leer los cambios en la acción colectiva salvadoreña en

el contexto de la crisis de los referentes simbólicos de la izquierda centroamericana después de 1990 y de la recuperación del poder hegemónico de la derecha.

Esto lleva a retomar la noción de experiencia social que usa Edward P. Thompson para analizar la resistencia y las tradiciones de protesta colectiva: Como se puede ver en los relatos biográficos, ciertos acontecimientos de las décadas de los setenta y ochenta –por ejemplo, el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, los “tiempos de muerte” del periodo de 1981/1982 se han transformado en tópicos centrales de la memoria de la izquierda que integran los esquemas colectivos de interpretación de las experiencias individuales, más allá de las representaciones oficiales del pasado cercano que constituyen la memoria institucional del FMLN. En los conflictos políticos contemporáneos estos dispositivos imaginarios⁵⁵¹ entran en acción no solamente para conferir sentido a la acción colectiva, sino también para identificar a adversarios y a posibles aliados. Tomarlos en cuenta ayudará a entender las lógicas de acción política que se activan en el campo político salvadoreño cada vez que se avecina un conflicto social o -y esto cada vez más- una contienda electoral. Y esta advertencia aplica no solamente para la cultura política de la izquierda sino también para la derecha.

En quinto y último lugar, una conclusión importante de la investigación es la confirmación que, en la actualidad, una limitante importante para la acción colectiva es el orden sociopolítico de la posguerra con sus nuevos (y viejos) mecanismos de exclusión de determinadas demandas sociales. A diferencia de la década de los setenta y ochenta, los grupos dominantes agrupados en torno a ARENA no han buscado –al menos hasta ahora- prohibir la representación electoral de la izquierda a través de la exclusión política del FMLN, si bien han aprovechado su posición estratégica de control sobre las instancias estatales para impulsar, por medio de iniciativas legales, acciones que criminalizan la protesta social. Como señalamos en este trabajo, el ninguneo, la cooptación y la criminalización de la protesta social han sido prácticas recurrentes de los gobiernos de ARENA para impedir que acciones que puedan afectar, aunque mínimamente, el orden sociopolítico o los intereses dominantes tengan algún efecto en el campo político.

Hay dos estrategias que se han empleado desde el poder para asegurar la conservación del orden sociopolítico: por una parte, el Poder Ejecutivo ha buscado autonomizar las estrategias macroeconómicas de las dinámicas y correlaciones de fuerza que dominan las instituciones representativas, especialmente la Asamblea Legislativa. Medidas como la integración de El Salvador

⁵⁵¹ Véase, B. Bazco, *op.cit.*, 2005.

al mercado estadounidense a través del CAFTA, o la dolarización de la economía en el 2001, no solamente han beneficiado a grupos empresariales vinculados a los circuitos financieros y comerciales internacionales, también pueden ser interpretadas como mecanismos de “blindaje” económico ante eventuales cambios políticos. Detectamos una situación paradójica, que condiciona las prácticas de movilización política y de actores sociales: mientras, por una parte, a partir de 1992 se construyó una institucionalidad que permite más participación política y social a los grupos históricamente excluidos, cambiar las políticas estratégicas parece estar cada vez más fuera del alcance no sólo de quienes, al encontrarse “fuera” de la institucionalidad establecida son ninguneados y criminalizados, sino también de los actores políticos que respetan las reglas de juego de la democracia representativa.

La segunda estrategia de los grupos dominantes tiene que ver directamente con impedir las posibilidades de un cambio gubernamental por medio de la única vía que parece legítima en estos momentos: las elecciones. La campaña electoral de 2004 –en cuyo contexto se realizó el trabajo de campo para esta investigación- demostró la voluntad y capacidad de la derecha política y social de reciclar prácticas de estigmatización, intimidación y exclusión política de la izquierda con el objetivo de imposibilitar la constitución de una opción política alternativa con posibilidades de ocupar la presidencia.⁵⁵²

Cabe la pregunta por los efectos prácticos que tendrá la voluntad de impedir, desde el poder, un cambio político por la vía institucional: ¿se abrirá nuevamente la caja de la Pandora para iniciarse un ciclo más de violencia política? ¿O, simplemente, crecerá la brecha entre agentes que se mueven en el reducido espacio de la democracia formal y una sociedad civil dispersa y atomizada, controlada por un aparato estatal autoritario y con un segmento importante de la población buscando opciones de salida por medio de la migración? Ante estas preguntas hay que señalar que fue la creciente represión estatal en la segunda mitad de los setenta que contribuyó a la radicalización política de un segmento importante de activistas sociales y políticos, y legitimó la vía insurreccional como única estrategia posible para destruir el Estado militar y combatir la desigualdad social.

⁵⁵² La estrategia de la criminalización se evidencia también en la Ley Antiterrorista, aprobada el 21 de septiembre de 2006, por todos los partidos de la Asamblea Legislativa, con excepción del FMLN, que introduce penas de 5 a 65 años para acciones que atenten en contra de la “seguridad” y provoquen “alarma” en la población. La ley ha sido criticada por no definir claramente los actos terroristas por lo cual permiten criminalizar actos de protesta y a movimientos sociales.

Pero así como la violencia contribuyó (entre otros factores) a detonar la crisis revolucionaria, también fue contraproducente para la acción colectiva. Si señalamos que hay que tomar en cuenta la guerra civil para entender las modalidades de pacificación en El Salvador queremos decir que no se debe omitir el hecho que el terrorismo de Estado de principios de los ochenta operó como un mecanismo eficiente de disciplinamiento y despolitización que preparó el terreno para que 10 años después los mecanismos del mercado pudieran funcionar como mecanismos eficientes y silenciosos de control social.

Hasta aquí los resultados principales de la tesis. Pero trabajar cinco años en torno a un tema de investigación lleva también a un balance y una recapitulación personal sobre el objeto de estudio. La indagación sobre el significado de la participación en una organización político-militar, desde la perspectiva de activistas sindicales y campesinos, y sobre la resignificación de la militancia política después de los Acuerdos de Paz me llevaron a reflexionar sobre los vínculos entre militancia y movilización social. Hoy en día, la participación de militantes políticos en organizaciones (campesinas, sindicales, barriales) de base tiende a interpretarse sin muchos matices como una manipulación partidista de necesidades sociales o sectoriales, y la introducción de disputas sectarias en los movimientos sociales. Esta concepción, que tiende a presuponer una unidad espontánea de los movimientos sociales es, en realidad, el resultado de una serie de procesos de resignificación por medio de los cuales lo político se percibe como separado de la sociedad, como un asunto de profesionales y expertos de la gestión pública. Pero en el caso de esta tesis, para entender los efectos prácticos que tuvo la legalización del FMLN en las organizaciones populares, había que cuestionar esta interpretación y pensar la militancia como una práctica social orientada al impulso de proyectos colectivos, y como una institución que vincula el campo político con mundos sociales específicos. Constatar la importancia de redes sociales, sentimientos de pertenencia sectorial o comunitaria y marcos ideológicos en la constitución del movimiento revolucionario salvadoreño lleva a nuevas preguntas y líneas de investigación en torno al anclaje social y geográfico de las culturas políticas -de izquierda pero también de la derecha-, cómo éstas se constituyen y de qué manera han cambiado.

Estos hallazgos se convirtieron, además, en puntos de partida para una reflexión política que ha acompañado el proceso de investigación y la redacción de la tesis, y que aún está inacabada: Partiendo de la premisa que en la constitución de movimientos sociales confluyen diferentes lógicas sociales, entre ellas lógicas de representación política y de representación sectorial, ¿cómo podemos valorar estos entrelazamientos y los resultados de esta vinculación? En otras palabras, ¿qué distingue, por ejemplo, a un sindicalista con militancia política de uno sin militancia? ¿En qué

momento, y por qué razones la participación de activistas políticos en un movimiento social puede calificarse como una injerencia de intereses ajenos, como la palabra “manipulación” hace suponer? ¿Cuándo puede considerarse, en cambio, una estrategia legítima para otorgar significado y direccionalidad a los intereses particulares de una lucha social específica, al vincularla con un proyecto político global? ¿Desde qué perspectiva puede hacerse esta valoración?

Por varias razones, esta investigación no ofrece una respuesta unívoca a estas interrogantes: por una parte, porque yo no llegué a una conclusión definitiva sobre este problema. Si bien estoy consciente de que representación partidista y representación sectorial responden a distintas lógicas sociales de acción, que no siempre pueden ser reconciliadas, diferenciar las dos lógicas en el análisis de un movimiento social concreto –como en este caso el movimiento revolucionario salvadoreño- a veces resulta imposible. Esto se debe a qué, bajo ciertas condiciones históricas, las trayectorias sectoriales de los agentes sociales pueden estar íntimamente vinculadas con sus identidades políticas, y viceversa. Por otra parte, como demostró la reconstrucción del vínculo entre organizaciones político-militares y organizaciones populares, la delgada frontera entre “manipulación” y ampliación legítima del horizonte político de una lucha social se define siempre en la práctica militante, en el momento histórico específico y de acuerdo con tradiciones políticas nacionales. Las genealogías dan cuenta que en El Salvador el factor crucial para entender la dispersión del movimiento popular a principios de los noventa no fue su politización –vincularse con fuerzas político-partidistas ha sido una estrategia de los dirigentes de las organizaciones populares desde antes que aparecieran las organizaciones armadas en la escena política-, sino la militarización de la política, producto de la guerra, que incrementó la autonomía institucional y el poder económico de las Fuerzas Armadas, pese a la existencia de un gobierno civil, y transformó a todos los actores políticos en actores que jugaban algún rol en las estrategias militares. En el caso de la izquierda, la diseminación de las jerarquías basadas en criterios militares, la compartimentación sectorial que abolió las condiciones para la convergencia multisectorial de los militantes civiles del FMLN, y el cierre de los espacios públicos no estatales (como la universidad, la iglesia, las asambleas sindicales), como consecuencia de la represión estatal, fueron factores que reforzaron la centralización en la toma de decisiones y el verticalismo en la implementación de las líneas de acción. Pero hay que señalar que esta lógica militarizada de la política dominaba no solamente la relación entre organizaciones populares y Comandancia General del FMLN, sino operaba también al interior de las organizaciones populares definiendo la relación entre dirigentes y sus bases. Después de la guerra, la ausencia de mecanismos institucionales para procesar conflictos, permitió que los desacuerdos en torno a la transición partidista, el nuevo papel de las organizaciones

populares y la relación entre partido y movimientos sociales, llevaran a las ya conocidas escisiones organizativas y la desmovilización individual de muchos activistas y colaboradores.

Buscar las razones de la fragmentación y el debilitamiento de las organizaciones populares solamente en sus vínculos con la izquierda armada no permite visualizar otros factores en juego. La sociedad civil es por naturaleza un espacio conflictivo, de confrontación de intereses que pueden llegar a ser antagónicos. Si no existen espacios públicos independientes del Estado, donde pueden constituirse alianzas amplias entre agentes sociales, se debaten ideas y construyen consensos, y tampoco mecanismos participativos para plantear propuestas ante instituciones estatales e incidir en la agenda gubernamental, la constitución de sujetos autónomos y fuertes se dificulta. El nuevo orden sociopolítico, moldeado por la liberalización económica, la desregulación financiera y la dolarización, ha provocado una creciente autonomización del campo político basada en criterios sumamente restrictivos de acceso. Estas condiciones de posibilidad para la movilización y participación generan dos efectos: por una parte, no favorecen la constitución de organizaciones sociales fuertes, independientes y amplias, con propuestas alternativas y novedosas sobre la democracia, la participación o el modelo económico. Por otra parte, impulsa a las organizaciones de la sociedad civil seguir la tradición de buscar aliados partidistas como una estrategia para obtener mayor visibilidad y dar más fuerza a sus demandas, llevándolas a la arena política de las instituciones representativas.

En cuanto a los aspectos académicos de este trabajo, la inclinación de las ciencias sociales por objetivar lo social se refleja en una presentación de los resultados que se caracteriza, generalmente, por dedicar un espacio reducido a relatar cómo se construyó el objeto de estudio y cuál fue la influencia de otros (colegas, asesores, amigos e informantes del campo estudiado) en dicho proceso, al menos que se trate de un trabajo explícitamente metodológico. La reflexión y problematización a partir de los hallazgos empíricos no hubieran sido posibles sin la interacción y los espacios institucionales que ofreció el Posgrado de Estudios Latinoamericanos con el acompañamiento de mis asesores Raquel Sosa Elízaga, Irene Sánchez Ramos y Mario Vázquez Olivera, cuyas preguntas y aclaraciones me llevaron a precisar algunas interpretaciones y abandonar otras que resultaron imposibles de sostenerse ante la crítica. Los debates con los compañeros en el seminario de investigación dirigido por Susana García Salord en el Posgrado de Ciencias Sociales fueron un aprendizaje más para dejar de percibir a la teoría social como sistema absoluto que condiciona la investigación, y verla más bien como un depósito de conceptos heurísticos e hipótesis sobre posibles causalidades y mecanismos sociales que permiten orientar la investigación, generar preguntas y romper con lo que para el sentido común es incuestionable.

Reconocer el carácter colectivo de la construcción de conocimiento implica también dar cuenta que muchas de las elaboraciones teóricas sobre los hallazgos de la investigación son, en realidad, precisiones en lenguaje sociológico elaboradas a partir del conocimiento práctico de los entrevistados. Sus relatos sobre los cambios que sufrió la relación entre movilización social y acción política desde que ellos entraron a la vida política, sobre las transformaciones del FMLN a partir de su legalización como partido electoral y la evaluación de sus propios errores y aciertos fueron puntos de partida clave para elaborar los argumentos centrales de esta tesis. Leer una y otra vez sus relatos me hizo revivir el respeto que sentí durante la entrevista por las decisiones de estas personas de, literalmente, “tomar posición” en una coyuntura donde combatir la exclusión social, racial y política ponía en peligro la integridad física de quienes asumieron este compromiso, así como la de familiares y amigos. Lo cual me lleva a concluir que la marginación de las experiencias de la militancia civil de las organizaciones político-militares en la memoria de la izquierda salvadoreña es uno de los obstáculos para elaborar un nuevo proyecto contrahegemónico, lo suficientemente fuerte para enfrentar el proyecto de la derecha. La incapacidad de dar cuenta del pasado es una barrera para pensar el futuro.

Este balance impone también la necesidad de preguntarse por los efectos políticos e institucionales de la movilización revolucionaria. ¿Valió la pena la movilización y confrontación política, tomando en cuenta el gran número de muertos, desaparecidos y desplazados? Esta pregunta, a la cual solamente se puede responder de manera subjetiva, estaba presente en las entrevistas con los militantes y activistas sociales. Ellos reconocen el carácter contradictorio de los resultados políticos y sociales de la movilización revolucionaria que se refleja en la realización incompleta de los Acuerdos de Paz.

Pero los Acuerdos abarcan solamente las dimensiones institucionales del cambio, cristalizadas en reformas al aparato estatal y el acceso limitado de las contraélites políticas del FMLN a las instancias gubernamentales y administrativas. Sus alcances y limitaciones evidencian que – efectivamente – en El Salvador no se ha logrado un cambio de régimen pese a la movilización revolucionaria. Sin embargo, los relatos biográficos permiten apreciar una dimensión menos estudiada de la transformación social, que trasciende el ámbito de las instituciones y partidos y enfoca los mundos sociales en donde se practica la participación política. La crisis revolucionaria de fines de la década de los setenta y la guerra de los ochenta impactó en una generación de militantes políticos y activistas sociales, al reorientar trayectorias laborales, educativas y familiares. Analizar estas trayectorias muestra como, más allá de las estructuras partidistas y el aparato militar del

FMLN, operaban redes clandestinas, prácticas sociales y estrategias “tras bambalinas” orientadas a construir y conservar contrahegemonías en mundos sociales específicos. La presencia del FMLN en el país se mantuvo durante la guerra no solamente gracias a su fuerza militar sino también gracias a la labor de estos militantes clandestinos. Como demuestra esta tesis, la desmovilización del aparato político-militar afectó también a estas redes.

Constatar esta situación genera la pregunta por la suerte de estos hombres y mujeres, una vez que las condiciones políticas que habían exigido la clandestinidad cambiaron. ¿Qué sucedió con sus redes sociales? ¿Cómo se modificaron sus lazos con la organización política? ¿Qué los motivó a seguir participando en una organización política o social, cambiar de lealtad política o salirse completamente? ¿Cuáles fueron los costos personales y familiares de la militancia política? ¿Y qué aportó la participación política a la vida personal? Los resultados de esta investigación dan algunas pistas, pero sobre todo apuntan a una nueva y rica vertiente para la investigación sobre las transformaciones que ocurren al interior de movimientos revolucionarios cuando pierden su carácter antisistémico, y sus vertientes mayoritarias se insertan en el sistema político.

Analizar los relatos biográficos permitió visualizar aspectos que van más allá de las dimensiones institucionales de los Acuerdos de Paz para valorar el impacto del movimiento revolucionario. Si bien la crisis de la segunda mitad de los setenta no pudo derrumbar el sistema de dominación obligó a los grupos dominantes a abrir espacios institucionales a la participación de la izquierda. Las trayectorias políticas de los entrevistados dan cuenta de que la militancia en el contexto específico de la pacificación salvadoreña –que se caracterizaba por la activa participación del FMLN, de organizaciones de base y ONGs en la instrumentación de los Acuerdos de Paz- permitió a algunos acceder a ciertas instancias políticas y gubernamentales, como, por ejemplo, gobiernos municipales. Esta situación apunta al debilitamiento de algunas barreras sociales y culturales que impidieron, hasta ese momento, que agentes históricamente excluidos por razones de clase, género o pertenencia étnica participaran en el ejercicio político. El ejemplo más claro lo encontramos en las trayectorias de las activistas entrevistadas, porque ejemplifican la visibilización política de las mujeres –de clase media, origen obrero y también de origen campesino- en diversas instancias de movilización y representación. Usar creativamente el discurso de género les permitió abandonar el rol de “hormigas del movimiento” y asumir papeles de dirigencia política y social, ocupando posiciones que les ofrecen una mayor autonomía social e individual. Estos casos invitarían a un estudio más sistemático sobre las nuevas modalidades de participación femenina en organizaciones políticas y de la sociedad civil. Pero no solamente esto: también apuntan a una faceta poco estudiada de las organizaciones revolucionarias, que en el caso salvadoreño parece haber sido

importante en la ampliación de la influencia social del FMLN: la militancia política operó como un catalizador de potencialidades individuales porque permitió que activistas destacados adquirieran capital cultural, social (y en ciertos casos incluso económico). Es decir, para algunos hombres y mujeres de origen popular con disposición y voluntad de participar en una organización política y social, ésta sirvió como un mecanismo de ascenso social.

Pero no hay que olvidar que las trayectorias reseñadas en esta investigación son excepcionales porque el debilitamiento de las barreras sociales a la participación política benefició principalmente a este pequeño segmento de militantes y cuadros políticos, que no se “fueron a la casa” y no a las bases sociales del movimiento revolucionario en general. Pero los casos de estos hombres y mujeres ejemplifican la ampliación de la sociedad civil organizada donde coexisten, de manera conflictiva, formas organizativas y prácticas de participación y representación, surgidas antes y durante la guerra civil, con nuevas demandas, intereses sociales y grupos representados. Los relatos biográficos indican que una de las tendencias centrales del activismo de la posguerra fue la transferencia del compromiso ético y político, que durante la guerra había sido con la causa revolucionaria, a la representación de grupos sociales específicos como, por ejemplo, mujeres o trabajadores. Esto puede interpretarse como una nueva lógica en las prácticas de representación que reemplaza, como principio para acceder al campo político, el *imperativo ideológico* por un *imperativo técnico*, más neutral y que reconoce la importancia del conocimiento específico (la *expertise*) para participar en los debates sobre la política y el Estado. Pero este fenómeno apunta también a la disposición de un grupo social (pequeño pero existente) de continuar con la defensa de los sectores vulnerables y de participar en el campo político como sujetos que no permiten que su actividad política sea limitada a la participación electoral e instrumental.

La diversificación de las modalidades de organización se hizo posible a partir del distanciamiento entre expresión partidista del movimiento revolucionario y organizaciones sociales. Ambas modalidades de organización –con sus múltiples ramificaciones ideológicas y sectoriales– han contribuido a una subcultura de izquierda que trasciende las estructuras partidistas del FMLN e imprime con sus horizontes históricos y prácticas simbólicas, con sus conflictos históricos y apuestas colectivas una marca particular a la política salvadoreña de la posguerra.

Febrero de 2008

BIBLIOGRAFÍA

- Abarca, Alejandra y Bernabe Celis. S.S. *Sobre la problemática interna del FMLN*, mimeo, s/l, 19 de Agosto 2005.
- Aceves Lozano, Jorge (comp.), *Historia oral*, México, Instituto Mora/UAM, 1993.
- Agenda Político-social de Concertación Laboral y Social "Primero de Mayo"*, mimeo, s/l, 2002.
- Alas, José Inocencio, *Iglesia, tierra y lucha campesina, Suchitoto, El Salvador 1968-1977*, San Salvador, Asociación de Frailes Franciscanos, OFM de CA, 2003.
- Alvarenga, Patricia, *Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880-1932*, San José, Educa, 1996.
- Álvarez, Antonio y Joaquín Mauricio Chávez, *Tierra, conflicto y paz*, San Salvador, Colección Estudios de Paz/CEPAZ, 2001.
- Amin, Samir et.al., *Transforming the Revolution. Social Movements and the World-System*, New York, Monthly Review Press, 1990.
- Andrade-Eekhoff, Katherina y Claudia Marina Silva-Ávalos, *Globalización de la Periferia. Los desafíos de la migración transnacional para el desarrollo local en América Central*, Documento de Trabajo, San Salvador, FLACSO, septiembre de 2003.
- Arfuch, Leonor, *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea*, Buenos Aires, FCE, 2002.
- Arrighi, Giovanni, Terence K. Hopkins, Immanuel Wallerstein, *Movimientos antisistémicos*, Madrid, AKAL, 1999.
- Arriola Palomares, Joaquín y José Antonio Candray: *Derechos Prohibidos. Negociación colectiva y sindicatos en El Salvador*, UCA, Serie Documentos de Investigación No. 1, San Salvador, mayo de 1994.
- Arzú, Marta Elena y Rolando Castillo (eds.): *Centroamérica. Balance de la década de los 80. Una perspectiva regional*, Madrid, CEDEAL, 1993.
- Augé, Marc, *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*, Barcelona, Gedisa Editorial, 2004.
- Baczko, Bronislaw, *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas*. Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 2005.
- Benjamin, Walter, *Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze [Sobre la crítica de la violencia y otros ensayos]*, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1965.
- Bermúdez, Lilia, *Guerra de Baja Intensidad. Reagan contra Centroamérica*, México, Siglo XXI, 1989.
- Bertaux, Daniel, *Los relatos de vida*, Paris, Ed. Nathan, 1997 (traducido por Monica Moons para Metodología de la Investigación II, Universidad Nacional de Salta/Argentina, Julio 1999).

Bethell, Leslie (ed.), *Historia de América Latina. América Central desde 1930*, Tomo 14, Barcelona, Cambridge University Press/Crítica, 2001.

Bloque Popular Revolucionario, *Alternativa del pueblo: El Bloque Popular Revolucionario BPR*, El Salvador, mimeo., 11 de julio de 1976.

La Burguesía celebra un aniversario más de su independencia de España. Volante, El Salvador, Septiembre de 1978.

Sobre los métodos de trabajo, Documento interno de la Comisión Nacional de Formación Político-ideológica del Bloque Popular Revolucionario, Dirección Ejecutiva Nacional del BPR, El Salvador, mimeo., agosto de 1980.

Bodemer, Klaus, et.al., *Violencia y regulación de conflictos en América Latina*, Caracas, Nueva Sociedad, 2001.

Bodemer, Klaus y Eduardo Gamarra (eds.), *Centroamérica 2020. Un nuevo modelo de desarrollo regional*, Caracas, Nueva Sociedad, 2002.

Bonnwitz, Patrice, *La sociología de Pierre Bourdieu*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 2003.

Bourdieu, Pierre, *Sociología y Cultura*, México, CONACULTA/Grijalbo, 1990.

¿Qué significa hablar? Economía de Intercambio, Madrid, Ed. Akal, 1992.

Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997.

Intelectuales, política y poder, Eudeba, Buenos Aires, 1999.

Poder, Derecho y Clases Sociales, Bilbao, Ed. Descleé de Brouwer S.A, 2000.

La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, México, Taurus, 2002.

Entrevistas, textos y conferencias, La Paz, Ed. Plural, 2002.

Bourdieu, P., et.al., *Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft [La miseria del mundo. Testimonios y diagnósticos del sufrimiento cotidiano por la sociedad]*, Konstanz, UVK, 1997.

El oficio del sociólogo, México, Siglo XXI, 2002, (23ª Edición).

Boyce, James, (coord.), *Ajuste hacia la Paz. La política económica y la reconstrucción de posguerra en El Salvador*, México, PNUD/Ed. Plaza y Valdez, 1999.

Byrne, Hugh, *El Salvador's Civil War. A Study of Revolution*, London/Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1996.

Cabarrús, Carlos Rafael, *Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador*, México, Ediciones de la Casa Chata, 1983.

Calveiro, Pilar, *Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70*, Buenos Aires, Ed. Norma, 2005.

Camacho, Daniel et.al, *Autoritarismo y alternativas populares en América Latina*, San José, FLACSO/EUNED, 1982.

Cardenal, Ana Sofía y Salvador Martí i Puig, *América Central, las democracias inciertas*, Madrid, Ed. Tecnos, 1998.

Cardona, Amílcar Efrén, *Estado de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del sector público*, San Salvador, CENTRA, 1999.

Cardenal, Rodolfo y L.A. González (comp.), *El Salvador: la transición y sus problemas*, San Salvador, UCA Editores, 2002.

Cativo, Marco Antonio R., *Reforma del Sector Salud. Una necesidad impostergable para la Nación*, Comunicado del STISSS, mimeo., San Salvador, agosto del 2001.

Cavarozzi, Marcelo y Juan Manuel Abal Medina (comp.), *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*, Rosario, Homo Sapiens Ed., 2002.

Cayetano Carpio, Salvador, *La huelga general obrera de abril 1967*, San José/Costa Rica, Imprenta Elena, 1968.

Nuestras montañas son las masas. Documentos y escritos de la revolución salvadoreña, Viena, Ed. "Der Keil", 1999.

CENTRA, *Situación de las Organizaciones Sindicales en El Salvador*. Documento de Investigación, San Salvador, CENTRA, 1999.

CEPAL, *La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad*, Santiago, CEPAL, 2006, disponible en línea www.eclac.org (consultado en marzo 2007).

Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2006, Santiago de Chile, CEPAL/ONU, 2007, disponible en línea websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2006/ (consultado en marzo 2007).

CEPAZ, *A 10 años de los Acuerdos de Paz de El Salvador*, San Salvador, Ediciones CEPAZ, 2002.

Cervantes, Magdalena, *Elecciones en El Salvador ¿Tránsito a la Democracia?*, Tesis de Licenciatura, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.

Chalmers, Douglas A. ,et.al. (coord.), *The New Politics of Inequality in Latin America. Rethinking Participation and Representation*, New York, Oxford University Press, 1997.

Chávez Aguilar, Joaquín Mauricio y Felipe Vargas Ortiz, *A 10 años de los Acuerdos de Paz de El Salvador*, San Salvador, CEPAZ, 2002.

Ching, Eric, et.al., *Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador. Ensayos sobre 1932*, El Salvador, UCA-Editores, 2007.

Cisneros Sosa, Armando, *Critica de los movimientos sociales. Debate sobre la modernidad, la democracia y la igualdad social*, México, Ed. Porrúa/UAM-Azcapotzalco, 2001.

Clemens, Harry y Raul Ruben (eds.), *Nueva ruralidad y política agraria. Una alternativa neoinstitucional para Centroamérica*, Caracas, Ed. Nueva Sociedad, 2001.

Comandancia General del FMLN, *Es una guerra de todo el pueblo*, Ediciones Sistema Radio Venceremos, s/l, enero de 1986.

Commission on the Truth for El Salvador, *From Madness to Hope. The 12-year War in El Salvador*, publicado el 1 de abril de 1993, disponible en línea www.usip.org/library/tc/doc/reports/el_salvador/tc_es_03151993_toc.html (consultado en enero de 2007).

Comisión para el Esclarecimiento Histórico, *Guatemala: Causas y Orígenes del Enfrentamiento Armado Interno*, Ciudad de Guatemala, F&G Editores, 2000.

Córdova Macías, Ricardo y Raúl Benítez Manaus (comps.), *La Paz en Centroamérica: Expediente de Documentos Fundamentales, 1979-1989*, México, CCyDEL/UNAM, 1989.

Dagnino, Evelina, et.al., *La disputa por la construcción democrática en América Latina*, México, FCE/CIESAS/Universidad Veracruzana, 2006.

Dalton, Roque, *Las historias prohibidas del pulgarcito*, México, Siglo XXI, 1974.

Miguel Mármol. *Los sucesos de 1932 en El Salvador*, San Salvador, UCA, 2000.

Un libro rojo para Lenin. Poema-collage (Habana, 1970-1973), San Salvador, UCA Editores, 2001.

Dammert, Lucía y John Bailey, *Seguridad y reforma policial en las Américas. Experiencias y desafíos*, México, Siglo XXI, 2005.

Darnton, Robert, *La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa*, México, FCE, 2000.

De Certeau, Michel, *La invención de lo cotidiano. Artes de hacer*, Tomo 1, México, Universidad Iberoamericana, 1996.

De Sierra, Jerónimo (coord.), *Los pequeños países de América Latina en la hora neoliberal*, Caracas, Nueva Sociedad, 1994.

Delegation of Labor-, Legislative-, Religious Leaders, *El Salvador: Labor Rights Denied*, New York, Labor Campaign El Salvador, 1988.

Eckstein, Susan (comp.), *Poder y protesta popular. Movimientos sociales latinoamericanos*, México, Siglo XXI, 2001.

ERP, *El impulso del plan de desarrollo de la oligarquía financiera y la profundización de la crisis económica*, El Salvador, mimeo, s/f (aproximadamente 1977).

Evans, Trevor (coord.), *La transformación neoliberal del sector público. Ajuste estructural y sector público en Centroamérica y el Caribe*, Managua, Latino Editores/CRIES, 1995.

FAPU, *Manifiesto histórico*, San Salvador, mimeo., marzo de 1976.

FAPU, "Balance del proceso revolucionario en El Salvador", *Boletín Internacional*, El Salvador, Junio de 1978.

FAPU, *Segundo manifiesto histórico*, San Salvador, mimeo., 22 de enero de 1980.

FECCAS, *Carta de Principios*, San Salvador, mimeo, 8 de octubre de 1975.

Fischer-Rosenthal, Wolfram, "Von der 'biographischen Methode' zur Biographieforschung: Versuch einer Standortbestimmung" [Del 'método biográfico' al enfoque biográfico. Un intento de definir su ubicación], *Werkstattberichte des Forschungsschwerpunkts 'Arbeit und Bildung' [Cuadernos de trabajo del programa de investigación 'Trabajo y Educación']*, Tomo 13, Bremen, Universität Bremen, 1990.

Figueroa Ibarra, Carlos, *Los que siempre estarán en ninguna parte. La desaparición forzada en Guatemala, México*, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos/Grupo de Apoyo Mutuo, 1999.

FMLN, *Posición oficial del FMLN en el X aniversario de la firma del acuerdo de paz*, Comisión Política del FMLN, mimeo., San Salvador, 16 de enero del 2002

Estrategia del FMLN, San Salvador, Consejo Nacional 2002-2004, mimeo., 12 de febrero del 2002.

Democracia, prosperidad y justicia social. Documento de Consulta para la Construcción de un Proyecto de País, San Salvador, Comisión Política y Consejo Asesor del FMLN, agosto de 2002.

Nuestra orientación hacia el socialismo, Versión corregida, elaborada por la Comisión de Debate sobre El Socialismo, designada por el Consejo Nacional, San Salvador, octubre 2002.

Cronología del Origen y Desarrollo del FMLN, San Salvador, Comisión Nacional de Educación Política del FMLN, octubre del 2002.

Documentos, XIV Convención Nacional del FMLN, 16 de Diciembre del 2001, San Salvador, FMLN, 2002.

Programa social y democrático para El Salvador, San Salvador, 2003.

Estatutos del partido político FMLN, reformado en 2007, disponible en línea fmln.org.sv/portal/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=2 (consultado en mayo 2007).

Planteamientos programáticos.1980-1994, San Salvador, Secretaría Nacional de Educación del FMLN, mimeo., s/f;

Foley, Michael W. et.al., *Tierra, Paz y Participación. El desarrollo de una política agraria de posguerra en El Salvador y el papel del Banco Mundial*, Washington, Washington Office on Latin America, Julio de 1997.

FPL, *La práctica revolucionaria es la mejor confrontación de líneas estratégicas y tácticas*, El Salvador, mimeo, marzo de 1978.

FPL-Farabundo Martí, *Hacia una nueva estrategia de poder 1994-1997 (versión revisada)*, mimeo., s/l, s/f (aproximadamente octubre/noviembre de 1994).

Documento de Discusión Marco Conceptual para la Renovación del Partido, Documento interno de las FPL, 4 de noviembre de 1994.

Fraser, Ronald, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española*, Barcelona, Ed. Crítica, 2001.

Friedrich, Paul, *Los príncipes de Naranja. Un ensayo de método antropológico*, México, Grijalbo, 1991.

Funkhouser, Edward y Juan Pablo Pérez Saínz, *Mercado laboral y pobreza en Centroamérica. Ganadores y perdedores del ajuste estructural*, San José/Costa Rica, FLACSO, 1998.

Garcés, Mario, *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*, Santiago, LOM-Ediciones, 2002.

Germani, Gino, *Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*, Buenos Aires, Paidós, 1979.

Gilly, Adolfo, *La nueva Nicaragua (antiimperialismo y lucha de clases)*, México, Ed. Nueva Imagen, 1980.

Guerra y política en El Salvador, México, Ed. Nueva Imagen, 1981.

Historia a contrapelo. Una constelación, México, Ed. Era, 2006.

Gilman, Claudia, *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

Gobierno de El Salvador, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Naciones Unidas, *Acuerdos de Paz*, firmados el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, disponible en línea www.cepaz.org.sv/menu/Documentos/NegocGOESFMLN/acuerdoschapultepecindice.html (consultado en julio de 2003).

González Casanova, Pablo (coord.), *América Latina: Historia de Medio Siglo. Centroamérica, México y el Caribe*, Tomo 2, México, Siglo XXI, 1981.

Gordon, Sara, *Crisis política y guerra en El Salvador*, México, Siglo XXI, 1989.

Grenier, Yvon, *The Emergence of Insurgency in El Salvador. Ideology and Political Will*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1999.

Guha, Ranahit, *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*, Barcelona, Ed. Crítica, 2002.

- Gurr, Ted Robert, *Why Men Rebel*. New Jersey, Princeton University Press, 1970.
- Hall, John R., *Reworking Class*, London, Cornell University Press, 1997.
- Harnecker, Marta, *Pueblos en armas*, México, Universidad Autónoma de Guerrero, 1983.
- Con la mirada en alto. Historia de las FPL-Farabundo Martí a través de sus dirigentes*, El Salvador, UCA-Editores, 1993 [1era edición 1989].
- e Iosu Perales, *Guerra en El Salvador. Entrevistas con Comandantes del FMLN*, San Sebastián, Tercera Prensa, 1990.
- Hirsch, Joachim, *Globalización, capital y Estado*, México, UAM-Xochimilco, 1996.
- Hobsbawm, Eric, *Revolucionarios*, Barcelona, Ed. Crítica, 2000.
- Hopenhayn, Martín, *Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en América Latina*, Santiago/Chile, FCE, 1994.
- Ibarra, Pedro et.al., *Creadores de democracia radical. Movimientos sociales y redes de políticas públicas*, Barcelona, Ed. Icaria, 2002.
- Jacinto Montoya, Tito Alfredo, *Modernización neoliberal del estado salvadoreño, conflicto social y cultura de paz*, San Salvador, sin editorial, 2002.
- James, Daniel, *Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1978*, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1990.
- Kaye, Harvey J. y Keith McClelland (eds.), *E.P. Thompson. Critical Perspectives*, Philadelphia, Temple University Press, 1990.
- Kelle, Udo y Susanne Kluge, *Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung [Del caso al tipo. Comparación y contraste de casos en la investigación cualitativa]*, Opladen, Leske+Budrich, 1999.
- Kelly Rivera, Ana, et.al. (comp.), *¿Valió la pena?! Testimonios de salvadoreñas que vivieron la guerra*, San Salvador, Ed. Sombrero Azul, 1995.
- Klare, Michael T. y Peter Kornbluh (coord.), *Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80. El arte de la guerra de baja intensidad*, México, Grijalbo, 1990.
- Köpke, Ronald, et.al, *Códigos de conducta y monitoreo en la industria de confección. Experiencias internacionales y regionales*, El Salvador, Ed. Heinrich Böll, 2000.
- Labastida Julio, et.al. (coords.), *Globalización, identidad y democracia*, México, Siglo XXI, 2001.
- Lenin, Vladimir Illich Ulianov, *La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el comunismo*, México, Ed. Grijalbo, 1974.
- ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento*, Moscú, Ed. Progreso, 1981.

López López, Guillermo, *Sindicalismo*, Managua, FNT, 2000.

Löwy, Michael, (ed.), *Marxism in Latin America from 1909 to the Present*, New Jersey/London, Humanities Press, 1992.

Guerra de dioses. Religión y política en América Latina, México, Siglo XXI, 1999.

Lulle, Thierry, et.al, (coords.), *Los usos de la historia de vida en las ciencias sociales I*, Barcelona, Anthropos, 1998.

Lungo Uclés, Mario, *El Salvador en los años 80: Contrainsurgencia y Revolución*, La Habana, Casa de las Américas, 1991.

Marx, Karl y Friedrich Engels, *Ausgewählte Werke [Obras escogidas]*, Moscú, Progress, 1987.

Mauro Marini, Ruy y Mária Millán, *La teoría social latinoamericana. Cuestiones contemporáneas*, Tomo IV, México, Ed. El Caballito, 1996.

Meiksins Wood, Ellen, *Democracia contra Capitalismo*, México, Siglo XXI, 2000.

Melucci, Alberto, *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México, Colegio de México, 2002.

Méndez, Juan E., et.al. (ed.), *Verdad y justicia. Homenaje a Emilio F. Mignone*, San José/Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2001.

Menjívar, Rafael, *Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño*, San José, EDUCA, 1982.

Menjívar Ochoa, Rafael, *Tiempos de Locura. El Salvador 1979-1981*, San Salvador, FLACSO, 2006.

Miles, Matthew B. y A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook*, 2. Edition, London/Thousand Oaks, SAGE Publications, 1994.

Miranda Miranda, Nelly, et.al. *Mitos y paradojas sobre la sociedad civil*, Managua, Centro de Derechos Constitucionales, 2002.

Moore, Barrington, *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia*, Barcelona, Ediciones Península, 1973.

Ungerechtigkeit. Die sozialen Ursachen von Unterordnung und Widerstand [Injusticia. Las bases sociales de la obediencia y la resistencia], Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1987.

Pureza moral y persecución en la historia, Barcelona, Paidós, 2001.

Moroni, José Angel y David E. Spencer, *Strategy and Tactics of the Salvadoran FMLN Guerrillas*, London, Praeger, 1995.

Municipio de Suchitoto, *Política de Equidad de Género*, s/l, Las Dignas y Ayuntamiento de Repollet, 2002.

Organización Magisterial Revolucionaria en la Universidad (OMR), *Orígenes, objetivos estratégicos y tácticos de la OMR en la Universidad*, El Salvador, mimeo., 22 de enero de 1980.

Ortiz, Renato, *Taquiografiando lo social*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

Paige, Jeffery M., *Coffee and Power. Revolution and the Rise of Democracy in Central America*, Cambridge, Mass./London, Harvard University Press, 1998.

Pebley, Anne R. y Luis Rosero-Bixby (ed.), *Demographic Diversity and Change in the Central American Isthmus*, Washington, Rand, 1997.

Pereyra, Daniel, *Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en América Latina*, Buenos Aires, Ed. Canguro, 2000.

Pérez Sáenz, Juan Pablo, *De la Finca a la Maquila. Modernización capitalista y trabajo en Centroamérica*, San José/Costa Rica, FLACSO, 1996.

Ciudadanía social y derechos laborales en Centroamérica, Cuadernos de Ciencias Sociales No. 108, San José/Costa Rica, FLACSO, 1998.

Perus, Francoise (comp.), *Historia y literatura*, México, Instituto Mora, 1994.

PNUD, *Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá 2003*, San José/Costa Rica, PNUD, 2003.

La Democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, PNUD, New York, 2004.

Una mirada al nuevo nosotros. El impacto de las migraciones, Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005, disponible en línea www.desarrollohumano.org.sv/migraciones/idhes2005pdf/sinopsis.pdf (consultado en junio 2007).

Resistencia Nacional, *Por la causa proletaria*, Partido Socialista Costarricense, s/l, s/f.

Rico Mira, Eduardo, *En silencio tenía que ser. Testimonio del conflicto armado en El Salvador (1967-2000)*, San Salvador, UFG-Editores, 2004.

Roggenbruck, Stefan (ed.), *Cultura y Desarrollo en El Salvador*, San Salvador, Fundación Konrad-Adenauer, 1994.

Rosenthal, Gabriele, *Erlebte und erzählte Lebensgeschichte [Historia de vida vivida y narrada]*, Frankfurt/Main, Campus, 1995.

Rouquié, Alain, *Guerras y Paz en América Central*, México, FCE, 1994.

Robin, Regine *Identidad, memoria y relato. La imposible narración de si mismo*, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC/Universidad de Buenos Aires, 1996.

Roquebert León, María (coord.), *Reformas laborales y acción sindical en Centroamérica*, Cd. de Panamá, Ed. Novo Art/Fundación Friedrich Ebert, 2005.

Sader, Emir y Pablo Gentili (comps.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC/Universidad de Buenos Aires, 1997.

Salazar, Gabriel y Julio Pinto, *Historia contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía*, Santiago, LOM-Ediciones, 1999.

Saltalamacchia, Homero R., *La historia de vida: Reflexiones a partir de una experiencia de investigación*, Caguas, Ed. CIJUP, 1992.

Sánchez Ramos, Irene, *Tiempo político y movimientos armados. El FMLN en El Salvador 1970-1992*, Tesis de Maestría, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/UNAM, 1996.

Sarlo, Beatriz, *Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

Savage, Mike, *Class Analysis and Social Transformation*, Buckingham/Philadelphia, Open University Press, 2000.

Scott, James C., *Los dominados y el arte de la resistencia*, México, ERA, 2000.

Segovia, Alexander, *Transformación estructural y reforma económica en El Salvador. El funcionamiento económico de los noventa y sus efectos sobre el crecimiento, la pobreza y la distribución del ingreso*, Guatemala, F&G Editores, 2002.

Sosa, Ignacio, (coord.), *Insurrección y Democracia en el Circuncaribe*, México, UNAM/CCYDEL, 1998.

Sosa Elizaga, Raquel, *Sujetos, víctimas y territorios de la violencia en América Latina*, México, 2004.

Soto Arias, Rodrigo, *Del hecho al derecho: mujeres rurales centroamericanas en lucha por la propiedad de la tierra*, San José/Costa Rica, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2002.

Stiglitz, Joseph E., *El malestar en la globalización*, Madrid, Ed. Taurus, 2002.

STISSS, *Sólo el pueblo salvó al pueblo. Diez años tardó el despertar del pueblo*, Comunicado, 18 de noviembre de 2002.

Stolowicz, Beatriz (coord.), *Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio*, México, Plaza y Valdés, 1999.

Strauss, Anselm L., *Grundlagen qualitativer Sozialforschung [Fundamentos de la investigación social]*, Munich, Wilhelm-Fink-Verlag, 1994.

Tanaka, Martín y Carolina Trivelli, *Las trampas de la focalización y la participación. Pobreza y políticas sociales en el Perú durante la década de Fujimori*, Documento de Trabajo No. 121, Serie Sociología y Política 35, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2002, disponible en línea www.iep.org.pe (Consultado en mayo 2006).

Tardanico, Richard y Rafael Menjívar Larín (eds.), *Global Restructuring. Employment and Social Inequality in Urban Latin America*, Miami, North South Center Press/University of Miami, 1997.

Thompson, Edward P., *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*, Barcelona, Ed. Crítica, 1979.

Das Elend der Theorie. Zur Produktion geschichtlicher Erfahrung [La miseria de la teoría. Sobre la producción de la experiencia histórica], Frankfurt/Main, Campus, 1980.

Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse [La formación de la clase obrera inglesa], Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1987.

Historia social y antropología, México, Instituto de Investigaciones Mora, 1994.

Costumbres en Común, Barcelona, Ed. Crítica, 1995.

Thompson, Paul, *La voz del pasado. La historia oral*, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1988.

Tilly, Charles, *Las revoluciones europeas 1492-1992*, Barcelona, Ed. Crítica, 1995.

Popular Contention in Great Britain 1758-1834, Cambridge/Mass. Harvard University Press, 1995.

et.al., *El siglo rebelde*. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997.

Torre, Juan Carlos, *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*, Buenos Aires, Paidós, 1998.

Torres-Rivas, Edelberto, *Centroamérica: La Democracia Posible*, San José/Costa Rica, EDUCA, 1987.

El tamaño de nuestra democracia, San Salvador, Istmo Editores, 1992.

Touraine, Alain, *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*, Santiago de Chile, PREALC, 1987.

Crítica de la Modernidad, Buenos Aires, FCE, 1994.

v.v.A.A., *Centroamérica: una historia sin retoque*, México, El Día en libros/Instituto de Investigaciones Económicas, 1987.

v.v.A.A., *Violencia social en Centroamérica: ensayos sobre gobernabilidad y seguridad ciudadana*. Managua, CRIES, 1999.

v.v.A.A., *Los escuadrones de la muerte en El Salvador*, San Salvador, Ed. Jaraguá, junio de 2004 [2da Edición].

Vasilachis de Gialdino, Irene, *Métodos cualitativos I. Los problemas teórico-epistemológicos*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993.

Valle, Victor (comp.), *Siembra de Vientos. El Salvador 1960-1969*, San Salvador, CINAS, 1993.

Vilas, Carlos M. (coord.), *Democracia emergente en Centroamérica*, México, UNAM, 1993.

Mercado, Estados y Revoluciones. Centroamérica 1950-1990, México, UNAM/CII-H, 1994.

Wacquant, Loïc (coord.), *El misterio del ministerio. Pierre Bourdieu y la política democrática*, Barcelona, Ed. Gedisa, 2005.

Walker, Thomas W. (ed.) *Nicaragua without Illusions. Regime transition and Structural Adjustment in the 1990's*, Wilmington, SR-Books, 1997.

Wallerstein, Immanuel, *Impensar las ciencias sociales. Límites de los paradigmas decimonónicos*, México, Siglo XXI/UNAM, 1998.

Wieland, Gonzalo, *Hacia la construcción de lecciones del posconflicto en América Latina y el Caribe. Una mirada a la violencia juvenil en Centroamérica*, Serie Políticas Sociales No. 115, Santiago de Chile, CEPAL, diciembre del 2005.

Williams, Philip J y Knut Walter, *Militarization and Demilitarization in El Salvador's Transition to Democracy*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1997.

Wood, Elisabeth J., *Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Zamora, Rubén, *La izquierda partidaria Salvadoreña: entre la identidad y el poder*, San Salvador, FLACSO, 2003.

Zemelman, Hugo, *De la historia a la política. La experiencia de América Latina*, México, Siglo XXI, 1989.

Artículos:

Acuña, Carlos H. y William C. Smith, "La economía política del ajuste estructural: La lógica de apoyo y oposición a las reformas neoliberales", *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Vol. 36, No. 141, abril-junio de 1996, pp. 355-387.

Albiac, M. Dolores, "Los ricos más ricos de El Salvador", *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año XLV, No. 612, octubre de 1999, pp. 841-864.

Alvarenga, Luis, "El desafío del cambio en el FMLN", *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LIX, No. 665-666, marzo-abril de 2004, pp. 393-342.

Annan, Kofi "La situación en Centroamérica. Informe del Secretario General", *Colatino*, San Salvador, 13 de enero de 2003, pp. 12 y 13.

Anner, Mark, "¿Hacia la sindicalización de los sindicatos?", *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LI, No. 573-574, julio-agosto de 1996, pp. 599-614.

y Tracy Fitzsimmons, "Civil Society in a Postwar Period", *Latin American Research Review*, Cambridge, Vol. 34, No. 3, 1999, pp. 103-128.

"ARENA y la violencia electoral en el nororiente de Chalatenango", *Proceso*, San Salvador, Año 24, No. 1076, 2 de diciembre de 2003, pp. 4-6.

Arrighi, Giovanni, "Siglo XX: Siglo marxista, siglo americano. La formación y la transformación del movimiento obrero mundial", *New Left Review*, Madrid, No. 0, 2000, pp. 7-46.

Arriola, Joaquín y David Mena, "La transición: los proyectos en disputa", *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año XLVIII, No. 536, junio de 1993, pp. 527-544.

Armbruster-Sandoval, Ralph, "Globalization and Cross-Border Labor Organizing. The Guatemalan Maquiladora Industry and the Phillips Van Heusen Workers' Movement", *Latin American Perspectives*, Riverside/CA, Issue 105, Vol. 26, No.2, marzo de 1999, pp. 108-128.

Barberena, Edgard, "FSLN dejará pasar Cafta", *El Nuevo Diario*, Managua, 9 de octubre de 2005, disponible en línea www.elnuevodiario.com.ni/2005/10/09/nacionales/2970, (consultado en marzo de 2007).

Bendel, Petra "Importancia y funcionamiento de la sociedad civil en Centroamérica", *Memoria*, México, No. 128, octubre de 1999, disponible en línea: www.memoria.com.mx (consultado noviembre 2002).

Benítez Manaus, Raúl, "La guerra en Centroamérica: Dinámica del proceso de militarización y tendencias", *Síntesis. Revista Documental de Ciencias Sociales Iberoamericanas*, Madrid, No. 7, enero-abril de 1989, pp. 130-157.

Bickham Mendes, Jennifer y Ronald Köpke, "Gender und Transnationalismus: Zentralamerikanische Frauenorganisationen zwischen transnationaler Konkurrenz und Kooperation in der Bekleidungsindustrie" [*Género y Transnacionalismo: Organizaciones centroamericanas de mujeres entre competencia trasnacional y cooperación en la industria textil*], *Peripherie*, Frankfurt/Main, No. 75, 1999, pp. 83-103.

Binford, Leigh, "Grassroot Development in Conflict Zones of Northeastern El Salvador", *Latin American Perspectives*, Riverside/CA, Issue 93, Vol. 24, No. 2, marzo de 1997, pp. 56-79.

Booth, John A. "Through Revolution and Beyond: Mobilization, Demobilization, and Adjustment in Central America", *Latin American Research Review*, Austin, Vol. 40, No. 1, febrero de 2005, pp. 201-206.

BPR, "30 de julio de 1981. Manifiesto del Bloque Popular Revolucionario al pueblo salvadoreño y demás pueblos del mundo en su sexto aniversario", *El Nuevo Diario*, Managua, 30 de julio de 1981, p. 4.

Browning, David, "Agrarian Reform in El Salvador", *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 15, noviembre de 1983, pp. 399-426.

Cáceres Prendes, Jorge, "Radicalización política y pastoral popular en El Salvador: 1969-1979", *Estudios Sociales Centroamericanos*, San José/Costa Rica, Año XI, No. 33, septiembre-diciembre de 1982.

Cademil, Leonardo, et.al., "América Central. Ajuste y reformas durante los años noventa.", *Finanzas y Desarrollo*, Washington, Vol. 37, No. 1, marzo de 2000, pp.34 - 37.

Call, Charles T., "Democratization, War and State Building: Constructing the Rule of Law in El Salvador", *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 35, No. 4, noviembre de 2003, pp. 827-862.

Calveiro, Pilar, "Puentes de la memoria: Terrorismo de estado, sociedad y militancia", *Lucha armada en la Argentina. Historia, Debates, Documentos*, Buenos Aires, Año 1, No. 1, diciembre 2004-febrero de 2005, pp. 71-77.

"Antiguos y nuevos sentidos de la política y la violencia", *Lucha armada en la Argentina. Historia, Debate, Documentos*, Buenos Aires, Año 1, No. 4, septiembre-noviembre de 2005 (a), pp. 4-19.

Candray, José Antonio, *Reforma Educativa y Concertación en El Salvador*, Seminario Internacional "Sindicalismo magisterial, concertación y reforma educativa en América Latina. Condiciones, obstáculos y consecuencias" San Pedro Sula/Honduras, Noviembre de 2001, disponible en línea www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/conflictividad_el_salvador_reforma_concertacion.pdf (consultado en mayo 2007).

Carey Jr., David, "Shades of Peace and Democracy: Social Discontent and Reconciliation in Central America", *Latin American Research Review*, Austin, Vol. 40, No. 1, febrero de 2005, pp. 251-267.

Ching, Erik y Virginia Tilley, "Indians, the Military and the Rebellion of 1932 in El Salvador", *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 30, No. 1, febrero de 1998, pp. 121-156.

CIDAI, "Los Acuerdos de Paz, diez años después", *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, No. 641-642, Año LVII, marzo-abril de 2002, pp. 209-234.

CINAS, *El movimiento sindical salvadoreño 1979-1984*, Cuaderno de trabajo No. 5, México, junio de 1985, pp. 32-34.

Collins, Cath, "Grounding Global Justice: International Networks and Domestic Human Rights Accountability in Chile and El Salvador", *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 38, No. 4, noviembre de 2006, pp. 711-738.

Cosgrove, Serena, "Levels of Empowerment. Marketers and Microenterprise-Lending NGOs in Apopa and Nejapa, El Salvador", *Latin American Perspectives*, Riverside/CA, Issue 126, Vol. 29, No. 5, septiembre de 2002, pp. 48-65.

Cristiani, Alfredo, "Discurso pronunciado en la toma de posesión", *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año XLIV, No. 488, junio de 1989, pp. 521-527.

Cruz, José Miguel, "Violencia y democratización en Centroamérica: El impacto del crimen en la legitimidad de los regímenes de posguerra", *América Latina Hoy*, Salamanca, Vol. 35, 2003, pp. 19-59.

Debray, Regis, "¿Revolución en la revolución?", *Lucha Armada en la Argentina. Historia, Debates, Documentos*, Buenos Aires, Año 1, No.1, diciembre de 2004-febrero de 2005, pp. 122-144.

De Gaulejac, Vincent, "Lo irreductible social y lo irreductible psíquico", *Perfiles Latinoamericanos*, México, No. 21, diciembre de 2002, pp. 49-71.

Díaz, Nidia, *La construcción del FMLN y el aporte de las cinco organizaciones históricas que lo constituyeron*, Ponencia para conmemorar el 25 aniversario del FMLN, *El Torogoz, La revista farabundista*, disponible en línea, eltorogoz.net/prtc.htm (consultado en noviembre de 2006).

Diskin, Martin, "Distilled Conclusions: The Disappearance of the Agrarian Question in El Salvador", *Latin American Research Review*, Albuquerque, Vol. 31, No. 2, 1996, pp. 111-125.

Dubet, Francois, "De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto", *Estudios Sociológicos*, México, Vol. VII, No. 21, septiembre-diciembre de 1989, pp. 519-545.

Edelman, Marc, "Transnational Peasant Politics in Central America", *Latin American Research Review*, Austin, Vol. 33, No. 3, 1998, pp. 49-86.

Editorial, "Deuda con la memoria histórica", *Estudios Centroamericanos*, Año LVIII, San Salvador, No-661-662, noviembre-diciembre de 2003, pp. 1121-1137.

Equipo de Investigación y Apoyo Popular "Anastasio Aquino" (EIAP), "El Salvador: Historia del Movimiento Obrero de 1920 a 1977", *Temas*, México, No. 1, 1984, pp. 15-24.

"Elecciones 2006: un balance contradictorio", *envío*, Managua, Año 25, No. 289, abril de 2006, disponible en línea, www.envio.org.ni (consultado en abril de 2007).

"'En el mundo hay dos países mimados por la cooperación y uno es Nicaragua.' Entrevista con Sally O'Neill", *envío*, Managua, Año 23, No. 268, julio de 2004, pp. 20-28.

Figueroa, Carlos, "Naufragio y sobrevivencia: la izquierda en Centroamérica", *Estudios Latinoamericanos*, México, Nueva Época, No. 3, enero-junio de 1995, pp. 71-86, pp. 79-83.

Flores, Margarita, "El Salvador: trayectoria de la reforma agraria, 1980-1998", *Revista Mexicana de Sociología*, México, Vol. 60, No. 4, octubre-diciembre de 1998, pp. 125-151.

Foley, Michael W., "Laying the Groundwork: The Struggle for Civil Society in El Salvador", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Miami, Vol. 38, No. 1, Primavera de 1996, pp. 67-104.

Frundt, Henry J., "Central American Unions in the Era of Globalization", *Latin American Research Review*, Austin/Texas, Vol. 37, No. 3, 2002, pp. 7-53.

Gammage, Sarah, "Exporting People and Recruiting Remittances. A Development Strategy for El Salvador?", *Latin American Perspectives*, Riverside/CA, Vol. 151, Issue 151, No. 6, noviembre de 2006, pp. 75-99.

Garretón, Manuel Antonio, "La transformación de la acción colectiva en América Latina", *Revista de la CEPAL*, Santiago de Chile, No. 76, abril de 2002, pp. 7-24.

Glower, Carlos J., "La dolarización en El Salvador. Lecciones y advertencias para la región", *Nueva Sociedad*, Caracas, No. 172, marzo-abril de 2001, pp. 150-164.

González, Luis Armando, "De la ideología al pragmatismo. Ensayo sobre las trayectorias ideológicas de ARENA y el FMLN", *Estudios Centroamericanos*, El Salvador, Año LVIII, Nos. 661-662, noviembre-diciembre del 2003, pp. 1173-1202.

“El FMLN en la encrucijada”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LIX, No. 668, junio de 2004, pp. 617-620.

et. al., “Los acuerdos de paz, diez años después”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LVII, No. 641-642, marzo-abril de 2002, pp. 210-234.

y Roxana Martel, “Pobreza y sociedad civil: el caso de El Salvador”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LVIII, No. 659, septiembre de 2003, pp. 881-904.

Grigsby Vado, William, “¿Perdió el FMLN o ganó el miedo?”, *envío*, Managua, Año 23, No. 265, abril de 2004, pp. 27-39.

Herrera, Leonel, “Cumplimiento de DD.HH. sólo es posible sacando a ARENA del gobierno”, *Diario Colatino*, San Salvador, 17 de enero de 2007, disponible en línea www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=15227 (Consultado en enero de 2007).

Hite, Katherine, “The Formation and Transformation of Political Identity: Leaders of the Chilean Left, 1968-1990”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 28, No. 2, 1996, pp. 299-328.

Holden, Robert H., “Constructing the Limits of State Violence in Central America: Towards a New Research Agenda”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 28, 1996, pp. 435-459.

Ibarra, David, “Los laberintos del orden internacional: la importación de reformas”, *Revista de la CEPAL*, Santiago de Chile, No. 82, abril de 2004, pp. 7-17.

IDHUCA, “El gobierno se prepara legalmente para la conflictividad social”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LVII, No. 648, octubre de 2002, pp. 945-951.

Kappel, Robert, “Die Grenzen des (Post)Washington-Konsens überwinden: Armutsverringering und Beschäftigung durch strukturelle Wettbewerbsfähigkeit” [*Superar las limitaciones del Consenso de (Pos)Washington: Reducción de la pobreza y fomento de empleo mediante una competitividad estructural*], *Austrian Journal of Development Studies*, Viena, Vol. XIX, No. 2, 2003, pp. 42-55.

Kay, Cristóbal, “Estructura agraria, conflicto y violencia en la sociedad rural de América Latina”, *Revista Mexicana de Sociología*, México, Vol. 63, No. 4, octubre-diciembre de 2001, pp. 159-195.

Kaye, Mike, “The Role of Truth Commissions in the Search of Justice, Reconciliation and Democratisation: the Salvadoran and Honduran Cases”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 29, No. 3, octubre de 1997, pp. 693-716.

Lara, Carlos Benjamín, “Identidad indígena y conflicto social en Cacaopera”, *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, San Salvador, No. 82, julio-agosto de 2001, pp. 501-518.

“La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador expresa la verdad sobre el Foro”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año XLVIII, No. 534-535, abril-mayo de 1993, pp. 495-497.

Lejeune, Philippe, “Memoria, diálogo y escritura”, *Historia y Fuente oral*, Barcelona, No. 1, 1989, pp. 33-67.

López, Nelson, "Un líder en Educación, antes, durante y después de la guerra civil. Entrevista con Carlos Henríquez", *Periódico Colatino*, San Salvador, 16 de noviembre de 2000, p. 7.

"Los avances del foro de concertación", *Estudios Centroamericanos*, No. 537-538, Año XLVIII, julio-agosto de 1993, pp. 735-742.

Luciak, Ilja A., "Gender Equality in the Salvadoran Transition", *Latin American Perspectives*, Riverside/CA, Vol. 26, Issue 105, No.2, marzo de 1999, pp. 43-67.

Madrid, Raúl L., "Labouring against Neoliberalism: Unions and Patterns of Reform in Latin America", *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 35, No. 1, febrero de 2003, pp. 53-88.

Márquez, Francisca "La vida realizada-la vida postergada: la construcción biográfica en Chile", *Perfiles Latinoamericanos*, México, No. 21, diciembre de 2002, pp. 73-98.

Martínez Peñate, Oscar et.al., "El Salvador. Mundo Laboral y sindicatos 2001-2002", *Jornadas. Revista del Mundo Laboral*, San Salvador, No. 8-9, 2003.

Makowski, Sara, "Entre la bruma de la memoria. Trauma, sujeto y narración", *Perfiles Latinoamericanos*, México, No. 21, diciembre de 2002, pp. 143-157.

Mesa-Largo, Carmelo y Katharina Müller, "The Politics of Pension Reform in Latin America", *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 34, Part 3, agosto de 2002, pp. 687-715.

Michalopoulos, Constantine y Sylvia Saboría, "Centroamérica en una encrucijada", *Revista de la Integración y el Desarrollo de Centroamérica*, Tegucigalpa, No. 49, julio-diciembre de 1992, pp. 151-185.

Montgomery, Tommy S., "Getting to Peace in El Salvador. The Role of the United Nations Secretariat and ONUSAL", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Invierno de 1995, disponible en línea www.findarticles.com/p/articles/miqa3688/is199501/ain8727862/pg8 (consultado en mayo de 2005).

Montoya, Aquiles, "Retos de la Izquierda", *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LIX, No. 665-666, marzo-abril de 2004, pp. 335-338.

Montoya, Rosario, "House, Street, Collective: Revolutionary Geographies and Gender Transformation in Nicaragua, 1979-1999", *Latin American Research Review*, Austin, Vol. 38, No. 2, junio de 2003, pp. 61-93.

Munck, Ronaldo, "Trabajadores y globalización. Resultados y Perspectivas", *Nueva Sociedad*, Caracas, No. 158, noviembre-diciembre de 1998, pp. 64-76.

Navarro, Mario F., "Democracia y reformas estructurales: Explicaciones de la tolerancia popular al ajuste económico", *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Vol. 35, no. 139, octubre-diciembre de 1995, pp. 443-465.

Nuzzi O'Shaughnessy, Laura y Michael Dodson, "Political Bargaining and Democratic Transitions: A Comparison of Nicaragua and El Salvador", *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 31, Parte I, febrero de 1999, pp. 99-127.

“Origen e historia del Ejército Revolucionario del Pueblo”, *Librería histórica El Togoroz*, disponible en línea, <http://eltogoroz.net/erp.htm> (consultado en octubre de 2006).

Oxhorn, Philip, “The Social Foundations of Latin America’s Recurrent Populism: Problems of Popular Sector Class Formation and Collective Action”, *Journal of Historical Sociology*, New York, Vol. 11, No. 2, junio de 1988, pp. 212-246.

Paige, Jeffery M., “Land Reform and Agrarian Revolution in El Salvador: Comment on Seligson and Diskin”, *Latin American Research Review*, Albuquerque, Vol. 31, No. 2, 1996, pp. 127-139.

Pirker, Kristina, “La tensión entre lo local y lo global: modernización neoliberal y resistencias centroamericanas”, *Estudios Latinoamericanos*, México, Nueva Época, Año 10, No. 19, enero-junio de 2003, pp. 103-117.

Portes Alejandro y Kelly Hoffman, “Latin American Class Structures: Their Composition and Change during the Neoliberal Era”, *Latin American Research Review*, Austin, Vol. 38, No. 1, febrero de 2003, pp. 41-81.

Quinteros, Carolina, “Acciones y actores no sindicales, para causas sindicales. El caso del monitoreo independiente en Centroamérica”, *Nueva Sociedad*, Caracas, No. 169, septiembre-octubre de 2000, pp. 162-176.

“Nuevas fronteras para la acción laboral. El caso de los códigos de conducta en Centroamérica y la acción de las organizaciones de mujeres”, *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Año LVII, No. 643, mayo de 2002, pp. 387-406.

Rabotnikof, Nora, “La caracterización de la sociedad civil en la perspectiva del BID y BM”, *Perfiles Latinoamericanos*, México, No. 15, diciembre de 1999, pp. 27-46.

Riegel, Klaus-Georg, “Kaderbiographien in marxistisch-leninistischen Virtuosenvereinigungen” [*Biografías de cuadros en comunidades virtuosas marxistas-leninistas*], *Leviathan. Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft* [*Leviatán. Revista Berlina de Ciencias Sociales*], Berlín, No. 22, 1994, pp. 17-46.

Santacruz, Domingo, “25 Aniversario del FMLN: La construcción del partido FMLN y el aporte de las cinco organizaciones históricas que lo constituyeron”, 30 de julio de 2005, *El Torogoz. La revista farabundista*, disponible en línea, eltogoroz.net/pcs.htm (consultado en noviembre 2006).

Schafik Handal, Jorge, “El debate de la izquierda en América Latina”, *La trinchera roja*, San Salvador, mimeo, 29 de julio de 2004.

Seligson, Mitchell A., “Thirty years of Transformation in the Agrarian Structure of El Salvador, 1961-1991”, *Latin American Research Review*, Albuquerque, Vol. 30, No. 3, 1995, pp. 43-74.

“Agrarian Inequality and the Theory of Peasant Rebellion”, *Latin American Research Review*, Albuquerque, Vol. 31, No. 2, 1996, pp. 140-157.

Tilley, Virginia Q., “New Help or New Hegemony? The Transnational Indigenous Peoples’ Movement and ‘Being Indian’ in El Salvador”, *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, Vol. 34, No. 3, agosto de 2002, pp. 525-554.

Tilly, Charles, “Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas”, *Sociológica*, México, Año 10, No. 28, mayo-agosto de 1995, pp. 13-35.

Torres-Rivas, Edelberto, “Los desafíos del desarrollo democrático en Centroamérica”, *Anuario de Estudios Centroamericanos*, Universidad de Costa Rica/San José, Vol. 22, No. 1, 1996, pp. 7-40.

Trejos, Juan Diego y Thomas H. Gindling, “La desigualdad en Centroamérica durante el decenio de 1990”, *Revista de la CEPAL*, Santiago de Chile, No. 84, diciembre de 2004, pp. 177-198.

Vázquez, Mario, “ ‘País mío no existes.’ Apuntes sobre Roque Dalton y la historiografía contemporánea de El Salvador”. *Humanidades*, El Salvador, No. 2, enero-marzo de 2003, pp. 88-103.

Viales Hurtado, Ronny, “Desarrollo rural y pobreza en Centroamérica en la década de 1990. Las políticas y algunos límites del modelo ‘neoliberal’”, *Anuario de Estudios Centroamericanos*, Universidad de Costa Rica, Vol. 25, No. 2, 2000, pp. 139-157.

Vilas, Carlos M., “El sujeto de la insurrección popular sandinista”, *Cuadernos políticos*, México, No. 42, enero-marzo de 1985, pp. 32-53.

“Clase, linaje y política. Notas sobre la burguesía nicaragüense”, *Burguesías en América Latina*, Serie Panorama de nuestra América, No. 10, México, CCYDEL/UNAM, 1993, pp. 137-157.

“Redes de familia, democracia y modernización política en Centroamérica”, *Revista de Historia*, Managua, No. 8, 2do semestre, 1996, pp. 7-27.

“Deterioro laboral y exclusión social: La otra cara del crecimiento”, *Acta Sociológica*, México, Año 13, No. 28-29, enero-agosto de 2000, pp. 39-66.

Von Haldenwang, Christian, “Gobernanza sistémica y desarrollo en América Latina”, *Revista de la CEPAL*, Santiago/Chile, No. 85, abril de 2006, pp. 35-52.

Wallerstein, Immanuel, “Nuevas revueltas contra el sistema”, *Contrainformación en red. Territorio virtual para los movimientos sociales y la acción política en Internet*, disponible en línea www.nodo50.org/reformaenserio/articulos/marzo04/wallerstein.pdf (consultado en enero de 2005).

Walter, Ian, “Ajuste estructural, integración económica y la estrategia del desarrollo en América Central”, *Revista de la Integración y el Desarrollo de Centroamérica*, Tegucigalpa, No. 45-46, julio-diciembre de 1989/enero-junio 1990; pp. 373-421.

Fuentes periodísticas y bases de datos consultados:

Barricada (Managua): enero de 1990 a mayo de 1994 [Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León].

Combate Popular. Periódico del Bloque Popular Revolucionario (San Salvador): No. 4, marzo de 1978; No. 8, mayo de 1979; No. 15, noviembre de 1979; No. 17, Ira quincena de enero de 1980, No. 19, 2da quincena de enero de 1980, No. 23, 2da quincena de marzo de 1980 [Archivo CIDAI-UCA].

Estudios Centroamericanos (San Salvador): “Cronologías”: Año XLIV, No. 485, marzo de 1989 a Año LII, No. 588, octubre de 1997.

La Jornada (México, D.F.): mayo de 1989-noviembre de 1989, febrero de 1990 a febrero de 1992, noviembre de 2004, enero de 2006.

La Prensa (Managua): enero de 1990 a mayo de 1994 [Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León].

Revista Polémica. Problemas de la Revolución Salvadoreña, Época I, (San Salvador): No. 1, abril de 1977; No. 2, mayo-junio de 1977; No. 3, octubre de 1977, No. 4, 1978, [Archivo CIDAI-UCA].

Pueblo. Periódico del FAPU (San Salvador): Año 1, No. 1, Segunda quincena de marzo de 1975, [Archivo CIDAI-UCA].

Pueblo. Órgano de divulgación ideológico-política del Frente de Acción Popular Unificada, 2da Época, (San Salvador): No. 3., Primera quincena de marzo de 1976, [Archivo CIDAI-UCA].

Pueblo. Boletín Semanal del FAPU (San Salvador): No. 22, 6 al 11 de enero de 1980; No. 24, 12 al 17 de enero de 1980; No. 27, 12-19 de febrero de 1980; No. 28, 19-26 de febrero de 1980, [Archivo CIDAI-UCA].

El Nuevo Diario (Managua): Septiembre de 2002; octubre 2005 [Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León].

Bases de Datos:

Inforpress Centroamericana, Colección 30 Años (1972-2002), Formato CD, 2002.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, *Estadísticas laborales*, Oficina de Estadísticas e Informática Laboral, disponible en formato electrónico www.mtps.gob.sv/default.asp?id=43&mnu=43 (consultado en mayo 2007).

Organización Internacional de Trabajo, LABORSTA, Bases de datos sobre estadísticas laborales, disponible en formato electrónico, <http://laborsta.ilo.org> (consultado el 10 de noviembre de 2004).

ANEXO

I. Guía de preguntas para las entrevistas con los activistas:

Esta guía sirvió como base para orientar la entrevista. Fue adaptada de acuerdo con el perfil de cada uno de los entrevistados y usada de manera flexible, es decir, de acuerdo con la dinámica de la entrevista.

Introducción y presentación:

Estoy haciendo una investigación sobre los militantes de las organizaciones populares en El Salvador y que sucedió con ellos después de los Acuerdos de Paz. Por esto te pido que me cuentes cómo fue que te convertiste en militante. Podemos empezar, si estás de acuerdo, con tu vida antes de entrar en contacto con la organización, es decir, en qué parte de El Salvador naciste, qué hacían tus padres y qué hacías tú antes del activismo. En esta primera parte de la entrevista no te voy a interrumpir, quiero que me cuentes todo lo que consideras importante y puedes tomarte el tiempo que quieres. Yo solamente voy a tomar notas y si tengo preguntas, después te hago las preguntas.

Tema: Datos generales

Origen geográfico
Actividad de los padres
Relación personal con los padres
Relación de los padres con la política
Hermanos

¿Tu primer recuerdo político relacionado con la situación que vivía el país? ¿Cómo empezaste a interesarte por la política?

Tema: Trayectoria del militante

¿Cómo fue tu ingreso al movimiento?

¿Qué pensaste cuándo entraste a la organización y cuáles fueron tus expectativas?

¿Por qué entraste a la organización XY y no a otra?

¿Relación entre vida personal y vida militante (relación con padres, novio, amigos)?

¿Cómo viviste la negociación de los Acuerdos de Paz y la posterior pacificación?

Principios de organización, diferenciación y jerarquías:

División de trabajo en la organización: ¿qué tareas realizabas?

¿Cómo se tomaban las decisiones al interior de la organización?

¿Cómo organizaron las actividades de la organización, como marchas, mítines, paros...?

¿Cómo era el vínculo entre el partido clandestino y la organización popular?

¿Qué características personales o atributos daban prestigio, autoridad y poder a los integrantes de la organización?

¿Qué reglas escritas y no escritas hubo?

¿Relación entre activistas del partido (comandos urbanos) y base sindical no politizada?

Normas y Valores:

¿Cómo describirías el proyecto para el cual lucharon en las décadas de los 70 y 80?

¿Qué sucedió con este proyecto después de 1992?

Momentos conflictivos:

¿Qué momentos de extrema conflictividad externa recuerdas (con empresarios, representantes del gobierno...)? (Situación, causas, actores, consecuencias)

¿Qué momento de conflictividad al interior de la organización recuerdas: cómo se manejaban estos conflictos?

¿Cómo resolvían el problema de la seguridad durante la guerra? ¿Qué hacían con supuestos infiltrados?

Salida de la organización:

¿Cómo fue el proceso de distanciamiento de la organización?

¿De acuerdas del momento en que ya no te sentiste identificada con la organización? ¿Por qué?

¿Cómo te reinsertaste a la vida civil después de 1992?

Balance:

¿Cómo evaluarías tu “carrera” dentro de la organización?

¿Cuáles fueron las razones por las cuales te saliste de la organización (o tomaste distancia)?

¿Alguna vez has pensado cómo hubiera sido tu vida sin la militancia?

¿Cómo consideras que la militancia impactó en tu vida?

Preguntas finales:

¿Hay algo más que me quieres comentar (que a lo mejor no te he preguntado) y que consideras importante?

¿Cuál consideras el momento más triste?

¿Cuál consideras el momento más feliz que tuviste en esta época? - ¿por qué?

Hechos históricos a los cuales hay que hacer referencia:

- Revolución nicaragüense (1979)
- De la movilización revolucionaria a la ofensiva de 1981
- Ofensiva de 1989
- Acuerdos de Paz

II. Analizar sistematizando: El texto de las entrevistas

Para analizar la estructura temática de las entrevistas y tomar consciencia del contenido de cada uno de las entrevistas se asignaron códigos a las partes significativas del texto, siguiendo la propuesta analítica de Anselm Strauss. Este es un ejemplo de los primeros ejercicios en el cual se construyeron los códigos a partir de los temas que aparecieron en la entrevista y, posteriormente, se agruparon las partes de la entrevista de acuerdo a los temas. Esto permitió una mejor comparación entre las entrevistas.

Project ENTREV

Documents: Mr1, Mr2

Search criteria: militancia_practicas

Document name: Mr1

Line Text

62 pues ellos me invitaron y de una sola vez yo empecé a a
63 participar en formación política de maestros, entonces yo
64 recibía por una parte análisis político y por otra se
65 suponía que yo iba a dar una escuela para política para
66 maestros, pero en esto vino una gran ola represiva y se

87 trabajaran y entonces nosotros acompañamos este proceso
88 pero también tratamos de trascender esta parte puramente
89 reivindicativa a una cuestión más política ¿no? con otro
90 trasfondo político, que dejáramos de ser tan inmediatistas
91 en nuestros, nuestras reivindicaciones y que pasara a ser
92 una cosa más crítica de un sistema general, yo me acuerdo
93 que yo participé mucho en eso, este yo incluso llegué a ser
94 la representante sindical del centro donde yo trabajaba y,
95 y bueno constituíamos así núcleos de, células lo que
96 llamábamos, de estudio político no, para ir viendo lo que
97 pasaba al interior de los centros de trabajo, para
98 analizar el contexto de los trabajadores del área donde

Codes

militancia_practicas, articulación_gremio_partido, redes_sociales
militancia_practicas, articulación_gremio_partido
militancia_practicas, articulación_gremio_partido
militancia_practicas, violencia, articulación_gremio_partido
militancia_practicas, violencia, articulación_gremio_partido, campo_politico

repertorio_protesta, militancia_practicas, campo_politico
militancia_practicas, campo_politico
militancia_practicas, campo_politico
militancia_practicas
militancia_practicas
militancia_practicas
militancia_practicas
militancia_practicas
militancia_practicas
militancia_practicas, articulación_gremio_partido
militancia_practicas, articulación_gremio_partido
militancia_practicas, articulación_gremio_partido
militancia_practicas, articulación_gremio_partido

99 trabajábamos pero también para analizar el contexto de
100 otros trabajadores más allá del área educativa y cultural,

117 este tiempo... y poquito a poquito, me acuerdo que una vez
118 a partir de una huelga que iban a hacer los trabajadores
119 del agua fue que empezamos a, donde tocaba a todas las
120 familias porque ellos iban a cortar el agua, entonces como
121 los tocaba también personalmente a ellos porque tampoco
122 ellos iban a tener agua entonces decidieron apoyar y
123 sumarse a la lucha de los trabajadores del agua para que el
124 corte del agua no fuera tan largo y así fue como empezamos
125 un poco a hacer nexos entre los diferentes... diferentes
126 áreas de trabajo incluso paraestatal y estatal porque era
127 la parte donde yo estuve más involucrada, luego era muy
128 difícil apoyar a los trabajadores de la empresa privada,
129 eso nunca lo logramos por ejemplo que un trabajador del
130 gobierno apoyara por ejemplo a trabajadores textiles, o de
131 zapato,... entonces esto era como otra lucha paralela allí,
132 luego ehm empezó el problema, de... no sé, de pronto me
133 dijeron que necesitaban de mis servicios pero para
134 conseguir lana, dinero y ya no era para nuestra lucha
135 reivindicativa estatal, sino que era para ya otro nivel no,
136 fue allí donde yo empecé a tener nexos con la federación
137 sindical, [¿FENASTRAS?] con la FENASTRAS, sin ser parte de
138 FENASTRAS porque yo verdaderamente no tenía nada que hacer
139 allí, yo no era trabajadora, obrera ni nada de eso, pero la
140 infraestructura de la FENASTRAS era la que me prestaban, la
141 computadora, la impresora, entonces yo empecé a llegar allí
142 y a trabajar sobre todo en la consecución de fondos, que yo
143 no te sabría decir para donde iban, yo me imagino tal vez
144 que iban al apoyo de la gente que andaba sólo en lucha
145 política, y que ya no tenían trabajo o que los habían
146 echado por eso, etcétera... y a lo mejor, no sé, tampoco

militancia_practicas, articulación_gremio_partido
militancia_practicas, articulación_gremio_partido

conflicto, militancia_practicas
militancia_practicas
militancia_practicas
militancia_practicas
militancia_practicas
militancia_practicas
militancia_practicas
militancia_practicas
articulación_gremio_partido, militancia_practicas
militancia_practicas, articulación_gremio_partido
militancia_practicas, articulación_gremio_partido
militancia_practicas, articulación_gremio_partido
militancia_practicas, articulación_gremio_partido

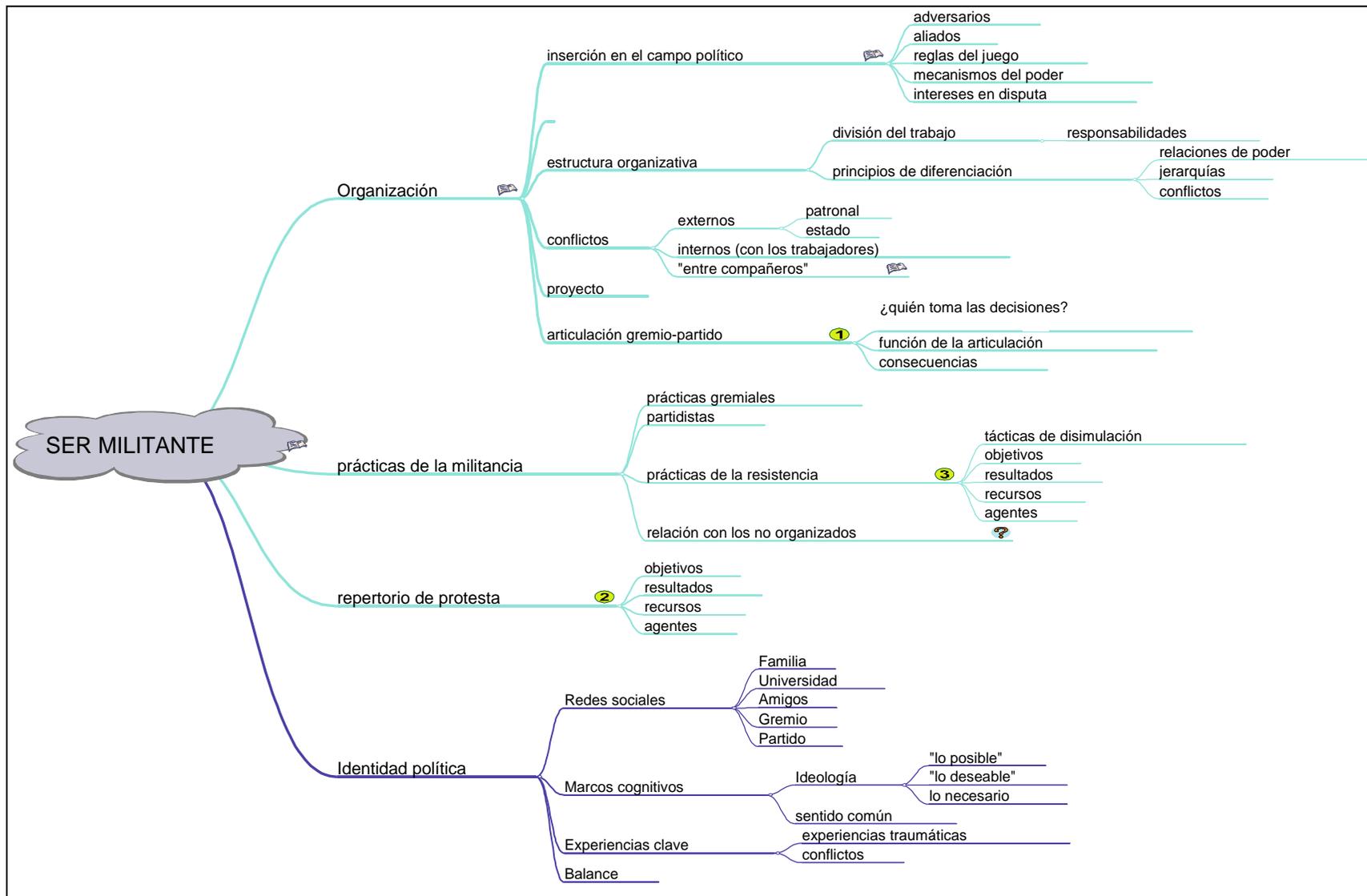
147 estoy segura, para los comandos urbanos. Entonces por mucho
148 tiempo yo estuve en ambas, en ambos frentes, tanto en la
149 lucha de mis compañeros de trabajadores gubernamentales y
150 me empecé a involucrar además con la capacitación de
151 obreros, sobre todo de obreras (silencio) entonces, este,

militancia_practicas, articulacion_gremio_partido, genero
militancia_practicas, genero
militancia_practicas, genero
militancia_practicas, genero
militancia_practicas, genero, principios_diferenciacion

Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista con Maria.

III. Esquema analítico para reconstruir el “Ser militante” en los relatos biográficos

A partir de las preguntas y con base en los temas que salieron en las entrevistas y que fueron sistematizadas en los llamados Memos, se elaboró un primer esquema analítico para visualizar los cuatro grandes temas –organización, prácticas de la militancia, repertorio de la protesta e identidad política- que atraviesan los relatos biográficos y que permiten comparar y contrastar los relatos. A continuación se presenta el gráfico con los cuatro temas y las ramificaciones de los diversos subtemas.



Elaboración propia.

IV. Radicalización social y entrelazamiento entre actores (cuadros de sistematización)

1956- 1970

Años	1956-1960	1961-1965	1966-1970
Campesinos		1965: UNOC funda FECCAS General José Medrano funda ORDEN	1968: surge la UCS por iniciativa de AIFLD, Gobierno instala FOCCO. ORDEN sale a la luz pública, participa en represión de la huelga de ANDES. Fundación ATACES
Trabajadores	<p>ANTECEDENTES</p> <p>Años 20: Confederación Obrera Centroamericana (COCA) Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños</p> <p>1944-46: Comité de Reorganización Obrero Sindical</p> <p>Constitución de 1950: Derechos sindicales</p> <p>Reconocimiento oficial del sindicalismo en El Salvador</p> <p>1957 CGTS (izq.) con 7 sindicatos. 1958 CGS (gub.) con 13,000 afiliados y 4 confederaciones. Primeros intentos de formar STECEL – fracasan</p>	<p>1963: Promulgación de Código Laboral (Trabas legales para huelgas y para formar confederaciones). CUSS (izq.) 1965: FUSS (izq) 14 sindicatos controlado por PC ANDES 1965 Intento de formar STECEL</p>	<p>1967: Huelga general progresiva dirigida por FUSS: experimenta con nuevas formas de acción: no respetar el Código Laboral, poner piquetes armados con palos, buscar unidad con otros sindicatos, enfrentarse a Guardia Nacional, promover la “huelga de hecho” para defender el derecho a huelga.</p> <p>Fundación STISSS, 1968: Huelga de ANDES –COAP, la corriente de Cayetano Carpio apoya la huelga. (¿Inician contactos y el entrelazamiento entre actores? Ver cita de S. Gordon, <i>op.cit.</i>, 1989, p. 132) Escisión FESINCONSTRANS de CGS – se vuelve “independiente” 1969: Escisión de 16 sindicatos de FUSS para fundar FESTIAVTSCES 2do. intento de formar STECEL</p>
Grupos Armados	1959: Se funda el FUAR	1961-1963: FUAR (PC) no hace ninguna acción armada.	1968/1969: Jóvenes estudiantes fundan la ARS que es el antecedente del ERP. Lucha ideológica en el PC lucha armada vs. acumulación de

			fuerzas. 1970: el grupo de Cayetano Carpio (junto con el Secretario General de la FUSS, José Dimas Alas, y Secretario Juvenil de FUSS Ernesto Morales) se escinde del PC y funda las FPL; “El grupo”secuestra a Ernesto Regalado Dueñas. En el mismo año, la Universidad nace el núcleo del COP (escisión de la Juventud Comunista) donde participa Joaquín Villalobos.
Frentes de Masas		1963: nace la UDN	1969: UDN se convierte en fachada legal y electoral de PCS. 1972: participación en alianza electoral UNO
Intentos de unificación			

1971-1980

	1971-1975	1976-1980
Campesinos	Maestros de ANDES funcionan como multiplicadores de organización con UTC, MERS, UPT (Ver S. Gordon, <i>op.cit</i> , 1989, p. 181) pero también con otras organizaciones (ejemplo testimonio sobre FOC en Suchitoto). 1972-1974 se gesta movimiento campesino en Suchitoto, por Cerrón Grande. Nace el Movimiento Obrero Campesino en esta zona. 1970-74: Radicalización de FECCAS, se expresa en luchas por el liderazgo. En 1974 dirigencia cercana a PDC es sustituida por una nueva dirección. Disputas entre PC (ATACES) y FPL por la hegemonía en la organización. Apolinario	Crecimiento de organizaciones, Marchas, tomas de tierras, TOMAS PACIFICAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CRUZ ROJA. -> “acción extra-parlamentaria”

	<p>Serrano – viene de CEB y Parroquia de Aguilares. 1975: Fundación de UTC en Chalatenango y San Vicente Unificación de UTC y FECCAS en la FTC. Luchas reivindicativas del BPR: “La tierra es para quien la trabaja”.</p>	
Trabajadores	<p>1972: Se legaliza el STECEL a cambio de que sindicalistas prometen su apoyo electoral al FUDI (Medrano) y se incorporan a la CGS 1973: Escisión de CGS y nace FENASTRAS con 18 sindicatos influenciados por diferentes fracciones de izquierda y de derecha 1974: Huelga ANDES Según entrevista, los trabajadores “empiezan” a buscar contactos con radicales, negocian con PC, ERP y FARN!</p>	<p>1974: Inician las huelgas de hecho porque Ministerio de Trabajo no aceptaba las huelgas. Se rompe el marco legal en las huelgas y se inician la práctica de las huelgas de solidaridad para obligar a reconocer a los sindicatos. 1976: FAPU ocupa la secretaria general de FENASTRAS, UDN, FAPU y BPR luchan por el control sobre FENASTRAS. BPR forma Comité Sindical COSDO (controlado por BPR) 1977: Formación de la CUTS. Surgen nuevas formas de lucha: Protesta de STECEL en contra de la inclusión en el sistema de pensiones INPEP, manifestaciones, asamblea permanente en las afueras del edificio de CEL donde negociaba la Junta Directiva Sindical con la patronal. 25.8. 1977 huelga y TOMA de estaciones de Soyapango y Acajutla, amenaza de apagar electricidad de todo el país. A partir de la lucha STECEL se forma el Comité Intersindical (FAPU). COSDO e Intersindical como nuevas formas de organización sindical porque pretenden construir unidad sindical en función de luchas sindicales y con bases sindicales (a diferencia de constitución de federaciones y confederaciones tradicionales como unidades de cúpulas). Unidad “transgremial” según líneas ideológicas. Del COSDO surge (¿1979?) el Comité Coordinador de Sindicatos José Guillermo Rivas. 1978 – 1980: Sector público empieza a participar en lucha. 1980: legalización del FSR. “Apagón” en julio de 1980. Ministerio de Trabajo deja de legalizar sindicatos. Sindicatos “de hecho” se afilian a las federaciones afines en términos ideológicos y no por procedimientos legales. “Estar fuera de la</p>

		ley se convierte en parte de las prácticas sindicales”:
Guerrilla	<p>FPL forma comandos urbanos y grupos de apoyo, estrategia lucha de masas y lucha militar. Recluta sus cuadros iniciales del movimiento estudiantil y del magisterio (Ver, Harnecker, <i>op.cit.</i>, 1983, p. 148, ss.)</p> <p>1971: Organización Revolucionaria de los Trabajadores, establece contactos con ERP (1972),</p> <p>1972: fundación ERP de miembros radicalizados del PDC “el poder nace del fusil”,</p> <p>1974: asesinato de Roque Dalton</p> <p>1975: FARN (“terceristas, alianzas)</p> <p>1975-1976: ORT se convierte en PRTC.</p> <p>1972-1978: Frente Obrero Campesino en Suchitoto, formación de células guerrilleras entre familias campesinas, jóvenes campesinos empezaron a buscar contactos – estudiante José Antonio Hercules (“Juan”) se convierte en enlace que ayuda a organizar. ¡Pero organización militar campesina no viene de “agentes externos”! 1978: afiliación a RN (E. Rico, <i>op.cit.</i>, p. 255 ss)</p>	<p>1976/1977: FOC (Suchitoto) y ORT se incorporan al FAPU y RN.</p> <p>1978/79: Aumentan las actividades de la guerrilla (secuestros, atentados, asaltos).</p> <p>1979: PCS forma un brazo armado: FAL con batallones en Usulután y Guazapa (Al parecer fue la condición para que otras organizaciones guerrilleras aceptaran la participación del PCS en el DRU y FMLN, en poco tiempo logran formar un batallón para cumplir con esta condición).</p> <p>Mayo 1980: Se funda la DRU.</p> <p>Octubre 1980: FMLN.</p>
Frentes de masas	<p>1974: surge FAPU como “frente amplio anti-fascista” a partir de protestas de Cerrón Grande. Objetivos: unidad de acción de sectores populares, romper con liderazgos y prácticas burocráticas en organizaciones. Lucha contra “revisionismo” (PC) y “sectarismo” (FPL-BPR).</p> <p>1975: nace BPR, participan <i>declaradamente</i> tres organizaciones (UTC, FECCAS, ANDES). Objetivos inmediatos: organizar “las masas”, luchar por reivindicaciones inmediatas y vincular estas luchas con estrategia de la Guerra Popular Prolongada. Objetivos estratégicos: romper con capitalismo e imperialismo y construir socialismo. Mismo año: Se reorganiza el FAPU y se vincula con FARN. Militantes del PRTC salen de FAPU</p>	<p>1977: Nacen LP-28;</p> <p>Febrero de 1977: En contexto del fraude electoral se dan situaciones preinsurreccionales.</p> <p>¿1978 o 79? Nace MLN (PRTC)</p> <p>Finales de 1977: BPR toma el Ministerio de Trabajo,</p> <p>1978: ocupación de embajadas para denunciar represión en áreas rurales (S. Salvador y Cuscatlán).</p> <p>1979: BPR toma nuevamente Ministerios de Trabajo y de Economía.</p>

	(Mario López) y funda las Ligas para la Liberación.	
Intentos de Unificación		<p>1979: Foro Popular busca reunir a todas las organizaciones populares y partidos democráticos. BPR no entra al Foro Popular, FAPU si.</p> <p>Enero de 1980: Coordinadora Revolucionario de Masas, Marcha por la Unidad</p> <p>1980: Formación de la UPD que apoyo a Duarte.</p>

Elaboración propia.

ATACES: Asociación de Trabajadores Agrícolas y Campesinos de El Salvador

COSDO Consejo Sindical de Obreros (BPR)

CUTS: Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (FUSS, FENASTRAS, FESTIAVTSCES)

CUS: Comité de Unidad Sindical, formó parte del FDR (FENASTRAS, FESTIAVTSCES, FUSS, FSR (Federación Sindical Revolucionaria), STISSS (incidencia BPR), STIUSA, CBO (PRTC), Lomas (ERP), AGEPYM, ATACES

V. Entrelazamiento y desenlaces de actores sociales y políticos 1981-2004

	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2004
Campeños	<p>1980: Reforma Agraria de Junta Cívico-Militar; Implementación de Fase I y Fase III.</p> <p>Apoyo de UCS, UPD, COACES a Napoleón Duarte</p> <p>Insurrecciones campesinas en cantones, se generan los primeros núcleos del ejército guerrillero y del "poder popular"</p> <p>1981-1983: Poder popular en zonas de FPL.</p> <p>1984: Ministerio de Agricultura fomenta a algunas federaciones de cooperativas (FESACORA y FECORASAL).</p> <p>Descontento con políticas de DC genera formación de 4 nuevas federaciones regionales de cooperativas del Sector Reformado.</p>	<p>Movimiento de repobladores a partir de 1985 (Tenancingo), 1987 (Repobladores de Colomancagua y Mesa Grande)</p> <p>Nuevas federaciones de cooperativas participan en UNTS (1986)</p> <p>1988 Formación de CONFRAS (Cooperativas)</p> <p>1990: Alianza Democrática Campesina se forma con 23 organizaciones: cooperativas del sector reformado, cooperativas tradicionales, campesinos sin tierra</p>	<p>1991: Miembros de la ADC: ANTA, FESACORA, COACES, UCS, CONFRAS, FENACOA, CCS y CITAS (ise desdibujan fronteras ideológicas entre democristianos e izquierda y fronteras sectoriales entre jornaleros y cooperativistas!).</p> <p>1992: Acuerdos de Paz -> Programas de Inserción incluyen un Programa de Transferencia de Tierra a Desmovilizados y Población civil en zonas de conflicto.</p> <p>Cooperativas abandonadas durante conflicto se convierten en cooperativas de desmovilizados del FMLN.</p> <p>Movilización de desmovilizados</p>	<p>1994-97 Problema de la Deuda Agraria aglutina a agricultores con propiedades de diversos tamaños e identificación ideológica (incluso agricultores de ARENA). En 1997 se llega a un acuerdo legislativo que resuelva el problema de la deuda.</p> <p>Reconversión de las cooperativas de producción a cooperativas servicios (para conseguir financiamiento o pagar títulos de tierra.</p> <p>Estrategias campesinas: Parcelación, venta individual vínculo a redes alternativas de consumo y comercio justo (ONG).</p>	
Trabajadores	<p>1981/82: Sindicalismo urbano desarticulado por la represión.</p>	<p>1986 fundación de UNTS y UNOC</p>	<p>1992-1994: Foro de Concertación Social y Económica.</p>	<p>1997: Se funda el SIMETRISS.</p>	<p>Coordinadora Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS)</p>

	<p>1983: Primera huelga Sindicato del IVU -> MUSYGES , se desintegra en 1984</p> <p>1984: CCTEM</p> <p>1985: Comité Pro Celebración lero de Mayo (CCTEM + FESTRAS).</p> <p>Gobierno crea sindicatos paralelos financiados por embajada estadounidense.</p>	<p>1989: Coordinadora Intergremial (eje UNTS-UNOC)</p> <p>Octubre 1989: Bomba en FENASTRAS</p> <p>1990: Inicia proceso de fragmentación de ANDES</p> <p>Aparece Frente Magisterial Salvadoreño que agrupa a 2 organizaciones</p>	<p>Intergremial impulsa un programa común en el Foro.</p> <p>No se resuelve el problema de la sindicalización de los empleados públicos.</p> <p>De ANDES sale Bases Magisteriales y Concertación Magisterial</p> <p>Crisis en FENASTRAS, sale de la UNTS, inicia su conversión en sindicato blanco</p> <p>Crisis internas en FMLN y PDC afectan a la UNTS y la UNOC.</p> <p>1994: Inicia privatización de ANTEL, pensiones, distribución eléctrica.</p> <p>1999 Constitución de Movimiento de Organización Laboral Integrada (sindicatos de Entidades Autónomas y Administración Pública, Magisterio)</p>	<p>1999: Primer Huelga STISSS y SIMETRISSS</p> <p>2002: Segunda huelga STISSS y SIMETRISSS</p> <p>Se logra un decreto legislativo para impedir momentáneamente privatización</p>	<p>-> alianza de sindicatos del sector público, alimentos, textil/maquila, sector informal.</p>
Organizaciones armadas	Enero 1981: Primera ofensiva del FMLN Reconocimiento	1987/88: Ofensiva diplomática y la Comandancia General	1991 y 1992: Negociaciones y firma de los acuerdos de paz	1997: FMLN gana por primera vez la alcaldía de San Salvador (Horacio	2001: Expulsión de Facundo Guardado Disolución de las tendencias en la

	<p>internacional como fuerza beligerante 5 organizaciones guerrilleras, acciones militares y diplomáticas en conjunto; estructuras organizativas separadas 1981-1983: Construcción de frentes militares y “frente diplomático-internacional” (Movimiento solidaridad en EEUU y Europa) Abandono de las ciudades. 1983: Muerte de Mérida y de Cayetano Carpio 1984: Cambio de estrategia, recuperación del vínculo con el movimiento popular urbano aprovechando movimiento de oposición a gobierno de Duarte. FMLN lanza la “Propuesta de integración y plataforma del gobierno provisional de amplia participación”</p>	<p>abandona el frente de guerra. 1989 Ofensiva del FMLN</p>	<p>Desmovilización e inserción Cada partido tiene “su” ONG para administrar y canalizar recursos de programas de reconstrucción. Registro como partido legal pero internamente se mantienen las cinco estructuras partidistas. Elecciones de 1994: Segunda fuerza electoral Salida de Villalobos y F. Cienfuegos del FMLN. Fundación del Partido Demócrata Agosto 1995: Consejo Nacional determina que partidos deben disolver sus estructuras y FMLN debe convertirse en partido de tendencias.</p>	<p>Silva) 1999: Inicia conflicto entre “renovadores” y “ortodoxos” sobre la cuestión de las alianzas y la naturaleza del partido.</p>	<p>XIV Convención. Hegemonía de Corriente Revolucionaria Socialista en estructuras del partido, marginación de “renovadores” FMLN se vuelve partido más fuerte en Legislativa y a nivel municipal. 2004: FMLN pierde nuevamente elecciones presidenciales. Arranca un nuevo ciclo de discusiones internas sobre el rumbo y la naturaleza del partido.</p>
Asociaciones civiles	<p>Primera atención a desplazados: Cruz Roja. 1983: Diaconía (Iglesias). A partir de 1985 Organizaciones e iniciativas locales de repobladores y desplazados -> forman Coordinadoras regionales PDC y FFAA forman</p>	<p>Coordinadoras regionales y departamentales de grupos de base, articuladas a ONG, dependiendo del territorio de operación vinculadas a uno de los 5 partidos del FMLN. CRIPDES Comité</p>	<p>Programas de Inserción: Cinco ONG del FMLN canalizan fondos de reconstrucción y repoblación a “sus” comunidades. CONARA se convierte en Secretaria de Reconstrucción Nacional</p>		

	Programa “Municipios en Acción “ y CONARA	Cristiano Pro-desplazados de El Salvador, CORDES, FASSTRAS, REDES y ASDI forman la Concertación Nacional del Trabajo con los Refugiados (CNTR) que canaliza fondos de la Comunidad Europea y de ciudades norteamericanas a comunidades de repobladores y campos de refugiados. FUSADES – inicia actividad “caritativa”	(Gubernamental) para canalizar fondos de reconstrucción FUSADES refuerza sus programas caritativos (FORTAS, FEPADE, Fundación Habitat) Campañas sobre maquilas inician → 1995 Campaña en contra de Gap (Marca textil) en EEUU lleva al primer acuerdo de Monitoreo Independiente en las Empresas de las Zonas Francas.		
Alianzas	FDR (sobre todo a nivel internacional) UPD – alianza DE organizaciones populares con N. Duarte	UNTS: Dirección colegiada de representantes sindicales y de cooperativas (cuadros del FMLN). UNOC (del PDC) Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz (Organizaciones civiles, UCA, etc. Que promovieron una solución política al conflicto)	Coordinadora Intergremial (Eje UNTS-UNOC) – interviene en el Foro de Concertación Social y Económica	Concertación Social y Laboral (surge alrededor del 2000/2001)	En contexto de luchas sociales (sobre todo en el Seguro Social) se formaron una serie de alianzas entre organizaciones sociales que durante la campaña electoral del 2004 se posicionaron con respecto al FMLN (firmando “pactos” y cartas de compromiso) con el FMLN: Alianza ciudadana contra las Privatizaciones (Margarita Posada (militante del FMLN). Bloque Popular Social para la Democracia Real MPR-12 Tendencia Revolucionaria MPT

Elaboración propia.

ACOPAI – Asociación de Cooperativas Agrícolas

FENACOA Federación Nacional de Asociaciones Cooperativas

COACES Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador

ANTA Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas

UNTS formada por ANIS, COACES, FESTIAVTSCES, CCTEM, CST, FUSS, FENASTRAS y entre 1986 y 1987 también por UPD, CTS y AGEPYM.

UNOC: en 1987 formado por UPD, CTS, AGEPYM, CTD

Coordinadora Intergremial: UNTS, UNOC, AGEPYM, CGT, CTS

Coordinadora Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS) conformada por 37 sindicatos (forman parte de 7 federaciones, 2 centrales y 3 confederaciones) del sector público, alimentos, textil, maquila, informal, otros. Formada aproximadamente a principios del 2000.

VI. Trayectorias políticas, desenlaces en el periodo posbélico y valoración de los militantes entrevistados

PROFESIONALIZACIÓN DEL ACTIVISMO	
ADRIANA	
Periodo y lugar donde inicia el activismo social	1979/1980: Movimiento Revolucionario Campesino
Motivación inicial	"Las "injusticias" que vivíamos en esa época, las condiciones de vida que teníamos como campesinos, la gente no tenía un pedazo de tierra donde cultivar". Militancia política en el Movimiento Revolucionario Campesino/FAPU antecede otras formas de activismo.
Bifurcaciones en la trayectoria	Inicia participación en el movimiento campesino siguiendo el ejemplo de su esposo. (1) 1980/1981: Pierde el esposo por la guerra, ingreso al campo de refugiados, inicio de organización para representar a los refugiados en distintos refugios internos (2) 1992/1994: Participación en la gestión local del PTT en Suchitoto (3) 1994 Inicio de una carrera política independiente del FMLN como "concejala de las mujeres". (4) 1999: Reconversión exitosa en representante de las mujeres al ser elegida como concejala independiente que representa a las mujeres.
Desenlace/ Reconversión	Reconversión exitosa al especializarse en el tema de derechos de la mujer. Se convierte en una portavoz del "sujeto político mujer" en su municipio.
Balace subjetivo de la pacificación	En términos personales, ella considera que los Acuerdos de Paz son una gran satisfacción porque ella contribuyó a su concreción. La reinserción de la gente fue incompleta porque los mismos Acuerdos quedaron con grandes vacíos que no permitieron una verdadera integración. Hay cosas que se negociaron mal y por esto hay gente que quedó excluida de los beneficios (por ejemplo menores de edad).
ANA	
Periodo y lugar donde inicia el activismo social	1976: Sindicato de empresa
Motivación inicial	Primero es el ingreso al sindicato como una forma para defender derechos laborales, estabilidad laboral y prestaciones, después viene militancia política. Creciente represión estatal produce radicalización política y talleres sindicales ofrecen un marco cognitivo para explicar lo que sucede en El Salvador a fines de los setenta. "Aprendizaje" es una de las motivaciones para ingresar al grupo de estudio político de Resistencia Nacional y la lucha por una sociedad con educación, salud para todos y sin violaciones a los derechos humanos.

Bifurcaciones en la trayectoria	(1) 1970: Llegada a San Salvador. (2) 1975-1977: Ingreso a sector formal como trabajadora textil y sindicalización (3) 1989-1994: Años de crisis marcados por la detención, pérdida de trabajo, salida de FENASTRAS. Inicia reconversión en asesora de proyectos para mujeres. Salida del FMLN junto con bases de RN. (4) 1996: Inserción en el mundo de las ONG, reingreso al FMLN en el ámbito municipal.
Desenlace/ Reconversión	Pérdida del trabajo en 1989 lleva primera a trabajar como cuadro sindical en FENASTRAS. La salida de FENASTRAS, provocada por el conflicto interno, lleva a un periodo de indefinición e incertidumbre. A partir de 1994 trabaja en la ONG "Redes" como gestora de proyectos con mujeres. Sigue como militante del FMLN y es miembro de la Asamblea Municipal del partido en su municipio.
Balance subjetivo de la pacificación	En el trabajo sindical no ha cambiado mucho porque hasta ahora el Ministerio de Trabajo no juega un papel de mediador entre empresa privada y trabajadores. La gente que lo dirige es de derecha y está comprometida íntimamente con los empresarios. Sigue jugando el mismo papel en contra de los trabajadores como antes y durante de la guerra pero más sutil.
MARTA	
Periodo y lugar donde inicia el activismo social	1994: Programa de Créditos de CONFRAS para mujeres campesinas
Motivación inicial	Incorporación al programa de capacitación como un medio para "superarse", "capacitarse". Participación en el MPR-12 viene hasta después.
Bifurcaciones en la trayectoria	(1) 1979/1981: En poco tiempo pierde dos esposos y hermanos a raíz de la violencia política; desplazamiento de su cantón a cabecera regional. (2) 1985: Ingreso como socia a cooperativa del Sector Reformado (3) 1994: A través de programas de capacitación y de créditos, administrados por CONFRAS, se logra una conversión exitosa en gestora de proyectos y líder del sector femenino de CONFRAS.
Desenlace/ Reconversión	Asesoría de ONGs permiten conversión exitosa a gestora de proyectos y financiamiento en su cooperativa: liderazgo y prestigio.
Balance subjetivo de la pacificación	Dolarización ha afectado al sector rural porque agudiza la pobreza, los centavos que se pierden en el cambio de dólar/colón favorecen a las trasnacionales: "pero el bendito gobierno no pide permiso al pueblo para preguntarle si quería no quería los dólares porque era interés de él"
GREMIALIZACIÓN	
HORACIO	
Periodo y lugar donde inicia el activismo social	1972-1975 Sindicato de empresa

Motivación inicial	Lograr el respeto a los derechos sindicales y reconocimiento a la situación de injusticia que existía en el país. Participación sindical antecede militancia política.
Bifurcaciones en la trayectoria	(1) 1960: Ingreso laboral a la empresa hidroeléctrica estatal. (2) 1968-1970: Traslado a San Salvador, formación de familia, inicio de participación sindical y política a través de STECEL y FENASTRAS. (3) 1980: Detención, desaparecen a su esposa e hija (4) 1984: Liberación y exilio en Holanda, asesor político de FENASTRAS, (5) 1990: Salida de FENASTRAS y RN por conflictos internos, reingreso al trabajo en CEL y refundación sindical, fundación de ONG orientada a la asesoría e investigación laboral. (6) 1997: Después de conflictos en STCEL, renuncia al sindicato y la empresa.
Desenlace/ Reconversión	Regreso a ATCEL y después STCEL como "responsable político" en 1991. Ingresa nuevamente al comité directivo de STECEL y participa en la negociación sobre participación de trabajadores en privatización de empresas distribuidoras de energía. Después de conflictos internos sale del sindicato. Participa en la fundación de CENTRA.
Balace subjetivo de la pacificación	"Yo me sigo preguntando todavía, bueno ¿y cuál es el proyecto de los trabajadores? El movimiento digo ¿cuál? ¡Ninguno! ¿Dónde, dónde está? ¿Qué quieren ser? ¿Para dónde van?"
CELSO	
Periodo y lugar donde inicia el activismo social	1979/1980 Universidad
Motivación inicial	Motivación ideológica: "me relaciono con el materialismo histórico y entonces con el materialismo dialéctico, y ahí me empezó a llamar mucho la atención el socialismo científico (...) pero también me gustaba eso de ayudarle a los demás, la solidaridad, lucha por la justicia". Militancia política y participación sindical se entrelazan.
Bifurcaciones en la trayectoria	(1) 1974/1975: Traslado a San Salvador para estudiar en la Escuela de Comercio, ingreso a la administración pública. (2) 1978/79: Ingreso a la universidad, inicio de participación sindical y política. (3) 1989: Participación en la ofensiva militar, detención, desmotivación por razones ideológicas (caída del bloque socialista). (4) 1994: Salida de RN del FMLN afecta la posición como dirigente nacional del sindicalismo público.

Desenlace/ Reconversión	En 1992 empieza a tener problemas con la dirección de RN por querer impulsar autonomía sindical. Capital político adquirido gracias a la combinación entre liderazgo sindical y político, como dirigente de la UNTS, se pierde con la desarticulación de RN, el debilitamiento de los sindicatos y la dispersión de la UNTS. Celso no puede/quiere aprovechar redes sociales nacionales e internacionales para entrar al mundo social de las ONG y se queda En la posición de secretario general de su asociación sindical. Mantiene la militancia política en el FMLN.
Balance subjetivo de la pacificación	"Realmente nosotros, el partido se nos deshizo, desapareció y no hay nada que nos agrupe, que nos nuclea [sic.], andamos todos dispersos, y hay una atomización horrible en el movimiento sindical ahorita, cada quien velando por su santo." El FMLN tiene una deuda con los movimientos sociales porque de allí tomó sus mejores cuadros, por lo cual ahora el partido debería apoyar más a los movimientos sociales para fortalecerlos.
MANUEL	
Periodo y lugar donde inicia el activismo social	1975/1980 Movimiento campesino en Usulután
Motivación inicial	Primero se forma una cooperativa de ayuda mutua y la violencia militar en contra de la cooperativa radicaliza a Manuel. Falta de cumplimiento de promesas del gobierno democristiano contribuye a la consolidación del vínculo con la guerrilla. Otra motivación es luchar para "retirar del país la injusticia".
Bifurcaciones en la trayectoria	(1) 1965: Ingreso a oficio de mecánico en una hacienda algodonera (2) 1981: Cooperativa del Sector Reformado y representante del sector reformado (3) 1994: Diputado del FMLN, participación breve en el Partido Demócrata de Villalobos y regreso al FMLN.
Desenlace/ Reconversión	Si bien la ruptura política en el FMLN en 1994 interrumpe la carrera como político profesional, al ser representante de un sector social importante (cooperativas) en el contexto de la movilización para resolver el Programa de Transferencia de Tierra y de la deuda agraria él se vincula nuevamente con el FMLN. Estrategia de la "gremialización" es exitosa. Sigue como militante del FMLN.
Balance subjetivo de la pacificación	Concibe Acuerdos de Paz como una gran satisfacción porque es la profundización constitucional de la reforma agraria. Pero finalmente no se cumplió porque los ricos entregaron tierra a sus familiares para evitar la repartición y porque ARENA revirtió la Reforma Agraria.

TOMA DE DISTANCIA DE LA MILITANCIA POLÍTICA ACTIVA	
DANIELA	
Periodo y lugar donde inicia el activismo social	1984/1985; Universidad
Motivación inicial	"Inquietud": "buscaba a los líderes estudiantiles para poder hablar acerca del momento de lo que estaba sucediendo en el país" y "por salir de lo común". Más adelante la participación también era por "compromiso". Militancia política antecede participación sindical.
Bifurcaciones en la trayectoria	(1) 1966 Muerte de la madre, vida con familiares. (2) 1983/1984 Inicio del activismo estudiantil y militancia en RN (3) 1992-1994 Toma de distancia del activismo para dedicarse más a la familia y el trabajo.
Desenlace/ Reconversión	Estrategia de reconversión es el distanciamiento del activismo para retomar la trayectoria laboral, educativa y familiar. Sin embargo, no se pierde vínculo con el partido, ella sigue como militante del FMLN pero no como cuadro profesional.
Balance subjetivo de la pacificación	Después de los Acuerdos de Paz "baja el nivel de combatividad" y "bajan los ánimos", hay demasiada confianza. "En la actualidad la estructura sindical en este país, la combatividad que tenemos es mínima, no hay mucha participación, si los que andamos somos siempre los mismos que estuvimos en el tiempo de la guerra [...] los que se van incorporando [...] si lo hacen pero como por andar ahí, conocer más personas pero con poca convicción, no hay mucho compromiso."
MARIA	
Periodo y lugar donde inicia el activismo social	1980/1981 Universidad
Motivación inicial	Violencia estatal y falta de justicia: "yo estaba totalmente convencida de la falta de justicia (...) me molestaba mucho que no pudiéramos oír música porque si llegaba un cateo a tu casa y te encontraba música chilena, argentina (...) hasta las queñas se habían vuelto subversivas. Todo esto mi irritaba sobre manera y sí estaba convencidísima que a los militares había que darles un golpe". Militancia política antecede activismo sindical.
Bifurcaciones en la trayectoria	(1) 1980/81: Ingreso a la UES e inicia la militancia. (2) 1989 Titulación en la UES, detención, Exilio, (3) después de 1994 distanciamiento de la organización política.
Desenlace/ Reconversión	Conflictos internos de FENASTRAS y en RN producen un primer distanciamiento de la militancia. Mariana opta por "salirse" porque las opciones que ofrece el activismo profesional después de 1994 no "cumplen sus expectativas" profesionales y políticas. Abandona la militancia política en el FMLN y centra su participación y apoyo a organización que defienden

	los derechos de las mujeres.
Balance subjetivo de la pacificación	"Pienso que a nivel economía no, el Frente no la hizo, a nivel de la educación y la cultura, ese siempre fue un área que los gobiernos militares le dejaban a la izquierda (...) es más fácil que personajes de izquierda estén ahora en cuestiones de cultura, de publicaciones (...) pero no en cuestiones de economía y política exterior."

Elaboración propia.

VII. Cuadros sobre luchas laborales y evolución de la pobreza en Centroamérica:

Cuadro I: Centroamérica: Número de huelgas legales 1978-2004:

Año	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Guatemala	229	7	51	3	0	0	n.d.	n.d.	33	12	n.d.	9	19
El Salvador	29	103	42	15	4	15	36	54	54	25	36	31	20
Honduras	n.d.	19	37	49	n.d.	n.d.	28	14	46	28	n.d.	56	93
Nicaragua	n.d.	47	55										
Costa Rica	14	20	61	6	14	16	12	10	23	7	16	19	42

Año	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Guatemala	n.d.	25	35	17	17	18	0	n.d.						
El Salvador	26	47	36	12	42	40	43	12	36	38	19	25	17	27
Honduras	23	43	n.d.	n.d.	47	n.d.	46	80	n.d.	63	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Nicaragua	133	85	41	10	11	17	8	4	2	0	0	0	n.d.	1
Costa Rica	11	19	21	19	15	12	9	n.d.						

Fuente: Elaboración propia con base en datos de OIT, Base de datos LABORSTA, en la página electrónica www.ilo.org; El Salvador 2004: Ministerio de Trabajo y Prevención Social, El Salvador, en la página de Internet, www.mtps.gov.sv. (consultado en abril de 2006).

Nota: Datos de El Salvador no incluyen huelgas del Sector Comercio y Restaurantes de 1997.

Cuadro 2: Centroamérica: Número de trabajadores afectados 1978-2004:

<i>Año</i>	<i>1978</i>	<i>1979</i>	<i>1980</i>	<i>1981</i>	<i>1982</i>	<i>1983</i>	<i>1984</i>	<i>1985</i>	<i>1986</i>	<i>1987</i>	<i>1988</i>	<i>1989</i>	<i>1990</i>
Guatemala	144956	42170	68683	1350	0	0	n.d.	n.d.	n.d.	19950	n.d.	n.d.	n.d.
El Salvador	7169	29432	12110	5324	373	2680	26311	30336	18251	3963	4405	50937	3914
Honduras	n.d.	27354	34431	9273	13387	n.d.	3643	744	n.d.	n.d.	n.d.	44704	45567
Nicaragua	n.d.	15242	2420										
Costa Rica	20168	25671	24750	7380	13387	8303	13165	11215	37928	5250	2975	7145	26085

<i>Año</i>	<i>1991</i>	<i>1992</i>	<i>1993</i>	<i>1994</i>	<i>1995</i>	<i>1996</i>	<i>1997</i>	<i>1998</i>	<i>1999</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>
Guatemala	n.d.													
El Salvador	4129	127365	105041	4162	57606	25792	11825	4086	68901	17684	19395	8909	9953	8584
Honduras	63631	n.d.												
Nicaragua	28835	20871	7639	1109	936	2552	448	1193	73	0	0	0	n.d.	51
Costa Rica	3821	42251	43222	10694	73680	6904	17003	n.d.						

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales. OIT, Base de datos LABORSTA, en la página electrónica www.ilo.org; El Salvador 2004: Ministerio de Trabajo y Prevención Social, El Salvador, en la página de Internet, www.mtps.gov.sv. (consultado en abril de 2006).

Nota: Datos de El Salvador no incluyen huelgas del Sector Comercio y Restaurantes de 1997.

Los siguientes dos cuadros permiten comparar los datos nacionales de Centroamérica sobre la pobreza e indigencia entre zonas urbanas y rurales. La variación total hace referencia a los cambios –incremento o disminución porcentual- entre los años para los cuales se levantaron estos datos. Debido a que el lapso entre los años es diferente para cada país, se sacó un promedio de las variaciones nacionales para poder comparar las dinámicas nacionales.

Cuadro 3: Centroamérica: Personas en situación de pobreza en áreas urbanas y rurales (1990-2000)

<i>País</i>	<i>Año</i>	<i>Nacional</i>	<i>Variación total</i>	<i>Variación promedio anual</i>	<i>Área urbano</i>	<i>Variación total</i>	<i>Variación promedio anual</i>	<i>Área rural</i>	<i>Variación total</i>	<i>Variación promedio anual</i>
Costa Rica	1990	26.30			24.90			27.30		
	1999	20.30	-6.00	-0.67	18.10	-6.80	-0.68	22.30	-5.00	-0.56
	2005	21.10	0.80	0.13	20.00	1.90	0.32	22.70	0.40	0.07
El Salvador	1995	54.20			45.80			64.40		
	1999	49.80	-4.40	-1.10	38.70	-7.10	-1.78	65.10	0.70	0.17
	2004	47.50	-2.30	-0.46	41.20	2.50	0.50	56.80	-8.30	-1.66
Guatemala	1989	69.40			53.60			77.70		
	1998	61.10	-8.30	-0.92	49.10	-4.50	-0.50	69.00	-8.70	-0.97
	2002	60.20	-0.90	-0.23	45.30	-3.80	-0.95	68.00	-1.00	-0.25
Honduras	1990	80.80			70.40			88.10		
	1999	79.70	-1.10	-0.12	71.70	1.30	0.14	86.30	-1.80	-0.20
	2003	74.80	-4.90	-1.23	62.70	-9.00	-2.25	84.80	-1.50	-0.38
Nicaragua	1993	73.60			66.30			82.70		
	1998	69.90	-3.70	-0.74	64.00	-2.30	-0.46	77.00	-5.70	-1.14
	2001	69.30	-0.60	-0.20	63.80	-0.20	-0.07	76.90	-0.10	-0.03

Fuente: CEPAL, *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2006*, Santiago de Chile, CEPAL/ONU, 2007, disponible en línea websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2006/ (consultado en marzo de 2007).

Cuadro 4: Personas en situación de indigencia en áreas urbanas y rurales (1990-2000)*

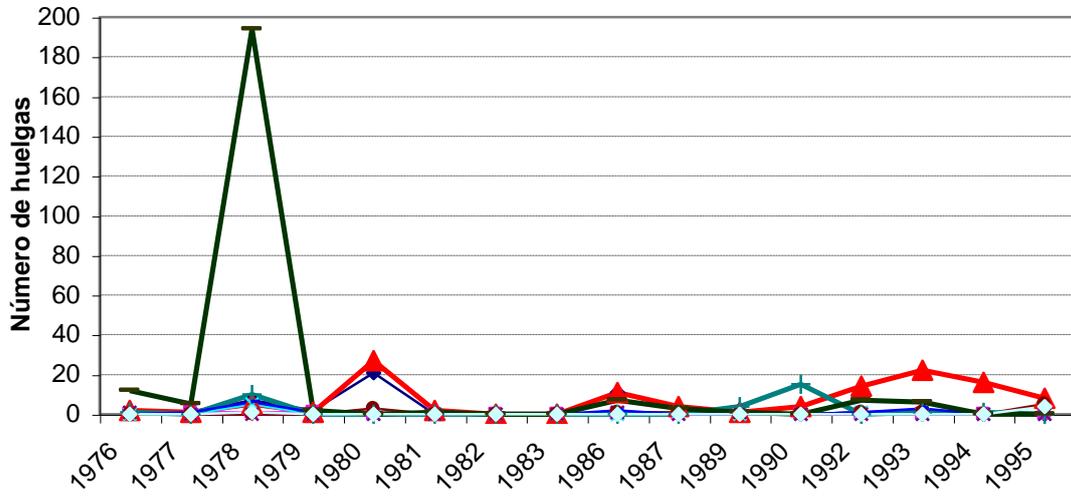
País	Año	Nacional	Variación total	Variación promedio anual	Área urbana	Variación total	Variación promedio anual	Área rural	Variación total	Variación promedio anual
Costa Rica	1990	9.90			6.40			12.50		
	1999	7.80	-2.10	-0.23	5.40	-1.00	-0.11	9.80	-2.70	-0.30
	2005	7.00	-0.80	-0.13	5.60	0.20	0.03	9.00	-0.80	-0.13
El Salvador	1995	21.70			14.90			29.90		
	1999	21.90	0.20	0.05	13.00	-1.90	-0.48	34.30	4.40	1.10
	2004	19.00	-2.90	-0.58	13.80	0.80	0.16	26.60	-7.70	-1.54
Guatemala	1989	42.00			26.40			50.20		
	1998	31.60	-10.40	-1.16	16.00	-10.40	-1.16	41.80	-8.40	-0.93
	2002	30.90	-0.70	-0.18	18.10	2.10	0.53	37.60	-4.20	-1.05
Honduras	1990	60.90			43.60			72.90		
	1999	56.80	-4.10	-0.46	42.90	-0.70	-0.08	68.00	-4.90	-0.54
	2003	53.90	-2.90	-0.73	35.10	-7.80	-1.95	69.40	1.40	0.35
Nicaragua	1993	48.40			36.80			62.80		
	1998	44.60	-3.80	-0.76	33.90	-2.90	-0.58	57.50	-5.30	-1.06
	2001	42.30	-2.30	-0.77	33.20	-0.70	-0.23	54.90	-2.60	-0.87

*/ Porcentaje de personas cuyo ingreso es inferior al costo de una canasta básica de alimentos.

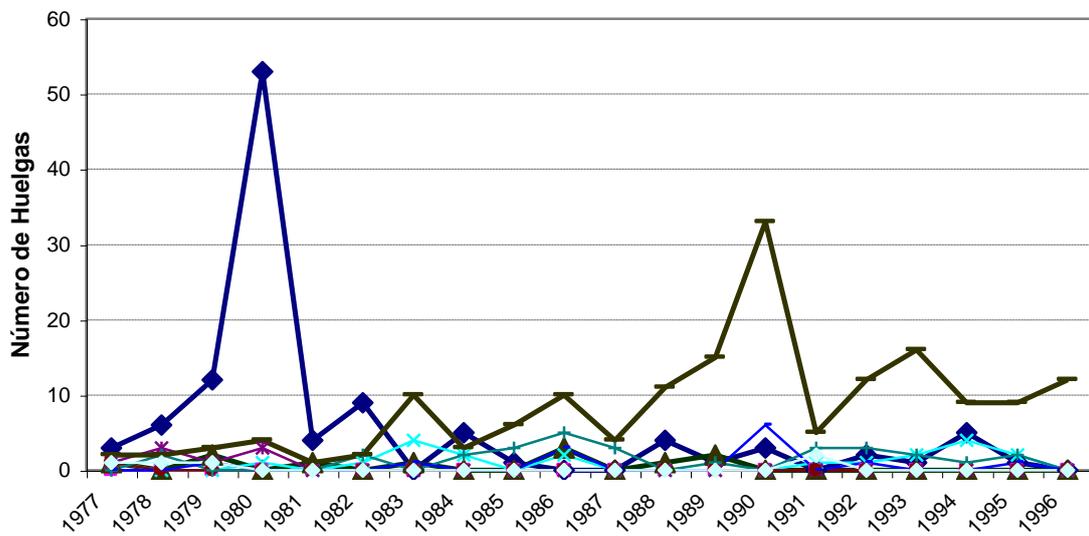
Fuente: *Ibid.*

Gráficas 1 – 4: Centroamérica: Número de huelgas por actividad económica, 1970s – 2000:

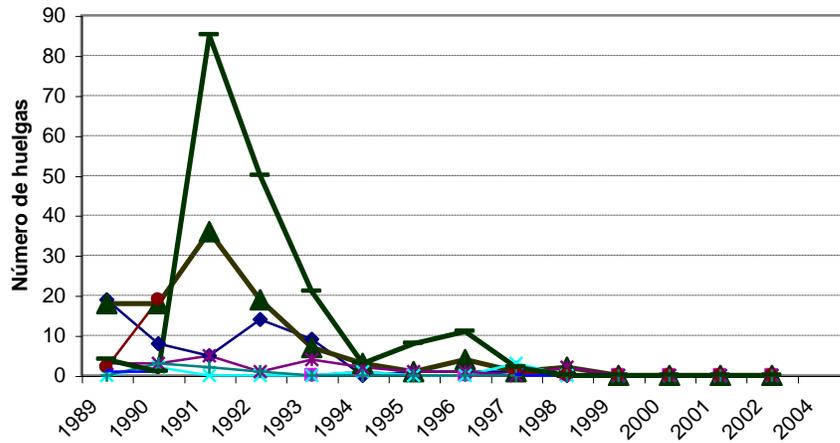
Gráfica 1. Guatemala



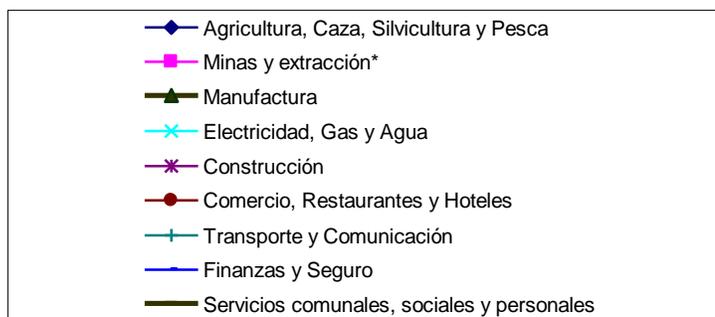
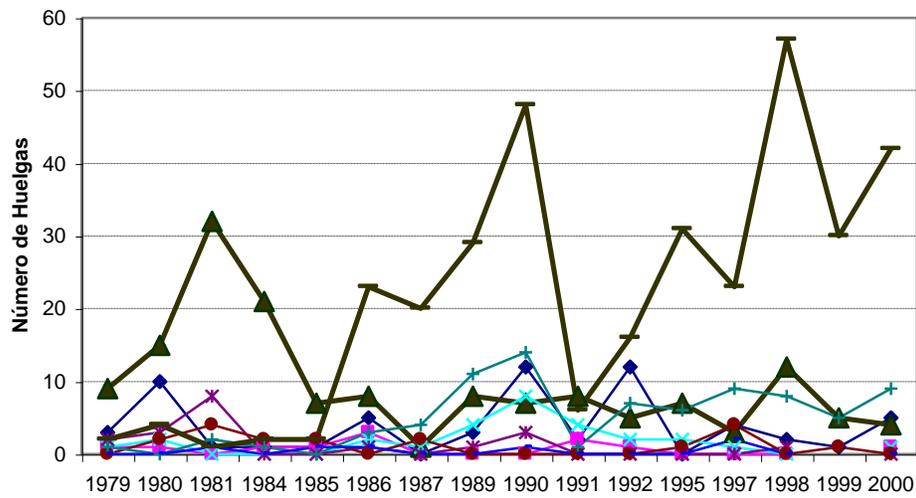
Gráfica 2. Costa Rica



Gráfica 3. Nicaragua



Gráfica 4. Honduras



Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales. OIT, *Base de datos LABORSTA*, en la página electrónica www.ilo.org.

VIII. El Salvador: Evolución de sindicatos y afiliados

Cuadro 5. Sindicatos y afiliados según federación (1971-1976)

Federación	1971		1975		1976		Crecimiento de afiliados en este periodo
	No. de sindicatos	Afiliados	No. de sindicatos	Afiliados	No. De sindicatos	Afiliados	
Total	121	47,000	125	63,545	127	64,986	38.27
CGS	53	19,470	38	10,988	40	12,592	-35.33
FESITRISEVA			14	3,910	14	5,113	30.77
FESINTEXSIN			7	3,012	6	2,979	-1.10
FESINSTRABS			17	4,066	20	4,500	10.67
FUSS	24	9,526	19	7,754	19	7,587	-20.35
FESTIAVTSCES	15	3,840	16	3,533	16	3,466	-9.74
FESINCONSTRANS	13	4,602	10	19,733	15	20,681	349.39
INDEPENDIENTES	16	9,592	13	5,244	8	4,421	-53.91
FENASTRAS			19	14,580	19	14,983	2.76
USTRAS			10	1,673	6	442	-73.58
FESTRAS					4	814	

Fuente: 1971 y 1975: "Las luchas obreras en El Salvador (1974-1977)", *Revista Polémica*, San Salvador, mayo-junio de 1977; 1976: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, *Estadísticas del trabajo*, p. 98, julio-diciembre de 1976, San Salvador, cit. en Rafael Menjívar, *Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño*, San José/Costa Rica, EDUCA, 1982, p. 156.

Cuadro 6. El Salvador: Número de sindicatos y afiliados según federación (1993-2004):

Federación	1993		1998		2004		Variación de afiliados 1993-2004 (%)	Variación de afiliados 1998-2004 (%)
	No. de Sindicatos	Afiliados	No. de sindicatos	Afiliados	No. de Sindicatos	Afiliados		
Total	101	73244	151	120,288	147	135,060	84	12.3
FESINTRABS	n.d.	n.d.	12	1,617	3	609	n.d.	-62.3
FUSS	8	7714	10	1,895	4	743	-90	-60.8
FESTES	n.d.	n.d.	6	1,204	3	661	n.d.	-45.1
FEASIES	12	5531	14	2,953	2	515	-91	-82.6
FESTRAES	n.d.	n.d.	7	1,136	6	1,068	n.d.	-6.0
FUGTS	n.d.	n.d.	5	43,849	4	57,939	n.d.	32.1
FESINCONSTRANS	9	1815	17	4,299	16	3,109	71	-27.7
FENASTRAS	15	4720	8	2,649	4	3,602	-24	36.0
FESTICES	n.d.	n.d.	11	345	4	249	n.d.	-27.8
FLATICOM	n.d.	n.d.	5	413	4	267	n.d.	-35.4
FSTS	n.d.	n.d.	5	665	1	409	n.d.	-38.5
Independientes	18	41069	51	59,263	80	16,674	-59	-71.9
FESINTEXICA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2	413	n.d.	n.d.
FESINTRISEVA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2	44,315	n.d.	n.d.
FS21	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1	28	n.d.	n.d.
FESTRASPES	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3	2,429	n.d.	n.d.
FSR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2	416	n.d.	n.d.
FESTSSABHRA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6	1,614	n.d.	n.d.
CGS	14	6253	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
CGT	6	1256	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
CTD	4	1482	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
FESTIAVTSCES	10	2310	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
OSILS	5	1094	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

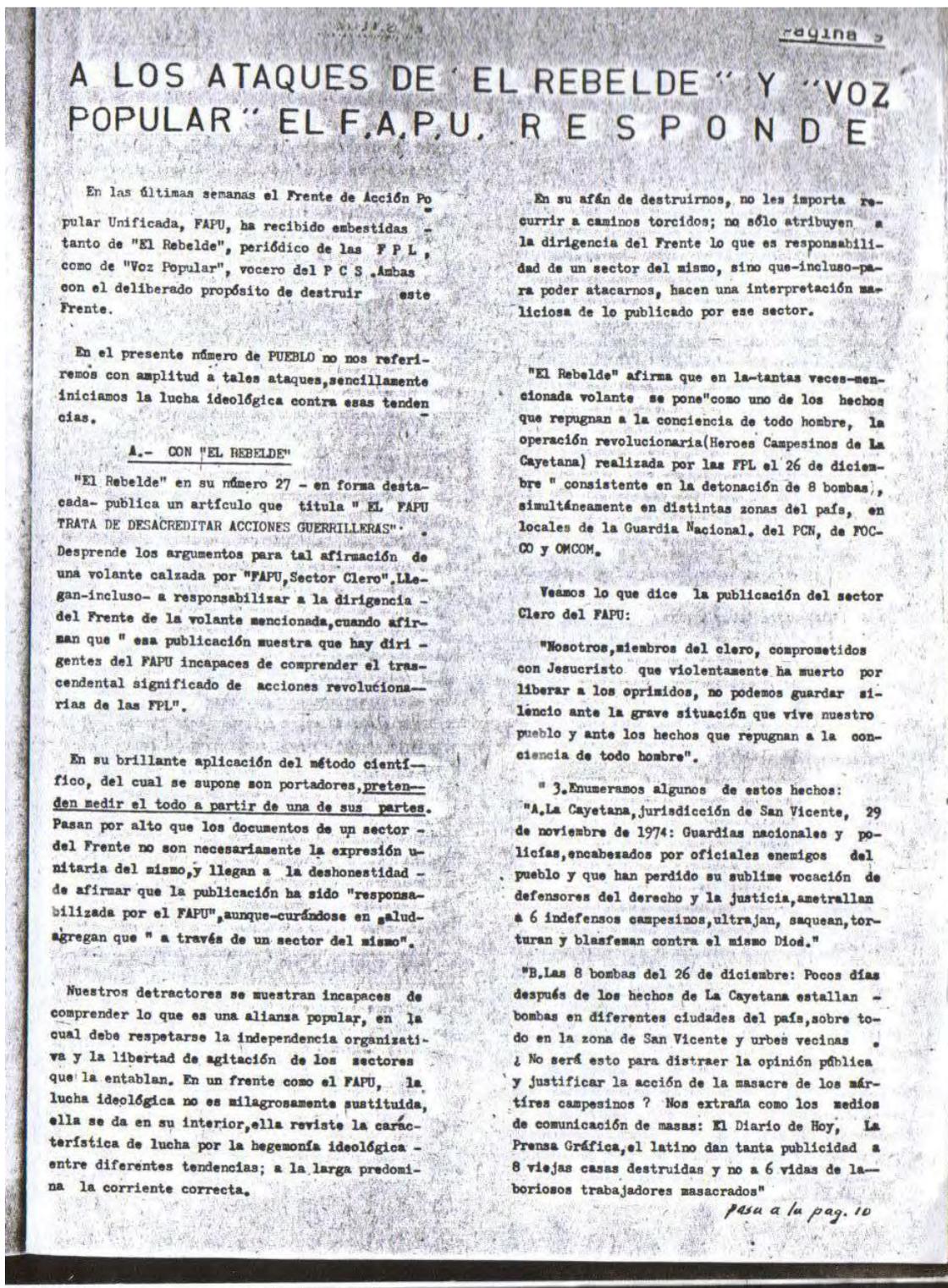
Fuente: Elaboración propia con datos de:

1993: Joaquín Arriola, et.al, *Derechos prohibidos. Negociación colectiva y sindicatos en El Salvador*, Serie Documentos de Investigación, No. 1, UCA, mayo de 1994;

1998: CENTRA, *Situación de las Organizaciones Sindicales en El Salvador*. Documento de Investigación, San Salvador, CENTRA, 1999;

2004: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, disponible en línea: www.mtps.gob.sv/imagenes/estadisticas/2004/Modulo3/CUADRO_3.13.2.pdf (consultado en mayo 2007).

IX. "La lucha por la hegemonía" en los periódicos de los Frentes de Masa



FAPU, *Pueblo*, San Salvador, Año I, No. 1, Segunda quincena de marzo de 1975, p. 9.

LUCHA IDEOLOGICA

Se abre camino el paso combativo de las masas

En los últimos meses, una ola heroica de combates populares ha sacudido con persistencia el dominio de los explotadores en el país.

No cabe duda que la revolución popular avanza. Pintadas y volantes, concentraciones y manifestaciones, mítines, paros y huelgas, han revoloteado audaces, inundando todo el territorio del país.

La lucha de clases se ha profundizado. La agudización del hambre y la miseria que padecen las clases trabajadoras, al descargarse sobre ellas todo el peso de la crisis económica en que se debate el capitalismo dependiente en el país, ha elevado el descontento entre la población. La lucha reivindicativa de todos los sectores populares para resolver sus necesidades materiales más urgentes ha cobrado un auge especial en tal marco de explotación creciente.

Miles de trabajadores, día a día cobran conciencia de la necesidad de luchar no sólo por lo inmediato y urgente, sino también por lo fundamental, por el derrocamiento del régimen burgués y el triunfo de la Revolución Popular hacia el Socialismo, y así se incorporan con creciente entusiasmo, disposición y combatividad a las filas del BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO, a través de sus distintas organizaciones.

Frente a este avance de las masas en su lucha contra el Imperialismo, la burguesía criolla y la tiranía militar fascistoide, éstos han pasado a ahondar su criminal estrategia de guerra contra el pueblo. Así:

Han desatado una campaña represiva de dimensiones inauditas contra toda la población, en especial contra los trabajadores del campo: destrucción de viviendas, arrasamiento de los cultivos, violación de mujeres y niñas, capturas masivas, juicios amañados, asesinatos, desaparicimiento de ciudadanos, cateos, batidas, rastrijajes, registros de buses y vehículos, etc.

Han desarrollado la creación de su aparato legal, emitiendo leyes de carácter abiertamente anti-popular y reaccionario (tales como la reciente emitida "Ley del Orden Público") a fin de ejercer dentro del marco legal, su tarea criminal de aplastar la lucha de nuestro pueblo.

Han desarrollado toda una campaña reformista tratando de atraer al pueblo con migajas y parches, para ganarlo en apoyo de su estrategia contrarrevolucionaria.

Sin embargo, nada de esto ha podido detener el paso combativo de las masas.

Los enemigos del pueblo exigen a gritos la destrucción del BPR y de sus organizaciones. Pero el BPR, apoyado en los brazos firmes de todos los trabajadores oprimidos y explotados, continúa fortaleciéndose y desarrollándose, pese a todas las medidas que el enemigo desarrolla en su contra.



Ante esta agresión fascistoide contra el pueblo, el BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO levanta más que nunca su bandera de lucha masiva, organizada y combativa, su línea consecuentemente revolucionaria en defensa de los intereses de las masas explotadas, y ha conducido así al pueblo a victorias innegables tales como la de la ocupación pacífica del Ministerio de Trabajo, y más atrás la disolución en la práctica del Estado de Sitio que impulsieron los explotadores y su tiranía con el iluso fin de detener nuestra lucha.

La vida pues, ha demostrado la justeza de nuestra estrategia. Nuestra táctica ha sido correcta porque se basa siempre en una línea estratégica que se fundamenta en el análisis objetivo de nuestra realidad; ésto es lo que ha permitido que el BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO...

Ahora bien, ¿cómo se ha abierto paso el planteamiento correcto del BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO? No hay duda que, en primer lugar, en la lucha práctica contra el enemigo de clase: el Imperialismo, la burguesía criolla y su tiranía militar.



Pero en todas las sociedades, debido a la influencia dominante de la ideología burguesa, y a sus múltiples y variados medios de transmisión, hay siempre algunos elementos de las clases oprimidas que no logran asumir consecuentemente la ideología del proletariado. Sucede esto especialmente con los elementos provenientes de la pequeña-burguesía y de las capas medias. Estos elementos cumplen un papel tremendamente dañino en el seno del movimiento popular; dominados por la ideología burguesa y pequeño-burguesa, se vuelven incapaces de enfrentar con objetividad el análisis de la realidad; el marxismo-leninismo es, en sus manos, un instrumento estéril al que no saben darle uso, y, por tanto, sus conclusiones y sus estrategias están preñadas del subjetivismo que les es inherente. Por ello no pueden sino conducirlas a las derrotas más grandes.

Sin embargo, estos elementos pequeño-burgueses, no se contentan con ir solos al pantano y a la retaguardia de la burguesía. Pretenden que el pueblo vaya tras ellos. De tal manera, se convierten en obstáculos que entorpecen la toma de conciencia revolucionaria del...

Es característica de estos elementos, la utilización de métodos oportunistas para todo su accionar, especialmente en la lucha ideológica. Esto es natural pues, enfrentados a una realidad que no "quiere" ser como ellos desearan, a una realidad que "obedece leyes ineluctables que ninguna voluntad pequeño-burguesa puede cambiar, y siendo incapaces de reconocer con humildad revolucionaria que se han equivocado, entonces recurren a la maniobra, a la mentira, a la calumnia, al engaño, etc., y, de manera especial, a la búsqueda de algún culpable de que las cosas no caminen según es su antojo, sino según es su desarrollo histórico.

En nuestro país, pues, el movimiento popular revolucionario también ha tenido y tiene que abrirse paso en la lucha ideológica y práctica contra las tendencias desviadas oportunistas, representantes de la ideología burguesa y pequeño-burguesa en el seno del pueblo: los revisionistas de derecha del PCS y el llamado Frente de Acción Popular Unificada (FAPU).

Estas dos tendencias, ciegas en su oportunismo frente al desarrollo objetivo de la vida, se niegan a aceptar el avance de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo, encabezada por el BPR. En vez de ello, han pasado a desarrollar, en especial el FAPU, una virulenta campaña de desprestigio y de odio contra el BPR, al que califica de "ultra-izquierdista", "oportunista de izquierda", "sectario", "aventureró", "espontaneísta", etc.



El FAPU, en su odio y rencor gratuito contra el BPR, ha llegado al colmo de utilizar la mentira y la calumnia, para tratar de desprestigiarlo, inútilmente, ante las masas. Así, en el periódico PUEBLO, de la segunda quincena de noviembre, llegan a afirmar que "elementos del BPR, pistola en mano, obligaron a miembros del FAPU..."

X. Propaganda electoral en la campaña presidencial 2004:



Schafik Handal y Guillermo Mata (Secretario General del sindicato de médicos SIMETRISSS) en la portada de la Plataforma de Gobierno FMLN 2004-2009.

LA PRENSA GRÁFICA MIÉRCOLES 17 DE MARZO DE 2004

Un típico día de clases en la escuela del comunismo

Textos oficiales de la escuela

**Con el Comunismo, la enseñanza es gratis.
¿Es esto lo que quieres para tus hijos?**

MUJERES POR LA LIBERTAD

Propaganda en contra del FMLN difundida por la “Fundación Libertad”. Esta Fundación surgió en el 2003 con el objetivo, según su presidente Rafael Menjiva, un empresario salvadoreño, de “generar conciencia en la población sobre el valor de la libertad”. La Fundación se caracterizó por la difusión de spots y propaganda electoral agresiva y anticomunista en contra del FMLN.

Fuente: *La Prensa Gráfica*, El Salvador, 17 de marzo de 2004.